

Jorge Pérez Alonso



**TRES CONTROVERTIDAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
ESTADOUNIDENSES: THOMAS
JEFFERSON, RUTHERFORD
B. HAYES Y GEORGE BUSH**

Jorge Pérez Alonso

**Tres controvertidas elecciones
presidenciales estadounidenses:
Thomas Jefferson,
Rutherford B. Hayes
y George W. Bush**

In Itinere, 2013

© 2013 In Itinere
© Jorge Pérez Alonso
© Prólogo: Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
In Itinere
Seminario de Historia Constitucional «Martínez Marina»
Campus de «El Cristo», s/n. 33006 Oviedo (Asturias-España)
<http://www.initinere.com>
historiaconstitucional@gmail.com

Ediciones de la Universidad de Oviedo
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07
<http://www.uniovi.es/publicaciones>
servipub@uniovi.es

ISBN: 978-84-8317-972-7
D. L. AS-151-2013

Imprime: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la preceptiva autorización.

ÍNDICE

PRÓLOGO

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA 11

INTRODUCCIÓN..... 15

CAPÍTULO PRIMERO

**LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1800:
JOHN ADAMS FRENTE A THOMAS JEFFERSON ... 25**

1. El sistema norteamericano de elecciones presidenciales 27
 - 1.1. *El sistema político británico en la época constituyente norteamericana* 27
 - 1.2. *La construcción de un sistema presidencialista* 31
2. La deriva bipartidista estadounidense 44
 - 2.1. *Los inicios del federalismo y el republicanismo* 44
 - 2.1.1. EL PRIMER MANDATO PRESIDENCIAL DE GEORGE WASHINGTON (1788-1792): DIVISIÓN CAUSADA POR DIFERENCIAS EN LA POLÍTICA INTERIOR..... 45

2.1.2. EL SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL DE GEORGE WASHINGTON (1792-1796): DIVISIÓN CAUSADA POR DIFERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR	53
2.2. <i>La consagración del bipartidismo en la presidencia de John Adams</i>	62
2.2.1. LA PRIMERA GRIETA EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL: LAS ELECCIONES DE 1796	62
2.2.2. LA QUIEBRA DE LA UNIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DEL BIPARTIDISMO	67
3. Los comicios presidenciales de 1800	77
3.1. <i>El largo camino hacia la elección del Electoral College</i>	81
3.2. <i>Los resultados del voto compromisario</i>	94
3.3. <i>Crisis política, debate constitucional y votación final en la Cámara de Representantes</i>	96
4. Aaron Burr y las elecciones presidenciales de 1800	113
4.1. <i>La (¿enigmática?) personalidad de Aaron Burr</i>	114
4.2. <i>El papel de Aaron Burr durante el conflicto presidencial de 1800</i>	121
5. Conclusión	137

CAPÍTULO SEGUNDO

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1876: RUTHERFORD B. HAYES FRENTE A SAMUEL TILDEN	141
1. Introducción	143

2. Conflictos y tensiones políticas en Estados Unidos en el primer siglo de su historia (1776-1876): división, guerra y reconstrucción	148
2.1. <i>Tensiones en el seno de los Estados Unidos desde su nacimiento hasta la guerra de Secesión</i>	148
2.1.1. FEDERALISMO VERSUS ANTIFEDERALISMO	149
2.1.2. SOCIEDAD INDUSTRIAL VERSUS SOCIEDAD AGRARIA	150
2.1.3. ABOLICIONISMO VERSUS ESCLAVITUD	151
2.2. <i>El periodo de reconstrucción y sus secuelas políticas</i> ...	155
2.2.1. LA FASE PRESIDENCIAL DE LA RECONSTRUCCIÓN (1863/65-1866)	156
2.2.2. LA FASE LEGISLATIVA DE LA RECONSTRUCCIÓN (1866-1873)	161
2.2.3. LA REASUNCIÓN DEL CONTROL DEMÓCRATA DE LOS ESTADOS SUREÑOS (1873-1877).....	168
3. 1876: Entre el centenario y la crisis constitucional.....	173
3.1. 1876.....	173
3.2. <i>Los candidatos a la presidencia y la campaña electoral</i>	175
3.2.1. EL PERFIL DE LOS CANDIDATOS	176
3.2.2. LA CAMPAÑA ELECTORAL	185
3.3. <i>Las elecciones: perspectivas, resultados, conflictos e intentos de solución</i>	197
3.3.1. SISTEMA DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS	197
3.3.2. EL RECUENTO ELECTORAL Y LA DISPUTA SOBRE LOS RESULTADOS.....	200
3.3.3. CRISIS CONSTITUCIONAL Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES	222
3.4. <i>Las sesiones y decisiones de la Electoral Commission</i> ...	237

3.4.1. LA NORMATIVA APLICABLE: CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTORAL COMMISSION	238
3.4.2. VOTOS COMPROMISARIOS DE FLORIDA (SESIONES DEL 1 AL 9 DE FEBRERO DE 1877)	243
3.4.3. VOTOS COMPROMISARIOS DE LUISIANA (SESIONES DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 1877)	269
3.4.4. VOTOS COMPROMISARIOS DE OREGÓN (SESIONES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 1877)	272
3.4.5. VOTOS COMPROMISARIOS DE CAROLINA DEL SUR (SESIONES DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 1877)	284
3.5. <i>Otros aspectos relacionados con la disputa Hayes-Tilden</i>	287
3.5.1. NEGOCIACIONES POLÍTICAS ENTRE REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS SUREÑOS: EL COMPROMISO DE 1877	287
3.5.2. CAMPAÑA CONTRA EL JUEZ JOSEPH BRADLEY	294
4. Conclusión.....	309

CAPÍTULO TERCERO

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2000: GEORGE W. BUSH FRENTE A ALBERT GORE JR.....	313
---	------------

1. Introducción: planteamiento general de cómo se aborda el análisis de los comicios presidenciales del año 2000 en el presente capítulo.....	316
---	-----

2. Normativa federal y normativa electoral vigente y aplicable a las elecciones presidenciales del año 2000	323
3. Las elecciones presidenciales del año 2000 en el estado de Florida. Días 7 y 8 de noviembre de 2000: resultados electorales, estrategias y primeros procedimientos judiciales	330
3.1. <i>Los días 7 y 8 de noviembre de 2000 en Florida</i>	333
3.2. <i>La impugnación judicial de la butterfly ballot: el caso Fladell v. Palm Beach County Canvassing Board</i>	349
4. El devenir jurídico del recuento de votos de Florida ...	357
5. De las urnas a los estrados (I): <i>Bush v. Palm beach county canvassing board</i>	370
5.1. <i>La fase en los tribunales estatales de Florida</i>	371
5.2. <i>El Tribunal Supremo: funcionamiento y composición en el año 2000</i>	383
5.3. <i>La sentencia Bush v. Palm Beach County Canvassing Board (531 US 70 [2000])</i>	393
6. De las urnas a los estrados (II): <i>Bush v. Gore</i>	396
6.1. <i>El proceso en las instancias estatales</i>	396
6.2. <i>El proceso en el Tribunal Supremo</i>	415
7. Consecuencias del caso <i>Bush v. Gore</i>	431
CONCLUSIÓN	445

PRÓLOGO

JOAQUÍN VARELA SUANZES-CARPEGNA

Sin necesidad de retrotraernos hasta Campomanes, seguidor muy atento y cualificado de los momentos germinales de los Estados Unidos, la gran República americana suscitó un notable interés en España desde los orígenes mismos de su constitucionalismo. En las Cortes de Cádiz, sin embargo, ese interés no vino acompañado de simpatía alguna, al menos por parte de los diputados peninsulares, muy en particular de los liberales, a quienes disgustaba la naturaleza republicana de su Constitución (en eso estaban de acuerdo los realistas) y sobre todo su federalismo. A este respecto, Argüelles y Toreno muy en particular sostuvieron en varias ocasiones que si esta forma de distribución territorial del poder se aplicase a las «Espanñas», la independencia de los territorios americanos sería inevitable. Algo que, como es bien sabido, no pudo impedir tampoco el Estado unitario que se puso en planta en 1812.

Fue a partir de la revolución democrática de 1868 cuando la Constitución estadounidense despertó no solo mucho interés, avivado por los ecos de la muy reciente Guerra de Secesión, sino incluso simpatía entre la opinión pública española más avanzada. El influjo americano se percibe ya en la Constitución

aprobada al año siguiente, la más progresista de nuestro siglo XIX, y mucho más en el fallido proyecto republicano y federal de 1873, que tomó a los Estados Unidos por modelo.

La simpatía hacia este país sufriría un comprensible descenso a resultas del «Desastre» del 98, incluso entre los sectores más próximos al republicanismo. La fracasada experiencia federal española, con su patología cantonalista, no fue ajena tampoco al menguado entusiasmo que el modelo americano, al menos en lo atinente a la organización territorial del Estado, suscitó en los constituyentes de 1931. Más atentos en este punto, y en otros, a los modelos centroeuropeos, sobre todo al que suministraba la República de Weimar.

Pero a medida que los Estados Unidos se fueron convirtiendo en una gran potencia mundial (en la primera potencia a partir de 1945 e incluso en la única tras el derrumbe de la URSS, aunque con la emergencia de China el mundo unipolar ha pasado a mejor vida), el ejemplo americano ha estado cada vez más presente entre los estudiosos españoles. Sobremanera entre los especialistas de la *Political Science*, pero también entre los iuspublicistas, muy en particular desde la entrada en vigor de nuestra vigente Constitución de 1978. Ciertamente que esta se ha inspirado sobre todo en modelos europeos, primordialmente en la Ley Fundamental de Bonn y en el antecedente patrio de 1931. Pero no lo es menos que se incardina, como estas dos, en la gran familia de Constituciones que nacen precisamente a partir de la Constitución americana de 1787. Una Constitución que por vez primera afirma su supremacía en el conjunto del ordenamiento jurídico y crea un control de constitucionalidad de las leyes, aunque se atribuya ese control al Poder Judicial y no a un tribunal especial, como sucede en Europa.

Pese a todo lo dicho, son todavía escasos los estudios que en España abordan el constitucionalismo de los Estados Unidos de América, sobre todo desde una perspectiva histórica,

ya sea en su conjunto o parcialmente. Esto último es lo que hace Jorge Pérez Alonso en el libro que ahora tengo el placer de prologar. En él se estudian tres elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, que tuvieron lugar en épocas sensiblemente distantes, lo que realza sin duda su tarea investigadora: 1800, 1876 y 2000. Años en los que se enfrentaron por la más alta magistratura Thomas Jefferson y Aaron Burr, Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden, y George W. Bush y Albert Gore, respectivamente. Tres elecciones que se han escogido en este libro por su gran relevancia en la historia americana, no solo por ser políticamente muy controvertidas, como lo prueba la demora en los tres casos de la proclamación del candidato electo, sino por plantear trascendentales cuestiones jurídico-constitucionales,

Para afrontar esta ambiciosa empresa, su autor se adentra en el complejísimo procedimiento que, según dispone el artículo segundo de la Constitución, enmendado en 1804, cada cuatro años se pone en marcha para elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, con sus *caucus*, primarias y designación final de los candidatos en cada Estado de la Federación (pues no se trata de una elección nacional, pese a que coincida en el mismo día en todo el territorio de la República), por un amplio cuerpo de compromisarios, en algún caso designados por el cuerpo electoral y en otros por las Legislaturas o Parlamentos estatales, ya que la Constitución federal permite que cada Estado fije al respecto las reglas más convenientes. Pero además de examinar la concreta aplicación de este procedimiento electoral tan enrevesado en cada una de las tres elecciones mencionadas, así como la muy distinta manera de resolver la disputada designación del candidato vencedor (Jefferson, Hayes y Bush) y las consecuencias jurídicas de esas elecciones, Jorge Pérez Alonso se ocupa también, como no podía dejar de ser en un estudio histórico-constitucional que se

precie, del muy distinto contexto político y social de cada una de esas contiendas electorales, sin el cual estas resultarían incomprensibles. Y todo ello lo hace con gran rigor y de manera clara y precisa.

En realidad, como el lector podrá comprobar por sí mismo, Pérez Alonso ha hecho un excelente trabajo. Lo que me complace mucho por dos motivos. En primer lugar, porque formo parte del consejo editorial de este joven y prometedor proyecto que es «In Itinere», en donde este libro ve ahora la luz. Un proyecto auspiciado por el Seminario de Historia Constitucional Martínez Marina, que me honro en dirigir. Pero, en segundo lugar, no puedo ocultar que me complace mucho reconocer la calidad de este libro porque su autor –hoy un brillante abogado que tiene en su haber, cosa nada frecuente, varios trabajos jurídicos e históricos publicados en diversas y muy prestigiosas revistas– fue hace ya unos cuantos años un destacado alumno mío de Derecho Constitucional y de Historia del Constitucionalismo. Una asignatura esta última que vengo impartiendo desde hace dos décadas en Oviedo y que, por esas cosas que suceden en la Universidad española, sobre las que más vale ahora pasar de puntillas, me veré obligado a dejar de impartir en 2014, al no tener acomodo, pese a su buena acogida por parte de los estudiantes, en el nuevo plan de estudios (el llamado «Plan Bolonia»). La tristeza que me produce la desaparición de mi querida asignatura optativa se palía un tanto al ver que con ella logré transmitir mi interés por el pasado constitucional (por el español y por el comparado), cuyo conocimiento resulta muy útil a juristas, historiadores y politólogos, a algunos alumnos muy sobresalientes. Entre ellos, de forma descollante, a Jorge Pérez Alonso, cuyo libro recomiendo vivamente.

Oviedo, enero de 2013

INTRODUCCIÓN

Las elecciones presidenciales estadounidenses deparan, como no podía ser menos, la lógica atención de todos los países, y ello se deriva no solo de la evidente preponderancia que dicho país ostenta en el escenario político mundial (con la evidente relevancia que posee la elección de quien durante cuatro años ostentará la jefatura del estado y del gobierno en la nación que actualmente posee el rango de primera potencia mundial), sino por varias circunstancias específicas del sistema americano que lo hacen muy atractivo para el espectador de otras naciones: el apasionante *iter* procedimental que precede a los comicios en sí (*caucus*, primarias, designación final de los candidatos que cada partido designa para optar a los cargos de presidente y vicepresidente) y el peculiar sistema que la constitución estadounidense ha consagrado en su texto para la elección de las dos altas magistraturas de la nación. En efecto, pese a que son millones de ciudadanos quienes cada cuatro años se desplazan a las sedes electorales para depositar su voto en las urnas con la finalidad última de elegir al presidente y al vicepresidente de los Estados Unidos, ni es el pueblo quien elige directamente a dichos cargos ni estamos ante unas elecciones nacionales, pese a que se desarrollan en un mismo día a lo largo de todo el territorio de los Estados Unidos. El complejo mecanismo establecido en

el artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos dispone que cada estado elige un determinado número de compromisarios (*electors*) que, a su vez, serán los encargados de emitir su voto para la elección del presidente y el vicepresidente; no es, por tanto, el pueblo de los Estados Unidos quien designa a esos dos cargos, sino los estados a través de sus compromisarios. La peculiaridad del sistema norteamericano no finaliza ahí, sino que el texto constitucional otorga la más amplia discrecionalidad a cada estado para que establezca como mejor le convenga la forma de elección de tales compromisarios, de manera que tan constitucional es que los mismos sean objeto de elección popular como que el estado decida que sea la legislatura estatal el órgano encargado de la elección de tales compromisarios. Todos los *electors* de cada estado han de reunirse en la capital del mismo en una fecha determinada establecida en la legislación federal, y emitir su voto para la persona por la que opten para el cargo de presidente y para el de vicepresidente. Esa reunión de compromisarios de todos los estados (que no es una reunión física, ya que únicamente se da tal circunstancia en los compromisarios de cada estado en sus respectivas capitales) recibe constitucionalmente la denominación de *Electoral college*. Este sin duda atípico sistema electoral es fruto de un tiempo muy concreto, del contexto histórico-político y de la filiación doctrinal así como de las fobias y filias de los padres fundadores que recibieron sanción constitucional en el artículo segundo de la Constitución federal estadounidense de 1787, y que únicamente ha sido objeto de una modificación puntual en 1804 merced a la decimosegunda enmienda, para solventar la problemática acaecida en los comicios de 1800, como hemos de analizar en el primero de los capítulos del presente libro. La peculiaridad del Electoral college, de carácter genuinamente norteamericano, puede ocasionar disfunciones o alteraciones muy difíciles de entender para una mente avezada a los siste-

mas jurídico-políticos continentales, pues no necesariamente existe una relación de proporción directa entre voto popular y voto compromisario. Un candidato que no ostente el voto mayoritario puede perfectamente ser elegido presidente con una mayoría en el Electoral college, de la misma forma que un voto popular mayoritario, pero ajustado, puede traducirse en una amplísima ventaja en cuanto a voto compromisario. Son paradigmáticas, a este respecto, las elecciones de 1960, donde la victoria de John Fitzgerald Kennedy sobre Richard Nixon tuvo lugar por un escasísimo margen de votos populares (con más que fundadas sospechas de corrupción electoral en la ciudad de Chicago) que, sin embargo, se tradujeron en una abultada mayoría del demócrata en cuanto a voto compromisario.

No obstante, este peculiar sistema electoral es susceptible de generar conflictos mucho más profundos que en ocasiones situaron al país al borde de crisis políticas de primera magnitud. Así, por ejemplo, la victoria de Abraham Lincoln (el primer candidato del Partido Republicano que alcanzó la presidencia de los Estados Unidos) en las elecciones presidenciales de 1860, donde se impuso en voto compromisario pese a no ostentar la condición de candidato más votado en cuanto a voto popular, fue el detonante que inició el proceso de secesión de varios estados del sur y que desembocaría en la guerra de Secesión de 1861-1865. No obstante los problemas de tal elección fueron más políticos que jurídicos, mientras que en otras ocasiones fueron los resultados de los propios comicios los que ocasionaron graves problemas de alcance no solo político, sino jurídico-constitucional de primera magnitud. Eso es precisamente lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 1800, 1824, 1876 y 2000. En el primer caso, el empate a voto compromisario entre dos candidatos del mismo partido hizo que la elección final del presidente recayera en la Cámara de Representantes. Lo mismo ocurrió en las elecciones presidenciales

de 1824, donde ninguno de los varios candidatos que optaban al cargo obtuvo una mayoría en el Electoral college, razón por la cual el presidente fue nuevamente elegido por la Cámara de Representantes. Las elecciones de 1876 y 2000, por el contrario, tuvieron como foco de conflicto la incapacidad para determinar la lista de compromisarios que resultó vencedora en un determinado territorio (Carolina del Sur, Luisiana y Florida en el primer caso, y Florida exclusivamente en el segundo), siendo resuelta la controversia de diferente manera: en 1876 por una institución creada ad hoc para el caso concreto, la Electoral Commission; en el año 2000, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El presente libro tiene por objeto abordar el estudio de tres de esas cuatro controvertidas elecciones presidenciales donde la proclamación del candidato electo se demoró en el tiempo mucho más de lo habitual. Sin duda alguna la problemática surgida en las presidenciales del año 2000 es muy familiar al gran público, dada la cercanía de la fecha y la amplia cobertura mediática que se le ofreció; no obstante, familiaridad no implica necesariamente un conocimiento exhaustivo del procedimiento ni de la extensión de los problemas jurídico-constitucionales que se plantearon en su seno dado que, por lo general, han sido escasas las ocasiones en que se ha tratado el asunto con un mínimo de seriedad, pues habitualmente el asunto se despacha en unas pocas líneas en que se hace una crítica a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que puso fin al conflicto, de la que se suele hablar sin haberse asomado a su contenido. Las otras tres ocasiones en que la elección del presidente tuvo lugar en el seno de una disputa feroz fueron las correspondientes al año 1800 (el empate a voto compromisario entre dos personas de la misma tendencia ideológica, Thomas Jefferson y Aaron Burr), en las de 1824 (donde nada menos que cuatro candidatos se disputaban la presidencia sin que nin-

guno de ellos obtuviera la mayoría de voto compromisario) y las «elecciones del centenario» en 1876, sobre las que apenas existe tratamiento en la doctrina española.

Como hemos indicado, fueron cuatro las veces en que unas elecciones presidenciales norteamericanas desbordaron el cauce estrictamente político para invadir espinosas cuestiones de alcance jurídico-constitucional, mientras que en el presente libro únicamente analiza tres, dado que se ha optado por excluir del análisis los comicios de 1824 que desembocaron en la elección de John Quincy Adams. La razón de esa exclusión no es caprichosa ni baladí. Evidentemente, cada elección responde a unos condicionantes histórico-políticos muy concretos y vinculados a la realidad social del momento, lo que hace a cada elección única en cierta manera. No obstante, se puede decir con un alto grado de certeza que las elecciones de 1800, 1876 y 2000 son históricas en un doble sentido: no solo por haber transcurrido ya y formar, por tanto, parte de la historia ya vivida, sino porque es prácticamente imposible o muy difícil que se vuelvan a dar las circunstancias y, por tanto, plantearse de nuevo los problemas que las ocasionaron (en el caso de las elecciones de 1800, porque la aprobación de la decimosegunda enmienda en 1804 hace ya inviable un empate a voto compromisario entre dos candidatos a la presidencia en los mismos términos que en 1800; en el caso de 1876 y 2000 porque tras cada una de las elecciones el legislativo procedió a la reforma del sistema electoral para tratar de evitar que se diesen de nuevo tales situaciones por lo que, si no estrictamente imposible, sí que es altamente improbable que vuelva a darse una situación parecida). Tales consideraciones no pueden aplicarse a los comicios de 1824, dado que la problemática subyacente a los mismos está intrínsecamente ligada a la existencia misma del Electoral college y al problema que ocasiona el hecho de que, concurriendo varios candidatos para optar a la Presidencia de

los Estados Unidos, ninguno de ellos obtenga la mayoría de voto compromisario. En efecto, en 1824 el voto popular respaldó mayoritariamente a Andrew Jackson, pero este no logró obtener un respaldo mayoritario en el Electoral college, lo que, en previsión de lo dispuesto en el artículo segundo del texto constitucional, se depositó la elección en la Cámara de Representantes, eligió finalmente a John Quincy Adams quien era la segunda persona con mayor respaldo en voto popular. Y, dado que el Electoral college es una institución cuya vigencia se ha prolongado en el tiempo hasta hoy y por tanto es posible que el problema acaecido en 1824 vuelva a plantearse en un futuro para casos de irrupción de un candidato independiente o de un tercer partido en la carrera hacia la Casa Blanca, me ha parecido más conveniente reservar para un futuro y en un estudio autónomo el contencioso presidencial de 1824, estudio que no solo se limitaría al análisis de lo que en su día recibió el nombre de *corrupt bargain*, sino que se ampliaría con unas reflexiones mucho más actuales y vigentes sobre la existencia misma del Electoral college así como de las críticas político-jurídicas a su existencia misma en el seno de la propia doctrina estadounidense. De esta forma, se puede decir que el análisis de los tres procesos electorales analizados acerca al lector a problemas o situaciones definitivamente superadas, tanto a nivel político como jurídico.

Una última consideración en cuanto a las circunstancias y extensión del análisis de cada una de las elecciones presidenciales. Si bien en lo referente a los comicios presidenciales de 1800 y 1876 el autor se ha permitido realizar juicios de valor y tomas de posición en cuanto a la actuación de ciertos personajes involucrados en cada una de las tramas, así como en ciertas ocasiones tomar abiertamente partido (razonando, eso sí, los motivos por los cuales se ha optado por seguir un criterio y no otro), en el capítulo relativo a las elecciones presidenciales del año 2000

el criterio a seguir ha sido diametralmente el opuesto: alejarnos abiertamente de toda consideración subjetiva y atenernos a una estricta narración objetiva de los hechos y acontecimientos, exponiendo única y exclusivamente las consideraciones jurídicas que los distintos organismos judiciales utilizaron a la hora de resolver cada uno de los asuntos. La cercanía en el tiempo de tales acontecimientos y el vivísimo y rico debate doctrinal acaecido a la luz de los mismos, aún no apagado del todo, hace que hayamos preferido exponer crudamente los hechos y que sea cada uno de los lectores quien extraiga sus propias conclusiones a raíz de los mismos.

Quisiera, en último lugar, agradecer a la editorial digital *In Itinere* la confianza que ha depositado en el autor y en la obra a la hora de editar este trabajo. Agradecimiento que quiero extender igualmente a Joaquín Varela, que ha tenido la amabilidad de escribir el prólogo de esta obra que, por muchas razones, tanto le debe. No solo porque la idea contó con su generoso impulso y apoyo desde el primer momento, sino por razones mucho más poderosas aunque algo dilatadas en el tiempo: he tenido el inmenso privilegio de ser alumno del profesor Varela en mis ya lejanos años como estudiante en la facultad de derecho, y fueron sus clases de derecho constitucional, y especialmente las impartidas en la asignatura *Historia del Constitucionalismo*, las que supieron inculcar en mí de forma imborrable el interés no solo por el derecho público, sino especialmente por la historia constitucional española y comparada, interés que desde entonces jamás me ha abandonado.

**Tres controvertidas elecciones
presidenciales estadounidenses:
Thomas Jefferson,
Rutherford B. Hayes
y George W. Bush**

CAPÍTULO PRIMERO

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1800: JOHN ADAMS FRENTE A THOMAS JEFFERSON¹

La primera de las ocasiones en que unas elecciones presidenciales desbordaron el cauce estrictamente político con implicaciones jurídico-constitucionales fueron las cuartas elecciones presidenciales, en concreto las del año 1800. El

¹ Un análisis del contencioso presidencial del año 1800 lo podemos encontrar en Bernard A. WEISBERGER, *America Afire: Jefferson, Adams and the revolutionary Election of 1800*, William & Morrow Company, 2000; John FERLING, *Adams v. Jefferson: The tumultuous Election of 1800*, Oxford University Press, 2004; Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe: the tumultuous election of 1800, America's first presidential campaign*, Free Press, 2007; y James Roger SHARP, *Deadlocked Election of 1800: Jefferson, Burr and the Union in the balance*, University Press of Kansas, 2010, en mi opinión el mejor de todos. También aborda el tema de las elecciones presidenciales de 1800 el interesante estudio de Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers. Jefferson, Marshall and the rise of presidential democracy*, Belknap Press, 2005. Un interesantísimo artículo que aborda específicamente el papel de Aaron Burr en las elecciones y que contiene una reivindicación de su comportamiento, plenamente constitucional frente a la actuación anticonstitucional de Jefferson, es el debido a Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801: strict constitutional construction*, *Cardozo public law, politics and ethics journal*, 1-1 (mayo 2003), pp. 91-130, artículo al que se puede acceder a través de internet en el enlace http://www.pegc.us/archive/Journals/jvb_CAP102.pdf (consultado el día 24 de abril de 2010). Sobre la historia de los Estados Unidos durante todo este periodo, véase Gordon S. WOOD, *Empire of Liberty: a history of the early republic, 1789-1815*, Oxford University Press, 2010; un análisis histórico con una visión más crítica es el de Gore VIDAL, *La invención de una nación: Washington, Adams, Jefferson*, Anagrama, Barcelona, 2004.

federalista John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, optaba a la reelección mientras que el republicano Thomas Jefferson, vicepresidente de los Estados Unidos en el momento de presentarse como candidato a las elecciones, optaba a la presidencia en una lista o *electoral ticket* en el que Aaron Burr optaba a la vicepresidencia. Dado que la redacción originaria del artículo segundo de la Constitución no establecía votación separada para ambos cargos, sino que simplemente disponía que cada compromisario emitiría un par de votos, siendo elegido presidente la persona que obtuviese más votos y vicepresidente la segunda más votada; dicha previsión contenía en sí el germen del conflicto, dado que en caso de concurrir dos personas en una lista para ambos cargos podría producirse un empate. Como veremos a lo largo del presente artículo, el conflicto se planteó precisamente porque el desarrollo político de los Estados Unidos en sus primeros tres lustros de existencia evolucionó hacia una situación (el bipartidismo) que no solo no estaba prevista, sino que había sido expresamente rechazada por los *founding fathers* y, con ello, las previsiones constitucionales ideadas sobre unas convicciones y una realidad totalmente diferentes a la que existían tan solo doce años después de aprobarse la Constitución federal, ocasionaron el primero de los conflictos cuando dos personas de una misma tendencia, Thomas Jefferson y Aaron Burr, empataron a voto compromisario y hubo de depositarse la elección final en una Cámara de Representantes dominada por la facción rival federalista.

Los comicios presidenciales del año 1800 están históricamente ligados de forma inevitable a la figura de Aaron Burr. Ello no implica ni quiere decir que el problema surgido a finales de 1800 y comienzos de 1801 (el empate a voto compromisario entre dos candidatos del mismo partido o facción) tuviera su origen o causa en tan interesante figura política, puesto que

el conflicto en sí se hubiera producido con o sin Burr, dado que, como hemos indicado y desarrollaremos a lo largo del presente capítulo, el problema tenía su origen inmediato y único en la redacción originaria del artículo segundo de la Constitución ideada para un contexto político diferente. Pero es claro, para el autor de estas líneas un hecho indiscutible, que el contexto político que precedió y siguió al momento de conocerse los resultados estuvo indefectiblemente ligado a su figura, más que nada por las acusaciones que en su momento se vertieron contra Aaron Burr en el sentido de que trató de disputarle la presidencia a Thomas Jefferson, lo que exige necesariamente un análisis sobre la actitud del primero a lo largo del conflicto. El autor ya adelanta que, a la vista de la documental existente, no encuentra prueba alguna que avale dicha acusación.

1. El sistema norteamericano de elecciones presidenciales
 - 1.1. *El sistema político británico en la época constituyente norteamericana*

El levantamiento o rebelión de los colonos ingleses frente a la metrópoli se hizo invocando unos derechos y libertades garantizados por la Constitución inglesa que los ministros del rey Jorge III habrían vulnerado con su actuación, derechos entre los cuales se encontraba el que ningún impuesto podría establecerse sin el consentimiento de los representados manifestado en el Parlamento. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 se configuraba jurídicamente como un largo memorial de agravios sufridos por el pueblo americano a manos de las autoridades inglesas, en virtud del cual se pretendía justificar ante los distintos países europeos la rebelión colonial. No obstante, al menos en sus inicios, el movimiento independentista se rea-

lizó invocando la Constitución británica o, quizá mejor debiera decirse, la imagen que los colonos británicos se habían forjado del sistema inglés.² Es pues, obligado, comenzar haciendo una breve referencia al sistema británico de gobierno existente en esos años para comprender cuál era el modelo político frente al cual los colonos americanos enarbolaron abiertamente la bandera de la rebelión.

En 1688 tuvo lugar la *Glorious Revolution* que destronó al monarca Jacobo II, de la dinastía de los Estuardo, entronizando en su lugar al príncipe Guillermo de Orange, que pasó a reinar en Inglaterra con el nombre de Guillermo III. Ahora bien, esa revolución distó mucho de asemejarse a las que tuvieron lugar casi un siglo más tarde en las colonias británicas o en Francia, dado que la Revolución inglesa no tenía como objetivo romper de forma abrupta y tajante con un orden político-jurídico anterior con la finalidad de elaborar otro *ex novo*; por el contrario, se trató de una revolución conservadora donde se invocaron de forma expresa unos derechos y libertades del pueblo inglés que se entendían vulnerados por la actuación del rey Jacobo II. Los principios jurídicos e ideológicos que sustentaron los revolucionarios ingleses fueron consagrados tanto a nivel institucional (en el *Bill of Rights*, que consagró jurídicamente en Inglaterra una monarquía mixta o equilibrada) como a nivel doctrinal (gracias a John Locke y su celeberrimo *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* que, aun escrita con anterioridad, se publicó precisamente en 1689). Sin embargo, poco a poco se fueron produciendo una serie de mutaciones institucionales al margen del derecho escrito que debilitaron progresivamente

² A este respecto es imprescindible la lectura del detallado estudio realizado por el profesor Hans DIPPPEL, «El concepto de Constitución en los orígenes del constitucionalismo norteamericano (1774-1776)», publicado en el volumen 6 de la revista *Fundamentos – Cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional*, Junta General del Principado de Asturias, 2010, pp. 27-83.

el poder del monarca en beneficio del Parlamento (más concretamente de la Cámara de los Comunes). El acceso de Jorge I al trono inglés en 1715 no trajo solo consigo el advenimiento de una nueva dinastía (los Hannover) sino que un hecho tan aparentemente anecdótico como su desconocimiento de la lengua inglesa hizo que dicho monarca tuviese un desinterés por los asuntos de Inglaterra, por lo que muchas de las funciones que de iure ostentaba el rey acabasen siendo recogidas de facto por sus ministros. Bajo Jorge II y el largo mandato de Robert Walpole como primer ministro, la vieja monarquía mixta o equilibrada se fue transformando poco a poco, a través de prácticas constitucionales o convenciones, en una monarquía parlamentaria, donde el poder ejecutivo pasaba a ejercerlo una nueva institución, el gabinete, responsable ante el Parlamento, fundamentalmente ante los Comunes. El intento de Jorge III de recuperar para el monarca las prerrogativas que el soberano inglés poseía de iure se saldó con un fracaso en el que tuvo no poca importancia precisamente la derrota de las tropas británicas en la guerra de la Independencia norteamericana, hecho que en 1782 obligó a dimitir al primer ministro Lord North pese a contar aún con la confianza regia. Así pues, y aún sin estar totalmente perfeccionadas en suelo inglés todas las características de la monarquía parlamentaria, ya no podía hablarse de la existencia en Inglaterra de una monarquía mixta o equilibrada en los términos en que la describiera Locke casi un siglo antes; el desarrollo de un sistema bipartidista, el nacimiento del gabinete con unas potestades desgajadas de la antigua prerrogativa regia y el reforzamiento de la responsabilidad parlamentaria de los ministros eran ya una realidad en la Inglaterra de la década de los ochenta del siglo XVIII.³

³ Esta no es más que una apretada síntesis que el lector interesado puede ampliar consultando los imprescindibles trabajos de Joaquín VARELA SUANZES, «El debate

Así pues, el sistema constitucional inglés frente al que se rebelaron los antiguos súbditos británicos y ahora ciudadanos estadounidenses era el de una monarquía en un avanzado grado de parlamentarización. Esa fue la realidad política con la que John Adams estuvo en permanente contacto durante su etapa de embajador americano en la corte de Saint James, durante los años 1785 a 1789. Mientras tanto, al otro lado del canal de la Mancha, el embajador norteamericano en Francia, Thomas Jefferson, se extasiaba con la agonía del absolutismo monárquico y con la aparición de los primeros brotes del proceso revolucionario francés, en el que el propio Jefferson colaboró en no poca medida. Adams y Jefferson, que coincidieron en Francia durante la guerra de Independencia americana y habían consolidado su amistad forjada precisamente en los inicios del movimiento revolucionario colonial, estaban por entonces aún muy lejos de suponer no solo que llegarían a sostener distintas concepciones políticas en cuanto a la naturaleza y extensión del gobierno federal creado en el texto constitucional de 1787, sino que en 1800 llegarían a enfrentarse políticamente para ocupar la presidencia de los Estados Unidos.

constitucional británico en la primera mitad del siglo XVIII (Bolingbroke versus Walpole)», *Revista de Estudios Políticos*, número 107 (enero-Marzo, 2000); «La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)», *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional*, número 1, pp. 87-165; «Sistema de gobierno y partidos políticos en el pensamiento constitucional británico durante el último tercio del siglo XVIII (de Blackstone a Paley)», *Historia Constitucional*, número 1 (junio de 2000); «El Constitucionalismo británico entre dos Revoluciones (1688-1789)», *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional*, número 2, pp. 25-96; «División de poderes y sistema de gobierno en la Gran Bretaña del siglo XVIII (teoría y práctica de la división de poderes)», *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, derecho público e historia constitucional*, número 5, pp. 55-119. Puede consultarse, también, M. J. C. VILE, *Constitucionalismo y separación de poderes*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, especialmente las pp. 59-84 y 109-132.

1.2. *La construcción de un sistema presidencialista*

Men like James Madison and James Wilson were trying to base their constitution on the best political science of their time. But this simple point provokes an unasked question: What if the Framers' political science turned out to be just plain wrong? The answer could be crisis. If the founding scheme was a clever effort to design an institutional machine in the light of scientific predictions about american politics, the machine could easily run amok if the predictions ran awry.⁴

Cuando en el año 2006 el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John G. Roberts Jr., recibió en la sede de dicho órgano judicial a un grupo de estudiantes que le plantearon varios interrogantes relacionados con el funcionamiento de dicha institución judicial y su papel en la democracia norteamericana, uno de los asistentes le hizo una curiosa pregunta: el motivo por el cual la Constitución contiene muy extensos artículos destinados a regular las atribuciones tanto del Congreso como del presidente y, sin embargo, reserva tan escasas líneas al papel de los Tribunales de justicia. La respuesta que ofreció el máximo responsable de la judicatura federal fue que los *founding fathers* provenían de una tradición y de un sistema, el del *common law*, donde se tenía muy claro cuales eran el papel y las atribuciones de los Tribunales y, por ello, no era necesario un extenso desarrollo sobre el particular; sin embargo, no ocurría lo mismo con el Congreso, el presidente

⁴ BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 16. En idéntico sentido se pronuncia BERNARD A. WEISBERGER, para quien el fracaso de los constituyentes a la hora de embridar ese potencial espíritu de facción fue la que ocasionó la crisis de 1800: «When the Constitutional Convention ended its business on September 17, 1787 it had failed to subdue the vice, and as a result, the 'violence of faction' would nearly destroy the new Union in only thirteen short years [...] The seeds of the crisis of 1800 were planted in 1787 in Philadelphia», *America Afire*, o. cit., pp. 13 y 15.

y las relaciones entre ambos, dado que en ese momento se estaba creando *ex novo* un sistema que no existía al otro lado del Atlántico y que, en ese sentido, suponía una completa ruptura con el sistema del cual derivaba. Y es que, en efecto, el sistema judicial existente en la metrópoli se trasplantó sin problemas a las colonias, tributarias, en este punto, de las tradiciones jurídicas heredadas. Además, el nivel de prestigio que había alcanzado la judicatura inglesa durante los siglos XVII y XVIII no tenía parangón en el resto de las potencias europeas.⁵ Sin embargo, como bien decía el *chief justice* Roberts, en cuanto a la organización de los poderes legislativo y ejecutivo se produjo en realidad una instauración de un sistema jurídico-político más acorde con los postulados de una *balanced constitution* que de un sistema parlamentario como el existente en esos momentos en Gran Bretaña, aunque ese parlamentarismo no pasase de un nivel embrionario, como hemos indicado anteriormente. Los padres fundadores fueron pioneros a la hora de plasmar los principios políticos básicos en un único documento escrito que tendría, además, el carácter de norma jurídica suprema. En otras palabras, se dio paso a un concepto racional-normativo de Constitución. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron tal acontecimiento?

Las difíciles relaciones existentes entre las antiguas colonias y la metrópoli a raíz del final de la guerra de los Siete

⁵ «When the first colonies were planted on the North American continent, the judicial had come to occupy a position of preeminence in the English constitution unmatched in any other European country. This position was owed not alone to the high degree of professional competence traditional in the superior courts and the respect in which their judgments were held. It derived also from the centuries-old distribution in depth of court-keeping functions and from the fact that duties of attendance and of participation by freemen had insured popular engagement in the business of law administration». Julius GOEBEL JR., *History of the Supreme Court of the United States Volume I: Antecedents and Beginnings to 1801*, New York, The Macmillan Company, 1971, p. 1. Sobre este proceso de trasplante de las instituciones judiciales británicas a los territorios coloniales se extiende el autor a lo largo del capítulo primero de dicha obra, pp. 1-49.

Años culminaron con la rebelión abierta de los territorios coloniales frente a Inglaterra. Esa rebelión se hizo precisamente esgrimiendo como argumento justificativo la propia Constitución inglesa, es decir, fundando la rebeldía precisamente en la injusticia de los actos emanados de las instituciones políticas inglesas que contravenían abiertamente la Constitución británica o, cuando menos, la concepción o imagen que los norteamericanos tenían de dicha Constitución. Lo que ocurre es que el conflicto abierto entre Inglaterra y sus territorios coloniales no solo se trasladó al campo bélico, sino al jurídico; no solo se enfrentaban dos ejércitos, sino incluso dos interpretaciones de la Constitución inglesa.⁶ Lo verdaderamente importante es que los revolucionarios americanos concluyeron que, «en la medida en que la Constitución de la Gran Bretaña en América estaba rota en pedazos, se hacía necesaria su sustitución por un nuevo texto constitucional de factura y concepción norteamericana»,⁷ es decir, que se pasó de un modelo inglés importado por los primeros asentamientos coloniales a un modelo norteamericano propio, en el que comenzó a abrirse paso la idea de que el texto constitucional era jurídicamente superior a las leyes aprobadas por el legislativo. Así, cada colonia procedió a aprobar un texto constitucional escrito, y todos los territorios sublevados frente a la corona británica suscribieron el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia, un largo memorial de agravios sufridos por los territorios norteamericanos y tendentes a justificar la rebelión frente al resto de las grandes potencias de la época. Tan solo un año más tarde, el Congreso Continental norteamericano aprobó el 15 de noviembre de 1777 los artículos de la Confederación, a fin de que fuesen ratificados por los distintos

⁶ Nos remitimos al trabajo de Hans DIPPEL anteriormente citado.

⁷ HORST DIPPEL, *El concepto de Constitución en los orígenes del constitucionalismo norteamericano (1774-1776)*, o. cit., p. 51.

estados, proceso este que se alargó en el tiempo y que dilató la entrada en vigor de dicho instrumento nada menos que hasta 1781. Sin embargo, esos artículos de la Confederación no institucionalizaban más que una unión confederal de estados que, si bien pudo ser eficaz para asegurar cierta unidad de acción en el marco de un conflicto bélico, se mostraron insuficientes una vez se había logrado la independencia de la metrópoli, dado que el texto en cuestión únicamente establecía como autoridad un Congreso carente de facultades o potestades suficientes para hacer frente a conflictos de carácter doméstico.

No es este el lugar para desarrollar en toda su extensión el proceso constituyente norteamericano que finalizó con el texto constitucional de 1787, sino indicar cuál fue el sistema que los *founding fathers* idearon para gobernar la nueva república norteamericana de una forma más estable que la hasta ese momento vigente. Y, para ello, debemos partir de tres hechos o premisas absolutamente decisivos a la hora de entender la forma en que los constituyentes norteamericanos institucionalizaron jurídicamente las atribuciones del legislativo y del ejecutivo así como las relaciones entre ambos poderes. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que los constituyentes de 1787 se consideraban a sí mismos con orgullo *revolucionarios*,⁸ pero en modo alguno *demócratas* y en su recelo hacia la democracia subyacía una idea tan extendida en el siglo XVIII cual era la consideración del pueblo como menor de edad, es decir, como una masa en extremo manipulable al carecer de la formación y cultura necesarias, cualidades estas que únicamente poseía una pequeña minoría de ciudadanos;⁹ en otras palabras, que

⁸ BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 16. Si bien precisa el autor que «None of these gentlemen yet suspected that modern revolutions would consume their children voraciously in spasms of violence and oppression», o. cit., p. 17.

⁹ «At least a few delegates –eighteenth century men born and raised in a society in which most people still believed in a natural and, indeed, divinely sanctioned hierarchy of

los constituyentes hacían gala de lo que algún autor ha denominado «republicanismo clásico», es decir, la confianza en una élite, intelectualmente privilegiada y desinteresada, que ejerciese las labores de gobierno en beneficio de todos los ciudadanos, superando con ello la división inherente al partidismo.¹⁰ En segundo lugar, la influencia que el modelo político británico como referencia base de lo que se debía y no debía construir o, por decirlo en otras palabras, ver en qué medida los acontecimientos transcurridos desde 1763 habían alterado la Constitución inglesa (o, más propiamente, la concepción que de la misma tenían los americanos) y tomar las medidas para garantizar que ninguno de los poderes o instituciones pudiese prevalecer sobre los demás; y ello porque, a diferencia de lo que ocurriría un par de años más tarde en la Francia revolucionaria, los rebeldes norteamericanos no se habían alzado contra el despotismo y arbitrariedad de un monarca absoluto, sino contra una monarquía (jurídicamente robusta y poderosa aun cuando buena parte de sus atribuciones ya se hubiesen desplazado de facto al gabinete) en avanzado grado de parlamentarización donde el soberano era precisamente el legislativo, por lo que la desconfianza hacia los posibles abusos de un parlamentarismo exacerbado forzosamente impregnaron los debates constituyentes. Una tercera consideración (que constituye el elemento clave para comprender en su integridad los problemas ocasionados en las elecciones de 1800) es el total rechazo o la condena expresa de todo cuanto representase

beings— thought the people of the nation at large were inherently incapable of making a wise selection for their chief magistrate. Those delegates [...] believed that the ordinary citizens of America were too gullible, and their votes could be too easily manipulated». Richard BEEMAN, Plain honest men, the making of American constitution, Random House, New York, 2009, p. 129.

¹⁰ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 17 y 20-23. Sobre este republicanismo inicial, véase también Gordon S. WOOD, *Empire of liberty*, o. cit., pp. 5-52.

la idea de facción o partido político.¹¹ Como ya hemos visto anteriormente, si en la hasta hacía poco madre patria se estaba desarrollando poco a poco el bipartidismo, los *founding fathers* rechazaron de manera expresa tal idea condenando explícitamente el sistema de partidos. Ya durante el conflicto armado con Inglaterra se habían hecho llamamientos a la unidad y en contra de la división, argumentos que se acentuaron en el proceso constituyente. Se condenó de manera expresa la idea de partido, que se identificaba con facción y era considerado un mal intrínseco. La premisa de los constituyentes descansaba en que una élite desinteresada y capaz que era, recordemos, la intelectualmente preparada frente a un pueblo generalmente ayuno de cultura, pudiese imponerse sobre la mayoría superando el espíritu de facción, que debía desterrarse en aras de garantizar un largo futuro a la nueva república.¹² Institucionalmente, se optó por establecer un sistema basado en el principio de división de poderes donde cada uno de ellos estuviese controlado por los otros dos.¹³ Como bien indica en este aspecto M. J. C.

¹¹ «Based on their wartime experience of suppressing political differences for the common good, the new government's leaders uniformly condemned factionalism and opposed the formation of political parties. Individuals in Congress and the executive branch should address each issue on its merits, they thought, rather than take partisan positions». Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 17-18. «The Framers of our Constitution intended that our government be nonpartisan. They did not anticipate the rise of a two-party system [...] Thus, the Framers of the Constitution attempted to create a fair electoral system that balanced a variety of interests», Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., pp. 94-95.

¹² «Even Madison did not try. His work at the Convention, and in the *Federalist Papers*, linked party with faction and condemned it as evil», BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, p. 18; «In the early republic, however, opposition to government policies, in many instances, was viewed not as merely opposition to a specific government or administration, but as opposition and disloyalty to the Constitution and the republic», James ROGER SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 22. Véase también Bernard A. WEISBERGER, *América Afire*, o. cit., p. 13.

¹³ En la articulación concreta del principio de división de poderes y en la elección indirecta del presidente y los senadores influyó también la previsión de los padres fundadores de que, a pesar de todo, en la Cámara de Representantes pudiesen surgir divisiones: «The founders did not anticipate a two-party system, but they did expect noisy and selfish factions to arise in the popular House of Representatives. Their remedy was the separation of powers: with

Vile, anudando sintéticamente el segundo y el tercero de los condicionamientos que hemos indicado, «La aversión por la corrupción y el clientelismo del cuerpo legislativo inglés, un aspecto al que los estadounidenses achacaban en gran medida el conflicto del Parlamento con las colonias, hizo que los miembros de la Convención aceptaran casi automáticamente la separación completa de las personas que componían la rama ejecutiva y legislativa».¹⁴ La articulación de un sistema político basado, pues, en una ideología antipartidista y pensada para una sociedad donde la unidad (y no la división política) fuese la nota esencial, fue una de las causas de que el texto constitucional quedara desfasado cuando en un tiempo realmente fugaz germinara en los Estados Unidos de América la semilla de la división y el bipartidismo.

Junto a los anteriores condicionamientos ideológicos o políticos, existían igualmente otros factores de carácter social, y es que en este aspecto se partía de una estructura muy distinta a la existente en los países europeos: la población de los antiguos territorios coloniales carecía de una aristocracia que se opusiese en nombre de sus privilegios a cualquier tipo de reforma, ni monarquía cuya pervivencia fuera un *casus belli*, por lo que se encontraban sentadas las bases para el asentamiento del principio de igualdad, tal y como se había proclamado enfáticamente en la Declaración de Independencia de 1776. Una igualdad, bien es cierto, que no se extendía a determinados colectivos, pues a ninguno de los constituyentes se le pasó por la imaginación considerar como iguales a las mujeres, a los esclavos ni a los indios nativos. En este aspecto, Santiago Muñoz Machado ha señalado acertadamente que:

*presidents and senators selected indirectly, and for more extended terms, the demagogic tendencies of the House would be checked and balanced by cooler heads elsewhere». BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 14.*

¹⁴ M. J. C. VILE, *Constitucionalismo y separación de poderes*, o. cit., p. 174.

En el igualitarismo americano de partida, hay una excepción, que pesará mucho en la historia de Estados Unidos, y que conviene recordar, por su singularidad []: los negros y el comercio de esclavos.

En la redacción inicial de la Declaración se incluyó un párrafo que se dirigía contra la situación creada con los negros esclavos. Se decía allí que Gran Bretaña «ha declarado cruel guerra a la misma naturaleza humana, violando sus más sagrados derechos a la vida y a la libertad en las personas de distantes gentes que jamás la habían ofendido, capturándolas y condenándolas a otro hemisferio para someterlas a la esclavitud o haciéndolas sufrir la más miserable de las muertes durante su transporte hacia aquí»

Pero nunca se pensó en el trato igual. En sus *Notes on the State of Virginia*, Jefferson aludía a que la única salida posible una vez emancipado el esclavo negro, no era que los colonos blancos pasaran a mezclarse con él, como habían hecho los romanos, sino devolverlo a su país o región de origen. En su proposición de ley sobre esclavos de 1779 decía, por ello, que una vez liberados, deberían abandonar el país en un plazo determinado. En las notas citadas aparece un Jefferson marcadamente racista que se refiere a la monotonía cromática de los rostros de los negros, a su «inamovible velo de negrura» y hasta está seguro del distinto funcionamiento y, por tanto, del olor de las glándulas sebáceas de negros y blancos.¹⁵

En los debates constituyentes las deliberaciones en torno al ejecutivo estadounidense comenzaron el día 1 de junio de 1787.¹⁶ En las previsiones iniciales de John Randolph y James

¹⁵ Santiago MUÑOZ MACHADO, *Tratado de derecho administrativo y derecho público general*, volumen I, Civitas, Madrid, 2004, pp. 121-122.

¹⁶ Sobre los debates constituyentes en torno a la presidencia, véase Richard BEEMAN, *Plain honest men*, o. cit., pp. 125-143.

Madison (lo que se conoce como el *Virginia plan*)¹⁷ figuraban la instauración de un legislativo bicameral y un ejecutivo nacional que sería elegido por aquel para un determinado número de años; es decir, un sistema claramente parlamentario, dado que el ejecutivo dependería de la voluntad del legislativo. No obstante, pronto se iniciaron las disputas entre los distintos delegados acerca de la naturaleza del ejecutivo nacional. En síntesis, las discusiones se centraron básicamente, a los efectos que nos interesan para este trabajo, en dos aspectos:

I. *Ejecutivo unipersonal o múltiple*. Representantes como James Wilson y Charles Pickney abogaron de manera clara por un ejecutivo unipersonal que pudiera ser el único en el que se encarnase la nación; por el contrario, otros como Roger Sherman oponían a tal concepción un ejecutivo múltiple que no fuese más que mero ejecutor de la voluntad del legislativo dado que era este, y no aquel, el depositario de la voluntad popular,¹⁸ tesis que compartía Edmund Randolph. Finalmente (y en no poca medida gracias a la mera presencia física de Washington en la convención) se optó por depositar el poder ejecutivo en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos.

II. *Modo de elección del presidente*. Se estaba ante una cuestión de primer orden, pues de ello dependería si el futuro poder ejecutivo sería robusto, independiente

¹⁷ En el boceto inicial de Madison y Randolph, la nación se estructuraría en un ejecutivo bicameral en la que los miembros de ambas Cámaras serían elegidos por los estados en función de la población y la riqueza; un ejecutivo nacional nombrado por el legislativo y encargado de llevar a efecto los mandatos de este; y una judicatura cuyos integrantes gozasen de inamovilidad.

¹⁸ «*Had Sherman and several other delegates who identified themselves with his position won the day, America Would be ruled by a parliamentary, rather than a presidential model of government, with a majority of members in the legislature determining the authority of their prime minister*». Richard BEEMAN, *Plain, honest men. The making of the American Constitution*, o. cit., p. 128.

y con poderes autónomos o, por el contrario, se estaría ante una magistratura dependiente y subordinada; en otras palabras, se estaba decidiendo nada menos que entre un sistema presidencialista o un sistema parlamentario, entre un ejecutivo con voluntad propia o un ejecutivo sometido a la voluntad de la mayoría legislativa. James Wilson abogaba por un presidente elegido directamente por votación popular, derivando, pues, su fuente de legitimidad del pueblo mismo. Pero desgraciadamente nadie compartía esa opinión, entre otras cosas por el recelo hacia la democracia que caracterizó a los padres fundadores y a la que anteriormente hemos hecho referencia, así como por el temor a que la presidencia acabase en manos de un tirano que pudiese fundamentar sus poderes en el voto popular.¹⁹ Es por ello que, siendo rechazado de manera expresa una elección del presidente por el legislativo, se rechazó de igual forma la elección directa. Para superar ambas alternativas se optó por crear un complicado mecanismo de elección que pudiese garantizar la legitimación popular si bien evitando que el presidente fuese elegido de forma directa por el pueblo. Con ello quedaba garantizada su independencia de la rama legislativa. Nació así el Electoral College,²⁰ cuya vigencia se mantiene en la actualidad.

¹⁹ «When they looked at the presidency, the Convention feared a demagogue, and designated the electoral college to reduce the chances that a political opportunist could ascend to power». Bruce ACKERMAN, o. cit., p. 5.

²⁰ Según John Ferling, en el establecimiento del Electoral College no solo influyeron la desconfianza hacia la democracia directa y el temor a que el ejecutivo se convirtiese en un títere del legislativo, sino que tuvo no poco que ver el temor existente en los delegados del sur de que, tras Washington, ningún sureño sería elegido presidente. *Adams v. Jefferson*, o. cit., pp. 5 y 6. Por su parte, el juez Richard A. Posner habla de un sistema aristocrático-democrático basándose en ese elitismo de los constituyentes

Así, en la redacción definitiva del texto constitucional, el poder ejecutivo se depositaba en manos del presidente, que sería elegido mediante un complejo sistema de elección indirecta. La forma de elección del jefe ejecutivo se recoge en el artículo II párrafo primero que, hasta la reforma operada por la duodécima enmienda constitucional (aprobada en 1804 precisamente a raíz de lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1800) tenía la siguiente redacción:

Each State shall appoint, in such manner as the Legislature thereof may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or person holding an office of trust or profit under the United States, shall be appointed an Elector

The electors shall meet in their respective States, and vote by ballot for two persons, of whom one at least shall not lie an inhabitant of the same State with themselves. And they shall make a list of all the persons voted for, and of the number of votes for each; which List they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes shall be the President, if such number be a majority of the whole number of electors appointed; and if there be more than one who have such Majority, and have

americanos a la hora de concebir la institución presidencial, elitismo que tendría su reflejo en la institución del Electoral College: «*But democratic aristocracy, oximoron as it may seem, best describes our system. The framers of the original constitution, the Constitution of 1787, decreed that the House of Representatives would be popularly elected, but they had a distinctly aristocratic conception of the presidency; it is reflected in the device of the Electoral College*»; *Breaking deadlock: The 2000 election, the Constitution and the Courts*, Prince University Press, 2001, pp. 17 y 31-32.

an equal number of votes, then the House of Representatives shall immediately chuse by ballot one of them for President; and if no person have a majority, then from the five highest on the list the said House shall in like manner chuse the President. But in chusing the President, the votes shall be taken by States, the representation from each State having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the States, and a majority of all the States shall be necessary to a choice. In every case, after the choice of the President, the person having the greatest number of votes of the electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have equal votes, the Senate shall chuse from them by ballot the Vice-President

En resumen, cada estado elige un determinado número de compromisarios que se reunirían para emitir sus votos el día que a tal efecto fijase el poder federal, ostentando a libérrima facultad para establecer el modo en que se elegirían dichos compromisarios (bien por la legislatura estatal, bien mediante elección directa). Cada compromisario emitiría dos votos, sin más precisiones constitucionales que uno de los mismos debería ser a favor de una persona que no fuese residente en el estado en cuestión;²¹ los votos compromisarios serían posteriormente certificados por el órgano competente del estado y remitidos a la capital, donde se procedería al recuento de los mismos. La

²¹ Con ello se trataba de evitar que lealtades a nivel estatal se priorizaran sobre los intereses nacionales. No debe olvidarse que el Electoral College responde a una filosofía de los *founding fathers* que no solo no contemplan, sino que repudian expresamente el espíritu de facción: «*In their conception of the Electoral College, the Framers foresaw an elite group of well-qualified electors exercising their collective judgment in picking the best-qualified President and Vice-President from an open field of leading figures from across the country. Through this process, the Framers hope to avoid both the formation of national political parties, which were never mentioned in the Constitution, and the development of coordinated partisan voting*». Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 40.

persona que obtuviese el mayor número de votos ocuparía el cargo de presidente y la segunda con más número de votos el cargo de vicepresidente.²² En caso de que ninguna persona obtuviese la mayoría de votos compromisarios, la elección del presidente recaería en la Cámara de Representantes, pero con una particularidad: el voto en dicha Cámara no sería personal, sino que todos los representantes de cada estado emitirían un único voto, lo que les obligaba a llegar a un acuerdo interno entre ellos. Lo mismo ocurriría en el caso del vicepresidente, aunque en este caso sería el Senado quien tuviese la palabra final. En cuanto a las atribuciones o potestades concretas que cada órgano constitucional ostenta, mientras que las atribuidas al presidente son bastante numerosas (el poder ejecutivo en toda su extensión, comandante en jefe de las fuerzas armadas, potestad de celebrar tratados, nombramiento de funcionarios –si bien mediatizado con la cláusula del *advise and consent of the Senate*– la facultad de vetar las leyes aprobadas por el Congreso), la única misión que el texto constitucional atribuía al vicepresidente era la de presidir el Senado, donde además únicamente ostentaría el voto dirimente en caso de empate.²³ Una importante carencia del texto constitucional es que no se establecía ni regulaba un gobierno

²² Los *founding fathers* rechazaron expresamente que el presidente fuese nombrado por el Congreso, y, como indicamos en la nota anterior, en la mentalidad de la época no tuvieron en cuenta ni se imaginaron la existencia de partidos políticos, pues fue expresamente rechazado el espíritu de facción, sobre el que el propio George Washington alertó en su discurso de despedida en 1796. Al no prever el sistema de partidos y al no realizarse la votación para ambos cargos en listas diferentes, ello podía dar lugar a situaciones como la ocurrida precisamente en 1796, donde el presidente Adams y el vicepresidente Jefferson representaban facciones encontradas. Un dato muy a tener en cuenta a la hora de abordar la crisis de 1800 es que Jefferson, que en 1796 optaba teóricamente al cargo de presidente, ocupó la vicepresidencia, sin que nadie le exigiese que renunciase a dicho cargo dado que no se había presentado para el mismo.

²³ Ello motivó una amarga reflexión de John Adams, vicepresidente de los Estados Unidos durante el periodo comprendido entre 1789 y 1796. En una carta dirigida a su esposa Abigail el 19 de diciembre de 1793, manifestaba que la vicepresidencia era «*the most insignificant office that ever the invention of man contrived or his imagination conceived*».

o gabinete en sentido estricto, y esa laguna hubo de ser suplida ulteriormente por el legislador, quien fue regulando por ley las distintas Secretarías que pasarían a integrar, junto con el presidente, el ejecutivo de la nueva república.

Debe realizarse una última precisión en lo atinente al proceso de elaboración del texto constitucional. Es necesario dejar bien claro que los constituyentes norteamericanos, en modo alguno, estimaron haber creado un documento cuya vigencia se prolongase en el tiempo, y, como demostraría la práctica política de los años sucesivos, los padres fundadores no lograron anticipar dos fenómenos que pasarían a formar parte de las señas de identidad de la recién creada nación: la democracia y el bipartidismo; de igual manera que no podían prever los perniciosos efectos que los acontecimientos revolucionarios en Francia acarrearían indirectamente a los Estados Unidos de América.²⁴

2. La deriva bipartidista estadounidense

2.1. *Los inicios del federalismo y el republicanismo*

*Revelaba por primera vez la profunda e irreconciliable escisión entre el Partido Republicano y el Federalista; habían dejado de ser simples facciones para convertirse en verdaderos partidos políticos. Uno era profrancés y otro probritánico. Uno quería una confederación de estados poco rígida y el otro una poderosa Administración central; uno estaba constituido por granjeros independientes unidos a los obreros de la ciudad y el otro era adicto al comercio y a la industria. Uno era Jefferson y el otro era Hamilton.*²⁵

²⁴ Bernard A. WEISBERGER, *América Afire*, o. cit., p. 14.

²⁵ Gore VIDAL, *Burr*, Grijalbo, Barcelona, 1975, p. 218.

2.1.1. EL PRIMER MANDATO PRESIDENCIAL DE GEORGE WASHINGTON (1788-1792): DIVISIÓN CAUSADA POR DIFERENCIAS EN LA POLÍTICA INTERIOR

Una vez redactado y suscrito el texto constitucional, el día 1 de noviembre de 1788 el último Congreso reunido bajo los artículos de la Confederación estableció el primer miércoles de enero de 1789 como fecha en que los diferentes estados elegirían los compromisarios ya de conformidad con el texto constitucional de 1787; dichos compromisarios se reunirían en las capitales de sus respectivos estados el primer miércoles de febrero de 1789 para emitir sus votos, que serían certificados y remitidos en sesión conjunta del Congreso federal el día 4 de marzo. No obstante, la falta de quórum en esta última fecha determinó que el recuento final de votos y, en consecuencia, la proclamación del presidente se demorase hasta el mes siguiente, no siendo hasta el día 6 de abril de 1789 cuando se procediese a la votación para la elección del jefe ejecutivo. Los sesenta y nueve compromisarios otorgaron su primer voto de manera unánime a George Washington para que este fuese elegido presidente, mientras que para el cargo de vicepresidente las opciones fueron mucho más amplias, siendo finalmente elegido para este cargo John Adams al obtener este treinta y cuatro votos.²⁶ Washington fue, pues, designado como primer presidente de los Estados Unidos de América, mientras que John Adams fue elegido como su vicepresidente, siendo este quien administró a aquel el juramento.²⁷ La presencia de Washington, el héroe de

²⁶ John Adams obtuvo 34 votos, John Jay 9, Robert Harrison y John Rutledge 6 cada uno, John Hancock 4, George Clinton 3, Samuel Huntington y John Milton 2 cada uno, mientras que James Armstrong, Edward Telfair y Benjamin Lincoln obtuvieron tan solo un voto cada uno. Tomo estos datos del *Dave Leip's Atlas of US Presidential Elections* (<http://uselectionatlas.org/>, consultado el día 20 de febrero de 2011).

²⁷ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 43-46. La lógica novedad de la situación hizo que John Adams manifestase dudas tanto en lo que respecta a su propio

la guerra de la Independencia, al frente de la nación garantizaba un consenso en torno a su figura hasta el punto que todos los coetáneos reconocían la superioridad moral del vencedor de Yorktown. Y es que el victorioso héroe norteamericano, intelectualmente mucho menos brillante que quienes le rodeaban (no era más que un agrimensor acostumbrado más al trabajo en el campo y a tareas físicas que a intelectuales) supo sin embargo elevarse sobre sus coetáneos. Así, como indica Joseph Ellis en la introducción a su ensayo biográfico sobre el personaje

*It seemed to me that Benjamin Franklin was wiser than Washington; Alexander Hamilton was more brilliant; John Adams was better read; Thomas Jefferson was more intellectually sophisticated; James Madison was more politically astute. Yet, each and all of these prominent figures acknowledged that Washington was their unquestionated superior. Within the gallery of greats so often mythologized and capitalized as Founding Fathers, Washington was recognized as primus inter pares, the Founding Father of them all.*²⁸

Fue precisamente esa superioridad universalmente reconocida, así como ese consenso universal en torno al que fuera el comandante en jefe del ejército continental el que hizo que, durante los primeros años de vida de la nación, el sistema electoral establecido para la elección del presidente funcionase a la perfección sin grietas ni fisuras.

papel como vicepresidente así como el tratamiento que debía darse al nuevo jefe ejecutivo. Adams propuso referirse al presidente como «*His Highness the President of the United States of America and Protector of Their Liberties*», algo que sería aprovechado por los republicanos en la campaña electoral de 1800 para acusarle de «monárquico».

²⁸ Joseph J. ELLIS, *His excellency, George Washington*, Alfred A. Knopf, New York, 2004, p. 14. El escritor Washington Irving y *chief justice*, John Marshall elaboraron sendas aproximaciones biográficas a la figura del que fuera primer presidente de los Estados Unidos.

El primer mandato presidencial de Washington estuvo dominado o centrado casi exclusivamente en asuntos de política interior que fundamentalmente podríamos reducir a dos: institucionalización o desarrollo legislativo de las previsiones constitucionales, por un lado; y el establecimiento de un sistema financiero por otro. Vayamos por partes.

La Constitución de los Estados Unidos no había establecido otros cargos ejecutivos que el del presidente y vicepresidente, por eso el legislador hubo de proceder a cubrir esa laguna constitucional mediante la aprobación de distintos textos legales que articularsen los diferentes Departamentos que pasarían a integrar el nuevo ejecutivo federal.²⁹ El primero de los Departamentos creados fue el de Estado, denominado inicialmente de Asuntos Exteriores, creación que tuvo lugar el 27 de julio de 1789 mediante la *Act for establishing an Executive Department, to be denominated Department of Foreign Affairs*, Departamento al frente del cual estaría el *Secretary of the Department of Foreign Affairs*, bajo cuya dependencia directa existiría un cargo inferior denominado *chief clerk*; la norma delimitaba claramente las competencias del secretario en la sección primera, competencias que se circunscribían a asuntos de política exterior.³⁰ Poco después, el 7 de agosto

²⁹ Sobre este particular véase el interesantísimo trabajo de Jerry L. MASHAW, «Recovering American Administrative Law: Federalist Foundations, 1787-1801», publicado en la *Yale Law Journal*, vol. 115, número 6 (abril 2006), especialmente las pp. 1270-1292. Con posterioridad a las tres primeras Secretarías se crearían los cargos de *Postmaster General* y *Attorney General*, esta última en la *Judiciary Act* de 1789.

³⁰ El texto de la norma puede encontrarse en *The Public Statutes at Large of the United States of America from the Organization of the Government in 1779 to march 3 1845*, vol. I, Boston, Charles C. Little and James Brown, 1845, pp. 28-29. Las competencias que al secretario de Asuntos Exteriores otorgaba la sección primera del texto legal eran «*perform and execute such duties as shall from time to time be enjoined on or intrusted to him by the President of the United States, agreeable to the Constitution, relative to correspondences, commissions or instructions to or with public ministers or consuls, from the United States, or to negotiations with public ministers or consuls, from the United States, or to negotiations with public ministers from foreign states or princes, or to memorials or other applications from foreign public ministers or other foreigners, or to such*

de ese mismo año 1789 se publicaba la *Act for establishing an Executive Department, to be denominated Department of War*, en términos bastante similares a los del Departamento de Asuntos Exteriores.³¹ Sin embargo, a la hora de establecer el Departamento del Tesoro, hecho que tuvo lugar el día 2 de septiembre de 1789 mediante la *An Act to establish a Treasury Department*,³² la articulación jurídica de este órgano varió de manera notable respecto a los dos anteriores: en primer lugar, llama la atención que no se califique al Tesoro de *executive department*, como se había realizado con los Departamentos de Guerra y Asuntos Exteriores; la norma es bastante más extensa que las dos anteriores que crean las Secretarías de Guerra y Asuntos Exteriores; mientras que en estos el secretario únicamente tenía a su cargo un oficial inferior denominado *chief clerk*, en el caso del Tesoro existirían varias autoridades inferiores (*a Comptroller, an Auditor, a Treasurer, a Register and an Assistant to the Secretary of the Treasury*); pero, lo que es más interesante, a diferencia de los otros cargos ejecutivos en el caso del secretario del Tesoro la sección primera de la ley establecía de manera expresa que dicho órgano debería informar, personalmente o por escrito, a las cámaras legislativas de todos aquellos asuntos que le fueran requeridos o que estuviesen relacionados con su Departamento, debiéndose quizá al hecho de que, dada la importancia atribuida a los asuntos financieros en estos primeros años de la república, el Congreso recelase de una excesiva vinculación del secretario al ejecutivo, haciendo por tanto a aquel más responsable ante el legislativo que ante el presidente.³³ El 22 de septiembre de 1789 se aprueba

other matters respecting foreign affairs, as the President of the United States shall assign to the said department; and furthermore, the said principal officer shall conduct the business of the said department in such manner as the President of the United States shall from time to time order or instruct».

³¹ *The Public Statutes at Large*, o. cit., pp. 49-50.

³² *The Public Statutes at Large*, o. cit., pp. 65-67.

³³ Jerry L. MASHAW, *Recovering American Administrative law*, o. cit., p. 1285.

An Act for the temporary establishment of the Post-Office, en virtud de la cual se crea un nuevo cargo ejecutivo, el postmaster general, sujeto expresamente a la autoridad del presidente (*The Postmaster General to be subject to the direction of the President of the United States in performing the duties of his office, and informing contracts for the transportation of the mail*). Mucho más importante fue *An Act to establish the Judicial Court of the United States*, aprobada el 24 de septiembre de 1789, que establecía la composición del Tribunal Supremo (integrado un *chief justice* y cinco *associate justices*) y fijaba sus dos periodos de sesiones (que comenzarían respectivamente el primer lunes de febrero y el primer lunes de agosto); crea los trece distritos judiciales de los Estados Unidos y los juzgados existentes en cada uno de ellos, mientras que la trigésimo quinta y última sección de la norma crea un nuevo cargo, el *attorney general*.³⁴ Cabe añadir, en cuanto a la configuración jurídica de los Departamentos, que tanto el *attorney general* como el *postmaster general*, eran en esos años iniciales, cargos de naturaleza híbrida, pues se esperaba que compatibilizasen el desempeño del cargo público con el ejercicio privado; no en vano Edmund Randolph se dirigió por escrito a uno de sus amigos en 1790 lamentándose no solo de la escasa compensación económica que percibía por sus funciones, sino porque su cargo era de naturaleza híbrida, entre estatal y federal.³⁵

El primer gabinete de Washington, pese a ser el más reducido, fue, en palabras de James Roger Sharp, *the most brilliant*

³⁴ «*There shall also be appointed a meet person, learned in the law, to act as attorney-general for the United States, who shall be sworn or affirmed to a faithful execution of his office; whose duty it shall be to prosecute and conduct all suits in the Supreme Court in which the United States shall be concerned, and to give his advice and opinion upon questions of law when required by the President of the United States, or when requested by the heads of any of the departments, touching any matters that may concern their departments*», *The Public Statutes at Large*, o. cit., pp. 73-96.

³⁵ Sobre este carácter híbrido del *attorney general* y del *postmaster general*, así como de la amarga queja de Edmund Randolph, véase Jerry L. MASHAW, *Recovering American Administrative Law*, o. cit., pp. 1289-1292.

*and talented in american history.*³⁶ Así, el 11 de septiembre de 1789, Alexander Hamilton³⁷ fue nombrado secretario del Tesoro; el 12 de septiembre de ese mismo año, Henry Knox recibió el nombramiento de secretario de Guerra; y el día 26 de septiembre de 1789 Washington realizó los tres nombramientos restantes: el de Samuel Osgood como *postmaster general*, el de Edmund Randolph como *attorney general* y el de Thomas Jefferson como secretario de Asuntos Exteriores, si bien para este último cargo se había barajado inicialmente el nombre de otro ilustre político neoyorquino, John Jay, finalmente designado como primer *chief justice* del recién creado Tribunal Supremo de los Estados Unidos.³⁸ John Adams, pese a ser el vicepresidente de los Estados Unidos, no formaba parte del gabinete, sino que se limitaba a presidir el Senado. Este gabinete, donde se integraban personalidades brillantísimas pero con visiones opuestas sobre el federalismo y la política exterior, supuso un intento de aglutinar todas las ideas superando el espíritu de facción. Sin embargo, la brecha ideológica que separaba el pensamiento de Hamilton y Jefferson iba a ensancharse a consecuencia de la política económica impulsada desde la Secretaría del Tesoro y, sobre todo, a consecuencia de la política exterior norteamericana derivada de los acontecimientos revolucionarios en Francia, si bien, como ya hemos indicado, el primer mandato de Washington se caracterizó fundamentalmente por dedicar gran parte de sus esfuerzos a solucionar problemas internos del país.

Fue el primero de los aspectos anteriormente indicados, la política económica a seguir y, sobre todo, la forma en que la

³⁶ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 8.

³⁷ Sobre la figura del primer secretario del Tesoro, véase Ron CHERNOW, *Alexander Hamilton*, The Penguin Press, New York, 2004.

³⁸ Puesto del que dimitiría seis años más tarde para optar al cargo de gobernador del estado de Nueva York, lo que da una idea de la escasa importancia que el Tribunal Supremo tenía en esos momentos. Véase Bernard SCHWARTZ, *History of the Supreme Court*, Oxford University Press, 1993, pp. 27-28.

misma fue desarrollada por Hamilton, lo que reveló ya una seria quiebra de esa unidad inicial que despuntaba las tendencias que posteriormente culminarían en los partidos republicano y federalista. El día 8 de abril de 1789 James Madison toma la iniciativa merced a una proposición de ley cuyo objeto era gravar las importaciones y el tonelaje en barcos extranjeros que arribasen a puertos norteamericanos, propuesta que Madison esperaba contase con el apoyo expreso del flamante secretario del Tesoro; sin embargo no ocurrió así, pues Hamilton se mostraba partidario no de disminuir, sino de incrementar el comercio con la antigua metrópoli al pensar que ello redundaría en beneficio del Tesoro, aunque quizá en esta decisión influyese no tanto su admiración por la nación y el sistema político inglés, sino el hecho de que el propio Hamilton se encargara de la defensa en los tribunales de los intereses de quienes en la lucha por la independencia apoyaron a Inglaterra. La política fiscal que deseaba Hamilton (entre la que se encontraba la asunción de las deudas de los estados por la federación-creación de un banco nacional) perseguía vincular los intereses de la poderosa oligarquía financiera a la federación, y no a los estados³⁹ y encontró la pronta oposición de James Madison, quien procedente de la sureña Virginia, era más sensible a los intereses de los pequeños propietarios frente a la diminuta pero influyente élite financiera. Este primer foco de división, por motivos aparentemente económicos pero en los que ya se puede otear el germen de una más profunda división política, se saldó, en lo referente a la asunción de deudas por la federación, con la victoria de Hamilton, quien para sacar adelante su plan solicitó y obtuvo la ayuda de Thomas Jefferson. El acuerdo entre ambos dirigentes se formalizó la noche del día 20 de junio de 1790 en una cena ofrecida por Thomas Jefferson en el número 57 de la calle

³⁹ Bernard A. WEISBERGER, *América Afire*, o. cit., p. 56.

Maiden Lane en Nueva York, y a la que asistieron Hamilton y Madison:⁴⁰ Virginia aceptaría la asunción de las deudas de los estados por la federación a cambio de que la futura capital de los Estados Unidos se ubicase en territorio sureño, plasmándose legislativamente esto último en la *Act for establishing the temporary and permanent seat of the Government of the United States* aprobada casi un mes más tarde del encuentro, el 16 de Julio de 1790, y que fijaba la futura ubicación de la capitalidad y sede de las instituciones de la república, a donde deberían trasladarse como mucho el día 1 de diciembre de 1800, si bien con carácter transitorio y hasta que no se hubiera producido dicho traslado la sede de los órganos constitucionales radicaría en la ciudad de Philadelphia.⁴¹ No obstante, en lo referente a la creación del Banco nacional, el mismo fue un *casus belli*, y aunque la propuesta salió adelante mediante la aprobación el día 25 de febrero de 1791 de la *Act to incorporate the subscribers to the bank of the United States*,⁴² ya se vislumbró un nuevo foco de división en el seno de los Estados Unidos: el del norte capitalista e industrial, que mayoritariamente apoyó la creación de dicho banco, y la del sur agrario, que mayoritariamente lo rechazó. Esta política de Hamilton enajenó a los federalistas todo apoyo en los estados del sur, mientras que Jefferson y Madison vieron en los planes de Hamilton un intento de concentrar los poderes económicos en una élite socialmente minoritaria e ideológicamente cercana a los intereses británicos.⁴³

⁴⁰ Sobre este crucial episodio, puede consultarse Charles A. CERAMI, *Dinner at Mr. Jefferson's: Three men, five great wines and the evening that changed America*, John Wiley & Sons, 2008.

⁴¹ *The Public Statutes at Large*, o. cit., p. 130.

⁴² *The Public Statutes at Large*, o. cit., pp. 191-196.

⁴³ «Each component of the plan was controversial. In short, Hamilton's plan was an intensely political document, with winners and losers – and thus staunch supporters and fierce opponents. For in defining the debt, in determining how to fund it, and in deciding whom to pay and how much, Hamilton favored certain economic groups and geographic areas over others

Esa división inicial entre dos facciones contrapuestas,⁴⁴ lideradas por Hamilton y Jefferson (división en la que influyó y no en poca medida la antipatía personal entre ambos dirigentes), se cerró temporalmente a finales de 1792, cuando ambos líderes aparcaron momentáneamente sus discrepancias para instar a George Washington a que optase a un segundo mandato presidencial, dado que era el consenso en torno a su figura el que estaba logrando, de alguna manera, evitar la franca ruptura entre ambos grupos que ya se oteaba claramente a corto plazo.⁴⁵

2.1.2. EL SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL DE GEORGE WASHINGTON (1792-1796): DIVISIÓN CAUSADA POR DIFERENCIAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR

*Thus, although antagonisms over domestic policy profoundly shaped and influenced the course of politics throughout the decade of the 1790s, it was the French Revolution and what ensued in its wake that infused the ongoing political disputes with a polarizing ideology and passion that threatened the future of the country.*⁴⁶

Washington aceptó optar a un segundo mandato presidencial y el respeto que su figura despertaba se puso nuevamente de manifiesto en el resultado del Electoral College. Todos

[...] bitter sectional fears, especially in the South, also were ignited by the scheme [...] this sectional and state suspicion and fear of federal power were deeply entrenched». James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 13.

⁴⁴ Según John Ferling, la idea de Jefferson no era crear un partido político, sino la articulación de una mayoría contraria a Hamilton en el Congreso para las elecciones de 1792; *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 53. De hecho, el viaje que, tras la aprobación de la ley que creaba el Banco Nacional, Jefferson y Madison realizaron por Nueva York con el pretexto de ampliar conocimientos botánicos, fue visto por muchos como una *tournee* política.

⁴⁵ «The two-party system barely foreshadowed in 1791 was developing clear outlines in 1792. The dream of permanent consensus on the common good was dying fast», Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 74.

⁴⁶ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, p. 15.

los ciento treinta y dos compromisarios dieron su primer voto unánime a George Washington, mientras que el segundo voto se dispersó entre otras cuatro personas, de las cuales, la más votada fue John Adams, quien repetía así como vicepresidente.⁴⁷ Washington optó por mantener intacto su gabinete, por lo que Hamilton y Adams continuaron en sus puestos.

Al poco de inaugurarse el segundo mandato presidencial de Washington, surge un gravísimo foco de división ocasionado por los acontecimientos revolucionarios franceses, y es que si el primer mandato de Washington se centró en cuestiones domésticas, los años comprendidos entre 1793 y 1797 van a estar dominados por los acontecimientos foráneos, en concreto los procedentes de la Francia revolucionaria, hecho este que va a enfrentar ya abiertamente las facciones subyacentes en el gabinete,⁴⁸ y que se agravó por alinearse cada una de las tendencias en liza con uno de los países europeos en conflicto.⁴⁹ La Francia monárquica había apoyado de manera entusiasta a los colonos americanos durante la guerra de la Independencia, y en su apoyo arrastró a su vecina corona española; Thomas Jefferson, primer embajador estadounidense en Francia, había contemplado de manera entusiasta los primeros brotes del proceso revolucionario, si bien el virginiano lo que pudo observar personalmente

⁴⁷ John Adams obtuvo 77 votos, George Clinton 55, Thomas Jefferson 4 y Aaron Burr 1. Tomo los datos, al igual que en lo referente a las votaciones de 1789, del *Dave Leip's Atlas of U. S. Presidential Election* (<http://uselectionatlas.org/>, consultado el día 20 de febrero de 2011).

⁴⁸ «*The differing views of Federalist and Republicans in America regarding the bloody course of events in France made any attempt at nonpartisan governance by the Washington administration virtually futile*». Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 27-28. Y es que, si bien la primera fase de la revolución fue vista con simpatía incluso por los propios gobernantes norteamericanos, la deriva revolucionaria hacia posiciones más radicales y la degeneración jacobina en el «terror» hizo que ese entusiasmo y apoyo inicial diese paso al recelo y a la abierta oposición.

⁴⁹ «*The country was splitting into a violently partisan camps and what was worse, each of the parties had allied itself with a foreign power*». Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 138.

fueron las revueltas de la nobleza togada y de la burguesía, pero su designación como primer secretario de Estado y su partida a su país natal le impidió contemplar la degeneración de la revolución en el «terror». Cuando en marzo de 1793 llega a los Estados Unidos la noticia de la ejecución de Luis XVI, y la declaración de guerra de Francia con otras potencias continentales, surge una peliaguda cuestión a la que había de darse una respuesta: la postura a tomar por los Estados Unidos ante la Revolución francesa y, sobre todo, en la contienda bélica entre Francia, por un lado, e Inglaterra, España, Austria y Holanda, por otro. La posición de los Estados Unidos era realmente delicada: territorialmente se encontraba rodeada por los miembros de la coalición antifrancesa (el Canadá británico, la Luisiana y Florida españolas) y políticamente vinculada a Francia por el tratado de 1778. En esta tesitura, Alexander Hamilton se inclinaba lógicamente por apoyar a la conservadora Inglaterra, mientras que Thomas Jefferson era partidario de aliarse con la revolucionaria Francia; no es extraño que Jefferson y Hamilton, dadas sus simpatías, filtrasen deliberadamente cuestiones de gabinete a los embajadores francés y británico respectivamente, llegando incluso a ser vox pópuli que Hamilton era el agente británico, a quien incluso se le había identificado con el número siete.⁵⁰ El debate ideológico ya había saltado quizá involuntariamente a lo personal cuando un par de años antes, en respuesta a unas reflexiones de Adams sobre el particular, Jefferson se refería, en un prólogo a la edición que de la obra *Rights of Man* de Payne se publicó en 1791, a «*something ... was to be publicly said against the political heresies which had of late sprung up among us*»; Jefferson se disculpó por escrito ante Adams invocando su antigua amistad y manifestando que

⁵⁰ Peter Charles HOFFER, *The treason trials of Aaron Burr*, University Press of Kansas, 2008, p. 39.

en modo alguno pretendía referirse a él, y optó por volcar sus críticas en Hamilton aunque, dado que ambos eran miembros del mismo gabinete, utilizó como ariete en el ataque a James Madison⁵¹ y un nuevo periódico que había creado a finales de octubre de 1791, la *National Gazette*, en contraposición a la *Gazette of the United States* partidaria de las tesis federalistas. Es precisamente en este momento, en julio de 1793, cuando Jefferson comunica al presidente su intención de abandonar el cargo de secretario de Estado, manifestando públicamente su intención de retirarse a su residencia de Monticello y de dar por finiquitada su labor política. Por su parte, Hamilton, quien se vio afectado por un turbio asunto particular, dimitió igualmente como secretario del Tesoro en 1794, regresando al ejercicio de la abogacía sin que ello supusiese, al igual que en el caso de Jefferson, apartarse de la lucha política. De hecho, ambos aspiraban a ocupar algún día el puesto que en este momento ocupaba de manera indiscutida el general Washington.⁵²

Pese a la neutralidad política decretada por el gabinete Washington, el influjo revolucionario francés se introdujo en territorio norteamericano a través de las denominadas «sociedades democráticas», surgidas a imitación de los clubs jacobinos franceses. La vida de estas sociedades fue muy corta, dado que su existencia apenas sobrepasó los tres años y al final del segundo mandato presidencial de Washington ya se habían extinguido. No obstante, la importancia en el devenir de la política norteamericana fue inmensa, dado que revitalizaron el papel de los ciudadanos en la vida pública y plantearon intere-

⁵¹ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 68-70. La obra de Adams, *Discourses on Davila*, puede encontrarse en John ADAMS, *The works*, vol. VI, Boston, Charles C. Little & James Brown, 1851, pp. 221-405.

⁵² «Jefferson would not have been Jefferson had he not dreamed of someday occupying the presidency. Hamilton, who wished no less himself, and who possessed extraordinary skills in fathoming others, saw Jefferson with crystal clarity». John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 56.

santes cuestiones acerca de la soberanía y el control del poder, arramblando definitivamente la visión elitista de la sociedad que había caracterizado la filosofía política de los *founding fathers*.⁵³ Con todo, la política exterior estadounidense continuaba siendo realmente un terreno espinoso, dado que se llegó a una situación cuasibélica con Inglaterra derivada de la actitud de esta, que procedió a la captura de numerosos buques estadounidenses a la vez que fomentaba, desde sus posesiones en el Canadá, la rebelión de las tribus indias frente a la república norteamericana. En esta tesitura, el presidente Washington optó por enviar al todavía *chief justice* John Jay, a negociar un tratado con la antigua metrópoli.⁵⁴ Jay fue muy bien recibido y cortésmente tratado por el gobierno inglés, pero ello en modo alguno supuso que las negociaciones fuesen sencillas y, de hecho, el tratado que finalmente se elaboró (conocido popularmente como *Jay Treaty*), se redactó en términos claramente favorables a los británicos, si bien en este punto Gore Vidal en su breve ensayo sobre estos primeros años de la república estadounidense, aunque muy crítico con tal documento, exculpa del resultado al enviado norteamericano al sostener que fue Alexander Hamilton, a quien Vidal expresamente se refiere como el agente británico número siete, quien dinamitó literalmente sus bases de negociación filtrándolas al gobierno británico,⁵⁵ lo que de ser cierto constituiría claramente una traición

⁵³ «*This elitist view, however, was challenged as early as 1793 when extraconstitutional Democratic Republican societies began springing up, arguing that the public should play an active oversight role in governmental decision making in a republic [...] Despite their brief existence, the Democratic Republican societies raised critical questions about the nature of sovereignty and representation in the new republic.*» James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 17-18.

⁵⁴ «*It took a political bravery or innocence for Jay to accept the mission*», Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 150.

⁵⁵ «Lo que el tratado decía por sí mismo era que Inglaterra se había apuntado una notable victoria diplomática, gracias en gran parte al agente británico número siete [Hamilton] que había socavado minuciosamente las bases negociadoras de Jay al transmitir

por parte de Hamilton hacia su país y su gobierno. El tratado se remitió a los Estados Unidos en marzo de 1795,⁵⁶ permaneciendo sus términos en secreto hasta que el mismo fuese ratificado por el Senado. Washington, claramente decepcionado por las duras condiciones impuestas por Gran Bretaña, convocó, no obstante, una sesión especial del Senado en junio de dicho año 1795, sesión que dio lugar a agrios y tormentosos debates, no obstante lo cual el tratado terminó siendo ratificado, pues los federalistas tenían en dicha Cámara la mayoría de dos tercios necesaria para dar el placet a dicho acuerdo internacional. Washington sancionó el tratado.⁵⁷

George Washington había contribuido eficazmente a contener hasta entonces dentro de ciertos límites la discrepancia entre las tendencias encabezadas por Hamilton y Jefferson. No

a Londres un adelanto de las posiciones americanas. Es de suponer que el muchas veces confesado temor de Hamilton a una guerra con Inglaterra le indujese a traicionar, por así decirlo, la causa. En julio de 1794 Hamilton se había entrevistado con el jefe de espías, George Hammond, el ministro británico en Filadelfia, y le dijo muchas cosas que el Ministerio de Exteriores inglés necesitaba saber. Por ejemplo, la amenaza de que Estados Unidos, si se veía frustrado por el gobierno de Su Majestad, establecería una alianza militar con los estados bálticos que nunca estuvo prevista. En otra entrevista para los últimos toques, Hamilton aseguró a Hammond (que a su vez comunicó luego a Lord Grenville) que bajo ninguna circunstancia la Administración Washington se aliaría con otras potencias europeas». Gore VIDAL, *la invención de una nación*, o. cit., p. 110.

⁵⁶ Bernard A. Weisberger sostiene que Jay, sirviéndose del paréntesis temporal en que los términos del tratado permanecieron secretos, aprovechó para concurrir a las elecciones a gobernador del estado de Nueva York y renunciar a su cargo de *chief justice* antes de que se le sometiera a *impeachment* (*America Afire*, o. cit., p. 152). Lo cierto es que, sin descartar tal aspecto, en su renuncia pesaron mucho más otros factores, como el escaso papel que en esos años iniciales tenía el Tribunal Supremo así como la penosa obligación impuesta a los magistrados de recorrer un determinado territorio para actuar como jueces en los tribunales de circuito.

⁵⁷ Sobre los avatares del tratado Jay, pueden consultarse Jerald COMBS, *The Jay Treaty: Political Background of Founding Fathers*, 1970; y Todd ESTES, *Shaping the Politics of Public Opinion: Federalists and the Jay Treaty Debate. Journal of the Early Republic* (2000) 20 (3): pp. 393-422. La documentación sobre el tratado (que incluye su texto, las cartas y notas de los protagonistas, la ratificación del Senado y los mensajes de Washington sobre el particular) puede consultarse en http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/jaymenu.asp (consultado el 6 de mayo de 2011).

obstante, el rechazo del presidente a optar a un tercer mandato (decisión cuya publicidad retrasó, a instancias de Hamilton, hasta el mes de septiembre de 1796 para favorecer la elección de un candidato federalista) trajo como consecuencia que ambas facciones se radicalizasen hasta el punto de convertirse ya en grupos que, sin poder aún ser calificados como partidos políticos en el sentido moderno del término,⁵⁸ contenían en sí el germen de dichos entes. Y es que sin un líder que despertase una simpatía, admiración y consenso universal como el general Washington, era más que previsible que federalistas y antifederalistas se enzarzasen ya abiertamente en una lucha cuyo objetivo máximo fuese el alzarse con el poder. Las elecciones presidenciales celebradas en 1796 hicieron patente esa circunstancia, constituyendo una auténtica línea divisoria que marca un antes y un después en los comicios presidenciales norteamericanos.⁵⁹ Sin embargo, paradójicamente cada uno de los bandos en disputa continuaba abominando del sistema de partidos y se identificaba a sí mismo como el auténtico intérprete de la voluntad popular, acusando a la facción rival de romper el espíritu unitario.⁶⁰ Tan evidente era ya la quiebra de la unidad que el discurso de despedida de Washington, redactado por Alexander Hamilton, era un alegato para superar tales diferencias y recuperar la armonía sistémica

⁵⁸ «*The two emerging partisan factions had not yet evolved into institutionalized parties, and they did not yet have mechanism for formally nominating presidential candidates. They did, however, have clear leading contenders for that office*», Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 30. En idéntico sentido, James Roger Sharp indica que federalistas y republicanos «*can only be seen as protoparties*», *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 3.

⁵⁹ «*In the story of presidential campaigns, the departure of Washington was a dividing line between the overture and the curtain raiser [...] The year 1796 would see the first genuinely contested election for the chief executive*», Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 160.

⁶⁰ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 21. Por cierto que, como indica dicho autor, a la hora de escoger las denominaciones que los identificaban, los republicanos de Jefferson ambicionaban presentarse a sí mismos como los verdaderos representantes del republicanismo y el gobierno representativo, mientras que los federalistas de Hamilton, al adoptar el nombre de quienes apoyaron la Constitución federal, implícitamente acusaban a sus oponentes de desleales al sistema.

que estaba en la mente de quienes elaboraron el texto constitucional. Washington advertía a su auditorio: «*Let me... warn you in the most solemn manner against the baneful effects of the spirit of party generally*».⁶¹

Pese a tales admoniciones, la división no solo política, sino incluso territorial (la célebre dicotomía norte-sur) se puso igualmente de relieve en las propias elecciones presidenciales. Jefferson, que desde su renuncia al cargo de secretario de Estado en 1793 había manifestado de forma tajante que jamás regresaría a la vida pública, mutó súbitamente de opinión en cuanto tuvo conocimiento de que Washington no optaría a un tercer mandato y confesó a su colega James Madison que, después de todo, estaría dispuesto a luchar por la presidencia. Mientras tanto, el aún vicepresidente John Adams pudo comprobar cómo durante ese año 1796 el presidente Washington había departido frecuentemente con él en una especie de «tutelaje».⁶² Así, cuando en septiembre de 1796 Washington hizo pública su decisión de retirarse de la vida pública, comenzó realmente la batalla por la presidencia. Con dieciséis estados y ciento treinta y seis compromisarios en disputa, era necesaria la obtención al menos de sesenta y ocho votos compromisarios para lograr la presidencia. Ninguno de los candidatos hizo campaña, pero desde la facción republicana Aaron Burr, aspirante a ser el vicepresidente de Jefferson, hizo una intensa movilización para lograr sufragios a favor del virginiano, mientras que el federalista Alexander Hamilton maniobró entre bastidores para lograr que el nuevo presidente fuese Thomas Pinckney en lugar de John Adams, al estar convencido que aquel sería más influenciable que este a los manejos del antiguo secretario del Tesoro.

⁶¹ Sin embargo, y pese a esa llamada a la unidad y la crítica al sistema de partidos, el espíritu de partido no estaba del todo ajeno en el discurso presidencial. BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 23.

⁶² JOHN FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 84.

Conviene detenerse un poco en la figura de Thomas Jefferson y en su decisión de presentarse como candidato a la presidencia. Recordemos que Jefferson había desempeñado el cargo de secretario de Estado, siendo el primer titular de dicho Departamento, puesto al que había renunciado en 1793, manifestando desde entonces su intención de retirarse definitivamente de la vida pública. En carta dirigida a James Madison y fechada el 28 de diciembre de 1794, Jefferson manifestaba en el párrafo final de la misiva para justificar su teórico silencio, lo siguiente: «*I ought perhaps to say, while I would not give up my own retirement for the empire of the universe, how I can justify wishing one whose happiness I have so much at heart as yours, to take the front of the battle which is fighting for my security*», reiterando en otra misiva fechada el 25 de abril de 1795 y dirigida igualmente a Madison, que su decisión de apartarse de la vida pública era definitiva, y que su retiro de la vida pública «*has been meant from all office, high or low, without exception*». ⁶³ Sin embargo, en poco menos de un año el virginiano muta súbitamente su criterio y decide permitir que sus correligionarios utilicen su nombre para optar nada menos que al máximo cargo federal. ¿A qué se debe esta conversión tan súbita? El estudio más reciente de los comicios presidenciales de 1800 ofrece como posible explicación el hecho de que la vida en el retiro de Monticello no habría culminado las expectativas que había puesto en la vida de ciudadano privado. ⁶⁴ Quizá otra explicación posible fuese más bien que su aparente alejamiento de la vida pública fuese más una retirada estratégica que definiti-

⁶³ Thomas JEFFERSON, *The works*, vol. VIII, Putnams Sons, 1904, pp. 159 y 169.

⁶⁴ «*One possible explanation for Jefferson's becoming at least passively receptive rather than overtly hostile to returning to public life was that his retirement to Monticello in 1793 had failed to live up to his idealized expectations*», James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 28.

va. Consciente de que no podía competir con Washington para la presidencia, lo mejor era vender al público y a sus correligionarios la imagen de un líder que abandonaba la política para reintegrarse a la vida civil como un ciudadano más. Pero una vez se confirmó que Washington no optaría a un tercer mandato, Jefferson pudo ver claro que tenía muchas opciones de acceder a la presidencia, aunque mejor hacerlo elevado por sus amigos y aliados políticos para vender nuevamente su imagen como la de una persona retirada a quien terceras personas exigían el sacrificio de salir del retiro para servir a la nación. Y es que la brillantez intelectual de Jefferson no impide que a lo largo de su vida pública hiciese continuamente galas de una hipocresía en la que pocos de sus coetáneos lograron superarle.

2.2. *La consagración del bipartidismo en la presidencia de John Adams*

2.2.1. LA PRIMERA GRIETA EN EL SISTEMA DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL: LAS ELECCIONES DE 1796

Si algo pusieron de manifiesto estos comicios fue precisamente mostrar de forma clara las primeras grietas del sistema de elección presidencial plasmado en la Constitución tal y como la habían concebido los *founding fathers*, y ello por su absoluta incompatibilidad con la realidad política y social emergente, que en menos de una década había evolucionado claramente hacia un bipartidismo similar al existente en la antigua metrópoli. En efecto, el sistema constitucional funcionaría en tanto en cuanto los presupuestos o premisas en las que se habían apoyado los redactores de la Constitución se mantuviesen, pero una vez superadas tales bases el sistema sería no solo incapaz de ofrecer soluciones, sino que para-

dójicamente sería el propio texto el origen mismo del conflicto.⁶⁵ Téngase en cuenta que cada compromisario emitiría dos votos, pero no se votaba separadamente para los cargos de presidente y vicepresidente, sino únicamente para la presidencia. En tanto en cuanto no hubiese división partidista y existiese una figura que despertase unas simpatías unánimes (caso de George Washington) no habría problema, pero cuando se careciese de tal figura y en el proceso se entremezclasen partidos o entes embrionarios protopartidistas, salvo que los compromisarios manipulasen el voto electoral,⁶⁶ podría darse una doble situación: que o bien presidente y vicepresidente perteneciesen a distintas tendencias; o bien que, en el caso de que los entes políticos presentasen una lista de dos personas para los cargos de presidente y vicepresidente, se produjese un empate a voto entre ambos que diese la palabra final a la Cámara de Representantes. La primera de las situaciones (presidente y vicepresidente ideológicamente opuestos) se daría en 1796; la segunda (empate a voto compromisario entre los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia), se daría en 1800.

Conviene detenernos a analizar brevemente los resultados de las elecciones presidenciales de 1796 para tenerlos muy en

⁶⁵ «*The electoral college system was a calamity waiting to happen. It already had provoked machinations in the contest to choose a vicepresident in 1788, and in 1796 it threatened for the first time to intrude on the selection of the chief executive*»; John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 87. Véase también James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 2-3. Esa quiebra entre la sociedad y el sistema político ideal de unidad visionado por los padres fundadores y la deriva bipartidista y el desfase o inadecuación del sistema constitucional de elecciones presidenciales para esa realidad existente en 1800 es la tesis central del imprescindible libro *The failure of the founding fathers*, de Bruce Ackerman.

⁶⁶ «...*this new problem compelled a party to carefully manipulate the electoral machinery to ensure that its vice presidential candidate did not defeat its presidential candidate. Certain electors had to be directed not to cast their votes for their party's vice presidential candidate so as to avoid a tie. That practice, however, created the risk that the opposing party's presidential candidate would be elected vice president*», Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1800*, o. cit., p. 96.

cuenta a la hora de ver cómo evolucionó la situación política de los Estados Unidos en tan solo cuatro años. Los dieciséis estados que por entonces integraban la Unión debían elegir ciento treinta y ocho compromisarios (seis más que los que había tan solo cuatro años antes) que emitirían un total de doscientos setenta y seis votos, por lo que para alcanzar la presidencia era necesaria la obtención cuanto menos de setenta votos. Si en 1789 y 1792 todos los compromisarios habían elegido a Washington de forma unánime, tal consenso desapareció en 1796, dando paso a una enorme fragmentación del voto compromisario que se repartió fundamentalmente entre ocho líderes. De ellos, John Adams fue el más votado con un total de setenta y un votos compromisarios, seguido muy de cerca y con un ajustadísimo margen de tan solo tres votos de diferencia por Thomas Jefferson.⁶⁷ Si se analiza el voto compromisario en función de su procedencia geográfica, se puede comprobar que los estados del sur constituyen un sólido baluarte republicano, mientras que los estados de Nueva Inglaterra –con la excepción de Pennsylvania– forman el principal caladero de votos federalistas.⁶⁸ Adams, que en su

⁶⁷ De los 138 votos compromisarios (es decir, de una mayoría necesaria de 70 votos para el acceso a la presidencia), John Adams obtiene 71, Thomas Jefferson 68, Thomas Pinckney 59, Aaron Burr 30, Samuel Adams 15, Oliver Ellsworth 11, George Clinton 7, John Jay 5, James Iredell 3; curiosamente, George Washington sin presentarse y, aun habiendo renunciado a optar a un tercer mandato, obtuvo el voto de dos compromisarios, uno de Carolina del Norte y otro de Virginia (tomo los datos del *Dave Leip's Atlas of U. S. Presidential Elections* –<http://uselectionatlas.org/>–, consultado el 27 de febrero de 2011). Edward J. Larson se refiere a estas elecciones como «*the last old-style presidential election*». Sin embargo, John Ferling pone de relieve la aún escasa disciplina de partido, dado que 48 votos compromisarios fueron a parar a candidatos que no habían sido proclamados por su partido; *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 91.

⁶⁸ Aunque en determinados estados el voto se dividió incluso ideológicamente. Por ejemplo, en Carolina del Sur, de los 16 votos compromisarios, la mitad fueron para Jefferson (republicano) y la otra mitad para Pinckney (federalista); en Carolina del Norte, 11 votos fueron a parar a Jefferson, dividiéndose el resto entre Burr (6 votos), Adams y Pinckney (cada uno un voto) y otros varios más. Paradójico fue el caso de Maryland, con 7 votos para Adams; Jefferson y Pinckney con 4 cada uno; 3 para Burr y 2 repartidos entre otros varios. En Pennsylvania, Jefferson obtuvo 14 votos, Burr 13, Adams 1 y Pinckney 2.

condición de vicepresidente desempeñaba constitucionalmente la presidencia del Senado, fue quien supervisó la apertura de votos y ulteriormente hizo pública su propia elección como presidente.⁶⁹ Jefferson hizo de tripas corazón y optó por manifestar públicamente que no esperaba una victoria y, más aún, que incluso en el hipotético supuesto de que hubiese existido un empate a voto renunciaría a favor de Adams,⁷⁰ un comportamiento este que, amén de responder a consideraciones hipócritas o de mera conveniencia táctica,⁷¹ chocaba abiertamente con el texto constitucional,⁷² demostrando que Jefferson no tenía escrúpulo

⁶⁹ Esta es otra de las previsiones del texto constitucional que puede originar potenciales conflictos que los fundadores no llegaron a prever. El artículo 1 sección 3 de la Constitución encomienda la presidencia del Senado al vicepresidente de los Estados Unidos, siendo por tanto la autoridad que está presente en el recuento de voto compromisario la que, recordemos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 sección 1 ha de verificarse en dicha Cámara legislativa. Los padres fundadores no llegaron quizá a concebir que el vicepresidente pudiera ser un candidato a la presidencia y, por tanto, hubiera de supervisar los votos compromisarios de una elección en la cual el presidente del Senado tiene la condición de parte interesada. Como tampoco los *founding fathers* llegaron a concebir la existencia de conflictos en cuanto al voto compromisario, no especificaron las facultades que ostenta el vicepresidente como presidente del Senado en caso de recuento de voto compromisario, ni tampoco qué autoridad era la que ostentaba la última palabra en dichos supuestos. Esto, como veremos en el próximo capítulo, se debatió intensamente con motivo de los comicios presidenciales de 1876, donde todos estos potenciales conflictos latentes en la norma fundamental estallaron súbitamente en un momento político, social y económicamente bastante inestable.

⁷⁰ En carta fechada el 17 de diciembre de 1796 y dirigida a James Madison, Thomas Jefferson indicaba para el caso de producirse un más que probable empate «...I pray you and authorize you fully, to solicit on my behalf, that Mr. Adams may be preferred», en Thomas JEFFERSON, *The Works*, vol. VIII, G. P Putnam's Son, p. 255.

⁷¹ «A possible cynical explanation might be Jefferson's awareness that it was not a good time, in his phrase, to take the helm. Sectional ties were stretched to the screaming point, and war with France was in horizon», Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 167.

⁷² Como bien señala Jennifer Van Bergen, «The United States Constitution clearly provided for the election of candidates by representatives of the people, not by the personal preferences of candidates», añadiendo irónicamente la dualidad moral de los republicanos, para quienes «Jefferson being elected vice president in 1796 against the wishes of the Federalist was not the same to the Jeffersonians as Burr being elected president in 1800 against Jeffersonian wishes» (Aaron Burr and the electoral tie of 1801, o. cit., pp. 93-94). La misma autora indica posteriormente que si en el supuesto de empate, Jefferson hubiera renunciado públicamente «a public relations coup would have ensued», dado que en estos supuestos la Constitución

alguno en acomodar las interpretaciones constitucionales a sus propios intereses personales o partidistas; no era la primera vez ni, como veremos, sería la última.⁷³

Por último, señalar que, a nivel menor, se dieron dos circunstancias en estos comicios que tendrían su importancia en la siguiente contienda presidencial. La primera afecta a los republicanos, pues estos habían acudido a las elecciones presidenciales por vez primera con un *electoral ticket* integrado por Thomas Jefferson como candidato a la presidencia y Aaron Burr para la vicepresidencia, siendo precisamente Burr quien se lanzó a una frenética campaña en los estados de Nueva Inglaterra a favor de la *causa* republicana; sin embargo, los compromisarios de Virginia rompieron el acuerdo con el político neoyorkino y únicamente le otorgaron uno de los veintiún votos compromisarios, en un acto que este consideró abiertamente una deslealtad política, cuando no un deliberado acto de traición. Los federalistas, por el contrario, no habían acudido en un *electoral ticket*, sino que presentaron a John Adams y a Thomas Pinckney, pero, a diferencia de los republicanos, sin precisar (dado que no era constitucionalmente exigible) el cargo al que optaba cada uno de ellos, sin perjuicio de que, como hemos señalado, Hamilton maniobró infructuosamente para

indicaba claramente que era la Cámara de Representantes, y no la voluntad de ninguno de los candidatos, quien tendría la palabra. «*The Founders had not planned for the people's voice to be heard in the selection of the president*», John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 171. Este aserto es tan claro que en fecha tan reciente como en el año 2000, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos indicó en la sentencia *Bush v. Gore* que «*The individual citizen has no federal constitutional right to vote for electors for the President of the United States unless and until the state legislature chooses a statewide election as the means to implement its power to appoint members of the Electoral College*».

⁷³ Como muy bien señala Van Bergen, «*In 1802, Jefferson again loosened his scruples when it served his agenda to interpret the Constitution broadly rather than strictly*», *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 93. El lector interesado tiene la opción de profundizar en este «lado oscuro» de Jefferson en el magnífico estudio de Leonard LEVY, *Jefferson and civil liberties: the darker side*.

que el vencedor de los comicios presidenciales fuese Pinckney y no Adams, no solo por la difícil relación personal existente entre ambos líderes federalistas, sino quizá por el hecho de que con Adams la influencia de Hamilton en la política del gabinete federalista fuese menor. Pero con todo, y con ser evidentemente importante el hecho anterior, existe otra circunstancia que demuestra hasta qué punto el texto constitucional podía conducir a resultados no deseados en un sistema partidista: en estricta aplicación de las previsiones constitucionales el presidente y el vicepresidente pertenecían a distintas tendencias políticas.

2.2.2. LA QUIEBRA DE LA UNIDAD Y LA CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DEL BIPARTIDISMO

Una vez hubo tomado posesión del cargo de presidente John Adams, por deferencia hacia Washington, heredó a los miembros de su gabinete, tres de los cuales (Timothy Pickering, Oliver Wolcott y James McHenry) eran más leales a Hamilton que al propio Adams, lo cual situó a este en una posición insostenible merced a la cuña que en el gobierno había introducido Hamilton, a quien Gore Vidal describe como «jefe en la sombra» del gabinete.⁷⁴ Este hecho, así como la difícil relación personal existente entre Adams

⁷⁴ «Fracasada la maniobra de Pinckney, parecía haber desaparecido toda esperanza que Hamilton pudiera haber albergado de ser primer ministro de un político tan curtido como Adams. Pero Hamilton, el intrigante, como le llamaba Adams, seguía siendo poderoso porque este, por deferencia hacia el general retirado, había conservado todo el gabinete de Washington, cuyo principal jefe en la sombra era Hamilton. Los tres cargos estatales principales los asumieron tres astutas mediocridades como Pickering, Wolcott y James McHenry (Guerra), los tres más o menos vinculados con Hamilton». Gore VIDAL, *La invención de una nación*, o. cit., p. 133. «*All the secretaries, except Attorney General Charles Lee of Virginia, were Federalist firebrands with close ties to Alexander Hamilton*», John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 99. En el mismo sentido, James Roger Sharp indica que «*The politically powerful Hamilton was in a real sense already the country's prime minister without portfolio*», a través no solo de su influencia directa en el gabinete por medio de varios de sus miembros, sino por el ascendiente que ostentaba entre varios prominentes federalistas, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 31-32 y 48.

y Hamilton, iba a ser una de las principales causas de la fragmentación interna de la corriente federalista, de la derrota del federalismo en las elecciones presidenciales de 1800 así como de la ulterior desintegración de esta corriente política.

Con la presidencia de John Adams se inicia un periodo que se caracteriza por el fracaso definitivo de la idea de unidad nacional, la consolidación definitiva del bipartidismo y el inicio de un proceso que, en escaso tiempo, determinará el declive y posterior desaparición del aún todopoderoso Partido Federalista. Sin embargo, no necesariamente tuvo que ser así, dado que, una vez conocidos los resultados del Electoral College, se abrió paso la idea de un periodo de colaboración entre federalistas y republicanos que podría reconducir la situación de división partidista nuevamente hacia la tan ansiada unidad deseada por los *founding fathers* y solicitada por Washington en su discurso de despedida. Así, y siguiendo el precedente de Washington, Adams desempeñaría el cargo durante ocho años y sería a su vez sucedido en la presidencia por el vicepresidente Thomas Jefferson. Sin embargo, esa optimista idea o proyecto se vio pronto superado por la realidad interna de las propias facciones en liza (en gran medida por Alexander Hamilton, quien contempló con seria preocupación ese conato de entendimiento entre republicanos y federalistas y utilizó su influencia para boicotearlo), y sería definitivamente orillado, siendo precisamente la política exterior en relación con Francia el acontecimiento que precipitó esa incipiente reconducción a la unidad nacional y la vuelta a ese ideal de republicanismo clásico que los padres fundadores tenían en mente a la hora de construir el sistema de gobierno federal.⁷⁵ Y es que las difíciles relaciones diplomáticas con la

⁷⁵ Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 30-31; Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 168-169; James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 32-33.

Francia revolucionaria, y los sucesos acaecidos en relación con la misma, hicieron estallar un fervor antifrancés y el despertar de una simpatía por los federalistas que estos no solo no supieron catalizar, sino que desaprovecharon absurdamente con la aprobación de las *Alien and sedition Acts*, radicalizando aún más a los republicanos, quienes se retiraron estratégicamente a sus bastiones estatales. Con todo, no fueron la aprobación de tan draconianas leyes federales las que hicieron perder la batalla al federalismo, sino la división interna de este entre los *high federalist*, que seguían incondicionalmente a Alexander Hamilton, y los federalistas moderados que se situaron bajo la órbita del presidente John Adams.

Los acontecimientos de política exterior dominaron el mandato de Adams, quien, como bien indica Bernard Weisberger, no poseía el control de los acontecimientos, tanto por depender de la actuación de otras potencias, como por el cada vez más caldeado ambiente en el seno de los propios Estados Unidos.⁷⁶ Cuando el Directorio francés tuvo conocimiento de la aprobación del *Jay Treaty*, inició la misma política que había seguido Inglaterra con anterioridad a la firma del tratado, a saber, la de captura de buques estadounidenses, manifestando que no toleraría el comercio entre los Estados Unidos y su antigua metrópoli y situando con ello al recién elegido presidente Adams ante una crisis política exterior de primera magnitud. Para evitar un conflicto abierto e intentar una solución amistosa, Adams pensó enviar una comisión encabezada por Madison con la finalidad de iniciar conversaciones diplomáticas con el gobierno francés; sin embargo, tanto las presiones internas del

⁷⁶ «Peacekeeping was harder for the second president of the United States, because he was not in control of events. He could not predict what foreign secretaries and war offices in Paris or London would do in their unending efforts to storve each other. He could only react. And as hard as it is to realize in a more organized age, he could also never be sure of restraining American citizens from private war-iniciation», Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 174.

gabinete como el rechazo del propio Madison a encabezar dicha comitiva determinó que los tres representantes finalmente designados para intentar lograr un acuerdo con Francia fuesen John Marshall, Charles Cotesworth Pickney y Elbridge Gerry. Cuando los tres comisionados estadounidenses llegaron a suelo francés, el gobierno rechazó todo encuentro oficial con ellos enviando en su lugar a tres representantes oficiosos (los banqueros de origen suizo Jean Hottenguer y Pierre Bellamy así como Lucien Honteval) que, poniendo como excusa el clima antiamericano existente en la población francesa, solicitaron como requisito previo para cualquier reunión un soborno de 250000 dólares para el ministro Talleyrand y otro de 10 millones para el gobierno francés. Indignados, los representantes americanos rechazaron de plano el abono del soborno y pusieron los hechos en conocimiento de John Adams, quien informó a su gabinete aunque ocultando los nombres de los representantes franceses mediante las letras X. Y. Z., de ahí que el asunto se conociese como el *X. Y. Z. affair*.⁷⁷ El gabinete Adams decidió no hacer pública esta situación, pero cuando los republicanos (que ignoraban el fondo de la situación y el requerimiento del soborno) exigieron al presidente que hiciese público todo lo realmente acaecido, Adams no tuvo inconveniente en desclasificar toda la información y difundir los hechos, provocando con ello que la opinión pública se orientase en sentido claramente francófono. En el seno del gabinete, el secretario de Estado, el incompetente Timothy Pickering⁷⁸ y el *attorney general* Charles Lee eran partidarios de una inmediata declaración de guerra a Francia, algo a lo que se oponían el res-

⁷⁷ Sobre este asunto pueden consultarse dos breves trabajos de William STINCHCOMBE: *The XYZ affair*, Greenwood, 1980, y el artículo «The Diplomacy of the XYZ Affair», publicado en *William and Mary Quarterly*, n.º 34 (octubre 1977), pp. 590-617.

⁷⁸ «It's hard to imagine anyone less qualified to be America's chief diplomat», James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 46.

to de integrantes del gobierno (incluidos Wolcott y McHenry, tan leales a Hamilton como el propio Pickering). Otros eminentes federalistas, como la emergente estrella del federalismo John Marshall, se oponían igualmente a una declaración de guerra a Francia, sin perjuicio de tomar las medidas necesarias para que los Estados Unidos estuviesen preparados si en un futuro tal conflicto llegaba a estallar. Por ello, se tomaron medidas para el robustecimiento del ejército, se inició la construcción de una Armada e incluso, el día 30 de abril de 1798, se creó un nuevo Departamento en el seno del ejecutivo, el Departamento de Marina.⁷⁹ Adams creó un ejército provisional cuya jefatura encomendó a George Washington, aceptando este con la única condición de que Alexander Hamilton (quien había maniobrado al efecto para tal fin) fuese nombrado su segundo. Así, mientras Hamilton, que curiosamente acababa de solucionar una disputa con James Monroe que a punto estuvo de acabar en duelo por la fogosidad del político federalista,⁸⁰ desde su flamante puesto al frente de la nueva milicia presionaba para una inmediata declaración y entrada en guerra contra Francia. Los republicanos, lastrados por sus simpatías francófilas, veían con preocupación la creciente fobia hacia el país galo derivada del asunto X. Y. Z. Fue en este clima sociopolítico de

⁷⁹ «*An Act to Establish an Executive Department to be denominated the Department of the Navy*», cuyo texto puede localizarse en *Public Statutes at Large*, o. cit., pp. 553-554.

⁸⁰ Hamilton culpaba, sin prueba alguna, a James Monroe de la filtración a la prensa de cierto *affaire* extramarital con ciertas implicaciones políticas por el uso indebido de fondos públicos a cargo del antiguo secretario del Tesoro. Las insultantes misivas que Hamilton dirigió a Monroe hicieron que este manifestara abiertamente que si lo que Hamilton deseaba era un duelo, estaba dispuesto a aceptarlo, a lo que este llegó a manifestar «*I am ready, take your pistols*». El duelo se evitó precisamente porque uno de los padrinos de Monroe mantuvo en todo momento la cabeza en su sitio y logró reconducir la situación; ese padrino en cuestión se llamaba Aaron Burr. Como dice el propio biógrafo de Hamilton, «*Had he already hated Hamilton, Burr could have egged on Montoe and engineered a duel in with Hamilton might have died. Instead, he had the grace and decency to plead for fairness toward Hamilton. He was the one upright actor in the whole affair*», RON CHERNOW, *Alexander Hamilton*, New York, The Penguin Press, 2004, p. 541.

abierto rechazo a Francia cuando se aprobaron las que serían conocidas como *Alien and Sedition Acts*, que marcarían la ruptura definitiva e irreversible entre federalistas y republicanos al interpretar estos que la legislación no solo vulneraba la primera enmienda constitucional, sino que se trataba en realidad de un arma política elaborada desde el poder contra los opositores.⁸¹ En realidad no se trataba de una, sino de cuatro leyes distintas, tres de las cuales afectaban únicamente a los extranjeros (las *Alien Acts*);⁸² pero sin duda alguna era la cuarta, la *Act to punishment certain crimes against the United States*, aprobada el 14 de julio de ese año 1798, la más preocupante de todas pese a ser la más breve en cuanto a su redacción,⁸³ dado que tipificaba como delito la redacción de cualquier escrito «*false, scandalous and malitious*» dirigido contra el Gobierno, el presidente o el Congreso, o con la intención de difamarlos, por lo que al amparo de dicha normativa cualquier publicación que criticase al gobierno podría estar sujeta a enjuiciamiento penal ante los Tribunales de Justicia.⁸⁴

La reacción de los seguidores de Jefferson y Madison frente a las *Alien and Sedition Acts* tuvo lugar merced a las *Kentucky and Virginia resolutions*. Jefferson, pese a su siempre aparente desinterés por la cosa pública, se mantuvo en todo momento

⁸¹ Un interesantísimo estudio sobre esta legislación lo encontramos en Abel ARIAS CASTAÑO, «La *Sedition Act* de 1798 y el libelo sedicioso: la criminalización de la libertad de expresión», en *Historia Constitucional*, número 10 (septiembre 2009), pp. 297-321.

⁸² *An Act to Establish a Uniform Rule of Naturalization*, de 18 de junio de 1798; *An Act concerning Aliens* de 25 de junio de 1798 y *An Act respecting Alien Enemies* de 6 de julio de 1798. El texto de las mismas puede encontrarse en *Public statutes at large*, o. cit., en las pp. 566, 570 y 577 respectivamente.

⁸³ El texto de la norma en *Public statutes at large*, o. cit. pp. 596-597.

⁸⁴ «*With the Federalist firmly in control of all the three branches of the federal government, and likely to remain in control as long as the threat or war remained, Jefferson and his colleagues began to look to the states as the last defensive stronghold against this powerful enemy. There, where they had considerable support, the Republicans reasoned, they could focus their attention on building a strong political base*». James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 49.

puntualmente informado, y a lo largo de los cuatro años de la presidencia de Adams articuló en torno a su persona la oposición a las medidas adoptadas por los federalistas. Así, desde su residencia en Monticello, redactó las bases programáticas de lo que posteriormente se conocerían como *Virginia and Kentucky resolutions*,⁸⁵ pese a que la iniciativa, curiosamente, no partió del entonces vicepresidente, sino de un colega virginiano, en concreto John Taylor. Este se dirigió por carta a Jefferson abogando expresamente por un plan tendente a separar de los Estados Unidos los estados de Virginia y Carolina del Sur.⁸⁶ Tras un intercambio epistolar y una rectificación de Taylor en el sentido de indicar que lo pretendido era la renovación periódica de las leyes y reivindicar el derecho de los estados a interpretar la Constitución, Jefferson procede a redactar un borrador inicial dotándolo de una mayor consistencia jurídica. El autor de la Declaración de Independencia concluye que la Constitución federal apodera al Congreso de los Estados Unidos con unas competencias exclusivas y determinadas, mas todo el conjunto de atribuciones que no habían sido atribuidas al órgano federal permanecen en los estados. Con una gran sutileza jurídica, Jefferson distingue entre un ejercicio abusivo de competencias delegadas, que únicamente podría depurarse a nivel político mediante elecciones periódicas, con una usurpación federal

⁸⁵ Sobre este tema, pueden consultarse Kevin GUTZMAN, «The Virginia and Kentucky Resolutions Reconsidered: 'An Appeal to the real laws of our Country'», *Journal of Southern History*, n.º 66 (2000), pp. 473-96; y William WATKINS, *Reclaiming the American Revolution: the Kentucky and Virginia Resolutions and their Legacy*, Palgrave Macmillan, 2004.

⁸⁶ Ello se deduce de la respuesta que Jefferson ofrece a Taylor en carta fechada el 1 de julio de 1798, «*Mr. New showed me your letter on the subject of the patent, which gave me an opportunity of observing what you said as to the effect, with you of public proceedings, and that it was not unwise now to estimate the separate mass of Virginia and North Carolina, with a view to their separate existence*», en Thomas JEFFERSON, *The works*, o. cit., vol. VIII, p. 430. No es, por tanto, casual, que Jefferson finalice la misiva requiriendo a Taylor que no hiciese pública ninguna de las reflexiones que el vicepresidente había hecho.

de competencias reservadas a los estados, cuya inevitable consecuencia sería la *nullification* de la legislación federal. Dicho en otras palabras: Jefferson mantenía que serían los estados federados quienes enjuiciasen la constitucionalidad de las disposiciones federales y quienes, en tales supuestos, inaplicasen tales actos, en una medida que haría volar en pedazos el marco constitucional de 1787.⁸⁷ Es, ciertamente, inconcebible tamaña deslealtad para con el gobierno federal por parte de quien, en el momento de proponer tales medidas, ocupaba el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. No obstante, cuando fue sometida a la legislatura de Kentucky para su aprobación, John Breckenridge suavizó en extremo el lenguaje de Jefferson. Kentucky aprobó tal declaración, pero los republicanos se sintieron decepcionados cuando, ante su intención de someterla a todos y cada uno de los estados de la Unión, únicamente Virginia aprobó igualmente una resolución de tal calibre, mientras que los restantes estados bien no respondieron o bien manifestaron un abierto rechazo.⁸⁸

Con todo lo anteriormente expuesto, y pese a la furibunda oposición que la facción republicana desplegó contra la nueva legislación, las elecciones legislativas para el sexto Congreso de los Estados Unidos no solo no supusieron una derrota de los federalistas, sino que incluso aumentaron su presencia en las Cámaras, dado que pasaron de 57 a 60 representantes mientras que los republicanos pasaron de 49 a 46. Esta victoria tendría una importancia política decisiva, puesto que en el caso de que en las elecciones presidenciales de 1800 el Electoral college fuese incapaz de elegir un candidato o no hubiese ninguno que

⁸⁷ «*The vicepresident hadrafted a doctrine of state nullification. What Jefferson had proposed was nothing less than the overthrow of the constitutional settlement of 1788-89, for nullification would have emasculated the national government and restored the states to the predominant position they had occupied under the Articles of Confederation*», JOHN FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 115

⁸⁸ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 55.

obtuviese una mayoría de votos, la elección de dicho cargo recaería automáticamente y en estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales en una Cámara de Representantes dominada por los federalistas. Esta derrota electoral hizo que Jefferson y sus seguidores acentuaran su táctica de concentrarse en sus bastiones estatales, especialmente en los situados en la zona oeste y sur de los Estados Unidos para, desde los mismos, construir una robusta base política desde la que oponerse al poder central.

El año 1799, que comenzaba con tan buenos augurios para el federalismo, terminó siendo el *annus horribilis* para el mismo, dado que el conflicto latente entre ambas facciones del partido terminó haciéndose patente hasta el punto de que en 1800 estalló de forma abrupta en el seno del propio gabinete. Esa crisis o conflicto interno vino motivada por una valiente decisión de John Adams que, aún siendo acertada, saludable⁸⁹ y necesaria fue abiertamente impopular en el seno de su propio partido. Y es que, pese al clima abiertamente francófilo, el presidente decidió, a la vista de la nueva situación política existente en el seno de la República Francesa, iniciar nuevamente conversaciones de paz con la nación europea, enviando para ello a dicho país una comisión de tres miembros encabezada por el *chief justice* Oliver Ellsworth,⁹⁰ siguiendo así la estela de Washington cuando este había acudido al por entonces *chief justice* John Jay para negociar un tratado de paz con Gran Bretaña. Ello provocó la

⁸⁹ En relación al cambio político de Adams en el sentido de buscar la paz con Francia, indica Bruce Ackerman que «*For this, the republic must be eternally grateful*», *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 96.

⁹⁰ Esta decisión de Adams traería una consecuencia afortunada. A finales de 1800 Oliver Ellsworth acabaría presentando su renuncia al puesto de *chief justice*, lo que dio a Adams la oportunidad de elegir a su sucesor, privando a Jefferson de tal posibilidad. Pese a que el grueso del federalismo abogaba por el *associate justice* William Paterson como sucesor de Ellsworth, la rotunda negativa de Adams a tal nombramiento finalizó con la que se demostró acertadísima y afortunada elección de John Marshall para tal cargo, lo que supuso un auténtico *turning point* para la alta institución judicial.

ira de Alexander Hamilton quien, al frente de la milicia creada en el año anterior esperaba situarse de facto por encima de la propia institución presidencial. Pese a lo acertado de la anterior medida, Adams tomó otra decisión que, aún comprensible y explicable desde el punto de vista humano, se demostró nefasta políticamente: abandonar durante siete meses Philadelphia (por entonces la capital de los Estados Unidos) para acudir al lado de su mujer Abigail;⁹¹ ello le alejó del centro de la política y le mantuvo en cierta manera aislado políticamente, lo que fue motivo de críticas aún en el seno de sus propios partidarios. Adams únicamente regresaría cuando tuvo noticias de que los propios miembros de su gabinete estaban obstaculizando los esfuerzos del presidente por alcanzar la paz con Francia.

Por ello, al finalizar el año 1799 que con tan buenos augurios había comenzado, oscuros nubarrones amenazaban la hegemonía política de los federalistas. Y, como si de una premonición se tratara, el día 14 de diciembre fallecía en su residencia de Mount Vernon, en el estado de Virginia, el ex presidente George Washington, elemento unificador e integrador de la nación. La muerte del líder indiscutible finiquitó también los propósitos de Hamilton y sus seguidores, quienes, profundamente disgustados con Adams, pretendían que Washington optase nuevamente a un nuevo mandato presidencial como candidato federalista en las elecciones de 1800.⁹² Pero la muerte de Washington tuvo aún un efecto muchísimo más disolvente del que en principio cabría suponer: las débiles ataduras que aún mantenían dentro de unos límites a Alexander Hamilton

⁹¹ Para las relaciones de John Adams con su mujer Abigail y la influencia que esta tuvo en todo momento en el pensamiento y acción del que fuera segundo presidente de los Estados Unidos a lo largo de toda su carrera, es imprescindible la excelente biografía de Davic McCULLOUGH, *John Adams*.

⁹² Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 43-45 y 49. Todo el capítulo segundo de esta obra enlaza con bastante acierto la enfermedad y muerte de Washington con los intentos federalistas de recuperar políticamente al general.

desaparecieron con el general, de tal manera que el líder federalista no tuvo ya inconveniente alguno en manifestarse de forma abierta y explícita contra el presidente John Adams, aunque con ello perjudicase a su propia tendencia política.

3. Los comicios presidenciales de 1800

*If the facts are viewed objectively, it seems clear that Jefferson won by contravening the Constitution, and Burr lost because he upheld that document. Which man would you rather have as president?*⁹³

*The impending deadlock in the House was pushing both sides beyond the constitutional rules to the foundational idea of popular sovereignty – twisting the principle in partisan directions.*⁹⁴

*To a political culture dedicated to an antiparty nonpartisanship, the elections of 1800 must have seemed an aberration. Vicious personal attacks, portents of doom and disaster if one or another of the opponents were to be elected, and scurrilous rumors of betrayal and intrigue pervaded every aspect of the contest.*⁹⁵

Si las elecciones presidenciales de 1796 habían comenzado cuando George Washington anunció públicamente su renuncia a optar a un tercer mandato poco antes de la fecha establecida para la selección de los compromisarios, la campaña para las elecciones de 1800 comenzó mucho antes, pues de hecho se desarrolló prácticamente durante todo el año 1800. Pero estas elecciones iban a ser diferentes a todas las anteriores al estar marcadas por varios acontecimientos inexistentes

⁹³ Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 92.

⁹⁴ Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, p. 34.

⁹⁵ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 101.

en los anteriores comicios. Era la primera vez que unas elecciones presidenciales iban a tener lugar sin la presencia física de George Washington, fallecido el 14 de diciembre de 1799 en Mount Vernon, dado que, aun estando retirado de la vida política, continuaba siendo un referente imprescindible y un elemento integrador que aun en la distancia lograba mantener a las ya cada vez más irreductibles diferencias entre federalistas y republicanos dentro de ciertos límites infranqueables. Era la primera vez que la disputa presidencial iba a desarrollarse con las instituciones federales ubicadas en la nueva capital de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia,⁹⁶ donde se habían trasladado tanto a mediados de ese año 1800. Era la primera vez que el presidente y el vicepresidente iban a enfrentarse en una contienda electoral para aspirar al puesto de jefe ejecutivo, enfrentamiento que tendría lugar estando vigente la *Sedition Act* que tipificaba como delito la crítica al presidente.⁹⁷ Pero si en algo se diferenciarían las elecciones de 1800 de las tres anteriores fue precisamente en la existencia de unos entes que ya abiertamente contenían en sí el germen de los partidos políticos, con una ideología bien definida y con unas estructuras que se iban perfeccionando hasta el punto de albergar en su seno convenciones internas para la designación de candidatos presidenciales y que contribuyeron a transformar los enfrentamientos en las elecciones locales en luchas abiertas entre los partidos. Bruce Ackerman resume perfectamente esta mutación política:

But national coordination went beyond the realm of ideas. Both Federalist and Republicans held party caucuses to name vice-presidential running mates for Adams and Jefferson respecti-

⁹⁶ Acerca de la ubicación física de la nueva capital y las circunstancias que influyeron en la elección de ese lugar concreto, véase Kenneth R. BOWLING, *The creation of Washington D. C.: The idea and location of the American Capital*, George Mason University Press, 1991.

⁹⁷ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 228.

vely, and managed to make their choices stick. In 1796 electors scattered their second-place votes among a variety of candidates. Four years later they refused to stray from the straight and narrow, and proved remarkably faithful to their party slates. Call this the mobilization of state elites into presidential parties. [...]

The rippling ideological contest invited Americans to view the elections of 1800 in a distinctive way. They were not simply contests among local notables for the privilege of representing their constituents; nor did they merely raise strictly local issues. They were becoming forums for a larger debate over national political ideals, competing visions of national development. Call this the partisan transformation of local elections.⁹⁸

Conviene incidir en una circunstancia indispensable para una mayor comprensión de los comicios presidenciales no solo de 1800, sino todos los existentes durante casi toda la primera mitad del siglo XIX. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde la elección de los compromisarios tiene lugar en una misma fecha a lo largo de todo el territorio de la Unión, hasta el año 1845 el proceso de elección de compromisarios se dilataba en el tiempo,⁹⁹ pues cada estado gozaba de una amplísima discrecionalidad constitucional para establecer sus propios métodos de selección, existiendo una notable diferencia entre las diversas legislaciones estatales, pues cada uno de los territorios podía establecer una fecha para la selección de compromisarios que no tenía necesariamente que coincidir con la establecida en la legislación vigente en el resto de estados. Por otra parte, y dados los diversos sistemas de elección de compromisarios, el proceso

⁹⁸ BRUCE ACKERMAN, *The failure of the Founding Fathers*, o. cit., pp. 20-21.

⁹⁹ «*The dramatic implications of the election were muted by the existing election system [...] even the electoral process was nothing more than a patchwork of scattered pieces*», BERNARD A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 228-229.

podía durar meses y, de hecho, en 1800 se extendió desde el mes de marzo hasta finales de noviembre. Con carácter previo al análisis detallado del largo procedimiento de elección de compromisarios para las elecciones presidenciales de 1800, nos detendremos un instante para indicar los sistemas electorales que cada estado poseía y su importancia para el resultado de los comicios, teniendo en cuenta dónde se encontraba el foco principal de votos de cada partido.

Al igual que ocurriese en 1796, eran dieciséis los estados integrantes de la Unión, que aportaban 138 compromisarios al Electoral college, por lo que era preciso igualmente obtener setenta votos para aspirar a la presidencia. No obstante, y a diferencia de lo ocurrido en los anteriores comicios, en el año 1800 aumentaron los estados que optaron por atribuir a las legislaturas respectivas la elección de los compromisarios. Así Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Carolina del Sur y Vermont, optaron por mantener, al igual que ocurriera en 1796, la elección de compromisarios por el legislativo; New Hampshire, Massachusetts, Pennsylvania y Georgia, que en 1796 habían optado por un método de elección popular de compromisarios, mudaron la normativa para atribuirlo a la legislatura. En cinco de los estados restantes, los compromisarios eran elegidos por votación popular, si bien el sistema difería, pues mientras en Maryland, Carolina del Norte y Kentucky la elección se verificaría por distritos (lo que ofrecía la posibilidad de compromisarios pertenecientes a distintas tendencias políticas), en Rhode Island y Virginia (estado que en 1796 tenía como sistema de elección de compromisarios la votación por distritos) se optó por el sistema del *general ticket*, en virtud del cual, para la elección de compromisarios, se tendrían en cuenta los votos de todo el estado. En Tennessee existía un complejo procedimiento que combinaba voto popular con elección por la legislatura.

3.1. *El largo camino hacia la elección del Electoral College*

*Yet the combatants sincerely regarded themselves as above partisanship. And ironically, it was this belief that became the catalyst for polarization.*¹⁰⁰

Todo auguraba unos ajustadísimos resultados en los comicios presidenciales de 1800. Buena prueba de ello es que, el 23 de enero de 1800, el Senado acuerda nombrar un comité encargado del estudio de las medidas legislativas a adoptar para resolver las disputas en las elecciones a presidente y vicepresidente, así como para determinar la legalidad o ilegalidad de los votos emitidos para tales cargos en los diferentes estados; el día 24 de enero de 1800 se designaron a los senadores Ross, Laurance (sic), Dexter, Pickney y Livermore como miembros integrantes de dicho comité. Tras las deliberaciones oportunas, James Ross, senador por Pennsylvania, remitió al pleno del Senado, el día 14 de febrero de dicho año 1800, un proyecto que regulaba el modo de resolver conflictos electorales en los comicios presidenciales. La solución ofrecida consistía en la creación de un comité integrado por el *chief justice* (o, en caso de ausencia de este el magistrado del Tribunal Supremo que ostentase mayor antigüedad) y cinco miembros elegidos por votación en cada Cámara. Los debates senatoriales tuvieron lugar a puerta cerrada y manteniendo en secreto el texto del proyecto hasta que el periódico republicano *Aurora* publicó el texto del mismo en febrero de 1800. El proyecto fracasó al pasar a la Cámara de Representantes, la cual, al tener constitucionalmente atribuida la facultad de elección del presidente en caso de bloqueo del Electoral College, se mostraba lógicamente reacia a delegar tal potestad en un organismo colegiado (entre quienes se opu-

¹⁰⁰ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 101.

sieron al proyecto de Ross se encontraban un grupo de federalistas encabezados por John Marshall, para quienes el texto iba demasiado lejos). Los republicanos vieron en el mismo un intento de boicotearles una posible victoria, dado que tal proyecto depositaba la resolución de un eventual conflicto en los comicios presidenciales a un órgano colegiado cuyos miembros debían ser elegidos por unas instituciones que en ese momento se encontraban dominadas por los federalistas.¹⁰¹

Dado el sistema electoral de compromisarios, la importancia de las elecciones a la legislatura de los estados era vital para las aspiraciones de los contendientes. Pero sin duda alguna, el estado clave para determinar la identidad del futuro presidente de los Estados Unidos iba a ser el *empire state*, teniendo lugar una encarnizada batalla política entre republicanos y federalistas que encubriría a su vez una lucha personal entre las dos personas más influyentes de dichos partidos en el estado, los eternos rivales en la política, en el foro y en otros lugares bastante más privados: Aaron Burr y Alexander Hamilton.¹⁰² En efecto, el elemento clave y decisivo serían los doce votos compromisarios de Nueva York, y así lo entendía el mismísimo

¹⁰¹ *Journal of the Senate of the United States of America, being the first session of the sixth Congress*, Washington, Gales & Seaton, 1826, pp. 23, 24, 31 y 33. Para Bernard WEISBERGER, la propuesta de Ross «could allow the federalist to steal the presidency if they could cast doubt of the validity of any elector's votes», *America Afire*, o. cit., p. 235. Por su parte, John Ferling indica que «The bill went nowhere, but its introduction and the republican response to it – one who was close to Jefferson labeled it a 'deadly blow... aimed at us' – was a signal that the presidential contest was under way», *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 135; véase también sobre este particular Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 78-86, que contiene un amplio tratamiento del tema y de sus consecuencias. James Roger Sharp indica que el federalista John Marshall fue determinante en la derrota de este proyecto de ley.

Esta iniciativa del senador Ross puede considerarse, aunque con ciertas reservas, un curioso antecedente de la Electoral Commission, creada en enero de 1877 para resolver el contencioso presidencial de 1876, institución esta que estudiaremos en el capítulo siguiente, dedicado con carácter monográfico a los comicios presidenciales de 1876.

¹⁰² No en vano, Edward J. Larson titula significativamente «Burr v. Hamilton» el capítulo de las cruciales elecciones neoyorkinas, mientras que Bernard A. Weisberger lo hace con la rúbrica «Mr. Burr launches a machine».

Jefferson, quien manifestaba en su carta de 4 de marzo de 1800 (dirigida a James Madison) que en Nueva York todo dependía del voto en esa ciudad,¹⁰³ a la vez que confiaba a su interlocutor que tanto Aaron Burr como Livingston no albergaban duda alguna en cuanto a la victoria republicana en dicho estado. Nadie dudaba de la decisiva influencia de Burr en el resultado final de las elecciones en el *empire state*, dado que desde que Burr había vuelto a ser elegido miembro de la Asamblea de Nueva York en 1797, tras perder su asiento en el Senado, se había dedicado a propagar la ideología republicana desde su puesto. Y, en efecto, las predicciones sobre la influencia de Burr en los comicios estatales resultaron ciertos, dado que este realizó una titánica campaña que le reveló como un verdadero político en el moderno sentido del término,¹⁰⁴ puesto que desde su cargo en la Asamblea Legislativa de Nueva York logró poner en pie toda una red clientelar de amigos y aliados políticos que le sirvió como base para que en el año 1800 el estado se inclinase hacia posiciones republicanas, con una prensa local que, pese a tratarse de unas elecciones estatales, las contemplaba en clave federal.¹⁰⁵ El propio Burr estuvo físicamente en la sede de los comicios realizando maratónicas jornadas de hasta diez horas, en contraste con la pasmosa inactividad de Jefferson, si bien *«when Burr campaigned for his party, he campaigned hard, but he did so because he agreed with republican principles, not because*

¹⁰³ «In any event, we may say that if the city election of N. York is in favor of a republican ticket, the issue will be republican; if the federal ticket for the city of N. York prevails, the probabilities will be in favor of the federal issue [...] The election of New York being in april, it becomes an early & interesting object». Thomas JEFFERSON, *The works of Thomas Jefferson*, vol. IX, G. P. Putnam's Sons and The Knickerboxer Press, pp. 118-123.

¹⁰⁴ «...neither of them [Jefferson y Hamilton] could have anticipated Burr's extraordinary effort on behalf of the Republican ticket. Ever since, political historians have marveled at his innovative techniques in urban electioneering», Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 98; John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 130; Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 106.

¹⁰⁵ Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 93.

he possessed an unthinking loyalty to the party»;¹⁰⁶ esta es la clave de todo el comportamiento de Burr, y que explica muchas de sus actuaciones posteriores: la distinción entre principios republicanos y «partido» republicano. Pese al esfuerzo realizado por Hamilton para contrarrestar los esfuerzos de su eterno rival en el foro, los republicanos vencieron en la ciudad de Nueva York por una mayoría de 445 votos.¹⁰⁷ Es, por tanto, de justicia manifestar que fue Aaron Burr, y no Thomas Jefferson, quien inclinó la victoria del lado republicano para las elecciones presidenciales en 1800.¹⁰⁸

La derrota en las elecciones legislativas del estado de Nueva York determinaba que los compromisarios de dicho estado se orientasen sin duda alguna hacia los republicanos, aspecto este que a Hamilton no se le escapaba,¹⁰⁹ pese a lo cual intentó evitar el desastre con una maniobra de última hora que revela hasta qué punto el ideólogo federalista despreciaba las reglas del juego cuando estas no conducían al resultado por él apetecido. El día 7 de mayo de 1800 Hamilton remite una misiva a John Jay, gobernador del estado de Nueva York, solicitándole que, visto el estado de cosas, convoque una sesión de la legislatura estatal para que esta apruebe una ley que retirase a la legislatura la potestad de designar a los compromisarios y estableciese en su lugar la elección de compromisarios presidenciales por sufragio popular. El propio Hamilton era consciente de hasta qué punto su maniobra bordeaba los límites de la decencia política,

¹⁰⁶ Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 117.

¹⁰⁷ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 93-95 y 238-240. Para el desarrollo de la campaña de Burr en Nueva York, véase Nancy ISENBERG, *Fallen founder*, o. cit., pp. 196-202.

¹⁰⁸ «*Burr's brilliance and activity in securing the New York votes effectively won the 1800 elections for Jefferson*», Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 102.

¹⁰⁹ «*You have heard of the loss of our election in the city of New York. This renders it too probably that the electors for President for this state will be anti-federal*». Carta de Alexander Hamilton a Theodore Sedgwick, 4 de mayo de 1800.

pero tras un vano intento de justificar su actuación basado en las circunstancias («*As to its intrinsic nature, it is justified by unequivocal reasons of public safety*»), en su opinión, la adopción de cualquier medida se encontraba perfectamente justificada para evitar que Jefferson, a quien definía como ateaísta en lo religioso y fanático en lo político, llegara al poder.¹¹⁰ John Jay, coautor con Hamilton y Madison de los artículos de *El Federalista* y primer *chief justice* (cargo del que había dimitido precisamente para ocupar el cargo de gobernador del estado de Nueva York), rechazó fulminantemente la adopción de tan arbitraria medida y ni siquiera se dignó contestar a la misiva.¹¹¹ A partir de este momento, un desbocado Hamilton iniciaba una serie de maniobras de dudosa legalidad a la vez que dio muestras de un escaso sentido de la moralidad, algo que debe tenerse muy en cuenta a la hora de valorar la legitimidad con que contaba el ideólogo federalista cuando, en plena crisis política, en 1801, acuse a Burr de falta de escrúpulos.

Unos días después de la victoria republicana en las elecciones legislativas del estado de Nueva York, el día 6 mayo de

¹¹⁰ «*In observing this, I shall not be supposed to mean that anything ought to be done which integrity will forbid, but merely that the scruples of delicacy and propriety, as relative to a common course of things, ought to yield to the extraordinary nature of the crisis. They ought not to hinder the taking of legal and constitutional step to prevent an atheist in religion, and a fanatic in politics, from getting possession of the helm of state*». Carta de Alexander Hamilton a John Jay, 7 de mayo de 1800, que puede consultarse en Alexander HAMILTON, *The Works of Alexander Hamilton*, vol. X, New York, G. P. Putnam's Sons and The Knickerboxer Press, 1904, pp. 371-374. En dicha carta Hamilton, que se jactaba de conocer a los antifederalistas mejor que Jay, les llegó a acusar expresamente de pretender llegar a una revolución del mismo modo que Bonaparte, y que sus informaciones se basaban en «*indubitable facts, not from conjectures and inferences*».

¹¹¹ Hamilton no fue el único en solicitar de Jay dicha medida, puesto que de forma simultánea el suegro de Hamilton, Philip Schuyler, solicitó (con total seguridad a instancias del propio Hamilton para que Jay se sintiese presionado) igualmente por escrito del gobernador idéntica medida: «*Despite his High Federalist leanings and strong party loyalty, governor Hay did not even dignify these letters with written replies [...] Jay simple filed the letters for posterity, which had judged them harshly*», Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 109.

1800, la fractura existente en el seno del federalismo estalló de forma abrupta en el seno del gabinete. John Adams, tras una violentísima escena, cesa a Timothy Pickering como secretario de Estado (colocando en su lugar a John Marshall, futuro *chief justice* y uno de los políticos federalistas más respetados por su inteligencia e independencia de criterio) y a James McHenry como secretario de Guerra, reprochándoles que su lealtad a Hamilton se anteponga a sus deberes como miembros del gobierno, llegando a manifestar que preferiría como presidente a Jefferson que a Hamilton. Algo parecido le ocurrió a este, dado que si hasta ese momento había mantenido sus diferencias con John Adams dentro de unos límites más o menos razonables, tras el cese de sus alfiles en el gabinete, arrojó abiertamente la máscara y mostró su auténtico rostro. De hecho, en una carta fechada ese mismo día 10 de mayo de 1800 y dirigida a Theodore Sedgwick, Hamilton lanza sus airadas diatribas contra John Adams, a quien llega a equiparar con Jefferson:

For my individual part my mind is made up. I will never more be responsible for him by my direct support, even though the consequence should be the Election of Jefferson. If we must have an enemy at the head of the government, let it be one whom we can oppose, and for whom we are not responsible, who will not involve our party in the disgrace of his foolish and bad measures. Under Adams, as under Jefferson, the government will sink. The party in the hands of whose chief it shall sink will sink with it;

y en otra carta, dirigida el 14 de mayo al propio Pickering, le «sugiere» que haga copias de todos los documentos que puedan afectar a Jefferson y a Adams, en especial un diario que este último elaboró mientras se encontraba en Europa («*a tissue*

of weakness and vanity»).¹¹² Ello motivó que cuando la élite del Partido Federalista se reunió para designar los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el nombre de John Adams se viera comprometido por las maniobras de Hamilton a favor de Charles C. Pinckney,¹¹³ mientras que en el caso de los republicanos la unidad era total, pero mediante un curioso sistema que suponía la quiebra definitiva del sistema constitucional de 1787: los federalistas presentaban a Adams y a Pinckney sin establecer o concretar el cargo para el que se presentaban (aunque era vox pópuli que el candidato a la presidencia era Adams), los demócratas elaboraron un ticket con Jefferson de candidato a la presidencia y Aaron Burr para la vicepresidencia, algo no expresamente previsto en la constitución.¹¹⁴ En la designación de Burr para la candidatura a la vicepresidencia tuvo no poco que ver el hecho de que fue su labor en el estado de Nueva York la que se estimaba como hecho decisivo que desequilibraría la balanza presidencial hacia posiciones republicanas, aunque tal proclamación estuviese realizada entre recelos y resentimientos mutuos.¹¹⁵

Esta larga campaña coincidió en el tiempo con el traslado de las dependencias federales a la nueva capital, Washington

¹¹² Ambas cartas en Alexander HAMILTON, *The Works*, vol. X, pp. 375-377.

¹¹³ John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., pp. 142-43; Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 95 y 112-137.

¹¹⁴ «*This failure to differentiate between the two candidates as to which office each was being nominated for made it possible, although unlikely, that Pickney might be elected president over Adams [...] Burr unlike the Federalist, the Republicans clearly designated which of the two men was their presidential candidate – Jefferson*», James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 92. «*Though the Framers had designed the Electoral College to isolate the presidential election process from partisanship, the parties had virtually commandeered the system*», Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 57.

¹¹⁵ «*The political wedding of Virginia and New York for 1800 was completed, but it was a chilly marriage, and that coolness would become important eight months later*». Bernard WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 240. Burr se mostró reacio a aceptar la candidatura temiendo una nueva traición de los compromisarios del sur, no obstante lo cual acabó aceptando cuando se le dieron todo tipo de seguridades de que en esta ocasión no se repetiría tal acontecimiento.

D. C. Recordemos que gracias al acuerdo al que habían llegado en su día Hamilton y Jefferson, los sureños habían aceptado el que el gobierno federal asumiese las deudas estatales a cambio de que la nueva capital de la nación se ubicara en el sur, a cuyo fin se había aprobado en 1792 el establecimiento de la capital en un área sita en la orilla del Potomac, donde deberían establecerse en el año 1800 los principales centros de poder federal. Sin embargo, a mediados de 1800 Washington D. C. estaba aún por construir, y los testimonios que ofrecen los coetáneos sobre el estado de la nueva sede de las instituciones lo describen como un lugar «salvaje» con edificios aún inacabados.¹¹⁶ Esta peculiar situación no fue óbice para que la campaña electoral continuase y las acusaciones mutuas entre federalistas y republicanos fuesen constantes: los primeros acusaban a los segundos de intentar trasplantar al territorio norteamericano la sangría que los revolucionarios franceses habían ocasionado en el país galo a la vez que aludían al poco feliz comportamiento de Jefferson en 1781 —cuando siendo gobernador de Virginia había huido literalmente al sentir la cercanía del ejército británico abandonando a la población a su suerte—¹¹⁷ y, muy fundamentalmente, a las concepciones religiosas del líder republicano, que chocaban con una socie-

¹¹⁶ Acerca del establecimiento y desarrollo urbanístico de la capital estadounidense, puede consultarse la obra de Kenneth R. BOWLING, *The creation of Washington D. C.: The idea and location of the American capital*, George Mason University Press, 1991; y Joel ACHENBACH, *The grand idea*, Simon & Schuster, 2004.

¹¹⁷ Este episodio de la biografía de Jefferson, su escasa valentía ante el peligro en la guerra, le ocasionó un trauma tan grande que a punto estuvo de finiquitar su carrera (le salvó el hecho de que tan solo unos meses después de su huida, el ejército continental derrotó al británico en Yorktown, por lo que se abortaron las iniciativas de la legislatura virginiana para abrir una investigación sobre el comportamiento de su gobernador); el hecho de que en las elecciones de 1800 tuviese como *running mate* a Aaron Burr, cuyo historial bélico era brillantísimo con episodios heroicos, no hizo más que echar vinagre a una herida nunca del todo cicatrizada. John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 26.

dad profundamente cristiana;¹¹⁸ los segundos acusaban a los primeros de «monárquicos» y de intentar instaurar el sistema aristocrático inglés en los Estados Unidos.¹¹⁹ No obstante, existe una circunstancia que conviene tener en cuenta a la hora de acercarnos a estos comicios, y es que ambos candidatos a la presidencia tenían sus «demonios»: en el caso de Jefferson, era su pusilanimidad y el peso que en su ánimo tenían los acontecimientos de 1781 a los que hemos hecho referencia, situación agravada por el hecho de que su victoria estaba en manos de terceros, es decir, que políticamente dependía de las actuaciones de otras personas;¹²⁰ en el caso de Adams, sus ya abiertas diferencias con Hamilton, que traspasaron el campo político para llegar incluso por parte del último al ataque personal. Y es que Adams, por su parte, intentó apelar al relevante papel que, como delegado de Massachusetts, había representado en el proceso independentista norteamericano, tratando de marcar distancias tanto frente a los republicanos como frente al ala extremista del federalismo representada por

¹¹⁸ Sobre este peculiar aspecto de la influencia de la religión en la campaña, véase el fundamental capítulo séptimo (titulado muy significativamente «For God and party») de la obra de Larson.

¹¹⁹ Un resumen de la larga lucha por la elección de los compromisarios la tenemos en Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., pp. 227-257; James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 104-108. La acusación realizada por los republicanos, sin ser totalmente exacta, tenía cierto fundamento: Adams era un profundo admirador del sistema británico de gobierno, aunque no simpatizaba con los británicos y desconfiaba profundamente de su clase dirigente; Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 149.

¹²⁰ Esa dependencia se reveló, sobre todo, en la carta que el día 15 de diciembre de 1800 Jefferson remitió a Burr: «Jefferson revealed a deep, personal secret to Burr – that he was afraid and vulnerable. Jefferson revealed this fact to a man who had long since conquered his own fears, and Jefferson knew this. Burr’s courage and daring were well known, while the specter of Jefferson’s cowardice [...] had just recently risen again [...] on some level Jefferson had to have wondered whether Burr would expose him to the world and Burr must have had the sense that he held some special power in this pocket. Most remarkably, especially given posterity’s judgment against Burr, Burr never used this power against Jefferson...»; por el contrario, esa dependencia psicológica nunca fue olvidada ni perdonada por Jefferson. Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., pp. 113 y 120.

Hamilton;¹²¹ de hecho, Adams, cuya admiración por el sistema británico de gobierno era tan elevada como su desconfianza hacia la clase política británica, se refirió expresamente a la existencia en Norteamérica de una *british faction*, a cuya cabeza estaría Alexander Hamilton, hecho que este vinculaba a un esfuerzo del entorno presidencial por contrarrestar los apoyos de la facción hamiltoniana hacia Pinckney para descabalar a Adams del cargo presidencial.¹²² El enfrentamiento político entre Adams y Hamilton llegó hasta tal punto que este dirigió dos misivas al presidente: la primera, fechada el día 1 de agosto, solicitaba expresamente una rectificación o, en su caso, una satisfacción personal;¹²³ la segunda el día 1 de octubre de 1800, donde descalifica a Adams por su silencio y se refiere a la acusación presidencial frente a él como «*base, wicked and cruel calumny*», utilizando un lenguaje que incluso el principal biógrafo de Hamilton indica que era impropio utilizarlo con un presidente.¹²⁴ El asunto llegó demasiado lejos hasta el

¹²¹ Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 145.

¹²² En carta dirigida a Oliver Wolcott el día 1 de julio de 1800, Hamilton manifiesta que «*I have serious thoughts of writing to the President, to tell him that I have Heard of his having repeatedly mentioned the existence of a British faction in his country, and alluded to me as one of that faction, requesting that he will inform me of the truth of this information and, if true, what have been the grounds of the suggestion. His friends are industrious in propagating the idea to defeat the efforts to unite for Pinckney*».

¹²³ «*I must, sir, take it for granted that you cannot have made such assertions or insinuations without being willing to avow them, and to assign the reasons to a party who may conceive himself injured by them. I therefore trust that you will not deem it improper that I apply directly to yourself, to ascertain from you, in reference to your own declarations, whether the information I have received is correct or not, and if correct, what are the grounds upon which you have founded the suggestion*». Es curiosísimo el hecho de que Hamilton se mostrase tan celoso de su honor porque Adams se refiriese a él como líder de esa *british faction*, solicitando una explicación o rectificación del presidente. Cuando en 1804 Hamilton manifestó que podría indicar «*a most despicable opinion*» de Burr y este le solicitó aclarase sus palabras, el federalista contestó por carta con una hipócrita evasiva, actitud extraña en quien tan ofendido se mostrara tan solo cuatro años antes por tan solo imputarle una filiación política anglófila.

¹²⁴ «*This was a shockingly offensive language to use with a President*», RON CHERNOW, *Alexander Hamilton*, o. cit., p. 621. El tono de Hamilton parece que buscaba abiertamente provocar un duelo con Adams.

punto de que Hamilton perdió literalmente el sentido de la realidad y realizó un acto que, en palabras de su más completo biógrafo, ocasionó su suicidio político:¹²⁵ en contra de los consejos de simpatizantes federalistas, decidió publicar en octubre de 1800 un brutal ataque personal contra John Adams, *The public conduct and character of John Adams esq., President of the United States*.¹²⁶ Nadie podía negar el decisivo papel de Adams en el proceso independentista frente a Gran Bretaña, y era ridículo negar la brillantez intelectual de Adams, uno de los líderes políticos más cultos y eruditos de la época; por ello, el ataque de Hamilton al presidente se hizo no apelando a cuestiones ideológicas, ni de abuso del cargo presidencial (no solo no se contiene, sino que se rechaza todo cargo de corrupción o abuso durante su mandato) sino a cuestiones exclusiva y estrictamente personales,¹²⁷ pese a lo cual, y de forma absolutamente chocante (en esto coinciden los dos recientes biógrafos de Adams y Hamilton) tras casi cincuenta páginas de libelo bilioso contra el presidente, el ideólogo federalista acababa solicitando que, en las próximas elecciones presidenciales, los miembros del partido votasen tanto a Adams como

¹²⁵ «*In writing such an intemperate indictment of John Adams, Hamilton committed a form of political suicide that blighted the rest of his career*», Ron CHERNOW, *Alexander Hamilton*, o. cit., p. 619.

¹²⁶ Alexander HAMILTON, *The works of Alexander Hamilton*, vol. VII, G. P. Putnam's Sons and The Knickerboxer Press, pp. 309-363.

¹²⁷ Hamilton cometió el error de incluir en este pliego de cargos contra el presidente las teóricas ofensas que Adams le había realizado. Según Chernow, Hamilton «*had a genius for self-inflicted wound and was capable of marching blindly off a cliff [...] Hamilton found it hard to refrain from vendettas*», Alexander Hamilton, o. cit., p. 619. Chernow indica que en la ira de Hamilton pudo influir el hecho de que, según McHenry y Pickering, en la turbulenta reunión con Adams que finalizó con el cese de ambos, el presidente se habría referido presuntamente al estigma que persiguió a Hamilton durante toda su vida: sus orígenes bastardos. Es explicable la ira de Hamilton si ello fuese verdad, pero debe tenerse en cuenta la tempestuosa impulsividad del federalista a la hora de valorar sus últimos momentos, en especial los que precedieron al duelo con su némesis Aaron Burr. Parece olvidarse la ofensiva actuación de Hamilton durante todos los años anteriores.

a Pickney.¹²⁸ Entra quizá dentro de lo posible que Hamilton deseara que ese ataque frente a Adams fuese conocido estrictamente dentro del círculo federalista,¹²⁹ mas lo cierto es que los republicanos pronto se hicieron con copias del panfleto y, lógicamente, procedieron raudos a hacer uso del mismo para sus propios fines; y que pese a la tradicional inculpación de Aaron Burr como responsable de que el escrito de Hamilton llegase a los republicanos, lo cierto es que el más reciente biógrafo del político federalista exculpa a Burr de este cargo, imputándolo a John Beckley.¹³⁰ No obstante, Hamilton no solo no mostró arrepentimiento alguno por comprometer el éxito de su propio partido, sino que incluso se mostró dispuesto a elaborar una nueva versión de su panfleto añadiendo nuevos episodios y anécdotas contra el presidente Adams.¹³¹ Es realmente difícil comprender esta puñalada traperera a su propio partido y los motivos que le decidieron a publicar esa obra, si en ello influyeron sus deseos de promocionar a Charles C. Pinckney a la presidencia o la frustración porque Adams, al alcanzar la paz con Francia, desbaratase los deseos de Hamilton de una alianza entre los Estados Unidos y su antigua metrópoli que lograrse expulsar a los españoles del territorio norteamericano, aunque quizá tampoco sea descartable que Hamilton fuese consciente de que con Adams en la presidencia su influencia

¹²⁸ Tanto Ron Chernow (*Alexander Hamilton*, o. cit., p. 621) como David McCullough (*John Adams*, o. cit., p. 550) califican tal actitud de «extraña».

¹²⁹ Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., pp. 218-219. John Ferling piensa que quizá los destinatarios del panfleto fueran los miembros de la Cámara de Representantes en el supuesto (deseado por Hamilton) de que tuviesen que romper un eventual empate entre Adams y Pinckney; *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 169.

¹³⁰ RON CHERNOW, *Alexander Hamilton*, o. cit., p. 621.

¹³¹ «...and I may finally think it expedient to publish a Second time. In this case I shall reinforce my charges by new anecdotes. My friends will, no doubt, be disposed to aid me. You probably possess some which are unknown to me. Pray let me have them without delay». Carta de Alexander Hamilton a Timothy Pickering, 13 de noviembre de 1800, en Alexander HAMILTON, *The Works*, vol. X, p. 391.

en el gabinete sería nula, sobre todo tras el cese de Pickering y McHenry.¹³² Quizá la explicación más razonable sea que el apoyo popular del que gozaba Adams, y la facción moderada del federalismo, excitase los enfermizos deseos de Hamilton¹³³ en su obsesión por despojar a aquel del cargo presidencial y, ante el evidente historial patriótico e intelectual de Adams, no quedase a Hamilton otra opción que el ataque personal para, de un lado, intentar movilizar a los federalistas en torno a Pinckney y, de otro, reivindicarse personalmente ante los ataques de Adams.¹³⁴

Poco a poco, los estados fueron designando sus compromisarios. Sin embargo, a finales de noviembre de 1800 la cuestión no estaba aún tan clara, dado que Adams y Jefferson aún parecía que iban a empatar a votos, quedando pendiente la designación de los compromisarios de Carolina del Sur, estado natal del federalista Pinckney. No obstante, ya cercana la fecha

¹³² Bernard WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 250. James Roger Sharp apunta una razón o motivo que pudiera haber influido igualmente en Hamilton a la hora de rechazar el consejo de varios amigos para que, cuando menos, publicase el panfleto de forma anónima: la situación de desamparo personal en que se encontraba Hamilton tras el fallecimiento de George Washington, su principal valedor y protector. Véase al respecto *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 116.

¹³³ «*Against the advice of his friends, Hamilton persisted as if possessed by private demons. Over the years, the brilliant former cabinet member had grown increasingly unable to judge or control his impulsive behavior*». Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 215. El propio editor de las obras de Hamilton, en su nota al pie al inicio del panfleto, indica que Hamilton «*lost his self-control*».

¹³⁴ A eso parece aludir el párrafo de la misiva que Hamilton dirigió a Wolcott el día 1 de julio de 1800, cuando, tras mencionar las referencias de Adams a la *british faction*, manifiesta que «*It is essential to inform the most discreet of this description of the facts which denote unfitness in Mr. Adams. I have promised confidential friends a correct statement*» y, tras solicitar la ayuda del propio Wolcott, concluye que «*The inquiry I propose may furnish an antidote and vindicate character*». En otra carta dirigida a Wolcott el 3 de agosto de 1800, Hamilton manifiesta que «*I have serious thoughts of giving to the public my opinion respecting Mr. Adams with my reasons, in a letter to a friend, with my signature. This seems to me the most authentic way of conveying the information, and best suited to the plain dealing of my character. There are, however, reasons against it*», razones que serían, según Hamilton, la oposición del propio Wolcott y otros miembros de la Administración quienes se verían inmediatamente señalados como la fuente de información.

en que los electores debían emitir su voto, dicho estado optó, tras una serie de circunstancias bastante complejas, por dar sus votos a Jefferson y Burr.

3.2. *Los resultados del voto compromisario*

El día 2 de diciembre de 1800 los compromisarios electos se reunirían en las capitales de sus respectivos estados para emitir su voto y depositarlo en manos de la autoridad estatal competente a fin de que esta certificase los resultados y los remitiese a la nueva capital, Washington D. C. donde el presidente del Senado, a la sazón Thomas Jefferson, en cumplimiento de las previsiones constitucionales, procediese a la apertura y recuento de los mismos, hecho que tendría lugar el día 11 de febrero de 1801. Por tanto, los resultados oficiales no se conocerían hasta el mes de febrero de 1801, pese a lo cual, en modo alguno, el voto de los compromisarios permanecería en secreto. En pocos días se hizo público el voto y estaba claro que el triunfo era republicano y que los federalistas cosecharían una importante derrota.¹³⁵ Pero un hecho vital acaeció en estos comicios, que supuso un aldabonazo definitivo al sistema de elección presidencial que ya se había puesto de manifiesto en 1796, dado que si entonces salieron electos como presidente y vicepresidente dos candidatos de diferentes tendencias políticas, la adopción en el año 1800 por los republicanos del sistema de *electoral ticket* o presentación conjunta de candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia demostró que el texto constitucional había quedado absolutamente superado por la realidad política estadounidense, y con ello arramblando definitivamente las aspiraciones de los *founding fathers*. Al no prever la Constitución esa

¹³⁵ El día 3 de diciembre de 1800, Adams añadía al fracaso político la dolorosísima pérdida de su hijo Charles, aquejado desde hacía tiempo de graves problemas de alcoholismo.

posibilidad, se obligaba a los compromisarios a manipular de alguna manera los votos para evitar un empate de candidatos, como efectivamente acabó sucediendo en este año 1800.

Si algo cabe destacar de estas elecciones es que, por primera vez, las votaciones se realizaron siguiendo criterios estrictamente partidistas, dado que ningún compromisario emitió voto alguno en contra de los designios de la facción por la cual fue elegido (únicamente un compromisario de Rhode Island retiró un voto al candidato Thomas Pinckney para otorgarlo a John Jay, quizá debido a instrucciones recibidas para evitar un empate entre aquel y Adams).¹³⁶ Es igualmente destacable la consolidación de la línea divisoria entre el norte federalista y el sur republicano: Adams tuvo su principal foco de votantes en los estados de Nueva Inglaterra (con la excepción de Nueva York)¹³⁷ y Pennsylvania (cuyos votos se repartieron entre los cuatro candidatos, dado que Jefferson y Burr obtuvieron ocho cada uno mientras Adams y Pinckney recibieron siete), mientras que los estados del sur continuaron siendo un bastión de votos republicanos (la única excepción fue Carolina del Norte, que otorgó a Jefferson y Burr ocho votos cada uno, mientras que Adams y Pinckney recibieron cuatro votos por cabeza). Conviene también constatar que los esfuerzos de Hamilton por minar la reputación de Adams no tuvieron éxito entre los distintos compromisarios, de manera que la única reputación que de manera inevitable quedó ya minada fue la del propio Hamilton, cuya actuación a lo largo del proceso muchos de sus propios correligionarios criticaron.

¹³⁶ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 253.

¹³⁷ Como bien indica John Ferling, «*One of the strange twists to this election was that Adams' defeat, and Jefferson's victory, owed much to the voting behavior of urban workers, especially in New York*», *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 166. En efecto, el Partido Republicano, defensor de los terratenientes y de los intereses de los pequeños propietarios agrarios, obtuvo su victoria gracias a haber logrado vencer electoralmente en un estado dominado mayoritariamente por la industria y el incipiente proletariado urbano.

Sin embargo, a partir de ese momento comenzaron las especulaciones, dado que se abrió la posibilidad de un empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr, algo que el primero esperaba que no se produjese pensando que en Georgia alguno de los compromisarios retiraría a Burr uno de los votos; mas cuando salieron a la luz pública los resultados de dicho estado, donde los compromisarios emitieron cada uno sus dos votos a favor de Jefferson y Burr, y saltaron los rumores de un posible apoyo federalista al segundo para evitar la investidura de aquel como presidente.¹³⁸

3.3. *Crisis política, debate constitucional y votación final en la Cámara de Representantes*

Una vez que se supo oficiosamente el empate a voto compromisario entre los candidatos republicanos a presidente y vicepresidente, Thomas Jefferson comenzó a ver oscuras conspiraciones en torno a su persona para privarle de su ansiado cargo mientras que los federalistas veían gozosos como, pese a la derrota, tenían en sus manos el decidir quién ocuparía durante los próximos cuatro años la magistratura presidencial. El virginiano tenía el autoconvencimiento de que era él y no otro el elegido por «el pueblo» para ocupar la presidencia (olvidando que los «deseos del pueblo» y los del partido o su candidato no

¹³⁸ Bernard A. WEISBERGER transcribe en la p. 260 de su obra un informe remitido el día 27 de diciembre de 1800 por el embajador británico en el que se hacía eco de este posible apoyo federalista a Burr: «*The federal party in the House of Representatives seem determined to support the choice of Mr. Burr to be the President of the United States –provided he is willing to agree to certain conditions... He is regarded by some of them as a man possessing talents at least equal to those of Mr. Jefferson, with greater energy and consistency of character—of unbounded ambition, little scrupulous about the means of attaining his object, and therefore easily induced to sacrifice a party who have supported him...only with a view of securing his interest in the state of New York*». Se ha de precisar que esa nota únicamente contiene la visión que los federalistas tenían de Burr quien, no olvidemos, había sido previamente traicionado por los propios republicanos en las elecciones de 1796.

son conceptos sinónimos)¹³⁹ y, por lo tanto, de manera inmediata calificó toda maniobra que pusiese en peligro su elección como una burla hacia la voluntad popular, olvidando –o, mejor dicho, pretendiendo olvidar– que los constituyentes no habían depositado en el pueblo la elección de tan alta magistratura. Lo paradójico es que era una Cámara de Representantes de mayoría federalista (el nuevo periodo de sesiones de dicha Cámara, ya con mayoría republicana, se iniciaría en diciembre de 1801) la que habría de elegir entre dos candidatos republicanos. Sin embargo, las noticias del empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr no se confirmaron hasta el día 18 de diciembre de 1800, de tal modo que hasta ese mismo momento Jefferson confiaba en que uno o dos compromisarios retirasen su apoyo a Burr para evitar el conflicto. No ocurrió así, y el problema jurídico-constitucional que se planteó y para el cual el texto constitucional no solo no ofrecía soluciones, sino que incluso las agravó dada la situación política del momento, dio lugar a un interesante debate epistolar. Quien con total seguridad disfrutó enormemente de la situación fue sin duda alguna Alexander Hamilton, quien de nuevo pretendió convertirse en árbitro de la situación y ajustar definitivamente cuentas políticas con su némesis, Aaron Burr. De hecho, el día 16 de diciembre de 1800, el ideólogo principal del federalismo indicaba en carta dirigida a Oliver Wolcott que en caso de conflicto debía optarse por Jefferson.¹⁴⁰ Esta epístola marcaría el inicio de una serie de misivas destinadas a orientar a favor de Jefferson el voto de los miembros federalistas en la Cámara de Representantes,

¹³⁹ Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 101.

¹⁴⁰ «Jefferson is to be preferred... As to Burr, there is nothing in his favor... He is bankrupt beyond redemption, except by the plunder of his country... He is truly the Catiline of America». Hamilton no era ni mucho menos ecuánime en todo lo referente a Burr. Un estudio bastante interesante de las personalidades de Thomas Jefferson, Alexander Hamilton y Aaron Burr lo podemos encontrar en Roger G. KENNEDY, *Burr, Jefferson, Hamilton, a study in character*, Oxford University Press USA, 1999.

si bien matizando que dicho apoyo al virginiano como nuevo presidente no sería gratuito, sino que debía otorgarse mediante la concesión por este de ciertas garantías. Con ello Hamilton pretendía contrarrestar una fuerte corriente dentro del federalismo que se inclinaba por Aaron Burr; así, por ejemplo, el federalista Timothy Pickering sostenía que debía preferirse a Burr, puesto que entonces John Marshall, a quien Adams había nombrado secretario de Estado, permanecería en dicho puesto los próximos cuatro años.¹⁴¹ No obstante, Aaron Burr estaba convencido de que no se produciría un empate alguno entre él y Jefferson, no obstante lo cual en el caso de que se diera tal circunstancia, rechazaría todo intento de competir con Jefferson por la presidencia, y así lo manifestó en carta dirigida a Samuel Smith el día 16 de diciembre,¹⁴² reiterando dichas afirmaciones en otra carta dirigida a John Taylor dos días más tarde, el 18 de diciembre.¹⁴³ Ese mismo 18 de diciembre de 1800, Jefferson refleja en carta privada a John Breckenridge el ya más que probable empate a voto compromisario y hace eco de los intentos federalistas de contrariar la «voluntad del pueblo», situando a la nación ante un abismo.¹⁴⁴ Un día después, el 19 de diciem-

¹⁴¹ BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 37. El propio Ackerman manifiesta que «A Burr-Marshall coalition would have been a formidable political force».

¹⁴² «It is highly improbable that I shall have an equal number of Votes with Mr. Jefferson; but if such should be the result every Man who knows me outh to know that I should utterly disclaim all competition [...] As to my friends – they would dishonor my Views and insult my feelings by harbouring a suspicion that I could submit to be instrumental in Counteracting the Wishes & expectations of the US», en MARY JO KLINE, *Political correspondence and public papers of Aaron Burr*, o. cit., p. 471.

¹⁴³ «...if it should happen that the two Rep. Candidates come out even, an event by no means expected no Man will join with more sincerity than I shall to place Jefferson in the Chair; and we know it to be in our power», MARY JO KLINE *Political correspondence and public papers of Aaron Burr*, o. cit., p. 473.

¹⁴⁴ «The federalist in Congress mean to take advantage of this, and either to prevent an election altogether, or reverse what has been understood to have been the wishes of the people, as to the President & Vice-president; wishes which the constitution did not permit them specially to designate. The latter alternative still gives us a republican administration. The former, a suspension

bre y en carta dirigida a James Madison, Jefferson confirma el definitivo empate a voto compromisario entre ambos líderes republicanos, lo que ha provocado el desánimo de estos y la alegría de los federalistas, mientras que el 21 de diciembre, en carta dirigida a Caesar Rodney, un cada vez más pesimista Jefferson reconoce la casi nula posibilidad de que la Cámara de Representantes aúne el voto de los nueve estados que serían necesarios para elegir a un candidato republicano como presidente de los Estados Unidos.

El 26 de diciembre, Jefferson confirmaba en carta a Madison que ya se habían recibido todos los votos compromisarios excepto los de Vermont y Kentucky, no existiendo ya duda alguna sobre el resultado electoral y el empate a voto compromisario entre los dos candidatos republicanos. En dicha misiva Jefferson se refiere al intento federalista de evitar su elección mediante la aprobación de un texto legislativo nombrando a John Jay o a John Marshall como presidente. Ante ello, los republicanos comienzan a asediar a Burr presionándole para que manifestase públicamente que, en caso de ser elegido presidente por la Cámara de Representantes, renunciaría de forma inmediata. El propio candidato a la vicepresidencia se refiere de manera expresa a estas presiones en una carta dirigida el día 29 de diciembre de 1800 a Samuel Smith, donde confiesa que uno de sus colegas le ha requerido para que hiciese público que, en caso de ser elegido presidente por la Cámara de Representantes, rechazaría el nombramiento, algo a lo que Burr ni tan siquiera se ha dignado contestar por considerarlo innecesario, irrazonable e impropio.¹⁴⁵ La actitud pública de Burr a lo largo

of the federal government, for want of a head. This opens upon us an abyss, at which every sincere patriot must shudder. La carta en *Works of Thomas Jefferson*, vol. IX, pp. 156-157.

¹⁴⁵ «...I received a great Number of letters on the subject of the election and I perceive a degree of Jealousy and distrust and irritation by no Means pleasing or flattering. The letters are however generally answered by those which I have written you; but one gentleman (of our friends) has

de toda la crisis electoral va a ser la misma que la expuesta en sus misivas privadas: negar rotundamente la intención de restar cualquier apoyo a Jefferson, pero rechazar de manera tajante el hacer pública su intención de renunciar en caso de ser elegido por la Cámara de Representantes. Es este aparentemente equívoco actuar el que, con posterioridad, hará de Burr una figura que sería objeto de rechazo tanto por federalistas como por republicanos, aunque sobre este tema nos pronunciaremos más adelante.

¿A qué se estaba refiriendo Thomas Jefferson cuando hablaba de maniobras de los federalistas para evitar su elección como presidente? ¿Acaso existía la posibilidad de que fuese elegido para el cargo un federalista (es decir, que la Cámara de Representantes tuviese una capacidad de maniobra que excediese de una mera opción entre Jefferson o Burr)? Los federalistas evidentemente barajaron la opción de otorgar su apoyo a Burr para boicotear la elección de Jefferson, pero en modo alguno circunscribieron su ámbito de actuación a dicha posibilidad, sino que trabajaron con un amplio abanico de opciones, las cuales iban desde boicotear la elección causando un vacío de poder (circunstancia para la cual el texto constitucional, como en tantas otras cosas, no solo no ayudaba a solucionar sino que ocasionaba nuevos problemas) hasta la elevación de un federalista a la presidencia e incluso la elección de una persona como presidente interino hasta la celebración de unos nuevos comicios. El texto constitucional quedó olvidado por ambas partes, que se sirvieron del mismo para sus propios intereses, manipulando su texto y su espíritu en función de criterios única y

asked me whether if I were chosen president, I would engage to resign. The question was unnecessary, unreasonable and impertinent, and I have therefore made no reply [...] I was made a Candidate against my advice and against my Will; God knows, never Contemplating or wicking the result which has appeared – and now I am insulted by those who used my Name for having suffered it to be used, Mary Jo KLINE, *Political correspondence and public papers of Aaron Burr*, o. cit., pp. 478-479.

estrictamente partidistas. Conocedores los republicanos de las diversas opciones que estudiaban los federalistas, presionaron a Aaron Burr para que se atuviese, no a las previsiones constitucionales, sino para que su comportamiento se subordinase única y exclusivamente a los intereses del partido (dado que para los republicanos, la Constitución podía ser orillada siempre y cuando las miras se orientasen hacia la «voluntad del pueblo»). El texto constitucional, que como hemos visto requería la obtención en la Cámara de Representantes del voto favorable de nueve de los dieciséis estados, ponía en manos de los federalistas diversas opciones para evitar la proclamación de un candidato republicano. La opción que parecía jurídicamente más interesante era la de bloquear la elección,¹⁴⁶ en cuyo caso había quienes entendían aplicable lo dispuesto en la sección octava de la *Act relative to the Election of a President and Vice President of the United States, and declaring the Officer who shall act as President in case of vacancies in the offices both of President and Vice President*, aprobada el 1 de marzo de 1792.¹⁴⁷ Dicho precepto legal establecía que sería el presidente pro t mpore del Senado y, en su defecto, el *speaker* de la Cámara de Representantes, quienes ocupasen la presidencia.¹⁴⁸ Ahora bien, este precepto hacía re-

¹⁴⁶ Como en tantas otras ocasiones, acudir al texto constitucional planteaba nuevos problemas. El mandato del presidente John Adams finalizaba el día 4 de marzo de 1801, fecha en la que concluía el periodo de sesiones del Congreso sin que el nuevo periodo que contaría ya con una mayoría republicana se reuniese hasta diciembre de 1801. La Constitución no ofrecía respuesta alguna respecto al camino a seguir en caso de que el 4 de marzo de 1801 no se hubiese logrado elegir un candidato a la presidencia.

¹⁴⁷ Esta norma desarrollaba los preceptos constitucionales relativos a las elecciones presidenciales. Así, su sección primera fijaba los días en que debían nombrarse los compromisarios; la sección segunda, el día en que debían reunirse, emitir los votos y certificarlos; la sección quinta, el día en que debía celebrarse la sesión conjunta del Congreso; y la sección duodécima, la fecha en que se inicia el mandato del presidente y vicepresidente.

¹⁴⁸ El precepto en cuestión disponía que «*In case of removal, death, resignation or inability both of the President and Vice President of the United States, the President of the Senate pro tempore, and in case there shall be no President of the Senate, then the Speaker of the*

ferencia a causas *ordinarias* de vacante (como una dimisión, un fallecimiento, una incapacidad, o un cese provocado –aunque no se dijera expresamente– por la aprobación de un *impeachment*), mas era dudoso que pudiera aplicarse al supuesto de que la Cámara de Representantes no pudiese llegar a un acuerdo en cuanto a la designación de un candidato de los más votados en el Electoral College. En este sentido, a finales de diciembre y a comienzos de enero tuvo lugar una interesantísima polémica jurídico-constitucional entre James Madison (defendiendo las posiciones republicanas tendentes a garantizar la investidura de Jefferson como presidente) y la de un anónimo federalista que, bajo el seudónimo de *Horatius*, intentaba desvirtuar las tesis de sus rivales políticos ofreciendo una alternativa que garantizase una presidencia federalista. Veámoslo.

James Madison, recordemos, había recibido una carta de Jefferson en la que este le exponía las maniobras federalistas tendentes a elevar a la presidencia a John Jay o a John Marshall. El 10 de enero de 1801, en respuesta a dicha misiva del candidato republicano, Madison dirige una larga carta a su jefe de filas¹⁴⁹ donde propone una solución jurídica a la crisis que garantizaría la elección de Jefferson: si la Cámara de Representantes dominada por los federalistas era incapaz de optar entre ambos candidatos, debía ser la nueva Cámara que iniciaría sus sesiones el día 4 de marzo de 1801 (y en donde los republicanos tenían garantizada la mayoría y, por tanto, la elección de Jefferson) quien debía elegir al máximo mandatario norteamericano; el propio Madison era consciente de hasta qué punto su tesis bordeaba peligrosamente los muros del texto constitucional, pero argumentaba que ante las circunstancias políticas

House of Representatives, for the time shall being act as President of the United States until the disability be removed or a President shall be elected».

¹⁴⁹ La carta puede consultarse en su integridad en *The writings of James Madison*, vol. VI, G. P. Putnam's sons, 1906, pp. 410-416.

existentes en ese momento, *la irregularidad sería estrictamente formal, y no material o de fondo*, dado que lo que se perseguía era precisamente hacerse eco de la *voluntad del pueblo*, frente a la cual las formalidades constitucionales debían ceder.¹⁵⁰ Sin embargo, Madison abrigaba la esperanza de que no fuese necesario optar por remedios tan drásticos y que la Cámara de Representantes eligiese finalmente a Jefferson con los votos de, al menos, nueve de los estados miembros. La tesis de Madison se contiene en una carta a Jefferson, es decir, en un documento privado, sin perjuicio de que dicha tesis jurídica tuviese una amplia difusión entre los simpatizantes republicanos incluso con anterioridad a la propia redacción de la misiva. Mas tan solo unos días antes había saltado a la luz pública la opción jurídica defendida por los federalistas y contenida en un artículo que, bajo el título *The presidential knot*, se publicó el día 2 de enero de 1801 y el día 6 en el *Washington Federalist*.¹⁵¹ Su autor se escondía bajo el pseudónimo de *Horatius*, y se desconoce qué prominente ideólogo federalista redactó tal artículo, más lo que sí está claro es que se trataba de un jurista de primera magnitud. *Horatius* comienza su análisis con un resumen fáctico y jurídico de la situación (empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr, traspaso de la decisión a la Cámara de Representantes según las previsiones del texto constitucional), e incluso reconoce que lo deseable sería que la Cámara alta optase por la elección de uno de ambos candidatos republicanos. No obstante, dado que el clima po-

¹⁵⁰ «*The intention of the people would undoubtedly be pursued. And if, in reference to the Constn, the proceeding be not strictly regular, the irregularity will be less in form only rather than in substance; whereas the other remedies proposed are substantial violations of the will of the people, of the scope of the Constitution, and of the public order & interest.*»

¹⁵¹ La polémica jurídica entre Madison y *Horatius* es analizada por Bruce Ackerman, para quien «*In contrast to republican hotheads, Horatius cast himself as a cool legalist seeking to resolve the crisis through the power of reason alone*», *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 42 (con un extenso estudio de la polémica constitucional en las pp. 40-54); el texto íntegro de *Horatius* se ofrece como anexo en las pp. 269-275. La tesis del Ackerman es que bajo el seudónimo de *Horatius* se escondía, en realidad, nada más y nada menos que el propio John Marshall.

lítico existente y la composición de la Cámara saliente hacían improbable tal circunstancia,¹⁵² pasaba a ofrecer un análisis jurídico sobre las posibilidades que, siempre bajo el amparo del texto constitucional, se abrían en este difícil clima. En primer lugar, se rechaza de forma expresa la tesis central de Madison (depositar la elección en la nueva Cámara de Representantes que iniciaría su mandato el día 4 de marzo), dado que el texto constitucional es claro al manifestar que dicho órgano legislativo ha de proceder a la elección *de manera inmediata*, para evitar con ello cualquier posibilidad de intriga y corrupción.¹⁵³ ¿Cuál sería entonces el procedimiento a seguir? Pues el previsto en la sección primera del artículo segundo, donde se establecía que «*Congress may by law provide for the case of removal, death, resignation or inability of both President and Vice-President, declaring what officer shall then act as President, and such officer shall act accordingly until the disability be removed or a president shall be elected.*» En cumplimiento de dicho precepto constitucional, el Congreso había aprobado el texto legal de 1792, estableciendo que sería el presidente pro t mpore del Senado o, subsidiariamente, el *speaker* de la Cámara de Representantes quienes ostentasen el cargo presidencial hasta que este fuese debidamente cubierto. Ahora bien, para *Horatius*, tales previsiones legislativas eran inconstitucionales: la sección primera del artículo segundo de la Carta Magna estaba hablando claramente de un «*officer of the United States*», y un senador no ostentaba tal categoría, razón

¹⁵² *Horatius* incluso llegaba a indicar los estados que preferían a Burr (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware and South Caroline) y a Jefferson (Georgia, Tennessee, North Caroline, Kentucky, Virginia, Pennsylvania y New York). New Jersey se mostraba indeciso aunque con serias probabilidades de inclinarse finalmente hacia Burr, al igual que Maryland.

¹⁵³ «*The choice is required to be immediately made, in order that the result may be declared in the presence of the Senate, and to prevent the possibility of intrigue and corruption. The choice must be therefore made before the house adjourns or disperses, and after the convention of the Senate and House of Representatives terminates, the house cannot at a future day act upon this subject.*»

por la cual no se podía acudir al texto legal indicado. La solución más acorde con el texto constitucional radicaba, por tanto, en que el Congreso debía actuar de forma inmediata aprobando un texto legislativo que indicase quién de entre los «*officer of the United States*» debía ocupar la presidencia hasta que una persona fuese debidamente elegida conforme a las previsiones constitucionales.¹⁵⁴ Sin embargo, el artículo en cuestión no mencionaba qué personalidad concreta debía ser quien ocupase interinamente el cargo, aunque dentro del federalismo la persona que tenía más posibilidades era precisamente John Marshall, en aquellos momentos aún secretario de Estado (puesto que ocupaba desde junio de 1800; su nombramiento como *chief justice* no llegaría hasta el día 31 de enero de 1801). El día 11 de enero de 1801 Samuel Smith escribe desde Washington D. C. a Aaron Burr una larga carta donde informa a este del clima político existente en la capital, de los rumores federalistas sobre el apoyo de estos a una posible elevación de Burr a la presidencia y, sobre todo, revelando algunos de los interrogantes planteados por «un eminente federalista» y de cuya contestación depende la resolución del contencioso presidencial, interrogantes que coinciden con los expuestos pocos días antes por *Horatius*.¹⁵⁵

¹⁵⁴ «*In a system of government so complex as the American, where many and various parts of the machinery have an opportunity of embarrassing the movements, a doubt should not be permitted concerning the rightful title of him to whom the temporary discharge of the presidential duties shall be committed – Under this impression it seems necessary for Congress to revise the existing law on this subject, and by a new law to declare what officer shall act as President, in case of a vacancy in the offices of President and Vice-President at the same time... [...] For these observations it is apparent that under the first article of the constitution, Congress have no power to supply any vacancy in the office of President, but that they derive all their power upon this subject from the second article, and that their power is completely adequate in pursuance of this article, to provide by law for the vacancy that may happen by the removal of both the President and Vice President on the 3^d of March next and the non-election of a successor in the manner prescribed by the Constitution.*»

¹⁵⁵ «*That the Idea of passing a Law was not Ideal, take the following fact – one of the Judges of the United States had the following queries sent him by a big toned fed as from his Party: 1st, In case an Election is prevented (which we can do) – would a Law designating the*

Como puede verse, todo un alarde de erudición jurídico-constitucional por ambas partes. De todas maneras, quizá todo el contencioso abierto con el empate a voto compromisario pueda condensarse en una simple frase: los federalistas planteaban que constitucionalmente existían varias posibilidades para resolver el contencioso presidencial, mientras que para Jefferson solo había una opción legítima: su propia elección.¹⁵⁶

Tras este interesante y apasionado debate jurídico-constitucional acerca de las distintas posibilidades abiertas tras el empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr, había de darse cumplimiento a las formalidades impuestas por el texto constitucional, es decir, el recuento de voto compromisario en el Senado y, en su caso, la reunión de la Cámara de Representantes a efectos de deshacer el empate a voto y elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. Así, en tan encendido clima político-social, el miércoles 11 de febrero de 1801 se abrieron las puertas del Senado para que los miembros de la Cámara de Representantes estuvieran presentes en el recuento y, en sesión conjunta, ambos cuerpos legisladores contemplasen como Thomas Jefferson, en su calidad de presidente del Senado, procediera a la apertura y recuento de los votos compromisarios. Los acontecimientos transcurrían según lo previsto hasta que, súbitamente, se plantea un contencioso en relación a los cuatro votos compromisarios del estado de Georgia, que no reunían los requisitos formales constitucionalmente exigidos.¹⁵⁷ La situación planteada en modo alguno

*Person or Officer who should Exercise de duties of President & who should be directed to call a new election forthwith, be constitutional? 2nd If constitutional would it be expedient to pass such a Law? 3rd If not expedient, which of the two gentlemen ought to be preferred?», Mary Jo KLINE, *Political correspondence and political papers of Aaron Burr*, o. cit., p. 489.*

¹⁵⁶ Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 101; James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 139-142.

¹⁵⁷ Un excelente y lúcido análisis político-jurídico de este problema y su trascendencia constitucional en Buce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o.

era baladí y suscitaba interesantes consecuencias jurídico-políticas, por una circunstancia clave; dado que el total de votos compromisarios ascendían a 138, el número mínimo de votos exigidos para la elección a la presidencia era de 70 y, por tanto, únicamente los candidatos que llegasen a tal número podrían en principio optar al cargo; en otras palabras, que en caso de empate a voto compromisario la Cámara de Representantes debería optar necesariamente entre Jefferson y Burr (ambos superaban los setenta votos), mientras que si ninguno de los candidatos alcanzaba tal cifra no habría restricción alguna y los miembros de la Cámara baja podrían elegir a cualquiera de las personas que hubiese obtenido algún voto compromisario. Lo que se estaba dilucidando, pues, a la hora de decidir si los votos de Georgia eran o no válidos era nada más y nada menos que facultar a la Cámara de Representantes para optar únicamente entre Jefferson y Burr (en el supuesto de que los cuatro votos del estado sureño fuesen reputados como válidos) o entre los cinco candidatos en el caso de excluir los votos de Georgia (dado que entonces los miembros de la Cámara baja podrían optar por Adams, Pinckney e incluso por John Jay con su único voto). Nadie se esperaba tal acontecimiento, y

cit., pp. 55-76, que cuenta además como documento fotográfico el original de los votos compromisarios de Georgia en 1801. Ackerman, tras una detallada exposición del tema, justifica la decisión de Jefferson basándose en dos circunstancias: el defecto era estrictamente formal (probablemente debido a «bad lawyering») y, en segundo lugar, a que con su actuar Jefferson evitó probablemente la paz social de la república. En cuanto a la primera de las justificaciones, entiendo que el propio Ackerman ofrece noblemente los contraargumentos que impiden considerar el defecto formal como imputable a ese «bad lawyering»: Georgia había cumplimentado correctamente y observando todos los requisitos formalmente exigidos la certificación del voto compromisario en los comicios presidenciales de 1796 y, a mayor abundamiento, otros estados del sur fronterizos con Georgia no tuvieron ninguna dificultad en remitir correctamente sus certificados. En cuanto a la segunda circunstancia, en la que Jefferson con su actuación (sin descartar en modo alguno motivaciones estrictamente personales y partidistas) evitó un conflicto bélico y garantizó la paz social, no comparto dicha tesis, que llevada a sus últimos extremos supondría la disolución del ordenamiento jurídico o su inaplicación en aras al mantenimiento de la paz social (en otras palabras, la preeminencia del hecho sobre el derecho).

Thomas Jefferson, en un comportamiento que constituyó una clara y manifiesta prevaricación, optó unilateralmente de forma inmediata y sin dar oportunidad a plantear objeción alguna, por contabilizar dichos votos como válidos a todos los efectos.¹⁵⁸ Con tal decisión, el resultado fue el esperado: Thomas Jefferson y Aaron Burr empataban a 73 votos compromisarios; distanciado de ambos John Adams con 65, Charles Cotesworth Pickney con 64 y John Jay con un único voto procedente de un compromisario de Rhode Island.¹⁵⁹ La decisión final estaba pues, como ya hemos indicado anteriormente, en manos de una Cámara de Representantes dominada por los federalistas donde estos, unos por conveniencia política¹⁶⁰ y otros por simpatía personal, preferían a Aaron Burr como presidente. Por tanto, y en estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales, ese mismo día 11 de febrero de 1801 la Cámara de Representantes se reúne para dar cumplimiento a las previsiones constitucionales y tratar de dirimir el empate a voto compromisario eligiendo de entre Jefferson y Burr¹⁶¹ a quien debía ocupar el cargo de presidente durante los próximos cuatro

¹⁵⁸ Jefferson era perfectamente consciente que, de entrar en liza Adams, Pinckney y Jay, sus opciones para ser elegido se verían notoriamente reducidas, dado que los federalistas que dominaban la Cámara de Representantes, al no verse constreñidos a decidir entre él y Burr, podrían elegir perfectamente a un presidente federalista. Como vemos, no es la primera ni será la última vez que Jefferson, cuando el ordenamiento jurídico no se acomoda a sus intereses, simplemente prescinde del mismo.

¹⁵⁹ El resultado final del escrutinio en el voto compromisario puede encontrarse en el *Journal of the Senate of the United States of America, being the first session of the sixth Congress*, Washington, Gales & Seaton, 1826, p. 125.

¹⁶⁰ Por ejemplo, el *speaker* Theodore Sedgwick, quien pese a desconfiar de Burr, prefería a este en la presidencia porque «as experienced in the politics of a mercantil estate and more receptive than Jefferson to a notion of a strong national government», John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 179.

¹⁶¹ Véase el *Journal of the House of Representatives of the United States, being the Second Session of the Sixth Congress*, Washington, Gales & Seaton, 1826, pp. 796-800 (donde incluso se identifica, agrupados por estados, a los miembros de dicha Cámara y a los portavoces designados por cada estado para el recuento de los votos emitidos) y 801-803 (sucesivas votaciones).

años. Dado que era la primera vez que se daban unas circunstancias como las presentes, la Cámara de Representantes decide adoptar un par de reglas tendentes a rodear el proceso de cierta opacidad en el caso de que se eligiese para el cargo de presidente a una persona distinta de Thomas Jefferson: en primer lugar, las votaciones se realizarían a puerta cerrada y, en segundo lugar, no se levantarían las sesiones del organismo en tanto en cuanto no se lograra deshacer el empate presidencial.

El día 15 de febrero de 1801, en carta dirigida a James Madison, el candidato presidencial Jefferson manifestaba que todo intento de los federalistas por privarle de la presidencia debía ser repelido incluso con la fuerza, mientras en el país, entre las filas republicanas, tenían lugar tanto llamadas a la calma como encendidas manifestaciones a favor de elevar a Jefferson a la presidencia incluso por la fuerza si la Cámara de Representantes no optaba por el virginiano.¹⁶² El lunes día 16 de febrero de 1801 comienzan las votaciones, arrojando la primera de ellas el resultado de ocho estados favorables a Jefferson (Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Virginia, Carolina del Norte, Kentucky, Georgia y Tennessee, es decir, los estados controlados por los republicanos), seis a favor de Burr (los federalistas New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, y Carolina del Sur) y dos (Vermont y Maryland) que se abstuvieron dada la división existente entre los representantes de tales territorios. Tal resultado se mantuvo inalterado e inmutable durante treinta y cinco votaciones, debido entre otras cosas al peculiar modo que el texto constitucional establecía a la hora de proceder en estos casos (el voto no se haría por cabeza, sino por estados, de manera que todos los representantes de un mismo estado deberían ponerse de acuerdo para emitir un único voto). Esta situación hacía de James A. Bayard, único

¹⁶² James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 156-157.

representante del diminuto estado de Delaware, árbitro de la situación, a lo que se unió la feliz circunstancia de que tal personaje fue uno de los pocos que mantuvo la serenidad a lo largo de todo el conflicto.¹⁶³ Y mientras Burr permanecía ausente de la capital estadounidense y alejado del escenario principal donde se desarrollaba todo el drama por la batalla presidencial, Jefferson optó por realizar un acto que demuestra hasta qué punto ansiaba el cargo presidencial, sin importarle los medios por los que obtuviese la ansiada poltrona: optó por solicitar del mismísimo presidente John Adams que este pusiese fin al conflicto inclinando la balanza a favor del virginiano (petición que, además de amoral, era abiertamente inconstitucional: Jefferson pretendía que un presidente en funciones influyese sobre el legislativo para inclinar la balanza). Adams rechazó de manera tajante dicha pretensión, manifestando que Jefferson tenía la victoria en su mano únicamente manifestando que respetaría la deuda pública, mantendría la Armada y no despojaría de su cargo a los empleados públicos.¹⁶⁴ De igual manera, Albert Gallatin abogaba por oponerse ferozmente a todo intento federalista de elegir a Burr o elevar a un federalista, no obstante lo cual paradójicamente acepta la celebración de unos comicios especiales.¹⁶⁵

¹⁶³ «If Delaware had sent a fool or a hothead to Congress, the nation's history might well have taken a different turn. America was lucky in Delaware's choice: although Bayard was only thirty three years of age, he was not overwhelmed by the crisis», BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 104.

¹⁶⁴ David McCULLOUGH, *John Adams*, o. cit., pp. 561-562. Aparentemente, Jefferson habría rechazado de forma rotunda el consejo de Adams sobre la base de que en su conducta pública y privada siempre habría respetado los compromisos públicos y que jamás accedería al gobierno mediante una capitulación. Bonitas palabras que no reflejan para nada el carácter de Jefferson, quien no dudó en mutar su comportamiento cuando le convenía.

¹⁶⁵ Todo el «plan Gallatin» está profusamente analizado en BRUCE ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., pp. 80-85. Gallatin jugaba con la posibilidad de que, salvo realineamiento de las fuerzas políticas en ciertos estados (que podrían conducir a un federalista a la presidencia, riesgo que el político republicano estimaba debía correrse), en

Dado lo inamovible de la situación, el representante James A. Bayard fue quien puso fin a la parálisis institucional cuando el día 16 de febrero manifestó a sus colegas que, dado el fracaso del apoyo a Burr (tanto por la división entre los estados como por la inactividad del beneficiario de tal actuación) optaba por finalizar el contencioso presidencial, anunciando que en la próxima votación optaría por otorgar su voto a Jefferson; ello motivó que los estados de Vermont y Maryland, que hasta entonces no habían logrado un acuerdo para apoyar a candidato alguno, se inclinasen a favor de Jefferson gracias a la retirada de los miembros federalistas electos por dichos territorios, mientras que Delaware y Carolina del Sur optarían por abstenerse. A la hora de mutar su criterio parece ser que influyeron en James A. Bayard las garantías que le ofreció el republicano Samuel Smith de Maryland quien, asegurando hablar en nombre de Jefferson, garantizó al representante de Delaware que el virginiano respetaría el crédito público, el banco de los Estados Unidos, la creación de la Armada y el mantenimiento en su cargo de los federalistas que ya ostentaran empleos públicos. Ha sido objeto de debate historiográfico si este ofrecimiento de Jefferson tuvo realmente lugar o no, dado que el nuevo presidente lo negó de forma categórica en sus memorias (todo sea dicho, elaboradas con bastante posterioridad a 1801) y sus manifestaciones fueron avaladas por el republicano Albert Gallatin ¡en 1848! En este sentido, James Roger Sharp sin llegar a negar la existencia de dicho pacto, indica que es posible tanto que Smith, deseoso al igual que otros republicanos de finiquitar la crisis, se excediera ofreciendo garantías que no estaba autorizado a conceder como que Bayard escuchase lo que deseaba oír.¹⁶⁶ Sea

caso de persistir el conflicto, la resolución del mismo estaría en manos del nuevo Congreso que, dado el tiempo que inevitablemente transcurriría desde esos comicios especiales, ya se colocaría en el mes de diciembre de 1801.

¹⁶⁶ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 162.

como fuere, y con independencia de la existencia o no de pacto verbal entre ambas partes, lo cierto es que durante su mandato como presidente Jefferson actuó como si el mismo existiera, lo cual sería incomprensible si el virginiano no hubiera ofrecido ciertas garantías previas¹⁶⁷ que, por otra parte, muy sospechosamente coinciden con el consejo ofrecido por el presidente en funciones John Adams a Jefferson en la inconstitucional visita que este realizó al mandatario saliente para que manipulase a miembros federalistas de la Cámara de Representantes.

Así, el día 17 de febrero de 1801, en la trigésimo sexta votación, tal y como se había acordado, se puso fin al empate, siendo diez los estados que otorgaron su voto a Jefferson (los ocho iniciales más Vermont y Maryland), cuatro los que optaron por Burr y dos que se abstuvieron (como ya se indicó, Carolina del Sur y Delaware). En consecuencia, la Cámara de Representantes declara a Thomas Jefferson presidente electo de los Estados Unidos por un mandato de cuatro años a contar desde el mediodía del 4 de marzo de 1801. De todas formas, el virginiano distaba mucho de estar satisfecho por su investidura final como presidente de los Estados Unidos, dado que en carta dirigida a James Madison el día 18 de febrero de 1801, consideraba el resultado final de la Cámara de Representantes como una declaración de guerra.¹⁶⁸ No obstante, la crisis política estaba, finalmente, abortada y el día 4 de marzo de 1801 los Estados Unidos podrían celebrar a Thomas Jefferson como su nuevo presidente.

¹⁶⁷ Esta es, por otra parte, la tesis de Jennifer Van Bergen en su artículo tantas veces citado.

¹⁶⁸ «*Apparently it was not enough for his opponents to give him the presidency; they should have done so by affirmatively joining in a universal acclamation of his merits. To do less as to declare war*», Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 92. Ello nos da una idea de la vanidosa personalidad de Jefferson y de la sinceridad de sus manifestaciones de desapego de todo cargo.

4. Aaron Burr y las elecciones presidenciales de 1800

*The key player in this election drama was Aaron Burr.*¹⁶⁹

Como bien indica James Roger Sharp, el personaje decisivo en el conflicto electoral fue precisamente Aaron Burr, tanto por el papel clave (más como sujeto pasivo que activo) como por el hecho de que este fue precisamente el clímax o momento culminante de su carrera política. Es por ello necesario detenerse brevemente en esta interesantísima figura histórica y en su papel decisivo en este drama político. En efecto, históricamente, los comicios presidenciales de 1800 están ligados de forma inevitable a quien fuera el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos en dichos comicios, es decir, a Aaron Burr. Con ello no quiere decirse que el empate a voto compromisario tuviese su origen única y exclusivamente en la personalidad de los candidatos, pues tal circunstancia se hubiese producido más tarde o más temprano y hubiera devenido en inevitable, fuesen quienes fueran las personas que hubiesen concurrido a los comicios presidenciales, dado que el origen del conflicto es imputable más que nada al texto constitucional. Ahora bien, dejando bien sentada tal circunstancia, es evidente e históricamente innegable que la figura de Aaron Burr proyectó su sombra durante los meses de enero y febrero de 1801, cuando se le acusó no solo de tener oscuras ambiciones a la presidencia, sino de intentar privar a Jefferson de dicho cargo contraviniendo con ello la voluntad del pueblo. ¿Hay algo de cierto en tales afirmaciones? ¿Intentó Aaron Burr, efectivamente, dar un golpe de mano y lograr un acuerdo con los federalistas para ser investido presidente en lugar de Jefferson? Lo analizaremos con detenimiento en este epígrafe, si bien, dado que Burr no es una

¹⁶⁹ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., p. 133.

figura tan universalmente conocida como puedan serlo Adams, Jefferson o Hamilton, quizá sea necesario ofrecer, siquiera sea de forma sucinta, una aproximación a esta interesantísima figura política.

4.1. *La (¿enigmática?) personalidad de Aaron Burr*¹⁷⁰

Es muy curioso, pero hasta hace escasos años se podía decir que a Aaron Burr le había ocurrido lo mismo que a otra relevante e interesantísima figura de nuestra historia: el general Ramón María Narváez y Campos. En su desgraciadamente inconcluso estudio dedicado al general Narváez, Jesús Pabón se lamentaba:

El fenómeno resulta, a primera vista, desconcertante. La importante personalidad de Narváez ha producido una escasísima historiografía. Los estudios a él dedicados directamente se cuentan con los dedos de una mano aún prescindiendo de distinciones sobre la extensión del carácter y la valía de lo producido. Y hay que partir de esa realidad: Narváez, sin historia, quedó para nosotros entre la leyenda y la literatura,¹⁷¹

¹⁷⁰ La biografía más reciente y, sin duda alguna la mejor aproximación a la interesantísima y aventurera figura de Aaron Burr, es la debida a Nancy ISENBERG, *Fallen Founder, the life of Aaron Burr*, Penguin, 2007, un trabajo verdaderamente ejemplar por muchos motivos. Otra buena aproximación biográfica, finalista del premio Pulitzer, es la obra en dos tomos de Milton LOMASK, *Aaron Burr: The years from Princeton to vicepresidency (1756-1805)*, Farrar Straus & Giroux, 1979; y *Aaron Burr: Conspiracy and the years of exile (1805-1836)*, Farrar Straus & Giroux, 1982. Es igualmente destacable la obra en dos tomos de Matthew L. DAVIS, *Memoirs of Aaron Burr*, reeditada por Dodo Press en el año 2009. El archivo de Burr fue publicado en 1983 por Mari Jo KLINE en *Political correspondence and public papers of Aaron Burr*, (dos volúmenes), Princeton University Press, 1983. Una interesante aproximación al personaje desde el ámbito literario, aunque con varias licencias y anacronismos históricos, la tenemos en la excelente novela de Gore VIDAL, *Burr*, o. cit.

¹⁷¹ Jesús PABÓN, *Narváez y su época*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 52. Un ejemplo concreto ofrecido por el profesor Pabón demuestra hasta qué punto la leyenda que rodea al personaje no es en absoluto coincidente con la realidad histórica. La leyenda cuenta que, en

siendo la inmediata consecuencia que la visión que tiene el gran público de Narváez está gravemente deformada al proceder de fuentes literarias y legendarias, no coincidentes con la imagen real de Narváez que se desprende del riquísimo archivo obrante en la Real Academia de la Historia (ordenado y catalogado por el propio Pabón) y que permite atisbar la verdadera personalidad de uno de los estadistas más brillantes del siglo XIX español.

Algo parecido ocurre con Burr, dado que en las páginas iniciales de su reciente estudio dedicado al personaje, Nancy Isemberg se lamenta de la escasa historiografía dedicada al mismo, lo que ha provocado que su figura quede abandonada a la literatura y a la leyenda. Pero (y en este punto no ocurre lo mismo que con Narváez, quien, como hemos indicado anteriormente, legó a la posteridad un voluminoso archivo), a diferencia de otros padres fundadores como Washington, Adams, Jefferson, Hamilton y Madison, que bien han dejado una copiosísima obra escrita o bien han tenido una prole que asumió gustosa la tarea de defender la memoria de sus ancestros, Aaron Burr no dejó tras de sí escrito alguno en el que repudiese los ataques que sufrió en vida y, además, careció

su lecho de muerte, Narváez manifestó que no podía perdonar a sus enemigos porque los había «matado a todos»; dicho mito es desmontado tajantemente por Pabón, con prueba documental en mano, al narrar la intervención directa que el general realizó solicitando el perdón de Juan María Géroles, principal instigador del atentado que se perpetró contra Narváez el 6 de noviembre de 1843, cuya ejecución, por cierto, guarda paralelismos increíbles con el que tan solo veintisiete años después costara la vida al general Juan Prim. En respuesta a una solicitud escrita que le había dirigido la mujer de Géroles, Narváez no solo declara por escrito que «con mucha satisfacción mía declaro en este escrito que perdono el hecho a que se refiere la desgraciada esposa de Juan María Géroles, a quien hace tiempo, desde que el suceso tuvo lugar, le había perdonado en mi corazón», sino que va más allá: «para que en lo sucesivo, no tenga necesidad de acudir a mi cualquiera que se encuentre en este caso, declaro que, no solo perdono a todos los complicados en este hecho, sino que pido para ellos gracia a S. M. Y que será para mí la mayor satisfacción el que tengan término los sufrimientos de los desgraciados que hayan podido causarme cualquier daño u ofensa». La directa intervención de Narváez trajo consigo el inmediato indulto de Géroles.

de descendencia directa que pudiese vindicar su figura ante el gran público (su hija y su nieto fallecieron trágicamente en un naufragio, en el que se perdieron igualmente gran parte de sus papeles privados). Ello trajo una doble consecuencia: en primer lugar, la deformada imagen que de este peculiar e interesantísimo personaje se tenía hasta hace relativamente poco, al provenir la misma de textos y publicaciones de rivales políticos cuando no de enemigos directos; la segunda, que la historia dejó el campo libre a la literatura para que la figura de Burr se convirtiese en un personaje novelesco. Su biógrafo oficial, Matthew L. Davis, que tuvo a su disposición el archivo privado de Burr y que utilizó copiosamente para la redacción de las *Memoirs of Aaron Burr*, reconoció abiertamente en la introducción a dicha obra que destruyó personalmente gran parte de la correspondencia para evitar que ciertas reputaciones pudieran verse comprometidas. Pese a todo, hoy en día podemos decir que existen ya varios ensayos biográficos que han renunciado a ofrecer la arquetípica y deformada imagen de Burr para situar al personaje en el lugar que merece en la historia, que no es otro que el de uno más de los héroes de la revolución y de los padres fundadores, con las mismas virtudes y defectos que el resto de sus coetáneos.

Aaron Burr Jr. nació el día 6 de febrero de 1756 en Newark, Nueva Jersey, y fue el segundo vástago del matrimonio formado por Aaron Burr Snr. y Esther Edwards Burr, quienes dos años antes habían tenido su primera hija, Sally. De todos los padres fundadores de los Estados Unidos, Aaron Burr era quizá el único que podría presumir de formar parte de una familia situada en la élite intelectual de las colonias británicas. Su padre fue el rector del College of New Jersey y su abuelo materno, Jonathan Edwards, uno de los más reputados teólogos del continente americano y autor de innumerables y severas admoniciones en forma de sermón que tendían a hacer ver la gravedad del pecado

(baste indicar algunos de los títulos de sus predicaciones, *The justice of God in the damnation of sinners* o *Sinners in the hands of an angry God*).¹⁷² Sin embargo cuando apenas contaba con dos años de edad, Burr ya había perdido a casi toda su familia, pues en septiembre de 1757 fallecía su padre, en marzo de 1758 su abuelo materno, en abril de 1758 su madre y en octubre de ese mismo año su abuela materna. Acogidos temporalmente por William Shippen, un amigo de la familia, dos años después, en 1760, Aaron Burr y su hermana fueron llevados a Stockbridge, en Massachusetts, para ser acogidos por su tío materno, Timothy Edwards, quien apenas dos años más tarde se trasladó con toda su familia a Elizabethtown, en Nueva Jersey, donde comenzó a ejercer como abogado. Allí el pequeño Aaron Burr creció rodeado de sus primos Mathias y Aaron Odgen y trabó amistad con Jonathan Dayton. Como responsable de la educación de los niños sometidos a su tutela, Timothy Edwards contrató a Tapping Reeve como preceptor del joven Burr, y, cuando este alcanzó la edad para ello, solicitó el ingreso en Princeton, donde se graduó en 1772. Un año más tarde comienza los estudios para convertirse en sacerdote, pero súbitamente muda de opinión y se inclina hacia la carrera jurídica, por lo que decide acudir a Litchfield y entrar en el despacho de su antiguo preceptor y ahora cuñado Tapping Reeve, quien había contraído matrimonio con Sally, la hermana de Burr.

Tras los sucesos de Lexington y Concord, Aaron Burr y su amigo Mathias Odgen se trasladan en agosto de 1775 a Cambridge, Massachusetts, para enrolarse como voluntarios en el recién creado ejército continental y es allí donde entran a formar parte de la expedición de Benedict Arnold para la invasión de Canadá. Durante los años en que Burr estuvo en el ejérci-

¹⁷² Puede accederse a los sermones de Jonathan Edwards en internet, en el enlace <http://www.reformedsermonarchives.com/EdwardsTitle.htm> (consultado el día 13 de mayo de 2010).

to (1777-1779) se comportó heroicamente a lo largo de todos esos años y, según su biógrafa Nancy Isemberg, Burr tuvo la extraña habilidad de resolver problemas logísticos de una manera rápida y eficaz, pero sin ofender a los oficiales superiores. Y así, el día 31 de diciembre de 1775 realizó su primera hazaña al intentar rescatar el cuerpo inerte del general Montgomery, caído en el asalto a Quebec ese mismo día, hecho que le valió una gloriosa mención en el poema de Hugh Henry Brackenridge «*The death of general Montgomery*» (aunque en la célebre pintura de John Trumbull no aparezca Burr y, por el contrario, se sitúe en su lugar a Mathias Odgen, que, cosas del destino, no se encontraba allí en ese momento). Posteriormente, en junio de 1776 llega a Nueva York, donde en ese momento se encuentran los cuarteles de George Washington –con quien Burr nunca llegó a congeniar–, siendo destinado como ayuda de campo del general Israel Putnam, bajo cuyas órdenes se distinguió en la evacuación de las tropas americanas en dicha ciudad, al salvar toda una brigada de caer en manos enemigas. Tras la conquista de Nueva York por los británicos, Putnam y Burr son enviados a Filadelfia a reforzar las defensas de la ciudad. El 27 de junio de 1777 Burr recibe de Washington su primer y único ascenso al ser nombrado teniente coronel y destinado al mando del coronel Malcom. En la batalla de Montmouth la artillería británica destroza sus tropas y el propio Burr sufre un colapso del que no llegó a recobrase del todo. En enero de 1779 es transferido a Wetchester County a las órdenes del general McDougal, pero el mes de marzo de ese mismo año Burr dirige una carta a George Washington donde le indica que su estado de salud le impide continuar su tarea y, en consecuencia, abandona su condición.¹⁷³ En esta época conoció a Theodosia Prevost, una

¹⁷³ La actuación de Burr en la guerra de Independencia norteamericana no solo es considerada heroica, sino brillante. George Lee HASKINS & Herbert A. JOHNSON, o. cit., p. 248.

mujer diez años mayor que él, con quien contraería matrimonio en 1783. Y es que, pese a la reputación donjuanesca que siempre persiguió a Burr, este siempre mostró un absoluto e inusual respeto y consideración por el sexo femenino, como demostró en numerosas ocasiones a lo largo de su vida.

Finalizada la contienda bélica, Aaron Burr se dedicó a ejercer profesionalmente como abogado, colegiándose como tal en 1782. Beneficiado por una legislación que prohibía a los *tories* (es decir, aquellos ciudadanos que en la guerra de Independencia se mostraron partidarios de los británicos) el ejercicio profesional, inició una carrera en la cual el éxito le acompañó durante toda su vida, dado que Aaron Burr fue siempre un abogado brillante y de gran éxito en el foro. Curiosamente durante todos esos años se enfrentó profesionalmente a Alexander Hamilton en numerosas ocasiones, con la particularidad añadida de que en estos primeros años de la naciente República, en gran parte de las ocasiones Hamilton se encargaba del asesoramiento y defensa profesional de intereses de adinerados *tories* mientras que los clientes de Burr eran *whigs* (antibritánicos). Es en 1784 cuando Aaron Burr entra en el mundo de la política al ser elegido miembro de la Asamblea de Nueva York donde, entre otras cosas, abogó por la emancipación de todos los esclavos existentes en el *Empire State*. Tras la adopción de la Constitución federal y un realineamiento de las fuerzas en Nueva York, que llevó al *whig* antifederalista George Clinton al puesto de gobernador estatal, Aaron Burr es nombrado en 1789 *Attorney General* de dicho estado, puesto en el que permanece hasta el año 1791, donde decide optar al cargo de senador por Nueva York, que logra conseguir derrotando nada más y nada menos que a Philip Shuyler, el suegro de Alexander Hamilton. Este golpe de éxito político resquebrajó para siempre las relaciones entre Burr y Hamilton, quien jamás logró digerir lo que consideró siempre un fracaso personal. Es en estos momentos, como

miembro del Senado y con pleno acceso a los archivos federales, cuando Aaron Burr intenta elaborar una historia de la revolución, aunque al poco tiempo el secretario de Estado, por entonces Thomas Jefferson, le denegó el acceso a los archivos, al parecer por órdenes de Washington. Su imparable ascenso en la política hace que se piense en él como candidato a ocupar la vicepresidencia en las elecciones de 1792, pero su relativa juventud hace que su nombre sea pronto rechazado.¹⁷⁴ Es en 1795 cuando, en dos sátiras políticas, Burr es objeto de un durísimo ataque personal en el cual por vez primera se le describe como un intrigante, en lo que desde ese momento se convertirá en una constante en su vida.¹⁷⁵ Y es que durante todo ese tiempo Aaron Burr se mostró no como un ideólogo férreamente vinculado a unas rígidas estructuras de facción o partido, sino que prefirió vincularse a unos principios dentro del republicanism, principios que no le impedían en ocasiones puntuales alinearse con los federalistas. En las elecciones presidenciales de 1796 concurre como aspirante a ocupar la vicepresidencia de la mano de Thomas Jefferson, pero a la hora de emitir sus votos los compromisarios del estado de Virginia le retiraron su apoyo en una maniobra que Burr consideró una traición. En el año 1797 pierde su asiento en el Senado y es nuevamente elegido para la Asamblea Legislativa de Nueva York, lugar desde el que contempla las encarnizadas luchas políticas que tuvieron lugar bajo la conflictiva presidencia de John Adams. Durante todos esos años Aaron Burr había logrado construir en el estado de Nueva York una vasta y eficaz maquinaria política que, como hemos visto, fue decisiva a la hora de inclinar las elecciones

¹⁷⁴ «*If Mr. Burr was in every way inexceptionable [...] it would be impossible to have him elected. He is too young, if not in point of age, yet upon the public theatre...*», carta de Monroe a Madison (9 de octubre de 1792), citada en Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 84.

¹⁷⁵ Nancy ISENBURG, *Fallen founder*, o. cit., pp. 138-139.

presidenciales de 1800 y poner fin a once años de dominio federalista. Cuando saltan a la luz pública los rumores acerca de un posible empate a voto compromisario entre Jefferson y Burr y, sobre todo, cuando se confirma tal situación, todos los ojos se concentran en el político neoyorquino. Los republicanos esperan que manifieste públicamente que en caso de ser elegido presidente por la Cámara de Representantes renunciaría al cargo a favor de Thomas Jefferson, mientras que los federalistas contemplaban a Burr como una opción en modo alguno descartable.

4.2. *El papel de Aaron Burr durante el conflicto presidencial de 1800*

La tesis general que domina la mayor parte de la historiografía en torno a las elecciones de 1800 considera que Aaron Burr, una persona sin escrúpulos, trató infructuosamente de llegar a un acuerdo con los federalistas para arrebatarse la presidencia a Thomas Jefferson, contraviniendo así los deseos del pueblo que se había manifestado claramente a favor del virgiano (quien, por el contrario, no deseaba alzarse con el cargo a costa de un pacto con sus rivales políticos). ¿Podemos considerar esta tesis como históricamente acertada? A tenor de los hechos, el autor de estas líneas considera que tal consideración no es jurídicamente defendible. En primer lugar, porque no es cierto que Burr fuese una persona sin escrúpulos políticos o, cuando menos, no era mejor ni peor que personajes de la talla de los propios Jefferson o Hamilton, quienes en modo alguno escatimaban el sobrepasar la barrera de la moral, de la ley o de la propia Constitución a la hora de alcanzar sus objetivos políticos; y, en segundo lugar, porque, aunque parezca increíble, Burr no solo no movió un dedo para alzarse con la presidencia (pese a tener la posibilidad de hacerlo y haber sido requerido por

varios correligionarios y rivales para que manipulase los hechos en su favor) sino que rechazó todo acuerdo con los federalistas algo que Jefferson pese a sus ostentosas y grandilocuentes manifestaciones acabó finalmente aceptando. Esa imagen de un Burr corrupto y sin escrúpulos fue difundida inicialmente por el siniestro Alexander Hamilton (personaje cuyo odio por Burr llegó a ser patológico) y fue asumida a partir de 1801 por los republicanos (a instancias de Jefferson, quien desde entonces adoleció de un incurable resentimiento hacia su vicepresidente) pero no es en modo alguno adecuada a la realidad histórica, ni la actitud de Burr durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 1800 y el 4 de marzo de 1801 estuvo dirigida a obtener la presidencia a cualquier precio. Quizá la mejor forma de analizar la actuación del político neoyorquino sea atenernos a dos cuestiones indubitadas: sus manifestaciones epistolares y sus actos durante el conflicto. Es prácticamente imposible juzgar o medir las intenciones de una persona, por lo que únicamente puede tomarse en consideración la palabra escrita o las actuaciones fácticas. A tales aspectos, pues, nos atenderemos.

Comencemos por los diálogos epistolares mantenidos por Burr durante los casi dos meses que separan el 15 de diciembre de 1800 y el 17 de febrero de 1801, siguiendo un criterio estrictamente cronológico (pues en este sentido acierta totalmente James Roger Sharp cuando indica que la cronología es fundamental para la comprensión de estos acontecimientos).¹⁷⁶

Durante el mes de noviembre de 1800 Aaron Burr tuvo una activa correspondencia con Pierpont Edwards en la que iba desgranando las perspectivas, las previsiones y los resultados del voto compromisario de cada estado según los resultados

¹⁷⁶ Todas las citas relativas a la correspondencia emitida y recibida por Burr proceden de Mary Jo KLINE, *Political correspondence and public papers of Aaron Burr*, vol. I, Princeton University Press, 1983, en concreto entre las pp. 459 y 505.

oficiosos que iban llegando, lo que inclinó al político neoyorkino a manifestar en carta a Charles Biddle fechada el día 10 de diciembre que, según sus fuentes de información, el estado de Carolina del Sur elegiría compromisarios republicanos, dado lo cual «*if so, he [Jefferson] is elected President*». El día 15 de diciembre de 1800, aún con la esperanza de que el empate a voto compromisario no se produjese, Burr recibe una sinuosa y ambigua carta a su *running mate*, Thomas Jefferson. En dicha misiva pueden distinguirse tres partes bien diferenciadas: en la primera, el virginiano se congratulaba del ya seguro triunfo de la candidatura republicana, confiando en que no se produjese el empate a voto compromisario merced a la retirada de uno o dos votos del candidato a vicepresidente;¹⁷⁷ en segundo lugar, prevenía que en caso de empate la Cámara de Representantes federalista estaba dispuesta a bloquear la elección de un republicano para la presidencia y nombrar para dicho puesto a un candidato de la facción rival

several of the high flying federalist have expressed their hope that the two republican tickets may be equal & their determination in that case to prevent a choice by the H. of R. [which they are strong enough to do] and let the government devolve on a President of the Senate, decency required that I should be so entirely passive during the late contest that I never once asked whether arrangements had been made to prevent so many from dropping votes intentionally as might frustrate half the republican wish;

¹⁷⁷ En concreto, esperaba que un voto de Carolina del Sur no fuese a parar a Burr. De igual manera le indicaba que el general Smith, de Tennessee, otorgaría el segundo voto a Albert Gallatin: «*not from any disposition towards you, but extreme reverence to the character of Mr. G*». Jefferson también prevenía a Burr sobre la posibilidad de que Georgia retirase varios votos compromisarios del candidato a vicepresidente, mas aun así obtendría 4 o 5 votos de ventaja sobre John Adams.

por último, tras felicitar a Burr y reconocer su decisiva contribución al triunfo republicano, deslizaba una frase que se avenía a las más variadas interpretaciones, al lamentarse de la pérdida de Burr en la nueva Administración Jefferson dejando un vacío que sería difícil cubrir: *«I feel most sensibly the loss we sustain of your aid in our new administration, it leaves a chasm in my arrangements, which cannot be adequately filled up»*. ¿Qué motivaba el lamento de Jefferson por la «pérdida» de Burr? Claramente no se referiría al cargo de vicepresidente, dado que el mismo no formaba parte del gabinete, como sin duda alguna Adams y el propio Jefferson sabían por experiencia propia. ¿A qué puesto en la Administración se refería, pues, el virginiano?¹⁷⁸ Quizá con total seguridad, como apunta Isenberg, el deseo de no perder el apoyo de Burr y sus bases políticas del estado de Nueva York, que eran las que habían inclinado la balanza electoral a favor de Jefferson.

Aaron Burr, antes de responder a Jefferson, aún redacta un par de misivas tendentes a rechazar de forma expresa todo intento de aspirar al cargo presidencial. La primera, fechada el

¹⁷⁸ La valoración de esta carta merece el siguiente comentario de Jennifer VAN BERGEN: *«As for Jefferson, considering what happened subsequently, this letter must have later embarrassed him, if only in his own eyes before Burr and his many friends. Here was Jefferson saying with the utmost politeness and decorum, which under most circumstances would have been viewed as a high compliment from a great leader, that he was sorry to have lost Burr from the list (and interesting choice of words), when in another month it looked like Burr might become the next president. Given, also, as I observed above, that Burr was in a position of relative power, while Jefferson was in a position of relative dependence, this letter must have been even more humiliating for Jefferson»*, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., pp. 110-111. Para Nancy Isenberg, por su parte, *«Jefferson dreaded a tie. He wrote with hesitation. He flattered Burr, regretting the chasm in his plans if events made it such that Burr would not be able to serve in his cabinet. His cabinet? What was the presumptive president saying to his future vice president? Perhaps he was reflecting on the unimportance of the vicepresidency, the position he himself still occupied. Or perhaps he was preparing Burr for electoral defeat, assuring him that he would not be overlooked if somehow Adams still ended up with more votes. It is also possible that Jefferson was simply trying to prude Burr into agreeing not compete with him, if the election did in fact end in a tie. Jefferson was covering all possibilities. He did not wish to alienate Burr (or his New York supporters)»*, *Fallen founder*, o. cit., pp. 206-207.

día 16 de diciembre, va dirigida a Samuel Smith, y manifiesta que considera hartamente improbable la posibilidad de que se produzca un empate a voto compromisario, no obstante lo cual, de producirse tal circunstancia, rechaza de forma tajante que vaya a disputarle la presidencia a Jefferson, indicando de forma expresa que el destinatario de la carta será el encargado de manifestar tal circunstancia si ello fuese necesario,¹⁷⁹ ideas que reproduce nuevamente en la carta que un par de días más tarde dirige a John Taylor, con la diferencia de que en esta última consigna de forma expresa una idea clave: que está en manos de los propios republicanos el que Jefferson sea elegido.¹⁸⁰ Tras esas dos misivas, el 23 de diciembre Burr contesta a la misiva que Jefferson le dirigiera el día 16 de dicho mes; en un estilo mucho más directo y claro que el oscuro y sinuoso utilizado por Jefferson, se pronuncia en términos mucho más optimistas que los del virginiano, y le manifiesta a este lo que ya adelantara en cartas a Samuel Smith y John Taylor, es decir, que no tiene intención alguna —y es un hecho que conocen todos sus allegados— de competir con Jefferson para alcanzar la presidencia, para concluir en relación a su futuro político que está dispuesto a renunciar a la vicepresidencia en aras de un puesto como secretario en el gabinete o como embajador en cualquier país europeo.¹⁸¹ No deja de ser curioso este intercambio de misivas

¹⁷⁹ «*It is highly improbable that I shall have an equal number of Votes with Mr. Jefferson; but if such should be the result every Man who knows me ought to know that I should utterly disclaim all competition.—Be assured that the federal party can entertain no wish for such an Exchange. As to my friends— they would dishonor my Views and insult my feelings by harbouring a suspicion that I could submit to be instrumental in Counteracting the Whishes & Expectations of the U. S. —And I now constitute you my proxy to declare these sentiments if the occasion shall require.*»

¹⁸⁰ «*If it should happen that the two Repub. Candidates come out even, an event by no means expected, no Man will join with more sincerity than I shall, to place Mr. Jefferson in the Chair; and we know it to be in our power.*»

¹⁸¹ «*As to myself, I will cheerfully abandon the office of V. P. if it shall be thought that I can be more useful in any Active station.*». La respuesta de Aaron Burr puede encontrarse en

entre las dos personalidades, pues quizá de aquí parta la antipatía (cuando no enemistad manifiesta) que desde entonces profesaría Thomas Jefferson hacia Aaron Burr, antipatía que con total seguridad procede de lo que Van Bergen denomina «profundo y personal secreto de Jefferson» que en realidad sería un complejo de inferioridad ante Burr: la cobardía del primero frente al heroísmo del segundo.¹⁸² El día 24 de diciembre Burr recibe una curiosísima carta de Robert Godloe Harper en la que le manifiesta que defenderá los intereses de Burr,¹⁸³ que las posibilidades están en sus manos, a la vez que le avisa de que no conteste a dicha carta ni otra que le pueda ser dirigida por federalistas aconsejándole igualmente que no escriba a nadie del partido; no obstante, ese mismo día Burr escribe dos misivas, una a Samuel Smith, manifestándose ofendido por quienes duden de los criterios que regirán su conducta,¹⁸⁴ y otra a Ambrose Spencer, en la que se refiere en términos especialmente duros contra los federalistas.¹⁸⁵ Cuatro días más tarde, en carta

Political correspondence and public papers of Aaron Burr, o. cit., vol. I, pp. 473-474. Frente al pesimismo de Jefferson, destaca el optimismo de Burr, quien indica que, en el hipotético supuesto de llegar el asunto a la Cámara de Representantes, estaba convencido de que no habría dificultad en obtener los votos necesarios para la elección de Jefferson («*I see no reason to doubt of your having at least nine States if the business shall come before the H__ of Reps*»).

¹⁸² «*In essence, Jefferson revealed a deep, personal secret to Burr—that he was afraid and vulnerable. Jefferson revealed this fact to a man who had long since conquered his own fears, and Jefferson knew this. Burr’s courage and daring were well known, while the specter of Jefferson’s cowardice had just recently risen again*». De hecho, en los momentos en que los federalistas barajaban un apoyo a Burr, uno de los motivos esgrimidos para sostener dicho apoyo fue el brillante historial militar del neoyorkino.

¹⁸³ «*I advise you to take no step whatever by which the choice of the House of Representatives can be impeded or embarrassed. Keep the game perfectly in your hand; but do not answer this letter or any other that may be written to you by a federalist; nor write to any of that party.*»

¹⁸⁴ «*I think I could hardly forgive any democrat who could for a Moment doubt about the lie of Conduct I shall pursue – But I have not now time to quarrel with Phantoms.*»

¹⁸⁵ «*I have & do consider these events as among the greatest incidents of the age. They are clearly indicative of the abhorrence of the people of America to the system adopted by our political adversaries, a system which if not totally changed could not have failed of destroying our excellent republican government & on its ruin of establishing at least an aristocracy. The system pursued too, was vile in many other respects...*»

a Samuel Smith, fechada en Trenton el día 29 de diciembre, aborda de nuevo el tema de su actuar en caso de ser elegido por la Cámara de representantes, manifestando que en tal supuesto no renunciaría, justificando su proceder básicamente porque está seguro de que esa posibilidad no se producirá.¹⁸⁶ De hecho, Burr se mostraba seguro de una victoria de Jefferson en la Cámara de Representantes en sendas misivas que, desde Albany (a donde había acudido al enlace matrimonial entre su hija Theodosia y Joseph Alston) dirigió a Samuel Smith¹⁸⁷ el día 4 de febrero y a Albert Gallatin¹⁸⁸ el día 12, en la expresaba su confianza en que Jefferson obtuviese el voto favorable de diez o doce estados en la primera votación; los hechos demostraron que Burr pecaba de optimista.¹⁸⁹

Hasta ahora hemos visto las manifestaciones privadas de Burr, es decir, las realizadas en cartas y misivas privadas dirigidas a amigos y correligionarios. ¿Cuál fue la actuación pública del neoyorkino a lo largo del conflicto presidencial? Pues fue una actitud absolutamente pasiva, distante y silente. Es altamente significativo que no solo no realizase manifestación pública al-

¹⁸⁶ «*The question was unnecessary, unreasonable and impertinent, and I have therefore made no reply. If I had made any I should have told that as at present advised, I should not [...] God knows, never Contemplating or wishing the result which has appeared – and now I am insulted by those who used my Name for having suffered it to be used.*» Esta misiva deja traslucir, de forma clara, cierta ira contenida en Burr, y quizá sus manifestaciones deban ponderarse con ese factor del justo enojo: hasta en dos ocasiones había manifestado ya por escrito su intención de evitar cualquier conflicto con Jefferson, no obstante lo cual el solícito Smith no paraba de abrumarle con misivas exigiéndole una manifestación pública que el neoyorkino consideraba innecesaria.

¹⁸⁷ «*There nev[er] appeared to me much reason to doubt of J having Ni[ne] or ten Votes on the first Trial – but your Nerves were a little out of order.*»

¹⁸⁸ «*My letters for ten days past had assured me that all was settled & that no doubt remained but that J. would have 10 or 11 votes on the first Trial.*»

¹⁸⁹ Hubo otro intercambio de misivas entre Thomas Jefferson y Aaron Burr durante estas fechas. El virginiano se dirige por carta a Burr el 1 de febrero de 1801 para deshacer un equívoco en relación a unas presuntas expresiones injuriosas que Jefferson habría plasmado hacia Burr en una carta dirigida al juez Brackenridge. Burr le contestó el 12 de febrero indicando que no había dado crédito a tales imputaciones.

guna, directa o indirecta, que indicase su disponibilidad a optar al cargo presidencial, sino que incluso su propia ubicación durante el conflicto (en Nueva York, durante el mes de diciembre, y en Albany, durante los días de febrero en que la Cámara de Representantes tuvo en su mano la elección del jefe ejecutivo), alejado de los centros de poder pese a que sus partidarios le instaron a desplazarse a la capital para defender personalmente sobre el terreno sus intereses.

Tenemos, pues, ya a la vista la actuación pública y privada de Burr durante los meses en que se desarrolló la contienda presidencial. ¿Cómo debe valorarse, pues, su actitud durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 1800 y el 4 de marzo de 1801? ¿Era sincero cuando manifestaba su rechazo a todo intento de competir con Thomas Jefferson para obtener la presidencia, o su negativa a manifestar públicamente que renunciaría al cargo en caso de ser elegido por la Cámara de Representantes encubría un oculto deseo de acceder a tan alta magistratura? ¿Fue Burr un arribista sin escrúpulos cuya ambición secreta era alzarse con la presidencia, descabalgando a Thomas Jefferson y contraviniendo con ello los deseos del pueblo? A raíz de lo expuesto en los párrafos anteriores, considero que las acusaciones vertidas contra Burr son inconsistentes y faltas de prueba. He aquí las principales razones que me llevan a dicha conclusión:

1. Tanto amigos como detractores de Burr coinciden en que, con independencia de la valoración que se hiciese sobre su carácter o sus motivaciones, el mismo era una persona brillantísima y un político experimentado; los historiadores de hecho han llegado a manifestar que el político neoyorkino tenía una concepción de la política que la acercaba más a patrones modernos que clásicos. Primer dato, pues, a tener en cuenta: Burr era un político sagaz y experimentado, curtido tanto a nivel estatal (*attorney general* y miembro de la Asamblea

- legislativa de Nueva York) como federal (senador por el *Empire State*).
2. Durante el conflicto manifestó hasta en dos ocasiones por escrito (las cartas fechadas el 16 y 18 de diciembre de 1800 a Samuel Smith y a John Taylor) su deseo de no competir con Jefferson. A mayor abundamiento, en las cartas que el 4 y 12 de febrero de 1801 dirigió a Smith y a Albert Gallatin manifestaba por escrito de forma indubitada que Jefferson obtendría una victoria clara en la Cámara de Representantes. Es evidente, y es un hecho público y notorio, que en dicha época las misivas privadas que se dirigían los padres fundadores en muchas ocasiones saltaban a la luz pública, razón evidente por la cual Burr no consideraba necesario manifestar en público lo que había indicado en numerosas ocasiones en privado.
 3. Durante todo el conflicto, Jefferson se encontraba en pleno centro del huracán político, lo que le permitía manipular en su propio beneficio los acontecimientos, prevaliéndose para ello de su condición de vicepresidente y presidente del Senado. Burr, por el contrario, permaneció todo el mes de febrero en Albany, celebrando el enlace matrimonial de su hija Theodosia, y pese a que su presencia fue requerida en la capital, Burr no se desplazó a Washington. Recordemos que cuando se trató de obtener una victoria para su partido en las elecciones legislativas en el estado de Nueva York, todos coinciden en que Burr realizó jornadas maratónicas de hasta dieciséis horas en los propios lugares donde tenían lugar las votaciones; sin embargo, la persona que realizó un agotador esfuerzo físico para lograr un triunfo de su partido se aleja voluntariamente del centro político a la hora de batallar para sí. En un político neófito podría

haber dudas, pero en un político experimentado como Burr, ese alejamiento es significativo y tan elocuente como una manifestación expresa. Es más, al analizar el conflicto presidencial de 1800, el profesor Ackerman sitúa a Burr como uno de los elementos decisivos a la hora de evitar que los acontecimientos degenerasen en conflicto bélico, al indicar que «*despite his notorious reputation, he displayed a good deal of statesmanship at his moment of truth*», precisando que Burr no era ni mejor ni peor que otros políticos de su tiempo como Thomas Jefferson o John Marshall.¹⁹⁰

4. En lo relativo a las acusaciones vertidas frente a Burr, a quien se le llegó a equiparar con Catilina y con Napoleón Bonaparte, conviene recordar que los mismos provienen fundamentalmente de dos fuentes: una coetánea (Alexander Hamilton) y otra coetánea, pero reelaborada con posterioridad a los acontecimientos (Jefferson y sus acólitos). Pues bien, las acusaciones vertidas contra Burr son, además de inciertas, cuando menos chocantes en su planteamiento al provenir de quienes provenían. A lo largo del presente capítulo hemos visto ya comportamientos bastante siniestros de Alexander Hamilton que demuestran que el mismo carecía de todo escrúpulo político (recordemos el frustrado boicot electoral a Adams en 1796, su intento de utilizar a Washington para hacerse con el mando de la milicia creada en el clima *cuasibélico* francófobo de 1798, la carta a John Jay solicitando una modificación legislativa para alterar el resultado electoral en 1800,

¹⁹⁰ «*His refusal to break with traditional and emerging constitutional norms saved the republic from a violent lurch in the Latin American direction. I reckon his restraint as the second most important single factor in accounting for the peaceful transition of power...*», Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., pp. 102 y 106.

la infundada acusación contra Monroe que casi finaliza en un lance de honor, el insulto personal por escrito a Adams tanto por carta como en el panfleto sobre los méritos de Adams como presidente). Pero Jefferson tampoco iba a la zaga en este aspecto; los propios republicanos habían traicionado a Burr en los comicios presidenciales de 1796 mientras este se había portado lealmente con ellos, por tanto, mal puede alguien que ha incurrido previamente en deslealtad con otro acusar ulteriormente a este de portarse deslealmente;¹⁹¹ Jefferson plasmaba en sus escritos posteriores a su renuncia al cargo de secretario de Estado (allá por el año 1793) que daba por finalizada su carrera pública y no albergaba otro deseo que retirarse a Monticello, lo cual no fue óbice para que se presentase como candidato a la presidencia a las elecciones de 1796, fuese elegido en las de 1800 (gracias, precisamente, al esfuerzo de Burr) y reelegido en las de 1804.¹⁹² Si para Jefferson la «voluntad del pueblo» estaba clara porque era manifiesto que él, y no Burr, optaba al cargo de presidente y por tanto Burr debía manifestar expresa y públicamente su renuncia a favor del virginiano en caso de ser elegido, Jefferson no logró explicar de manera hartó convincente cómo era posible que en 1796 ni tan siquiera se planteara no ocupar la vicepresidencia renunciando a favor del federalista Pinckney al ser claro que Jefferson se había presentado como candidato a la presidencia, y no al cargo que ocupó

¹⁹¹ «Burr has been called ambitious and proud, but neither ambition nor pride can explain why Burr would foolishly deal with those who had clearly betrayed him before», Jennifer VAN BERGEN, o. cit., p. 104.

¹⁹² El propio John Adams manifestó que, pese a su brillantez intelectual, Jefferson estaba «poisoned with ambition».

durante los cuatro años comprendidos entre 1797 y 1801, siendo inexplicable que Jefferson optase por una interpretación estricta del texto constitucional en 1797 y por otra más amplia en 1800, a no ser que, como era frecuente, manipulase las situaciones en su propio beneficio; por último, la afirmación de que los deseos del pueblo se inclinaban hacia Jefferson y no hacia Burr es cuando menos discutible, no solo porque en la mayoría de los estados a los compromisarios los elegían las legislaturas estatales y no el pueblo (la legitimación popular de Jefferson sería, por tanto, indirecta), sino porque limitándonos a Nueva York, estado decisivo para la victoria republicana, había sido Burr y no Jefferson quien movilizó activamente al electorado gracias a sus bases políticas y, por tanto, es presumible que el mismo estuviese más inclinado por un político neoyorkino que por un virginiano.

Creo que a la hora de emitir un juicio de intenciones, uno debe atenerse a los hechos objetivos, y no juzgar por meras elucubraciones sobre las eventuales intenciones de una persona. Por consiguiente, y ateniéndome a los antecedentes fácticos expuestos en los puntos anteriores, mi opinión personal en este punto es que la historia ha sido absolutamente injusta con Aaron Burr. Acierta Jennifer Van Bergen cuando manifiesta que el comportamiento de aquel se movió estrictamente dentro de los límites impuestos por el texto constitucional, por lo que su actitud fue clara y adecuada a la legalidad vigente, mientras que la actuación de Jefferson desbordaba ampliamente la letra y el espíritu de la Carta Magna.¹⁹³ De esta manera, cuando Burr manifestaba su re-

¹⁹³ «Burr's lifelong adherence to Republican principles—the principles of the American revolution. One can understand Burr's actions only by viewing them in the light of these two

chazo a competir con Jefferson, lo que en realidad estaba diciendo es que no era su intención maniobrar políticamente para que los compromisarios retirasen cierto número de votos a Jefferson con el fin de que fuese Burr el elegido, mas no que si la Cámara de Representantes optaba por él en lugar de por el virginiano, rechazase automáticamente el cargo. Para Bruce Ackerman,¹⁹⁴ el comportamiento público de Burr siempre fue el mismo y no sufrió variación alguna: expresar lealtad a Jefferson y su rechazo a todo intento de competir con el virginiano por la presidencia; lo único que se le puede imputar es una negativa a los requerimientos que se le solicitaron en privado para que hiciese público que renunciaría a la presidencia de ser elegido, rechazo que el propio Burr justificaba por ser el requerimiento impertinente e innecesario; téngase en cuenta, además, que el propio Burr confiaba (y así lo hizo constar por escrito) que Jefferson fuese elegido con el voto favorable de diez o doce estados por la Cámara de Representantes en la primera votación. Se ha indicado hasta la saciedad que Burr deseaba llegar a un acuerdo con los federalistas para lograr la presidencia mientras que Jefferson pretendía alcanzar el cargo sin ataduras ni compromisos. El problema es que

*factors [...] Yet in the two months of uncertainty in early 1801 before the deadlock was broken in the House of Representatives, while aware of the danger of 'usurpation' no one was thinking about the Constitution. They were, not surprisingly, thinking about party loyalty [...] The primary concern of Burr's fellow republicans appears to have been whether he would remain loyal to them, rather than whether he would remain loyal to the Constitution. Indeed, the idea of loyalty to the Constitution seems to have been oddly absent». Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 114. La tesis central de Van Bergen es precisamente esa, que únicamente Burr mostró una lealtad sin fisuras al sistema constitucional, lealtad que, a la postre, le costó su carrera, dado que «Burr, on the other hand, showed complete confidence in the Constitution. Perhaps foolishly, he bet his career on this confidence, and lost». Ciertamente, como la propia autora reconoce, la interpretación del texto constitucional que hacía Burr no era la única posible, pero sí la más adecuada si se tenía en cuenta la filosofía de los constituyentes.*

¹⁹⁴ Para este autor es difícil manifestarse de forma rotunda sobre este particular, siendo extremadamente complicado aseverar si Burr maniobró en su propio beneficio o si fueron terceras personas quienes utilizaron su nombre sin autorización.

la tesis no se sostiene, y ello por dos importantísimos motivos. El primero es que el propio Burr habría dinamitado todas sus opciones al referirse en términos muy críticos y casi injuriosos a los federalistas en su carta de 24 de diciembre de 1800 dirigida a Ambrose Spencer; en segundo lugar, recordemos que cuando ese mismo día Robert Godloe Harper le indicaba que, para mantener incólumes sus opciones, no contestase a misivas de federalistas ni escribiese a miembros de su propio partido, el neoyorkino no solo no le hizo caso, sino que continuó la correspondencia manifestando su convencimiento y seguridad de una victoria total de Jefferson en la Cámara de Representantes. A ello debemos unir el testimonio de otro de los personajes clave en este drama electoral, el representante por Delaware, James A. Bayard, para quien Burr tuvo en sus manos dar el paso final que le llevase a la presidencia, pero que rechazó obrar de tal modo (*I was willing to take Burr, but I was enabled son to discover that he was determined not to shackle himself with the federalist principles*),¹⁹⁵ e incluso llegó a confesar a Alexander Hamilton que «*The means existed of electing Burr, but they required his cooperation... He might have secured a majority of the states. He will never have another chance of being President*».¹⁹⁶ En otras palabras, que Aaron Burr pudo haber sido el tercer presidente de los Estados Unidos de haberlo deseado y haber actuado en consecuencia. Nancy Isenberg, la más reciente biógrafa de Burr, nos ofrece un dato que creo es clave para entender este asunto: en un primer momento los federalistas creyeron interpretar el sentir de Burr sin consultar a este, para

¹⁹⁵ Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 269.

¹⁹⁶ «*At the time he made his decision Bayard provide an altogether different reason for his behavior: "Burr has acted a miserable pauntry part. The election was in his power, but he was determined to come in as a Democrat". Bayard's contemporaneous remark strongly suggests that Burr had refused any bargain that included a Sellout of the principles of his party. In contrast, Bayard subsequently insisted that Jefferson had entered into "such a deal"*», John FERLING, *Adams v. Jefferson*, o. cit., p. 191. En el mismo sentido, Nancy ISENBERG, *Fallen founder*, o. cit., p. 220 y Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 105.

ulteriormente mutar de táctica y tratar de elevarle a la presidencia con la intención de convertirle en un títere; por el contrario, el propósito de Burr fue siempre evitar cualquier tipo de hipoteca o acuerdo general con los federalistas.¹⁹⁷ Jefferson siempre negó haber llegado a un acuerdo con los federalistas, pero ya hemos visto que pese a sus pomposas manifestaciones autojustificadoras, su mandato se caracterizó por seguir en la práctica los consejos que le ofreciera John Adams en la entrevista que tuvo lugar en febrero de 1801.

Sobre este particular, el estudio más reciente de los comicios presidenciales de 1800 debido a James Roger Sharp, trata de ofrecer una explicación a la actitud de Burr mediante un análisis cronológico de su correspondencia: así, según dicho autor, cuando el político neoyorkino escribe su respuesta a Jefferson a mediados de diciembre de 1800 aún no se conocía la totalidad de los votos compromisarios y, por tanto, aún no se había confirmado el empate entre los dos candidatos republicanos, mientras que a finales de mes los resultados oficiales confirmaron tal empate; a mayor abundamiento, se indica que el rechazo de Burr a todo intento de competir con Jefferson se hizo de forma privada y no pública, aunque el mismo historiador reconoce posteriormente que la actitud de Burr es ciertamente difícil de explicar, máxime en alguien tan experimentado políticamente.¹⁹⁸ Ya hemos indicado anteriormente que si este rechazó hacer pública su decisión de no competir o disputar la presidencia a Jefferson fue, sin duda alguna, porque en su fuero interno no lo consideraba necesario, a la vista de las manifestaciones que por medios fehacientes (cartas privadas) había rea-

¹⁹⁷ «For Burr it was a matter of honor that his position be rightly understood and that the Republicans make no compromises. And that was his loftiest ambition at this perilous moment in American politics», Nancy ISENBERG, *Fallen Founder*, o. cit., p. 219.

¹⁹⁸ James Roger SHARP, *The deadlocked election of 1800*, o. cit., pp. 138-139 y 162-163.

lizado ya; y el negarse a proclamar su renuncia al cargo en caso de ser elegido se explica por el íntimo convencimiento de Burr de que Jefferson obtendría sin problema el voto de diez u once estados en la primera votación en la Cámara de Representantes, como había indicado a Albert Gallatin. Si Burr hubiese manifestado en público que en caso de ser elegido renunciaría, tanto aliados como rivales podrían arrojarle a la cara el viejo aserto de *excusatio non petita accusatio manifesta*, pues entonces sí se estaría reconociendo implícitamente la posibilidad de ser elegido, algo que serviría igualmente a los acólitos de Jefferson para librarse del político neoyorkino, un personaje que siempre les pareció incómodo y de quien no dudaron en intentar librarse a la menor oportunidad.

Sea como fuere, y fueran cuales fuesen las razones que condujeron a Aaron Burr a obrar como actuó en ese decisivo periodo, lleva toda la razón Bernard Weisberger cuando manifiesta que «*Whatever the truth, Burr got the worst of it – neither side really trusted or respected him thereafter. He himself felt especially abandoned by the Republicans, given the huge contribution to victory made through his unstinting efforts in New York*».¹⁹⁹ Los comicios presidenciales de 1800 marcaron el inicio del declive político de Aaron Burr, pues esta fue la primera batalla mediática que perdió. No sería la última.²⁰⁰

¹⁹⁹ Bernard A. WEISBERGER, *America Afire*, o. cit., p. 276. Joseph Weelan, por su parte, establece que la actuación de Burr supuso un motivo de preocupación para los planes que Jefferson poseía a más largo plazo: «*Burr could upset his republican party leadership, his plans for a second term and his dream of establishing a Virginia dynasty in the President's house*», *Jefferson's vendetta: the pursuit of Aaron Burr and the judiciary*, New York, Carroll & Graf Publishers, 2005, p. 2. En efecto, durante casi un cuarto de siglo, los Estados Unidos fueron regidos por virginianos: Jefferson, Madison y Monroe.

²⁰⁰ Sobre la persecución que sufrió Aaron Burr con posterioridad a estos acontecimientos y, sobre todo, tras el duelo que mantuvo con Alexander Hamilton el 12 de julio de 1804 y en el que el ideólogo federalista resultó muerto, me remito a mi trabajo «Los Estados Unidos contra Aaron Burr», publicado en el número 12 de la revista electrónica *Historia Constitucional*. Es trágica la negra y en gran medida falsa imagen que de un héroe de la revolución, ni mejor ni peor que sus coetáneos, transmitieran

5. Conclusión

*Burr's refusal to resign in the event he was elected certainly was not treason. Indeed, strict adherence to the Constitution cannot be treason. It is, on the contrary, the mark of a leader and a statesman.*²⁰¹

*It is one thing to write a Constitution; quite another to survive; and still another for it to survive in a world for which it was not designed.*²⁰²

Las elecciones de 1800 marcaron la quiebra del sistema constitucional tal y como había sido concebido por los padres fundadores, dando paso a una estructura constitucional fundado en el bipartidismo,²⁰³ por lo que supusieron un *turning point* en la política norteamericana. Lo ha expresado de forma insuperable el profesor Bruce Ackerman cuando indica, a la hora de abordar el contencioso presidencial de 1800 que

I will be viewing the crisis as a symptomatic of a much deeper constitutional transformation in American history, and one that reverberates to the present day. February 1801 marks the birth-agony of the plebiscitarian presidency: for the first time in American history, a president ascended to the office on the basis of a mandate from the people, for sweeping transformation. The great engine for change was the invention of recognizably democratic political parties.

personajes tan siniestros como Hamilton o Jefferson, cuyas ambiciones, juegos sucios y puñaladas traperas a aliados y rivales han quedado patentes a lo largo de este trabajo, pero que sin embargo han logrado pasar a la historia con una imagen de impoluta irreprochabilidad.

²⁰¹ Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1800*, o. cit., p. 93.

²⁰² Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 93.

²⁰³ «Partisanship prevailed to the bitter end and showed no signs of abating. Over the campaign's extended course, George Washington's vision of elite, consensus, leadership had died, and a popular, two-party republic, conceived in the crucible of the Adams presidency, was born», Edward J. LARSON, *A magnificent catastrophe*, o. cit., p. 270.

Esta mutación política tenía, a su vez, inevitables consecuencias jurídicas: mientras a lo largo del conflicto John Adams, apegado a la letra y al espíritu del texto constitucional, sostenía que la Constitución ofrecía múltiples soluciones para la salida al conflicto (la elección de Jefferson, por supuesto, pero también la de Burr, o las soluciones patrocinadas por Horatius), por el contrario para Thomas Jefferson no cabía más alternativa que su propia elección como presidente, dado que tal era la «voluntad del pueblo».²⁰⁴ De tal manera, la elección de Jefferson supuso, en la práctica, la superación del marco constitucional de 1787, al menos como lo habían ideado los redactores del texto. Pero la importancia de los comicios presidenciales de 1800 no finaliza ahí. Por primera vez un presidente era derrotado en unas elecciones, fracasando en su intento de optar a un segundo mandato. Por vez primera los intereses de partido se impusieron al propio texto constitucional, hecho este que, como muy bien indica Jennifer Van Bergen, ni los protagonistas de las elecciones ni los modernos historiadores suelen tener en cuenta;²⁰⁵ en efecto, los estudiosos de esta disputada elección presidencial suelen orillar todo análisis de la Constitución norteamericana para centrarse en los intereses del partido o, como mucho, se limitan a insinuar que el texto constitucional había quedado «desfasado» ante la aparición de unos embrionarios partidos políticos. En cualquier caso, creo que Bruce Ackerman acierta en su análisis cuando indica que

If the House had selected Burr or Adams or Pinckney, or if the lame ducks in Congress and the presidency had placed Marshall in the President's House, the constitutional damage would

²⁰⁴ Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., pp. 5 y 101-102.

²⁰⁵ «Indeed, it appears that neither historians nor Burr's colleagues considered the Constitution at all in judging his actions or their own», Jennifer VAN BERGEN, *Aaron Burr and the electoral tie of 1801*, o. cit., p. 92.

*had been severe. While the country managed to absorb electoral college disasters in 1824, 1876 and 2000, it could cushion those shocks with decades or centuries of democratic experience. But in 1800 the Constitution had not yet become an icon.*²⁰⁶

Pero, de igual manera, los comicios presidenciales de 1800 marcaron decisivamente la vida de cada uno de los protagonistas en el drama. A nivel estrictamente personal, las elecciones de 1800 supusieron el final de la vida política de John Adams así como el declive político de Alexander Hamilton y de Aaron Burr. Hamilton nunca logró recuperar su prestigio tras el brutal ataque que había dirigido frente a John Adams, y su carrera política vegetó durante todos estos años, resurgiendo únicamente en 1804 y con carácter estrictamente negativo, para impedir que Aaron Burr lograra acceder al cargo de gobernador del estado de Nueva York. Precisamente en el año 1804, el enfrentamiento entre Hamilton y Burr llegó a su punto culminante cuando aquel se jactó públicamente de que podría indicar hechos «aún más despreciables» protagonizados por el entonces todavía vicepresidente de los Estados Unidos; Burr solicitó hasta en dos ocasiones a Hamilton que matizase o retirase sus palabras, pero este contestó con dos soberbias misivas que no dejaron otro remedio a Burr que acudir a un lance de honor.²⁰⁷ El 11 de julio de 1804, en Weehawken, Hamilton fallaba su disparo mientras la bala disparada por la pistola de Burr atravesaba la columna vertebral del federalista,

²⁰⁶ Bruce ACKERMAN, *The failure of the founding fathers*, o. cit., p. 100.

²⁰⁷ Un breve resumen tanto de las causas del enfrentamiento como el duelo final entre Hamilton y Burr puede encontrarse en mi trabajo «¿Traidor a su patria? *United States v. Aaron Burr*», *Historia Constitucional*, número 12 (septiembre 2011), pp. 366-370. Cuanto más repaso los acontecimientos que rodearon este lance de honor, cada vez estoy más convencido de que Hamilton, acabado políticamente y abatido por varias tragedias familiares, en el fondo deseaba morir. Eso sí, llevándose consigo la reputación de su odiado rival, haciendo una declaración (bastante incierta e hipócrita) el día anterior al duelo.

quien fallecería al día siguiente. Paradójicamente, pese a haberse comportado en todo momento dentro del código de honor y pese a tener una personalidad privada bastante similar a la de Hamilton, Burr fue demonizado y perseguido, de tal manera que su carrera política quedó definitivamente truncada. Pese a salir airoso de un proceso por traición que fue incoado en 1807 a instancias del presidente Jefferson, Aaron Burr inició en 1808 un breve exilio por las tierras de Europa, regresando a los Estados Unidos en el año 1812, donde permanecería ya definitivamente sobreviviendo mediante el ejercicio profesional de la abogacía hasta su fallecimiento, acaecido en el año 1836.

John Adams finalizó su carrera política el día 4 de marzo de 1801, fecha en la que, sin esperar a la investidura de su rival político Jefferson, abandonó Washington a las cuatro de la madrugada para retirarse a su vida privada. Sobrevivió a su adorada esposa, Abigail, y un octogenario Adams aún pudo comprobar cómo su hijo, John Quincy, era elegido presidente en unas conflictivas elecciones presidenciales donde la decisión final hubo de tomarla curiosamente la Cámara de Representantes, al igual que sucediera en los comicios de 1800. Adams fallecería en el año 1826 en la patriótica fecha del 4 de julio, siendo así que según una larga tradición, sus últimas palabras, fueron «*Jefferson lives*», aunque tales palabras no eran ciertas, pues aunque Adams no podía saberlo, su amigo y antiguo rival político había fallecido ese mismo día tan solo unas horas antes. En efecto, Jefferson fue elegido presidente y, tras un exitoso primer mandato, fue reelegido para otros cuatro años, siendo el periodo de 1805-1809 un auténtico desastre político para el virginiano. Al igual que Adams, tras su renuncia a optar a un tercer mandato, Jefferson se retiró a su estado natal, donde sobrevivió hasta 1826.

CAPÍTULO SEGUNDO

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1876: RUTHERFORD B. HAYES FRENTE A SAMUEL TILDEN

*Perhaps when such a dispute erupts, there is no means of resolving it that will satisfy both sides.*²⁰⁸

*An uncontested result is accepted with more or less good grace; the people have spoken. But if the result is so close as to be disputed, the final outcome of the election will not be so readily accepted. Those who decide the contest will inevitably be subjected to criticism by the party whose candidate is the loser.*²⁰⁹

En el año 1876 los Estados Unidos conmemoraban el primer centenario de su existencia como nación. Pero celebraban igualmente elecciones presidenciales, las que se conocerían como «las elecciones del centenario». En un ambiente de gran tensión política derivado de las heridas aún no del todo cerradas por una guerra civil finalizada tan solo once años antes, donde una crisis

²⁰⁸ William H. REHNQUIST, *Centennial Crisis: the disputed election of 1876*, New York, Alfred A. Knopf, 2004, p. 6.

²⁰⁹ William H. REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 220.

económica había puesto fin a la conocida popularmente como *gilded age*, y donde la aristocrática élite sureña pugnaba por recuperar el control de los aparatos estatales poniendo fin así a la época conocida en la historiografía estadounidense como *reconstruction*, el demócrata Samuel Jones Tilden y el republicano Rutherford Bitchard Hayes se disputaron la presidencia. Por vez primera desde el año 1860 parecía que un demócrata podría habitar la Casa Blanca, pero ocurrió lo que parecía casi imposible. En tres estados del profundo sur (Carolina del Sur, Florida y Luisiana) cada partido proclamó a su lista de compromisarios como la válidamente elegida, por lo que en dichos estados remitieron a Washington no una, sino dos listas con votos para la presidencia y vicepresidencia; a tan complicada peripecia se unió el hecho de que en Oregón los demócratas impugnaron la elección de un compromisario republicano al entender que estaba incurso en causa de inelegibilidad. Dada la escasa diferencia de voto compromisario entre Hayes y Tilden, la victoria en esos cuatro estados era clave, pero existía una dificultad de primer orden: la Constitución no contenía precepto alguno que contemplase cómo salir de dicha situación, dado que era un evento que el texto constitucional no habría previsto pudiera darse. La situación política concreta existente en 1876 (una Cámara de Representantes en manos demócratas, un Senado en manos republicanas, un presidente que había agotado sus dos años de mandato y que había renunciado a optar a un tercero tras continuos escándalos de corrupción que habían salpicado de lleno a su propio gabinete) hizo necesario un acuerdo entre los dos grandes partidos, los cuales optaron por crear un órgano, la Electoral Commission, de composición mixta legislativo-judicial encargado de resolver tan peliaguda situación acaecida en los cuatro estados. La propia composición de la Electoral Commission no estuvo exenta de polémicas debido a la accidentada peripecia de uno de los jueces que habría de integrar dicho organismo.

En el presente capítulo abordaremos los antecedentes político-sociales que rodearon las elecciones para, a continuación, centrarnos en el desarrollo de los mismos (con un detenido análisis de los acontecimientos tal y como se desarrollaron en los cuatro estados en disputa) y analizar in extenso los debates de un nivel jurídico impresionante que tuvieron lugar en el seno de la Electoral Commission, donde se abordaron, entre otras cosas, temas como la naturaleza de las elecciones presidenciales, el papel de los compromisarios, las competencias y potestades de los estados y de la federación, así como la extensión y facultades de investigación que poseían tanto las autoridades estatales como federales a la hora de verificar o comprobar las irregularidades en los sufragios. El capítulo finaliza con una reivindicación de Joseph Bradley, juez del Tribunal Supremo e integrante de la Electoral Commission cuyo voto fue decisivo a la hora de inclinar la balanza y poner fin a la situación de incertidumbre que asoló a los Estados Unidos de América hasta el mismo mes de marzo de 1877, y a quien se acusó de haber mudado su voto a última hora a consecuencia de presiones recibidas. Al igual que sucedió en el capítulo anterior con la figura de Aaron Burr, no encuentra el autor de estas líneas la más mínima prueba que sustente las acusaciones contra Bradley, uno de los mejores jueces que ha prestado sus servicios en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

1. Introducción

Tras las elecciones presidenciales de 1800 y el empate a voto compromisario entre Thomas Jefferson y Aaron Burr, en 1804 se aprobó la decimosegunda enmienda constitucional que trataba precisamente de evitar que se volviese a repetir tal situación, estipulándose que, a partir de entonces cada com-

promisario emitiría por separado dos votos: uno para elegir al presidente y otro para el vicepresidente. Ningún conflicto se produjo en las ulteriores contiendas electorales, dado que tras dos mandatos consecutivos, Jefferson fue sustituido en la presidencia por James Madison y, tras los dos mandatos de este, James Monroe ocupó durante ocho años el sillón presidencial. De esta manera, la presidencia de los Estados Unidos estuvo ocupada durante un cuarto de siglo por destacados miembros del Partido Republicano que, además, procedían del mismo estado sureño, pues tanto Jefferson como Madison y Monroe habían nacido en Virginia. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 1824 la Cámara de Representantes tuvo nuevamente en sus manos la elección del presidente. En dicho año los 261 compromisarios (de los veinticuatro estados que por entonces integraban la Unión) habían repartido su voto entre los distintos candidatos: Andrew Jackson obtuvo 99 votos, John Quincy Adams –hijo del presidente John Adams– 84, William Crawford 41 y Henry Clay 37, por lo que al no obtener ninguno de ellos los 131 votos necesarios, la Cámara de Representantes no tenía limitada la elección y podría inclinarse por cualquiera de ellos, resultando finalmente vencedor John Quincy Adams, quien se impuso a Andrew Jackson al obtener el respaldo favorable de las delegaciones de 13 estados.²¹⁰ Como ya hemos indicado en el prólogo, en el presente libro no se analiza in extenso este conflicto presidencial porque la problemática que en él se planteó (la existencia de más de dos candidatos en disputa sin que ninguno obtenga una mayoría de voto compromisario) es susceptible de reproducirse en el futuro, al ser un problema que deriva de la propia existencia de esa peculiar institución estadounidense que es el Electoral College. Basta, por ello, que el lector tenga en

²¹⁰ Tomo los resultados de la página <http://uselectionatlas.org/RESULTS/>.

mente que se produjo ese conflicto que resolvió la Cámara de Representantes en estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales.

La normalidad fue la nota característica de las elecciones presidenciales hasta llegar al año 1860, e incluso en tales comienzos el conflicto fue más político que jurídico: el candidato republicano Abraham Lincoln fue elegido al obtener 180 votos compromisarios procedentes de los populosos e industriales estados del norte, por lo que su victoria en el Electoral College era indiscutible sin perjuicio de que en lo referente al voto popular Lincoln hubiese salido mal parado; lo que ocurrió es que los estados del sur se volcaron con su propio candidato, John Breckenridge (a quien habían catapultado como opción frente a la cúpula del propio Partido Demócrata, que había designado como candidato presidencial al senador Stephen Douglas), quien obtuvo 72 votos compromisarios. El problema de 1860 no fue, pues, una elección presidencial disputada o con unos resultados sumamente ajustados en voto compromisario (cuestión diferente es el voto popular, donde, insistimos, Lincoln sí era en efecto claramente minoritario), sino una indiscutible victoria del candidato republicano que, por las circunstancias políticas del momento, sirvió de detonante para que los estados del profundo sur iniciasen un proceso de secesión que finalizaría con una cruenta guerra civil. Y si en las elecciones de 1864 Lincoln arrasó al presentarse en una alianza con los demócratas llevando como vicepresidente a Andrew Johnson y derrotando abrumadoramente a su rival, el pomposo general George McLelland, el asesinato de Lincoln el 14 de abril de 1865 (casi al mes de jurar el cargo) y la ulterior política de Andrew Johnson que le enfrentó abiertamente con un Congreso dominado por los republicanos (como estudiaremos más adelante) dio la victoria en 1868 al victorioso general de los ejércitos de la Unión, Ulysses S. Grant, quien revalidó ampliamente su vic-

toria en las elecciones presidenciales de 1872. No obstante, los escándalos económicos del segundo mandato de Grant hicieron que en el año 1876, precisamente el año del centenario, existiesen grandes posibilidades de que un demócrata volviese a ocupar la Casa Blanca tras quince años de ausencia. Y, aunque todos pronosticaban unos comicios muy ajustados para ese año, nadie pudo imaginar lo que acabaría ocurriendo.

Pese a que en su momento los sucesos que siguieron a las elecciones presidenciales de 1876 estuvieron a punto de sumergir al país en una nueva guerra civil, el episodio fue prontamente relegado al olvido, algo así como una nota a pie de página en la historia política estadounidense, quizá por la forma pacífica en que fue resuelto y por la aceptación con que ambos candidatos y sus respectivos partidos acataron la decisión del organismo encargado de solventar jurídicamente la disputa. No obstante, las elecciones presidenciales del año 2000, donde los resultados electorales en el estado de Florida fueron tan disputados como los del año del centenario, hicieron que renaciese el interés por conocer aquella reñida contienda electoral que tuvo lugar en 1876 entre el republicano Rutherford Bitchard Hayes y el demócrata Samuel Jones Tilden, no solo con la publicación de algún novedoso estudio sobre el tema,²¹¹ sino con la reedición de algunos clásicos estudios ya totalmente agotados y desaparecidos del mundo editorial.²¹² Y es que si bien la polémica elección presidencial

²¹¹ Al citado trabajo de William Rehnquist debe añadirse el de Roy MORRIS, *Fraud of the century: Rutherford B. Hayes, Samuel Tilden, and the stolen election of 1876*, New York, Simon & Schuster, 2003; y el excelente estudio de Michael F. HOLT, *By one vote: the disputed presidential election of 1876*, University Press of Kansas, 2008, sin duda alguna el mejor de los tres.

²¹² Como los de Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., y más recientemente el clásico de Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, Kessinger Publishing, 2007 (en realidad no se trata de una reedición, sino de una reproducción escaneada de la edición de 1906). Estas obras, junto con la de Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia: the election of 1876 and the end of reconstruction*,

del año 2000 fue objeto de una intensa cobertura mediática en los Estados Unidos (que lógicamente traspasó las fronteras norteamericanas para alcanzar los titulares de los medios de comunicación de casi todos los países del mundo), no ocurrió ni ocurre lo mismo con su precedente de 1876, prácticamente desconocido fuera del mundo anglosajón y casi podemos decir, sin temor a equivocarnos, que incluso para gran parte de la población angloamericana. En efecto, la atención bibliográfica que las elecciones presidenciales de 1876 merecieron fue cuantitativamente escasa si tenemos en cuenta que en su día constituyó un episodio trascendental que situó al país no solo en una crisis político-constitucional de muy profundas magnitudes (se trató de la elección presidencial más reñida, toda vez que el candidato vencedor lo hizo por la diferencia de un único voto compromisario, lo que convierte a estos comicios en un caso único en la historia política estadounidense) sino incluso al borde de una nueva guerra civil. En el presente capítulo analizaremos con cierto detalle los antecedentes histórico-políticos, el desarrollo de los comicios y, sobre todo, los procedimientos establecidos a nivel legislativo para solventar tan peliaguda situación así como los interesantísimos debates jurídicos que tuvieron lugar en el seno de los mismos, donde intervinieron algunos de los más brillantes juristas de la época.

Louisiana State University Press, 1973; la de Charles FAIRMAN, *Five Justices and the Electoral Commission*, New York, Macmillan Publishing Company, 1988 (obra que forma parte de la monumental y excelente Oliver Wendell Holmes Devise History of the Supreme Court, publicada como suplemento al volumen VII, *Reconstruction and reunion 1873.1888, part two* debida al mismo autor); y la de C. VAN WOODWARD, *Reunion and reaction: the compromise of 1877 and the end of reconstruction*, Boston, Little Brown, 1951 (las citas que se realicen a lo largo del trabajo de esta obra proceden de la edición de 1966), son de consulta obligada, si bien el último libro citado únicamente se refiere de manera tangencial al conflicto electoral, pues la tesis fundamental de la obra se centra en demostrar la existencia del compromiso de 1877, al que nos referiremos en otro apartado del presente artículo.

2. Conflictos y tensiones políticas en Estados Unidos en el primer siglo de su historia (1776-1876): división, guerra y reconstrucción

Es obligatorio referirnos brevemente al contexto histórico-político que rodeó la elección de 1876, lo que implica un somero apunte sobre los antecedentes, los conflictos tanto políticos como sociales que, desde su mismo nacimiento, afectaron a los Estados Unidos y, sobre todo, ofrecer al lector un acercamiento al periodo histórico que abarca desde el final de la guerra de Secesión hasta el año 1876 (conocido en la historia americana como *reconstruction*), pues son especialmente los problemas que se plantean en esta última fase los que van a determinar de manera decisiva no solo el conflicto electoral y post-electoral de 1876, sino la propia solución final que se dio al mismo.

2.1. *Tensiones en el seno de los Estados Unidos desde su nacimiento hasta la guerra de Secesión*

Gordon Wood, en su reciente y fundamental *Empire of Liberty* indica en la introducción a su obra que la evidente transformación geográfica, social y política que tuvo lugar ya en la primera década del siglo XIX fue magistralmente evocada en un breve relato alegórico escrito por Washington Irving en 1819 y que tiene como protagonista a Rip Van Winkle, el perezoso habitante de las colonias británicas que sale de su aldea y se queda profundamente dormido en las vecinas montañas, en un sueño que se prolonga durante veinte años, de tal manera que cuando regresa a su aldea (perteneciente no ya a Inglaterra, sino a unos Estados Unidos ya independizados de la metrópoli) es incapaz de reconocerla. Como bien señala Wood, con este breve relato el conservador Irving pretendía reflejar los profundos cambios

que tuvieron lugar en los Estados Unidos y que hacían de los mismos una nación radicalmente distinta a la existente el 4 de julio de 1776. Y si grandes fueron los cambios en los primeros años del siglo XIX, los Estados Unidos mutaron de forma aún más extraordinaria su faz en los años posteriores de dicha centuria, de tal manera que en el año en el que conmemoraban su primer centenario constituían una nación radicalmente distinta (tanto a nivel territorial, como social y político) a la que vio la luz en el ya lejano 1776. Tales avances se habían logrado a costa de provocar una serie de tensiones, tanto políticas como sociales, que desgarraron prácticamente desde su mismo alumbramiento a la nación, hasta el punto de llevarla a una guerra civil que, aun finalizada en 1865, permanecía viva en la memoria de muchos ciudadanos. Diferencias que, si individualmente consideradas no suponían un obstáculo insalvable, tomadas en conjunto abocaban al país a un serio conflicto, como el que efectivamente estalló en 1861. Esas diferencias o focos de tensión fueron tres que pasamos a estudiar a continuación.

2.1.1. FEDERALISMO VERSUS ANTIFEDERALISMO

Sobre este particular ya hemos disertado extensamente en el capítulo anterior dedicado a las elecciones presidenciales de 1800, por lo que a lo dicho allí nos remitimos. Baste recordar que la idea inicial de los padres fundadores, es decir, la existencia de una élite política que gobernase desinteresadamente en pro de los intereses generales y superando cualquier espíritu de división y de partido (objeto de condena expresa por los constituyentes) se evaporó rápidamente tras la aprobación del paquete de medidas económicas solicitadas por Hamilton y, sobre todo, tras el impacto de la Revolución francesa en la política exterior estadounidense, hechos que, si bien no originario, sí que profundizaron la división política en dos facciones

opuestas (encabezadas por Hamilton y Jefferson). Probritánica, partidaria de los intereses industriales y defensora a ultranza de un poder federal robusto la primera; francófila, defensora de la agricultura y de los poderes estatales la segunda. Esas tendencias latentes en el momento fundacional quedaron en cierta medida contenidas mientras George Washington ocupó la presidencia, dado el consenso universal que su figura despertaba. No obstante, tras la renuncia de Washington a optar a un tercer mandato y la elección de John Adams como presidente, las diferencias se hicieron aún más acusadas, consagrándose de manera irreversible la división con las elecciones presidenciales que ascendieron a Jefferson a la presidencia, como ya hemos visto. No obstante, no cabe hablar realmente de la existencia de partidos políticos en el sentido moderno del término hasta la victoria del presidente Andrew Jackson en las elecciones de 1828 y su política abiertamente demócrata.

2.1.2. SOCIEDAD INDUSTRIAL VERSUS SOCIEDAD AGRARIA

La segunda diferencia o foco de tensión era de tipo social y se puso de manifiesto fundamentalmente con los avances tanto territoriales como industriales de los Estados Unidos. Territorialmente si algo caracterizó el siglo XIX estadounidense fue la expansión hacia el oeste y hacia el sur. En 1803 los Estados Unidos adquieren de Francia el vasto territorio de la Luisiana (en una actuación de Jefferson claramente anticonstitucional) y en 1819 se compra el territorio de Florida a la corona española. La guerra librada contra México en la década de los cuarenta del siglo XIX incorporó a la Unión todo el vasto territorio del suroeste, situando la frontera en el Río Grande. Junto a esa expansión territorial tuvo lugar un acelerado desarrollo industrial que encontró su expresión más clara en medios técnicos como la segadora mecánica y en la mejora de las infraestructuras con

la aparición de medios de transporte (caso del ferrocarril y el barco de vapor) y novedosos sistemas de comunicación tales como el telégrafo y el teléfono facilitaron las relaciones entre los distintos estados y los territorios que poco a poco se iban incorporando a la federación gracias a las continuas migraciones hacia el oeste tanto para colonizar nuevo suelo como para buscar fortuna (el famoso *go west*). Fue dicha expansión territorial e industrial la que puso de manifiesto la existencia de dos modelos económicos y sociales distintos, profundizando aún más las diferencias entre la sociedad del norte y la sureña:

Estados Unidos crecía espectacularmente, y para organizar esos nuevos horizontes era necesario implantar allí un determinado modelo social, económico e incluso cultural. El problema era que existían dos modelos muy diferenciados. Por un lado, el Norte; industrial y comercial, impulsor de la navegación y de las innovaciones técnicas, formado por una sociedad dinámica. Por el otro, el Sur; agrícola, tradicional, formado por una sociedad compartimentada cuya expresión más significativa era la esclavitud. Ambos modelos eran incompatibles y tarde o temprano debían colisionar. Eso sucedió en 1861, con el estallido de la guerra, pero el conflicto se venía gestando desde mucho tiempo atrás.²¹³

2.1.3. ABOLICIONISMO VERSUS ESCLAVITUD

El tercer foco de conflicto íntimamente ligado con el anterior (y el que, en realidad, sirvió de detonante al conflicto bélico) fue precisamente el relativo a la institución de la esclavitud, a la que pudorosamente se aludía como *peculiar institution*). Mucho se ha escrito acerca de la sociedad americana,

²¹³ Jesús HERNÁNDEZ, *Norte contra Sur*, Barcelona, Inédita editores, 2008, pp. 23-24.

tan distinta de la que existía en el viejo continente dado que, en efecto, frente la sociedad existente en la Europa del Antiguo Régimen (división por estamentos con algunos de ellos privilegiados) y en el mundo continental contemporáneo (sustitución de los estamentos por clases sociales), en las colonias americanas la situación difería por completo al caracterizarse por la ausencia de privilegios estamentales y por una cierta homogeneización social que precisamente sentaba las bases para la igualdad jurídica, aunque aclarando y dejando bien sentado que igualdad jurídica no implicaba igualdad social. En ese igualitarismo había una excepción que se revelaría como un potencial foco de conflicto: la esclavitud y su extensión, que marcó profundamente no solo el nacimiento, sino toda la historia norteamericana del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. El conflicto entre el norte abolicionista e industrial y el sur esclavista y agrario²¹⁴ ha tenido un notable eco no solo en los libros de historia, sino en celebérrimas obras literarias así como en la gran y pequeña pantalla. Pese a que en 1820, en virtud del compromiso de Missouri, se intentó solventar este problema acordando que desde entonces la esclavitud sería proscrita en los territorios sitos al norte de la frontera sur de dicho estado, la cuestión volvió a plantearse nuevamente a mediados de la década de los cincuenta del siglo XIX. El Partido Republicano, el *Grand Old Party*, nace en 1854 para articular políticamente la oposición a la aprobación por el Congreso norteamericano (a instancias del senador demócrata Stephen Douglas) de la *Kansas-Nebraska Act*, que derogaba el acuerdo o transacción alcanzado mediante la adopción del compromiso de Missouri.

²¹⁴ En realidad, la situación socio-económica del sur era algo más compleja. Existía una élite de grandes terratenientes poseedores de vastas plantaciones dedicadas al cultivo de tabaco, algodón y azúcar, elite privilegiada que dominaba las instituciones políticas de los estados sureños. Pero existía igualmente una gran masa de pequeños propietarios que vivían en un régimen de autosuficiencia que, o bien no poseían esclavos o, como mucho, poseían uno o dos.

En esta época se producen dos eventos que sirven para tensar aún más las ya difíciles relaciones entre el norte y el sur: el primero, el controvertido pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto *Dred Scott*,²¹⁵ que al declarar inconstitucional el compromiso de Missouri apaciguó ligeramente a los sureños a costa de provocar una notoria irritación en el norte;²¹⁶ el segundo, y en parte consecuencia del anterior, la elección como presidente de Abraham Lincoln, el primer candidato del Partido Republicano en acceder al cargo. El debate sobre la esclavitud determinó en tal forma las elecciones presidenciales de 1860 que los estados del sur se apartaron de las coordenadas del Partido Demócrata hasta el punto de que presentaron su propio candidato, el demócrata sureño John Breckinbridge, frente al candidato oficial del partido, el senador Stephen Douglas. En las elecciones celebradas el 6 de noviembre de 1860 Lincoln,²¹⁷ que venció en todos los estados del norte así como en California y Oregón, obtuvo más de 1 800 000 votos y 182 votos compromisarios; Breckinbridge logró la victoria en todos los estados del sur, obteniendo 848 000

²¹⁵ *Dred Scott v. Sanford*, 60 US 393 (1857). El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en www.oyez.org/cases/1851-1900/1856/1856_0/. La doctrina de esta resolución judicial (los negros no tienen la condición de ciudadanos estadounidenses) no fue modificada hasta 1896 con la sentencia *Plessy v. Ferguson* 163 US 537 (1896). Un magnífico análisis del caso *Dred Scott* lo encontramos en Carl B. SWISHER, *The Taney period 1836-1864*, Nueva York, Macmillan, pp. 592-630. Esta obra constituye el quinto volumen de la muy completa *Oliver Wendell Holmes Devise History of the Supreme Court of the United States*.

²¹⁶ Si bien la población de los Estados Unidos en la época en que se resolvió el asunto *Dred Scott* se concentraba mayoritariamente en el norte, esa ecuación no se trasladaba al Tribunal Supremo, pues de los nueve jueces que lo integraban en aquel momento, cinco procedían de estados donde la esclavitud era legal, lo que hacía la resolución sospechosa a los ojos de la opinión pública nortea (William REHNQUIST, *Centenal Crisis*, o. cit., pp. 120-121). Las consecuencias del pronunciamiento *Dred Scott* en Carl B. SWISHER, *The Taney period 1836-1864*, o. cit., pp. 631-652.

²¹⁷ Conviene recordar, para deshacer cualquier equívoco, que Lincoln no proponía abolir la esclavitud en estados donde fuera legal, sino impedir la extensión de la misma a nuevos territorios.

votos y 72 compromisarios; el demócrata Stephen Douglas, por el contrario, pese a obtener 1380000 votos solo logró 12 votos compromisarios al vencer únicamente en los estados de Missouri y Nueva Jersey.

Dado que en el siglo XIX, pese a que las elecciones presidenciales se celebraban en noviembre la toma de posesión del presidente electo no tenía lugar hasta el 4 de marzo del año siguiente,²¹⁸ los estados del sur aprovecharon tal coyuntura, así como la debilidad que mostró el presidente en funciones James Buchanan, para tomar la iniciativa. Carolina del Sur opta por abandonar la Unión y, ante la inacción del gobierno federal, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas siguen su ejemplo y en una reunión celebrada el 4 de febrero de 1861 en Montgomery nacen los Estados Confederados de América, siendo elegido Jefferson Davis como presidente de la nueva confederación.²¹⁹ Únicamente faltaba un detonante, y el acontecimiento que precipitó la guerra fue el asedio al que se vio sometida, en abril de 1861, la guarnición federal de Fort Sumter, fortaleza costera en el puerto de Charleston, que encendió la mecha del conflicto que duraría cuatro años, hasta que el 9 de abril de 1865 el general sureño Robert E. Lee se rinde al unionista Ulysses S. Grant. Cinco días más tarde, el presidente Lincoln (que había sido reelegido en las elecciones de 1864 en una lista de *National Union Party* en la que concurría el demócrata Andrew Johnson como candidato a vicepresidente) era abatido en el Ford's Theatre por el sureño John Wilkes Booth.²²⁰

²¹⁸ Y así fue hasta que en 1933 se aprobó la vigésima enmienda constitucional, donde se establece que el mandato del presidente y el vicepresidente finaliza al mediodía del 20 de enero.

²¹⁹ Véase Jesús HERNÁNDEZ, *Norte contra sur*, o. cit., pp. 43-54.

²²⁰ Recomiendo al lector interesado en el tema la lectura del excelente libro de James L. SWANSON, *La caza del asesino*, Barcelona, Paidós ibérica, 2009, donde se describe de forma magistral y con todo lujo de detalles no solo el asesinato de Lincoln, sino la persecución y caza de Booth.

La guerra no solo arruinó económicamente gran parte del país, en especial a los estados del sur, sino que transformó para siempre la sociedad americana. En cuanto al sur, quebró las bases de su economía, que hasta los inicios del conflicto bélico se había basado en la mano de obra esclava. Por el contrario, el norte sufrió una notable expansión económica que propició el ascenso de la burguesía industrial, clase social que quedó ligada al Partido Republicano y a la expansión del estado federal. Además, otra consecuencia de la guerra fue precisamente la ampliación de los poderes de la federación y el nacimiento del moderno estado americano, el *administrative state*.

2.2. *El periodo de reconstrucción y sus secuelas políticas*²²¹

*On what terms should the defeated Confederacy be reunited with the Union? Should Congress or the President establish these terms? What system of labor should replace plantation slavery? What should be the place of the blacks in the political and social life of the south and the nation.*²²²

A la guerra civil,²²³ con sus inevitables secuelas socioeconómicas, le sigue el periodo conocido en la historia americana como *reconstruction*, pues tuvo como núcleo esencial de debate político los problemas derivados del reingreso en la Unión de los estados que integraron la antigua Confederación así como

²²¹ Es indispensable la lectura de la excelente obra de Eric FONER, *Reconstruction: America's unfinished revolution*, Nueva York, Harper & Row, 1989, de la cual él ha publicado una versión abreviada con el título *A short history of Reconstruction*, Nueva York, Harper & Row, 1990. Puede consultarse, igualmente, la obra de David LINCOTE, *Reconstruction in the United States: an annotated bibliography*, Westport, Greenwood Press, 2000.

²²² Eric FONER, *A short history of Reconstruction*, o. cit., p. 16.

²²³ Sobre este tema puede consultarse James M. MCPHERSON, *Battle cry of freedom*, Oxford University Press, 1988. Un magnífico y ameno estudio sobre la guerra de Secesión norteamericana puede encontrarse en Jesús HERNÁNDEZ, *Norte contra sur*, o. cit.

el espinoso asunto del papel que los esclavos liberados habrían de tener en la nueva sociedad y la procedencia o no de extenderles derechos político-sociales. Esta etapa histórica, que se extiende cronológicamente desde 1863 hasta 1877, puede a su vez dividirse en tres fases: la fase de reconstrucción presidencial (donde el liderazgo e iniciativa política descansa en el jefe del ejecutivo), la reconstrucción legislativa (donde el Congreso logra arrebatarse el liderazgo al presidente y asume la dirección del proceso imponiendo sus propias políticas) y una última (que la historiografía norteamericana define como *redemption*) iniciada en 1873 y cuya característica principal es la recuperación por los demócratas del control de las instituciones políticas en los estados del sur.

2.2.1. LA FASE PRESIDENCIAL DE LA RECONSTRUCCIÓN (1863/65-1866)²²⁴

La etapa presidencial de la reconstrucción se extiende de 1863 (fecha de la *Emancipation Proclamation*) hasta la victoria republicana en las elecciones legislativas de 1866, y se caracteriza por el predominio, iniciativa y liderazgo del presidente de los Estados Unidos a la hora de abordar esta materia.

El 22 de septiembre de 1862, el presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln, en su calidad de comandante en jefe, emite una orden ejecutiva, la *Preliminary Emancipation Proclamation*, en virtud de la cual declara la libertad de todos los esclavos existentes en aquellos territorios que a fecha 1 de enero de 1863 continuasen su rebelión.²²⁵ El 1 de enero de

²²⁴ Es imprescindible la consulta de los capítulos primero («*The world the war made*») y quinto («*The failure of presidential Reconstruction*») del libro de Eric FONER, *Reconstruction: American unfinished revolution*, o. cit.

²²⁵ Puede accederse a una imagen digitalizada del manuscrito original y a una transcripción del mismo en <http://www.nysl.nysed.gov/library/features/ep/>

1863 Lincoln emite una segunda orden ejecutiva (*Final Emancipation Proclamation*)²²⁶ concretando los territorios en los que la anterior proclama producirá efectos jurídicos: los estados de Arkansas, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia (si bien se exceptuaban ciertos territorios de Luisiana y Virginia).²²⁷ En lo referente a una eventual readmisión de los estados confederados en la Unión, los republicanos se dividieron. Lincoln, cuya política fue conocida como el *ten per cent plan*, abogaba por ofrecer el perdón total y restablecer en la plenitud de sus derechos, con la lógica excepción de la posesión de esclavos, a quienes prestaran juramento de lealtad a la Unión y aceptasen la *Emancipation Proclamation*, incluso facilitando que se pudiese establecer nuevamente un gobierno estatal en todos aquellos estados donde ese juramento lo prestase un número de personas que alcanzase el diez por ciento respecto de los votos emitidos en 1860; el presidente fundamentaba jurídicamente sus potestades en las previsiones constitucionales que le eran atribuidas en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dado que las mismas eran mucho más amplias que las limitadas facultades que el texto constitucional atribuía al Congreso;²²⁸ dicho criterio presidencial estaba motivado, en cierta medida, por el deseo de minar el apoyo a la causa confederada y, en parte, para acelerar la reconstrucción tanto en los estados sureños leales a la Unión como en los territorios ya conquistados por

²²⁶ Aunque el manuscrito original se destruyó en el incendio que asoló Chicago en 1871, pueden contemplarse imágenes digitalizadas de fotografías tomadas de dicha proclama en <http://www.nysl.nysed.gov/library/features/ep/fep3.htm>

²²⁷ La orden, por tanto, no era de aplicación en los estados esclavistas de Delaware, Kentucky, Maryland y Missouri, leales a la Unión.

²²⁸ «*There was also disagreement as to which branch of the government should have the lead role in this reconstruction of the seceded states [...] He [Lincoln] felt that he might have more constitutional authority under his powers as Commander in Chief than Congress did under its enumerated powers*», William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 45.

las armas federales (especialmente Luisiana). Frente a estas tesis de Lincoln, el ala radical del Partido Republicano (liderada en el Senado por Benjamín Wade de Ohio y Charles Sumner de Massachusetts, y en la Cámara de Representantes por Thaddeus Stevens, George W. Julian y Manes M. Ashley) centró el debate político en el estatus de los esclavos liberados, marcando como objetivo principal conseguir para los mismos la igualdad ante la ley, siendo partidarios de tratar a los territorios integrantes de la Confederación como provincias conquistadas. En este sentido, Benjamin Wade y Henry W. Davis redactaron un proyecto de ley, el *Wade-Davis Bill* (popularmente conocido por la extremada dureza de su contenido, como el *ironclad oath*), que fue presentado en el Congreso en julio de 1864, endureciendo notablemente el proyecto presidencial, al elevar al cincuenta por ciento el porcentaje de quienes debían prestar juramento de lealtad, a la vez que se excluía del censo a quienes hubiesen formado parte del ejército confederado. No obstante, pese a que el *Wade-Davis Bill* fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el presidente ejerció su derecho de veto respecto al mismo.

Tras su aprobación en el Senado, el 31 de enero de 1865 la Cámara de Representantes aprueba la decimotercera enmienda constitucional, sancionada por Lincoln al día siguiente. Tan solo dos meses después, el 3 de marzo de 1865, se aprueba la creación del *Freedmen's Bureau*, organismo administrativo que tenía como función principal proporcionar ayuda material a los antiguos esclavos; dicho ente se adscribía orgánicamente al Departamento de Guerra y su vigencia temporal se limitaba a un año. El 9 de abril de 1865 finaliza la guerra de Secesión y tan solo una semana después, Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865. Su sucesor Andrew Johnson intentó consolidar el liderazgo presidencial, pero lo único que logró fue enfrentarse abiertamente con el ala radical del Partido Republicano, sin

que el carácter obstinado del nuevo mandatario norteamericano facilitase el logro de compromisos o acuerdos puntuales. A mayor abundamiento, pese a que Johnson había acogido sinceramente la abolición de la esclavitud y compartía el ideario de la *Emancipation Proclamation Act*, adolecía de un prejuicio racista y, al igual que Thomas Jefferson, consideraba a los negros seres inferiores.²²⁹ A las circunstancias subjetivas de Johnson se añadía un inconveniente de tipo netamente jurídico: a diferencia de Lincoln, el nuevo presidente no podría ampararse en sus prerrogativas de comandante en jefe del ejército al haber finalizado el conflicto bélico.

El esquema para la reconstrucción del presidente Johnson se manifestó en la orden presidencial de 29 de mayo de 1865, la *Amnesty Proclamation*.²³⁰ se garantiza el perdón a quienes presen juramento de lealtad a la Unión y apoyasen la *Emancipation Proclamation*, siéndoles restituidos sus bienes y derechos (con la lógica excepción de los esclavos); ahora bien, la propia orden presidencial establecía nada menos que catorce grupos exceptuados del perdón general, de tal manera que, quienes se encontrasen incurso en alguno de dichos colectivos, debían solicitar directamente el indulto presidencial, que tendría carácter graciable. Los negros carecerían de todo papel en la nueva sociedad, pues aunque se habían roto las cadenas de la esclavitud a los mismos no se les reconocerían los derechos civiles y políticos, lo que condujo a otro potente foco de conflicto. Íntimamente ligado a la nueva situación laboral derivada de la extinción de la esclavitud estuvo el problema de los *black codes*. La base de la economía sureña estaba centrada en las grandes plantaciones, donde la mano de obra esclava era un elemento

²²⁹ «*White men alone must manage the South*», manifestaba el presidente. Citado en Eric FONER, *A short history of Reconstruction*, o. cit., p. 84.

²³⁰ Puede consultarse dicha orden en <http://www.civilwarinteractive.com/DocsJohnsonAmnesty.htm>

indispensable; mas en la nueva sociedad postbélica, los grandes terratenientes propietarios de las vastas extensiones de terrenos para cultivo instaron de las autoridades estatales la aprobación de una normativa que forzase a los antiguos esclavos a trabajar en las plantaciones. La respuesta a esa demanda la constituyeron los *black codes*, que si bien reconocían los derechos a los antiguos esclavos, pretendían situarlos en una posición lo más cercana posible a su antiguo estatus;²³¹ a dichos *black codes* se unió toda una legislación civil y penal que limitó severamente los derechos de los negros de tal manera que estos no tuviesen otra opción que solicitar trabajo en las plantaciones. Socialmente el panorama tampoco sufrió alteración alguna, pues eran frecuentes las intimidaciones y agresiones a la población negra sin que las autoridades pusiesen demasiado entusiasmo en la persecución de los agresores blancos. El republicano moderado Carl Schurz elaboró un informe, el *Report on the Condition of the South*, publicado el 19 de diciembre de 1865, en el cual detallaba el estado social y político en que se encontraban los estados tras la guerra.²³²

La oposición principal a las iniciativas de Johnson provino del ala radical del Partido Republicano que, como hemos indicado anteriormente, abogaba no ya por la extensión del derecho de sufragio a los negros, sino por una rotunda intervención del gobierno federal que transformase profundamente la economía y la sociedad de los estados del sur, algo que la élite demócrata sureña contemplaba con profundo recelo. Y aunque

²³¹ El interesado en consultar el texto del *black code* de Mississippi (el primero en promulgarse) puede acceder al mismo en http://afroamhistory.about.com/library/blmississippi_blackcodes.htm. No obstante, el general Daniel E. Sickles, que, como veremos en su momento, desempeñó un papel importantísimo en las elecciones de 1876, suspendió el *black code* de Carolina del Sur, al sostener que «*all laws shall be applicable alike to all inhabitants*», Eric FONER, *A short history of Reconstruction*, o. cit., p. 97.

²³² Puede accederse al texto de dicho informe en <http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/cnst10.txt>

inicialmente los radicales eran un sector minoritario en el seno del Partido Republicano cuyos postulados ni tan siquiera eran compartidos en muchos estados del norte (donde gran parte de la población coincidía con Johnson al entender que la abolición de la esclavitud no implicaba necesariamente la igualdad ante la ley), las crecientes noticias sobre la violencia ejercida sobre los negros y, sobre todo, la aprobación de los *black codes* hizo que las tesis del republicanismo radical ganara fuertes apoyos. Por tanto, si el choque frontal entre el ejecutivo y el ala radical del Partido Republicano era únicamente cuestión de tiempo, lo que estaba claro era que la fase de la reconstrucción bajo el liderazgo presidencial había llegado a su fin.

2.2.2. LA FASE LEGISLATIVA DE LA RECONSTRUCCIÓN (1866-1873)²³³

El Congreso surgido de las elecciones de 1866 creó en su seno una comisión mixta encargada de la investigación y un posterior informe de las condiciones en que se encontraban los estados sureños. Las Cámaras, en manos de republicanos moderados, aún distaban mucho de identificarse con las propuestas del ala radical del partido, mas estimaban que era necesaria tanto una profunda rectificación de las políticas presidenciales como una garantía efectiva de los derechos civiles de la población negra, si bien este último punto suponía una dificultad adicional al tratarse de un área reservada tradicionalmente a la competencia de los estados. No obstante, la tesis asumida para justificar la intervención de los poderes federales a la hora de establecer una nueva regulación no fue la de hablar de «territo-

²³³ A esta fase dedica Eric Foner los capítulos 6 («The making of Radical Reconstruction»), 7 («Blueprints for a Republican South»), 8 («Reconstruction: political and economic») y 9 («The challenge of enforcement») de su libro *Reconstruction: America's unfinished revolution*, o. cit.

rios conquistados» (tal y como postulaban los radicales republicanos), sino que se prefirió la argumentación de la pérdida de derechos subsiguiente a la secesión estatal.

En 1866 se introducen en el Senado dos proyectos de ley: el primero ampliaba la vigencia temporal del *Freedmen's Bureau*; el segundo fue el *Civil Rights Bill* que, en desarrollo de la decimotercera enmienda constitucional, pretendía garantizar por vía legal los derechos civiles de los esclavos liberados. Johnson vetó ambos proyectos el 27 de marzo de 1866,²³⁴ pero el 9 de abril de dicho año el Congreso anuló el veto presidencial y aprobó definitivamente la *Civil Rights Act*, cuya denominación completa era *An Act to protect all Persons in the United States in their Civil Rights, and furnish the Means of their Vindication*.²³⁵

²³⁴ Un lúcido análisis de la situación y, en particular, de la política de Johnson en relación con ambos proyectos, podemos encontrarlo en sendas misivas que el embajador británico en Londres, Sir Frederick Williams Adolphus Bruce, remitió al secretario del Foreign Office, George William Frederick Villiers, cuarto Earl de Clarendon. La primera carta, fechada el 9 de febrero de 1866, se redacta tras una entrevista personal del embajador con el presidente y que se prolongó más de media hora; en la misma se dice que «...*the President appears to be quite settled in his views, and confident that they will be ultimately successful. He said there are a few extreme Radicals who are bent on pushing theories to extremes, and that the way to deal with them is to allow them to lay their plans fully before the people, who will decide against them. He remarked on the inconsistency of those who, while advocating in the Freedmen's Bureau bill provisions for the maintenance & tutelage of the Negro, which could only be justified on the ground of his helplessness and inability to take care of himself, wished at the same time to confer on him the right by means of suffrage of taking part in the Govt. of the country*». La segunda misiva, fechada el 6 de mayo de 1866 consiste en realidad en un informe sobre la situación de la política presidencial en relación con la reconstrucción, elaborado a petición del secretario del Foreign Office. El embajador inglés señala que «*It's remarkable how entirely the President has abandoned the agrarian ideas, which he apparently entertained at first. I think he now perceives that, if his policy of reconstruction is to be carried through, and the Southern States are to be restored to their autonomy, the interests and safety of the Negro will be best protected by the large proprietors. He has no faith in the plan of turning the Negroes into small proprietors, and thus depriving them of the care and civilizing influence of dependence on the White Man*». El texto completo de ambas cartas en ERIC FONER, «Andrew Johnson and Reconstruction: A British view», *Journal of Southern History*, vol. XLI, n.º 3, august 1975, pp. 381-390.

²³⁵ Puede verse esta norma en <http://www.teachingamericanhistory.org/library/index.asp?document=480>

El 13 de junio de 1866 el Congreso aprueba la decimocuarta enmienda que pretendía integrar en el texto constitucional los derechos de los esclavos liberados.²³⁶ Posteriormente, el Congreso aprueba una serie de normas, las *Reconstruction Acts*, que dividen los territorios del sur en cinco distritos militares bajo el mando de funcionarios federales autorizados para recabar la ayuda del ejército con la finalidad de garantizar la efectiva aplicación de la *Civil Rights Act*, si bien entre los años 1868 y 1870 todos los estados del sur fueron readmitidos en la Unión. Por el momento, los legislativos de los estados estaban en manos republicanas y la legislación aprobada trajo como consecuencia la entrada en el marco político de la comunidad negra, cuyas aspiraciones la situaban en la órbita del Partido Republicano, que se convertía así en el beneficiario político de tal situación; pero trajo igualmente como consecuencia la aparición de diversas organizaciones²³⁷ que ejercían la violencia sobre negros y votantes republicanos para impedir que estos ejerciesen su derecho al voto y, en consecuencia, la antigua oligarquía dirigente recuperase el control de los gobiernos estatales. Pese a ello, y en estos años, en los estados del sur la suma de la población negra, de *carpetbaggers* (habitantes del norte que se desplazaron al sur) y *scalawags* (habitantes del sur partidarios de la Unión) hizo posible la reforma de las constituciones de los estados para garantizar los derechos civiles de la población negra, lo que no solo puso igualmente de manifiesto la división del republicanismo, sino que suscitó la oposición de la vieja clase dominante sureña, cuyos intereses político-económicos defendían en esos momentos tanto el Partido Demócrata como el presidente Andrew Johnson.

²³⁶ De los estados sureños, únicamente Tennessee ratificó la enmienda el 19 de julio.

²³⁷ Sin duda alguna la más conocida fue el Ku Klux Klan, pero existían otras como los Knights of the White Camellia, la Black Cavalry, Men of Justice, White Brotherhood, Red Shirts.

Los enfrentamientos entre el presidente y el legislativo tuvieron su colofón en la primavera de 1868, cuando el Congreso decidió someter a *impeachment* a Andrew Johnson. El motivo que se esgrimió para iniciar el procedimiento fue la decisión presidencial de cesar al secretario de Guerra Edwin M. Staunton en contra del parecer del Senado, lo que vulneraba las disposiciones de la *Tenure of Office Act*.²³⁸ Pese a que la Cámara de Representantes aprobó de manera entusiasta la acusación, el enjuiciamiento en el Senado se quedó a un solo voto de la mayoría necesaria para prosperar.²³⁹ No obstante, el enjuiciamiento de Johnson hizo inevitable que los republicanos optasen por Ulysses S. Grant como candidato del partido a las elecciones presidenciales de 1868. Grant tuvo la suerte de que su oponente fuese Horatio Seymour, marcado por los gravísimos disturbios que afectaron a Nueva York durante la guerra civil y que a punto estuvieron de ocasionar la secesión (Seymour se había dirigido a los insurrectos como «*my friends*»). Grant fue presentado como el brillante y exitoso comandante en jefe de los ejércitos de la Unión, salvador de los Estados Unidos y héroe de guerra, por lo que obtuvo fácilmente la victoria,²⁴⁰ un triunfo electoral que supuso, a su vez, un importante giro en la política de ambos partidos y, por ende, en el proceso de reconstrucción. Sin embargo Grant, aunque excelente soldado, ni era político ni tenía experiencia en el mundo de la política, por lo que acabó en manos del sector radical del partido y enfrentado con el ala liberal.²⁴¹

²³⁸ Aprobada el 2 de marzo de 1867 a pesar del veto presidencial, la *Tenure of Office Act* impedía al presidente cesar a un miembro del gabinete a no ser que tal decisión fuese ratificada por el Senado.

²³⁹ Puede consultarse el libro de William REHNQUIST, *Grand inquest*, o. cit.

²⁴⁰ Grant venció en todos los estados salvo Oregón, Luisiana, Georgia, Kentucky, Maryland, West Virginia, Nueva Jersey y Nueva York. Texas, Florida y Mississippi aún no se habían reincorporado a la Unión. Pueden consultarse los resultados electorales en <http://uselectionatlas.org/RESULTS/>

²⁴¹ «*Prior to his inauguration he had never held a civil office, and he did not clearly understand the workings of our political system. Starting out with the assumption that the Presidency was a sort of personal possession given him by the people to manage as he thought*

Como bien indica Eric Foner, 1868 marcó un *turning point* en la política estadounidense, dado que el Partido Republicano, el antaño radical defensor del cambio y las reformas, pasó a ser el conservador garante del orden y la estabilidad mientras que los demócratas, que antiguamente defendían las tradiciones y la continuidad, pasaron a considerarse a sí mismos como revolucionarios.²⁴² Comienza un nuevo periodo en el cual las preocupaciones se centran fundamentalmente en la política económica, no en vano la primera norma aprobada tras la elección de Grant fue la *Publica Credit Act*, que establecía el abono de la deuda nacional en oro. En cuanto a los estados del sur, aún controlados por los republicanos, se impulsó una acción política basada en cuatro puntos: fomento de la educación (eso sí, con la debida separación escolar entre blancos y negros), regulación y desarrollo de los derechos de la población negra, elaboración de una nueva legislación laboral más acorde con la nueva situación derogando los *black codes* y penalizando los castigos corporales y la aprobación de una nueva legislación fiscal que, a diferencia de lo que ocurría antes de la guerra, incrementase los impuestos a los grandes propietarios de plantaciones. Tanto en el norte como en el sur se inició un programa público de ayudas para el fomento del desarrollo económico cuya inevitable secuela fue la corrupción política, tanto en las filas republicanas como demócratas. Grant logró notables éxitos en su política, como el Tratado de Washington (que ventiló las reclamaciones de la Unión

proper, he had, with the best intentions in the world, entirely ignored the party leaders in choosing his first cabinet. This independent policy had soon proved a failure and he had been brought to the necessity of securing some support. In the contest to gain control of him which followed, the Radicals had triumphed over the Liberals and had become the Presidential advisers and the dispensers of patronage», Paul Leland HAWORTH, The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876, pp. 5-6.

²⁴² ERIC FONER, *A short history of Reconstruction*, o. cit., pp. 146-147.

frente a Inglaterra por los destrozos ocasionados por el acorazado Alabama²⁴³ y que supuso el inicio de una época de amistad con Inglaterra) y la aprobación de las anteriormente mencionadas «enmiendas de la reconstrucción».²⁴⁴ Ello se debió a que el gran problema al que hubo de hacer frente la Administración Grant fue el clima de violencia generalizado en los estados del sur y que se centraba en ataques a negros y republicanos,²⁴⁵ ante lo cual estos tornaron sus ojos a la Unión, depositando sus esperanzas en una acción federal que garantizara en la práctica los recién obtenidos derechos civiles. Así, se aprueban una serie de leyes, las *Enforcement Acts*, dentro de las cuales la más conocida es la *Ku Klux Klan Act*, que penalizaba las actuaciones tendentes a coaccionar a personas para que no ejerciesen su derecho al voto o a disuadirlos de tomar posesión de cargos públicos, tipificando por vez primera determinadas conductas como delitos de carácter federal.

Cuando el primer mandato de Grant tocaba a su fin, la división entre radicales y moderados, que desde el final de la guerra de Secesión había caracterizado al Partido Republicano, había perdido su razón de ser. Con gran parte de las aspiraciones del ala radical consagradas incluso a nivel constitucional, en los albores de 1872 el republicanismo se escindía ahora entre partidarios de Grant y los *liberal republicans*. Este ala liberal del republicanismo opuesta a Grant convocó en mayo de 1872 una Convención en

²⁴³ Uno de los tres barcos confederados que habían sido construidos en astilleros británicos. La Unión culpaba al gobierno británico de las pérdidas ocasionadas al gobierno federal. El asunto se sometió a un arbitraje internacional y se acordó indemnizar a los Estados Unidos en 15 millones de dólares.

²⁴⁴ Se trata de la decimocuarta y decimoquinta enmiendas constitucionales (aprobadas respectivamente en 1868 y 1870) que proscribían definitivamente la esclavitud en el territorio de los Estados Unidos y eliminaban la posibilidad de denegar el sufragio por motivos de raza, color o antigua condición de esclavos.

²⁴⁵ Eric FONER, *A short history of Reconstruction*, o. cit., p. 184.

Cincinnati y designó como candidato a la presidencia a Horace Greely, editor del *New York Tribune*. El programa de este republicanismo liberal tenía como puntos clave el cese de la intervención federal en los estados del sur, la total reposición en sus derechos a los estados integrantes de la antigua Confederación, la reducción del gasto público y, sobre todo y por encima de todo, la reforma del *civil service*.²⁴⁶ Los demócratas, incapaces de presentar un candidato que pudiera hacer sombra a Grant, apoyaron a Greely en su lucha contra el presidente, pese a lo cual aquel únicamente obtuvo la victoria en seis estados (Texas, Georgia, Tennessee, Kentucky, Missouri, Virginia Oeste y Maryland, en este último por un escasísimo margen, pues Greely obtuvo el 50,34% de los votos frente al 49,66% de Grant)²⁴⁷ y de hecho el candidato fallecería a los pocos días de celebrarse la contienda electoral. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que si bien la escisión del ala liberal del Partido Republicano enajenó muchos votos a Grant, tal circunstancia se compensó con la abstención de parte del electorado demócrata (que prefirió no concurrir a los comicios antes que apoyar a Greely) así como por el gran foco de nuevos votos que supuso la gran masa de población de color existente en los estados sureños.

Pese al fracaso del republicanismo liberal, su impacto en el sistema fue muy notable, puesto que determinó el realineamiento de los dos grandes partidos nacionales: así, si los demócratas cesaron de oponerse a las políticas de reconstrucción y a las enmiendas constitucionales, en el Partido Republicano

²⁴⁶ Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 3-7. El mismo autor señala en la p. 5 del meritado estudio que «*Liberal republicans wanted to shift the political agenda away from sectional and racial issues and to smash the monopoly that Republicans and Democrats had exercised over the national political life since 1850's*». Uno de los muchos aciertos de este notable estudio es prestar especial atención a la emergencia del republicanismo liberal. No obstante, también reconoce la importancia del republicanismo liberal Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 22-24.

²⁴⁷ Tomo los datos de <http://uselectionatlas.org/RESULTS/>

se inició una comisión para el estudio de la reforma del *civil service* y se nombró a Benjamín Bristow como secretario del Tesoro con el expreso mandato de perseguir el fraude y la corrupción. Y es que tanto demócratas como republicanos trataban de cortejar la masa de votos del liberalismo republicano, cuya importancia se presumía decisiva en los futuros comicios, tanto legislativos como presidenciales.²⁴⁸

2.2.3. LA REASUNCIÓN DEL CONTROL DEMÓCRATA DE LOS ESTADOS SUREÑOS (1873-1877)

Durante los años 1868 a 1870 había tenido lugar en los estados del sur un profundo cambio político. Los demócratas, sobre todo a partir de 1872, iniciaron un giro decisivo en su estrategia de modo que en lugar de centrarse en la oposición al voto de la población negra orientaron sus esfuerzos en restaurar íntegramente los derechos de los antiguos confederados y en recuperar el control político de los estados sureños, propiciando lo que en la historia norteamericana se conoce como la etapa de *redemption*. Ello condujo a que Maryland, Virginia Oeste, Virginia, Tennessee, Missouri y Georgia pasasen a manos demócratas. La grave crisis económica que atravesaron los Estados Unidos durante esta etapa, unido al profundo desgaste político que sufrió Ulysses Grant durante su segundo mandato a consecuencia de los reiterados y sucesivos escándalos de corrupción ayudaron sobremanera a la causa demócrata.

El clima de prosperidad y auge económico experimentado tras el final del conflicto bélico (lo que Mark Twain denominó la *Gilded age*) finalizó abruptamente con el pánico de 1873, que ocasionó la bancarrota de muchas entidades financieras e

²⁴⁸ Tesis sostenida por Michael F. HOLZ en el primer capítulo de su citado libro *By one vote*, o. cit.

incluso la quiebra del puntal bancario, Jay Cooke & Company. La crisis financiera tuvo su lógico correlato social en un elevado aumento del desempleo y la aparición de enormes masas de trabajadores que súbitamente se vieron privados de todo medio de subsistencia. El Congreso pretendió hacer frente a tan delicada situación aprobando en abril de 1874 la *Inflation Bill*, pero Grant vetó el proyecto con el apoyo casi unánime de la prensa. Y si la crisis económica pasó lógica factura a los republicanos, el descrédito de la Administración Grant aumentó debido a la continua aparición de escándalos económicos y de corrupción que jalonaron todo el segundo mandato presidencial: el anteriormente citado pánico de 1873,²⁴⁹ el escándalo del *Crédit Mobilier*,²⁵⁰ el hecho de que el *attorney general* George Williams utilizase fondos públicos del ministerio para fines particulares, y un sinnúmero de casos más que escandalizaron al público en general. Incluso cuando Benjamin Bristow, secretario del Tesoro, decidió con el apoyo expreso del presidente, a poner fin a tales escándalos, actuando de manera eficaz frente al *whiskey ring* (un grupo que sobornaba a funcionarios del Tesoro para eludir el pago del impuesto de licores) se encontró con que el secretario par-

²⁴⁹ Que tuvo como curioso antecedente en 1869 el intento de dos personas (Jay Gould y Jim Fisk) de monopolizar el mercado de oro, situación que tuvo su culmen en el «viernes negro», el 24 de septiembre de 1869. Para lograr sus propósitos necesitaban acceso a cierta información confidencial, y buscaron el acercamiento a los centros de poder sirviéndose de un cuñado del presidente Grant. Véase la obra de Kenneth D. ACKERMAN, *The gold ring: Jim Fisk, Jay Gould and black Friday 1869*, Nueva York, Ballinger Pub. Co., 1990.

²⁵⁰ Se trataba de una sociedad creada por empresarios del ferrocarril que se dedicaba a suministrar a las empresas ferroviarias material a precios notoriamente superiores a los habituales, utilizando el beneficio obtenido para sobornar a congresistas. La comisión de investigación abierta por el Congreso llegó a la conclusión de que doce miembros del mismo (once de ellos republicanos) eran sospechosos de obtener sobornos o descuentos de dicha empresa, aunque únicamente en uno de los casos las sospechas pudieron demostrarse ciertas. Un análisis con bastante detalle de este escándalo se encuentra en el capítulo VIII de la obra de Edward WINSLOW MARTIN, *Behind the scenes in Washington, being a complete and graphic account on the Credit Mobilier investigation*, The Continental Publishing Company and National Publishing Co., 1873. El texto íntegro del capítulo puede consultarse en internet, en http://cpr.org/Museum/Credit_Mobilier_1873.html

ticular de Grant, Orville Babcock, estaba implicado en la trama. Tan turbio clima político-económico provocó que, en las elecciones legislativas de 1874, los republicanos perdiesen el control de la Cámara de Representantes, aunque retuvieron con esfuerzo el predominio en el Senado.²⁵¹ Mas la situación tuvo igualmente consecuencias en la política a seguir en los territorios al sur de la línea Maxon-Dixon, pues las elecciones legislativas de 1874 tuvieron una consecuencia adicional: la erosión de la ideología del libre trabajo hizo posible un resurgimiento de la doctrina de la supremacía blanca que minó las bases de la política de reconstrucción. El gabinete presidencial, abrumado por la situación económica y por los escándalos que minaban su credibilidad, fue incapaz de articular una política coherente que hiciese frente a ese resurgir de la *home rule*.

La crisis económica había golpeado duramente al sur. Muchos estados ya estaban en manos demócratas, quienes habían asumido como doctrina esencial con respecto a la población de color la política del *separate but equal*. Y si la población negra había depositado sus esperanzas en la intervención del estado federal, los demócratas habían reforzado sus doctrinas: primacía blanca, bajada de impuestos y férreo control de la mano de obra trabajadora integrada por los antiguos esclavos. Para ello recurrieron sus campañas violentas sobre negros y republicanos,²⁵²

²⁵¹ Un análisis de las elecciones revela, no obstante un hecho esencial: «*Abstention, not defection to democrats or thirth parties, was the party's biggest headache in 1874 and 1875. For the republicans, then the question was wether they could bring those former supporters back to the polls and mobilize new ones*», Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., p. 18.

²⁵² «*Most Southern whites were unappeased and unrelenting in their denunciation of local white Republicans as "scalawags" and "carpetbaggers". For the blacks their hate was unbounded. And gradually they began to take back power. They did so partly by frightening black voters away from the polls through terrorism. One by one, conservative white Democrats "redeemed" their states. A Southern revolution imposed by Republicans in Washington could last only as long as there was Republican unity. But in 1872 came a secession of "Liberal Republicans" protesting Grant-era corruption*», Bernard A. WEISBERGER, «The stolen election», *American Heritage*, n.º 41 (julio-agosto 1990), pp. 18-20.

que tuvieron una influencia decisiva en las elecciones a las legislaturas estatales que se celebraron en 1874. Hasta ese momento, Arkansas, Luisiana, Mississippi y Carolina del Sur continuaban en manos republicanas, mientras que en Alabama, Florida, Carolina del Norte y Tejas los ejecutivos republicanos se encontraban con legislaturas hostiles. En 1874 la situación cambió de forma radical, dado que únicamente Florida, Carolina del Sur y Luisiana permanecían bajo control republicano, y en el último caso merced a la intervención del gobierno federal. Este clima de violencia tuvo su máxima expresión en Luisiana durante el mes de septiembre de 1874, cuando una gran masa de integrantes de la *white league* se enfrentaron a un grupo de negros y a miembros de las fuerzas del orden, situación que motivó el envío de tropas federales al mando del general Philip Sheridan con orden de sostener con las armas al ejecutivo estatal del republicano William P. Kellogg frente al candidato demócrata John McEnery, quien sostenía haber sido el vencedor en las elecciones a gobernador celebradas en 1874. Aunque el caso de Luisiana fue el más trágico, no fue en modo alguno el único, dado que acontecimientos similares se produjeron en Alabama y Mississippi, aunque en estos casos no se enviaron tropas federales, según Grant, porque eminentes líderes republicanos le habían persuadido para que no lo hiciera.

Pese a todo, entre marzo y diciembre de 1875 se celebraron elecciones en diversos estados y, contra todo pronóstico los republicanos no solo no sufrieron una debacle, sino que lograron resistir el empuje demócrata e incluso recobrase electoralmente en algunos territorios. No obstante, la política de intervención federal en los estados del sur estaba en claro desprestigio, como lo prueba el hecho de que en un mensaje especial del presidente Grant al Senado el 13 de enero de 1875, reconociese que la población del norte estaba en contra de la intervención del ejército unionista en el sur. Incluso cuando en

1875 Grant pensó en enviar tropas a Mississippi, desistió de hacerlo cuando una delegación republicana de Ohio le instó a que no lo hiciera sobre la base de que tal intervención provocaría la derrota republicana en las elecciones a gobernador del estado y, en consecuencia, la pérdida de toda esperanza republicana de lograr una victoria en las elecciones presidenciales de 1876.²⁵³

En tan difícil ambiente, con las relaciones norte-sur en su mayor grado de tensión desde la guerra civil, y con la depresión económica derivada del pánico de 1873, se van a celebrar las elecciones presidenciales del año del centenario. Por primera vez desde 1860, la convención republicana iba a ser abierta, dado que Grant había sopesado presentarse a un tercer mandato, pero desistió cuando los diarios comenzaron a hablar de dictadura y cesarismo y, sobre todo, cuando la Cámara de Representantes aprobó por, 233 votos frente a 18, una moción declarando que todo intento de alterar los precedentes establecidos en su día por Washington, Jefferson y otros de limitar su mandato a una reelección sería «*unwise, unpatriotic and fraught with peril to our free institutions*». ²⁵⁴ Todo parecía augurar que, por vez primera desde 1860 era posible una victoria demócrata en las elecciones presidenciales. Ambos partidos eran conscientes de que los comicios iban a ser muy reñidos y que tan solo un puñado de votos separaba a ambos candidatos de la victoria,²⁵⁵ por lo que ambas organizaciones políticas apelaron a ideas reformistas para intentar atraerse el decisivo voto del liberalismo republicano.²⁵⁶

²⁵³ Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 21 y 47. Sobre el desprestigio de la política de intervención en los estados sureños, véase igualmente VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 34-36.

²⁵⁴ Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, p. 11.

²⁵⁵ «*The election of 1876 was universally expected to be the most closely presidential election in more than a generation, even before the candidates were chosen*», Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 95.

²⁵⁶ «*The 1875 state races, in sum, ensured that in 1876 both parties would portray themselves as good-government men, as reformers committed to honesty, competence and*

3. 1876: Entre el centenario y la crisis constitucional

3.1. 1876²⁵⁷

1876 representaba para los Estados Unidos el año del centenario de su nacimiento como nación. Era, pues, lógico que se conmemorase tal acontecimiento, siendo la ciudad de Filadelfia, en su día primera capital del país, el lugar idóneo para conmemorar la efeméride, que a punto estuvo de fracasar debido a un suceso acaecido en la Cámara de Representantes el día 10 de enero cuando James Blaine, líder republicano y uno de los candidatos del partido para suceder a Ulysses S. Grant, arremetió en plena Cámara contra el ex presidente de la Confederación, Jefferson Davis, a quien solicitó excluir de la ley de amnistía en tramitación, proyecto que logró aprobarse únicamente cuando el estado de Kentucky adoptó una moción en el sentido de que no tomaría parte en la *Centennial Exhibition* a no ser que se aprobara una amnistía total.²⁵⁸ Finalmente la sangre no llegó al río y el 10 de mayo de 1876 el presidente Ulysses S. Grant y el emperador Pedro I de Brasil inauguraban la *Centennial Exhibition* sita en Fairmount Park, cuatro millas al oeste de Filadelfia. La exposición tenía por objeto no solo celebrar el primer siglo de existencia del nuevo estado, sino mostrar al mundo los avances,

efficiency. No disagreement existed on this professed goal; the question was what party could be better trusted to achieve it», Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., p. 38.

²⁵⁷ Para una visión de los Estados Unidos en el año de su centenario, véase William P. RANDEL, *Centennial: American life in 1876*, New York, Chilton Book Co., 1969. Una magnífica recreación novelada de los sucesos acaecidos en este año en Gore VIDAL, *1876*, Grijalbo, 1977 (que, al igual que su otra novela *Burr*, sería deseable se reeditase), donde, pese a tratarse de una obra literaria y no propiamente histórica, el autor hace un notable esfuerzo para no apartarse de la realidad, salvo en algunas omisiones puntuales (por ejemplo, omitir los episodios de violencia en los estados del sur hacia votantes negros y republicanos) y en algunas interpretaciones muy concretas (en el caso de los jueces Davis y Bradley).

²⁵⁸ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 16, y Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 21-23. Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 53-54, para Robinson «*In the past, Blaine had tried to be a statesman; now he descends to the lowest depths of politics*».

sobre todo tecnológicos que habían tenido lugar en esos cien años de existencia. Durante seis meses, la exposición acogió en su seno a más de ocho millones de visitantes, que pudieron contemplar junto con los avances industriales y tecnológicos algunos objetos más por curiosidad que por otra cosa.

A lo largo de 1876, tuvieron lugar en los distintos estados una serie de elecciones cuya importancia para las presidenciales de ese mismo año iban a ser decisivas, porque no solo se trataba de comicios estatales, sino que en muchos de ellos se ventilaban nada menos que los miembros de la Cámara de Representantes (así, mientras, por ejemplo, los demócratas lograron recuperar el control de Virginia occidental, los republicanos lograron una victoria en Ohio). Y el 1 de agosto, en uno de sus últimos actos oficiales, Ulysses S. Grant firmaba la incorporación de Colorado como nuevo estado de la Unión, circunstancia por la cual se le conoció como el *centennial state*. Este hecho tuvo suma importancia en el resultado de las elecciones presidenciales por dos motivos: al aportar dicho estado tres nuevos compromisarios, se elevó de 366 a 369 el número de miembros del Electoral College. Ello implicaba que para lograr la victoria se elevaba de 183 a 185 el número de votos compromisarios requeridos para la obtención de una mayoría;²⁵⁹ además, fue precisamente Colorado el estado que aportó los tres primeros compromisarios al Electoral College, pues ante la imposibilidad de convocar unos sufragios específicos para la elección de compromisarios, estos fueron designados por la legislatura estatal, en manos republicanas, por lo que el beneficiario fue el candidato republicano Rutherford Bitchard Hayes.

Pero ese año 1876 fue igualmente fecundo en acontecimientos que jalaron la pequeña historia de los Estados Unidos

²⁵⁹ Para la integración de Colorado en los Estados Unidos y su impacto y consecuencias en las elecciones presidenciales, el único autor que ha destacado la importancia de dicho evento es Michael F. HOLT, *By one vote*, pp. 28-32.

y que cautivaron mucho más al público que la incorporación de un nuevo estado, hasta el punto de convertirse en iconos del *far west*.²⁶⁰ El 2 de agosto, en el lejano poblado de Deadwood, sito en el territorio de Dakota (aún no integrado en los Estados Unidos) James Butler Hickok, el legendario Wild Bill, antiguo *marshall*, famosísimo pistolero y una de las leyendas del oeste americano, era asesinado por la espalda mientras jugaba una partida de póker.²⁶¹ Tan solo unos meses antes la banda del célebre forajido sureño Jesse James había sido diezmada cuando intentaba asaltar el banco de la ciudad de Northfield, si bien los dos hermanos James, junto con sus primos los Younger habían logrado escapar con las autoridades pisándoles los talones; y en el mes de junio de ese mismo año de 1876 el Séptimo de Caballería comandado por George Armstrong Custer había sido masacrado en Little Big Horn.

3.2. *Los candidatos a la presidencia y la campaña electoral*

*Like many close and bitterly fought presidential elections, the Hayes-Tilden contest of 1876 was a riveting personal struggle between two unique, humanly flawed individuals with very different strengs and weakness.*²⁶²

*By sheer good luck, the principals in the disputed election were cautions, unsensational men of patriotic instincts.*²⁶³

²⁶⁰ «During august 1876 the hunt for the James and Younger brothers shared the headlines with the death of Wild Bill Hickok in Deadwood, Dakota territory, and a war between Christians and Turks and Serbs in Bosnia-Herzegovina (the latter subject to a international peace mediation)», Ted P. YEATMAN, *Frank and Jesse James, the story behind the legend*, Cumberland House Publishing, 2001, p. 169.

²⁶¹ Sobre la desconocida e interesantísima figura de Hickok, el mejor estudio sigue siendo el debido a Joseph G. ROSA, *They called him Wild Bill: the life and adventures of James Butler Hickok*, University Oklahoma Press, second printing of second edition, 1982.

²⁶² Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 4.

²⁶³ Louis W. KOENIG, «The election that got away», *American Heritage*, 11, n.º 6 (1960), pp. 4-7, accesible en en <http://www.americanheritage.com/articles/magazine/>

3.2.1. EL PERFIL DE LOS CANDIDATOS

No pretendemos desarrollar un estudio biográfico de los candidatos Tilden y Hayes, puesto que ello desbordaría los límites del presente capítulo, mas sí es necesario conocer la trayectoria vital de ambos contendientes para comprender en toda su extensión el conflicto presidencial de 1876, ya que, como veremos, fueron precisamente las circunstancias personales de Hayes y Tilden las que influyeron para su elección como candidatos a la presidencia por sus respectivos partidos.

3.2.1.1. El candidato republicano Rutherford Bitchard Hayes

*Rutherford B Hayes was a solemn but god-natured man, a hard worker, a loving husband and father, a capable public servant. He had fought and been wounded in the Civil War; he had been elected to Congress and had been Governor of Ohio three times; he was honest, handsome and sincere. He was popular among the citizens and he had no enemies among the professional politicians. He was the sort of man of whom it is often said that was born to be President.*²⁶⁴

Rutherford Bitchard Hayes,²⁶⁵ nacido el 4 de octubre de 1822 en Ohio, se formó en el *Kenyon College* de dicho estado

ah/1960/6/1960_6_4.shtml

²⁶⁴ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 16. Estas líneas constituyen, a juicio del redactor de estas líneas, la mejor síntesis del carácter y aptitudes del candidato republicano.

²⁶⁵ Sobre Hayes, sigue siendo de obligada lectura Ari HOOGENBOOM, *Rutherford B. Hayes, Warrior & president*, University Press of Kansas, 1995, aunque la fuente primaria para acercarse a la figura de Hayes sean sus diarios y cartas, hoy accesibles a través de internet en <http://www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/>. Lloyd ROBINSON (*The stolen election*, o. cit., pp.71-79), MORRIS (*Fraud of the century*, o. cit., pp. 57-68), REHNQUIST

(donde, por cierto, también cursó sus estudios el juez David Davis) y en 1843 ingresó en la *Harvard Law School*, donde por aquel entonces aún impartía clases el magistrado del Tribunal Supremo Joseph Story. Finalizó sus estudios en 1845 y comenzó a ejercer la abogacía, donde llegó a alcanzar notoriedad en asuntos penales, aunque posteriormente se orientó al campo, económicamente más ventajoso, del derecho civil. En 1852 contrajo matrimonio con Lucy Hayes, con quien tuvo numerosa descendencia. Desarrolló un temprano interés político, contribuyendo al establecimiento y desarrollo del Partido Republicano en el estado de Cincinnati, y apoyando de manera a Lincoln en la campaña a las elecciones presidenciales de 1860. Al estallar la guerra de Secesión, Hayes solicitó ingresar voluntariamente en el ejército, integrándose en el Vigésimotercer Regimiento de Voluntarios de Ohio, siendo herido en combate hasta en cuatro ocasiones (la más grave de ellas en una carga de su regimiento en South Mountain, Maryland). En 1864, aún en pleno conflicto bélico, Hayes fue elegido miembro de la Cámara de Representantes por el distrito de Cincinnati (cargo para el cual sería reelegido en 1866) y asignado al comité de reclamaciones inmobiliarias de dicha Cámara, llegando a presidir el comité conjunto del Senado y la Cámara para la biblioteca. Elegido gobernador de Ohio en 1867 con un legislativo estatal en manos demócratas, Hayes centró su acción política en materias tales como la reforma penitenciaria, ayuda a los enfermos mentales y a los huérfanos, que no lo enfrentaran abiertamente con una legislatura hostil, lo que no le impidió mostrarse abiertamente partidario de ratificar la decimocuarta enmienda constitucional. En 1868 apoyó la designación de Grant como candidato

(*Centennial Crisis*, o. cit., pp. 33-57) y HOLT (*By one vote*, o. cit., pp. 56-66) nos ofrecen sendos acercamientos a su figura.

republicano a la presidencia al ver en la figura del general unionista la persona que sería capaz de sacar adelante, entre otras cosas, la reforma del *civil service*, anclado aún en los vetustos métodos del *spoil system*. Reelegido como gobernador de Ohio en 1869, en este segundo mandato logró que la legislatura del estado ratificase, aunque por estrecho margen, la decimoquinta enmienda constitucional que otorgaba a los negros el derecho al voto. Una vez finalizada esta segunda etapa, se retiró al ejercicio privado de la abogacía para volver a presentarse a un tercer mandato como gobernador en 1875, si bien en esta ocasión como potencial candidato a la nominación presidencial por el Partido Republicano. Hayes, que desde siempre había destacado por su don de gentes y su capacidad para hacer amigos, era un candidato de consenso que podía ser aceptado por las distintas facciones del Partido Republicano.

Como ya hemos indicado anteriormente, por vez primera desde 1860 la Convención Republicana iba a ser abierta. Ya en enero de 1876 el gobernador de Ohio recibió el apoyo del John Sherman, senador por dicho estado, quien en una carta remitida a la prensa abogaba por Hayes como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, algo que la Convención Republicana de Ohio confirmó por aclamación del 29 de mayo de dicho año. No obstante, la decisión final estaba en manos de la Convención Nacional del Partido Republicano que iba a celebrarse el mes de junio en la ciudad de Cincinnati. Un mes antes de la Convención Republicana tuvo lugar un acontecimiento decisivo a la hora de determinar el candidato del partido a las elecciones presidenciales: convocados por el republicano moderado Carl Schurz, dos centenares de personas se reunieron los días 14, 15 y 16 de mayo en lo que se denominó *Fifth Avenue Conference* (por celebrarse en un local sito en la Quinta Avenida), donde se elaboraron unas conclusiones, las *Adress to the American*

people (debidas a la pluma del propio Schurz) afirmando que no se apoyaría ningún candidato cuya integridad estuviera manchada o tan siquiera puesta en duda por la sombra de prácticas corruptas,²⁶⁶ lo que suponía una política de *reform within the party* que implicaba el descarte automático de Blaine y parecía inclinarse hacia el secretario del Tesoro, Benjamin Bristow. Aun así, en la Convención Republicana todo apuntaba a que, pese a las aspiraciones de Schurz el favorito para la candidatura seguía siendo James G Blaine, cuya reputación, pese a todo, había quedado gravemente afectada por su implicación en un turbio asunto de compra de bonos de ferrocarril²⁶⁷ de la cual logró salir airoso aun a costa de perder multitud de apoyos; tal circunstancia junto con la enemistad que a Blaine profesaba el senador por Nueva York Roscoe Cockling²⁶⁸ (todopoderoso líder republicano de dicho estado) le acabó pasando factura. Hayes era, por tanto, un candidato capaz de aglutinar a todos los republicanos bajo su candidatura. La encendida y apasionada presentación que de Blaine hizo el coronel Robert G. Ingersoll²⁶⁹ logró excitar al pú-

²⁶⁶ «We therefore declare...that at the coming Presidential election, we shall support no candidate who in public position ever countenanced corrupt practices or combinations, or impeded their exposure and punishment [...] no candidate who has failed to use his opportunities in exposing abuses coming within the reach of his observation, but for personal reasons and party ends has permitted them to fester on; no candidate, however, conspicuous his position or brilliant his ability, in whom the impulses of the party manager have shown themselves predominant over those reformers», Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, pp. 16-17; véase igualmente Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, pp. 39-42, quien indica que el proyecto de Schurz era «to consider what may be done to prevent the National election of the Centennial year from becoming a mere choice of evils».

²⁶⁷ Descrito con bastante detalle en Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 45-55 y en Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 52-54.

²⁶⁸ Cockling, persona sumamente vanidosa, jamás perdonó a Blaine que este se refiriese a él como «his grandiloquent swell, his majestic super-eminent, overbearing, turkey-globber strut», *Congressional Globe*, 30 de abril de 1866, p. 2299, citado en REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 52.

²⁶⁹ «Gentlemen of the Convention: In the name of the great republic, the only republic that ever exist upon the face of the earth; in the name of all her defenders and of all her supporters; in the name of all her soldiers living; in the name of her soldiers that died upon the field of

blico y hubiera supuesto una victoria indiscutida si se hubiesen celebrado las votaciones en ese momento, aunque estas hubieron de suspenderse por un corte en el suministro eléctrico, al parecer provocado por esbirros anti-Blaine.²⁷⁰ Aunque en todas las votaciones Blaine siempre encabezó la lista, estaba lejos de alcanzar los 379 votos necesarios para la designación. Lo máximo que llegó a alcanzar fueron 308 sufragios en la sexta votación, donde ya se apuntaba a que el candidato real, el *dark horse*, iba a ser precisamente Hayes. Por último, en la séptima votación, donde Morton y Conckling habían retirado sus candidaturas, Hayes acabó siendo elegido.²⁷¹

3.2.2.2. El candidato demócrata Samuel Jones Tilden

Samuel J. Tilden was an icy, aloof man with a forbidding manner and no fondness for public life. He was a bachelor. He had not taken any part in the Civil War; he was unimpressive physically; his health was poor. He had amassed millions of dollars through his cleverness as a lawyer. His cold, penetrating intellect was so brilliant that he made his own friends uncomfortable [...] Tilden did not have the personal magnetism a successful candidate must have to win the support of the people, and professional

battle; and in the name of those that perished in the skeleton clutch of famine at Andersonville and Libby, whose sufferings he so vividly remembers, –Illinois– Illinois nominates for the next president of this country the prince of parliamentarians, that leader of leaders, James G. Blaine», citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 56.

²⁷⁰ Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, pp. 22 y 25, ofreciendo en esta última página un detallado cuadro con el resultado de las distintas votaciones de la convención republicana; Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, pp. 60-61; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 58-68.

²⁷¹ Hayes anotaba en su diario, el 23 de junio de 1876, lo siguiente: «*The nomination has been well received. The best people, many of them heretofore dissatisfied with the Republican Party, are especially hearty in my support. I must make it my constant effort to deserve this confidence*», *Diary and letters of Rutherford Birchard Hayes*, volumen III, capítulo XXXIII, en <http://www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxxxiii.html>

*politicians of both parties hated him because he had exposed their thievery.*²⁷²

Samuel Jones Tilden²⁷³ nació el 9 de febrero de 1814 en el estado de Nueva York en el seno de una familia de campesinos, donde el temor de sus progenitores a perderlo, a consecuencia de la excesiva mortalidad infantil, le rodearon de una excesiva protección parental, en un opresivo ambiente que acabó privándole de una infancia normal y de relaciones con gente de su edad. Cursó estudios de derecho en Nueva York en 1835, pero no finalizó los mismos hasta 1841. En 1843 logró el cargo de *solicitor* de la ciudad de Nueva York, pero únicamente desempeñó el mismo durante un año, iniciando posteriormente una carrera jurídica que le convirtió literalmente en millonario pues si bien sus inicios fueron modestos, con el tiempo se convirtió en el asesor jurídico de influyentes y poderosas compañías mercantiles lo que, junto con una serie de inversiones económicas acertadas, le reportaron una inmensa fortuna. Tilden carecía del don de gentes y la simpatía natural de Hayes, pero logró suplir tal falta con una notable inteligencia, muy superior a

²⁷² Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 16. Robinson vuelve a atinar al exponer en unas pocas líneas el carácter, puntos fuertes y débiles del candidato demócrata.

²⁷³ Hasta hace poco, la biografía más reciente de Tilden era la de Alexander C. FLICK, *Samuel Jones Tilden*, 1939, aunque existía una anterior de John BIGELOW, *The life of Samuel J. Tilden* (2 vol.), Nueva York, Harper & Brothers, 1895. En la entrevista a la que hacemos referencia en la nota 6, Rehnquist comentaba que, si bien existían varias obras biográficas sobre Hayes, únicamente disponíamos de un ensayo biográfico sobre Tilden. Ignoramos si este lamento del *chief justice* tuvo alguna influencia, pero en el año 2007 apareció un estudio biográfico debido a Nikki ODAKER cuyo título es ya de por sí significativo, *Samuel Tilden, the real 19th president*, Show Biz East Productions, 2007. Breves apuntes biográficos del candidato demócrata pueden encontrarse igualmente en Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 79-95; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 85-117; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 58-79; y Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 96-118.

la de su futuro rival.²⁷⁴ Se inició en el mundo de la política por su amistad con Martin Van Buren y su adopción del credo demócrata fue absoluta, ya que desde los dieciocho años inició su ininterrumpida colaboración con dicho partido. La elección de Lincoln como candidato republicano en 1860 le preocupó sobremanera, pues estimaba que el norte hubiera aceptado de mejor grado una derrota republicana que el sur una victoria de dicho partido. Aunque no participó en la guerra como soldado su pertenencia al Partido Demócrata no le impidió acoger sinceramente las iniciativas del presidente Lincoln, pese a oponerse y criticar abierta y rotundamente la suspensión del *habeas corpus* decretada por el presidente durante la guerra. Tras la rendición de Lee, apoyó la política de Johnson en sus enfrentamientos con el ala radical del Partido Republicano, y en 1868 la candidatura de Horatio Seymour frente al general Grant, pero, tras la victoria de este y su reelección en 1872, Tilden volvió los ojos a su estado natal de Nueva York, orientando sus esfuerzos a la lucha contra la corrupción en la ciudad, representada por el clan Tweed.²⁷⁵ En 1872 logró un asiento en la *New York*

²⁷⁴ «Unlike Rutherford B Hayes, a calm, friendly, outgoing individual who seemed genuinely to enjoy the company of others, Tilden had to force himself to make even the slightest gesture of familiarity [...] What Tilden lacked in personal magnetism and a backslapping nature, he more than made up for a brilliant mind», Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 87. No obstante, Keith Ian Polakoff apunta una tara en el carácter del personaje: «When forced with unforeseen developments, however, with the need to make difficult decisions on short notices, Tilden often failed as a political leader», *Politics of inertia*, o. cit., p. 72.

²⁷⁵ Bajo el mandato del alcalde William Marcy «The boss» Tweed, la ciudad de Nueva York llegó a ser conocida como «los cuarenta ladrones». Su actividad principal consistía en inflar el precio de los contratos municipales, repartiéndose el beneficio entre contratistas y políticos. La Junta del Canal de Erie realizaba la misma actividad que Tweed en la ciudad, es decir, amañar el precio de los contratos de reparaciones y suministros del canal para obtener el correspondiente beneficio. Una muy reciente aproximación al personaje puede encontrarse en Kenneth D. ACKERMAN, *Boss Tweed: The Rise and Fall of the Corrupt Pol who conceived the Soul of Modern New York*, Da Capo Press, 2005, aunque puede verse un resumen de las hazañas de Tweed en el capítulo cuarto del libro de Andrew GUMBEL, *Steal this vote*, o. cit., pp. 73-90; y en Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 97-102.

State Assembly, Cámara baja legislativa del estado de Nueva York, liderando una campaña en pro de la reforma y contra la corrupción. Lograr el procesamiento y la condena de Tweed, así como la de muchos políticos y jueces en la órbita del cacique valió a Tilden la enemistad de Tamanny Hall, organización demócrata que controlaba la política de Nueva York, pese a lo cual dicho éxito aumentó su prestigio político, logrando ser elegido en 1874 gobernador del estado de Nueva York, plataforma desde la que pone fin a los manejos de la banda del canal. Toda esta serie de procesamientos y condenas facilita a los demócratas presentar a Tilden como adalid de la lucha frente a la corrupción institucionalizada que tenía su máxima representación en la Administración Grant.

El 3 de enero de 1876, el *New York World*, cuyo editor Manton Marble era íntimo amigo de Tilden, abre su portada con el titular «Tilden and reform», que se convertiría en el *leitmotiv* de la campaña demócrata. El 27 de junio de 1876 se reúne en San Luis la Convención Nacional Demócrata en un ambiente y con unas perspectivas bastante más claras que las republicanas. Pocas dudas había de que la candidatura demócrata recaería Samuel Tilden (aunque no faltaron quienes acusaran a este de comprar su nominación),²⁷⁶ y ello porque la Convención Demócrata estaba inspirada por una única idea que se repitió a lo largo de todas las sesiones: *reform*,²⁷⁷ única manera de oponerse a lo que la corrupción republicana simbolizaba. Y, en efecto, no hubo sorpresas: en la primera de las votaciones, Tilden obtuvo 417 votos, lo que le distanciaba enormemente del segundo de los candidatos, Hendricks,

²⁷⁶ Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 100-101.

²⁷⁷ Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, pp. 27-35; Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, pp. 64-70; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 88-93.

con 140, pero que aún distaba de los necesarios para obtener la designación (al ser necesarios dos tercios de los sufragios). Mas, en la segunda votación, Tilden obtuvo ya 535 votos y, con ello, la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales.

Comparando la trayectoria política de ambos candidatos, mientras William Rehnquist²⁷⁸ y Michael Holt²⁷⁹ sostienen que tanto a nivel político como personal Hayes era notablemente superior a Tilden, por el contrario Roy Morris afirma no solo que el demócrata era mejor político (extraña consideración esta última si tenemos en cuenta que la única experiencia de Tilden en el desempeño de cargos públicos fueron sus dos años en la Cámara baja del estado de Nueva York y los dos años en que ostentó el cargo de gobernador del *Empire State*, mientras que Hayes tenía en su currículum político dos legislaturas en la Cámara de Representantes y tres mandatos como gobernador de Ohio, es decir, una trayectoria mucho más sólida que la de su rival) sino que llega a decir de manera textual, que Tilden estuvo toda su vida preparándose para la presidencia.²⁸⁰ Si bien es cierto que como ideólogo

²⁷⁸ «If we compare Tilden's career with that of Hayes in 1868, they bear little resemblance to each other. Hayes was in the midst of his first term as Governor of Ohio, after an impressive military career in the Civil War and a lackluster two terms in the House of Representatives. He was married with a growing family. Tilden, by contrast, was very much a mover and shaker in the national Democratic Party. He had made a fortune as a corporate lawyer, but sat out the Civil War and never married», William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 76.

²⁷⁹ «Tilden differed strikingly from the Republican Rutherford Hayes in a number of ways, aside from their experiences during the Civil War. The robust Hayes looked taller than his actual height; eight years older than Hayes, the pale wizened Tilden, whose expensive suits looked a bit baggy, appeared shorter than he actually was. The outgoing Hayes had many close friends. Shy and aloof, Tilden won many admirers but few friends. Most Democratic legislators in Albany found the governor to be the coldest of cold fish. Happily married, Hayes had sired eight children. Tilden was a lifelong bachelor whom some historians have described as utterly asexual», Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 99-100.

²⁸⁰ «Tilden, nine years old and a good deal more experienced in national politics than Hayes, was a highly organized if somewhat cerebral politician with a long-standing credentials

Tilden superaba a Hayes (no en vano muchas de las ideas del Partido Demócrata llevaban su firma) políticamente el historial del candidato republicano superaba con creces al de su oponente. A ello debemos añadir la diferencia de carácter entre ambos, que hacía más «presidenciable» al republicano.²⁸¹ No obstante, y pese a lo enconado de la lucha electoral que ambos mantuvieron en 1876 y las pugnas entre ambos partidos, en algo sí que puede decirse que estaban igualados: en esta ocasión acierta de lleno Roy Morris cuando define a ambos candidatos como «dos hombres decentes».

3.2.2. LA CAMPAÑA ELECTORAL²⁸²

*Political campaigning in the United States has always been regarded as a game, and not a very clean game. The object is to win, and rules are meant to be broken. If a candidate can win without cheating, lying, buying votes, or defaming his oponent, so much better; but the important thing is to win, and make apologies later, if at all.*²⁸³

En nada se parecían las campañas electorales de 1876 a las que se celebran hoy en día, más que en tener como objetivo

*as a proven reformer [...] Hayes ironically proved to be a better politician than Tilden, who had spent virtually his entire life preparing for the presidency», Roy MORRIS JR., *Fraud of the century*, o. cit., p. 4.*

²⁸¹ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 71.

²⁸² El mejor análisis del desarrollo de la campaña presidencial de 1876 continúa siendo el de Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 95-199. Una versión más resumida es la de Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 119-151.

²⁸³ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 97. El autor precisa tal afirmación: «*The game has changed only a little since the nineteenth century. It would be a mistake to think that it is very much cleaner today than it was then; but the players are more careful about getting caught at dirty tricks. The big eye of television is watching, ready to tell the voters whenever a candidate oversteps the bounds of decency and fair play. And Americans tend to vote against the man who oversteps those bound too flagrantly.*»

final la victoria del candidato. Para situarnos en el contexto, quizá sea aconsejable exponer las principales diferencias que separan las campañas de entonces de las actuales. En primer lugar, si algo caracterizaba en aquella época a las organizaciones políticas era su profundo grado de descentralización, donde en muchas ocasiones las élites locales eran muy difíciles de controlar;²⁸⁴ en segundo lugar, los candidatos no hacían campaña personalmente, por lo que su ideario y sus propuestas debían extraerse de las cartas que el candidato propuesto dirigía a la cúpula de su partido aceptando la nominación,²⁸⁵ de ahí la importancia que tales documentos tenían al contener el programa de gobierno o, cuando menos, la declaración de intenciones del candidato en cuanto a sus objetivos una vez lograda la victoria y, por tanto, el acceso a la Casa Blanca.

²⁸⁴ «The decentralization of American political parties could be considered an advantage, at least when it came to nominating candidates, because it helped to make the system more democratic. But it was a constant headache for party leaders once the nominating process was completed; then it was a source of confusion and inefficiency, an obstacle to any party's attempt to take effective steps to improve its chances for winning an election. Virtually, all organizational work even in a presidential campaign was performed by state party officials. The national committees largely confined themselves to raising funds and printing documents», Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 94.

²⁸⁵ «Presidential campaigns in the nineteenth century were quite different from those of today. Not only there was no radio or television, but the candidates themselves did not go on the campaign trail. They generally stayed home and relied on surrogates crisscrossing the country to get out their message. Indeed, it was not until 1896 that William Jennings Bryan, the Democratic nominee for President, visited cities across the country to seek votes. Perhaps because of this reticence on the part of the candidates, considerable attention was paid to the somewhat formalistic ritual of their acceptance letters. The candidate did not accept the nomination at the convention, as today, but several weeks afterward. A group representing the national party called on him to «notify» him of his nomination –of which, of course, he was already aware. The candidate then issued an acceptance letter, declaring to no one's surprise that he was pleased to accept the nomination», William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 81-82. Coincidiendo con Rehnquist, Michael F. Holt indica que «Nineteenth century elections were primarily referenda on competing political parties, not their presidential candidates, because few if any voters ever personally saw or hear those candidates», *By one vote*, o. cit., p. 244.

3.2.2.1. El programa político en las cartas de aceptación de Hayes y Tilden

Hayes se tomó su tiempo en redactar la suya.²⁸⁶ Es interesante indicar que durante ese tiempo, concretamente el día 27 de junio de 1876, Hayes dirigió a Carl Schurz, líder del ala liberal del Partido Republicano, una misiva confidencial donde le expone las ideas que, en su opinión, deberían plasmarse en la carta de aceptación. Destacan entre ellas, y es significativo que la exponga en primer lugar, la reforma del *civil service* (*the issue of the canvass*), siendo igualmente destacable el hincapié que hace en presentar una declaración que supusiera tender puentes hacia los estados sureños; y aunque Hayes rechazaba la fórmula del *local self-government* por entenderla demasiado cercana a las posiciones demócratas, sí era partidario de una política de reconciliación basada en el respeto al texto constitucional. Esta interesante misiva de Hayes contiene una observación personal del candidato sobre una materia en la cual, como él mismo indica, el partido guarda silencio: la posibilidad de que, buscando una reelección, el candidato opte por orillar temas políticamente conflictivos.²⁸⁷ Unos días más tarde, el 8 de julio, Hayes hizo pública su carta de aceptación.²⁸⁸ Fue una declaración altamente significativa por varias razones:

²⁸⁶ «*I shall hardly reply to the committee before the end of the month, or till after the Fourth*» (Carta a John Sherman, fechada el 23 de junio de 1876); «*I do not expect to write my Acceptance for ten days or two weeks*» (Carta a Carl Schurz, fechada el 27 de junio de 1876, *Diary and letters of Rutherford Bitchard Hayes*, volumen III, capítulo XXXIII, en <http://www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxxxiii.html>).

²⁸⁷ «*I really think that a President could do more good in one term if untrammelled by the belief that he was fixing things for his election to a second term, than with the best intentions could be done in two terms with his power embarrassed by that suspicion or temptation during his first four years. Our platform says nothing on the subject. I am averse to adding topics, but could I not properly avow my own view and purpose on this head?*»

²⁸⁸ Puede accederse al texto de la carta de aceptación de Hayes en el ejemplar del diario *New York Times* del día 10 de julio de 1876 a través del enlace <http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9A05E5DE123AE63BBC4852DFB166838D669FDE>

- La importancia que se otorga a la reforma del *civil service*, que no en vano fue el primer asunto en abordarse. No solo criticó en durísimos términos el *spoil system* sino que anuncia una reforma completa del sistema.²⁸⁹
- Tal y como había adelantado en la carta a su correligionario Schurz, manifestó de manera clara y sin reservas que, de ser elegido, no optaría a un segundo mandato.
- En cuanto al problema de la reconstrucción y la relación de la Unión con los estados del sur, Hayes reducía todo a un único punto: respeto a la Constitución y a las leyes que, de por sí, traería no solo la paz, sino el reconocimiento del autogobierno.²⁹⁰

Tilden, por su parte, emitió su carta de aceptación en Albany el día 31 de julio de 1876,²⁹¹ dado que su designación

²⁸⁹ «*The reform should be through, radical and complete. We should return to the principles and practice of the founders of government [...] They meant that public officers should give their whole service to the Government and to the people. They meant that the officer should be secure in his tenure as long as his personal character remained untarnished and the performance of his duties satisfactory. If elected, I shall conduct the administration of the Government upon these principles, and all Constitutional powers vested in the Executive will be employed to establish this reform.*»

²⁹⁰ «*What the South most need is "peace", and peace depends upon the supremacy of the law. There can be no enduring peace if constitutional rights of any portion of people are habitually disregarded. [...] The welfare of the South, alike with that of every other part of the country, depends upon the attractions it can afford to labor and immigration and to capital. But laborers will not go, and capital will not be ventured where the constitution and the laws are set and defiance [...] All parts of the Constitution are sacred and must be sacredly observed. The parts that are new no less than the parts that are old. The moral and national prosperity of the southern states can be most effectually advanced by a hearty and generous recognition of the rights of all, by all [...] With such a recognition fully accorded it will be practicable to promote, by the influence of all legitimate agencies of the General Government, the efforts of the people of these States to obtain for themselves the blessings of honest and capable local government.*»

²⁹¹ Una transcripción de la carta de aceptación de Tilden puede consultarse, junto con la de Hayes, en internet: <http://www.marktwainproject.org/xtf/view?docId=letters/MTDP00227.xml;style=letter>

como candidato por el Partido Demócrata fue posterior a la de Hayes.²⁹² Su misiva, bastante más densa y extensa que la del candidato republicano, tiene significativas diferencias:

- Asume la importancia de una reforma del *civil service*, pero, de manera harto significativa, es el último de los temas que aborda. Coincide con Hayes en su crítica del *spoils system* y en la necesaria reforma del mismo.²⁹³
- Concuere igualmente con Hayes en lo relativo a la influencia o el peso de una eventual reelección a la hora de emprender determinadas reformas, no obstante lo cual lanza un dardo envenenado contra el republicano al afirmar que la experiencia ha demostrado lo infructuoso de las autolimitaciones en los mandatos.
- En cuanto al espinoso asunto de los estados sureños, tras criticar el lamentable estado en que se encuentra la Administración de los estados del sur, incide en la reconciliación y en la igualdad de todos los ciudadanos.²⁹⁴

²⁹² Al tener noticia de la designación de Tilden como candidato demócrata, Hayes anotó en su diario: «*The nomination of Tilden makes doubtful the States of New York, New Jersey, and Connecticut [...] Our adversaries reckon on a united South. This is their hope. We must meet them on this. They are under the same leadership which for fifteen years has been on the wrong side of every question.*».

²⁹³ «*We may wisely go on to the abolition of unnecessary offices, and, finally, to the patient, careful organization of a better civil service system, under the tests, wherever practicable, of proved competency and fidelity.*»

²⁹⁴ «*The nobler motives of humanity concur with the material interests of all in requiring that every obstacle be removed, to a complete and durable reconciliation between kindred populations once unnaturally estranged, on the basis recognized by the St. Louis platform, of the "Constitution of the United States, with its amendments universally accepted as a final settlement of the controversies which engendered civil war". But, in aid of a result so beneficent, the moral influence of every good citizen, as well as every governmental authority, ought to be exerted, not alone to maintain their just equality before the law, but likewise to establish a cordial fraternity and good will among citizens, whatever their race or color, who are now united in the one destiny of a common self-government.*»

- Existen otros temas ampliamente desarrollados por Tilden que Hayes ni tan siquiera aborda. Es significativo, por ejemplo, que el asunto prioritario para Tilden sea la reforma del gasto público, incidiendo ulteriormente en otras reformas económicas, como la monetaria, a la que dedica gran parte de su aceptación. Y en este aspecto, la crisis de 1873, cuyos efectos aún se hacían notar, tuvo un importante lugar en el pensamiento de Tilden.

3.2.2.2. Las estrategias de partido y la campaña electoral

Los candidatos se disputaban el voto en treinta y ocho estados o, lo que es lo mismo, un total de 369 compromisarios, por lo que, para obtener una victoria era preciso lograr cuando menos 185 votos. Los estados que aportaban más compromisarios al Electoral College eran Nueva York con 35, Pensilvania con 29, Ohio con 22 e Illinois con 21. Parecía a toda luz evidente que la división norte-sur no solo no se había diluido sino que, al menos electoralmente hablando, se había agudizado.

La campaña electoral fue larga e intensa y se inicia con la designación de los respectivos jefes de campaña, donde ambas formaciones hicieron gala de un total desacuerdo en sus respectivas elecciones. En el campo republicano se produce un primer revés para el candidato presidencial: el Comité Republicano (cuyos miembros eran simpatizantes de Grant y de Blaine) impuso para dicho cargo a Zachariah Chandler, secretario del Interior, persona que no tomó excesivo interés en la campaña y que rara vez se comunicaba con Hayes; dicho comité había rechazado como jefe de campaña electoral a Edward E. Noyes pese a ser el elegido de Hayes.²⁹⁵ En el caso

²⁹⁵ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 85. Como bien indica este autor, «*such a situation could not occur today, of course, since the choice of chairman of the*

demócrata la elección se mostró igualmente desafortunada, pues si bien se designó como jefe de campaña a Abram Hewitt, un recién elegido miembro de la Cámara de Representantes, de facto era el propio Tilden quien dirigía la campaña. Esto tenía enormes ventajas, pero a la larga se reveló como una fatal equivocación.²⁹⁶

Las estrategias de los partidos variaban claramente en función del territorio,²⁹⁷ puesto que un mismo partido no representaba los mismos intereses ni tenía su potencial foco de votantes de la misma rama social en los distintos estados. Ambos partidos representaban intereses distintos en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. Esto lo reflejó perfectamente un artículo publicado en el diario *Herald* el día 7 de noviembre de 1876, y en el cual, con la disculpa de analizar la influencia de la meteorología en los comicios, ofrecía una disección sociológica del cuerpo electoral, indicando qué porciones de la sociedad eran potenciales votantes de cada partido:

The weather has frequently exercised a powerful influence in determining the results of popular elections. It has grown into a popular belief that fair weather is good for the Republican Party, and that bad weather is favorable to the Democrats. Why this should be it is not difficult to understand, especially in the

*national committee is regarded as the indisputable prerogative of the presidential candidate». Chandler, además, se oponía a cualquier reforma del *civil service*, que era precisamente el aspecto al que Hayes daba mayor importancia. Así que, como bien indica Michael F. Holt, «The choice of Chandler was a mistake, if not an unmitigated disaster. By itself it almost neutralized everything Hayes had done to reach out to liberals. As secretary of the interior in Grant's administration Chandler provided proof that Republicans could never escape "Grantism". But his job in Washington also meant that Chandler could be an absentee national chairman», By one vote, o. cit., p. 128.*

²⁹⁶ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 98.

²⁹⁷ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 148.

*case of the larger cities of the East. The Republican ranks are largely recruited from the wealthier classes of the community, the men who live in comfortable houses and wear good clothes. On the other hand, the laborers, the men who earn small wages and work with their hands, from the bone and sinew of the Democratic masses. But these conditions do not prevail equally over the Union. In the west, the farming classes, the hearty pioneers of civilization, frequently form the Republican strength, while the professional men and those engaged in trade form that of the Democratic Party. The Southern proprietors and businessmen, like the Western, are by tradition and condition Democratic, while their laborers are in the opposition ranks. In the East and North, we are importers and manufacturers. In the West and South production and exportation form the bases of prosperity. The election today will no doubt be similarly influenced throughout the country by the state of the weather, as former elections...*²⁹⁸

Los republicanos tuvieron que desmarcarse de los escándalos de la Administración Grant,²⁹⁹ y basaron su estrategia en presentarse como salvadores de la Unión y adalides de las libertades civiles, manifestando su interés en reforzar los poderes de la federación y potenciar aún más los derechos individuales. En su campaña optaron el *wave the bloody shirt*, es decir, agitar el fantasma de la guerra civil recordando que si bien no todos los demócratas fueron desleales sí que todo rebelde era demócrata; de esta manera los republicanos podrían esgrimir la hoja de servicios de su candidato, voluntario desde el primer momento y herido hasta cuatro veces en combate, mientras que Tilden

²⁹⁸ Citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 88.

²⁹⁹ «Grant's own party could only appeal to the voters in the centennial election on the ground that the next Republican administration would be completely unlike the previous ones», VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., p. 16.

ni tan siquiera se había asomado por el frente de batalla³⁰⁰. Los demócratas, por el contrario, ponían su acento en la corrupción generalizada que había caracterizado el segundo mandato de Grant y en la defensa de los derechos de los estados frente a la Unión. En otras palabras, mientras que los republicanos pretendían salvaguardar los derechos individuales robusteciendo el poder federal, los demócratas perseguían el mismo fin, pero entendiendo que la mejor vía para la defensa de las libertades era precisamente la contraria, reduciendo el poder federal e incrementando el de los estados.³⁰¹

Los republicanos iniciaron una brutal campaña contra Tilden, a quien se acusó falsamente no solo de haber apoyado el «plan de paz» auspiciado por el general George McClellan en su campaña presidencial de 1864 (Tilden fue uno de quienes instaron al candidato a retirar tal propuesta), sino de fraude fiscal y enriquecimiento personal gracias a sus negocios con compañías ferroviarias. De todas las acusaciones vertidas contra Tilden solo una tenía un fondo de veracidad: el reproche que se le hacía en el sentido que, teniendo una fortuna personal inmensa, fuera incapaz de aportar fondos propios a la campaña demócrata, lo cual, en efecto, ponía al candidato en una situación incómoda. Hayes fue a su vez acusado también de fraude fiscal, con idéntica base que en el caso de Tilden. Los demócratas, por su parte, crearon una oficina de oradores y una oficina literaria que elaboró un memorial de 750 páginas que describía con todo lujo de detalles los escándalos que habían jalonado la Administración Grant. De dicho memorial se remitió copia a

³⁰⁰ El arrojó de Hayes estaba fuera de toda duda y nadie podía discutirlo. Pero la crítica a Tilden por no haber ingresado en el ejército era un arma de doble filo: Blaine, el frustrado aspirante a la nominación presidencial, había evitado el ingreso en el ejército pagando a otra persona para que ocupase su lugar.

³⁰¹ Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 118-119. Para una visión de las estrategias de los partidos durante la campaña en los distintos estados, es imprescindible la consulta de Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 148-200.

todos los periódicos y revistas para que se publicasen fragmentos del mismo. No obstante, la posición de los demócratas era ciertamente difícil. En efecto, los republicanos agitaron el fantasma de la guerra, no solo afianzando sus apoyos en el norte, sino recordando a la población negra del sur (el potencial foco de votos republicanos) que fueron ellos, los republicanos, quienes habían logrado la abolición de la esclavitud y garantizado constitucional y legalmente los derechos civiles. Si Tilden no entraba en el juego y no denunciaba a los antiguos confederados entregaba el norte a Hayes, mientras que si, por el contrario, asumía la crítica a los rebeldes corría el riesgo de enajenarse el apoyo del sur, que se revelaba vital en unas elecciones que amenazaban con ser extremadamente ajustadas.

Otro aspecto que es necesario destacar es el recrudecimiento en los estados del sur de la violencia sobre la población de color, potencial votante republicana. El mensaje demócrata en el sur en defensa de la *home rule* o supremacía blanca (que llevaba a identificar a cualquier votante blanco republicano como traidor no solo a la causa sino a su propio estado)³⁰² iba salpicado con brotes de violencia instaurando un clima de terror del cual el principal beneficiario era el Partido Demócrata. Incluso un autor tan proclive a la causa demócrata como Roy Morris se ve obligado a reconocer tal situación, aunque dicho autor ofrece una peculiar explicación a dicho estado de cosas: la violencia tenía como objeto demostrar el fracaso de la política de reconstrucción,³⁰³ exonerando de toda culpa al Partido Demócrata sobre la base de que nunca reivindicó los atentados del clan; por el contrario, Andrew Gumbel reconoce que, con

³⁰² Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., p. 164.

³⁰³ Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 33. Llevando al extremo la teoría de Morris, cualquiera podría justificar lo que él denomina «fraude del siglo» como un intento de los republicanos de demostrar la insuficiente regulación jurídica para solucionar problemas como el que se iba a presentar tras las elecciones de 1876.

independencia de la fuerza de los argumentos de Tilden, los demócratas eran los beneficiarios directos de esta clima de terror.³⁰⁴ Existen numerosos ejemplos de esta violencia ejercida sobre negros y republicanos. En Florida, por ejemplo se dieron situaciones absolutamente espeluznantes. Expondremos dos casos muy concretos. En el condado de Columbia, un grupo de hombres blancos se «entretuvieron» en decidir si colgaban a un negro o no, optando finalmente por liberarlo tras arrancar a la víctima la promesa de que abandonaría el Partido Republicano y haría campaña por la causa demócrata; otro grupo de blancos visitó al gobernador, quien fue expresamente amenazado de muerte al exponerle los visitantes que por cada hombre blanco muerto habría trescientos más dispuestos a matar al gobernador en represalia.³⁰⁵ Otro ejemplo del violento clima la ofrece la misiva que llegó a la sede central del Partido Republicano:

Holly Springs, Miss.

November 6, 1876

To Hon. Z. Chandler, Chairman

I am in possession of facts which warrant me in saying that the election in the northern half of this State will be a farce. Colored and white Republicans will not be allowed to vote in many of the counties. The Tilden clubs are armed with Winchester rifles and shotguns, and declare that they will carry the election at all hazard. In several counties of my district leading white and colored Republicans are now refugees asking for protections... A reign of terror such as I have never before witnessed exist in many large Republican counties to such an extent that Republicans are una-

³⁰⁴ Andrew GUMBEL, *Steal this vote*, o. cit., p. 95.

³⁰⁵ Jerrell H. SHOFNER, *Fraud and intimidation in the Florida Election of 1876*, Florida Historical Quarterly, n.º 42 (abril 1964), pp. 323 y 325. Sobre el clima de violencia e intimidación en el estado de Florida véase también Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 59-63.

ble to cope with it. If it were not for rifles and shotguns this State would give Hayes and Wheeler from 20 000 to 30 000 majority. I send this dispatch from Holly Springs, because it is impossible to rely on the Oxford office.

J. H. PIERCE.

*United States Marshall
Northern District of Mississippi*³⁰⁶

No obstante, la intimidación no quedaba limitada a la violencia física, sino que se extendía a la coacción económica³⁰⁷ e incluso llegaba al engaño deliberado a los votantes. Florida nos vuelve a ofrecer un ejemplo de la manera en la que los demócratas trataron de capturar mediante engaños los votos de la población negra.³⁰⁸

Ante este panorama, el mismo candidato republicano dejaba constancia en su diario personal no solo de las dudas que personalmente abrigaba sobre una victoria republicana, pues como todo el mundo daba por sentado una elección muy disputada, sino que de manera muy clarividente y premonitoria anticipaba los estados que, a su juicio, iban a resultar claves en la disputa.³⁰⁹ Los demócratas tenían mejores opciones, lo que se tradujo en que estos se mostraran exultantes y confiados en una

³⁰⁶ Citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 89-90.

³⁰⁷ «*There was also economic intimidation of voters. Here the Democrats had the advantage since they owned most of the land on which the Negroes lived [...] planters of Jefferson County set up a priority system for renting land and granting credits. First preference would go to those voting Democratic, second to those not voting at all, while those voting Republican would be considered last*», Jerrell H. SHOFNER, *Fraud and intimidation in Florida Election of 1876*, o. cit., p. 324.

³⁰⁸ Jerrell H. SHOFNER, *Fraud and intimidation in Florida Election of 1876*, o. cit., p. 327.

³⁰⁹ Hayes anotaba en su diario el 5 de noviembre de 1876: «*Maine 7, New Hampshire 5, Vermont 5, Massachusetts 13, Rhode Island 4, Pennsylvania 29, Ohio 22, Michigan 11, Illinois 21, Minnesota 5, Iowa 11, Nebraska 3, Kansas 5, Colorado 3. Total 144. Necessary to a choice 185. Probably Republican: Wisconsin 10, California 6, South Carolina 7-23. Total, 167. This leaves 18 [votes] required to elect out of the following doubtful States: New Jersey 9, Nevada 3, Florida 4, New York 35, Indiana 15, North Carolina 10, Louisiana*

rotunda victoria: las encuestas les eran totalmente favorables y por vez primera, desde 1856 (año en que James Buchanan derrotó al republicano John C. Frémont), un candidato demócrata tenía serias posibilidades de convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca. De esa euforia que se vivía en las sedes del Partido Demócrata se hacía eco el *Herald*:

AT THE DEMOCRATIC HEADQUARTERS

*The confidence shown at the rooms of the Democratic Central Committee, at the Everett House, all day yesterday, was remarkable. The Democratic Committee was apparently as certain of victory as though the result had been once for all decided. Mr. Magone spoke in no uncertain tones. «I tell you» said he, with impressive earnestness, «that is too late for any further appeals and arguments. The fiat has gone forth, and as sure as the sun will rise and set tomorrow, Governor Tilden will be elected by a magnificent majority».*³¹⁰

3.3. *Las elecciones: perspectivas, resultados, conflictos e intentos de solución*

3.3.1. SISTEMA DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

*...in our double system of voting we choose, not a presidential candidate, but an Electoral College that meets to select the winner of the election.*³¹¹

On the basis of historical experience, it can be reasonably be contended that the system of presidential election is anything but

8, Connecticut, 6, Oregon 3-93». *Diary and letters of Rutherford Bitchard Hayes*, volumen III, capítulo XXXIII (<http://www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxxxiii.html>).

³¹⁰ Citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 89.

³¹¹ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 14.

*excellent, that it is in actuality a morass of complexity, indirection, and ambiguity. Nothing indeed could have been more expertly contrived to thrust the nation into periodic crises of uncertainty and strife.*³¹²

En el capítulo anterior ya hemos descrito el sistema de elecciones presidenciales. Baste recordar a los efectos que nos interesan un dato esencial, cual es que los estados tienen libertad absoluta a la hora de elegir el modo de elección de los compromisarios: pueden establecer en la normativa reguladora que sean designados por las legislaturas estatales o, por el contrario, que sean los ciudadanos quienes los elijan mediante el correspondiente sufragio, en cuyo caso las competencias en lo referente a la regulación y desarrollo de la normativa electoral corresponden a los propios estados³¹³ y no a la federación, quien únicamente tiene atribuida en el texto constitucional la competencia exclusiva y excluyente para fijar tanto la fecha de las elecciones (que deberá ser la misma en todo el territorio nacional) como aquella en que los compromisarios hayan de reunirse en las capitales de sus respectivos estados y emitir sus votos a favor de un candidato a presidente y otro para vicepresidente.

Ahora bien, en el caso de que un estado opte por el sufragio popular como medio de elección de los compromisarios ¿Cómo se desarrollarían dichos comicios? Evidentemente, no hay dos

³¹² Louis W. KOENIG, *The election that got away*, o. cit.

³¹³ Ello trae como consecuencia inmediata, según ha constatado Louis W. Koenig, que «*State laws also regulate the conduct of elections, including the presidential contest, and political activity carried on within their borders. This authority and autonomy invite wide variation from state to state in the method, honesty and freedom of federal elections*», *The election that got away*, o. cit. Véase igualmente Elbert William EWING, *History and law of the Hayes-Tilden contest before the Electoral Commission: The Florida Case 1876-1877*, Washington D. C., Cobden Publishing Company, pp. 9-14, magnífico análisis jurídico de las actuaciones realizadas en el seno de la Electoral Commission por los defensores de las partes en conflicto, aunque desde una perspectiva claramente favorable al candidato demócrata.

legislaciones estatales idénticas, pero sí que puede ofrecerse un esquema general o común a todas ellas: la unidad base territorial es el condado (*county*), donde a lo largo y ancho del mismo se situarán diversas mesas electorales en las cuales, al finalizar la jornada, los funcionarios que legislativamente tengan atribuida la competencia procederán al recuento de los votos, certificando los mismos y remitiéndolos, junto con las papeletas precintadas, a la sede del condado, donde los organismos encargados a su vez del recuento (los *County Canvassing Boards*) procederán a su vez a revisar los resultados que han recibido y, certificando nuevamente los resultados de todo el condado, lo remiten a la capital del estado para que en esta, a su vez, el organismo encargado del recuento (el *State Canvassing Board*) procediese al recuento total de los resultados de todo el estado, ostentando este peculiar órgano amplias facultades a la hora de declarar válidos o nulos los votos; una vez finalizado este último recuento, se remite el mismo al órgano estatal competente (por lo general un secretario o miembro del ejecutivo estatal, aunque no necesariamente tiene que ser este el órgano al que la legislación del estado atribuya tal facultad) para que este certifique debidamente y los remita a Washington D. C. dirigidos al presidente del Senado quien, en sesión conjunta de ambas Cámaras, procedería a la lectura pública de los resultados.³¹⁴

Otra cuestión a tener en cuenta es el hecho de que, cuando menos jurídicamente hablando, el compromisario electo

³¹⁴ «First, the people vote at various places in the counties. At sunset on election day the precinct polls, as these voting place are called, are closed. The precinct officers count the votes, certify the result and forward that certificate together with the ballots of each precinct to the county seat. When all the precincts of the county are in, a County Canvassing Board certifies the total result shown by all the precinct reports. This certificate is then sent to the seat of State government, and the ballots themselves are filed at the seat of the county. At the seat of State government a State Canvassing Board sums up all the county reports, declares the results as shown by the returns before it and issues certificates accordingly. The details thus far are all left to State laws», Elbert William EWING, *History and law of the Hayes-Tilden contest*, o. cit., pp. 13-14.

goza de absoluta independencia a la hora de emitir su voto, de tal manera que puede optar por la persona que desee sin que por ello pueda exigírsele responsabilidad alguna.³¹⁵ En otras palabras, que el hecho de ser elegido en una lista presentada por un partido que de su apoyo a un determinado candidato no vincula jurídicamente al compromisario, que de iure goza de la libertad más absoluta a la hora de emitir su voto a un candidato.

3.3.2. EL RECUENTO ELECTORAL Y LA DISPUTA SOBRE LOS RESULTADOS³¹⁶

*Which was more honest. A Republican victory brought about by dishonest counting or a Democratic victory brought about by preventing voters from casting their ballots.*³¹⁷

Una vez finalizada la contienda electoral, la noche del día 7 de diciembre de 1876 todo parecía augurar una victoria demócrata. Los resultados electorales eran enviados a las sedes de los partidos por telégrafo y por ello la información llegaba con cuentagotas, muy dosificada y espaciada en el tiempo.³¹⁸ Los resultados no podían ser más favorables a los demócratas, hasta el punto de que, cuatro días después, el propio Hayes reiteraba en su diario las conclusiones a las que habían llegado el día de la jornada electoral: la derrota republicana. Con los

³¹⁵ Elbert William EWING, *History and law of the Hayes-Tilden contest*, o. cit., pp. 12-13.

³¹⁶ Además de las referencias contenidas en las notas a pie, es interesante la lectura del capítulo 17 de la biografía de Hayes debida a Ari Hoogenboom. La misma puede consultarse en internet, en la página web del *Rutherford B. Hayes Presidential Center*, a la que el lector interesado puede acceder a través del siguiente enlace: <http://www.rbhayes.org/hayes/president/display.asp?id=512&subj=president>. Véase igualmente Van WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 17-23.

³¹⁷ Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 126.

³¹⁸ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 95; Louis W. KOENIG, *The election that got away*, o. cit.

resultados de Florida, Carolina del Sur, Luisiana y Oregón aún inciertos, Tilden no solo había salido victorioso en los estados del sur (como era de esperar) sino que logró un triunfo electoral en los estados de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, e incluso en el medio oeste, por estrecho margen, la victoria en Indiana.³¹⁹ La noche electoral, por tanto, nada bueno presagiaba para los republicanos, tan es así que no solo el candidato presidencial, sino el mismísimo presidente del Comité Republicano, Zachariah Chandler, se fueron a dormir conscientes de su derrota.

Sin embargo, en medio de toda esta oleada de resignación, la actitud de dos simpatizantes republicanos sin cargo oficial ni político alguno lograron dar la vuelta a la situación. El primero de ellos, y quien inició el proceso que daría lugar a la disputa electoral, fue el general Daniel E. Sickles,³²⁰ quien de regreso a su casa se detuvo en el cuartel general de las fuerzas republicanas, donde únicamente encontró a un oficial de campaña, M. C. Clancy, a quien pidió los últimos resultados. Tras un rápido cálculo, Sickles verificó que si Hayes obtenía la victoria tanto en los estados de la costa del Pacífico como en los que aún se encontraban en disputa (Florida, Carolina del Sur y Luisiana), lograría la presidencia por un voto compromisario (es decir, por 185 frente a 184). Así pues, a iniciativa propia y sin respaldo alguno, dirigió un telegrama en nombre

³¹⁹ Tomo los resultados del *Dave Leip's Atlas of U. S. Presidential elections*, disponible en internet en la siguiente dirección: <http://uselectionatlas.org>

³²⁰ Sobre este interesante personaje (que llegó a ser embajador de los Estados Unidos en España entre 1869 y 1874) puede consultarse la clásica biografía debida a W. A. SWANBERG, *Sickles the incredible*, New York, Charles Scribner's sons, 1956; o la más reciente de Thomas KENEALLY, *American Scoundrel: The Life of the Notorious Civil War General Dan Sickles*, Nan A. Talese, 2002. Quizá el episodio más conocido de su vida tuvo lugar en 1859, cuando, al descubrir que su joven mujer, Teresa, mantenía un idilio con Philip Barton Key, *US attorney* en el Distrito de Columbia, disparó a este en plena calle. En el subsiguiente proceso judicial al que fue sometido, sus abogados lograron por primera vez en los Estados Unidos lograr una absolución con base en enajenación mental transitoria.

de Zachariah Chandler a las sedes republicanas de los estados en disputa: «*With your state sure for Hayes, he is elected. Hold your state*». Más tarde, Sickles recibió dos telegramas en contestación a los que había enviado: el de Daniel A. Chamberlain, gobernador de Carolina del Sur, confirmando la victoria republicana («*All right. South Caroline is for Hayes*») y el del presidente del Comité del Partido Republicano en Oregón. Una vez recibidos tales mensajes, Sickles envía un nuevo telegrama («*All four states, informing them that the enemy claimed each of them and enjoining vigilance and diligence*») y poco antes de las seis de la mañana se retira a su casa.³²¹

Esa misma noche, todas las rotativas de los periódicos se preparan para las ediciones matutinas dando al candidato demócrata como vencedor, e incluso diarios prorreplicanos como el *Indianapolis Journal* o el *Chicago Tribune* se hacían eco de la indeseada pero inevitable derrota republicana.³²² Todos salvo uno: el *New York Times*, cuyo director, John C. Reid, se negó en redondo a contemplar tal victoria demócrata ni tan siquiera como lejana posibilidad. Durante la guerra de Secesión, Reid había sido capturado por los confederados y encerrado en la tristemente célebre prisión militar de Andersonville, donde el hambre y la enfermedad acabaron con la vida de miles de prisioneros. Reid no olvidó nunca

³²¹ Para la decisiva intervención de Daniel Sickles, es de consulta obligada la lectura del trabajo de Jerome L. STERNSTEIN (ed.), «The Sickles memorandum: another look at the Hayes-Tilden election-nicht conspiracy», *Journal of Southern History*, n.º 32 (mayo de 1966), pp. 342-357. También puede consultarse Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 201-204; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 11-13; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 99; y Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 172-174.

³²² A título ilustrativo: «*The new era begins. Peace on Earth and to men of good will is the glorious message of this glorious day*» (*New York World*); «*Tilden is elected. The announcement will carry pain to every loyal heart in the nation, but the inevitable truth may as well be stated*» (*Indianapolis Journal*); «*Ave! Centennial Sam Complete Democratic victory*» (*New York Tribune*); «*Lost. The country given over to Democratic greed and plunder*» (*Chicago Tribune*). Citados en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 97-98, y Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 164.

tan penosa experiencia ni el mal trato recibido por las autoridades confederadas; en consecuencia, odiaba todo cuanto representase la causa demócrata y vio en esta ocasión la posibilidad de resarcirse. Aprovechando el ambiguo despacho de Dan Malone, presidente del Comité Demócrata del estado de Nueva York («*Please give your estimate of the electoral votes secure for Tilden. Answer at once*») y otro de William Barnum que solicitaba los resultados electorales de Florida, Luisiana y Carolina del Norte, la cúpula del *New York Times* dedujo que los demócratas no tenían clara su victoria en las urnas, y el diario salió a la venta, por tanto, con la noticia de un resultado aún incierto: *A doubtful election*.³²³ Poco después de las seis de la mañana, Reid se trasladó esa misma noche a la sede del Partido Republicano (donde por minutos no coincidió con Sickles) en busca de Zachariah Chandler. En su lugar encontró a otro prohombre republicano, William Chandler (sin parentesco alguno con Zachariah), quien le mostró los primeros titulares de diarios anunciando la victoria de Tilden. Posteriormente ambos fueron en busca de Zachariah Chandler, a quien encontraron en pijama con notorios síntomas de embriaguez,³²⁴ y tuvieron que explicarle la situación, los resultados y las posibilidades que con ello se abrían. Tras ser autorizado a actuar como creyera conveniente, Reid envió sendos telegramas a Daniel Chamberlain (gobernador de Carolina del Sur), al senador por Oregón John H. Mitchell, al senador por Florida Simon B. Conover y al gobernador de

³²³ Véase el trabajo de Mark D. HARMON, «The New York Times and the theft of the 1876 presidential election», *Journal of American Culture*, n.º 10 (1987), pp. 35-41.

³²⁴ Aunque hacer referencia al estado de Zach Chandler en la noche electoral pueda parecer un dato meramente anecdótico, lo cierto es que todos y cada uno de los libros y artículos dedicados a las elecciones de 1876 hacen referencia a este particular, quizá porque no era más que un reflejo de su decaimiento anímico por lo que él consideraba una derrota electoral.

Luisiana William P. Kellogg. El texto era el mismo en todos los casos: «*Hold your state*». ³²⁵

Tras las anteriores maniobras, la mañana del día 8 de noviembre de 1876 Tilden tenía asegurados 184 votos compromisarios al haber obtenido la victoria en 17 estados, mientras que su rival Hayes tenía asegurados únicamente 166 votos compromisarios que correspondían a 18 estados en que los republicanos habían ganado; quedaban aún pendientes los 19 votos compromisarios correspondientes a los estados de Florida, Luisiana y Carolina del Sur, los tres estados sureños aún en manos de gabinetes republicanos. Desde este momento las maquinarias de ambos partidos tomaron la iniciativa desplazando incluso a los propios candidatos. Ante una situación política tan candente, el presidente Ulysses Grant dirigió un escrito al general William T. Sherman en el cual daba instrucciones a sus generales en Luisiana y Florida para que mantuviesen el orden, instaba a informar de cualquier irregularidad y finalizaba con toda una declaración de principios. El texto de dicha orden era el siguiente:

To Gen. W. T. Sherman, Washington D. C.

Instruct General Augur, in Louisiana, and General Ruger, in Florida, to be vigilant with the force at their command to preserve peace and good order, and to see that proper and legal Boards of Canvassers are unmolested in the performance of their duties. Should there be any grounds of suspicion of fraudulent counting on either side, it should be reported and denounced at once. No man worthy of the office of President would be willing to hold the office if counted in, placed there by fraud; either Party can afford to be

³²⁵ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 98-99; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 14-18.

disappointed with the result, but the country cannot afford to have the result tainted by the suspicion of illegal or false returns.

U. S. GRANT³²⁶

Miembros de ambos partidos se desplazaron a los estados en disputa para vigilar activamente el proceso de recuento de votos. Hayes, que deseaba no incurrir en irregularidad alguna, siguiendo un consejo de Carl Schurz intentó que una de las personas encargadas de vigilar el recuento en Luisiana fuese Benjamín Bristow, precisamente por la autoridad moral que el mismo ostentaba tras su actuación como secretario del Tesoro, pero tal operación fue cancelada cuando Grant envió a sus propios representantes vetando expresamente la presencia de Bristow.³²⁷ La pelota estaba ahora en el tejado de los organismos públicos que en cada estado tenían encomendado el recuento, es decir, los *state Canvassing Boards* quienes tenían que finalizar su tarea antes del 6 de diciembre, fecha en que los compromisarios debían reunirse en la capital del estado y emitir su voto para que las autoridades estatales competentes certificaran el mismo y lo remitieran a Washington con destino al presidente del Senado. Tales organismos no solo tenían atribuida la potestad de anular los votos emitidos por ser formalmente nulos, sino que gozaban de una amplia discrecionalidad para rechazar los que considerase emitidos con fraude, violencia o intimidación. Analizaremos separadamente lo ocurrido en cada uno de los estados en disputa y lo ocurrido en Oregón, estado donde sin ponerse en cuestión la victoria republicana sí que se plantearon impugnaciones formales por incurrir uno de los compromisarios republicanos en causa de inelegibilidad al

³²⁶ Citado en Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., p. 55.

³²⁷ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 209-210.

ostentar en el momento de los comicios la condición de empleado federal.

3.3.2.1. Florida (4 votos compromisarios)³²⁸

La situación más compleja, no solo desde el punto de vista político sino jurídico, tuvo lugar en Florida, razón por la cual nos detendremos especialmente en describir con cierto detalle lo ocurrido en dicho estado. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en los restantes estados en conflicto, en esta ocasión el Partido Demócrata provocó la intervención de los poderes legislativo y judicial del estado al llevar el asunto a los tribunales y al aprobar a posteriori una legislación especial destinada únicamente a ofrecer respaldo legal a las aspiraciones de Tilden a la presidencia.

En Florida se celebraban, al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, los comicios para el puesto de gobernador del estado. El republicano Marcellus L. Stearns se presentaba a

³²⁸ Para conocer la compleja situación que se produjo en el estado de Florida, es imprescindible la consulta de dos trabajos de Jerrell H. SHOFNER, «Florida in the balance: the electoral count of 1876» (*Florida Historical Quarterly*, n.º 47, octubre 1968, pp. 122-150) y «Florida Courts and the disputed election of 1876» (*Florida Historical Quarterly*, n.º 48, julio 1969). Véanse también Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 63-80; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 210-214; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 193-195; y William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 102-106. De todas maneras, la mejor información sobre la actuación jurídica y política posterior al 6 de diciembre de 1876 se encuentra en la documentación remitida junto con los distintos certificados enviados a Washington, documental transcrita en las páginas finales de las actas de *Proceedings of the Commission appointed under the Act of Congress approved January 29, 1877 entitled: «An Act to provide for and regulate the counting of votes for president and vice-president, and the decision of questions arising thereon, for the term commencing march 4, A. D. 1877»*, en: part IV volume V, Forty Fourth Congress, Second Session, Washington, Government Printing Office, 1877 [en adelante, *Proceedings of the Commission*], pp. 289-291. Las actas se encuentran totalmente digitalizadas y puede accederse a las mismas en internet, en la página <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llec&fileName=001/llec001.db&recNum=0>, dentro del proyecto *A Century of Lawmaking for a New Nation: U. S. Congressional Documents and Debates: 1774-1875*.

la reelección, siendo su rival demócrata George F. Drew,³²⁹ con un electorado tan dividido que la situación estaba profundamente igualada. Y si la división política y social dejaba el resultado incierto, las previsiones legislativas tampoco ayudaban a resolver precisamente la situación.³³⁰

De acuerdo con la legislación estatal de Florida aprobada en 1872, el recuento de votos en los diversos condados debía realizarlo dentro de los seis días siguientes a la celebración de las elecciones el *County Canvassing Board*, organismo integrado por el juez del condado, el secretario y el juez de paz y, si por ausencia o imposibilidad uno de ellos no pudiera desempeñar el cargo, sería el *sheriff* el encargado de suplir la vacante; una vez realizada su labor debía enviar el resultado con la certificación del mismo a la capital del estado y con destino al *State Canvassing Board*. Cuando los resultados de las elecciones presidenciales mostraron lo ajustado de la votación, ambos partidos manifestaron su interés por la situación de Florida. Tanto demócratas como republicanos enviaron *visiting statemen* para que se hiciesen cargo de la situación y pudiesen comprobar in situ el verdadero estado de cosas. El día 12 de noviembre el republicano William Chandler llega a la capital del estado, Tallahassee, donde días más tarde se le unieron el antiguo gobernador de Ohio, John A. Carson de Iowa, el general Lew Wallace (quien cuatro años más tarde pu-

³²⁹ Una disidencia republicana intentó presentar su propio candidato a gobernador (en concreto, al senador Simon B. Conover), pero a última hora se logró abortar tal operación. Jerrell H. SHOFNER, *Florida in the balance: the electoral count of 1876*, o. cit., p. 122.

³³⁰ «*Inadequate election laws, together with poor transportation facilities and great distances involved, were major causes for much of the agitation. There were numerous ways in which fraud which threatened both parties, could be perpetrated. There was no standard ballot, and the parties issued their own. The only requirement was that all candidates voted for by an elector had to appear on the same ballot. The election laws provided no precinct divisions within the counties. Since an elector could vote anywhere there was abundant opportunity for duplicate voting [...] The party controlling the election machinery had a tremendous advantage*», Jerrell H. SHOFNER, *Fraud and intimidation in the Florida election of 1876*, o. cit., pp. 325-26.

blicaría la célebre novela *Ben-Hur*) y Francis C. Barlow de Nueva York. Los demócratas enviaron a Florida al antiguo gobernador de Georgia C. W. Wooley, a John F. Coyle de Pennsylvania y a Marton Marble, editor del *New York World*. La situación era muy complicada, pues ambas partes en disputa eran conscientes de que las elecciones se decidirían únicamente por un puñado de votos. Se inició desde ese momento un cruce de telegramas y titulares de periódicos donde cada partido anunciaba unos resultados favorables a sus intereses, cuando aún se desconocían los escrutinios oficiales. De los treinta y nueve condados del estado de Florida, los demócratas esperaban salir victoriosos en los del sur y en el oeste, donde la población era mayoritariamente blanca. No obstante, los *County Canvassing Boards* no se reunirían hasta el 13 de noviembre, fecha en la que realizaría el escrutinio de las votaciones en los condados para su revisión y ulterior envío al supremo organismo del estado.³³¹

El *State Canvassing Board* del estado de Florida constaba de tres miembros: el secretario de Estado Samuel B. McLin, el *Comptroller* Clayton A. Cowgil (ambos republicanos) y el *State Attorney General* William Archer Cocke (demócrata). La legislación estatal de Florida otorgaba al *State Canvassing Board* treinta y cinco días para realizar sus funciones. Y así, mientras los republicanos encabezados por Chandler pretendían dilatar lo más posible la reunión del organismo los demócratas, por el contrario, eran partidarios de una inmediata convocatoria. Otro problema se planteó en lo referente a las atribuciones del *Canvassing Board*: el organismo estaba facultado según la normativa electoral para excluir los votos emitidos mediando fraude o cualquier tipo de intimidación, e incluso el propio *attorney general* Cocke había emitido una circular

³³¹ Jerrell H. SHOFNER, *Florida in the balance: the electoral count of 1876*, p. 123. Este artículo es imprescindible para comprender en su totalidad el proceso de recuento de los votos en el estado.

avalando tal interpretación.³³² En medio de este conflictivo panorama el State Canvassing Board inició sus sesiones el día 27 de noviembre, y comenzó por examinar en primer lugar los resultados de las elecciones presidenciales para, una vez finalizada dicha tarea, abordar con posterioridad los sufragios emitidos en las elecciones a gobernador del estado.³³³ El Canvassing Board permitió la asistencia de representantes de ambos partidos e incluso admitió que tanto demócratas como republicanos pudiesen aportar pruebas tendentes a acreditar la existencia de fraude o intimidación en el desarrollo de la jornada electoral. No obstante, los demócratas se encontraban divididos en cuanto a la estrategia a seguir.³³⁴ Finalmente, el State Canvassing Board decide que los compromisarios

³³² «According to the amended law of 1872, the board of state canvassers was empowered to “determine and declare who shall be elected” and to exclude from consideration any county returns which were “irregular, false or fraudulent”. William Archer Cocke, Democratic attorney general and a Canvassing Board member, had written an opinion, which had been followed in the 1874 count, declaring that the board had quasi-judicial powers to examine evidence and excluded returns», Jerrell H. SHOFNER, *Florida in the balance: the electoral count of 1876*, o. cit., p. 125; Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., p. 66.

³³³ Los demócratas intentaron asegurar la elección de Tilden y hubo a lo largo de todo este periodo de tiempo un intenso cruce de telegramas referentes a posibles sobornos a autoridades estatales para que certificasen una victoria demócrata. William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 103; James C. CLARK, «The fox goes to France: Florida secret codes and the election of 1876», *Florida Historical Quarterly*, n.º 69 (octubre 1991), pp. 430-439; Karen GUENTHER, «Potter Committee investigation of the disputed election of 1876», *Florida Historical Quarterly*, n.º 61 (enero 1983), pp. 281-295, especialmente pp. 291-292: «The translation of the ciphers indicated that Tilden’s confidential agents in Florida, C. W. Wooley and Manton Marble, at first tried legally to arrange for Tilden’s election. Failing in this goal, these men apparently attempted to bribe election officials. For example, one telegram from Marble to Pelton issued on December 2, 1876, indicated that the decision of the Florida Returning Board could be secured for \$200,000. Yet no evidence was found to indicate that bribes were actually paid».

³³⁴ «R. B. Hilton, a Democratic elector, and George P. Raney, a Florida Democratic executive committeeman, suggested that the Democrats offer no evidence and refuse to participate in a quasi-judicial count before the state Canvassing Board. They preferred to insist on a simple ministerial count and see, redress in the courts if the board decided against them. The Northerners were afraid the courts might not act once the board decided and they would have lost the election without a fight», Jerrell H. SHOFNER, *Florida courts and the disputed election of 1876*, o. cit., p. 27.

legalmente elegidos son los republicanos (Frederick C. Humphreys, Charles H. Pearce, William H. Holden y Thomas W. Long) quienes, tal como prescribían las normas constitucionales, el día 6 de diciembre se reúnen en la capital del estado, Tallahassee, y emiten sus votos a favor de Hayes como presidente y Weeler como vicepresidente. Tales votos fueron certificados por el gobernador Marcellus S. Stearns con el refrendo del secretario de Estado de Florida, Saml. B. McLin y remitidos a Washington. Los demócratas que se habían desplazado desde los estados del norte hasta Tallahassee para seguir de cerca todo el proceso dieron el asunto por finalizado y regresaron a sus estados de origen. Pero contra todo pronóstico, el asunto distaba mucho de haber concluido.

David L. Yullee, un demócrata oriundo de Florida y antiguo senador de los Estados Unidos, junto C. Gibson (un demócrata de Missouri), aconsejaron a los compromisarios de Tilden que se reunieran en la capital, emitieran sus votos a favor del candidato demócrata y posteriormente instaran un proceso judicial *quo warranto*³³⁵ frente a los compromisarios republicanos.³³⁶ Dicho y hecho, los compromisarios de Tilden (Wilkinson Call, James E. Younge, Robert Bullock, y Robert B. Hilton) siguieron tan sabio consejo: el día 6 de diciembre se reunieron en Tallahassee, se autocalificaron como compromisarios legal y debidamente elegidos, emitieron sus votos a favor de Tilden como presidente y de Hendricks como vicepresidente, y remitieron sus votos a Washington certificados (de manera ilegal, al carecer de potestad para ello) por el *attorney general*

³³⁵ Se trata de un proceso judicial especial, por razón de la materia, que tiene limitado el objeto de conocimiento, dado que la única finalidad del mismo es verificar si un cargo público ha sido o no debidamente elegido y, por tanto, si posee derecho, razón por la cual, la legitimación activa para instar este tipo de procesos únicamente corresponde a quien acredite poseer un mejor derecho que la persona cuya elección ha sido impugnada.

³³⁶ Jerrell H. SHOFNER, *Florida courts and the disputed election of 1876*, o. cit., p. 28.

William Cocke, quien manifestó, en su calidad de miembro del State Canvassing Board, que la legitimidad de los compromisarios demócratas derivaba de los «auténticos resultados» de la votación celebrada.³³⁷ Una vez cumplimentada la primera fase de la estrategia, los compromisarios demócratas llevaron a la práctica la segunda parte del consejo que habían recibido. Animados por lo ocurrido en las elecciones a gobernador estatal (cuestión esta que detallaremos un poco más adelante) instaron un procedimiento *quo warranto*, recayendo este en el juez estatal del Segundo Circuito judicial de Florida, Pleasant White. La vista en el procedimiento judicial tuvo lugar entre los días 8 y 25 de enero de 1877, correspondiendo la defensa de los intereses republicanos al general Lew Wallace, quien argumentaba que dado que los compromisarios ya habían cumplido sus funciones y, por tanto, cesado en sus cargos tras haber emitido los votos el día 6 de diciembre de 1876, el procedimiento carecía de sentido al haberse producido una pérdida sobrevenida del objeto; Wallace intentó infructuosamente transferir el asunto a un juzgado federal, petición que fue rechazada por el juez White. Finalmente, el 25 de enero de 1877 se hizo público el fallo del asunto, considerando el juez White que los compromisarios demócratas eran los legalmente elegidos. Los republicanos, disconformes con la resolución, interpusieron el correspondiente recurso de apelación frente a la sentencia, que el Tribunal Supremo del Estado debería resolver en sus sesiones del mes de junio.³³⁸

Mas aún quedaba la coletilla final, pues tras el recuento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales debía procederse al recuento de los votos en las elecciones a gobernador

³³⁷ El certificado remitido por los compromisarios demócratas y certificado por William Archer Cocke se encuentra en la p. 287 de *Proceedings of the Commission*, o. cit.

³³⁸ Jerrell H. SHOFNER, *Florida courts and the disputed election of 1876*, o. cit., pp. 39-42.

del Estado. A la vista de lo ocurrido, el candidato demócrata a gobernador George F. Drew solicitó y obtuvo del Tribunal de Circuito que emitiese una orden al *State Canvassing Board* para que este limitase su actividad a un mero recuento de los votos y a certificar los mismos, absteniéndose de ejercer sus potestades discrecionales en orden a rechazar cualquier voto emitido; estrategia que, en caso de prosperar, favorecería los intereses demócratas en las elecciones presidenciales, aunque ni Tilden ni sus asesores mostraron gran interés en este asunto. Pero el *State Canvassing Board* ignoró la orden judicial y ejercitó plenamente sus facultades para rechazar votos ilegales, nulos o fraudulentos, certificando finalmente una victoria del candidato republicano a gobernador. Ante tal situación, se inicia un nuevo periplo judicial: inicialmente el asunto recae en el juez Pleasant W. White, un demócrata confeso, aunque posteriormente el asunto llega al Tribunal Supremo del Estado de Florida, que, al igual que el *State Canvassing Board* estaba integrado por tres miembros, dos republicanos y un demócrata, si bien el *chief justice* E.M. Randall, de ideología republicana, era enemigo personal del gobernador Stearns. La resolución final del Tribunal Supremo de Florida sorprendió a demócratas y republicanos: falló en contra de estos al dictar una sentencia ordenando al *Canvassing Board* que certificara los resultados sin excluir voto alguno.³³⁹ El gobernador Stearns tuvo perfectamente claro que la decisión del Tribunal Supremo zanjaba la cuestión únicamente respecto a las elecciones estatales, y, en consecuencia, Drew fue elegido gobernador por una diferencia de 497 votos. Con los demócratas ya instalados, tanto en el ejecutivo como en el legislativo del

³³⁹ Jerrell H. SHOFNER, *Florida courts and the disputed election of 1876*, pp. 29-32. Como indica dicho autor, «Although it specifically concerned only the gubernatorial election, a decision that the board had no power to throw out the returns would indirectly affect the presidential election which had been decided by this procedure».

estado de Florida, se pretendió dotar aún de mayor legitimidad al los votos demócratas certificados por Cocke.³⁴⁰ A tal fin, el día 17 de enero de 1877 se aprueba *An act to procure a legal canvass of the electoral vote of the State of Florida as cast at the election held on the seventh day of November A. D. 1876*. El nuevo State Canvassing Board, integrado por el secretario de Estado William D. Bloxam, el *comptroller* C. Drew y el tesorero Walter Gwynn, concluye que la victoria en los comicios presidenciales de 1876 en el estado de Florida la habían obtenido los compromisarios demócratas.³⁴¹ Interviene de nuevo el legislativo estatal para aprobar el 26 de enero de 1877 una nueva disposición legal, *An act to declare and establish the appointment by the State of Florida of electors of President and Vice-President*, donde (tras manifestar entre otras cosas que «*the late governor, Marcellus L. Stearn, by reason of said ilegal action and erroneus and ilegal canvass of the said board of State canvassers, did erroneously cause to be made and certified list of the names of electors of this states containing the names of Charles H. Pearce, Frederick C. Humphreys, William H. Holden y Thomas W. Long*») reitera que los compromisarios legalmente elegidos son Wilkinson Call, James E. Younge, Robert Bullock, y Robert B. Hilton, facultando al gobernador del estado para certificar los resultados y remitirlos a Washington. Y así, el día 26 de enero de 1877, el gobernador de Florida George F. Drew, con el refrendo del secretario de Estado W. D. Bloxam, remite un nuevo certificado, añadiendo como anexo al mismo no solo las disposiciones legislativas anteriormente citadas, sino un detallado recuento de los votos desglosados por condados en que fueron emitidos.

³⁴⁰ A instancias de Abram S. Hewitt, quien despertaba así de la inacción que le caracterizó durante toda la crisis presidencial.

³⁴¹ No obstante, la diferencia era mínima, puesto que los candidatos demócratas recibieron 24440 votos mientras que los republicanos recibieron entre 24350.

Así pues, en el caso de Florida existen tres certificados de votos compromisarios enviados a Washington: el primero, remitido por el gobernador Stearn con los cuatro votos para Hayes; el segundo, el certificado por el *attorney general* Cocke con los cuatro votos para Tilden; y el tercero, el elaborado por el nuevo gobernador Drew y, con el respaldo del legislativo estatal, confirmado el anterior remitido en su día por Cocke. Todo ello con el aditamento adicional de la resolución judicial del tribunal del circuito de Florida.

3.3.2.2. Carolina del Sur (7 votos compromisarios)³⁴²

La situación en Carolina del Sur era ciertamente extraña: si bien en las elecciones presidenciales los compromisarios de Hayes lograron la victoria, aunque por reducido margen, en las casi inmediatas elecciones al cargo de gobernador estatal la victoria fue del candidato demócrata Wade Hampton.³⁴³ No obstante, el candidato republicano a gobernador, Daniel H. Chamberlain se negó a reconocer la victoria de su oponente y en su lugar esperaba que el *State Canvassing Board* anulase los votos suficientes para garantizarle aunque por la mínima una victoria que le mantuviese en el puesto. El organismo que en Carolina del Sur ostentaba la máxima competencia en cuanto al recuento de votos estaba integrado por cinco personas, todas ellas de ideología republicanas: el secretario de Estado H. E. Hayne, el *attorney general* William Stone, el *comptroller general*

³⁴² Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 122-157; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 219-220; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 180-182; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 108-109. Los certificados remitidos a Washington se encuentran en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 298-299.

³⁴³ De hecho, personas simpatizantes del Partido Republicano que apoyaban abiertamente a Hayes como presidente hicieron campaña a favor de Hampton. Véase VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., p. 48.

T. C. Dunn, el inspector general H. W. Purvis y el Tesorero F. L. Cardozo. Ahora bien, no era el mismo órgano quien debía proceder al recuento y certificado de votos en las elecciones a gobernador estatal y en las elecciones a compromisarios para la elección de presidente y vicepresidente, dado que la legislación estatal de Carolina de Sur atribuía al legislativo (en aquellos momentos controlado por los demócratas) la competencia para el recuento y certificación final de los resultados en las elecciones a gobernador del estado, mientras que el State Canvassing Board era el encargado del recuento y certificado de los resultados en los restantes comicios. Los republicanos aprovecharon dicha circunstancia para impugnar los resultados de las elecciones legislativas (alegando irregularidades en una serie de condados en los que la victoria había sido demócrata) con la finalidad de que el legislativo continuase en manos republicanas y, por consiguiente, retener en sus manos la certificación de los resultados en las elecciones a gobernador. Los demócratas intentaron evitar tal maniobra acudiendo al Tribunal Supremo del Estado, quien el 17 de noviembre dicta una resolución ordenando al *Canvassing Board* que se limitase a certificar los resultados en las elecciones legislativas sin ejercitar discrecionalidad alguna para anular votos. El organismo en cuestión se reúne el 22 de noviembre y acuerda, en primer lugar, invalidar una serie de votos en las elecciones al legislativo estatal con base en la existencia de fraude e intimidación y, posteriormente, certificar la victoria de los compromisarios de Hayes en las elecciones presidenciales. Los demócratas optan por acudir nuevamente a la vía judicial y requieren del Tribunal Supremo del Estado que ordene un nuevo recuento de los votos en las elecciones presidenciales, aunque en esta ocasión solicitan que se fuese «más allá de los resultados», con la finalidad de, en el caso de que no lograran como resultado final la constatación de una victoria demócrata, se detrajese alguno

de los votos compromisarios a Hayes. El Tribunal Supremo accedió a la petición y emitió un auto en tal sentido, aunque el mismo fue desobedecido por el *Canvassing Board*. Ante tal comportamiento, el Tribunal Supremo actuó de manera inmediata, no solo imponiendo a cada uno de los integrantes del *Canvassing Board* una multa coercitiva de mil quinientos dólares a cada uno, sino que ordenó el inmediato arresto de los mismos y su ingreso en la cárcel de Columbia, aunque fueron inmediatamente puestos en libertad en virtud de un auto de *habeas corpus* emitido por un juez federal.

El 6 de diciembre de 1876, en la ciudad de Columbia, el gobernador D.H. Chamberlain, con el refrendo del secretario de Estado H. E. Hayne, certifica que los compromisarios legalmente elegidos son C. C. Bowen, John WinSmith, Thomas B. Johnston, Timothy Hurley, W. B. Nash, Wilson Cook y W. F. Myers, quienes emiten sus siete votos para Hayes como presidente y Wheeler como vicepresidente. Ese mismo día 6 de diciembre, en la misma ciudad los compromisarios demócratas (Theodore G. Barker, Samuel McGowan, J. W. Harrington, J. I. Ingram, William Wallace, John B. Erwin y Robert Aldrich) se reúnen y emiten sus votos a favor de Tilden y Hendricks. Sin certificado de autoridad pública alguna justifican su actuación alegando que el órgano estatal había llevado a cabo un recuento «erróneo, imperfecto y falso», por lo que el recuento oficial se calificó de «ilegal y nulo».

3.3.2.3. Luisiana (8 votos compromisarios)³⁴⁴

El caso quizá más sangrante en todo este complicado escenario político fue el que tuvo lugar en el estado de Luisiana,

³⁴⁴ Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 81-122; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 210-214; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 185-192; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*,

territorio que gozaba de una turbulenta historia salpicada de violentos episodios como la matanza de Colfax, donde miembros de la *white league* masacraron a cien negros el mes de abril del año 1873. Para hacernos una idea de la tensa y violenta situación en que se encontraba dicho territorio, tengamos en cuenta que las elecciones de 1874 para el cargo de gobernador del estado, donde ambos candidatos (el demócrata John McEnery y el republicano William P. Kellogg) se atribuían la victoria, finalizaron con un asalto demócrata a la sede del gobernador, lo que obligó al republicano William P. Kellogg a buscar refugio en una guarnición federal. Los desórdenes llegaron a tal punto que el presidente Grant no tuvo otra opción que hacer intervenir a las tropas federales, quienes depusieron a McEnery e instalaron a Kellogg como gobernador.

En las elecciones presidenciales de 1876 Tilden obtuvo una incuestionable victoria por un margen de algo más de ocho mil votos. No obstante, dado que en el estado existía un gran porcentaje de población de color, los republicanos atribuyeron su derrota a los métodos violentos de intimidación practicados por organizaciones ilegales frente a la población negra y a los votantes republicanos, recordando los sucesos acaecidos en 1873 y 1874. Todo quedaba pues, en manos del organismo encargado del recuento de votos, el State Canvassing Board, que en Luisiana estaba integrado por cinco miembros: James Madison Wells, Thomas C Anderson, Louis M. Kenner, Gadane Casanave y encontrándose vacante el quinto puesto, pues Oscar Arroyo (el único componente demócrata del organismo) había renunciado a su cargo dos años atrás y aunque su baja debía cubrirse por acuerdo de los restantes miembros del organismo, estos, obviamente, no habían realizado esfuerzo alguno encaminado a tal fin. La diferencia fundamental que separaba el caso de Luisiana respecto a los otros dos estados radicaba en que,

o. cit., pp. 106-108. Los certificados remitidos a Washington se encuentran en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 292-294.

si bien en Florida y Carolina del Sur los integrantes de los *Canvassing Board*, gozaban de buena reputación por su comportamiento personalmente honesto pese a sus evidentes inclinaciones políticas, la catadura moral de sus homólogos de Luisiana dejaba bastante que desear.³⁴⁵ A mayor abundamiento, el presidente del organismo, Madison Wells, había sido depuesto del cargo de gobernador por corrupción, e incluso, en una carta al secretario Edwin M. Stanton, el general Philip Sheridan manifestaba que Wells era un personaje siniestro, corrupto y sinuoso.³⁴⁶ En este ambiente de tensión y desconfianza, el State Canvassing Board inicia sus reuniones el día 17 de noviembre y acordó permitir la asistencia de miembros de ambos partidos a sus sesiones. Contra el parecer de los demócratas, el Canvassing Board aceptó la deposición de testigos y la incorporación documental de declaraciones juradas tendentes a demostrar que numerosas personas habían emitido sus votos mediante fraude, violencia e intimidación. Tras practicar numerosas testificales y examinar la documental aportada, el 1 de diciembre el *Canvassing Board* se reunió a puerta cerrada y finalmente anuló un total de 15626 votos, de los cuales 13211 habían ido a parar a los demócratas. Una holgada victoria de Tilden se transformó, pues, en una victoria algo más ajustada de Hayes.

El día 6 de diciembre de 1876, en Nueva Orleans, el gobernador William P. Kellogg, con el refrendo del secretario

³⁴⁵ «*While the South Caroline and Florida Boards were composed of generally respected, if partisan, individuals, the Louisiana tribunal mirrored the worst aspect of Reconstruction-era politics*» Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 178.

³⁴⁶ Citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 107. Cuando se enfrenta a los rumores que circularon referentes a que Wells estaba dispuesto a venderse al mejor postor, Rehnquist, que a lo largo de toda su vida se caracterizó por un agudo sentido del humor, manifiesta irónicamente que «*It was never proved that he took any money. But it may not have been coincidental that Hayes, after he was elected, appointed Wells and two other members of the board to local federal offices*». Curiosamente, Hayes no tenía mucha confianza en la actuación del Canvassing Board de Luisiana, pues en la entrada de su diario correspondiente al domingo 3 de diciembre de 1876, refleja que «*Various indications lead me to think that in Louisiana the report of the Returning Board will probably be unfavorable*».

de Estado P. G. Deslande, certifica que los compromisarios elegidos eran el propio William P. Kellogg, J. Henry Barch, Peter Joseph, Lionel A. Sheldon, Morris Marks, Aaron B. Levissee, Orlando H. Brewster y Oscar Joffrion, quienes emitieron sus votos para Hayes como presidente y para Wheeler como vicepresidente. No obstante, y al igual que en los otros dos estados en liza, los demócratas no perdieron el tiempo y ese mismo 6 de diciembre de 1876, también en Nueva Orleans, John McEnery, que se consideraba el legítimo gobernador de Luisiana, certifica que en tal fecha los compromisarios demócratas (Robert C. Wickliffe, John McEnery, Louis St. Martin, Felix P. Poche, K. A. Cross, Alcibiade de Blanc, R. G. Cobb y William A. Seay) han emitido sus votos para Tilden y Hendricks.

3.3.2.4. Oregón (3 votos compromisarios)³⁴⁷

A diferencia de lo ocurrido en Florida, Carolina del Sur y Luisiana, en el estado de Oregón nadie puso en duda la victoria, aunque por escaso margen, de los compromisarios del Partido Republicano. No obstante, el Comité Demócrata de Nueva York, mucho más avisado en estas lides que el de Oregón, se percató de que uno de los compromisarios republicanos, John H. Watts, ostentaba un cargo público federal, en concreto el de *deputy postmaster* en el pueblo de La Fayette, por lo cual, de conformidad con los preceptos constitucionales (sección I, artículo II) estaba incurso en una causa de ineligibilidad. Según la legislación electoral de Oregón, la vacante habría de ser cu-

³⁴⁷ La información más completa de lo ocurrido en el estado de Oregón se encuentra en Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed election of 1876*, o. cit., pp. 157-168. Para conocer la actuación de los compromisarios de Hayes, el mejor modo de hacerlo es consultar los certificados remitidos por los mismos y la documentación anexa, contenidos en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 295-297.

bierta por acuerdo de los dos compromisarios restantes.³⁴⁸ No obstante, Abram Hewitt, el jefe de campaña de Tilden, remitió un telegrama al gobernador de Oregón La Fayette Grover (demócrata) en otro sentido: no serían los restantes compromisarios quienes debían cubrir la vacante, sino que esta debería cubrirse con el siguiente compromisario en número de votos, quien pasaría automáticamente a ocupar dicho lugar.³⁴⁹

Existía otra diferencia notable respecto a los casos anteriores. En el estado de Oregón no había propiamente un Canvassing Board, sino que las funciones que en los otros estados realizaba dicho organismo eran desempeñadas aquí por el secretario de Estado, quien en presencia del gobernador, certificaría los resultados y entregaría el acta de compromisario a las personas elegidas. En cumplimiento estricto de la normativa, el día 4 de diciembre el secretario de Estado de Oregón constató que, efectivamente, los republicanos habían obtenido el mayor número de votos, pese a lo cual el gobernador Grover (que como hemos indicado, por ley debía estar presente en el recuento pero que carecía de facultad decisoria alguna) manifestó

³⁴⁸ «If there shall be any vacancy in the office of an elector, occasioned by death, refusal to act, neglect to attend or otherwise, the electors present shall immediately proceed to fill, by viva voce and plurality of votes, such vacancy in the electoral college», citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 110. Para Rehnquist, «The clear intent of this law was that the remaining electors should fill the vacancy».

³⁴⁹ La misiva, fechada el 15 de noviembre de 1876 y dirigida al gobernador La Fayette Grover, decía «Upon careful investigation, the legal opinion is that votes cast for a federal office-holder are void and that the person receiving the next highest known number of votes should receive the certificate of appointment. The canvassing-officer should act upon this, the governor's certificate of appointment be given to the elector accordingly, and the subsequent certificate of the votes of the electors be duly made specifying how they voted. This will force congress to go behind the certificate, and open the way to get into merits of all cases, which is not only just, but which will relieve the embarrassment of the situation», citado en Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 159-160. No obstante, como señala lúcidamente Charles Fairman en referencia a dicho telegrama «That as we know (but as historians generally did not) was precisely what Thurman, Bayard and other Democrats, as well as Frelinghuysen and other Republicans, had in the debates of 1875 and 1876 insisted could not be done», *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 38.

su intención de permitir que los demócratas realizasen alegaciones frente a los resultados, extralimitándose claramente de las funciones que legalmente tenía encomendadas. Evacuado el oportuno trámite de audiencia, Grover, tras demorar un día su resolución, consideró que los votos emitidos a favor de Watts eran nulos y, por tanto, el siguiente candidato más votado (el demócrata E. A. Cronin) pasaría a ocupar su lugar.³⁵⁰

Así, el día 6 de diciembre el secretario de Estado da el certificado de los resultados electorales al compromisario demócrata E. A. Cronin, quien a su vez se niega a entregar el mismo a los republicanos Odell y Cartwright. Estos rechazan participar en la farsa y se retiran, por lo que Cronin cubre la vacante de los compromisarios republicanos con dos de sus colegas demócratas, J. Miller y John Parker. El gobernador La Fayette Grover, con el refrendo del secretario de Estado S. F. Chadwick, certifica que los tres compromisarios de Oregón legalmente elegidos han emitido sus votos con el resultado de dos favorables a Hayes y uno a favor de Tilden. Pero los compromisarios republicanos (W. H. Odell, J. W. Watts y John C. Cartwright) actuaron prontamente: el día 6 de diciembre se reúnen en Salem ante un fedatario público (el notario Thomas H. Cann) y puesto que Watts ya había renunciado a su cargo público federal el día 14 de noviembre de 1876, ese mismo día 6 eligen al propio Watts compromisario para cubrir su propia vacante, pues en ese preciso momento sí es ya elegible para compromisario; emiten sus tres votos a favor de Hayes, remitiendo a Washington copia del acta notarial junto sendas actas del secretario de Estado S. F. Chadwick en el que se certifica en una que a fecha 6 de diciembre de 1876 Thomas Cann ostentaba el cargo de fedatario público en el estado de Oregón y en otra, copia certificada de los resultados electorales que avalan el triunfo de los compromisarios de Hayes.

³⁵⁰ Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 184.

La jugada demócrata fue en este asunto ciertamente hábil: la victoria era republicana, en efecto, pero demostrar tal circunstancia obligaría a dicho partido a ir más allá de los certificados remitidos por las autoridades estatales, con lo cual, para justificar sus pretensiones, el Partido Republicano debería investigar y fundamentar sus posturas en los resultados electorales, lo cual le situaría en una incómoda posición, dado que en los otros tres estados (Florida, Luisiana y Carolina del Sur) su argumentación era precisamente la contraria.³⁵¹

3.3.3. CRISIS CONSTITUCIONAL Y BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

There is now no law, and there has never been a law, providing what shall be done in case of a contested election of presidential electors

*Representative James A. Garfield, March 24, 1868.*³⁵²

3.3.3.1. La laguna constitucional y la inexistencia de soluciones específicas al conflicto planteado

Centrémonos en el panorama existente el día 6 de diciembre de 1876: de los treinta y ocho estados que por entonces integraban la Unión, cuatro de ellos (Florida, Oregón, Luisiana y Carolina del Sur) remitieron no una, sino dos listas de compromisarios, una demócrata y una republicana, que emitían su voto para diferentes candidatos, tanto a la presi-

³⁵¹ Como señala lúcidamente William Rehnquist: «*But if this was a legal coup, it was certainly not a political or public relations victory. With respect to Florida and Louisiana, the Democrats could forcefully argue that a large part of the public thought that Tilden had carried both of the states, and that surely he should not lose them both on what fairly might be thought to be the actions of politically biased Republican returning boards. But the Democratic position in Oregon—clearly contrary to the state law—was even more egregious than the Republican position in Florida and Louisiana*», *Centennial Crisis*, o. cit., p. 112.

³⁵² Citado en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 1.

dencia como a la vicepresidencia. Ahora bien, el texto constitucional, cuando deposita en la Cámara de Representantes la elección final del presidente, está pensando en supuestos en los cuales ningún candidato obtuviese la mayoría del *voto compromisario*, y en casos donde la disputa se centra en los *resultados del voto popular para la elección de compromisarios*, más que nada porque en la época de aprobación del texto constitucional y de la decimosegunda enmienda los compromisarios eran elegidos en la mayoría de los estados por las legislaturas y no por votación popular.³⁵³ Nos encontramos, pues, ante una situación para la cual el texto constitucional no solo no establecía solución alguna, sino que ni tan siquiera contemplaba, algo relativamente normal si tenemos en cuenta los presupuestos jurídico-políticos que orientaron el pensamiento de los *founding fathers* y al que hemos hecho referencia en el capítulo primero de este libro.³⁵⁴

Se estaba, por tanto, no solo ante una crisis política de primera magnitud que arrojaba incertidumbres en cuanto a la identidad del candidato que finalmente alcanzaría la presiden-

³⁵³ Como bien señaló el juez William Strong refiriéndose a quienes elaboraron el texto constitucional, «*I doubt whether they had in mind at all the idea of popular election as a mode of appoint state electors*».

³⁵⁴ Acudamos a la opinión de dos grandísimos juristas ideológicamente opuestos pero coincidentes en este aspecto. Así, para Bernard Schwartz, «*Legally speaking, the conflict arose because of a lacuna in the Constitution with regard to the process of electing the President. Article II provides for the selection of presidential electors under state laws for the casting of their votes, and for the certification of the electors to the President of the Senate. It then goes on. "The President of the Senate shall, in the Presence of the Senate and the House of Representatives, open all the Certificates, and the Votes shall then be counted". But counted by whom? The President of the Senate (who in 1876-1877 was Thomas W. Ferry, a leading Republican), the two Houses separately (leading to a deadlock, since the Senate had a Republican and the House a Democratic majority) or the Houses jointly (in which case the Democratic House would outvote the Republican Senate) [...] The Constitution did not answer these questions, which assumed critical importance in the face of conflicting electoral certificates from four states*»; *History of the Supreme Court*, Oxford University Press, p. 171. William Rehnquist coincide con Schwartz al indicar que «*The Constitution was silent as to who would do the counting. Was it the president of the Senate, or the two houses in joint session?*», *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 99-100.

cia, sino ante una complicada situación jurídica para la cual la Constitución de los Estados Unidos no ofrecía solución alguna y, lo más importante, ante la cual la división política existente con un legislativo bloqueado al dominar cada partido una de las Cámaras, parecía eliminar cualquier solución pacífica al conflicto, pues evidentemente la solución pasaba de forma necesaria por un acuerdo aceptado entre los dos partidos en disputa.

3.3.3.2. Debates previos sobre las atribuciones del Congreso en relación con los certificados remitidos por los estados

Existían serias dudas jurídicas en cuanto a las potestades o atribuciones que ostentaban tanto el presidente del Senado como el Congreso en lo relativo al recuento del voto compromisario. Ya en marzo de 1868 James Garfield había presentado una moción en la Cámara de Representantes instando la aprobación de una norma que fijase el criterio a seguir en caso de existir disputas en el recuento de voto compromisario.³⁵⁵ En febrero de 1865 se había aprobado la *joint rule 22*, cuya redacción era la siguiente: «*no vote objected shall be counted except by the concurring vote of the two Houses*», no obstante lo cual dicha norma había sido modificada en 1875 al aprobarse una moción de Oliver Morton, senador por Indiana, en virtud del cual se dio nueva redacción a dicha *joint rule*: «*no objection to any such vote shall be valid unless such objection is sustained by affirmative vote by both Houses*». Como bien indican Fairman y Rehnquist, si en la redacción inicial *ningún voto impugnado podría contabilizarse* salvo que contase con el voto favorable de

³⁵⁵ Es más, el ejemplo que ofrecía Garfield era significativo, pues planteaba que en el supuesto de que en el Electoral College apareciesen más de una lista de votos compromisarios de un mismo estado, el ordenamiento jurídico no ofrecía solución alguna al problema. Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 3.

ambas Cámaras, gracias a la modificación operada en 1875 este voto favorable de ambos cuerpos legisladores era necesario para *confirmar la impugnación del voto*, por lo que este, en principio, se contabilizaría.³⁵⁶ Las razones que se esgrimieron para justificar tal reforma eran que la Cámara de Representantes podría, simplemente con el hecho de provocar una discrepancia con el Senado, impedir la contabilización de un voto compromisario y, en consecuencia, atribuirse la última palabra en las elecciones presidenciales.

No obstante, en el largo prólogo a su por tantas razones magnífico estudio sobre la crisis electoral de 1876, Charles Fairman resalta una circunstancia de la que no se ha hecho eco ningún otro estudioso del tema, y es que los debates jurídicos que tuvieron lugar en el Senado entre la primavera de 1875 y 1876 sobre el tema del recuento de voto compromisario en las elecciones presidenciales muestran claramente una circunstancia: tanto demócratas como republicanos eran conscientes, y así lo manifestaron de manera expresa, que el Congreso carecía de potestades en relación a cualquier tipo de impugnación de los resultados electorales y al recuento de votos practicado en los estados, aun en el caso de existir sospechas de fraude o intimidación.³⁵⁷ El senador demócrata Bayard, por ejemplo, sostenía que todo el proceso electoral era competencia de los estados; el presidente del Senado carecía de facultades discrecionales para excluir voto alguno, siendo su labor estrictamente discrecional limitada a la apertura de los certificados y, lo que es más importante, los miembros de las Cámaras eran meros testigos del recuento.³⁵⁸ El

³⁵⁶ Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 10; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 185-186.

³⁵⁷ Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., pp. 9-37.

³⁵⁸ «...*simply witnesses to the count and tally of that vote* [...] *There is nothing in this language [of the Constitution] that authorizes either House of Congress, or both Houses... to interfere with the decision which has been made by the electors themselves and certified by them and send to the President of the Senate. There is no pretext that for any cause whatever Congress has any power, to refuse to receive*

senador republicano Oliver Morton y los demócratas William Hamilton y Merrimon suscribían las tesis de Bayard.³⁵⁹ En otras palabras, en vísperas de las elecciones de 1876 si en algo habían coincidido tanto demócratas como republicanos es que ni la Cámara de Representantes ni el Senado ostentaban bajo la Constitución autoridad alguna para investigar los resultados de las elecciones a compromisarios presidenciales en los distintos estados. Aún en el supuesto de que hubiese fraude o intimidación o se demostrase que en un estado no pudiese hablarse de elecciones libres, si dicho estado remitía una lista de compromisarios certificada por las autoridades estatales, las Cámaras legislativas estaban atadas de pies y manos y debían aceptar tal certificación.

3.3.3.3. Posibles vías jurídicas de solución y decisión final adoptada

En un intento de encontrar una solución pacífica al conflicto, se plantearon sucesivamente varias opciones para solventar el problema del recuento final de voto compromisario. La primera,

and count the result of the action of the voters in the States in that election as certified by the electors whom they have chosen. That questions may arise whether that choice was made... whether that election was properly held or whether it was a free and fair election is undoubtedly true; but there is no machinery provided for contest and no contest seems to have been anticipated on this subject. Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., pp. 9 y 15.

³⁵⁹ Así, para Oliver Morton, «*The election in a State may be elected by fraud or by violence, but if they come up here properly certified there is no power here to examine the vote in the State below... it was not the intention that Congress should have that power. That was placed with the States, and it was the theory that the election of a President should be left to the States and taken away from Congress. You cannot provide for that except by amending the Constitution*». Su colega demócrata Merrimon sostenía que «*it has been asked, suppose there are great frauds practiced in the States in an election of President... There is no power conferred in the Constitution on the national authority to contest the election in that behalf. The authority remains in the State to provide for that... I admit that the States have not theretofore provided a tribunal for such contest, but that does not prove that they might not have so provided... I believe that it is important that... every State should pass a statute regulating the manner and the election of electors of Presidents*», Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 20.

que evidentemente era la defendida y deseada por los republicanos, consistía en interpretar de forma literal los preceptos constitucionales en el sentido de entender que el presidente del Senado ostentaba la facultad no solo de abrir los certificados y contar los votos, sino de excluirlos. Ello les beneficiaba claramente, pues tras la muerte del vicepresidente Henry W. Wilson en 1875, el entonces *senate majority leader* Thomas W. Ferry pasó a ocupar la presidencia de la Cámara. Los republicanos sostenían que Ferry era la autoridad competente no solo para contar los votos, sino para rechazar los que considerase nulos, mientras que los demócratas lógicamente se opusieron de manera rotunda a concederle facultad decisoria alguna, dada la ideología republicana del entonces presidente del Senado. Hayes se mostró partidario de esta opción, pero se encontró con que dentro de su propio partido se ponían obstáculos a esta posibilidad. El frustrado aspirante republicano a la nominación presidencial Roscoe Conckling, por motivos ciertamente espurios y egoístas,³⁶⁰ se negó a conceder a Ferry cualquier posibilidad de tomar la decisión en solitario, por lo que esta opción quedó prontamente descartada.

La segunda posibilidad consistía en otorgar la potestad decisoria a ambas Cámaras en sesión conjunta. Aun siendo más acorde con el espíritu de la Constitución, esta opción era políticamente inviable en 1876 al colocar al país en un callejón sin salida, dado el reparto de poder existente en la Cámara de Representantes (en manos demócratas) y en el Senado

³⁶⁰ «A leader of the Stalwart wing of the Republican Party, which supported both the continued practice of political patronage and the preservation of carpetbag governments in the South, Conckling feared that Hayes was “in the hands of the Reform element” and might very well threaten Conckling’s base of political power in New York by replacing Conckling political appointees with his own reformist candidates. Feeling, perhaps that it would be easier to deal with an old Tammany Hall veteran like Tilden than the unpredictable, squeaky clean Hayes, Conckling had asked a Tilden associate whether the Democrats “meant to act upon the good-boy principle of submission, or wether we mean to have it understood that Tilden has been elected and by the Eternal he shall be inaugurated”», Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 209.

(en manos republicanas). La división política se demostró con toda su crudeza cuando tras su reunión del 4 de diciembre de 1876, ambas Cámaras legislativas decidieron crear en su seno comisiones de investigación. Representantes y senadores se desplazaron a los estados en disputa (la comisión del Senado extendió igualmente su investigación a los estados de Georgia, Alabama y Mississippi) y los resultados fueron los que se esperaban: mientras que el informe final de la Comisión de la Cámara de Representantes concluyó que Tilden había obtenido la victoria en los estados de Florida, Luisiana y Carolina del Sur (informe que contó con un voto particular de la minoría republicana), en el Senado la situación fue exactamente la opuesta, pues concluyó que fue el candidato republicano quien obtuvo sin duda alguna la victoria (informe senatorial que contó con un voto particular de la minoría demócrata de la Cámara).³⁶¹

Existía un tercer camino, aunque jurídicamente algo más espinoso: entender que la decisión final correspondía a la Cámara de Representantes. El candidato demócrata Samuel Tilden ocupó gran parte del mes de diciembre en coordinar la redacción de un informe elaborado por John Bigelow y otros que, bajo el título *The presidential counts* recogía las experiencias de todas las anteriores elecciones presidenciales. Tilden concluía que si ningún candidato obtenía la mayoría del voto compromisorio, la elección recaería automáticamente en la Cámara alta, tal y como al efecto establecían el artículo segundo de la Constitución y la decimosegunda enmienda.³⁶²

³⁶¹ Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed election of 1876*, o. cit., pp. 173-175; Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 147-150; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 202-203; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 113-114.

³⁶² Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 201, acepta tal posibilidad de forma totalmente acrítica. Según Rehnquist, Tilden había ideado el siguiente plan: «*Make no concessions now; let the votes be counted as they might be in accordance with the Constitution, even though senator Ferry might claim the authority to count them himself, and resolve doubtful*

Sin embargo esta posibilidad no solo iba en contra de la letra, sino del espíritu de los preceptos constitucionales, y ello por dos razones: la primera, que ya hemos adelantado, es que la decimosegunda enmienda únicamente deposita la elección en la Cámara de Representantes *cuando ningún candidato obtiene la mayoría de voto compromisario*,³⁶³ y no cuando lo que es objeto de disputa es *qué lista de compromisarios ha sido la más votada en un estado o*, lo que es lo mismo, en caso de que un estado remita más de una lista de votos compromisarios con distinto resultado, cuál de ellas debe computarse a efectos de elegir presidente. Pero existe otra razón de mayor calado para rechazar frontalmente tal interpretación: la aplicación estricta de la decimosegunda enmienda constitucional hubiera desembocado sin duda alguna en la elección de Samuel Tilden como presidente, mas como la elección del vicepresidente recaería no en la Cámara de Representantes, sino en el Senado (controlado por los republicanos) el vicepresidente hubiera sido el republicano William A. Wheeler. En otras palabras, que el presidente y el vicepresidente hubieran pertenecido a distintos partidos políticos, que, curiosamente, es lo que la Decimosegunda enmienda pretendía evitar.³⁶⁴

En toda esta crisis no deja de ser ciertamente extraña la actitud del candidato demócrata, que se limitó a una actitud pasiva y expectante, quizá debido a un exceso de confianza, pero esa actitud acabó pasando factura,³⁶⁵ dado que esa ausencia de liderazgo benefició a la larga a los republicanos.³⁶⁶ Los

issues in favor of Hayes. The Democrats could maintain that the count was illegal, and that since no candidate had received a majority of the votes cast, the election should be thrown into de House of Representatives», Centennial Crisis, o. cit., p. 116.

³⁶³ Ocurrió, como hemos visto, en las elecciones de 1800 y en las de 1824.

³⁶⁴ Toni M. FINE, *An introduction to the anglo-american legal system*, o. cit., p. 32.

³⁶⁵ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 206 y 236; Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., p. 191.

³⁶⁶ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 222-23.

simpatizantes demócratas se lanzaron a una frenética batalla de consignas y gritos de «*Tilden or blood*» que se podía escuchar en las calles de las principales ciudades del norte, aunque tal iniciativa se vio dificultada por un hecho fundamental: nadie sabía con certeza quién podía hablar de manera autorizada por el candidato demócrata. Y otra circunstancia debilitaba aún más la posición de Tilden: la población (muy especialmente los habitantes de los estados sureños), que aún tenía en mente los horrores de la guerra de Secesión deseaba una solución pacífica.³⁶⁷ Tan es así, que incluso los demócratas sureños se desmarcaron de toda opción que implicase una solución violenta y, aunque no retiraron su apoyo a Tilden, dejaron bien claro que el mismo no se realizaría a costa de lanzar al país a un nuevo conflicto armado y se desmarcaron de toda la violenta retórica de sus correligionarios del norte.³⁶⁸

Ante tal situación de bloqueo político-institucional, el Congreso inició los trámites para buscar una solución pacífica que permitiese ofrecer una salida digna a la situación: ambas Cámaras nombraron en su seno un comité de siete miembros para el estudio de la adopción de posibles medidas para resolver el conflicto.³⁶⁹ Tales comités desarrollaron su labor, primero de

³⁶⁷ «*But fortunately the American people possessed too much hard sense to allow themselves to be carried away by the counsels of extremist on either side. The recent bloody conflict served as an excellent object lesson of what might be expected in case the hot-heads should be allowed to have their way. Good men and true in both parties set themselves to work to evolve a compromise. Warlike speeches were frowned upon or laughed down. Petitions began to flow into Congress imploring that body to find means for adjusting the contest*», Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed election of 1876*, o. cit., p. 189. «*The painful memories of Abraham Lincoln's divisive election in 1860 and the failure then of the northern and southern states to reach a workable political compromise on the issue of slavery, loomed large in every legislator's mind. No one, least of all the southern members of Congress who had seen their regions devastated by war, wanted a replay of the winter 1860-1861, when the country had slid ineluctably into chaos*», Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 202.

³⁶⁸ Van WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 31-34.

³⁶⁹ La composición de ambos Comités era la siguiente: la senatorial estaba integrada por el senador Edmunds de Vermont, Morton de Indiana, Frelinghuysen de Nueva Jersey, Logan de Illinois (los cuatro republicanos), Thurman de Ohio, Bayard de

forma separada, y luego conjuntamente; en ambos casos con las sesiones a puerta cerrada. Inicialmente se planteó la posibilidad de atribuir el conocimiento del asunto a un tribunal compuesto por el *chief justice* Morrison Waite y varios de los jueces del Tribunal Supremo, que se elegirían de una manera harto peculiar: se introducirían los nombres de los cinco jueces más veteranos en un sombrero, se extraería uno de ellos y los restantes integrarían la parte judicial de la comisión, aunque los demócratas vetaron a Waite (tanto por sus conocidas simpatías republicanas como por la circunstancia de ser amigo personal de Hayes) y tal posibilidad se abandonó finalmente,³⁷⁰ pues Samuel Tilden, con toda la razón, manifestó que podría perder la presidencia, mas no pujaría por ella.³⁷¹ El 12 de enero de 1877 comienza a tomar forma la posibilidad de establecer una comisión tripartita integrada por miembros de ambas Cámaras legislativas y por jueces del Tribunal Supremo, plan que se hace público el lunes 15 de enero de 1877, dándose a conocer igualmente la composición de dicho organismo (denominado *Electoral Commission*): cinco miembros de la Cámara de Representantes, cinco miembros del Senado y cinco jueces del Tribunal Supremo. Cada Cámara legislativa elegiría a sus representantes en el organismo, mientras que de los cinco jueces, cuatro de ellos ya designados en la propia ley de creación, y

Delaware y Ransom de Carolina del Norte (estos tres últimos demócratas); la de la Cámara de Representantes la componían Henry Payne de Ohio, Eppa Hutton de Virginia, Abram Hewitt de Nueva York, William Springer de Illinois (todos ellos demócratas), George McCrary de Iowa, George F. Hoar de Massachusetts y George Willard de Michigan (los tres últimos de ideología republicana). Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., pp. 192-193; Elbert William EWING, *History and law of the Hayes and Tilden contest*, o. cit., p. 32.

³⁷⁰ Para las iniciativas y propuestas iniciales para establecer una comisión encargada del recuento de votos compromisarios, véase Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 269-275.

³⁷¹ En estas circunstancias, los líderes demócratas tomaron las decisiones sin consultar absolutamente para nada a Tilden. Únicamente Hewitt, por cortesía, le informó de los acuerdos adoptados. Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., p. 155.

estos últimos designarían a su vez por votación al quinto miembro. Ese fin de semana Hewitt acudió a informar a Tilden del proyecto en tramitación, del cual los miembros del Congreso le tuvieron absolutamente al margen.³⁷² Tras debatir varias fórmulas de designación de jueces, se llegó al acuerdo final de que los expresamente designados en la ley serían Nathan Clifford, Stephen Field, Samuel Miller y William Strong, aceptando implícitamente que el quinto juez sería David Davis.³⁷³ Esta fue la opción que finalmente se adoptó y que constituiría la base de la Electoral Commission Bill, finalmente presentada a las Cámaras legislativas para su aprobación. Pese a la oposición de Hayes y de Tilden, el día 26 de enero de 1877 fue votada y aprobada inicialmente por el Senado (con 47 votos a favor y 17 en contra) y esa misma tarde por la Cámara de Representantes (por una mayoría de 191-86).³⁷⁴

Un dato significativo es el hecho de que el proyecto de ley fue apoyada de manera más entusiasta por los demócratas que por los republicanos. Ello se debió, en palabras del profesor Van Woodward, a las presiones del ala sureña del Partido Demócrata, opuesta a toda solución que implicase el recurso a la violencia o al uso de las armas. Por ello, el apoyo a la Electoral

³⁷² «*It is not rather late, then, to consult me?*» asked Tilden. «*They do not consult you*» Hewitt replied «*They are public men and have their own duties and responsibilities. I consult you*». Citado en Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 273.

³⁷³ «*Senator Edmunds urged that it had the merit of being based on geographical considerations –Justice Clifford representing New England, Justice Strong the Middle States, Justice Miller the Northwest and Justice Field the pacific slope– while at the same time maintaining the desired political equipoise of the Commission*», Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed election of 1876*, o. cit., p. 203.

³⁷⁴ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 115-118; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 212-218. Paul Leland HAWORTH es aún más preciso: «*In the Senate 26 Democrats supported it, and only one opposed it; in the same body 21 republicans supported it and 16 opposed it. In the House 160 Democrats supported it and 17 opposed it; while only 31 republicans supported it and 69 opposed it*», *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., p. 217. Como puede observarse, fueron los republicanos quienes veían con más recelo la Comisión.

Commission suponía la renuncia de los demócratas al uso de la fuerza en un intento de evitar la huida de los demócratas sureños.³⁷⁵

3.3.3.4. El extraño caso del juez David Davis

Para enmarañar aún más la ya de por sí difícil situación, todo este complejo mecanismo se vio salpicado por una nueva dificultad adicional. Como ya hemos indicado, todos aceptaron el proyecto dando por hecho que el quinto juez de la comisión sería David Davis, un jurista procedente de Illinois que había sido nombrado juez del Tribunal Supremo por Abraham Lincoln y cuya integridad e independencia eran asumidas tanto por demócratas como por republicanos. Pero el 26 de enero de 1877, en el momento en que las Cámaras someten a votación la Electoral Commission Bill, se conoce la noticia de que ese mismo día David Davis había sido elegido senador por Illinois. En efecto, la legislatura de dicho estado, que debía cubrir el puesto vacante de uno de los senadores, llevaba tiempo sin poder adoptar un acuerdo al estar bloqueada por falta de quórum. El nombre de Davis siempre había aparecido en las listas, pero en los últimos lugares y, pese a ello, en enero de 1877 los demócratas en bloque unieron sus votos a grupos minorita-

³⁷⁵ Había motivos adicionales que impulsaban a los demócratas a aceptar tal especie de arbitraje jurídico: «*For all their confidence in the justice of their cause the Tildenites were keenly aware of the difficulty of the position in which they were placed by Republican control of the Presidency, the Senate, and the army. Even if they should proceed on their theory that the election was thrown into the House and declare the Democratic candidate elected, Tilden could hardly be more than a President de iure. To establish him in power a party already tainted with rebellion would have probably found it necessary to resort to force, and the outcome of such an enterprise was highly doubtful. As an alternative the Electoral Commission presented several attractions. In agreeing to submit their case to the Commission, the Republicans tacitly abandoned their claim that the president of the Senate should count the disputed votes. Furthermore, in order to seat Hayes in the White House the Republicans would be compelled to win every one of the twenty contested electoral votes, while a victory for Tilden would require a favourable decision on only one of the twenty*», VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 152-153.

rios para el nombramiento de Davis como senador. No está del todo clara la razón de tal proceder, y de hecho ninguno de los estudios sobre las elecciones de 1876 ofrece una explicación satisfactoria sobre tan extraña jugada política. Charles Fairman lo atribuye todo a una maniobra del sobrino de Tilden, William T. Pelton, realizada al margen del conocimiento del partido.³⁷⁶ Lo más probable es que los demócratas consideraran, dado que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio, que Davis rechazaría el puesto en el Senado pero, de alguna manera, tendría en consideración dicho gesto demócrata a la hora de emitir su resolución sobre la materia. No obstante, la actitud de Davis sorprendió a todo el mundo: anunció que permanecería en su cargo en el Tribunal Supremo hasta el día 4 de marzo de 1877 (día en que el Senado iniciaba su periodo de sesiones) fecha en la cual renunciaría a su asiento en el estrado para ocupar su nuevo cargo de senador y, en consecuencia, por tal circunstancia excusaba su participación en la Electoral Commission. El jueves día 30 de enero el *New York Sun* publicaba una noticia sobre la elección de los jueces en la cual se ofrecía el parecer del magistrado Nathan Clifford, uno de los jueces integrantes de la comisión, defendiendo que la elección de Davis como senador en modo alguno le inhabilitaría para ocupar su puesto en la Electoral Commission.³⁷⁷ Al día siguiente, 31 de enero de

³⁷⁶ «William T. Pelton, Tilden's imprudent nephew had contrived to cause pressure to be brought on Democrats in the Illinois legislature to elect Davis as the State's next Senator. Pelton's fatuous purpose had been to create in the Justice's mind a feeling that as a member of the Commission he should respond by voting for Tilden. Tilden had no awareness of this unfortunate meddling. Nor had the Democrats in Congress, to whose interest it seemed unfriendly», Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 54.

³⁷⁷ «When they came to consult this morning, however, it appeared that Messrs. Clifford, Field, and Strong were of the opinion that Mr. Davis was, of all the justices, more eminently qualified than any member of the Court to give satisfaction to both parties in this contest [...] Mr. Clifford indicate his entire willingness to accept Mr. Bradley as the fifth justice, but he argued that instead of Mr. Davis's election to the Senate disqualifying him, it really made him more eminently fit for the position [...] Judge Strong agreed fully with Judge Clifford, but

1877, el mismo diario informaba que Davis había recibido más de 50 telegramas para que reconsiderase su parecer, algo que el interesado rechazó de plano. Parece meridianamente claro que los demócratas colocaron al magistrado en una situación difícil, pues aunque pudiese y desease servir en el organismo, el voto demócrata le había hecho incurrir de alguna manera en una causa de abstención, pues su decisión final podría verse contaminada a la vista de su elección senatorial con votos demócratas. Sin embargo más bien parece que Davis, al igual que sus compañeros, muy reacio a formar parte del organismo, utilizó su elección como senador para apartar de su boca el amargo cáliz que se le ofrecía. Y en este sentido debemos consignar un dato curioso, según anotó en su diario James A. Garfield, uno de los miembros electos de la Electoral Commission, de los cinco jueces, cuatro manifestaron su disgusto por su designación.³⁷⁸

Como indica Polakoff, si algo reveló la elección de Davis fue la descoordinación del Partido Demócrata.³⁷⁹ Existen, no obstante, dos explicaciones alternativas en cuanto a los motivos que impulsaron a los demócratas de Illinois a volcar sus votos a favor de Davis, dos intentos de ofrecer una explicación razonable a esa en apariencia extraña y contraproducente maniobra; intentos que, de manera significativa, no se encuentran en ninguno de los estudios monográficos. La primera nos la ofrece Paul A. Ballonoff precisamente en una reseña al libro que

he doubted whether Mr. Davis could be induced to reconsider his determination not to accept the position. It was, however, agreed that Judge Davis should be notified that he was the choice of three of the judges, and that they had determined to give him until tomorrow morning to reconsider», citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 158-159.

³⁷⁸ Citado en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 57. Como indica el profesor Fairman, «*David Dudley Field was anxious to play a leading part, and one justice was not sorry to be a member: one cannot doubt that the willing one was brother Stephen*».

³⁷⁹ Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 282.

Roy Morris dedica a las elecciones de 1876.³⁸⁰ Para Ballonoff, la actitud de los demócratas no está vinculada directamente con la disputa presidencial, sino con la decisión que el Tribunal Supremo habría de tomar en la apelación del caso *Munn v. Illinois*, cuya sentencia se hizo pública el 1 de marzo de 1877.³⁸¹ La segunda nos la ofrece Gore Vidal en su obra dedicada al año 1876, que, aun previniendo al lector que está contenida en una novela y, por tanto en obra literaria y no propiamente histórica, sería injusto no ofrecerla como hipótesis, aunque de aceptarla en su integridad abra nuevos interrogantes. Para Vidal, Davis sabía con dos semanas de antelación que iba a ser elegido por senador por Illinois³⁸² y, de manera harto sibilina, insinúa que, por una parte, los republicanos distaban mucho de estar contentos con la elección de Davis y, por otra, Tilden pudiera haber preferido a Bradley en lugar de a Davis, juez

³⁸⁰ Paul A. BALLONOFF, *Review and Comment on Roy Morris Jr., Fraud of the Century, Rutherford B. Hayes, Samuel Tilden and the Stolen election of 1876*, consultado en www.ballonoffconsulting.com/pdf/MorrisReview/pdf. El propio autor reconoce que la suya se trata de una hipótesis de la que no puede ofrecer pruebas directas, sino únicamente indicios.

³⁸¹ Ballonoff sostiene que «*the puzzle explained here is that the election of Hayes may have been mere by product of an effort to assure a decision favoring Illinois in that important case [...] The juxtaposition of the Commission and the resolution of the Munn v. Illinois case suggest the answer. Justice Davis' very reputation for political "neutrality which made him a model fifth Justice Commissioner also made him predictable in important ways as a justice" [...] The best prediction was that Davis would favor Munn against Illinois, and dissent if Illinois prevailed. As well, despite his "neutral" actions as a Justice, Davis' political ambitions were certainly understood in his home state, Illinois [...] Electing Davis to the Senate could remove a predictably unfavorable vote from the Court on the Munn case. Removing him in a manner that also helped move the Munn case quickly to a "proper" decision would be better. Davis' potential price was easily determined and within the ability of Illinois to pay: return Davis to politics as senator. We do no have direct evidence of explicit negotiation, but surely the Illinois democrats would not have taken such precipitous actions without prior knowledge that Davis would accept the election [...] We do know this: contrary to Davis' dissents in previous related decisions, on the March 1 1877 holding Munn v. Illinois he registered no dissent.*»

³⁸² Polakoff nos indica en su obra que el *Chicago Times* publicó el día 11 de enero de 1876 el nombre de Davis como candidato al Senado, si bien debe indicarse que en las sucesivas votaciones para cubrir el puesto, el magistrado únicamente había obtenido los votos de partidos minoritarios. *Politics of inertia*, o. cit., p. 282.

por quien el novelista no parece sentir mucha simpatía.³⁸³ No obstante, si unimos las alusiones de Vidal y de Ballonoff se nos ofrece una teoría alternativa a la tradicional «sorpresa» con la que fue recibido el nombramiento de Davis y las razones que motivaron el mismo.

Sea como fuere, ante la negativa de Davis, los restantes jueces eligieron como quinto miembro a Joseph Bradley, quien, pese a ser uno de los más notables e inteligentes miembros del Tribunal Supremo, no gozaba de la fama de independiente que tenía su colega Davis. Y lo más importante, ante el nombramiento de Bradley cierto sector de la prensa comenzó a manifestar abiertamente, sin fundamento ni prueba alguna, que la elección de Hayes estaba asegurada.

3.4. *Las sesiones y decisiones de la Electoral Commission*³⁸⁴

*Until Congress passed the law creating the Electoral Commission, realistic treats of violence –of armed partisans parching on Washington– were heard from several quarters. It was evident that Congress, divided as it was, could not resolve the dispute by itself. But because public opinion gradually came to prefer a negotiated settlement, Congress managed to enact a measure which was grudgingly accepted by most of the partisans on each side.*³⁸⁵

³⁸³ Gore VIDAL, 1876, o. cit., pp. 479-486. Vidal no ofrece un listado de obras en las que se basó para elaborar su novela, por lo que me atrevo a plantear dos interrogantes: ¿De dónde extrae Vidal la tesis de que Davis sabía con dos semanas de antelación que iba a ser elegido senador cuando toda la prensa y todos los implicados en el conflicto recibieron tal noticia con tremenda sorpresa? Segunda cuestión; si Davis era tenido como independiente, es lógico que los republicanos tuviesen lógicas reservas, pero ¿Sobre qué criterios mantiene el novelista que Tilden pudiera preferir a Bradley que a Davis, en contra del parecer casi unánime del resto de personajes involucrados en esta situación?

³⁸⁴ El texto de la ley y las actas con las sesiones de la Comisión se encuentra en *Proceedings of the Electoral Commission*, o. cit., p. 1.

³⁸⁵ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 248.

3.4.1. LA NORMATIVA APLICABLE: CREACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTORAL COMMISSION

El día 29 de enero de 1877 el presidente Ulysses S. Grant sanciona la norma que regulará exhaustivamente los procedimientos de recuento del voto compromisario, *An act to provide for and regulate de counting of votes for President and Vice-President, and the decision of questions arising thereon, for the term commencing March 4, A. D. 1877*. Ambos cuerpos legislativos se reunirían a la una de la tarde del jueves 1 de febrero de 1877 en la sede de la Cámara de Representantes bajo la autoridad del presidente del Senado,³⁸⁶ nombrando cada una de las Cámaras dos delegados. El presidente del Senado procedería a la apertura de los certificados «*and papers purporting to be certificates*» por orden alfabético de los estados, iniciándose con la letra A (es decir, por el estado de Alabama). Una vez abiertos, se entregarían a los delegados de cada Cámara para que informasen a esta del resultado de los votos, tras lo cual el presidente del Senado anunciaría las personas elegidas compromisarios por el estado y el resultado del voto emitido, una vez verificado lo cual se abriría un breve turno para la presentación de impugnaciones. Las impugnaciones a los votos compromisarios debían presentarse por escrito, estar suscritas cuando menos por un senador y un miembro de la Cámara de Representantes y, de manera clara, concisa y sin argumentación jurídica, exponer los motivos impugnatorios. A continuación, el procedimiento se desarrollaría de la siguiente manera:

A) Si el estado en cuestión hubiese remitido únicamente una lista de compromisarios, las Cámaras se retirarían

³⁸⁶ El texto de la norma llega a detalles tan precisos como el lugar donde se ubicaría cada una de las autoridades, aspecto este que ocupa toda la sección 5. Una opinión no tan positiva de la ley, en Elbert William EWING, *History and law of the Hayes-Tilden contest*, o. cit., pp. 39-40.

separadamente a deliberar sobre la impugnación presentada, tras lo cual volverían a reunirse y el presidente de cada una de ellas anunciaría el resultado de la votación. Solo por el voto favorable de ambos cuerpos legislativos prosperaría la impugnación. Como puede verse, ello no suponía más que elevar a nivel legislativo el texto de la *joint rule 22* tal y como había sido redactada en 1875.

B) *Si el estado ha remitido más de una lista de compromisarios* (no se tendrían en cuenta los duplicados de una misma lista) el asunto se remitiría a una comisión creada al efecto:

— La comisión estaría compuesta por 15 miembros, de los cuales 5 serían miembros de la Cámara de Representantes, 5 del Senado y 5 magistrados del Tribunal Supremo.³⁸⁷ A tal efecto el martes 30 de enero de 1877 las Cámaras se reunirían para nombrar, *viva voce*, a los representantes que integrarían la comisión. En cuanto a los cinco magistrados, la ley designaba directamente a cuatro, en concreto a los jueces que tenían asignado los circuitos judiciales primero (Nathan Clifford), tercero (William Strong), octavo (Samuel Miller) y noveno (Stephen Field) quienes ese mismo día 30 de enero designarían por mayoría al quinto integrante por la parte judicial. El más veterano de los jueces (Nathan Clifford) sería quien presidiese el organismo y, una vez le fuese tomado juramento, pasaría

³⁸⁷ De los cinco miembros que designaría cada Cámara, tres debían corresponder al partido mayoritario y dos al minoritario, por lo que, dado que cada partido dominaba uno de los cuerpos legislativos, cinco miembros serían republicanos y cinco demócratas.

a tomarlo a los restantes miembros de la comisión.³⁸⁸

- Constituida ya válidamente la comisión, las Cámaras legislativas no podrían disolverla, suspender sus sesiones, ni retirar a los integrantes de la misma. Únicamente podrían designar nuevos integrantes para cubrir posibles vacantes ocasionadas por muerte o enfermedad.
- En cuanto a las atribuciones y potestades legales que ostentaba la comisión, amén de la autoorganizatoria contemplada expresamente en la sección 7 de la ley de creación (*the said commission shall make its own rules, keep a record of its proceedings and shall have power to employ such persons as may be necessary for the transaction of its business and the execution of its powers*) ostentaba, únicamente a los efectos de tomar su decisión final acerca de las cuestiones planteadas en relación al voto compromisario impugnado, los mismos poderes que ambos cuerpos legislativos, tal y como explícitamente establecía la sección 2 (*with the same powers, if any, now possessed for that purpose by the two Houses acting separately or together*).
- La decisión final se tomaría por mayoría de miembros y la misma únicamente podría ser revocada por el voto favorable de ambas Cámaras, lo que en la práctica, dada la división de las mismas, suponía otorgar la solución definitiva a la comisión.

³⁸⁸ La fórmula del juramento venía expresamente recogida en la sección 2: «*I -- do solemnly swear (or affirm, as the case may be) that I will impartially examine and consider all questions submitted to the commission of which I am a member, and a true judgment give thereon, agreeably to the Constitution and the laws; so help me God*».

A las once de la mañana del miércoles 31 de enero de 1877 se reunía por primera vez la Electoral Commission en la sala de vistas del Tribunal Supremo (por entonces aún en el edificio del Capitolio) y dado el número de miembros integrantes del organismo, hubo que improvisar para que todos ellos pudiesen tener asiento en un lugar que de ordinario únicamente acogía a nueve jueces.³⁸⁹ Esta primera reunión tuvo un carácter eminentemente burocrático y organizativo: se aportaron tanto el acuerdo de los cuatro jueces del Tribunal Supremo acordando el nombramiento de Joseph Bradley como quinto representante del poder judicial, así como los acuerdos de la Cámara de Representantes y del Senado nombrando a los respectivos miembros que integrarían la Comisión. La composición final de la Electoral Commission fue la siguiente:

Por la Cámara de representantes	Por el Senado	Por el Tribunal Supremo
Henry B. Payne Eppa Hunton Jonah G. Abbot George F. Hoar James A. Garfield	George F. Edmunds Oliver P. Morton Frederick T. Frelinghutsen Allen G. Thurman Thomas F. Bayard	Nathan Clifford Samuel Miller Stephen Field William Strong Joseph Bradley

Nathan Clifford, una vez le fue tomado juramento por un oficial del Tribunal Supremo, procedió a tomar a su vez juramento a los restantes miembros de la comisión, quedando oficialmente constituida. El senador Thurman presentó una moción para que un comité redactase unas normas de procedimiento, moción que fue aprobada, encargándose dicha tarea

³⁸⁹ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 164. El profesor Fairman incluso nos ofrece el orden en que se sentaban los miembros, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 56.

a Edmunds, Bayard, Miller, Field, Payne y Hoar. Por su parte, George Hoar presentó una moción en el sentido de considerar, salvo acuerdo en contrario, secretos los procedimientos de la comisión excepto en sus aspectos organizativos. Tras un receso, la comisión se reúne de nuevo a las cuatro de la tarde para recibir de George Edmunds las normas de funcionamiento interno de la comisión. Este reglamento procedimental³⁹⁰ permite a William Rehnquist referirse a la «naturaleza híbrida» de la institución, puesto que si bien era una creación del legislativo, debía pronunciarse sobre cuestiones jurídicas.³⁹¹ Así, la regla iv establecía que

The objections to any certificate or vote may select two of their number to support their objections in oral argument and to advocate de validity of any certificate or vote the validity of which they maintain; and in like manner the objectors to any other certificate may select two of their number for a like purpose; but, under this rule, not more than four person shall speak and neither side shall occupy more than two hours.

Una vez los impugnantes hubiesen agotado su tiempo, entrarían en juego las disposiciones de la regla iii

Counsel, not exceeding two in number on each side, will be Heard by the Commission on the merits of any case presented to it, not longer than two hours being allowed to that side, unless a longer time and additional counsel shall be especially authorized by the Commission. In the hearing of interlocutory questions, but one counsel shall be heard on each side, and he not longer than fifteen minutes, unless the Commission allow

³⁹⁰ *Proceedings of the Commission*, o. cit., p. 2.

³⁹¹ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 165.

further time and additional counsel; and printed arguments will be received.

Una vez recibidas y aprobadas las normas procedimentales, la comisión suspende sus reuniones hasta las 12 horas del jueves 1 de febrero de 1877.

3.4.2. VOTOS COMPROMISARIOS DE FLORIDA (SESIONES DEL 1 AL 9 DE FEBRERO DE 1877)³⁹²

Vamos a exponer con cierto detalle los debates, alegaciones y resoluciones que tuvieron lugar en relación con las impugnaciones efectuadas respecto a los certificados procedentes del estado de Florida, no solo por ser dicho estado el primero cuyo voto fue objeto de un procedimiento ante la comisión, sino porque el resultado del mismo influiría sobremanera en el resultado de los ulteriores procedimientos en relación con los votos compromisarios de Luisiana y Carolina del Sur (pues el de Oregón tenía una naturaleza jurídica distinta respecto de los otros tres estados en liza). Se produjo en estos días un interesantísimo debate jurídico sobre la naturaleza de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y el papel que en dicho proceso electoral tienen los estados, la federación y los distintos organismos estatales que intervienen a lo largo de la complicada maquinaria establecida en su día por los redactores de la Constitución. Aunque en la bibliografía existente sobre el tema se contienen excelentes resúmenes de los debates jurídicos y de las tesis constitucionales vertidas en las jornadas de febrero

³⁹² *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 2-57. A partir de este momento, y salvo que se indique expresamente lo contrario en el texto o nota al pie, todas las citas textuales que se realicen de las intervenciones y de las opiniones de los jueces se extraen de las actas de las sesiones de la Electoral Commission.

de 1877,³⁹³ he preferido acudir directamente a las actas de la Electoral Commission y dejar que sean los mismos protagonistas quienes tomen la palabra y nos hablen directamente para que, a través de ellos, el lector pueda apreciar la fuerza y la coherencia de sus argumentos y opte por formar su propia criterio. Estimo que, aunque quizá con ello el capítulo pierda algo en claridad y gane en densidad y extensión, ello permitirá al lector formarse una opinión con base en fuentes primarias y directas y no en virtud de interpretaciones de terceros.

3.4.2.1. Impugnaciones presentadas³⁹⁴

Florida, primer estado cuyas listas de compromisarios fueron objeto de disputa, pues recordemos que dicho estado había remitido tres listas certificadas de compromisarios electos. Pues bien, el día 1 de febrero de 1877 se presentaron correlativamente tres impugnaciones:

- La lista de compromisarios que emitió sus votos a favor de Hayes y Wheeler fue impugnada por los senadores Charles W. Jones de Florida, Henry Coo-

³⁹³ Quizá el estudio más completo sobre la cuestión de Florida (no solo el proceso en el seno de la Electoral Commission, sino de los propios antecedentes) sea el anteriormente citado de Elbert William EWING, *History and law of the Hayes-Tilden contest before the Electoral Commission: The Florida case, 1876-1877*, aunque, como hemos indicado, con bastante frecuente desliza comentarios favorables a los demócratas. Debe consultarse igualmente el exhaustivo análisis de Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., pp. 57-122, que no se limita a la cuestión de Florida, sino a todas las impugnaciones presentadas. No obstante, análisis más o menos completos de las tesis y argumentaciones esgrimidas en dicho organismo pueden encontrarse en Paul Leland HAWORTH, *The Hayes-Tilden disputed presidential election*, o. cit., pp. 220-284; Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 163-184; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 286-312; Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 219-238; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 163-179; y Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., pp. 225-236.

³⁹⁴ El texto de las impugnaciones se encuentra en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 291-292.

per de Tennessee y J. E. McDonald de Indiana, así como por los representantes David Dudley Field de Nueva York, J. Randolph Tucker de Virginia, G. A. Jenks de Pennsylvania y William M. Springer de Illinois. Basan todos ellos la impugnación en que el certificado del gobernador Stearns era en todos sus aspectos falso y se obtuvo ilícitamente con la intención de privar al estado de los compromisarios legalmente electos.³⁹⁵ Amparan su pretensión tanto en la sentencia del juzgado estatal del Segundo Circuito judicial de Florida como en la posterior normativa emanada del legislativo estatal y recuento practicado en ejecución de la misma, así como en el informe emitido por la Cámara de Representantes acerca de las elecciones en los estados en disputa, aportando todas esas actuaciones como documental anexa al escrito de impugnación.

- La lista de compromisarios que emitió sus votos a favor de Tilden y que fue certificada por el *attorney general* Cocke, es objeto de dos impugnaciones (la segunda impugna a la vez la lista certificada por el gobernador Drew). La primera de ellas fue avalada por las firmas de los senadores S. B. Conover, A. A. Sargent, John Sherman y H. M. Teller así como por los representantes William Woodburn, Mark Dunnell, John A. Kasson y Geo W. McCrary. Ambas coinciden en lo esencial, que dicha lista no

³⁹⁵ «*Is in all respect untrue, and it was corruptly procured and made in pursuance of a conspiracy between the said M. L. Stearns, the said Charles H. Pearce, Frederick C. Humphries, William H. Holden and Thomas W. Long and other persons to these objectors unknown, with intent to deprive the people of the said State of their right to appoint electors [...]*». Respecto a la documentación, la misma era «*fictitious and unreal, and do not truly represent any votes or lawful acts, and were made out and executed in pursuance of the same fraudulent conspiracy by the said persons purporting to have cast said votes*».

estaba debidamente certificada según la normativa aplicable.³⁹⁶

- La lista de compromisarios que emitió sus votos a favor de Tilden y que fue remitida el 26 de enero de 1877, certificada por el nuevo gobernador Geo F. Drew, fue objeto de impugnación autónoma por los senadores A. A. Sargent y John Sherman así como por los representantes John A. Kasson y S. A. Hurlbut. Se fundamentaba la pretensión impugnatoria en la falta de competencia de la autoridad que certificaba los resultados, pero, dado que en este caso la autoridad que remitía la lista era el propio gobernador del estado, se añadía un matiz muy importante a la impugnación: no ostentaba dicho cargo el 6 de diciembre de 1876, que era la fecha en que constitucionalmente debían emitirse los votos.³⁹⁷ En lo que respecta a la norma aprobada por el legislativo estatal de Florida como el proceso de recuento y certificados emitidos en ejecución de la misma, debían reputarse nulos y sin efecto al haberse otorgado a los mismos eficacia retroactiva.

En resumen, mientras los demócratas centraban sus esfuerzos en el fondo del asunto (es decir, en demostrar que los compromisarios de Hayes no eran los legalmente elegidos al no haber recibido el mayor número de votos sino en virtud

³⁹⁶ «*The said certificates or papers are not authenticated according to the requirements of the Constitution and Laws of the United States [...] Nor are said certificate or papers objected to accompanied by any valid or lawful certification or authentication of said electors.*»

³⁹⁷ «*The certificate being by an officer not holding the office of governor or any other office in said State with authority in the premises at the time when the electors were appointed, not at the time when the functions of the electors were exercised, nor until the duties of electors had been fully discharged by the lawful college of electors having the certificates of the governor of Florida at the time and the action o said lawful college duly transmitted to the President of the Senate as required by law.*»

de una actuación que consideraban ilegal del *State Canvassing Board*), los republicanos concentraban toda su artillería en lo que consideraban *vicios formales determinantes de nulidad* de la lista de compromisarios que emitió sus votos a favor de Tilden.

Por último, indicar que el senador Chas. W. Jones y el representante Charles W. Jones presentaron una impugnación respecto del compromisario Frederick C. Humphryes, al entender que incurría en una causa de inelegibilidad al ostentar, en el momento de la elección, un cargo federal (en concreto «*shipping commissioner under the Government of the United States at Pensacola, Florida*»).

3.4.2.2. Debates jurídicos en las sesiones de la Electoral Commission

El día 1 de febrero de 1877 el presidente del Senado, Thomas W. Ferry, dirige un oficio al presidente de la comisión informándole de la existencia de más de una lista de certificados procedentes del estado de Florida.³⁹⁸ Una vez que la Electoral Commission recibe ese mismo día tanto las diferentes listas de compromisarios como la documental aneja, dedica toda la jornada a resolver cuestiones estrictamente formales. Así, una petición del juez Bradley en el sentido de proceder a la lectura de los escritos de impugnación (dado que únicamente se había informado de la existencia de impugnaciones, no del contenido de las mismas) fue rechazada irónicamente por Samuel Miller haciendo referencia al elevado tiempo que ello consumiría

³⁹⁸ El texto literal del oficio era el siguiente: «*More than one return or paper purporting to be a return or certificate of electoral votes of the State of Florida having being received and this day opened in the presence of the two Houses of Congress and objections thereto having been made, the said returns, with all accompanying papers, and also the objections thereto, are herewith submitted to the judgment and decision of the Commission, as provided by laws.*»

y sugiriendo que se les entregaran copias de todos los documentos,³⁹⁹ acordando finalmente la comisión que se expedieran copias de los escritos de impugnación a la mayor brevedad posible. Finalmente, se aprueban sendas mociones presentadas por el juez Miller (en el sentido de que cada lista de votos compromisarios constituya un asunto independiente y se decidiese de manera conjunta en lugar de voto por voto) y por el senador Morton (para que se incorporasen las legislaciones electorales de los estados de Florida, Luisiana, Oregón y Carolina del Sur). Sin más consideraciones, se levanta la sesión a las cinco menos cuarto de la tarde.

El día 2 de febrero de 1877 se reúne nuevamente la comisión a las diez y media de la mañana. El presidente Nathan Clifford acota de manera clara y concisa los términos jurídico-fácticos sobre los que habría de pronunciarse la comisión:

The case before the Commission is that of Florida. Inquiries were made yesterday «what is the case?» to which I beg leave to respond that it consist of three certificates with accompanying papers, and the objections to de same. Two of the objectors on each side will be allowed to speak in the opening of the case. Those representing the objections to certificate N.º 1 (votos compromisarios de Hayes) will speak first, and I would remind them that the fourth rule allows them two hours in which they will state the case in the opening arguments in support of their objections, and also in support of any other certificate which they claim to be valid. When they have concluded, two objectors on the other side will speak under the same rules and limitations.

³⁹⁹ «I had the pleasure, sir, if it was a pleasure, of listening to the Reading of those documents in the House of Representatives. If the papers about the State of Florida are read it will take an hour to read them [...] I presume it will be printed [...] I think if brother Bradley had known as I do the length of those papers he would perhaps withdrawn the motion.»

A las once menos cuarto de la mañana del día 2 de febrero de 1877 comienzan en el seno de la Electoral Commission los procedimientos tendentes a resolver la disputa sobre los votos electorales del estado de Florida. Ese día, miembros de las Cámaras legislativas en representación de los firmantes de los escritos de impugnación, iniciaron el procedimiento establecido con la defensa de sus respectivas tesis. Se va a producir en este caso una de las paradojas nada infrecuentes en el mundo jurídico-político: los demócratas, defensores a ultranza de los derechos estatales frente a la autoridad federal, van a defender en estos casos la autoridad federal, mientras que los republicanos, ardientes defensores de la intervención del poder federal sobre los estados, argumentarán que de aceptarse las tesis demócratas se vulneraría la división competencial constitucionalmente atribuida entre federación y estados.⁴⁰⁰

La mañana de ese día 2 de febrero intervinieron, por la parte demócrata, los miembros de la Cámara de Representantes David Dudley Field (hermano de Stephen Field y antiguo republicano que se pasó a las filas del Partido Demócrata) y John Raldolph Tucker. La intervención de Field⁴⁰¹ pretendía acreditar

⁴⁰⁰ «One of the ironies was that the Democrats were thought o be the party upon upholding states' rights, while the Republicans were the party who favored greater national authority. But advocates for the two parties experienced no difficulty in nimbly switching sides on this issue. The Republicans would suggest that for Congress or the Commission to "go behind the returns" was inconsistent with the division of authority between national and state governments which had been established by the Constitution. The Democrats would champion the authority of the national government to root out fraudulent returns by whatever means necessary», William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 167.

⁴⁰¹ La pasión se apoderó de Field en algunos momentos, como cuando alegó que «This monstrous fraud being thus far accomplished, the people of the State took it upon themselves to see if they could right the wrong, and they did it with a spirit and a success which does them all honor. Not even your own native State of New Hampshire, Mr. President, could have more manfully stood up for its rights. If such a fraud had been perpetrated there, you would have heard a voice from her people that would have shaken the everlasting foundations of her granite hills. From peak to peak, and from the easternmost peak to the shining sea, you would have heard a roar of dissent and of indignation. So their brethren of Florida raised their voices through all the flowery peninsula...».

que la elección de los compromisarios de Hayes se debió a un fraude, y para ello ofreció como ejemplo los sucesos de Baker County.⁴⁰² Acusa a los republicanos de no discutir tales hechos y escudar su infracción en motivos puramente formales («*the truth is buried under this certificate*») y justifica su impugnación en el hecho de que no puede escudarse una irregularidad en un formalismo («*it is putting the question in an erroneous form to put it thus "you cannot go behind the certificate". The form should be reversed "can the certificate go behind the truth and cancel it"*») y en que acreditado el vicio inicial, ello determina la nulidad de todas las actuaciones posteriores. Para finalizar, sostiene que de prosperar las tesis republicanas, ello sería motivo de vergüenza para la nación.⁴⁰³ A continuación toma la palabra Tucker, quien orienta la cuestión hacia aspectos netamente jurídicos: en primer lugar, establece que las potestades de ambas Cámaras legislativas y, por ende, de la comisión no son distintas a las que poseen los tribunales de justicia en los procedimientos *quo warranto*, precisando que en el seno de unos comicios existen dos funciones separadas encomendadas a organismos diferentes: la *elective function*, que descansa en el estado (entendido este como cuerpo electoral) y la *determining function*, que reside en el *State Canvassing Board*, pero esta se encuentra subordinada a aquella,⁴⁰⁴ por lo que las

⁴⁰² En Baker County, el recuento debía hacerse, *ex lege*, por el juez del condado y el secretario judicial, con la asistencia del juez de paz si fuera requerido para ello; en caso de ausencia de uno de los dos primeros, podría ser sustituido por el sheriff del condado. Según el relato de Field, el día 10 de noviembre, el secretario judicial requirió la presencia del juez para iniciar el recuento, pero este se negó, al igual que el sheriff, por lo que el secretario procedió al recuento con la asistencia del juez de paz. El 13 de noviembre tuvo lugar un segundo recuento pero, en la tarde noche de ese día, el juez del condado y el sheriff excluyeron dos urnas de votos (las correspondientes a Johnsville y Darbyville) por sospechas de fraude e intimidación y existencia de votos nulos.

⁴⁰³ «*Lets us hang our heads for shame; lets us take down from the Dame of this Capitol the statue which every morning faces the coming light; let us clothe ourselves with shakeloth and sit in ashes forever.*»

⁴⁰⁴ «*The power of determination can never be valid where it usurps the elective function which is vested by the laws in any other body.*»

potestades de los organismos encargados por ley del recuento electoral es reglada («*ministerial*») y no discrecional, según doctrina del Tribunal Supremo de Florida en el caso *Drew v. Stearns* («*They had no right to reject on the idea that there was fraud or intimidation*»).

La tarde de ese día 2 de febrero toman la palabra, en defensa de las impugnaciones presentadas por los republicanos, los miembros de la Cámara de Representantes John A. Kasson y George McCrary. Kasson inicia su alegato negando que no discutieran la existencia de fraude (alude, de hecho, a Jackson County, donde se anulaban 271 votos emitidos a favor de compromisarios de Hayes) y rechaza muy hábilmente la certificación remitida por el nuevo ejecutivo de Florida el 26 de enero de 1877.⁴⁰⁵ A continuación centra el asunto jurídicamente al plantearse, en forma de preguntas, las atribuciones que ostenta la Electoral Commission según su ley de creación:

First: Is this Commission a general Canvassing Board with powers to recanvass the popular vote of the State of Florida?

Second: Is this Commission a national court of appeal from the State Canvassing Boards?

Third: Is this Commission a judicial court of appeal from the State Circuit Court of Florida in proceedings by writ of quo warranto?

La respuesta a tales preguntas solo podía ser negativa debido a la división de poderes que la Constitución establecía

⁴⁰⁵ Para ello utiliza la ironía, «*I ought perhaps to say to the honorable Commission that it is fortunate they did not grant the request of our objectors for an adjournment till tomorrow. The next mail might have brought to you certificates n.º 4 or 5 reciting to you new proceedings, a new action before the courts, and no end would come to the papers that might be presented in a party or personal interest as establishing a retroactive right to exercise on electoral function in the state of Florida*».

entre federación y estados, correspondiendo a estos la regulación y práctica de todo el proceso electoral advirtiéndole que si la comisión decidiera revisar el recuento de votos estaría, de facto, modificando el texto constitucional.⁴⁰⁶ Finalmente, utiliza un argumento disuasorio: en el supuesto que la comisión aceptara las pretensiones demócratas y procediese a enjuiciar el recuento de votos, se abriría una peligrosa espita para reclamaciones similares («*Go behind this certificate, unless simply to determine the verity of several authentications and their conformity to law, and you lurch yourselves into a tumultuous sea of allegations of fraud, irregularity and bad motive*»); tras lo cual toma la palabra McCrary, quien dedica toda su intervención a desmontar uno de los argumentos más poderosos esgrimidos por los demócratas: la sentencia del Tribunal de Circuito de Florida dictada en un procedimiento *quo warranto* y que había declarado legalmente electos a los compromisarios de Tilden. En primer lugar, la resolución del tribunal se encontraba en fase de apelación y, por tanto, aún no resuelta definitivamente; pero, aun obviando dicha circunstancia, la resolución del tribunal no invalidaba para nada los votos emitidos por los compromisarios de Hayes y, por ende, el certificado de Stearns. Para ello McCrary ofrece un excursus justificativo sobre la naturaleza del procedimiento *quo warranto* como procedimiento especial⁴⁰⁷, para concluir que una sentencia dictada en tales procedimientos despliega

⁴⁰⁶ «*You must declare the Constitution amended by this tribunal, ipso facto amended; so that it shall read "each State shall appoint, in such manner as the Legislative thereof may direct, a number of electors equal" & subject, however, to revision by the Congress of the United States, who shall have the power to overrule the State authorities in determining the college of electors. Would the constitution ever have been adopted with that construction?*»

⁴⁰⁷ «*The writ of quo warranto is a proceeding to test the right of an incumbent of an office. It does not restrain him from acting from the time that the original summons may be served. It does not oust him from the office until there is a final judgment of ouster; and there is no authority for the declaration of counsel, I undertake to say, that the judgment in quo warranto relates back to the filing of the original petition and vitiates the acts of the officer in the mean time.*»

sus efectos hacia el futuro únicamente a partir de la fecha de la sentencia, sin que la misma tenga efectos retroactivos, lo que conlleva que las actuaciones de quienes desempeñasen los cargos públicos hasta la decisión final del proceso *quo warranto* son perfectamente legales y válidas. Por ello, dado que los compromisarios de Tilden instaron el *quo warranto* la tarde del día 6 de diciembre de 1876 y la resolución judicial se dictó a finales de enero de 1877, la validez de los votos emitidos por los compromisarios de Hayes era jurídicamente intachable.

Los términos del debate quedaban, así, fijados. A partir de este momento son los letrados designados por cada una de las partes en conflicto quienes toman en sus manos el asunto. En esta fase intervinieron los más eminentes juristas de la época, pues si Charles O'Connor, Jeremiah S. Black, R. L. Merrick, Ashbel Green y William C. Whitney tomaron a su cargo la defensa de los intereses de Tilden, los republicanos contaron con William M. Evarts, E.W. Soughton, Stanley Matthews y Samuel Shellabarger.

Amén de incidir en las motivaciones expuestas anteriormente, el núcleo central de la intervención de los letrados se centró en dilucidar si la comisión estaba facultada para recibir y examinar pruebas documentales y testificales distintas a las remitidas junto con las certificaciones de voto compromisario. La cuestión básica, la pregunta a la que debía responderse y que llevaba implícita la resolución del caso era bien simple, mas no así la respuesta a la misma: ¿Cuáles eran las competencias del legislativo en el sistema de elecciones presidenciales? En otras palabras ¿Podría el Congreso entrar a investigar el desarrollo del proceso legislativo de los estados en disputa admitiendo y valorando pruebas adicionales? Por los demócratas, tomaron la palabra los letrados Merrick y Black. Ambos sostenían que la comisión estaba facultada para ampliar la investigación al fondo del asunto, es decir, a la existencia de fraude en el recuento.

Si Merrick fundamentaba su argumentación en un inmediato precedente en las elecciones presidenciales de 1872,⁴⁰⁸ Black pretendía convencer a los miembros de la comisión sosteniendo que no se trataba de rectificar la actuación de un estado, sino del acto fraudulento de un empleado público carente de autoridad.⁴⁰⁹ Para ambos, lo que debían computarse eran los votos y no el fraude. A tales consideraciones, los letrados defensores de las tesis republicanas (Matthews y Soughton) oponían una argumentación jurídica: en efecto, el procedimiento para la elección de compromisarios era única y exclusivamente de competencia estatal, mas una vez llegada la fecha establecida por el Congreso para que los compromisarios emitiesen su voto, el asunto dejaba de ser competencia estatal para convertirse en un asunto federal. Partiendo de que el procedimiento electoral no está constituido por un único acto, sino por una serie de actuaciones que culminan en la certificación final del *State Canvassing Board*, una vez que llega la fecha estipulada para la emisión del voto compromisario el asunto abandona la esfera estatal («*when the day has passed [...] has passed beyond the limits of its control. It's a Federal act. It becomes one of those things which pass into the jurisdiction, whatever that may be, of Federal power*»). Ahora bien, las Cámaras (y, por ende, la comisión, que tenía *ex lege* los mismos poderes que aquellas a estos efectos), a diferencia de los tribunales en un procedimiento *quo warranto* no podía investigar el fondo del asunto. Por último, rechaza la tesis demócrata de que el fraude invalida toda actuación («*it makes things voidable, but it not vitiates everything*»).

⁴⁰⁸ En la impugnación de uno de los votos compromisarios del Estado de Luisiana, el asunto fue abordado por el Comité de Privilegios y Elecciones del Senado, que en su informe final de 10 de febrero de 1872 (elaborado por Oliver Morton) concluía: «*it is not violating any principle of the right of the States to prescribe what shall be the evidence of the election of electors, but it is simply go behind the evidence by an act of Congress*».

⁴⁰⁹ «*We are not going behind the action of a State; we are going behind the fraudulent act of an officer of the State whose act had no validity in whatever.*»

Tras este apasionante debate jurídico, la resolución definitiva quedaba en manos de la comisión.

3.4.2.3. Opinión de los jueces y decisión final

*Thus the entire complicated political and procedural history of the Hayes-Tilden election and ultimately its outcome, had finally been reduced to the resolution of one issue: what was the scope of the Commission's review? If broad—as Democrats urged—Tilden had a good chance; if narrow—as Republicans wanted—Hayes would likely prevail.*⁴¹⁰

El día 7 de febrero de 1877 la comisión se reúne a las diez de la mañana y a las once se retira para iniciar sus deliberaciones a puerta cerrada. Queda sobre su mesa para resolver si debía o no admitirse para su valoración las pruebas adicionales aportadas por los demócratas en orden a destruir la validez del certificado emitido por el gobernador Stearns y que otorgaba los cuatro votos compromisarios de Florida a Rutherford B. Hayes.

Pese al secreto de las deliberaciones, podemos hacernos una idea de las mismas gracias al diario personal de uno de los integrantes de la comisión (en concreto James A. Garfield)⁴¹¹ así como por los argumentos esgrimidos por cada uno de los componentes de la misma, pues por medio de una moción aprobada en la última reunión del organismo, se acordó acompañar como anexo a las actas de la comisión las tesis de cada integrante. Destaca Garfield la altura intelectual que alcanzaron los debates, pues manifiesta que «*The proceedings were very impressive and the debate very able. I have never spent a day in closer and severer intellectual work with more Sharp*

⁴¹⁰ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 167.

⁴¹¹ El mismo fue utilizado por Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission of 1877*, o. cit.

incitement from the presence of able and trained minds.» Y dado que los miembros designados por cada una de las Cámaras votarían según criterios estrictamente partidistas, las miradas se dirigieron a cada uno de los jueces, muy especialmente al magistrado Joseph Bradley.

A) *Stephen Field: deben admitirse y valorarse las pruebas*⁴¹²

El primero en exponer su criterio fue Stephen Field, cuyo razonamiento jurídico avalaba las tesis demócratas. En primer lugar, indica que debe necesariamente precisarse cuál es la tarea encomendada a la Comisión, estando perfectamente claro para Field que la misma era determinar quiénes eran las personas que debían considerarse compromisarios debidamente elegidos. Partiendo de tal consideración, se muestra favorable a que el organismo acepte la práctica y valoración de la prueba solicitada por los partidarios de Tilden, basando su argumentación en cuatro puntos esenciales:

- Para verificar quiénes son los compromisarios legalmente elegidos, ha de verificarse si se han respetado los procedimientos legales y, por ello, comprobar si, a la hora de enviar a Washington la lista de compromisarios, las autoridades han procedido de forma distinta a la prevista en la legislación estatal.⁴¹³ Ello planteaba necesariamente determinar las potestades ostentadas por el *State Canvassing Board*, que Field estimaba eran regladas y en manera alguna discrecionales

⁴¹² La argumentación de Field en el asunto de Florida puede consultarse en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 245-249.

⁴¹³ «*If another and different manner from that directed by the legislature has been followed in the appointment of persons as electors, such persons are not duly appointed in the State and we must so decide. Any substantial departure from the manner prescribed must necessary vitiate the whole proceeding.*»

The duty of the canvassers under the law of the State was ministerial, involving only the exercise of such judgment as was required to determine whether the papers returned were genuine and were executed in conformity with the requirements of law. Such was the construction given to the statute by the supreme court of the State in the proceeding against the canvassers taken on the relation of Mr. Drew, who was a candidate for governor at the same election at which the electors of President and Vice-President were chosen.

- El segundo argumento, quizá el de más peso desde el punto de vista jurídico, radicaba en la primacía del derecho estatal sobre el federal en este tipo de comicios, por lo que, en consecuencia, las resoluciones del Tribunal Supremo de Florida a la hora de interpretar la normativa electoral de dicho estado debían considerarse parte integrante de la norma.⁴¹⁴ La inevitable consecuencia de dicho razonamiento era la consideración de los compromisarios demócratas como los legalmente electos.⁴¹⁵ Para llegar a esta consideración, Field atiende únicamente al hecho en sí, es decir, la actuación no ajustada a derecho, sin entrar en los motivos que impulsaron la actuación tanto del *Canvassing Board* como del gobernador, que son a estos efectos jurídicamente irre-

⁴¹⁴ «*The construction given to a statute of a State by its supreme court is, as we all know, considered as part of the statute itself, as much so as if embodied in its very text. Such is the language of the Supreme Court of the United States in all its decisions.*»

⁴¹⁵ «*The duty of canvassers, according to the decision of the supreme court, and according to the express language of the statute, was simply to add together the votes and declare, under their certificate, the result as shown by the returns. In so doing they would have carried out the direction of legislature. Being added together, the returns would have shown that the Tilden electors were chosen.*»

levantes. Respecto al problema que se planteaba en relación con la lista de compromisarios republicanos, que era la única cuyo certificado cumplía los requisitos legalmente establecidos, Field entiende que la certificación no es en modo alguno concluyente y decisiva, lo que implica que nada impide verificar si, pese a la existencia de la misma, se han producido irregularidades en el proceso electoral.⁴¹⁶

- En tercer lugar, respecto a las tesis republicanas en el sentido de que la admisión y valoración de pruebas dilataría las sesiones de la comisión más allá del 4 de marzo (fecha constitucionalmente fijada para que el presidente electo tomara posesión del cargo), son tajantemente rechazadas por Field, quien aun reconociendo que la decisión final debería tomarse antes de la fecha indicada, argumenta que la valoración de las pruebas no ocuparía al organismo un tiempo excesivo y, por tanto, se respetarían los límites constitucionalmente exigidos. En cuanto al fondo del asunto, es decir, a la admisibilidad de las pruebas, las estima pertinentes con base en la resolución del Tribunal Supremo de Florida y las disposiciones legislativas que dicho estado aprobó en enero de 1877 sobre la materia.⁴¹⁷
- Por último, ofrece como apoyo adicional a sus tesis el informe que el comité de la Cámara de Represen-

⁴¹⁶ «*There is nothing in this act which declares that the certificate thus issued shall be conclusive of the appointment [...] the truth is a certificate is only prima facie evident of the fact certified. Indeed, I venture to assert, without fear of successful contradiction, that in the absence of positive law declaring its effects to be otherwise, a certificate of any officer to a fact is never held conclusive on any question between thirth parties; it is always open to a rebuttal.*»

⁴¹⁷ «*The State of Florida has furnished evidence in authentic form and conclusive in character that the Hayes electors were never appointed and that the certificate of governor and of the Canvassing Board in that respect is false; and that the Tilden electors were duly appointed.*»

tantes elaboró sobre el asunto y que consideraba a los compromisarios demócratas como los legalmente electos.⁴¹⁸

B) *William Strong: no deben admitirse ni considerarse pruebas*⁴¹⁹

Al igual que Field, Strong inicia su razonamiento precisando cuáles son las potestades que ostenta la comisión. Partiendo de que, según la ley de creación, son las mismas que las del Congreso, la cuestión fundamental a plantearse radica en verificar si este órgano ostenta la potestad de revisar los votos y los certificados remitidos por las autoridades estatales, respuesta que debe buscarse en el propio texto constitucional.⁴²⁰ A partir de dicha consideración inicial, continúa Strong aclarando que, en material de elecciones presidenciales, el recuento de votos a que hace referencia la Constitución *no es el recuento del voto popular, sino del voto compromisario.*

The opening of the certificates and the counting of the votes it is not the election. Nor is the voting done of the

⁴¹⁸ William REHNQUIST, un eminente jurista, lleva toda la razón cuando, al valorar las tesis jurídicas de Field, manifiesta «*Field's strongest point was probably the principle that a decision of a state's highest court was considered to be law just as surely as if enacted by the legislature. The Florida Supreme Court ruled that the State Canvassing Board acted improperly in disregarding returns which it believed to be fraudulent. He was on much weaker ground when he relied on a state trial court decision which was then being appealed, and on the findings of the House of Representatives based on its committee report, when the Senate—controlled by the Republicans—had reached a diametrically opposite result.* Centennial Crisis, o. cit., p. 169.

⁴¹⁹ La argumentación de Strong en el asunto de Florida puede consultarse en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 251-254.

⁴²⁰ «*Has the Congress power to canvass the votes and return of votes given in a State for presidential electors or has it the power to try a contested election in a State? The answer to this must be sought in the Constitution. Congress, confessedly, has no power which the Constitution has not conferred upon it, expressly or by fair implication from the grant of some power.*»

second Tuesday in November the presidential election. It is only preparatory to such election. The presidential election takes place on the first Wednesday of December, when the appointed electors meet and cast their votes, and all that the president of the Senate and the two Houses of Congress have to do after that time is ascertain the result.

El Congreso, pues, no está constitucionalmente facultado para hacer un recuento del voto popular emitido en las elecciones estatales, y ello por otra poderosísima razón que se deduce implícitamente del propio texto constitucional:

Each House was made a judge «of the elections, returns and qualifications of its members». No such language was used respecting electors, and for what appears to me to be the plainest reason. The scheme of the Constitution was to make the appointment of electors exclusively a State affair, free from interference of the legislative department of Government.

Por tanto, al ser un asunto estatal, ambas Cámaras legislativas no tienen atribución alguna para inmiscuirse en el proceso electoral. Ahora bien, la potestad exclusiva de los estados para controlar el desarrollo y revisión del proceso electoral finaliza el día 6 de diciembre, cuando los compromisarios deben reunirse y emitir su voto; ello trae como inevitable consecuencia que lo ocurrido a partir de tal fecha sea jurídicamente irrelevante para la comisión y, por tanto, no deba ser tenido en cuenta ni ser objeto de comprobación e investigación.⁴²¹

⁴²¹ *«In my judgment it follows inevitably that what was done in Florida after the 6th of December is immaterial. Neither the action of the Legislature, nor a post decision of a court can affect a rightfully done when it was done and completed before the Legislature and the court attempted to annul the authority for it.»*

C) *Samuel Miller: no deben admitirse ni considerarse pruebas*⁴²²

El juez Miller se remite a los argumentos de su colega Strong para rechazar toda consideración o prueba adicional que no hubiese sido remitida en su día al presidente del Senado junto con los certificados o junto con las impugnaciones al voto electoral. Para ello, se ampara en la propio texto legal que crea y fija las potestades de la Electoral Commission.⁴²³ Por otra parte, y refiriéndose ya en concreto a las pruebas cuya admisión se solicitaba, estas consistían en «*a large pile of papers, a half bushel perhaps in quantity [...] may be ex parte affidavits taken in the morasses of Florida, the slums of New York, private office of retained counsel in the city*».

Para Samuel Miller, podían distinguirse tres etapas diferenciadas en el proceso de elecciones presidenciales estadounidense: el primero, la propia elección de los compromisarios; el segundo, el momento en el que estos se reúnen y emiten el voto para el presidente y el vicepresidente; el tercero y último, el recuento de voto compromisario por el presidente del Senado. La primera de las fases está encomendada exclusivamente a los estados sin que el poder federal goce de atribución o derecho alguno para inmiscuirse en él y, por tanto, son las autoridades y organismos designados por la legislación estatal quienes gozan de competencia exclusiva para ello.⁴²⁴ Por contra la última fase, es decir, la del recuento del voto compromisario, está atribuida en exclusiva a las autoridades federales, en

⁴²² La argumentación de Miller en el asunto de Florida puede consultarse en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 255-258.

⁴²³ «*The good sense of the framers of this bill is vindicated by the critical accuracy which they have clearly expressed that the certificates, votes and papers so objected to, and all papers accompanying them are to be considered, and the objections also, the latter only on their merits, with no directions to consider any papers filed with them, even if fully described and identified.*»

⁴²⁴ «*The Legislature of Florida has vested in her board of canvassers the authority to determine who are elected electors. It has conferred no power on any tribunal to revise that decision. The board in this respects represents the State. Its judgment is her judgment and its official certificate is her authorized expression of what she has done in the matter, and it is conclusive.*»

concreto al presidente del Senado en presencia de ambas Cámaras legislativas;⁴²⁵ y dado que la ley de creación atribuye a la Electoral Commission las mismas atribuciones que a estos efectos ostenta el Congreso, puesto que este carece *ex constitutione* competencia alguna para el recuento del voto en las elecciones estatales, la comisión, por ende, no puede considerarse que posea dicha atribución, razones todas ellas que han de conllevar el rechazo a la admisión de las pruebas propuestas por los defensores de las tesis demócratas.

El juez Miller finaliza su disertación con una seria advertencia sobre los peligros que acarrearía atribuir al legislativo federal la potestad de revisar las elecciones estatales:

Much has been said of the device of returning boards, and it may be that they have exercised their power in a manner not always worthy of commendation. But I take the liberty of saying that such a power lodged in one or in both houses of Congress would be a far more permanent menace to the liberty of the people, to the legitimate result of the popular vote, than any device for counting those votes which has yet been adopted by states.

D) *Joseph Bradley: no deben admitirse ni considerarse pruebas en relación con las elecciones estatales, pero sí han de admitirse las relativas a la existencia de una causa de inelegibilidad del compromisario Humphreys.*⁴²⁶

La opinión más esperada era la del juez Bradley, al ser la persona cuya decisión inclinaría la balanza a favor de una u otra tesis. Según hace constar Garfield en su diario, este comenzó

⁴²⁵ «The power of counting does nor reside with the States or with the electors, but somewhere within the domain of Federal power, as represented by the President of the Senate and the two Houses of Congress.»

⁴²⁶ La argumentación de Bradley en el asunto de Florida puede consultarse en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 259-261.

la lectura de su decisión a las 2:13 y a los diez minutos quedó patente que no era partidario de admitir las pruebas solicitadas, aunque (y este es un hecho decisivo e importante a los efectos de rebatir las ulteriores acusaciones que los demócratas vertieron sobre Bradley y a las que nos referiremos en un epígrafe posterior) Garfield constata que Bradley sorprendió a todo el mundo únicamente cuando se mostró partidario de que se entrase a valorar si el compromisario Humphreys estaba incurso en causa legal de inelegibilidad.⁴²⁷

Bradley comienza su alegato rechazando que el presidente del Senado ostentara potestad discrecional alguna para excluir votos compromisarios, dado que sus atribuciones estaban absolutamente tasadas y limitadas al simple recuento del voto. Coincidió con Miller y Strong al argumentar que, hasta el momento en que los compromisarios se reuniesen el día 6 de diciembre para emitir su voto, los procedimientos impugnatorios eran competencia exclusiva de los estados pero que, al llegar esa fecha ningún procedimiento ulterior tendría efectos jurídicos y ninguna de las Cámaras (ni, por tanto, la comisión) podría entrar a conocer el fondo del asunto.⁴²⁸ Añadía un nuevo consistente argumento jurídico: en caso de conflicto electoral en unos comicios para la Cámara de Representantes o el Senado, la Constitución sí establecía que las Cámaras estaban facultadas para la investigación de los comicios, mas no existía una norma similar en cuanto a las elecciones presidenciales. Los certificados remitidos por la autoridad compe-

⁴²⁷ «Judge Bradley arose at 2:13 to read his opinion. All were intent, because B. held the casting vote. It was a curious study to watch the faces as he read. All were making a manifest effort to appear unconcerned. It was ten minutes before it became evident that he was against the authority to hear extrinsic evidence. His opinion was clear and strong. Near the close he surprised us all by holding that we could hear testimony on the eligibility of Humphreys», citado en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 95.

⁴²⁸ «Control of the State is ended when the day fixed by Congress for voting has arrived and the electors deposit their votes and made out the list and the certificates required by the Constitution.»

tente únicamente podrían ser rechazados si se demostrasen falsos o contuviesen errores fácticos, lo que no ocurría en el caso de Florida. El certificado del gobernador Stearn ni era falso ni contenía errores, dado que los propios demócratas imputaban falsedades, no al gobernador, sino al *Canvassing Board*. Ahora bien, Bradley consideraba, en primer lugar, que la legislación estatal de Florida otorgaba al *Canvassing Board* la potestad de excluir aquellos votos que estimase nulos o que entendiese emitidos con fraude o intimidación;⁴²⁹ en segundo lugar, que ni los tribunales ni el legislativo de un estado podrían modificar con carácter retroactivo los votos emitidos en su día por los compromisarios.⁴³⁰ Finalmente, y en lo que respecta a la causa de inelegibilidad del compromisario Humphreys, Bradley sí consideraba que debían admitirse las pruebas, al ser una cuestión de hecho y no de interpretación.⁴³¹

E) *Nathan Clifford: deben admitirse y considerarse las pruebas.*⁴³²

El último en emitir su parecer fue el juez Clifford, cuyas tesis eran idénticas a las de su colega Field en el sentido de

⁴²⁹ Tal y como el republicano Kasson había demostrado en su intervención del día 2 de febrero, la ley aprobada el 27 de febrero de 1872 por el legislativo de Florida (vigente hasta la aprobada por la nueva legislatura demócrata el 17 de enero de 1877) establecía que «*If any such returns shall be shown or shall appear to be so irregular, false or fraudulent that the board shall be unable to determine the true vote for any such officer or member, they shall so certify, and shall not include such return in their determination and declaration*». Recordemos que propio *attorney general* de Florida, William Archer Cocke había emitido una circular en 1874 confirmando tal potestad discrecional del organismo encargado del recuento de los votos.

⁴³⁰ «*If the court had had jurisdiction of the subject matter and had rendered its decision before the votes of the electors were cast, its judgment, instead of the returning board, would have been the final declaration of the result of the election. But its decision being render after the votes were given, it cannot have the operation to change or affect the vote.*»

⁴³¹ «*I think the evidence of this fact should be admitted. Such an office is a constitutional disqualification. I do not think it requires legislation to make it binding. What may be the effect of the evidence when produced, I am not prepared to say. I should like to hear further argument on the subject before deciding the question.*»

⁴³² La argumentación de Clifford en el asunto de Florida puede consultarse en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 267-272.

abogar por la admisión y práctica de pruebas adicionales, rechazando de manera categórica la objeción de que con ello se dilatarían las sesiones de la comisión, toda vez que el examen de las mismas apenas ocuparía unas pocas horas.

Inicia Clifford su razonamiento tratando de aclarar una cuestión básica: no se trata en el presente asunto de que la comisión practicase un nuevo recuento de los votos emitidos, dado que tal pretensión sería jurídicamente inadmisiblesino de determinar quiénes eran los compromisarios legalmente elegidos. Por ello, tras realizar una síntesis de los certificados remitidos y las impugnaciones realizadas, manifiesta que

properly analyzed and construed, it is clear from several objections filed to the certificates that the returns of the State of Canvassers, including that made by the attorney general, are the only returns called in question, the charge being that the return of the State Board, which is the basis of the Hayes certificate, is false, forged and counterfeit.

La actuación del *Canvassing Board* fue ilícita, mas no por carecer de la facultad para excluir votos irregulares o fraudulentos, sino porque, a la hora de practicar tal exclusión debía motivar su actuación, algo que el organismo de Florida no había realizado. Trata de refutar la tesis de que el certificado remitido por la autoridad legalmente establecida es de por sí suficiente,⁴³³ e incluso ataca a sus colegas que han defendido tal postura.⁴³⁴ Por último, sostiene que «el fraude determina la nulidad de todo el proceso» y finalizó su argumentación sosteniendo que las actuaciones practicadas por los juzgados

⁴³³ «Evidence of error is sufficient to overcome a prima facie presumption, but it was never Heard that such a presumption is sufficient to shut out all proof of fraud.»

⁴³⁴ «With all respect to those who advocate that proposition, I must be allowed to say that such a decision was never made, and it is presumed never will be, by any intelligent tribunal.»

estatales en los procesos *quo warranto* así como por los actos tendentes a ejecutar las disposiciones legislativas estatales aprobadas en enero de 1877, no pueden llevar a otra conclusión que son los compromisarios demócratas los legalmente electos.⁴³⁵

Una vez expuesto el parecer de todos los integrantes de la comisión, a las tres de la tarde, el juez Miller hace público el fallo del organismo, rechazando la admisión de toda prueba excepto la tendente a verificar la causa de elegibilidad del compromisario Humphreys:

Ordered. That no evidence will be received or considered by the Commission which was not submitted to the joint convention of the two houses by the President of the Senate with the different certificates, except such as relates to the eligibility of F. C. Humphreys, one of the electors.

Con ello, en el asunto de Florida (y, en realidad, los de Carolina del Sur y de Luisiana, al ser idénticos en todos ellos tanto los antecedentes fácticos como los jurídicos) las opciones de Tilden se vieron notablemente reducidas, quedando únicamente por dilucidar si el voto del compromisario Humphreys era válido o no. En este sentido, la jornada del día 8 de febrero se dedicó en exclusiva al análisis de dicha circunstancia. Las pruebas presentadas acreditaron que el compromisario F. C. Humphreys había remitido por correo en septiembre de 1876 una carta al juez de circuito W. B. Woods renunciando a su puesto de *shipping commissioner*. El pro-

⁴³⁵ «Prompt investigation was made by the new board of State canvassers, and the legislature enacted the statute declaring that the Tilden electors were duly chosen and appointed the next day after the decree was entered in the *quo warranto* suit. Neither the public nor the citizens have any power to defeat the machinations of fraud, perjury and forgery if the measures adopted for that purpose in this case are held to be ineffectual and insufficient.»

blema radicaba en la contestación del juez, quien en el mes de octubre de ese año aceptaba la renuncia, pero le ordenaba continuar desempeñando el cargo en funciones hasta que la vacante fuese cubierta por el Tribunal de circuito.⁴³⁶ Mientras los demócratas sostenían que estaba incurso en causa de inelegibilidad al continuar en el ejercicio del cargo en funciones, los republicanos entendían que Humphreys era perfectamente elegible por cuanto a la fecha de las elecciones el interesado había presentado su renuncia al cargo y esta había sido expresamente aceptada por el juez.

El viernes 9 de febrero de 1877 por ocho votos a favor (los de Bradley, Edmunds, Frelinghuisen, Garfield, Hoar, Miller, Morton y Strong) y siete en contra (Abbot, Bayard, Clifford, Field, Hutton, Payne y Thurman), la Electoral Commission hace pública su resolución en el asunto de Florida considerando a los compromisarios republicanos como legalmente electos, y encomienda a Edmunds, Bradley y Miller que redacten el informe en tal sentido.

Resolved. That the four persons, to wit, Frederick C Humphreys, Charles H. Pearce, William A. Holden and Thomas W. Long were duly appointed electors of President and Vice-President for the State of Florida, and that the votes cast by the aforesaid four persons are the votes provided for by the Constitution of the United States.

Resolved. That Mr. EDMUNDS, Mr. BRADLEY and Mr. MILLER be appointed a committee to draft a report of the action of the Commission as required by law.

⁴³⁶ En concreto, la respuesta del juez Woods fue la siguiente: «Newark, October 1876. Dear Sir: I inclose the acceptance of your resignation as shipping commissioner. The vacancy can only be filed by the Circuit Court, and until I can go to Pensacola to open the court for that purpose the duties of the office will have to discharge by the collector. Respectfully yours, W. C. Woods».

La resolución elaborada certifica que los cuatro votos compromisarios del estado de Florida correspondían a Hayes como presidente y a Wheeler como vicepresidente, ofreciendo la siguiente motivación jurídica:

That is not competent under the Constitution and the law, as it existed at the date of the passage of said act, to go into evidence aliunde on the papers opened by the President of the Senate in the presence of the two Houses to prove that other persons than those regularly certified to by the governor of the State of Florida, in according to the determination and declaration of their appointment by the board of State canvassers of the said state prior to the time required for the performance of their duties, had been appointed electors, or by counter-proof to show that they had not, and that all proceedings of the courts or acts of the Legislature or the executive of Florida, subsequent the casting of the votes of the electors on the prescribed day are inadmissible for any purpose.

As to the objection made to the eligibility of Mr. Humphreys, the Commission is of opinion that, without reference to the question of the effect of the vote of an ineligible elector, the evidence does not show that he held the office of shipping commissioner on the day when the electors were appointed.

The Commission has also decided, and does hereby decide and report that, as consequence of the foregoing, and upon the grounds before stated, neither of the papers purporting to be certificates of electoral votes of said State of Florida numbered two (2) and three (3) by the Commission, and herewith returned are the certificates of the votes provided for by the Constitution of the United States, and that they ought not to be counted as such.

La comisión designó a Edmunds para remitir copia de dicho informe al presidente del Senado, Thomas W. Ferry y al

de la Cámara de Representantes, Samuel J. Randall, cerrando así definitivamente la cuestión de Florida.

3.4.3. VOTOS COMPROMISARIOS DE Luisiana (SESIONES DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 1877)⁴³⁷

A las cinco menos veinte de la tarde del lunes día 12 de febrero de 1877 la Comisión Electoral recibe una comunicación del presidente del Senado informando de la existencia de varias certificaciones remitidas del estado de Luisiana. El senador McDonald y el representante Jenks se encargaron de defender las tesis demócratas, mientras el senador Howe y el representante Hurlbut avalaron los argumentos republicanos. Cuando el asunto se encomienda a los letrados de las partes, los demócratas contaron con la asistencia letrada de John A. Campbell de Luisiana, Lyman Trumbull de Illinois, Matt. H. Carpenter de Wisconsin, Richard T. Merrick de Washington DC, George Hoadly de Ohio y Ashbel Green de Nueva Jersey, mientras que los republicanos encargaron la defensa a William Evarts y E. W. Soughton de Nueva York, así como a Stanley Matthews y Samuel Shellabarger de Ohio.

Durante tres días (del martes 13 al jueves 15 de febrero, ambos inclusive) se debatió extensamente el asunto de Luisiana. Los argumentos y tesis defendidos por ambas partes eran sustancialmente idénticos a los que se sostuvieron en el asunto de Florida. Los republicanos se amparaban en la validez del certificado emitido por el legítimo gobernador de Luisiana así como en la correcta actuación del *State Canvassing Board*. Los demócratas insisten en la actuación ilegal del organismo competente para el recuento de votos, tratando de poner de relieve las diferencias entre el caso de Florida (en el cual la diferen-

⁴³⁷ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 57-119.

cia entre Tilden y Hayes era escasísima y donde únicamente se anulaban un puñado escaso de votos) y de Luisiana (donde el margen de votos entre Tilden y Hayes superaba los ocho mil), siendo así que la actuación del *Canvassing Board*, anulando nada más y nada menos que quince mil sufragios, podía ofrecer indicios de actuación irregular. Sin embargo, aquí no existía intervención alguna del legislativo estatal ni de los tribunales que pudiesen avalar a posteriori los votos de los compromisarios de Tilden. Y, a mayor abundamiento, los demócratas contaban con el precedente de Florida, donde la comisión había rehusado no solo dar validez a actuaciones estatales realizadas *ex post facto* sino que rechazó el admitir y valorar pruebas adicionales. Y en el caso de Luisiana para demostrar la actuación irregular del organismo encargado del recuento era menester que se ofreciese a la comisión y que esta aceptase la valoración de pruebas complementarias.

El viernes 16 de febrero de 1877 la comisión se reúne a las diez a puerta cerrada para deliberar. Varias mociones presentadas por Abbot en el sentido de autorizar la proposición y práctica de pruebas fueron derrotadas por siete votos a favor y ocho en contra (los de Bradley, Edmunds, Frelinghuisen, Garfield, Hoar, Miller, Morton y Strong), aprobándose por idéntico margen una sencilla moción de Hoar («*Ordered. That the evidence offered be not received*»). Finalmente, y en cuanto al fondo del asunto, se aprobó por idéntico margen de ocho votos a favor y siete en contra una resolución propuesta por Morton declarando a los compromisarios republicanos como los legalmente electos («*Resolved: That the persons named as electors in certificate No. 1 were the lawful electors of the State of Louisiana and that their votes are the votes provided by the Constitution of the United States and should be counted for President and Vice-President.*»). Únicamente quedaba redactar el informe final a remitir a las Cámaras legislativas, tarea que, a propuesta

de Morton, recayó en Strong, Frelinghuisen y Bradley. El núcleo del informe, que contenía el razonamiento de la comisión, tenía el siguiente contenido:

The brief ground of this decision is that it appears upon such evidence as by the Constitution and the law named in said act of Congress is competent and pertinent to the consideration of the subject, that the before mentioned electors appear to have been lawfully appointed such electors of President and Vice-President of the United States for the term beginning March 4 A. D. 1877, of the State of Louisiana, and that they voted as such at the time and in the manner provided for by the Constitution of the United States and the law: and the Commission has by a majority of votes decided, and does hereby decide, that it is not competent under the Constitution and the law as it existed at the date of the passage of said act to go into evidence aliunde the papers opened by the president of the Senate in the presence of the two Houses to prove that other persons than those regularly certified to by the governor of the State of Louisiana, on and according to the determination and declaration of their appointment by the returning officers for elections in the said State prior to the time required for the performance of their duties, had been appointed electors, or by counter-proof to show that they had not; or that the determination of the said returning officers was not in accordance to the truth and the fact, the Commission by a majority of votes being the opinion that it is not within the jurisdiction of the two Houses of Congress assembled to count the votes for President and Vice-President to enter upon a trial of such question.

[...]The Commission is also of opinion by a majority of votes that the returning officers of election who canvassed the votes at the election for electors in Louisiana were a legally constituted body, by virtue of a constitutional law, and that a vacancy in said body did not vitiate its proceedings.

3.4.4. VOTOS COMPROMISARIOS DE OREGÓN (SESIONES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 1877)⁴³⁸

El caso de Oregón difería notablemente de los anteriores, dado que en este eran los demócratas quienes defendían la validez del certificado remitido por el gobernador del estado mientras que los republicanos sostenían que sus compromisarios eran los legalmente electos. En principio, podría suponerse que ambas partes incurrieran en una contradicción respecto a la postura que mantenían en los casos anteriores (los demócratas por sostener en esta ocasión que lo prioritario eran los certificados de la autoridad estatal competente, apartándose de las tesis que habían defendido apasionadamente en los supuestos de Florida y Luisiana, y los republicanos por argumentar que lo que debían tenerse en cuenta eran los resultados, es decir, los compromisarios más votados). Sin embargo, un análisis más detallado revela que tal contradicción es tan solo aparente: si en los supuestos de Florida y Luisiana los demócratas habían atacado el certificado remitido por la autoridad competente, lo que en el fondo objetaban no era el certificado mismo, sino la actuación del *State Canvassing Board*, que era el organismo que había actuado ilegalmente por excluir votos que consideraban válidos. En el caso de Oregón, los republicanos atacaban el certificado del gobernador por apartarse del criterio del organismo encargado del recuento de votos, cuya actuación en modo alguno discutían; es decir, que si en los casos anteriores se censuraba que el gobernador hubiese avalado las actuaciones del *Canvassing Board*, en el presente caso se impugnaba precisamente que se hubiese apartado de tal criterio. Esta era la última oportunidad, el intento desesperado de los demócratas para

⁴³⁸ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 119-178.

lograr que Tilden fuese elegido presidente al presumirse que en el asunto de Carolina del Sur la comisión se limitaría a reproducir lo argumentado en sus decisiones en los casos de Florida y Luisiana. Por tanto, si se lograba arrebatarse a Hayes el compromisario de Oregón, la Casa Blanca estaría en manos demócratas.

3.4.4.1. Impugnaciones presentadas⁴³⁹

El certificado del gobernador de Oregón concediendo dos votos compromisarios para Hayes y uno para Tilden fue impugnado por los republicanos.⁴⁴⁰ En un escrito firmado por los senadores John B. Mitchell y A. A. Sargent y por los miembros de la Cámara de Representantes William Lawrence, Horatio C. Burchard y James W. McDill se argumentaba que tales compromisarios no eran los legalmente electos según los procedimientos establecidos por la normativa electoral de Oregón, condición aquella que únicamente debía otorgarse a los compromisarios republicanos. La argumentación decisiva se contenía en el tercer punto del escrito: el gobernador Grover no había designado compromisarios a las tres personas que habían recibido el mayor número de votos, y, en consecuencia, reunían *ex lege* la condición de compromisarios legalmente electos.⁴⁴¹ Los demócratas, por su parte,

⁴³⁹ El texto de las impugnaciones se encuentra en *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 297-298.

⁴⁴⁰ Aunque se presentaron dos escritos de impugnación, ambos coinciden en lo esencial.

⁴⁴¹ «*Because it does not appear from the face of the certificate of La Fayette Grover, governor of the State of Oregon [...] that such certificate was issued by the governor to the three persons having the highest number of votes for electors for the State of Oregon, and were duly chosen and appointed by the said State, according to the laws thereof; but was issued by him to the persons whom he deemed to be eligible to said appointment, although one of such persons, E. A. Cronin, was not appointed thereto according to the laws of the State.*»

impugnaron el certificado enviado por los compromisarios republicanos en un escrito avalado por las firmas de los senadores James K. Kelly, Henry Cooper, Lewis V. Bogy, J. E. McDonald y J. W. Stevenson, así como por los miembros de la Cámara de Representantes David Dudley Field, J. R. Tucker, Lafayette Lane, G. A. Jenks, Ansel T. Walling, Hiester Clymer, P. D. Wigginton, E. F. Poppleton, John L. Vance, Frank H. Hurd y J. K. Luttrell. El mismo se amparaba en dos argumentos, uno formal (el certificado remitido por los compromisarios de Hayes no se expedía por las autoridades públicas competentes según las leyes del estado de Oregón, puesto que debía proceder del gobernador del estado con el refrendo del secretario de Estado) y otro de fondo (el compromisario Watts estaba incurso en causa de inelegibilidad según la Constitución, puesto que en el momento de celebrarse las elecciones ostentaba el cargo de *deputy postmaster* en la ciudad de La Fayette).

3.4.4.2. Debates jurídicos en las sesiones de la Electoral Commission

En este supuesto concreto, y al no ser objeto de discusión ni los resultados ni la actuación de la junta sino la del gobernador del estado, los términos del debate difirieron sustancialmente respecto de las precedentes deliberaciones en los asuntos de Florida y Luisiana.

Por los demócratas, el senador Kelly expuso las razones que, a su parecer, justificaban el proceder del gobernador Grover, cuya actuación consideró en todo momento ajustada a derecho. El razonamiento parte necesariamente de un hecho que no era objeto de discusión y que los republicanos aceptaban: el día 7 de noviembre de 1876 J. W. Watts ostentaba el cargo federal de *deputy postmaster* y que, de conformidad

con las previsiones de la Constitución de los Estados Unidos, quien ostentase un cargo federal era inelegible como compromisario. A partir de ahí, la argumentación se desglosa en tres puntos:

- 1) ¿Cuándo debe entenderse que Watts fue nombrado compromisario? ¿En la fecha de celebración de las elecciones, en la fecha en que se recuentan los votos o en la fecha en que se le remite el certificado estatal acreditativo de la condición de compromisario electo? Tal cuestión no es baladí, pues afecta de lleno al propio fondo del asunto debatido.⁴⁴² Por tanto, la cuestión radicaba en determinar el momento en que Watts adquirió su condición de compromisario para precisar si estaba incurso en causa que le inhabilitaba para ello. En este sentido, Kelly rechaza que la condición de compromisario se adquiriera con la remisión del correspondiente certificado en el momento del recuento de los votos. Por tanto, la fecha a tener en cuenta y en la cual la persona adquiere la condición de compromisario y, por ende, el momento para determinar si existe o no causa de inelegibilidad es la fecha de las elecciones, es decir, el 7 de noviembre de 1876, y en ese instante Watts aún ostentaba el cargo federal. Era, pues, inelegible sin que la renuncia ulterior a su empleo convalidase su elección.⁴⁴³

⁴⁴² «And here I may just as well as at any other time call attention to the marked distinction that exist between a person who is ineligible or incapable of being appointed and one who may hold the office. If a person may hold the office, he may be elected while he is under disqualifications and if he becomes qualified at the time holding it is sufficient.»

⁴⁴³ «There are two legislatures who have established this fact clearly beyond doubt that a person holding an office of profit or trust under the United States could not be an elector, and that a resignation of the office after the election did not make him qualified.»

- 2) En segundo lugar, y una vez desarrollado el punto anterior, debe considerarse qué ocurriría en este supuesto, lo cual, para el senador Kelly no ofrecía duda alguna pues, amparándose en precedentes de diversos estados, no puede concluirse más que cuando un compromisario está incurso en causa de inelegibilidad, es el compromisario que le sigue en número de votos el legalmente electo.
- 3) El último punto, realmente importante, era dilucidar si el gobernador había actuado correctamente al rechazar el nombramiento de Watts. En este sentido refuta las tesis republicanas tendentes a considerar que el gobernador no ostentaba potestad para ello, pues se trataba de un asunto que correspondía a la jurisdicción ordinaria.⁴⁴⁴ En consecuencia, si el gobernador de Oregon verificaba que un compromisario se encontraba incurso en causa de inelegibilidad, era motivo suficiente para justificar su actuación tendente a excluirle como tal.⁴⁴⁵

A continuación toma la palabra el senador Mitchell para defender las tesis republicanas. Tras un pomposo comienzo en el que incluso hace alguna referencia poética,⁴⁴⁶ inicia su refu-

⁴⁴⁴ «*There is nothing more fallacious. In every department of the government of the United States as well as in the government of the States, every officer, whether legislative, executive or judicial is compelled to exercise judgment in certain cases.*»

⁴⁴⁵ «*I contend that the governor of Oregon and the secretary of state are the persons to canvass the votes [...] they had evidence of the ineligibility of one of the candidates and they decided upon that point. They decided that that was sufficient to exclude him and therefore a certificate was given in the language that was read there, that the highest eligible candidates were Cartwright, Odell and Cronin.*»

⁴⁴⁶ «*So momentous are these in the effect of their decision, though not in point of solution, that to their final determination by this high tribunal the whole people of this nation, and may I not say of all the Christendom, are with bated breath looking forward with over-increasing and intense anxiety. The hopes, the fears, the aspirations of two great political parties,*

tación de las tesis demócratas. Comienza por rechazar la autoridad del gobernador para actuar como hizo.⁴⁴⁷ Según Mitchell, no es ya que la Constitución de los Estados Unidos no confería potestad o atribución alguna al gobernador del estado para que tomase decisión alguna acerca de la ineligibilidad de un compromisario, es que ni tan siquiera la propia normativa del estado de Oregón le apoderaba con tales atribuciones. En efecto, del examen de la legislación estatal se desprendía que las autoridades estatales únicamente debían limitarse constatar quiénes eran las personas que habían recibido el mayor número de votos sin gozar de potestad adicional alguna tendente a excluir a ninguno de los electos.

*I understand that is the duty of the secretary of the state,
and him alone under the laws of Oregon, to declare who is elected;*

each struggling for the control of the administration of a great government, have, on the faith of the right, the justice and the law upon which each bases its claim to the votes of certain disputed States, by common consent, by solemn legislative enactment, in which leading members of both political parties have voluntarily and earnestly joined, been submitted to the arbitrament of this dignified and honorable Commission». Mitchell no perdió ocasión de finalizar de idéntica manera, pues concluyó su intervención de manera absolutamente teatral: «Mr. President, I have faith in this Commission and in the justice of its final judgment. I feel that when the arduous and responsible labors of you and your honorable associates have ended, forty-five millions of people can raise their eyes to heaven and exclaim in the language of the gifted bard:

*Great God! We thank thee for this home,
This bounteous birth land of the free,
Where wanderers from afar may come
And breath the air of liberty.
She may her flowers untrampled spring,
Her harvest wave, her cities rise,
And yet, till Time shall fold his wing,
Remain earth's loveliest paradise».*

⁴⁴⁷ «I contend with perfect confidence in the integrity of our position that the governor of Oregon had no jurisdiction whatever to entertain or adjudicate upon the question of the alleged ineligibility of Watts, and that all his proceedings in that regard were ultra vires, void ab initio, affecting no interest, attaching to no subject-matter, and binding no one. If governor Grover possessed any such power he must derive it from one of four sources: the Constitution of the United States, the laws of Congress, the constitution of Oregon or the statutes of the State.»

*in other words, to declare who has received the highest number of votes; and when that declaration is made, then the electors are appointed by the State in the manner directed by the Legislature thereof, and beyond that this tribunal cannot go.*⁴⁴⁸

El gobernador, por tanto, había actuado ilegalmente al atribuirse una potestad que ni la Constitución, ni las leyes de Oregón le conferían y, por consiguiente, su actuación era nula al ser el secretario de Estado de Oregón el único competente para determinar quiénes habían sido los compromisarios legalmente electos.

Tales eran, en síntesis, los argumentos esgrimidos por las partes en disputa y que, tras ser desarrollados por los letrados, debían ser resueltos por la comisión.

3.4.4.3. Decisión final

A las diez y media de la tarde del día 23 de febrero de 1877 la Comisión inicia sus sesiones, con la ausencia por enfermedad de Thurman,⁴⁴⁹ para tomar la decisión en cuanto a los votos de Oregón. Exponemos, a continuación, el parecer de los jueces integrantes de la comisión (a excepción del presidente Nathan Clifford, pues, por razones que no constan, en

⁴⁴⁸ Mitchell refuerza aún más sus tesis: «*Does the governor appoint electors? By no manner of means. It is the State that appoint electors in such manner as its Legislature has directed. It has directed that the manner in which they shall be appointed is by a plurality of the votes of the people. And furthermore that the person receiving the highest number of votes shall, in the language of the statute, be deemed elected. The governor has nothing whatever to do with the appointment of electors nor yet with the question of determining who have been appointed. The appointment is by the people, the legal voters. The question as to whom they have appointed is, under the law, to be determined by the secretary of state.*»

⁴⁴⁹ Desde el domicilio de Thurman se remitió una misiva dirigida a Bayard, otro de sus colegas en la Comisión. El texto de la carta era el siguiente: «*Dear Sir: Mr. Thurman has been in bed all morning and is now suffering from such intense pain that it will be impossible for him to meet the commission today. Respectfully M. A. Thurman.*»

los anexos a las actas de la comisión únicamente se refleja su opinión en el caso de Florida y no en los tres restantes, aunque su voto se añadió al de Field):

A) *Stephen Field: Watts es inelegible y el gobernador actuó correctamente*⁴⁵⁰

Como era de esperar, Field se alineó con las tesis demócratas. Parte del hecho constatado e indiscutido de que Odell, Watts y Cartwright eran quienes habían logrado el mayor número de votos en las elecciones celebradas el día 6 de noviembre de 1876, pero considera igualmente cierta e indubitada la existencia de una causa de inelegibilidad en Watts. Todo quedaba, pues, reducido al problema de si la actuación del gobernador Grover se ajustaba o no a derecho, siendo Field de la opinión de que la actuación de este fue absolutamente correcta, puesto que la normativa del estado de Oregón establecía que las vacantes que se produzcan en el colegio electoral deben cubrirse entre los restantes miembros del organismo. Para justificar el proceder de Grover, Field realiza una sutil y habilísima distinción jurídica: no puede equipararse el presente supuesto (la no cobertura de un puesto) a una vacante, pues «*there could be no filling of a vacancy if no vacancy within the meaning of the statute existed.*» Por tanto, al no existir vacante, no puede aplicarse la normativa prevista para estos supuestos, razones por las cuales Grover no había infringido el ordenamiento jurídico estatal vigente.⁴⁵¹

⁴⁵⁰ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 249-251.

⁴⁵¹ «*In his action in this respect he followed the rule which obtains in England, where if the voters having knowledge of the ineligibility of a candidate persist in voting him, their votes are considered as thrown away and the eligible candidate receiving the next higher number of votes is declared elected. There are numerous decisions by courts of the highest character in this country to the same effect.*»

B) *William Strong: Watts es inelegible, pero el gobernador actuó ilegalmente*⁴⁵²

Strong insiste en su parecer ya expuesto en el asunto de Florida: remitirse a las autoridades competentes según la legislación de cada estado para la práctica del recuento del voto. En el caso de Oregón tal facultad radica no en un órgano colegiado, sino en el secretario de Estado, quien ha de verificar el recuento en presencia del gobernador, pero sin que el ordenamiento jurídico le atribuya a este otra facultad que la de estar presente en el recuento.⁴⁵³ Por ello en esta ocasión, y a diferencia de lo acaecido en Florida, el certificado estatal del gobernador se ha demostrado erróneo al apartarse de lo establecido por el órgano legalmente competente para el recuento de votos.

En lo relativo a la causa de inelegibilidad de Watts, si bien la misma existía el día 7 de noviembre de 1876, no podía considerarse que existiese el día 14 de dicho mes, cuando el interesado ya había renunciado al cargo federal que ostentaba. Discrepa de Field (cuyas tesis califica de «estrictamente técnicas»), y considera que es manifiesta la existencia de una vacante, por lo que esta debía ser cubierta por los dos compromisarios restantes.⁴⁵⁴ Todas esas razones conllevan a finalizar que los compromisarios republicanos eran los legalmente electos.

⁴⁵² *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 254-255.

⁴⁵³ «*The provision plainly makes the secretary of state the sole canvassing officer. It may not be proper to call him a board, but he is the sole officer designated and appointed by the law to make the canvass of the election. It is true that he must make the canvass in the presence of the governor, but no duties in regard to the canvass are assigned to the governor.*»

⁴⁵⁴ «*Concede, for the sake of the argument, he was ineligible on the 7th of November, and, therefore, was not elected, though he received a higher number of votes than any other competitor, then there were two chosen, and the college consisting of three was not full. One elector was wanting. There was a vacancy, and that vacancy was filled on December 6 by the action of the two electors who were chosen, who then appointed Watts to fill it.*»

C) *Samuel Miller: Watts es inelegible, pero el gobernador actuó ilegalmente*⁴⁵⁵

Miller comienza precisando que la solución al presente asunto debe basarse en los mismos principios que en los casos anteriores. En cuanto a la actuación del gobernador, argumenta que ni la Constitución, ni las leyes federales ni las del propio estado de Oregón facultan al gobernador para declarar inelegible a un compromisario, por lo que su autoridad a estos efectos es la misma que posee cualquier ciudadano del estado.⁴⁵⁶ Coincide con su colega Strong en que, a diferencia de Florida, las leyes de Oregón depositan únicamente en el secretario de Estado el recuento de votos y el entregar a los compromisarios el certificado de nombramiento, siendo la única misión que se atribuye al gobernador la de estar presente en el desarrollo del proceso, sin facultad decisoria alguna. Sobre tales premisas concluye que debiera haberse remitido el certificado a Watts, puesto que Cronin jamás fue elegido.

D) *Joseph Bradley: Watts es inelegible, pero el gobernador actuó ilegalmente*⁴⁵⁷

Inicia su exposición coincidiendo con Miller y Strong en el sentido de que en Oregón no existe propiamente un organismo colegiado encargado del recuento de votos, sino que dicha tarea se atribuye al secretario de Estado, quien deberá llevarla a cabo en presencia del gobernador. En este caso, cuando el se-

⁴⁵⁵ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 258-259.

⁴⁵⁶ «I look in vain in the Constitution of the United States, in the laws of Congress and in the constitution and laws of Oregon for any support of such authority in the governor. In the absence of such authority in one or the other of these places, the action of the governor in that respect was the merest assumption of power without any legal right [...] governor Grover had no more right to determine the ineligibility of an elector than any other citizen in the State of Oregon.»

⁴⁵⁷ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 264-266.

cretario de Estado, el 4 de diciembre de 1876, declara electos a Odell, Watts y Cartwright no hace más que cumplir con su deber, para el cual ostenta una potestad reglada y en modo alguno discrecional.⁴⁵⁸ La actuación del gobernador, por tanto, fue a su juicio, un claro acto de usurpación de funciones,⁴⁵⁹ dado que la potestad para cubrir la vacante existente correspondía a los dos compromisarios restantes, que procedieron a tal efecto el día 6 de diciembre, por lo que era evidente que los tres compromisarios republicanos eran los legalmente electos.⁴⁶⁰

A las dos y veinte, cuando todos los integrantes del organismo han expuesto su criterio final sobre el asunto, se acuerda por mayoría de 13 votos (con la única discrepancia de Oliver Morton) que los senadores Bayard y Frelinghuysen se desplacen a la residencia de Thurman a fin de verificar si este autoriza a que la comisión se reúna en su domicilio para recoger su voto en la cuestión debatida. Como Thurman mostró su conformidad, a las cuatro menos diez de la tarde la comisión se traslada al domicilio particular de Thurman, sito en Fourteenth Street, siendo precisamente allí donde se toma la decisión final en el asunto.

Hasta el último momento, Stephen Field trató infructuosamente de impedir que los tres votos compromisarios de Oregon fuesen para Hayes; de hecho, llegó a presentar en tal sentido hasta tres mociones que fueron sucesivamente derrotadas. Una moción de Edmunds en el sentido de considerar que la lista remitida con la autoridad de Grover no contiene ni el certificado

⁴⁵⁸ «In making this certificate he was performing a mere ministerial duty. It was his clear duty to insert in his certificate the names of the persons whom the law declared to be elected. Doing otherwise was not only a violation of his duty, but he made a statement untrue in fact.»

⁴⁵⁹ «A clear act of usurpation. It was tempering with an election which the law had declared to be closed and ascertained.»

⁴⁶⁰ «I cannot avoid the conclusion that they [Odell, Cartwright] together with Watts were the true electors for the State of Oregon on the 6th day of December and their votes ought to be counted.»

ni los votos («*Resolved: That the certificate signed by E. A. Cronin, J. N. T. Miller and John Parker, purporting to cast the electoral votes of the State of Oregon, does not contain nor certify the constitutional votes to which said State is entitled*») consigue ratificarse por unanimidad. Finalmente, logró aprobarse por la consabida mayoría de ocho votos a favor (los de Bradley, Edmunds, Frelinghuysen, Garfield, Hoar, Miller, Morton y Strong) una moción presentada por Edmunds declarando como debidamente electos a los tres compromisarios republicanos:

Resolved. That W. H. Odell, John C. Cartwright and John W. Watts, the person named as electors in certificate N.º 1 were the lawful electors of the State of Oregon, and that their votes are the votes provided for by the Constitution of the United States, and should be counted for President and Vice-President of the United States.

No quedaba ya más que redactar el informe final que la comisión debía remitir a ambas Cámaras legislativas. El núcleo central del mismo, elaborado igualmente por Edmunds, contenía el siguiente razonamiento:

The Commission has by a majority of votes also decided, and does hereby decide and report, that the three persons first above named [Odell, Cartwright y Watts] were duly appointed electors in and by the State of Oregon.

That the refusal or failure of the governor of Oregon in giving to E. A. Cronin a certificate of his election though he received a thousand votes less than Watts on the ground that the latter was ineligible, was without authority of law and, is therefore void.

That although the evidence shows that Watts was a postmaster at the time of his election, the fact is rendered immaterial by his

resignation both as a postmaster and elector, and his subsequent appointment, to fill the vacancy so made, by the electoral college.

A las cinco de la tarde se levanta la sesión. Aún quedando pendiente la cuestión de los votos compromisarios de Carolina del Sur, no cabía ya duda alguna de que el próximo presidente de los Estados Unidos sería el republicano Rutherford Bitchard Hayes.

3.4.5. VOTOS COMPROMISARIOS DE CAROLINA DEL SUR (SESIONES DEL 26 Y 27 DE FEBRERO DE 1877)⁴⁶¹

El último de los estados cuyos votos compromisarios se disputaban era el de Carolina del Sur,⁴⁶² aunque ya las partes consideraban este asunto como una cuestión de mero trámite (de hecho, en contraste con las intervenciones de los casos de Florida, Luisiana y Oregón –donde cada uno de ellos ocupa alrededor de sesenta páginas– las intervenciones en relación con este caso apenas se extienden más allá de doce páginas de las actas, de las cuales además las primeras se limitan a cuestiones estrictamente burocráticas y las últimas a reflejar las votaciones finales). Es necesario destacar que uno de los miembros de la comisión, Thurman (recordemos que para recoger su voto en el asunto de Oregón todos los integrantes del organismo se habían trasladado a su domicilio) renunció a su cargo por motivos de salud⁴⁶³ y, en consecuencia, debía procederse a la cobertura

⁴⁶¹ *Proceedings of the Commission*, o. cit., pp. 179-193.

⁴⁶² En inglés, el estado tiene como inicial la letra ese (South Caroline).

⁴⁶³ Thurman remitió una misiva al presidente del organismo, Nathan Clifford, en los siguientes términos: «*Sir: Continued ill health has confined me to my room and for several days past to my bed, from which, by order of my physician, I cannot be removed today; nor have I any assurance that I will be able to get out for some days to come. Under these circumstances of physical disability I am compelled to notify the Commission that I am not able to attend its session, and ask that the vacancy caused by my absence may be filled as provided by law. Yours respectfully, A. G. Thurman*».

de la vacante. Se aprobó por unanimidad una resolución para comunicar al Senado la renuncia de Thurman, siendo designado como sustituto Francis Kernan, a quien le fue tomado juramento el día 26.

Las partes agotan todos sus turnos de intervención el día 27 de febrero. Los demócratas añadieron a las consabidas alegaciones la presencia de tropas federales en el estado, con el efecto disuasorio que ello habría tenido respecto a potenciales votantes demócratas (aunque, lógicamente, nada hablaron de la campaña de violencia sobre la población de color y sobre los votantes republicanos). Quizá lo más destacado sea la intervención de Black, en la que, quizá ya abatido por la resignación, manifestó su desencanto con un ataque directo y frontal a la comisión:

*I am so fallen from the proud estate of a free citizen, you have so abject me, that I am fit for nothing on earth but to represent the poor, defrauded, broken-down democracy. And because I suffer more, they think me more good for nothing than the rest, and... send me out on this forlorn hope [...] If... the law you have made for this occasion shall be the law for all occasions, we can never expect such a thing as an honest election again... You need only to know what kind of scoundrels constitute the returning boards, and how much it will take to buy them. But I think even that will end some day. At present you have us down under your feet... But... wait a little while. The waters of truth will rise gradually... Wait: retribution will come in due time. Justice travels with a leaden heel but strikes with an iron hand...*⁴⁶⁴

Los miembros de la comisión decidieron debatir y fallar el asunto ese mismo día veintisiete y, por la ya tradicional ma-

⁴⁶⁴ Bradley señaló, «Black – Made an insolent speech». Garfield escribió en su diario, «a bitter and insulting speech of ¾ of an hour». Charles Fairman, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 118.

yoría de ocho votos frente a siete se acordó que en relación a Carolina del Sur los compromisarios legalmente electos eran los republicanos. La redacción del informe final corrió a cargo de Samuel Miller, siendo el núcleo esencial de la decisión el siguiente:

The brief ground of this decision is that it appears upon such evidence as by the Constitution and the law named in said act of Congress is competent and pertinent to the consideration of the subject that the before mentioned electors appear to have been lawfully appointed such electors of President and Vice-President of the United States for the term beginning March 4 A. D. 1877 of the State of South Caroline, and that they voted as such at the time and in the manner provided for by the Constitution of the United States and the law.

And the Commission, as further grounds for their decision, are of opinion that the failure of the Legislature to provide a system for the registration of persons entitled to vote does not render nugatory all elections held under laws otherwise sufficient, though it may be the duty of the Legislature to enact such a law. If it were otherwise all government in the State is an usurpation, its officers without authority and the social compact is that State is at an end.

That this Commission must take notice that there is a government in South Caroline republican in form since its constitution provides for such government, and it is, and was on the day of appointing electors so recognized by the executive and by both branches of the legislative departments of the Government of the United States.

That so far as this commission can take notice of the presence of the soldiers of the United States in the State of South Caroline during the election it appears that they were placed there by

the President of the United States to suppress insurrection at the request of the proper authority of the State.

La presidencia estaba ya, pues, de iure, en manos del candidato republicano Rutherford Bitchard Hayes.

3.5. Otros aspectos relacionados con la disputa Hayes-Tilden

3.5.1. NEGOCIACIONES POLÍTICAS ENTRE REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS SUREÑOS: EL COMPROMISO DE 1877⁴⁶⁵

La Electoral Commission había decidido el asunto de iure, mas de facto el asunto distaba aún de haber finalizado políticamente, pues si Hayes deseaba una toma de posesión tranquila debía garantizarse, cuando menos, el benévolo silencio de los demócratas. La Cámara de Representantes aprobó una moción declarando a Tilden presidente legítimamente elegido por los ciudadanos. Los demócratas, que previamente habían caldeado el ambiente con consignas como «*Tilden or blood*» se vieron finalmente abocados al silencio, entre otras cosas porque el candidato demócrata se negó a realizar manifestación o reclamación alguna y los demócratas sureños rehusaron plantar batalla a favor de Tilden al lograr un satisfactorio acuerdo político con Hayes.

Ya desde el planteamiento del conflicto en los estados de Florida, Carolina del Sur y Luisiana, las directivas de ambos partidos habían entablado acciones políticas en defensa de los intereses de sus candidatos. Sin embargo el Partido Demócrata se caracterizó, como ya hemos indicado, por la extraña parálisis de su aspirante. James A. Garfield manifestaba en una carta a

⁴⁶⁵ Sobre este aspecto sigue siendo de consulta obligada la obra de C. VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit.; una interpretación distinta en Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit.

Hayes que los demócratas se encontraban sin liderazgo e iniciativa y, en efecto, no deja de sorprender la extraña actitud de Tilden. Quienes fueron a su encuentro en diciembre de 1876 para consultarle acerca de la actitud que debería tomar el partido manifestaron la extrañeza por la inactividad del candidato demócrata para actuar en defensa de sus propios intereses.⁴⁶⁶ Resultaron igualmente infructuosos los esfuerzos del senador por Georgia, John B. Gordon y del miembro de la Cámara de Representantes Henry Watterson por empujar a Tilden a la acción. Incluso Abram Hewitt dirigió a su líder una solicitud para que emitiese un mensaje llamando a los simpatizantes a manifestarse pacíficamente «en todas las ciudades, pueblos y aldeas», pero Tilden rehúsa.

Los dirigentes republicanos se mostraron mucho más avisados y, ya en fecha tan temprana como diciembre de 1876 inician los contactos con líderes demócratas sureños, quienes según Roy Morris, «*were no longer convinced –if they ever had been– that Tilden had won the election on November 7*».⁴⁶⁷ Esas negociaciones, tuvieron lugar, pero estuvieron presididas por un total secretismo, como muy bien indica el profesor Van Woodward en uno de los más lúcidos ensayos sobre la materia.⁴⁶⁸ Buena prueba de esos contactos la tenemos en el diario

⁴⁶⁶ «*They inevitably come away from the meetings puzzled, frustrated and angry at the governor's unwillingness to act in his own behalf. "Oh, Tilden won't do anything; he's cold as a damn clam", an unidentified legislator told to the New York Tribune*», Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 205; Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 147-148.

⁴⁶⁷ Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., p. 207. Hubiera sido deseable que Morris nos revelara las razones por las cuales los demócratas sureños no estaban convencidos (si es que alguna vez lo estuvieron) de la victoria de Tilden.

⁴⁶⁸ «*The diplomacy of 1877 might be described as secret covenants privately arrived at. The terms were never officially published, for neither party to the contract could afford to endorse all of the agreements publicly. Nor did some of the more important articles materialize as events. In some cases they proved impossible of fulfilment, and in other promises were broken or forgotten. Remarkably few leaders were fully informed of the compromise proceedings, and those who were kept their counsel in years later*», Van WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 4-5.

personal de Hayes, quien en su entrada del 1 de diciembre de 1876 refleja lo siguiente:

December 1, 1876. -Colonel Roberts of [the] New Orleans Times wanted an interview with me. Had lunch at Comly's. After lunch he said he called on me to give me the views of Lamar, of Mississippi, General Walthall, ditto, Wade Hampton, of South Carolina, and probably [General] Gordon, of Georgia. "You will be President" [he said]. "We will not make trouble. We want peace. We want the color line abolished. We will not oppose an Administration which will favor an honest administration and honest officers in the South. We will favor measures to secure the colored people all of their rights, We may not, and probably will not, leave the party of opposition, but such an Administration as you can have, we will support as men of the opposite party can. We want nothing of you in the way of promise or pledge".

*This was the substance. I replied by saying I was gratified to know it. That my Letter of Acceptance covered the whole ground; that it meant all it said and all that it implied. This was the substance. In case of my election there will be further conference, and I hope for good results.*⁴⁶⁹

Ese contacto inicial más bien respondía a un deseo de los demócratas sureños de mantener abiertas todas las opciones posibles, dado que, como bien indica Polakoff, para los sureños la importancia de la victoria era tal que una derrota se consideraba como intolerable, y ante una eventual presidencia

⁴⁶⁹ *Diary and letters of Rutherford B. Hayes*, volume III, capítulo xxxiv, en <http://www.ohiohistory.org/onlinedoc/hayes/chapterxxxiv.html>. No obstante, este contacto inicial debe tenerse en cuenta únicamente como una aproximación inicial. VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., p. 25; Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, pp. 244-245.

republicana debía tenderse a salvar todo lo posible en cuanto a sus aspiraciones políticas.⁴⁷⁰

Así pues, existían contactos tempranos pero que se prolongaron durante todo el mes de diciembre entre los líderes republicanos (como vemos a su más alto nivel) y los representantes de los estados sureños en aras de lograr un compromiso. Los interlocutores principales de las conversaciones fueron William Henry Smith por parte republicana y a Andrew Kellar como representante oficioso del ala sureña del Partido Demócrata.⁴⁷¹ Sin embargo, no fueron protagonistas exclusivos de la negociación, pues, a mediados de ese mes, el demócrata Casey Young, miembro de la Cámara de Representantes, indica a su colega republicano William Williams que quizá fuese aconsejable que Garfield pronunciase un discurso enunciando las líneas maestras de la política que Hayes seguiría en relación a los estados del sur, pues si la misma resultaba aceptable existiría un bloque de cincuenta demócratas sureños que obstaculizaría todo intento de la Cámara de Representantes de impedir la toma de posesión de Hayes.⁴⁷² No obstante, tales negociaciones debieron llegar a oídos demócratas pues el día 13 de diciembre de 1876 el periodista A. M. Gibson informó a Charles Dana, íntimo amigo de Tilden y editor del diario prodemócrata *New York Sun* de la posible defección de los demócratas sureños, información que este se apresuró a facilitar a Tilden mediante carta fechada el día 15 de diciembre, lo que provocó que se celebrase una reunión en

⁴⁷⁰ «*The Democrats of the south had attached so much importance to winning the election of 1876 that the prospect of a defeat was intolerable. Were the loss of the presidency to appear likely, the southerners could be expected to salvage as much as they were able from the wreckage of their original hopes*», Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 241. Para este autor la política de Hayes respondía a un deseo de reorientar la política republicana en los estados del sur y crear una fuerza política desvinculada de las políticas de reconstrucción, que a esas alturas resultaban inviables.

⁴⁷¹ VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 28-29.

⁴⁷² Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 246-47.

casa de Hewitt a la que fueron convocados los representantes de los estados del sur, y que finalizó sin resultado práctico alguno.⁴⁷³

Los contactos se enfriaron debido a un incidente ocurrido el día 22 de febrero de 1877, cuando el *Ohio State Journal*, diario del que era editor James Comly, amigo personal de Hayes, atacó con dureza a la élite blanca del estado de Luisiana. Pese a que el editor se encontraba enfermo y Hayes no tenía conocimiento alguno sobre el particular, tal circunstancia provocó un retraimiento de los demócratas sureños.⁴⁷⁴ No obstante, esos contactos se reanudaron cuando la Electoral Commission finalizaba sus trabajos y era ya un hecho notorio que los votos compromisarios en disputa habían ido a parar a manos de Hayes. No obstante en esta ocasión las reuniones iban a tener carácter público. Así, el día 26 de febrero de 1877 mientras Charles Forster, miembro de la Cámara de Representantes, manifestaba que si Hayes era investido presidente «*the flag should wave over states, not provinces*» en Washington D. C. tuvieron lugar varias reuniones entre representantes de Hayes (Stanley Matthews, John Sherman, James Garfield y William Dennison) y una delegación de demócratas sureños (Henry Watterson de Carolina del Sur, así como el senador por Georgia John B. Gordon), cuyo resultado fue la emisión de la siguiente proclama:

GENTLEMEN

Referring to the conversation with you yesterday, in which Governor Hayes's policy as to the status of certain states was discussed, we desire to say that we can assure you in the strongest

⁴⁷³ Van WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 33-34. El día 16 de diciembre de 1876, el miembro de la Cámara de Representantes R. B. Bradford informaba igualmente a Tilden de la posible defección de los representantes de los estados del sur. Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., pp. 241-242.

⁴⁷⁴ Van WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 186 y ss.

possible manner of our great desire to have him adopt such a policy as will give to the people of the states of South Caroline and Louisiana the right to control their own affairs in their own way, subject only to the Constitution of the United States and the laws made in pursuance thereof, and to say further, that from an acquaintance with and knowledge of Governor Hayes and his views, we have the most complete confidence that such will be the policy of his administration.

Respectfully
Stanley Matthews
*Charles Forster*⁴⁷⁵

Los republicanos se habían garantizado ya la benévola actitud de los demócratas sureños. Estaba, pues, asegurado que la investidura de Hayes transcurriría pacíficamente y sin complicaciones.⁴⁷⁶

Si bien las reuniones entre los representantes de Hayes y los demócratas sureños tuvieron lugar y los acuerdos a los que se llegaron están hoy en día universalmente aceptados, se plantea históricamente si las mismas (es decir, lo que se conoce como «el compromiso de 1877») fueron las que zanjaron definitivamente la contienda presidencial. En sentido afirmativo se encuentra Van Woodward, que hace de ello la tesis central de su ensayo *Reunion and reaction*, tantas veces citado en el presente apartado. Por el contrario, Keith Ian Polakoff, sin discutir los hechos aducidos por Van Woodward —hechos que acepta expresamente al inicio de su estudio—, difiere de la interpre-

⁴⁷⁵ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 177-178.

⁴⁷⁶ «In a word, Southern Democrats, even more than Northern, had accepted national industrialization and wanted their cut of it. And the party of Lincoln was ready to call of the struggle for equality [...] So the revolution ended, and the transition to conservative rule took place. It was not violent on the national level. It was very much so within the states», Bernard A. WEISBERGER, *The stolen election*, o. cit., p. 20.

tación de los mismos, toda vez que para Polakoff el auténtico compromiso de 1877 fue la creación de la Electoral Commission, basando su afirmación en el hecho de que en realidad el candidato demócrata había renunciado en privado a presentar batalla, pues Tilden dio por perdidas definitivamente sus opciones de ser el inquilino de la Casa Blanca tras la resolución de la Electoral Commission en relación a los votos compromisarios de Florida.⁴⁷⁷ Sea como fuere, lo cierto es que los republicanos no tenían por qué conocer este abatimiento anímico de Tilden, y es comprensible que optaran por asegurarse la pacífica investidura de Hayes, merced al acuerdo logrado con los demócratas sureños, quienes, entre otras cosas, se verían no solo libres de las tropas federales que los republicanos se comprometían a retirar (poniendo definitivamente fin al periodo de reconstrucción) sino que incluso obtendrían al menos un puesto en el gabinete de Hayes (quien cumplió su promesa nombrando *postmaster general* a David M. Key, de Tennessee). De igual manera, mediante ese acuerdo, los republicanos se comprometían a ayudar a la industrialización de los estados del sur y, sobre todo y por encima de todo, a la aprobación del *Texas Pacific Railroad Bill* que posibilitase la construcción del ferrocarril transcontinental, lo que suponía la culminación de lo que se conoce como «plan Scott».⁴⁷⁸

⁴⁷⁷ «The immediate effect of the Florida decisions was to dissolve the Democratic party into a leaderless mass. Tilden, who had faded into the background when the electoral commission bill became public, privately gave up. On the evening the commission voted not to investigate the Florida returns, he went for a long stroll with John Bigelow around Gramercy Park and “discussed the pleasant places in Europe for him to visit next summer. He inclined to spend most of his time in England” [...] Tilden might battle to the end, but his “courage” was composed of three quarters resignation and only one quarter perseverance, for he fully understood that the end was coming», *Politics of inertia*, o. cit., p. 290. En esa misma página, Polakoff aduce el testimonio de Jeremiah Black, uno de los defensores de Tilden en la Electoral Commission: «God damn them, they will beat us and elect Hayes, but we shall give them all the trouble we can».

⁴⁷⁸ VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., p. 208. Sobre la forja y el desarrollo del «plan Scott», véanse las pp. 101-120 de dicha obra.

3.5.2. CAMPAÑA CONTRA EL JUEZ JOSEPH BRADLEY

Tras conocerse la decisión final de la Electoral Commission en lo referente a los votos compromisarios de Florida y, sobre todo, una vez investido presidente el candidato republicano Rutherford Bitchard Hayes, el juez Joseph Bradley sufrió una campaña de acoso y derribo por parte de la prensa demócrata, especialmente por el *New York Sun*, que creó una imagen peyorativa del magistrado al que se acusó de haber mudado su criterio debido a presiones de magnates ferroviarios y prominentes miembros del Partido Republicano. Aunque ya en su día, tanto Van Woodward como Polakoff, eran bastante escépticos en cuanto a la credibilidad de los argumentos esgrimidos por los demócratas contra el magistrado, en 1988 todas las acusaciones contra Bradley fueron desmontadas con carácter definitivo en el magnífico e irrefutable estudio de Charles Fairman,⁴⁷⁹ quien logró demostrar que todas las insidias vertidas contra el magistrado no solo carecían de base probatoria alguna, sino que se sustentaban en testimonios indirectos de nula o dudosísima fiabilidad. Pese a ello, aún en fecha tan reciente como 2004 algunos autores prefieren acudir a los viejos y caducos tópicos; por ejemplo, Andrew Gumbel no se refiere únicamente a Bradley como «*el hombre que negó a Tilden la presidencia entregándosela a su oponente republicano*», sino que, de una manera bastante cómica pretende ridiculizar y denostar la postura de

⁴⁷⁹ El autor de estas líneas coincide punto por punto con la opinión de Michael F. Holt: «*I far prefer Fairman's account which vigorously defends Bradley's judicial integrity and utterly demolishes Nevins's skewed pro-democratic account*», *By one vote*, o. cit., p. 276 (en nota 36 del capítulo 10). El mismo autor, en el resumen de fuentes que hace al final del libro, y en referencia a la obra de Fairman, indica que «*Although this book details the creation of the electoral commission and the role of all the Supreme Court justices on it, his primary agenda, wholly successful in my opinion, is to defend the actions of the much abused Joseph R. Bradley and to explode the partisan myths that emerged about his role*». Quizá por ello todos los autores que denigran a Bradley ni tan siquiera se hacen eco de la obra de Fairman.

Bradley nada menos que a través de ataques a la reputación de William Rehnquist como presidente del Tribunal Supremo y a uno de los cinco jueces que en el año 2000 integró la mayoría en el caso *Bush v. Gore*,⁴⁸⁰ y ello pese al hecho (que, por cierto, tanto Gumbel como Morris silencian) de que Stephen Breyer, uno de los magistrados que en el año 2000 abogaba por continuar el recuento manual de las papeletas electorales en el estado de Florida (como veremos en el próximo capítulo), en su voto particular discrepante con el parecer mayoritario del Tribunal Supremo, al hacerse eco de la campaña contra Bradley reco-

⁴⁸⁰ Andrew Gumbel, *Steal this vote, Dirty elections and the rotten history of democracy in America*, o. cit., pp. 104-107 y 110. Entre otras lindezas, Gumbel manifiesta que «*Not only was justice Bradley correct in upholding Hayes victory; he was actually demonstrating an admirable impartiality [...] Rehnquist concludes. Again, his logic is deeply troubling – better to validate fraud, so long as it is officially sanctioned than to denounce it.* Bien, admitamos y aceptemos que Gumbel no simpatice con Rehnquist (lo deja bien claro) pero ello en modo alguno invalida la defensa que este hace de Bradley, heredada de la que hizo en su momento Charles Fairman (autor al que, por cierto, Gumbel ni menciona pese a ser citado expresamente por Rehnquist). Le ofrecemos aquí a tan crítico autor dos opiniones adicionales que avalan la correcta actuación de Joseph Bradley. La primera emana de Eric Foner, y la vierte precisamente en una reseña al libro de Rehnquist sobre el contencioso presidencial de 1876, libro al que, por cierto, Foner no deja en muy buen lugar. Pues bien, en dicha reseña, Foner manifiesta textualmente: «*Justice Bradley concluded that the Commission could not possibly conduct its own detailed inquiry into local election returns and thus had no choice but to accept the findings of local election boards (all Republican) as to who had carried their states. Bradley’s position, as Rehnquist argues, was certainly “reasonable” [...] Bradley seems to have tried to rise above the immediate political situation*» (Eric FONER, reseña al libro «Centennial Crisis: the disputed election of 1876», en *The Nation*, 29 marzo de 2004); es decir, justo lo contrario de lo que el buen Gumbel sostiene. La segunda opinión es la del jurista norteamericano Bernard Schwartz, adversario ideológico de Rehnquist hasta el punto de ser el autor de uno de los más duros ataques jurídicos al juez en *Turning back the legal clock: the new right and the constitution*. Pues bien, al referirse a las tesis de Bradley, Schwartz concluye: «*This position appears valid and was, in fact, the one ultimately adopted when Congress, a decade later, finally provided a permanent procedure for counting the electoral vote*» (*History of the Supreme Court*, o. cit., p. 172). Ni Foner ni Schwarz son ideológicamente próximos a Rehnquist, y ambos concluyen que la posición jurídica de Bradley era jurídicamente más que razonable. Por cierto, Gumbel también omite toda mención a que las tesis de Bradley las habían sostenido los propios demócratas en los debates legislativos a la hora de modificar la *joint rule 22*, como ya hemos indicado anteriormente.

noció que este había obrado de manera honesta e imparcial.⁴⁸¹ Por cierto, que ninguno de los críticos de Bradley osan cuestionar la «imparcialidad» de Stephen Field, quien no solo apoyaba abiertamente la causa demócrata *dentro y fuera de la comisión*, sino que incluso incurrió en una absoluta falta de dignidad al permitir que su propio hermano, David Dudley Field, fuese uno de quienes defendiese la causa demócrata en el asunto de Florida. Por un mínimo sentido del decoro Field debiera bien haberse abstenido, o al menos aconsejar a su hermano que renunciase a defender la causa demócrata en la Electoral Commission.⁴⁸² Nada de esto parece afectar a los que cuestionan la reputación de Bradley, pero claro, para estos el juez Field defendía la causa «correcta», «justa» o «legítima», y se podían disculpar sus liviandades, mientras que a Bradley, persona de cuya integridad personal nadie dudaba, debía medírsele con un rasero distinto. En este sentido, William Rehnquist, que sufrió igualmente una campaña de desprestigio al ser el presidente del Tribunal Supremo que hubo de decidir el caso *Bush v. Gore*, dedica buena parte del capítulo noveno de su libro a relatar las imputaciones contra Bradley, que el autor tacha de inusuales

⁴⁸¹ «Justice Bradley immediately became the subject of vociferous attacks. Bradley was accused of accepting bribes, of being captured by railroad interests, and of an eleventh-hour change in position after a night in which his house was 'surrounded by the carriages' of republican partisans and railroad officials. C. Woodward, *Reunion and reaction 159-160* (1966). Many years later, Professor Bikel concluded that Bradley was honest and impartial. He thought that 'the great question' for Bradley was, in fact, whether Congress was entitled to go behind election returns or had to accept them as certified by state authorities, an issue of principle. *The Least Dangerous Branch* (1962). Nonetheless, Bickel points out, the legal question upon which Justice Bradley's decision turned was not very important in the contemporaneous political contest. He says that 'in the circumstances the issue of principle was trivial, it was overwhelmed by all that hung in the balance, and it should not have been decisive', *Bush v. Gore*, 531 US 98 (2000) (J. Breyer, dissenting).

⁴⁸² La parcialidad de Field llegó al extremo de enorgullecerse de la labor desplegada por su hermano en favor de Tilden, como se demuestra en la carta que Stephen Field dirigió al juez Matthew Deady de Oregón y citada en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 132.

e injustas,⁴⁸³ así como a rebatir gran parte de las acusaciones contra el mismo, si bien es cierto que muchas de las tesis que sostiene las hereda de la reivindicación de Bradley que Charles Fairman había realizado en su día. Veamos cómo se inició históricamente el ataque a la integridad del juez Bradley.

Todo comienza el día 11 de febrero de 1877 cuando, al conocerse ya la decisión respecto a los votos compromisarios de Florida, el *New York Sun* manifestaba que hasta esos momentos no existían métodos para convertir el fraude en realidad, pero que Bradley había tenido la habilidad de conseguirlo.⁴⁸⁴ Tras esa acusación, insidias de similar calibre se fueron repitiendo en la prensa demócrata día sí y día también, llegando a su punto culminante el día 4 de agosto de 1877, cuando el mismo *New York Sun* publica el siguiente artículo donde se imputa ya directamente a Bradley la mutación, por presiones externas, de su criterio, en relación a los votos compromisarios de Florida, la noche anterior a la lectura en público de su tesis en la Electoral Commission:

AN INTERESTING HISTORICAL FACT

After the argument on the Florida case... Justice Bradley wrote out his opinion and his decision in full. He completed it in about 6 o'clock in the evening on the day before the judgment of the

⁴⁸³ William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 220. El autor sostiene, con toda la razón, que «*No such criticism was uttered against the senators or the representatives who sat on the Commission. Each of them, like Sir Joseph Porter in the Gilbert and Sullivan opera H. M. S. Pinafore, "always voted at his party's call", and no one was the least bit surprised that they did so. But no such tolerance was granted to the Supreme Court justices who made up the remaining members of the Commission.*». De la misma opinión es Van Woodward: «*Bradley's son was within his rights, also, in complaining that his father was expected to be freer from partisan bias than any of the other seven Republicans on the Commission.*», *Reunion and reaction*, o. cit., p. 162.

⁴⁸⁴ «*process or method by which fraud can be converted into honest reality...[but] judge Bradley seems today to have the ability, as well as the intention, to attempt such a miracle.*»

Commission was to be announced, and read it to Judge Clifford and Judge Field... It contained first, an argument, and secondly, a conclusion. The argument was precisely the same as that which appears in the published document, but Judge Bradley's conclusion was that the votes of the Tilden electors in Florida were the only votes that ought to be counted as coming from that State.

This was the character of the paper when Judge Bradley finished it, and when he communicated it to his colleagues. During the whole of that night Judge Bradley's house in Washington was surrounded by carriages of visitors who came to see him...

When the Commission assembled the next morning and when the judgment was declared, Judge Bradley gave his vote in favor of counting the votes of Hayes electors in Florida! The argument he did not deliver at the time, but when it came to be printed subsequently it was found to be precisely the same as the argument which he had originally drawn up and on which he had based his first conclusion in favor of Tilden electors.⁴⁸⁵

Pese a que se supone que debería haber testigos concretos de tales hechos, el periódico no citaba fuente o persona alguna que pudiera acreditar tal circunstancia. No obstante, el relato contenía una grave y manifiesta inexactitud cuya demostración estaba al alcance de cualquiera que se hubiese molestado en consultar las actas de la comisión: según el *New York Sun*, Bradley redactó su informe a las seis de la tarde del día 6 de febrero de 1877 (recordemos que, según constata Garfield, inició la lectura del mismo en la Comisión a las dos y trece horas del día 7 de febrero de 1877); pues bien, las actas de la Electoral Commission reflejan que 6 de febrero esta prolongó sus deliberaciones hasta las ocho de la tarde («*The Commission proceed to deliberate on the*

⁴⁸⁵ Citado en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 129.

*matters submitted, and remained in deliberation till eight o'clock p. m., when it adjourned until tomorrow at ten o'clock») y, por tanto, a las seis mal podría estar Bradley redactando sus conclusiones a no ser que lo estuviese haciendo a la vista de todos los miembros del organismo y en plena sesión del mismo. Tras finalizar la sesión del día 6 de febrero, Bradley no estuvo en contacto ni con Clifford ni con Field hasta que volvieron a reunirse al día siguiente a las diez. Por otra parte, las afirmaciones del *Sun* no concuerdan con las anotaciones de Garfield, quien, recordemos, manifestaba que la única sorpresa llegó cuando Bradley manifestó que deseaba examinar las pruebas en relación a la causa de inelegibilidad de Humphreys ¿Cómo se explica que si Bradley mudó su voto, Garfield no constatase gesto o manifestación de sorpresa alguna por parte de Clifford o Field (que, de haber tenido conocimiento previo de la posición de Bradley favorable a los demócratas, forzosamente habrían reaccionado de alguna manera cuando este se mostró contrario a la admisibilidad de pruebas tendentes a favorecer la causa de Tilden) y que la única «sorpresa» radicase en que Bradley sí era favorable a admitir pruebas sobre la causa de inelegibilidad del compromisario Humphreys? En este aspecto, quizá lo mejor sea transcribir las insuperables y definitivas conclusiones de Charles Fairman, que hoy por hoy nadie ha logrado refutar:*

Now, try to fit the «Interesting Historical Fact» into the inexorable facts of the record. The «judgment of the Commission» can only mean the decision at 3 PM on Wednesday to receive no extrinsic evidence. But the story that Bradley completed his opinion at about 6 PM on the previous evening is contradicted by the fact that he was listening to Commissioners' arguments until 7:45 that evening. From 5:05 to 5:55 Hunton was speaking and we know that Bradley was listening and taking notes. Presumably all the Commissioners hurried to dinner after the adjournment. If

Bradley read his opinion to Clifford and Field after dinner, where did they met? At Bradley's home, 201 I Street at the corner of New Jersey Avenue? We are told that the house was surrounded by carriages; if so, that would be a most inconvenient place for this unusual meeting. Did Bradley and Clifford go to Field's home at 21 First Street, East, facing the Capitol? Or did Bradley and Field go to Clifford's rooms at the National Hotel? That would be a conspicuous place for their confidential meeting. Perhaps a meeting and the Capitol? The justices had no chambers there, but they could go to the Conference Room.

*Why would Bradley want Clifford and Field to know if he purposed to vote for Tilden? So that they, especially Field, could spread the news in advance?*⁴⁸⁶

De todos modos, y ante la persistencia de la acusación, el propio Bradley hubo de salir al paso en una extensa carta que dirigió al editor del *Newark Daily Advertiser* y que este publicó el 3 de septiembre de 1877. Bradley rechazaba tajantemente las acusaciones defendiendo que estuvo dando vueltas a los argumentos de ambas partes hasta llegar definitivamente a la conclusión final, que fue la que expuso en el seno de la comisión. El texto de la respuesta de Bradley a las acusaciones contra el verdidas es el siguiente

Stowe, Vt., Sept. 2, 1877

EDITOR OF THE Advertiser:—I perceive that the New York Sun has reiterated its charge that after preparing a written opinion in favor of the Tilden electors in the Florida case, submitted to the Elec-

⁴⁸⁶ Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 131. En la misma página, y respecto a la otra acusación (que Bradley únicamente alteró la parte final de su fallo), el mismo autor indica que: «*The opinion as "printed subsequently" runs to six pages; at two-thirds down the second page one reads: "it seems to be clear, therefore, that Congress cannot institute a scrutiny into the appointment of electors by a State". After that point the opinion could not have supported Tilden*». El lúcido análisis de Fairman evidencia ya con carácter definitivo para la historia que la historia publicada por el *Sun* no era más que un simple bulo difamatorio.

toral Commission, I changed my views during the night preceding the vote, in consequence of pressure brought to bear upon me by republican politicians and Pacific Railroad men, whose carriages, it is said, surrounded my house during the evening. This, I believe, is the important point of the charge. Whether I wrote one opinion, or twenty, in my private examination of the subject, is of little consequence, and of no concern to anybody, if the opinion which finally gave was the fair result of my deliberations, without influence from outside parties. The above slander was published some time since, but I never saw it until recently, and deemed it too absurd to need refutation. But as it is categorically repeated, perhaps I ought to notice it. The same story about carriages of leading Republicans, and others, congregating my house, was circulated at Washington at the same time, and came to the ears of my family, only to raise a smile of contempt. The whole thing is a falsehood. Not a single visitor called at my house that evening; and during the whole sitting of the Commission, I had no private discussion whatever on the subjects at issue with any person interested on the Republican side, and but very few words with any person. Indeed, I sedulously sought to avoid all discussion outside the Commission itself. The allegation that I read an opinion to Judges Clifford and Field is entirely untrue. I read no opinion to either of them, and have no recollection of expressing any. If I did, I could only have been suggestively, or in an hypothetical manner, and not intended as committal of my final judgment or action. The question was one of grave importance, and, to me, of much difficulty and embarrassment, I earnestly endeavored to come to a right decision, free from all political or other extraneous considerations. In my private examination of the principal question (about going behind the returns), I wrote and re-wrote arguments and considerations on both sides as they occurred to me, sometimes being inclined to one view of subject, and sometimes to the other. But finally I threw aside these lucubrations, and, as you have rightly stated, wrote out the short opinion which I read in the

*Florida case during the sitting of the Commission. This opinion expresses the honest conclusion to which I had arrived, and which, after a full consideration of the whole matter, seemed to me the only satisfactory solution of the question. And I may add, that the more I have reflected on it since, the more satisfied have I become that it was right. At all events, it was the result of my own reflections and consideration, without any suggestion from any quarter, except the arguments adduced by counsel in the public discussion, and by the members of the Commission in its private consultations.*⁴⁸⁷

Años más tarde, en 1935, Allan Nevin publicó su biografía de Abram Hewitt, desvelando que este había elaborado una «historia secreta» de los sucesos de 1876 que, iniciada en 1879 y corregida y ampliada en 1895, permaneció inédita hasta entonces por expreso deseo del autor, quien no deseaba saliese a la luz hasta que hubiesen fallecido todos los involucrados en las disputadas elecciones del centenario. Según Hewitt, el abogado John Stevens (amigo común de Hewitt y Bradley) llegó a medianoche a casa de aquel procedente de la residencia de Bradley, manifestando que este favorecería las tesis demócratas, no obstante lo cual, entre medianoche y las seis de la mañana, el magistrado mudó su opinión debido a visitas de republicanos y a las propias súplicas de la mujer del juez. Transcribimos el relato de Hewitt

Mr. John G. Stevens was the intimate friend of Judge Bradley. He passed the night previous to the rendition of the judgment in Florida case at my house. About midnight he returned from a visit to Bradley, and reported to General Richard Taylor, who was also staying with me, and to Senator Gibson, who was awaiting his return, that he had just left judge Bradley after reading his opinion

⁴⁸⁷ Citada en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., pp. 135-36.

in favor of counting the vote of the Democratic electors of the State of Florida. Such a judgment insured the election of Tilden to the Presidency with three votes to spare above the necessary majority. We parted, therefore, with the assurance that all further doubt as to the Presidency was at rest. I attended the delivery of the judgment the next day without the slightest intimation from any quarter that Judge Bradley had changed his mind. In fact, the reading of the opinion until the few concluding paragraphs were reached was strictly in accordance with the report of Mr. Stevens.

The change was made between midnight and sunrise. Mr. Stevens afterwards informed me that it was due to a visit to judge Bradley by Senator Frelinghuysen and Secretary Robeson, made after his departure. Their appeals to judge Bradley were said to have been reinforced by the persuasion of Mrs. Bradley. Whatever the fact may have been, Judge Bradley himself in a subsequent letter addressed to the Newark Daily Advertiser admitted that he had written a favorable opinion which on subsequent reflection he saw fit to modify.⁴⁸⁸

La «historia» de Hewitt fue una especie de dogma de fe a la que se dio credibilidad absoluta, pese al hecho de que la misma fue posteriormente adornándose con vistosos detalles adicionales (como, por ejemplo, el hecho de que a los ruegos de los visitantes se añadió el de la propia esposa de Bradley, quien de rodillas ante su marido elevó sus plegarias al cielo para que Tilden no llegara a la presidencia).⁴⁸⁹ Todas las referencias al cambio de criterio del juez Bradley proceden casi

⁴⁸⁸ Citado en William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., pp. 193-194; y en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., pp. 165 y 167-168. Las páginas 159-195 del estudio de Fairman y 194-200 de la obra de Rehnquist son una brillantísima refutación a la «historia secreta» de Hewitt, que queda definitivamente desmascarada.

⁴⁸⁹ Michael F. Holt se pregunta irónicamente «*Who, one wonders, actually saw and later blabbed about that juicy tidbit?*» (*By one vote*, o. cit., p. 231), pregunta que los críticos

exclusivamente del testimonio ofrecido por Hewitt. Lloyd Robinson, que en su día se hizo eco de la misma en su obra, hubo de reconocer noblemente que esta acusación no se sustentaba en prueba alguna.⁴⁹⁰ Keith Ian Polakoff, tras ofrecer tanto la versión de Hewitt como la de Bradley, concluye no solo que los hechos avalan a Bradley, sino que las acusaciones se iniciaron una vez finalizada la disputa y sobre la base de hechos inexactos en varios aspectos.⁴⁹¹ Roy Morris, por supuesto, no da crédito alguno al juez Bradley sobre la base de una hilarante argumentación: Stevens no tenía razones para mentir mientras que Bradley sí.⁴⁹² Esta posición de Morris adolece de un simplismo atroz y «olvida» comunicar al lector un dato esencial (aparte de las inconsistencias del relato de Hewitt, que por supuesto Morris se guarda muchísimo de indicar al lector): la versión de Stevens no es, como pudiera desprenderse del relato de Morris, de primera mano, sino que

de Bradley no solo parece que no se hayan planteado, sino ni tan siquiera haber mostrado interés en plantearse, quizá por lo incómoda que pudiera ser la respuesta.

⁴⁹⁰ «No proof has ever been produced that Bradley was approached by Republicans on the night of February 8. He may very well have legitimate changed his mind by himself before dawn. Yet a number of historians of historians that suspect that Bradley's denials do not ring true», Lloyd ROBINSON, *The stolen election*, o. cit., pp. 167-168.

⁴⁹¹ «For the most part the historical record sustained Bradley. The accusations against him originated only after the dispute was over, and they were manifestly inaccurate in several respects», Keith Ian POLAKOFF, *Politics of inertia*, o. cit., p. 289. No obstante, el mismo autor nos ofrece en páginas anteriores otro ejemplo de las inexactitudes de esta «historia secreta» de Hewitt. Para justificar la elección de David Davis como senador por Illinois, «Hewitt offered no explanation other than the comment that Davis was chosen by the Democrats "reinforced by 7 Republican votes". A check of the Journals of the Illinois legislature reveals that even this intriguing hint was inaccurate. On the decisive fortieth ballot every Democrat save two who were absent voted for Davis. They were joined by eight Greenbackers to provide the simple majority required. While the Republicans were divided, none cast his vote for Davis» (*Politics of inertia*, p. 280). ¡Esta es la credibilidad de Hewitt!

⁴⁹² «It is difficult to see why Stevens would have made up such an easily refutable story. The Bradleys, on the other hand, had some motive to lie. And Bradley's subsequent admission that he had, indeed, written down a decision favorable to the Democrats—he said it was merely an old lawyers trick to test which side of an argument was stronger—indirectly supported Steven's story», Roy MORRIS, *Fraud of the century*, o. cit., pp. 224-225.

se trata de un testimonio indirecto que se relata a través de una tercera persona, Abraham Hewitt, quien sí tenía poderosísimos motivos para inventársela. Recordemos que Hewitt había sido el jefe de campaña de Tilden, es decir, del candidato presidencial que había sido finalmente derrotado, y, pese a que como hemos indicado, el candidato demócrata a la presidencia fue de facto su propio director de campaña, Hewitt fue no solo el responsable último de la nefasta gestión demócrata durante la crisis electoral posterior al 7 de noviembre, sino la persona que dio el visto bueno a la creación de la Electoral Commission contra la opinión de Tilden.⁴⁹³ Si los demócratas sostenían que Tilden había ganado las elecciones en cuanto al voto popular y las perdió por una decisión final de la Electoral Commission, parece, pues, lógico que Hewitt tuviese que justificar de alguna manera tanto el fracaso de su candidato como su inoperante gestión del conflicto, señalando otro responsable; y como Tilden perdió la batalla presidencial en la comisión, nada mejor que descargar la frustración contra el juez. En cuanto a las manifestaciones de Bradley, recordemos que este expuso textualmente que «*I wrote and re-wrote argu-*

⁴⁹³ En la bibliografía ofrecida en su ensayo, Morris cita la novela de Gore Vidal *1876*, a la que hemos hecho referencia anteriormente. Pues bien, Vidal se encontraba en la órbita ideológica del Partido Demócrata y en su novela dedicada al año del centenario, el imaginario personaje encargado de relatar los hechos (Charles Schermerhorn Schuyler, hijo ilegítimo de Aaron Burr) se caracteriza por su cercanía personal, su amistad y su apoyo al gobernador Tilden en la campaña presidencial. Pues bien, uno de los escasos personajes reales que no sale bien parado en la novela es precisamente Abram Hewitt, a quien Vidal/Schuyler responsabiliza directamente del fracaso de Tilden. Michael F. Holt, por su parte, indica que «*most blamed the foolishness of congressional Democrats, especially Hewitt, for agreeing to the creation of Electoral Commission, particularly once they knew that David Davis refused to serve to it*» (*By one vote*, o. cit., p. 242), coincidiendo en este aspecto con Keith Ian Polakoff, para quien «*Hewitt meanwhile was enduring much criticism for the loss of the presidency. Tilden, Marble, Bigelow and Watterson all held him responsible along with Thurman and Bayard for the electoral commission, which they said had been the salvation of the Republican party*» (*Politics of inertia*, o. cit., p. 316), ¿Acaso no tenía Hewitt poderosísimos motivos para inventarse la historia para salvar, de alguna manera, su propia nefasta gestión imputando la derrota a un tercero, en este caso a Bradley?

ments and considerations on both sides as they occurred to me, sometimes being inclined to one view of subject, and sometimes to the other», mas no que hubiese redactado una decisión final favorable a los intereses demócratas. No obstante, puestos a aceptar testimonios indirectos como si emanaran directamente del interesado, Morris podría haber acudido a la opinión de David Davis, el juez a quien Bradley sustituyó en la comisión, quien, al valorar la postura tomada por Bradley, es totalmente favorable a este: «*No good lawyer, not a strict partisan, could decide otherwise*».⁴⁹⁴

Rehnquist, por su parte, utiliza métodos jurídicos para rechazar las imputaciones a Bradley: el testimonio de Stevens no es directo, sino indirecto y, por tanto, inadmisibile; pero, aun aceptando su admisibilidad la narración es inconsistente (algo que Morris y compañía, por cierto, ni tan siquiera se detienen a considerar): Stevens llega a medianoche a casa de Hewitt tras su visita al juez Bradley, mas según Hewitt el cambio de opinión del juez tiene lugar entre la medianoche y el amanecer, cuando recibe una serie de visitas que enumera y de las que Stevens, por tanto, no pudo haber sido testigo directo. Así pues, el testimonio sobre las visitas nocturnas a Bradley no es ya de segunda mano (de Stevens a Hewitt) sino de tercera o cuarta mano (en el mejor de los casos, de un desconocido que se las transmite a Stevens —¿qué persona o personas narraron a Stevens las visitas a casa del juez?— y este a su vez a Hewitt) lo que resta credibilidad al relato no solo en cuanto al hecho en sí de las visitas, sino en lo referente a la presión que sobre Bradley pudieron haber tenido. A mayor abundamiento, el propio Hewitt, al reflejar la elección de Bradley como quinto juez de la Electoral Commission, indica que tenía al mismo

⁴⁹⁴ Willard L. KING, *Lincoln's manager*, Harvard University Press, 1960, p. 293, citado en Charles FAIRMAN, *Five justices and the Electoral Commission*, o. cit., p. 173; William REHNQUIST, *Centennial Crisis*, o. cit., p. 185.

como un eminente jurista y persona de altísima integridad personal. Pero lo que es más significativo, Rehnquist deduce que Hewitt redacta su versión final de la historia en fecha tan lejana como 1895, cuando Stevens ya había fallecido (habla de «*a mutual friend of Judge Bradley and myself, the late John G. Stevens of Trenton...*», –Stevens se suicidó en 1886–) y, por tanto, ya no estaba en condiciones de desmentirla.

¿Qué ocurrió, pues, tras la medianoche del día 6 de febrero de 1876 en el domicilio de Joseph Bradley? Únicamente podemos atrevernos a formular una hipótesis, que en nuestro caso es favorable al juez Bradley, aunque no sea más que por aplicación de un principio tan elemental como es la presunción de inocencia de la que toda persona es titular. Para empezar, no cree el redactor de estas líneas que ni entonces ni hoy ningún magistrado que se precie, y menos alguien de la honestidad personal de Bradley (reconocida por el mismo Hewitt) anticipe a nadie la decisión final que va a tomar en asuntos que son sometidos a su consideración, por mucha confianza que tenga en la amistad de sus interlocutores; cosa distinta es que, a posteriori, es decir, hecha pública ya la resolución del asunto, pueda mostrarse más o menos locuaz sobre el particular en función del grado de amistad que tenga con el eventual contertulio.⁴⁹⁵ A nuestro juicio, lo más cercano a la realidad es que quizá Bradley, una vez finalizada la contienda presidencial, confiase a su amigo Stevens que el asunto era jurídicamente muy dudoso y que estuvo dando muchas vueltas a los razonamientos de las partes antes de tomar la decisión final. Es igualmente posible que Stevens, a su vez, hiciese a Hewitt partícipe de tal confianza, circunstancia que este aprovecharía para adornarla en su propio beneficio incluyendo el relato de las famosas visitas

⁴⁹⁵ Por lo tanto, y ya de mano, debe considerarse cuando menos extraño y poco menos que delictivo que Hewitt enviase a una tercera persona a conocer de antemano la opinión de un juez, máxime en un asunto de tanta importancia.

al domicilio del juez (que casi con total seguridad habría extraído del artículo publicado en el *Sun*). A este respecto, debemos indicar que, si fuese cierto que Bradley hubiese redactado una opinión inicial favorable a Tilden y la hubiese adelantado a Clifford y a Field, es indudable que el asunto hubiera trascendido al público mucho antes del 4 de agosto de 1877, que es la primera vez que se formula tal cargo contra Bradley (recordemos que, en febrero de 1877, el *Sun* únicamente le acusa de dar amparo jurídico al fraude) y no hubiesen faltado quienes se prestasen a ofrecer testimonio sobre el particular. Por otra parte, es sumamente extraño que Hewitt manifestase su intención de no publicar estas «revelaciones» cuando, los que las hicieron, estuviesen en condiciones de confirmarlas, pues, de ser ciertas, Hewitt hubiese sido, después de Tilden, el primer interesado en que viesen la luz cuanto antes mejor.

Si ya en su día Van Woodward, refiriéndose a las acusaciones formuladas contra Bradley había concluido que algunas eran injustas, (amén de que se trata de acusaciones cuya refutación es muy difícil o imposible acreditar),⁴⁹⁶ no podemos menos que hacer nuestras las palabras de Rehnquist, cuando indica que «*No one writing at the present time can know for certain where the truth lies, but, it would seem, the very most those accounts warrant is a Scottish verdict of “not proven”*». Sea como fuere el daño estaba hecho y, como indica lúcidamente Bernard Schwartz, «*The charge against Bradley’s integrity severely tarnished the remaining career of one who (from the point of view of legal ability) was one of the best men ever to sit on the high Tribunal*».⁴⁹⁷

⁴⁹⁶ «*Some of the charges were unfair, some unproved and some incapable of proof [...] and in all fairness it should be observed that it was the sort of charge that is impossible to disprove and difficult to deny effectively*», C. VAN WOODWARD, *Reunion and reaction*, o. cit., pp. 156 y 162. El mismo autor indica que «*Bradley’s accusers never brought forth proof of their charge that the justice yielded to improper pressure in changing his opinion*» (o. cit., p. 161).

⁴⁹⁷ Bernard SCHWARTZ, *History of the Supreme Court*, o. cit., pp. 172-173.

4. Conclusión

*One final irony is noted by the historian James P. Shenton. In 1860 a wrenching era began with the Southern refusal to accept the legitimate election of Abraham Lincoln. In 1877 it ended when the South surrendered what was very likely a legitimate mandate for Samuel Tilden.*⁴⁹⁸

El día 2 de marzo de 1877 el presidente del Senado Thomas Ferry indicaba que el candidato republicano Rutherford Bitchard Hayes había obtenido la mayoría de los votos compromisarios del colegio electoral y, en consecuencia, pasaría a ser el decimonoveno presidente de los Estados Unidos. Pese a que la toma de posesión estaba fijada para el día 4 de marzo, en prevención de posibles conflictos el *chief justice* Morrison R. Waite le tomó juramento en una ceremonia privada que tuvo lugar el día antes en la propia Casa Blanca. A los ojos de un sector de la población, Hayes era un presidente ilegítimo que había llegado al poder gracias a un monumental fraude, y por ello se le motejó con expresiones tales como «*Rutherfraud Bitchard Hayes*» o «*His fraudulency*». Paradójicamente fue la elección de Hayes, un candidato republicano, la que puso fin a la presencia de tropas federales en los estados del sur dado que el nuevo presidente, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los demócratas sureños, procedió a retirar los destacamentos federales de dichos estados, poniendo fin así al periodo de reconstrucción. El precio de la victoria de Hayes fue muy alto pero todos salieron ganando, pues si los republicanos mantenían su presencia en la Casa Blanca los demócratas recuperaban el control de los estados sureños imponiendo la misma política de supremacía blanca y segregación racial que sus rivales políticos habían combatido en la pos-

⁴⁹⁸ Bernard A. WEISBERGER, *The stolen election*, o. cit., p. 20.

guerra.⁴⁹⁹ Una segregación que, avalada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la sentencia *Plessy v. Ferguson*, se prolongó hasta mediados de los años cincuenta del siglo xx, cuando bajo el liderazgo del *chief justice* Earl Warren se promovió un activismo judicial en contra del segregacionismo, iniciado con la célebre sentencia *Brown v. Board of Education of Topeka*.

A raíz de lo expuesto, parece meridianamente claro que el vencedor formal de las elecciones presidenciales de 1876, si nos atenemos estrictamente al recuento de votos depositados en las urnas, fue el demócrata Samuel Tilden. Es evidente, y está fuera de toda duda, que esa victoria estuvo influida y tuvo su base primordial en la campaña de violencia física e intimidación ejercida sobre la población negra en los estados sureños, a pesar de lo cual no puede dejar de señalarse que, de los tres estados en disputa, los resultados de Luisiana eran claramente favorables al candidato demócrata.⁵⁰⁰ No así los de Oregón (donde la victoria había sido indiscutiblemente republicana y la disputa sobre el compromisario

⁴⁹⁹ Como muy bien reseña Howard Zinn, «*But it told us nothing about how "The Compromise of 1877" worked out in private meetings between Democrats and Republicans, doomed blacks in the South to semi-slavery. It told us nothing about how the armies that once fought the Confederacy would be withdrawn from the South and sent West to drive Indians from their ancestral lands. It told us nothing about how Democrats and Republicans would now join in subjecting working people all over the country to ruthless corporate power. Behind the Tilden-Hayes hullabaloo was a hard reality: The Republican Party, and the Northern industrial-financial interests that dominated it, were no longer interested in the fate of former slaves. The Fourteenth and Fifteenth Amendments had given blacks a few years of new freedom in which they could vote and be elected to office. But the ex-slaves would be given no land, no resources to give meaning to their political freedom. President Hayes, awarded the election, would make concessions to the Democrats, remove soldiers who had protected black rights in the South, and white supremacy would be restored*», «Disputed elections, concealed facts», *The progressive*, febrero 2001 (puede consultarse en internet en http://findarticles.com/p/articles/mi_m1295/is_ai_70451480). En este sentido, Eric Foner concluye igualmente que la victoria republicana de 1876 «*ended an era when the Federal government sought to protect the rights of black citizens. And since southern Democrats soon reneged on their pledge to respect black constitutional rights, it marked the beginning of the long descent into segregation and disenfranchisement*», *The Nation*, 29 de marzo de 2004.

⁵⁰⁰ «*Without exception, the principal historians of the period [...] all concluded that Tilden was robbed of Louisiana and probably of Florida*», Louis W. KOENIG, *The election that got away*, o. cit. Obsérvese que el citado autor únicamente habla de robo en Luisiana, mientras que respecto a Florida solo manifiesta que es «probable», omitiendo toda mención a Carolina del Sur.

Watts era un mero tecnicismo o debate sobre si concurría en una causa de inelegibilidad o no) ni Carolina del Sur, mientras que en Florida la situación estaba tan equilibrada que es imposible dilucidar con rotundidad quién resultó vencedor, pues el escrutinio realizado por simpatizantes de Tilden ofrecía una diferencia mínima de 94 votos a favor del candidato demócrata, no siendo descartable por tanto que la victoria final en dicho estado fuese, efectivamente, republicana.⁵⁰¹ Este es un hecho que los defensores a ultranza de la teoría del «fraude del siglo» suelen olvidar, y así lo indica el autor del estudio más reciente sobre las elecciones presidenciales de 1876.⁵⁰²

Con todo, las elecciones de 1876 fueron las más reñidas en la historia electoral de los Estados Unidos hasta la contienda electoral entre George W. Bush y Albert Gore, donde el estado de Florida volvió a ser protagonista, al ser precisamente el cómputo de una serie de votos emitidos en diversos condados de dicho estado los que llevaron el asunto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en otra apasionante contienda electoral que analizaremos con detalle en el capítulo siguiente.

⁵⁰¹ No obstante, el autor de estas líneas no puede por menos que coincidir con la opinión de Paul Leland Haworth: «*While a fair count of the votes cast in the state of Florida might have resulted in a small majority for Tilden, a free election would with far greater certainty have resulted in a substantial majority for Hayes. The board did not throw out votes, not even "marked ballots" in the score of intimidation; yet no one familiar with the evidence and with the attitude of the Southern Democrats toward negro suffrage will for a moment doubt that there was sufficient intimidation to change the whole result*», *The Hayes-Tilden disputed presidential election of 1876*, o. cit., p. 76.

⁵⁰² «*Had blacks been allowed to vote freely, Hayes easily would have carried all the three states in dispute, Mississippi and perhaps Alabama as well. Democrats at the time and later pro-democratic historians who cried that the election had been stolen by Republicans, that it was "the fraud of the century" conveniently ignored the clear evidence of the force, intimidation and fraud used by Democrats to keep blacks from the polls*», Michael F. HOLT, *By one vote*, o. cit., p. 181. Van Woodward sostiene otra opinión, pues cree que unas elecciones justas hubieran otorgado la victoria a Hayes en Luisiana y Carolina del Sur mientras que Tilden hubiera obtenido los votos compromisarios de Florida (*Reunion and reaction*, o. cit., p. 19), aunque este aserto debería matizarse, pues el profesor Woodward limita su opinión a los tres estados en disputa, obviando que unas elecciones libres hubieran privado al candidato demócrata de varios estados sureños que probablemente hubieran sido obtenidos por Hayes.

CAPÍTULO TERCERO

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2000: GEORGE W. BUSH FRENTE A ALBERT GORE JR.⁵⁰³

Tras la reñida campaña electoral que enfrentó a Hayes y a Tilden en 1876, las aguas de los comicios presidenciales volvieron a sus cauces. No volvió a producirse ningún conflicto electoral, pese a que la sombra de lo ocurrido en el año 1824 planease de nuevo sobre el territorio estadounidense en las elecciones presidenciales de 1912, donde la irrupción de un candi-

⁵⁰³ Sin duda alguna, las fuentes primarias más importantes a la hora de redactar este capítulo son las dos sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tuvieron como objeto procesal los comicios presidenciales del año 2000: *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board* (531 US 70 [2000]) –cuya información más relevante, incluyendo los *oral argument* y la sentencia pueden encontrarse en http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2000/2000_00_836– y *Bush v. Gore* (531 US 90 [2000]) –http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2000/2000_00_949–. A nivel bibliográfico, dos excelentes relatos (centrados más en los aspectos puramente fácticos del caso que en los avatares judiciales propiamente dichos) los encontramos en: Vv. AA., *Deadlock, the inside story of America's closest election*, New York, Public Affairs, 2001 (se trata de una crónica elaborada por el equipo del *Washington Post* que realizó el seguimiento de todos los avatares que subsiguieron al proceso electoral); y Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, New York, Random House, 2001. De este último autor es igualmente importante su obra *The nine, inside the secret world of the Supreme Court*, New York, Random House, 2007, cuyos capítulos 11-13 abordan cómo fue seguido el conflicto presidencial por los magistrados del Tribunal Supremo. Desde un análisis algo más detallado, en lo que a los aspectos jurídicos se refiere,

dato adicional, con sólido tirón popular y serias posibilidades de triunfo que concurría al margen de las tradicionales candidaturas demócrata y republicana, hizo que, al menos sobre el papel, surgiese la posibilidad de que la Cámara de Representantes tuviese que decidir nuevamente entre uno de los diferentes candidatos, aunque finalmente no se produjo conflicto alguno y el demócrata Woodrow Wilson fue elegido presidente.⁵⁰⁴ La única peculiaridad digna de mención, a partir de entonces, fue la elección del demócrata Franklin Delano Roosevelt durante cuatro elecciones consecutivas (las de 1932, 1936, 1940 y 1944) rompiendo así con la tradición inaugurada por Washington de no optar a más de una reelección, precedente que, como hemos visto en el capítulo anterior, Ulysses Grant estuvo tentado de esquivar pero al que finalmente optó por someterse más que nada por la rotunda oposición que causó el mero hecho de que se plantease tan siquiera la posibilidad. Roosevelt falleció a los pocos meses de su cuarto mandato presidencial, siendo

hemos de resaltar: Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore, exposing the hidden crisis in American democracy*, University Press of Kansas, 2010 (hasta este momento, sin duda la obra más completa sobre la materia), y Richard A. POSNER, *Breaking deadlock: The 2000 election, the Constitution and the Courts*, Princeton University Press, 2001 (que, aún partiendo de los hechos y de los procesos judiciales, tiende a ser más una reflexión filosófico-político-jurídica sobre los problemas subyacentes en el caso, tales como el propio concepto de democracia y los problemas que plantea el sufragio inorgánico). Cabe indicar, a título de curiosidad, que el conflicto político-jurídico que enfrentó a Bush y a Gore fue llevado al cine en el año 2008 en la película *Recount*, film dirigido por Jay Roach y donde destacan Kevin Spacey en el papel del asesor demócrata Ron Klain y Laura Dern en el rol de Katherine Harris.

⁵⁰⁴ Junto a Woodrow Wilson se disputaban el cargo presidencial el republicano William Howard Taft y el antiguo presidente Theodore Roosevelt. Wilson obtuvo 6296284 votos populares que le permitieron obtener 435 votos compromisarios; Theodore Roosevelt consiguió 4122721 votos populares y 88 votos compromisarios; y el republicano William Howard Taft obtuvo 3486242 votos populares y tan solo 8 votos compromisarios (datos tomados del *Dave Leip's Atlas of United States Presidential Elections*). Un interesantísimo análisis sobre esta peculiar contienda puede encontrarse en Lewis L. GOULD, *Four hats in the ring: The 1912 election and the birth of modern American politics*, University Press of Kansas, 2012. Taft sería nombrado nueve años más tarde *chief justice*, convirtiéndose en el primer estadounidense en haber ostentado los cargos de presidente de los Estados Unidos y presidente del Tribunal Supremo.

reemplazado por el vicepresidente Truman. La elección de John Fitzgerald Kennedy en las elecciones de 1960 hizo que se formularan en voz alta una serie de interrogantes, más de carácter político o moral que estrictamente jurídico, puesto que sobre tales comicios ondearon sospechas de corrupción electoral en la ciudad de Chicago; si bien, en todo caso, tales irregularidades afectarían a la mayoría de voto popular, y en modo alguno al voto compromisario, donde Kennedy ostentaba una ventaja suficiente para sobrepasar sin problemas al por entonces vicepresidente Nixon.⁵⁰⁵

Pese a todo, el recuerdo de lo ocurrido en el año 1876 planeó de nuevo sobre la nación estadounidense durante los comicios presidenciales del 2000, donde las dudas planteadas a la hora de practicar el recuento de votos en el estado de Florida llevó a los Estados Unidos a una crisis política de primera magnitud, cuya solución, ambos candidatos en disputa, depositaron en las manos de los tribunales de justicia. El presente capítulo trata de exponer, de manera estrictamente objetiva, el devenir de los acontecimientos y la resolución final del conflicto, sin tomar abiertamente partido por una u otra parte y sin que el autor se incline por ninguna de las tesis, defensoras u opositoras, de la sentencia. Únicamente rompe el redactor de estas líneas su objetividad, y toma abiertamente partido, a la hora de rechazar de forma abierta y tajante una acusación que se hizo dentro y fuera de los Estados

⁵⁰⁵ Es interesante constatar que la diferencia de voto popular entre Nixon y Kennedy fue realmente escasa: 34220984 votos obtenidos por el candidato demócrata frente a los 34108157 del republicano, es decir, poco menos de ciento veinte mil sufragios de un total de ochenta millones de votos emitidos, pese a lo cual la diferencia en voto compromisario es brutal: 303 de Kennedy frente a 218 de Nixon. Si nos centramos en el estado de Illinois, la diferencia de votos entre ambos candidatos es aún menor: Kennedy obtiene el 49,98% de los votos con un total de 2377846, mientras Nixon logra el 49,80% de los sufragios con 2368988 votos, es decir, una diferencia que no llega a diez mil votos, siendo altamente significativo que en casi todos los condados de Illinois, Nixon lograse vencer a su rival. Tomo los datos del *Dave Leip's Atlas of United States Presidential Elections*.

Unidos: que el Tribunal Supremo robó la presidencia a Gore para entregársela a Bush, dado que hubiese intervenido o no dicha institución judicial, las posibilidades de que el candidato republicano fuese el finalmente elegido presidente eran infinitamente mayores que las de su rival demócrata, como expondremos en su momento.

Por último, conviene tener en cuenta desde este mismo momento que, a la hora de adentrarse en estos procelosos acontecimientos, creo que es necesario seguir el atinado consejo que nos ofrece Charles Zelden: dejar a un lado ideas preconcebidas o partidistas y enfrentarse a los hechos con amplitud de miras, dado que el asunto trasciende a la victoria de uno u otro candidato.⁵⁰⁶

1. Introducción: planteamiento general de cómo se aborda el análisis de los comicios presidenciales del año 2000 en el presente capítulo

El día 26 de octubre de 2004, la oficina de prensa del Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitía un comunicado anunciando que al presidente de dicho órgano judicial, William Hubbs Rehnquist, le había sido diagnosticado un cáncer de garganta. Se especuló mucho acerca de si su estado de salud le permitiría tomar juramento en enero de 2005 al reelegido presidente George W. Bush, aunque finalmente un muy desmejorado *chief justice* acudió a dicho evento, siendo evidente la mella que

⁵⁰⁶ «It ask readers to put their emotions to one side; to understand that *Bush v. Gore* raises questions beyond the picking of a president; and, most important of all, to look at the crisis of 2000 and *Bush v. Gore* with an open mind [...] If we are to truly understand the lessons of 2000 and the wider significance of *Bush v. Gore* we must be willing to view both events independent of the merits of the candidates and our personal views of their virtues and/or failings», Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. x-xi.

en su cuerpo habían ocasionado las sesiones de quimioterapia.⁵⁰⁷ El Tribunal Rehnquist había desempeñado cuatro años antes un notorio papel en las elecciones presidenciales del año 2000, cuando la disputa surgida en torno al cómputo de una serie de votos emitidos en diversos condados del estado de Florida derivó en un conflicto jurídico que fue resuelto inicialmente por el Tribunal Supremo de dicho estado y, finalmente en vía de recurso, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Era la segunda ocasión, durante su mandato como presidente del Tribunal Supremo, que Rehnquist se encontró en el centro de una tormenta política, pues en su condición de *chief justice* se vio obligado a presidir el enjuiciamiento senatorial por *impeachment* al que fue sometido en 1998 el presidente demócrata William Jefferson Clinton, curiosa circunstancia si tenemos en cuenta que en 1992, pocos años antes del meritado evento, Rehnquist había publicado un sencillo libro dedicado precisamente a los dos procesos de *impeachment* que hasta ese momento habían tenido lugar en la historia política estadounidense: el que en 1804 sufrió el juez del Tribunal Supremo Samuel Chase y al que en 1868 se vio sometido el presidente Andrew Johnson.⁵⁰⁸

⁵⁰⁷ William Rehnquist fallecería nueve meses después, el 3 de septiembre de 2005, entre el elogio y el reconocimiento de quienes en vida fueron sus más enconados adversarios, como, por ejemplo, Edward Kennedy, e incluso el hoy presidente de los Estados Unidos y entonces senador demócrata Barack Obama, quien con deslíz histórico incluido (al «transformar» a Rehnquist en sucesor de Earl Warren cuando en realidad sucedió a Warren Burger), elogió la figura y el legado del finado *chief justice* (véase al respecto David L. HUDSON JR., *The Rehnquist Court, understanding its impact and legacy*, Westport, Praeger publishers, 2006, pp. 146-147). Una de las mejores y más sentidas semblanzas de Rehnquist, como persona y como magistrado, se encuentra en las líneas que la juez (de ideología demócrata) Ruth Bader Ginsburg le dedicó en las pp. 6-10 de la *Harvard Law Review*, vol. 119, number 1 (november 2005); puede accederse a este número a través de internet, concretamente en http://www.harvardlawreview.org/issues/119/Nov05/Rehnquist_TributeFTX.pdf. El otro magistrado demócrata, Stephen Breyer, le rindió su particular homenaje aceptando formar parte, junto con Sandra Day O'Connor, de la junta rectora del William H. Rehnquist Center on the Constitutional Structures of Government, institución creada en 2006 a la memoria del fallecido *chief justice*.

⁵⁰⁸ William H. REHNQUIST, *Grand Inquests: The Historic Impeachments of Justice Samuel Chase and President Andrew Johnson*, Knopf Publishing Group, 1992. Sobre la

El día 12 de diciembre de 2000 (hace ya, pues, doce años), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio a la luz su polémica sentencia *Bush v. Gore* en virtud de la cual el alto organismo judicial acordó detener el recuento manual de votos en Florida, lo que conllevaba otorgar definitivamente los veinticinco compromisarios de dicho estado y, por ende, la victoria electoral al entonces gobernador de Texas y candidato republicano a la presidencia George W. Bush. No era la primera ocasión en que unas elecciones presidenciales arrojaban un resultado incierto y ni tan siquiera fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos donde miembros del Tribunal Supremo se vieron implicados directamente en unos comicios para la elección del supremo mandatario norteamericano, como hemos tenido ocasión de comprobar en el capítulo anterior dedicado a las elecciones presidenciales de 1876. Pero, a diferencia de lo ocurrido en el año del centenario, en el 2000 no fueron los jueces del Tribunal Supremo integrados en un organismo de composición mixta, sino el propio Tribunal Supremo como institución quien tuvo la oportunidad de intervenir decisivamente en el resultado final de unas elecciones presidenciales. Pese al aluvión de artículos⁵⁰⁹ y libros que se publicaron sobre el tema y continúan publicándose en los Estados Unidos, el asunto pareció agotarse o perder su razón de ser una vez que George W. Bush hubo accedido a la presidencia. Como indica a este respecto Charles L. Zelden en su artículo «The case that must not be named» (cuyas ideas básicas reprodujo posteriormente en el prólogo a su excelente trabajo *Bush v. Gore: Expo-*

faceta de Rehnquist como historiador, véase Mark TUSHNET, *William Rehnquist as an historian*, Cornell Law Review, vol. 91: 957, pp. 957-972: «William Rehnquist's works of popular history turn out to be both better and more revealing than I had initially expected. They are workmanlike examples of the genre—what publishers would refer to as “midlist” books had they been written by anyone else— but not truly distinguished ones».

⁵⁰⁹ Sobre este tema, puede consultarse Richard L. HASEN, «A critical guide to Bush v. Gore scholarship», *Annual Review of Political Science*, vol. 7, pp. 297-313.

sing the hidden crisis in American democracy), la simple mención del caso puede dar lugar a tres reacciones diferentes en función de quien sea el destinatario de la interpelación: indiferencia, irritación o rabia y, por último, frustración o aceptación estoica de hechos consumados.⁵¹⁰ Dos razones aduce el profesor Zelden para justificar tales actitudes en relación con la sentencia, una de las cuales es precisamente la tendencia a abordar el asunto de forma superficial («*the tendency to treat the case in only the most superficial, dismissive, and unwelcoming ways*»). A ello debe añadirse otra consideración apuntada por Richard L. Hasen: el hecho de que uno pueda anticipar una defensa o una crítica de la resolución final del Tribunal Supremo en función de la orientación política del comentarista, sin que este entre a analizar los argumentos de fondo esgrimidos por el alto tribunal.⁵¹¹ *Bush v. Gore* fue, en efecto, una resolución muy polémica, criticada por unos y defendida por otros, pero que, salvo en los propios Estados Unidos, han sido escasísimas las ocasiones en las que tal resolución fue analizada de una manera rigurosa, situándola en su contexto, limitándose la mayoría de las ocasiones a trivializar el asunto centrándolo única y exclusivamente en la consecuencia directa del fallo judicial (victoria del candidato republicano y presidencia de George Bush). Es, por tanto, indispensable para comprender íntegramente el asunto acercarse, si quiera de modo muy esquemático, al largo proceso

⁵¹⁰ «*Just whisper the name of the case that ended the 2000 presidential election and you are likely to get one of three responses: a yawn of active indifference (“not that again”), teeth grinding anger at the Supreme Court and the presidency of George W. Bush (“let me tell you ...”), or an eye-roll of frustration (“Get over it already, Bush won!”)*», Charles L. ZELDEN, «The case that must not be named», *Oklahoma City University Law Review*, vol. 32, n.º 2, pp. 279-298.

⁵¹¹ «*With a few notable exceptions, political orientation tended to be a very reliable predictor of whether one supported or opposed the result (though not necessarily the reasoning or remedy) of the Supreme Court case [...] ideology or political sensibility seemed to color one’s view of the salient facts and ambiguous language in the Court’s opinion*», Richard L. HASEN, *A critical guide to Bush v. Gore scholarship*, o. cit.

de treinta y seis días durante los cuales el pueblo de los Estados Unidos se encontró sumido en una perpleja incertidumbre, en la que todas las miradas se concentraron en el estado de Florida y, poco después, en el edificio de formas clásicas diseñado por Cass Gilbert donde el Tribunal Supremo tiene su sede desde 1935; es necesario igualmente acercarse a la legislación electoral de Florida, así como al modo en que se celebran los comicios en dicho estado, dado que lo deficiente de la legislación y las peculiaridades de las papeletas electorales utilizadas causaron gran parte de los problemas que hubieron de ser solventados en fase judicial, donde nunca debieron llegar, pues quizá una norma técnicamente más elaborada hubiese evitado la judicialización del proceso electoral o, cuando menos, despejado muchas incógnitas y claroscuros que la legislación vigente mantenía en una incierta nebulosa. Durante los treinta y seis días que transcurrieron entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre de 2000 se entremezclaron de forma indisoluble acciones políticas y judiciales, órganos judiciales estatales y federales; donde términos como *butterfly ballot*, *overvote* o *undervote*, hasta ese momento limitados a cauces estrictamente jurídico-procesales, desbordaron los mismos y descendieron a la arena del lenguaje popular. Fue un largo y agotador camino en el que dos titánicos equipos de primeros espadas del mundo jurídico se dieron cita, y que, tras una maratónica carrera de casi cincuenta procesos judiciales en su haber, finalizó abruptamente el día 12 de diciembre de 2000 con la sentencia que zanjaba de forma definitiva el asunto pero que, de forma harto paradójica, hacía constar de manera expresa que *la misma no podría ser utilizada en el futuro como precedente* y que, por tanto, en modo alguno se estaba creando un corpus o doctrina jurisprudencial que pudiera ser invocada en un futuro ante el Tribunal Supremo. Es este aspecto (el que la sentencia de forma expresa se privase de su condición de precedente para futuros procedimientos judi-

ciales) quizá el más criticable de la resolución y curiosamente al que menos importancia se le ha dado en nuestro país, pese a que la frase en cuestión, que cercena esa posibilidad de futuras invocaciones, sí ha sido muy criticada por la doctrina jurídica norteamericana.

En el presente capítulo, en modo alguno, se pretende ofrecer una versión definitiva de las elecciones presidenciales de 2000 (algo que por otra parte, como muy bien argumenta Charles L. Zelden, será imposible realizar hasta que todos los participantes en los acontecimientos hagan públicos sus archivos)⁵¹² ni un análisis detallado de todos y cada uno de los casi cincuenta procedimientos judiciales que a todos los niveles se iniciaron en relación con los comicios presidenciales que enfrentaron a George Bush y a Al Gore, pues ello desbordaría el ámbito material de la presente obra. Nuestro objetivo es mucho más modesto: pretendemos acercar al lector a dos resoluciones judiciales, *Bush v. Palm Beach Canvassing Board* y, sobre todo, *Bush v. Gore*,⁵¹³ la segunda de las cuales ha sido tan vituperada como poco analizada en nuestro país. No obstante, para comprender en su integridad el fondo de tales sentencias, menester es repasar, si quiera de forma esquemática, los antecedentes fácticos del caso y adentrarnos en el proceloso camino político-jurídico que desembocó finalmente en el Tribunal Supremo

⁵¹² «*Not until all the participants die and their papers become available to historians can such a history even be contemplated*», Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. X.

⁵¹³ Es el método empleado por Richard Posner, quien analiza la legislación de Florida a través del caso *Bush v. Palm Beach Canvassing Board* y el procedimiento impugnatorio de la certificación que Katherine Harris hizo de la victoria de Bush a través del análisis jurídico del caso *Bush v. Gore*. Como bien indica dicho autor en referencia a toda la complicada maraña de procedimientos judiciales que tuvieron lugar a raíz de los comicios del 7 de noviembre de 2000, «*The litigation that arose out of the deadlocked Florida election and culminated in the Supreme Court's decision in Bush v. Gore was hydra-headed, complex and intricate, despite being highly compressed in time. It involved numerous provisions of state and federal law and encompassed no fewer than eight major judicial decisions and a number of minor ones*», Richard A. POSNER, *Deadlocked election*, o. cit., pp. 92-93.

mediante un análisis de la legislación federal y estatal aplicable, del desarrollo fáctico del proceso electoral y, finalmente, de las dos sentencias del Tribunal Supremo, sobre todo la segunda que zanjó definitivamente la cuestión.

Tampoco es objetivo del autor realizar una valoración alguna de las sentencias ni de su eventual acierto o equivocación, tema este que ha hecho correr auténticos ríos de tinta y dio origen en los Estados Unidos a una riquísima bibliografía (especialmente la surgida al calor de la propia resolución), sino ofrecer un marco adecuado para que el lector pueda tener una cabal comprensión del tema y, en función de los hechos y de los argumentos vertidos por cada órgano judicial en sus resoluciones, dejar que sea cada lector quien, tras valorar todas las tesis jurídicas, adopte su propio criterio sobre el particular. Los críticos de la sentencia *Bush v. Gore* estiman que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos usurpó funciones que correspondían al Tribunal Supremo de Florida, dado que en definitiva, el fondo del asunto versaba sobre derecho electoral del *Sunshine State* y, por ende, era el supremo órgano judicial estatal el que debía ostentar la última palabra sobre el particular; por el contrario, los defensores entienden que el Tribunal Supremo de Florida se excedió en sus funciones estrictamente judiciales invadiendo competencias del legislativo estatal y vulnerando, con ello, previsiones de carácter federal que autorizaban al máximo órgano judicial de la federación a intervenir. Sea como fuere, expondremos en el último apartado de este capítulo las tesis esgrimidas por defensores y detractores, mas, como ya hemos indicado, sin tomar partido alguno y sin realizar la más mínima observación al respecto, para que sea cada cual quien tome sus propias decisiones en este espinoso asunto.

Una última cuestión acerca de las fuentes manejadas: si bien en cuanto a la primera parte de este capítulo (la relativa a la sucesión de acontecimientos y estrategias adoptadas por cada

uno de los equipos de juristas y estrategas que aconsejaban a cada uno de los aspirantes a la Casa Blanca) nos hemos apoyado fundamentalmente en los estudios sobre el tema indicados en la primera nota al pie de página del presente capítulo, sin embargo a la hora de abordar el desarrollo y análisis de los procedimientos judiciales hemos optado, en lugar de apoyarnos en comentarios que la doctrina jurídica estadounidense ha realizado sobre los mismos, por acudir directamente a la documentación oficial de cada caso, al tratarse de una fuente primaria, sin perjuicio de que con carácter puntual pueda hacerse referencia a anotaciones o referencias concretas que sobre determinado aspecto del caso haya realizado algún autor.

2. Normativa federal y normativa electoral vigente y aplicable a las elecciones presidenciales del año 2000

Ya hemos descrito en los capítulos anteriores el modelo de elecciones presidenciales estadounidenses, las razones que inclinaron a los constituyentes a adoptar dicho sistema y las interpretaciones jurídicas existentes acerca de la distribución competencial federación-estados a raíz de las previsiones constitucionales (aspecto este sobre el que nos hemos detenido in extenso tanto en el primer capítulo –a la hora de abordar el proceso constituyente norteamericano y el pensamiento de los padres fundadores en el momento de institucionalizar jurídicamente el cargo de presidente de los Estados Unidos– como en el segundo del presente libro al analizar los procedimientos que tuvieron lugar en las sesiones de la Electoral Commission durante el mes de febrero de 1877). Hemos de matizar que de manera absolutamente errónea suele considerarse que el presidente de los Estados Unidos es elegido por el pueblo, afirmación que si bien es cierta de facto, de iure no lo es ni

mucho menos. Si echamos un vistazo al artículo II sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos de América podemos ver que en el mismo se establece sin el menor género de duda que quienes tienen en sus manos la elección del presidente (los compromisarios o *electors*) son elegidos por los diferentes estados en la forma que establezca su poder legislativo, y no por los ciudadanos de los estados, dado que cada legislatura estatal goza de una amplísima discrecionalidad a la hora de establecer la forma de elección que desee; en otras palabras, por mucho que pueda rechinar a nuestras convicciones, constitucionalmente sería posible hoy en día que un estado decidiera que los compromisarios fuesen elegidos por la legislatura estatal o por el gobernador en vez de depositar la decisión en manos de los ciudadanos. Las razones de que el precepto constitucional indicado tuviese dicha redacción y se optase por tal sistema ya las indicamos en el capítulo primero y se deben, pura y simplemente, al contexto ideológico y a la filiación doctrinal de los padres fundadores: estos tenían muy serias reservas sobre el sistema democrático de elección presidencial directa por los ciudadanos, y para evitar los riesgos que ello entrañaba crearon esa atípica figura del Electoral College. Una cosa es que, a estas alturas del siglo XXI, pueda parecer anacrónico un sistema que ocasionalmente eleve a la presidencia a un candidato con apoyo popular minoritario (caso de Lincoln en 1860) o que el candidato popularmente más votado no sea finalmente el elegido (caso de Andrew Jackson en 1824, Tilden en 1876 y Benjamin Harrison en 1888);⁵¹⁴ pero otra muy distinta es el hecho de que, a efectos jurídico-constitucionales y en tanto el precepto en cuestión no sea modificado, la única interpretación posible del mismo no sea otra que la de que cada uno de los estados

⁵¹⁴ El Electoral College también es susceptible de crear una enorme desproporción entre voto popular y voto compromisario, tal cual sucedió en las elecciones de 1960, como hemos expuesto anteriormente.

goce de la discrecionalidad más absoluta a la hora de establecer el sistema de elección de compromisarios, sin más limitaciones que la fecha de celebración de los comicios y aquella en que los compromisarios han de reunirse en las capitales de sus estados para emitir los correspondientes votos a los candidatos a presidente y vicepresidente, fechas cuya fijación está en manos del gobierno federal. En este sentido, la propia sentencia *Bush v. Gore* comienza haciéndose eco de este particular aspecto, recordando que el ciudadano estadounidense no goza del derecho constitucional de elegir a los compromisarios en tanto el mismo no sea reconocido a través de la correspondiente ley estatal.

*The individual citizen has no federal constitutional right to vote for electors for the President of the United States unless and until the state legislature chooses a statewide election as the means to implement its power to appoint members of the electoral college. U. S. Const., Art. II, § 1. This is the source for the statement in McPherson v. Blacker, 146 U. S. 1, 35 (1892), that the state legislature's power to select the manner for appointing electors is plenary; it may, if it so chooses, select the electors itself, which indeed was the manner used by state legislatures in several States for many years after the framing of our Constitution. Id., at 28–33. History has now favored the voter, and in each of the several States the citizens themselves vote for Presidential electors.*⁵¹⁵

Expuesto lo anterior, y partiendo del marco constitucional básico (artículo II sección I de la Constitución de los Estados Unidos), es obligado recordar que existe una división

⁵¹⁵ Ocho días antes, el 4 de diciembre de 2000, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya se había hecho eco de esta circunstancia cuando en su sentencia *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board* cita de manera expresa el caso *Mc. Pherson v. Blacker*, donde se establece que «[Art. II 1] does not read that the people or the citizens shall appoint, but that 'each State shall'...».

competencial a la hora de regular el proceso electoral de elecciones presidenciales. En otras palabras, que existe respecto a esta materia tanto legislación federal como estatal, lo que implica un doble nivel integrado por:

A) *Normativa federal*, contenida en el título III capítulo 1 del *United States Code*. Es competencia exclusiva de la federación y, por tanto, los estados han de respetar obligatoriamente ese marco normativo, la fijación de las siguientes fechas o plazos (que han de ser comunes para todos los estados que integran la federación):

— Día en que han de celebrarse las elecciones para compromisarios presidenciales, que se fijan *ex lege* el martes siguiente al primer lunes del mes de noviembre de cada cuatro años (sección 1).⁵¹⁶ En el año 2000, la fecha en cuestión correspondía al martes día 7 de noviembre.

— Día en que los procedimientos impugnatorios que cada estado establezca, en relación con los comicios, han de estar definitivamente resueltos, estableciendo como límite máximo insuperable el sexto día anterior a la reunión de los compromisarios para emitir su voto (sección 5).⁵¹⁷ En el

⁵¹⁶ «*The electors of President and Vice President shall be appointed, in each State, on the Tuesday next after the first Monday in November, in every fourth year succeeding every election of a President and Vice President*». Una versión consolidada del *United States Code* puede consultarse en <http://uscode.house.gov/>

⁵¹⁷ «*If any State shall have provided, by laws enacted prior to the day fixed for the appointment of the electors, for its final determination of any controversy or contest concerning the appointment of all or any of the electors of such State, by judicial or other methods or procedures, and such determination shall have been made at least six days before the time fixed for the meeting of the electors, such determination made pursuant to such law so existing on said day, and made at least six days prior to said time of meeting of the electors, shall be conclusive, and shall govern in the counting of the electoral votes as provided in the Constitution, and as hereinafter regulated, so far as the ascertainment of the electors appointed by such State is concerned*». Obsérvese que dicha norma deja en libertad total a los estados la aprobación de normas que han de regir los procedimientos administrativos y judiciales de impugnación

año 2000 la fecha tope en el que cada estado debería tener ya resueltos todos los procedimientos impugnatorios de los comicios correspondía al martes día 12 de diciembre,⁵¹⁸ fecha que, como el lector habrá comprobado, coincide con la fecha de la resolución del caso *Bush v. Gore* en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

— día en que han de reunirse los compromisarios para emitir su voto, algo que debe realizarse el lunes que sigue al segundo miércoles de diciembre (sección 7).⁵¹⁹ En el año 2000, ese lunes correspondía al día 18 de diciembre.

B) *Normativa estatal*. Salvo los aspectos anteriormente indicados, y alguna cuestión tangencial más,⁵²⁰ el resto de la materia electoral es competencia exclusiva de cada estado.

de comicios, con una doble limitación que todo estado ha de respetar: 1) tales leyes han de aprobarse antes del día establecido para la celebración de las elecciones; 2) en todo caso, los procesos han de estar resueltos, como máximo, seis días antes de la reunión de los compromisarios en la capital del estado para emitir el voto.

⁵¹⁸ Esta fecha marca lo que en la terminología jurídica se conoce como *safe harbor*, es decir, el margen que tiene el estado en cuestión para resolver los conflictos de carácter jurídico que se planteen en los comicios presidenciales. Ahora bien, ello no quiere decir que los procedimientos deban estar necesariamente resueltos antes de dicha fecha, sino que tal tope marca las consecuencias jurídicas que se atribuye a la resolución del mismo, y en concreto, en la inmunidad o inatacabilidad de las resoluciones adoptadas previamente a dicha fecha. Esto no impide que los procedimientos impugnatorios se resuelvan con posterioridad, pero con ello se pierde la inmunidad legal y es posible que otras instituciones federales cuestionen el resultado. Este es uno de los argumentos clave de la crítica a la sentencia *Bush v. Gore* (véase a título ilustrativo, Jed RUBENFELD, *Not as bad as Plessy. Worse*, en Bruce ACKERMAN (coord.), *Bush v. Gore, a question of legitimacy*, Yale University Press, 2002, pp. 20-37).

⁵¹⁹ «*The electors of President and Vice President of each State shall meet and give their votes on the first Monday after the second Wednesday in December next following their appointment at such place in each State as the legislature of such State shall direct*». La normativa federal, puede comprobarse, deja en manos del legislativo de cada estado el establecimiento del lugar donde hayan de reunirse los compromisarios.

⁵²⁰ El título III, capítulo I, del *U. S. C.* aborda también otras cuestiones como, por ejemplo, el modo de cubrir las vacantes que se produzcan en el Electoral College (sección 4), o el modo de realizar las votaciones y de elaborar los certificados de voto (secciones 8 a 10).

Cada una de las unidades estatales goza de la libérrima potestad de establecer sus propios sistemas electorales, sus propios organismos encargados del recuento y sus propios procedimientos (tanto administrativos como judiciales) de resolución de conflictos que afecten a los resultados electorales, sin otros límites que el de respetar las fechas y plazos establecidos en la legislación federal y a los que nos hemos referido en el apartado anterior. Centrándonos en el estado de Florida, la legislación aplicable en el año 2000 la integraba el Título IX (*electors and statutes*) de los *Florida Statutes*, que constituían el núcleo del *Florida Electoral Code*, siendo de destacar las previsiones contenidas en los apartados 102 y 103, que regulaban detalladamente la materia.⁵²¹ El Tribunal Supremo de Florida realiza un excelente análisis sistemático y conceptual de la normativa y la administración electoral de dicho estado en el apartado V de su sentencia *Palm Beach Canvassing Board. v. Harris*:

- La secretaria de estado de Florida es la máxima autoridad en la materia y tiene a su cargo la supervisión de todo el proceso electoral (97.012).⁵²²
- En cada condado (*county*) habrá un cargo electo denominado *Supervisor of Elections* (98.015[1]),⁵²³ encargado de establecer para cada zona electoral

⁵²¹ Puede consultarse la normativa electoral vigente en Florida en el año 2000 en: http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Index&Title_Request=IX#TitleIX

⁵²² «*The Secretary of State is the chief election officer of the state*», detallando a continuación en doce apartados las competencias que ostenta como tal.

⁵²³ «*A supervisor of elections shall be elected in each county at the general election in each year the number of which is a multiple of four for a 4-year term commencing on the first Tuesday after the first Monday in January succeeding his or her election. Each supervisor shall, before performing any of his or her duties, take the oath prescribed in s. 5, Art. II of the State Constitution.*»

del condado, previamente al proceso electoral, los organismos (*Election Boards*) encargados del desarrollo electoral, recuento de votos y certificación de los mismos al supervisor (102.012[1]).⁵²⁴

- El *County Canvassing Board*, integrado por el supervisor, un juez del condado y el presidente del *Board of County Commissioners*, es el organismo encargado de la recepción de los resultados electorales de todo el territorio del condado, de la revisión de los certificados recibidos y de su remisión al Departamento de Estado de Florida previamente a las cinco horas del séptimo día siguiente a las elecciones (102041[1]),⁵²⁵ salvo en el caso de los votos por correo (*absentee ballots*) para los cuales la fecha máxima de remisión se amplía cuatro días más.
- En lo que se refiere a los procedimientos impugnatorios, y aun a riesgo de simplificar quizá un tanto los conceptos para hacerlos comprensibles al lector español, se establecen o distinguen dos

⁵²⁴ «The supervisor of elections of each county, at least 20 days prior to the holding of any election, shall appoint two election boards for each precinct in the county; however, the supervisor of elections may, in any election, appoint one election board if the supervisor has reason to believe that only one is necessary. The clerk shall be in charge of, and responsible for, seeing that the election board carries out its duties and responsibilities. Each inspector and each clerk shall take and subscribe to an oath or affirmation, which shall be written or printed, to the effect that he or she will perform the duties of inspector or clerk of election, respectively, according to law and will endeavor to prevent all fraud, deceit, or abuse in conducting the election. The oath may be taken before an officer authorized to administer oaths or before any of the persons who are to act as inspectors, one of them to swear the others, and one of the others sworn thus, in turn, to administer the oath to the one who has not been sworn. The oaths shall be returned with the poll list and the returns of the election to the supervisor. In all questions that may arise before the members of an election board, the decision of a majority of them shall decide the question. The supervisor of elections of each county shall be responsible for the attendance and diligent performance of his or her duties by each clerk and inspector.»

⁵²⁵ «The County Canvassing Board shall be composed of the supervisor of elections; a county court judge, who shall act as chair; and the chair of the board of county commissioners.»

tipos de procedimientos: el primero, *protest* (regulado en 102166) y que podríamos denominar «administrativo», se insta ante el propio *County Canvassing Board* previamente a que este certifique los resultados; el segundo, *contest* (regulado en 102168), ya estrictamente judicial, ha de interponerse ante el Juzgado de Circuito (*Circuit Court*) frente a la certificación de los resultados electorales realizada por los organismos competentes. Tales preceptos legales serán transcritos de forma literal más adelante cuando se aborden los procedimientos concretos instados al amparo de los mismos.

3. Las elecciones presidenciales del año 2000 en el estado de Florida. Días 7 y 8 de noviembre de 2000: resultados electorales, estrategias y primeros procedimientos judiciales

La campaña electoral del año 2000 fue larga e intensa, y todo el mundo daba por hecho que se estaría ante unos comicios más que ajustados. En 1996 los demócratas habían logrado que Bill Clinton fuese reelegido como presidente, consiguiendo por vez primera desde 1945 que un demócrata retuviese la Casa Blanca durante dos mandatos consecutivos (algo que no ocurría desde que Franklin D. Roosevelt fuera elegido sucesivamente en las elecciones de 1932, 1936, 1940 y 1944, como hemos indicado),⁵²⁶ aunque este segun-

⁵²⁶ Aunque Truman fue elegido presidente en 1948, en rigor no se trataba de una reelección, pues su ascenso a la presidencia el 12 de abril de 1945 tuvo lugar a consecuencia del fallecimiento de Roosevelt. Lo mismo puede decirse de Lyndon B. Johnson, quien, aunque fue elegido presidente en 1964, como todo el mundo sabe, había ascendido a

do mandato demócrata se vio ensombrecido por las victorias republicanas en las elecciones legislativas que situaron a Clinton frente a un Congreso dominado por el partido rival. La popularidad del presidente no logró caer del todo pese a los aireados escándalos que afectaron a su vida privada, y que terminaron tanto en los tribunales de justicia (llegando incluso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso *Clinton v. Jones*)⁵²⁷ como en un *impeachment* presidencial (que era público no gozaba de los votos necesarios para que prosperase) minando gran parte del crédito demócrata. Para las elecciones del 2000, las convenciones de ambos partidos optaron por candidatos pertenecientes a poderosas familias fuertemente vinculadas al *establishment* político estadounidense.

Así, George W. Bush, gobernador de Texas, era hijo del presidente republicano George H. W. Bush (que, entre otros muchos cargos, había desempeñado durante un año –enero de 1976 a enero de 1977– la dirección de la C. I. A.; ostentó duran-

la presidencia tras el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. James («Jimmy») Carter logró en 1976 una victoria muy reñida frente a Gerald Ford (quien en 1974 había sustituido a Nixon tras la dimisión de este a consecuencia del escándalo Watergate), pero no logró ser reelegido en los comicios de 1980, donde el republicano Ronald Reagan literalmente le avasalló al derrotarle en cuarenta y tres de los cincuenta estados y obtener el voto de 489 compromisarios frente a los 49 de Carter. Un excelente análisis de la evolución política estadounidense del último cuarto del siglo xx lo tenemos en James T. PATTERSON, *Restless giant: The United States from Watergate to Bush v. Gore*, Oxford University Press, 2005; obra que constituye el volumen 11 de la *Oxford History of the United States* (hay traducción española de este volumen: *El gigante inquieto: EE. UU. de Nixon a George W. Bush*, Barcelona, Crítica, 2006). Es igualmente interesante, para comprender la transformación que sufrió la sociedad norteamericana en los años finales de los sesenta y principios de los setenta, el voluminoso estudio de Rick PERLSTEIN, *Nixonland: The rise of a president and the fracturing of America*, Scribner, 2008.

⁵²⁷ 520 US 681. El asunto se refería a unos presuntos requerimientos sexuales que a Paula Jones había realizado Clinton cuando era gobernador de Arkansas. Paula Jones interpuso en 1994 por tales hechos una demanda civil contra Clinton, quien se opuso alegando la inmunidad presidencial y, subsidiariamente, la suspensión de la causa hasta que finalizase su mandato presidencial. El Tribunal Supremo, por unanimidad, rechazó tanto aplicar la inmunidad presidencial a hechos ajenos a las actividades presidenciales como la suspensión de la causa hasta el cese de Clinton como presidente.

te ocho años la vicepresidencia de los Estados Unidos –los dos mandatos presidenciales de Ronald Reagan entre 1980 y 1988– y finalmente la misma presidencia durante los años 1988-1992) y nieto del senador Prescott Bush. En 1978 había intentado sin éxito lograr un asiento en la Cámara de Representantes, no ocupando cargo político alguno desde entonces, sin perjuicio de lo cual ayudó eficazmente a su progenitor en la campaña presidencial de 1988. Sin embargo, George Bush consiguió sorprender a todo el mundo en 1995 cuando decidió presentarse a gobernador del estado de Texas y, sobre todo, cuando consiguió acceder al cargo tras derrotar a la hasta entonces imbatible gobernadora demócrata Ann Richards. En el año 2000 decidió luchar por la candidatura republicana a la presidencia para las elecciones de dicho año y, pese a que lo tuvo más difícil que su homólogo demócrata, logró finalmente vencer en las primarias a su principal rival, el senador por Arizona John McCain.⁵²⁸

Por su parte, Albert Gore Jr., vicepresidente de los Estados Unidos durante los dos mandatos de Clinton, era un producto del *establishment* de Washington, al que se hallaba indisolublemente ligado. Hijo del político Albert Gore Sr. (que fue miembro de la Cámara de Representantes y ulteriormente senador por Tennessee), tras estudiar en Harvard, se opuso, al igual que su padre, a la guerra de Vietnam, lo que no le impidió alistarse en el ejército e incluso desplazarse al propio escenario bélico, si bien estuvo todo el tiempo destinado en labores de retaguardia. Posteriormente se adentró en el mundo de la política a través del Partido Demócrata y, siguiendo los pasos de su padre, fue miembro de la Cámara de Representantes durante los años 1977 a 1985, y senador por su estado natal de Tennessee entre 1985 y 1993. En el año 1988 trató infructuosamente de alzarse

⁵²⁸ La cronología y los resultados por estado de las primarias republicanas pueden verse en: <http://www.uselectionatlas.org/RESULTS/timeline.php?year=2000&f=0&coff=0&elect=2> (consultado el 11 de noviembre de 2011).

con la nominación demócrata para la presidencia, candidatura que finalmente alcanzaría George Dukakis. Sin embargo, Gore se tomó la revancha cuatro años más tarde, cuando en 1992 logró alzarse con la candidatura demócrata a la vicepresidencia, de manera que el *electoral ticket* compuesto por Clinton y Gore derrotó a la candidatura republicana de George Bush Sr. Tras ocupar durante ocho años la vicepresidencia, era el candidato natural para suceder a Bill Clinton, de manera que en el año 2000 acabó imponiéndose en las primarias demócratas frente a otros candidatos como Bill Bradley (senador por New Jersey) siendo elegido, por aclamación, candidato del partido a la presidencia de forma unánime.⁵²⁹

Todo hacía presagiar unas elecciones muy reñidas, y, en efecto, los principales asesores de campaña de ambos partidos, pese a su entusiasmo de cara al público, en privado no cesaban de mostrar su preocupación al verificar que no lograban remontar las encuestas. De ahí que ambos candidatos se centraran en un intento de obtener la victoria en los estados aún no inclinados definitivamente a favor de ninguno de los contendientes.

3.1. *Los días 7 y 8 de noviembre de 2000 en Florida*

We thought it would be close. But never in my wildest dreams did I ever think would be this close.

Jeb Bush, gobernador de Florida

Situémonos momentáneamente en Florida, estado al que Zelden describe políticamente como microcosmos de la nación: «*diverse, conflicted and highly partisan*». Territorio adquirido a la corona española en 1819 en virtud del Tratado

⁵²⁹ La cronología y los resultados por estado de las primarias demócratas pueden verse en: <http://www.uselectionatlas.org/RESULTS/timeline.php?year=2000&f=0&off=0&elect=1> (consultado el día 11 de noviembre de 2011).

Adams-Onis, se incorporó a la Unión como vigesimoséptimo estado el día 3 de marzo de 1827. El *Sunshine State*, con capital en Tallahassee, tiene una extensión de 139670 km² y en el año 2000 contaba con una población de 15982378 habitantes. Políticamente, tanto el legislativo como el ejecutivo estaban en manos republicanas (de hecho, el gobernador del estado, Jeb Bush, era hermano menor del candidato republicano a la presidencia) mientras que el Tribunal Supremo de Florida constituía un baluarte demócrata con magistrados abiertamente hostiles al legislativo republicano. Florida, cuyos votos podrían ser decisivos a la hora de determinar quién sería el próximo inquilino de la Casa Blanca (al ser uno de los estados donde el resultado era incierto), aportaba al Electoral College un total de 25 votos compromisarios, y ya contaba en su historia política con un precedente en cuanto a la disputa de resultados electorales en unos comicios presidenciales, como hemos detallado en el capítulo anterior al abordar con detalle las elecciones de 1876. Desde el año 1980 la victoria en las elecciones presidenciales había acompañado inexorablemente al Partido Republicano, salvo en 1996 cuando Bill Clinton con más de dos millones y medio de votos que representaban un porcentaje del 48,02% logró imponerse frente al candidato republicano Robert Dole, quien aun así obtuvo 2244000 votos que representaban un total del 42,32%. No obstante, determinadas zonas del sur del estado que son, a su vez, las más densamente pobladas (los condados de Miami-Dade, Monroe, Broward y Palm Beach) se convirtieron en feudos tradicionales del Partido Demócrata desde las elecciones presidenciales de 1992.⁵³⁰ Durante la campaña presidencial de 2000 la secretaria de estado de Florida, Katherine Harris, había apoyado al candidato republicano George Bush,

⁵³⁰ Todos los datos se toman del excelente *Dave Leip's Atlas of U. S. Presidential Elections*, accesible desde internet en <http://uselectionatlas.org/>

mientras que el *attorney general* del estado, Bob Butterworth, había solicitado el voto para el demócrata Al Gore.

Otro dato que conviene retener es la peculiaridad de las papeletas electorales utilizadas en veinticuatro de los sesenta y siete condados de Florida. En dichos territorios, los organismos encargados del desarrollo y supervisión de las elecciones (los *County Canvassing Boards*) habían optado por sistemas mecánicos de votación, donde las papeletas las constituían cartulinas en las cuales el votante debía presionar con un punzón en el centro de la misma a la altura del lugar indicado para el candidato por el que se votaba, de tal manera que el registro, lectura y cómputo del voto se realizase no manualmente, sino de forma mecánica por medio de un lector óptico que fuese capaz de penetrar la perforación realizada por el votante en la cartulina.⁵³¹ Sin embargo, en el condado de Palm Beach la papeleta electoral tenía una

⁵³¹ Una explicación muy didáctica sobre el sistema de votación y los conceptos de «undervote» y «overvote» nos la ofrece, en el siguiente párrafo, el juez Richard A. Posner: «*The voter who votes on a punchcard voting machine uses a stylus or the equivalent to punch out a 'chad' (a small perforated rectangle or circle) in a paper ballot that is placed on a tray that has a space between the ballot and the bottom of the tray, to which the chad falls. The punched ballot is placed in a computer that counts the votes in the ballot by shining a light on it. If a chad has been punched through, the light will shine through the hole, registering a vote for the candidate whose chad it was. If the chad is still clinging to the hole, it may obstruct the beam of light, and so a vote will not be counted. That is an 'undervoted' ballot. And if the chads of more than one candidate for the same office have been punched through, or if the chad for one candidate has been punched through and the name of a candidate for that office has been written in the space for a write-in-candidate—even if it is the name of the punched candidate—The computer is programmed to record no vote for that office. That is an 'overvoted' ballot*», *Breaking deadlock*, o. cit., pp. 7-8 y 50-51. En este sentido, es interesante la precisión que efectúa Ronald L. Rotunda y muy a tener en cuenta por el grado de subjetividad que puede conllevar la revisión o recuento manual de la papeleta: «*The voter may have decided not to vote for any candidate for that office and therefore intentionally made no punch but still created an indentation accidentally while handling the ballot. Or the voter may not have followed the instructions to punch through the ballot with the stylus that is attached in the voting booth. Or the voter may have intended to vote for one candidate, but did not follow the instructions and thus did not punch the card correctly but left an indentation. In addition, when ballots are handled during the manual count, indentations will occur, either by accident (people handling the ballot and that affects them) or on purpose (someone with a corrupt motive can add an indentation by simply using one's fingernail)*», «Yet another article on Bush v. Gore», *Ohio state law journal*, vol. 64, n.º 283 (2003).

curiosa peculiaridad: Theresa LePore, la presidenta del County Canvassing Board, se encontró con una dificultad al solicitar el diseño de la misma: se elaboró una papeleta rectangular dividida en dos partes iguales en las que el nombre de los candidatos se situaría a la izquierda y en la espina central el lugar donde el votante debería realizar la perforación; no obstante, y dado que en el año 2000 se presentaron diez candidaturas, el encaje de los diez candidatos en la zona izquierda de la cartulina era sumamente difícil utilizando el tamaño mínimo de letra (10) establecido en la legislación estatal, por lo que al hacer uso del mismo los ancianos y personas con problemas de visión podrían tener dificultades a la hora de emitir su voto. En vista de tal circunstancia, LePore (que a lo largo de toda su larga trayectoria en la administración electoral había manifestado una sincera preocupación por garantizar el derecho a voto de los invidentes y facilitar la tarea a quienes adoleciesen de deficiencias de visión) rechazó utilizar el tamaño mínimo de letra y en su lugar decidió incorporar uno mayor pero, dado que con dicho tipo de letra no era posible la ubicación de todas las candidaturas en una sola de las alas de la papeleta, se acordó repartirlas a ambos lados, con una flecha indicativa que uniría el nombre del candidato con el lugar donde el ciudadano habría de realizar la perforación para emitir su voto; este modelo fue conocido en el argot popular estadounidense como *butterfly ballot*. Así, el primer nombre que aparece en la parte superior izquierda de la papeleta es el de George Bush, el primero en la parte superior derecha Pat Buchanan, y el segundo de la parte izquierda Al Gore; el nombre de Gore se sitúa físicamente debajo del de Bush, pero a la hora de votar entre ambos se ubica Pat Buchanan.⁵³² Dado que esta larga explicación puede ser de comprensión un tanto difícil, y como una imagen vale más

⁵³² Es costumbre en Florida que, en las papeletas electorales, las distintas candidaturas se ordenen conforme a un criterio jerárquico teniendo en cuenta su posición en las últimas elecciones a gobernador del estado.

que mil palabras, remitimos al lector a la figura 1, que refleja la papeleta utilizada en el condado Palm Beach en las elecciones presidenciales del año 2000. Conviene indicar que, previamente a su adopción, LePore mostró el diseño no solo a los representantes de los candidatos, sino incluso a miembros de ambos partidos, sin que nadie le manifestase objeción alguna.⁵³³ De esta manera, lo que en principio tenía como objetivo evitar que determinados colectivos pudieran no discernir correctamente las diferentes candidaturas (de hecho, nadie cuestionó ni puso jamás en duda la buena fe que en todo momento presidió las actuaciones de LePore en este aspecto) terminó creando un foco de confusión cuya sombra se proyectaría finalmente sobre los comicios.

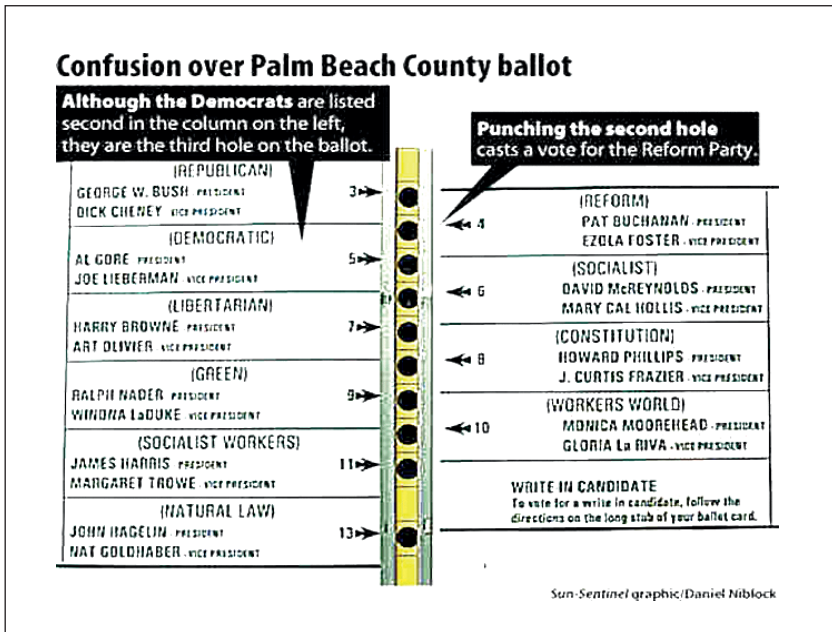


FIGURA 1. Papeleta electoral del condado de Palm Beach

⁵³³ Para todo lo relativo al establecimiento de la *butterfly ballot*, véase: Vv. AA, *Deadlock*, o. cit., pp. 65-67; Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., pp. 13-15; y Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. 8-9.

El día 7 de noviembre de 2000 era el día establecido por la legislación federal para la celebración de los comicios presidenciales. Ese día, ambos candidatos afrontaban la jornada electoral derrochando optimismo de cara a la galería, mas en privado ambos manifestaron su preocupación⁵³⁴ dado que las encuestas auguraban unos resultados cercanos al empate técnico, hasta el punto de que incluso a las cuatro de la tarde Bill Schneider, analista político de la CNN, no solo pronosticaba un empate a votos, sino que auguró a los espectadores que quedaba una larga noche por delante.⁵³⁵ George Bush pasó toda la jornada en su residencia oficial de gobernador de Texas, mientras que su oponente Al Gore decidió permanecer en Nashville. Ambos contendientes intentaron durante la jornada electoral hacer un último esfuerzo de captación de votos. Según iban llegando los resultados de los diferentes territorios, pronto quedó claro que Florida sería clave a la hora de inclinar la balanza hacia uno de los candidatos. Mas algo extraño estaba sucediendo en dicho estado.

En efecto, a las ocho menos diez de la mañana de ese día 7 de noviembre, Liz Hyman, joven asociada de un bufete de abogados de Washington que actuaba como voluntaria demócrata en el condado de Palm Beach, es interpelada por varios ciudadanos que le manifiestan no estar seguros de haber votado correctamente por Al Gore y Joe Lieberman, puesto que han tenido problemas con la papeleta electoral. Tal circunstancia coge por sorpresa a Hyman (dado que, en muchos casos, quienes la abordan no son votantes neófitos, sino ciudadanos que acumulaban sobre sus espaldas numerosas

⁵³⁴ Pese a que en Texas se trataba de destilar optimismo, tras ver la primera oleada de encuestas a pie de urna, George Bush manifestó a sus hijas: «*Girls, it could be a long night. Your dad may lose de presidency, and the numbers don't look so good*», VV. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 20.

⁵³⁵ Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 1.

votaciones en anteriores comicios presidenciales),⁵³⁶ así que decide poner los hechos en conocimiento de su padre Lester Hyman, un veterano abogado simpatizante demócrata y colaborador de dicho partido, quien a su vez los traslada a Ron Klain, un conocido suyo y antiguo asesor de Gore en la época en la que el entonces aún vicepresidente iniciaba su campaña para presentarse como sucesor natural de Clinton.⁵³⁷ Los demócratas contactan con Theresa LePore, la presidenta del Canvassing Board, a fin de que esta procediese a adoptar las medidas necesarias para paliar dicha circunstancia, emitiendo instrucciones a los supervisores de las mesas electorales para que estos auxiliasen a los votantes que tuviesen dificultades con las papeletas electorales, tarea que acabaron asumiendo los propios demócratas ante la insuficiencia numérica de las autoridades encargadas de la supervisión del desarrollo electoral. Sobre este tema de la *butterfly ballot* se pronunció expresamente el candidato demócrata a la vicepresidencia, Joseph Lieberman, en una entrevista radiofónica que se le realizó a las cinco y media de la tarde en la cual, al ser informado por el locutor sobre el hecho de que varios bufetes de abogados estaban recogiendo testimonios y pruebas sobre el particular, Lieberman manifiesta que es una buena idea, dado que si el resultado de las elecciones es tan ajustado como se prevé, posiblemente se produjeran impugnaciones a lo largo de todo el territorio de los Estados Unidos.⁵³⁸

⁵³⁶ «*Like most politically attuned people, Hyman had a vague sense that voters were sometimes confused at the polls, but this seemed... different. These were experienced voters, indeed political veterans. Shouldn't they have understood what they were doing? It was puzzling*», Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 4.

⁵³⁷ Klain, sin haber sido oficialmente despedido, fue retirado de la campaña, y pasó a ser socio en el bufete O'Melveny, propiedad de Warren Christopher. Con posterioridad, el nuevo responsable de la campaña de Gore, William Daley, solicitó la ayuda de Klain (Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., pp. 11-12). Sobre esta confusión de los votantes, véase también: Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., pp. 23-24 y 68-70.

⁵³⁸ Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 28.

A medida que se cierran las urnas y van llegando los primeros resultados, se constata que los pronósticos no estaban errados y que se confirma en la práctica un empate técnico entre ambos candidatos. Los cuarteles demócratas siguen con mucha atención el devenir de los acontecimientos en los estados de Michigan, Pennsylvania y Florida, en los cuales creían iba a decidirse la presidencia; en ese momento, Bush poseía una ligera ventaja en el segundo de los estados, mientras que en los otros dos la disputa estaba prácticamente igualada.⁵³⁹ Fue un revés especialmente doloroso para los demócratas contemplar cómo Bush lograba una victoria en Tennessee, estado natal de Gore, donde el republicano se impuso con el 51,15% de los votos frente al 47,28% de su rival.

La situación en Florida toma unos derroteros en principio favorables a los demócratas, dado que, a las ocho menos diez de la tarde, los noticiarios de la cadena NBC proclaman a Gore vencedor en dicho estado, noticia que es confirmada casi inmediatamente por la CBS y por ABC.⁵⁴⁰ Poco después, a las ocho de la tarde, se informa que los demócratas han logrado una victoria en el estado de Minnesota, y a las diez menos cuarto se constata que en Nuevo México Al Gore se ha impuesto a su rival.⁵⁴¹ Sin embargo, los demócratas que se encontraban a pie de urna en el estado de Florida no las tenían todas consigo dado lo ajustadísimo de los números y, pese a las noticias proclamando la victoria de Gore, optaron por actuar con prudencia. El tiempo les dio la razón y, a las diez de la noche, los telediaros y las principales agencias informativas rectifican la

⁵³⁹ Al Gore acabaría venciendo tanto en Michigan (por 51,28% frente al 46,13% de Bush) como en Pennsylvania (50,6% de los votos frente a los 46,43% de su rival).

⁵⁴⁰ Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 18; Vv. AA, *Deadlock*, o. cit., p. 35; Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 2.

⁵⁴¹ Gore logró, en efecto, una victoria en Nuevo México, pero prácticamente in extremis, dado que, en realidad, estadísticamente se produjo un empate técnico: 47,91% de los votos demócratas frente al 47,87% de los republicanos.

anterior información y sitúan al estado de Florida como aún indeciso (*too close to call*) al existir una situación de equilibrio de voto entre los candidatos.

A la una de la madrugada del día 8 de noviembre, los primeros resultados oficiales hechos públicos por el gobierno de Florida sitúan en cabeza al candidato republicano con un margen de veintinueve mil votos sobre su rival demócrata, noticia de la que se hace eco la prensa, aunque reduciendo el margen de ventaja. Una hora más tarde, a las dos de la mañana, la cadena Fox News declara a George Bush como vencedor en Florida, y un cuarto de hora más tarde todas las cadenas se unen a la Fox situando al *Sunshine State* dentro de los estados en los que se ha producido una victoria republicana. Al Gore considera que todas sus opciones se han volatilizado, agradece a sus colaboradores más cercanos la ayuda prestada y manifiesta su intención de reconocer la derrota. Así, sin esperar a disponer de una información más detallada y fiable, Gore se pone en contacto telefónico con George Bush y en una llamada de apenas dos minutos le felicita por su victoria, indicándole que en breves momentos se dirigirá a la nación para hacer público su discurso (el *concession speech*) reconociendo la victoria republicana.⁵⁴²

⁵⁴² Este fue, sin lugar a dudas, el mayor error cometido por el candidato demócrata y que contribuyó, en gran medida, a ofrecer la imagen de que todo el periplo judicial que siguió a su ulterior retractación buscaba en los estrados una victoria que no había conseguido en las urnas. Una posible explicación a esta actitud nos la ofrece Jeffery Toobin, quien liga este precipitado comportamiento a la personalidad de Gore: «*Gore and his campaign lived by the authority of the Washington staff. If the television networks, the broadcast wing of that stablishment, said the Election was over, the Election was over. If they said it was time to concede, it was time to concede. Gore cared more about even those abstract vote counters than about the man he had hired to watch the actual votes*», Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 21. A mayor abundamiento, cuando una hora más tarde Gore llama a Bush para volverse atrás, lo primero que pregunta a uno de sus asesores es «*what the press was saying about the turn of events*». Aunque es cierto que en ese momento la actitud de Gore podría tener cierta disculpa por la confusión creada por los telediarios, bien es cierto que los asesores y simpatizantes que se encontraban en el estado de Florida siguiendo el recuento al pie del cañón, aún no le habían confirmado la derrota y, por tanto, su actitud pecó de precipitada, algo inconcebible en quien aspira a ocupar la Casa Blanca.

No obstante, los acontecimientos dan un Nuevo giro de ciento ochenta grados. Mientras se dirigía al *Nashville War Memorial* a fin de pronunciar su *concession speech*, Bob Butterworth, el *attorney general* de Florida que había hecho campaña electoral por Gore, se pone en contacto con el equipo de asesores del candidato demócrata para que impidiesen a este hacer pública su derrota: el margen de ventaja de George Bush era en esos momentos de seis mil votos y continuaba descendiendo según aumentaba el escrutinio, por lo que en aplicación de la legislación de Florida debía producirse un recuento automático de votos;⁵⁴³ las noticias de la victoria de Bush se basaban en cómputos erróneos y aún faltaban por escrutar los votos en varios condados de Florida, muchos de los cuales eran tradicionalmente feudos demócratas. Poco después se recibe en Nashville una llamada telefónica de Michael Whouley, quien estaba al frente del equipo demócrata que supervisaba las elecciones en Florida, informando de que existe un error en los votos del condado de Volusia y que, en efecto, la victoria de Bush es tan ajustada que va a ser necesario un recuento automático de votos. El asesor de la campaña de Gore, William Daley,⁵⁴⁴ se pone en contacto con su homólogo republicano para manifestarle que el *concession speech* de Gore iba a demorarse unos minutos porque la situación en Florida había dado un vuelco sustancial.⁵⁴⁵ A la vista de los acontecimientos, Gore deseaba continuar la lucha, pero no si ello implicaba

⁵⁴³ «*What is he doing? He can't concede*», manifiesta un airado Butterworth. Cuando William Daley, el principal responsable de la campaña demócrata, pregunta a Butterworth si está seguro de lo que dice, este responde: «*I'm the attorney general. I'm sure*», VV. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 48; Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. 16-17.

⁵⁴⁴ Como dato curioso, William Daley era hijo de Richard Joseph Daley, líder demócrata y alcalde de Chicago desde 1955 hasta 1976, sobre quien pesan más que fundadas sospechas de manipulación electoral en la ciudad de Chicago durante las elecciones presidenciales de 1960, inclinando la balanza a favor del candidato demócrata John F. Kennedy. Véase Andrew GUMBEL, *Steal this vote*, New York, Nation Books, 2001, pp. 161-169.

⁵⁴⁵ Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., pp. 21-25.

destruir su imagen pública o la confianza en el sistema.⁵⁴⁶ No obstante, y fuesen cuales fuesen sus intenciones y sus opciones, políticamente su imagen quedaría ya irremediadamente dañada cuando realiza la que el equipo del *Washington Post* califica como la «llamada más extraña en la historia política americana»: Gore contacta de nuevo telefónicamente con Bush, mas en esta ocasión para retractarse:

GORE: Circumstances have changed dramatically since I first call you. The State of Florida is too close to call.

BUSH: Are you saying what I think you are saying? Let me make sure I understand. You're calling back to retract that concession?

GORE: Don't get snippy about it. Let me explain. But I don't think we should be going out making statements with the state of Florida in the balance.

BUSH: My little brother say it's over.

GORE: I don't think this is something your little brother gets to decide.

*BUSH: Do what you have to do.*⁵⁴⁷

⁵⁴⁶ «Did Gore want to keep on fighting? Not if fighting splintered the electorate and harmed the public perceptions of the government. However, if he could win the election without destroying the nation in the process, then yes, he was interested», Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 17.

⁵⁴⁷ La conversación se reproduce en Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 25; y en Vv. AA., *Deadlock*, p. 49. Ambos sitúan la conversación en horas diferentes (Toobin a las dos y media de la mañana, mientras que el equipo del *Washington post* a las tres de la madrugada), y únicamente difieren en cuanto al contenido de la conversación en la respuesta que Gore ofrece a Bush cuando este indica que su hermano le confirma que todo estaba ya decidido: Toobin indica que la respuesta fue «*Your little brother is not the ultimate authority on this*»; el equipo del *Washington post* refleja la contestación que hemos transcrito, aunque reconocen que uno de los presentes recuerda haber escuchado otra respuesta: «*With all due respect to your little brother, he is not the final arbiter of who wins Florida*». Al bochorno político de esta situación sin precedente alguno en la historia constitucional americana, de un candidato presidencial retractándose de su victoria, se une el tono adoptado por Gore en tan inusual conversación, ese «*pedantic tone he often –and disastrously– adopted*»; Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 49.

A partir de este momento se inicia un proceso en el que se superponen acciones políticas y judiciales. Para entender mejor toda la complicada maquinaria que se inicia esa madrugada del 8 de noviembre del 2000, Jeffrey Toobin indica que la clave de toda esta compleja sucesión de acontecimientos tiene, en realidad, una explicación muy simple: la campaña presidencial no finalizó la madrugada del día 8 de noviembre del 2000, como debería haberlo hecho, sino que se prolongó durante los treinta y seis días siguientes.⁵⁴⁸ Esta es una realidad que, según el meritado autor, el equipo de Bush habría captado de inmediato y que sus rivales demócratas no lograron llegar a entender del todo.⁵⁴⁹

Entre los colaboradores demócratas en Nashville se encontraba Jack Young, autor junto con Timothy Downs y Chris Sautter de un breve estudio de cuarenta y seis páginas titulado *The Recount Primer*, un lúcido análisis sobre el modo de proceder en el caso de impugnación de resultados electorales.⁵⁵⁰ Son varias las tesis que Young expone a los asesores de Gore en esa madrugada del ocho de noviembre:⁵⁵¹ aconseja prudencia a la hora de acudir a los tribunales, porque la experiencia ha

⁵⁴⁸ «*A more useful way of thinking about this election, and understanding the final result, is to recognize that the campaign simply continued for more than a month after Election Day. The thirty-six day battle was fought using many familiar tools, including speech making, image management, crowd building and lobbying*», Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 7.

⁵⁴⁹ Toobin apunta igualmente a otra razón limitada a la personalidad de los candidatos. Según este autor, Gore se había acostumbrado a depender del *establishment* de la capital, del que necesitaba su aprobación, mientras que al candidato republicano le importaba poco lo que de él opinara la élite política e intelectual, depositando toda su confianza en sus subordinados: «*One candidate had supporters in the streets of Florida, and it wasn't Al Gore*», Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 8.

⁵⁵⁰ El procedimiento a seguir en estos casos difería en función de la posición del candidato: si este se encontraba en posición electoral de ventaja, debía procederse de tal manera que el margen de revisión e interpretación de las normas y procedimientos debía ser lo más estrecho y reducido posible; si, por el contrario, quien instaba el procedimiento impugnatorio partía en posición de desventaja, debía optarse por ampliar lo más posible tanto la interpretación como la revisión de los sufragios. Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., pp. 53-55; Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 18.

⁵⁵¹ Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 28.

demostrado en estos casos que quien recurre a ellos suele perder la batalla de la imagen (máxime en el caso de Gore teniendo en cuenta las dos llamadas telefónicas a Bush); discrepa de Ron Klain, dado que para este lo importante es impugnar la validez de la *butterfly ballot*,⁵⁵² e indica que la mejor solución al problema es obtener cuanta más información mejor, y, dado que el recuento automático ha de producirse *ex lege*, lo más aconsejable es trasladar todo el personal a Florida para actuar in situ en el propio centro del conflicto. En cualquier caso, William Daley, el principal responsable de la campaña demócrata, toma un par de decisiones que serán cruciales para el desarrollo de los acontecimientos. En primer lugar, considera que Gore debe ofrecer una imagen de credibilidad institucional ante la élite política e intelectual de Washington y, por tanto, los acontecimientos posteriores deben realizarse de un modo totalmente diferente a la campaña electoral, orillando todo atisbo de confrontación, motivo por el cual estima que la persona indicada para liderar los esfuerzos demócratas en Florida ha de ser Warren Christopher (secretario de Estado en el primer mandato presidencial de Clinton) personaje de rectitud e integridad públicamente reconocida y que le habrían valido el respeto casi unánime de la población (tan seguro estaba Daley de la aprobación de Gore que ni tan siquiera le consultó sobre este particular, por lo que el jefe de campaña se puso en contacto telefónico con Christopher, quien aceptó liderar los esfuerzos demócratas). En segundo lugar, comienza lo que podríamos denominar «la batalla de la prensa», remitiendo breves notas a los diferentes medios de comunicación en los que se incidía en varios aspectos cruciales:

⁵⁵² Vv. Aa., *Deadlock*, o. cit., pp. 70-71. Como veremos en el punto siguiente, a las cuatro de la mañana del día 8 de noviembre ya se había registrado la primera demanda judicial cuestionando el uso de la *butterfly ballot*. En este punto concreto, los acontecimientos judiciales demostraron que Ron Klain estaba equivocado al inclinarse por este motivo impugnatorio.

Gore había logrado la victoria en el voto popular (algo que acabó siendo cierto, pero que en la madrugada del 8 de noviembre aún no era posible afirmar con certeza); los Estados Unidos son un nación de leyes y, en consecuencia, la demora, en modo alguno, suponía una crisis política ni menos aún un vacío de poder, dado que el mandato del presidente Clinton no finalizaría constitucionalmente hasta el mediodía del 20 de enero de 2001 y, por tanto, no era necesaria una solución con carácter inmediato. Casi al mismo tiempo, el avión de Joe Lieberman, al que se denominó jocosamente *Recount one*, trasladaba a una legión de abogados y asesores políticos demócratas (entre ellos a Ron Klain y John Young) a Florida.

Mientras tanto, avanzada la madrugada del 8 de noviembre, la página web de la Secretaría de Estado de Florida muestra una victoria de Bush con un margen favorable de 1784 votos. Por tanto, dado que dicho margen es inferior al 0,5%, Katherine Harris, en estricto cumplimiento de las previsiones legales, ordena un nuevo recuento automático de votos al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.141(4) del *Florida Electoral Code*;⁵⁵³ en tales supuestos el recuento es obligado, salvo que el candidato derrotado renunciase por escrito al mismo, algo que

⁵⁵³ «If the returns for any office reflect that a candidate was defeated or eliminated by one-half of a percent or less of the votes cast for such office, that a candidate for retention to a judicial office was retained or not retained by one-half of a percent or less of the votes cast on the question of retention, or that a measure appearing on the ballot was approved or rejected by one-half of a percent or less of the votes cast on such measure, the board responsible for certifying the results of the vote on such race or measure shall order a recount of the votes cast with respect to such office or measure. A recount need not be ordered with respect to the returns for any office, however, if the candidate or candidates defeated or eliminated from contention for such office by one-half of a percent or less of the votes cast for such office request in writing that a recount not be made. Each Canvassing Board responsible for conducting a recount shall examine the counters on the machines or the tabulation of the ballots cast in each precinct in which the office or issue appeared on the ballot and determine whether the returns correctly reflect the votes cast. If there is a discrepancy between the returns and the counters of the machines or the tabulation of the ballots cast, the counters of such machines or the tabulation of the ballots cast shall be presumed correct and such votes shall be canvassed accordingly.»

Gore no tenía intención de hacer. Al final de la jornada y tras ese recuento automático, la victoria de Bush se mantiene, pero el margen o diferencia de votos se reduce a 327.

Si los demócratas habían iniciado prontamente sus estrategias los republicanos no se quedaron a la zaga. Así, para oponer a Warren Christopher, los republicanos designan como su principal cabeza visible a otro ex secretario de Estado, James A. Baker III, quien en su vuelo hacia Tallahassee, pronostica que la contienda presidencial finalizará indubitablemente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dado que es inevitable que cualquiera de las partes en liza más tarde o más temprano acabaría trasladando el conflicto a la vía judicial, Baker sostiene que mientras los demócratas depositarán sus esperanzas en los magistrados de tendencia demócrata que controlaban el Tribunal Supremo de Florida, los republicanos no tenían más opción que provocar la intervención de los juzgados federales para intentar acceder por vía de recurso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde esperaban que la mayoría conservadora existente en dicha institución fuese propicia a sus intereses.⁵⁵⁴ Los esfuerzos republicanos no se hicieron esperar, y desde primeras horas de la madrugada del día 8 de noviembre, Frank Jiménez, asesor general del gobernador Jeb Bush, inicia la tarea de contratar en nombre del Partido Republicano los servicios de los grandes despachos de abogados de Florida, en algunos casos simplemente para evitar que pudiesen ofre-

⁵⁵⁴ «He [James A. Baker] was not worried about getting the Supreme Court involved. At some point one side or the other was going to seek a judicial remedy. And once in the courts, Baker felt confident that the mostly conservatives justices in the Supreme Court would take on the burden of these matters –especially if the mostly liberal democratic Florida Supreme Court began to rule on these matters as well. In fact, it was a fear of how the Florida Supreme Court would respond to these issues that motivated Baker to seek out the federal courts up front. Given Florida precedents –and what Baker saw as a clear liberal bias on the part of the Florida judges– Baker knew that if he did not get the federal courts involved, Bush was going to lose», Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 32.

cer asesoramiento jurídico a los demócratas; esta actuación de Jiménez fue tan rauda como probablemente innecesaria, dado que lo menos deseado por los bufetes de abogados de Florida era provocar un conflicto abierto con el gobernador del estado.⁵⁵⁵ La consecuencia inmediata de este vital acontecimiento fue que el equipo de juristas que asesoraba a Al Gore poseía indiscutiblemente entusiasmo y experiencia procesal pero no en la especialidad contencioso-electoral,⁵⁵⁶ que era lo que urgía y se precisaba en esos momentos.

Mientras los dos equipos de asesores perfilaban, concretaban y desarrollaban las estrategias a seguir en defensa de sus respectivos candidatos, la noche del miércoles 8 de noviembre del 2000 el gobernador de Florida Jeb Bush comparecía públicamente junto con el *attorney general* del Estado, Bob Butterworth, para dejar bien claro que, con independencia de las simpatías e inclinaciones de cada uno, los acontecimientos que iban a tener lugar en modo alguno debían empañar la imagen del estado ni de sus instituciones.

*Never in my wildest dreams did I ever imagine it would be this close. I, along with attorney general Butterworth, are firmly committed to protecting the integrity of Florida's election process and will seek swift enforcement of Florida's election law. Both of us have pledged to work together with Secretary of State Katherine Harris in this regard.*⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ «Implicitly, or explicitly, the big firms did not want to offend Governor Jeb Bush by siding against his brother in perhaps the greatest legal-political battle of all times», Jeffrey TOOBIN, *Too close to call*, o. cit., p. 33; «In the coming weeks, Democrats would complain frequently about the hidden hand of Jeb Bush, but his greatest influence was, quiet possible, right there on the surface: for anyone doing business in Florida, it was unnatural to cross the governor», Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 62.

⁵⁵⁶ «With the exception of Young and Sautter, none of Gore's lead lawyers was a recount specialist», Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 23.

⁵⁵⁷ Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., p. 65.

La batalla judicial por el recuento de votos en Florida había comenzado, aunque oficialmente los demócratas demorasen su inicio hasta el 9 de noviembre de 2000. A partir de aquí, los dos candidatos despliegan todos sus efectivos para lograr esos 25 votos compromisarios y si Al Gore tiene a su favor la legislación electoral, ha de superar una carrera de obstáculos en la cual el cronómetro avanza veloz e inmisericorde, siendo así que ese factor temporal es la principal baza que favorece los intereses del candidato republicano, pues cuanto más se dilaten las actuaciones, más posibilidades tendrá Bush de lograr una victoria. El equipo de Al Gore centra todos sus esfuerzos en lograr que el asunto llegue al Tribunal Supremo de Florida, de notorias simpatías demócratas, mientras que los republicanos, haciendo de tripas corazón y en contra de sus más profundas convicciones jurídicas, van a optar por a la jurisdicción federal y a apostar abiertamente porque el asunto llegue ante el Tribunal Supremo. El fantasma de los comicios presidenciales de 1876 vuelve a sobrevolar Florida.

Sin embargo, en la madrugada de ese mismo día 8 de noviembre varios particulares ya se habían adelantado a los partidos y a los candidatos poniendo en marcha la maquinaria judicial. Aunque el resultado final les fue desfavorable, conviene detenernos un instante en este curioso proceso judicial que atañe a la constitucionalidad de la *butterfly ballot*, si quiera sea porque los demandantes solicitaban de un juez estatal nada menos que la repetición de las elecciones presidenciales en el condado de Palm Beach.

3.2. *La impugnación judicial de la butterfly ballot:* *el caso Fladell v. Palm Beach County Canvassing Board*

Retrocedamos ligeramente en el tiempo. A las cuatro y un minutos de la madrugada del día 8 de noviembre de 2000, tres ciudadanos (en concreto André Fladell, Alberta McCarthy y Lillian Gaines) presentan en el registro del Juzgado de Circuito

del decimoquinto Circuito Judicial de Florida, que extendía su jurisdicción al condado de Palm Beach, una demanda frente al Palm Beach County Canvassing Board, George W. Bush, Dick Cheney, Al Gore y Joe Lieberman.⁵⁵⁸

En la demanda, de siete folios de extensión, se cuestiona la validez de la papeleta utilizada en el condado de Palm Beach: «*This is an action for declaratory and other relief concerning the adequacy of the ballots booklets used in Palm Beach County only for November 7, 2000 Presidential Election*». Los demandantes justifican su residencia en el condado y su condición de «votantes y contribuyentes» (*qualified electors and taxpayers*) que emitieron su voto en las elecciones presidenciales celebradas el 7 de noviembre. Tras una breve narración de los acontecimientos y una descripción de la *butterfly ballot*, se justifica la presentación de la demanda en el hecho de que muchos ciudadanos que pretendían emitir su voto a favor de Al Gore y Joe Lieberman lo hicieron por Pat Buchanan y Ezola Foster debido a lo confuso de la ubicación de las candidaturas en la papeleta.

In addition, the holes in the ballot cards for numbers 4 [Gore and Lieberman] and 5 [Pat Buchanan and Ezola Foster] were directly adjacent to the section of the ballot listing the Democratic candidates [Gore and Lieberman]. As a result, many voters, and in particular many senior citizens, intending to vote for Al Gore and Joe Lieberman punched punch hole numbers 4 and 5 in the mistaken belief that such numners referred to a vote for Al Gore and Joe Lieberman,

siendo así que en el condado de Palm Beach Buchanan obtuvo un total de 3040 votos. Se censura que la papeleta utilizada

⁵⁵⁸ El texto de la demanda puede encontrarse en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/suit1.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

en el condado haya sido la única en la cual las candidaturas se sitúen en ambos lados o caras de la cartulina, siendo así que, de un lado, nunca se había utilizado dicho formato en unas elecciones presidenciales y, por otra parte, en los restantes sesenta y seis condados los nombres de los candidatos se contienen en una única página, evitando con ello toda confusión posible

Palm Beach County was the only county to list the candidates on two pages. It is believed that such format had never before been used in a Presidential election and that said format created and contributed to much voter confusion. All sixty-six other counties in Florida listed all candidates in a straightforward, non confusing manner...

Se acusa a Theresa LePore de ubicar en la papeleta electoral la candidatura demócrata en tercera posición, cuando debiera aparecer en el segundo (dado que en las pasadas elecciones a gobernador del estado de Florida los demócratas obtuvieron el segundo lugar). Como consideración final, los demandantes entienden que es público y notorio que los resultados de las elecciones presidenciales en Florida serán decisivos para determinar quién será elegido presidente, y dado que hay un gran número de votos emitidos por error a favor de Pat Buchanan, existen pruebas evidentes de que el error puede tener incidencia decisiva en el resultado final de las elecciones presidenciales.

Para concluir, los demandantes solicitan del juzgado no solo que se declare contraria a derecho el uso de la *butterfly ballot*, sino que se anulen los resultados presidenciales en el condado de Palm Beach y, en consecuencia, ordene la celebración de unos nuevos comicios. En concreto, el suplico de la demanda tenía la siguiente redacción:

WHEREFORE, Plaintiffs request that the Court declare the general election ballot as it pertains to the Presidential Election to be in violation of the foregoing statute, declare that said ballot is deceptive, confusing and/or misleading, declare the election results for the public office of President and Vice-President to be null and void and direct that a new general election for the office of President and Vice-President of the United States be held in Palm Beach County, Florida.

La demanda es admitida a trámite, siendo fijada la vista oral del caso para el día 15 de noviembre. Cinco días más tarde, el 20 de noviembre de 2000, el juez Jorge Labarga dicta sentencia en el caso *Fladell v. Palm Beach County Canvassing Board*⁵⁵⁹ desestimando las pretensiones de los demandantes. El juez comienza realizando una distinción entre dos tipos de cuestiones, por un lado, las estrictamente legales (relativas a si es jurídicamente posible solicitar del juzgado como pretensión procesal la celebración de nuevas elecciones presidenciales en el condado de Palm Beach) y por otro, las meramente fácticas (relativas a las cuestiones de hecho alegadas por los actores en su escrito de demanda), limitando sus consideraciones a los aspectos jurídicos para, en caso de ser jurídicamente viable la solicitud y estimación de la demanda tendente a la celebración de unos nuevos comicios, señalar en ese caso una ulterior vista oral tendente a que los demandantes acreditasen mediante la oportuna prueba la relación de hechos expuesta en el escrito de demanda.⁵⁶⁰ Tras unas consideraciones estrictamente pro-

⁵⁵⁹ <http://jurist.law.pitt.edu/election/revote.pdf> (consultada el día 2 de noviembre de 2011).

⁵⁶⁰ «*During the first phase of the proceedings, the Court was to consider only the question of the legality of permitting a re-vote or a new election for the Presidency and Vice-Presidency of the United States. If the Court found that a re-vote or new election was indeed permitted by law, an evidentiary hearing would be conducted and the Court would make factual findings in support of its ultimate ruling.*»

cesales concernientes a la *bona fide* y al hecho de si la acción concreta ejercitada (una *declaratory relief*) es adecuada en los procesos electorales, se entra de lleno a analizar el fondo de la cuestión. La sentencia reconoce que todo lo relativo a la libertad de voto de los ciudadanos es esencial para el gobierno representativo,⁵⁶¹ y que el juzgado se encuentra con la enorme responsabilidad de dictar una resolución judicial para la que carece de precedentes en los que sustentarse. Pero, y este es el auténtico núcleo de la sentencia, *los precedentes que autorizan la celebración de una nueva contienda electoral se refieren a elecciones para cargos distintos a la presidencia de los Estados Unidos y, dado que las elecciones presidenciales son las únicas elecciones de carácter nacional, los padres fundadores dejaron claro, y sin ningún género de dudas, que por dicha circunstancia tales comicios debían celebrarse el mismo día a lo largo de todo el territorio de los Estados Unidos:*

Notably, in each instance where a re-vote or a new election was permitted, the circumstances involved a race for a public other than the Presidency and Vice Presidency of the United States. The plaintiffs in this action cite no case law authority in the history of our nation, nor can the Court find any, where a re-vote or new election was permitted in a Presidential race.

Moreover, given the unique nature of Presidential elections in the United States, the fact that there has never been a re-vote or new election in a presidential race should come as no surprise. Because Presidential elections are the only national elections held in our country, our forefathers included clear and unambiguous

⁵⁶¹ «Any discussion concerning a citizen's right to vote must begin with the proposition that the right to vote freely for the candidate of one's choice is of the essence of a democratic society, and any restrictions of that right strike at the heart of representative government [...] Indeed, no right is more precious in a free country than that of having a choice in the election of those who make the laws under we live.»

*language in the Constitution of the United States which require that Presidential «electors» be elected on the same day throughout the United States.*⁵⁶²

El juzgado no comparte la tesis de los demandantes en el sentido de que el juez puede ordenar la celebración de unos nuevos comicios con amparo en el 102.168(8).⁵⁶³ Con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Florida, argumenta que estimar la pretensión de los demandantes con amparo en dicho precepto sería un exceso judicial que invadiría competencias reservadas al legislativo. Además, en la resolución se cita de forma expresa el caso *Foster v. Love*,⁵⁶⁴ resuelto el 2 de diciembre de 1997 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, de forma unánime, declaró nula por vulneración de la normativa federal la legislación del estado de Luisiana que regulaba un procedimiento de «*open primary*» para la elección de miembros del Congreso celebrada en una fecha distinta a la establecida por la federación. En conclusión, el juez no puede dejar de manifestar su preocupación por los hechos acaecidos en Palm Beach (con un evidente exceso literario en cuanto al reconocimiento del derecho de voto) pero reitera que se está ante una nación regida por las leyes y, en consecuencia, ha de procederse a la aplicación de las mismas, y la normativa es bien clara en el sentido de que las elecciones presidenciales han de celebrarse en todo el territorio nacional el mismo día y, por tanto, ordenar la celebración de unos nuevos comicios en Palm Beach es jurídicamente inadmisibile:

⁵⁶² Los subrayados aparecen como tales en la propia sentencia.

⁵⁶³ Dicho precepto establece que «*the circuit judge to whom the contest is presented may fashion such orders as he or she deems necessary to ensure that each allegation in the complaint is investigated, examined or checked, to prevent or correct any alleged wrong, and to provide any relief appropriate under such circumstances*».

⁵⁶⁴ 522 US 67 (1997).

Clearly, a great number of patriotic and deeply concerned citizens of Palm Beach County fear that they may have unwittingly cast their vote for someone other than their candidate. While some may dismiss such concerns without a second thought, this Court is well aware that the right to vote is as precious as life itself to those who have been victimized by the horror of war, to those whose not-too-distant relatives were prohibited from exercising the right to vote simply because of their race or gender, and to those who have risked it all by venturing across an unforgiving sea in makeshift rafts or boats in order to one day exercise the right to vote.

However, for over two centuries we have agreed to a constitution and to live by the law. Indeed, it is because we are first and foremost a nation that respects our constitutional tradition that our country continues to go about its business, despite the very important issues raised by the election November 7, 2000, this Court must follow the mandate of the law.

El juzgado termina rechazando las pretensiones de los demandantes al entender que carece de atribuciones, tanto para declarar la nulidad del recuento, como para ordenar la celebración de unos nuevos comicios.⁵⁶⁵ Apelada por los recurrentes, dicha resolución judicial sería derivada hacia el Tribunal Supremo de Florida el cual, el día 1 de diciembre de 2000 (el mismo día que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha señalado para celebrar los *oral argument* del caso *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*, como veremos más adelante), resuelve el asunto *Fladell v. Palm Beach County Canvassing Board*⁵⁶⁶

⁵⁶⁵ La consecuencia de ello es que «*since the Court has ruled that the relief sought by the plaintiffs is not permitted by law, it is legally unnecessary to conduct an evidentiary hearing regarding the events that led to the allegations of ballot confusion and the deprivation of the right to vote*».

⁵⁶⁶ <http://www.floridasupremecourt.org/decisions/pre2004/ops/sc00-2373.pdf> (consultada el día 2 de noviembre de 2011).

confirmando expresamente la sentencia de instancia, si bien por motivos radicalmente distintos. En una breve resolución de apenas cinco folios, el Tribunal Supremo del Estado considera que únicamente pueden anularse unos comicios con base en defectos de las papeletas electorales cuando estas incumplan de manera sustancial los requisitos legales (*«As a general rule, a court should not void an election for ballot form defects unless such defects cause the ballot to be in substantial noncompliance with the statutory election requirements»*), y que la conocida como *butterfly ballot* no represente una infracción de la normativa que justifique su nulidad.

In the present case, even accepting appellants' allegations, we conclude as a matter of law that the Palm Beach County ballot does not constitute substantial noncompliance with the statutory requirements mandating the voiding of the election. This was the threshold issue in respect to whether the complaints stated a cause of action. Accordingly, we affirm the trial court's dismissal with prejudice of the complaints.

En cuanto a los restantes argumentos jurídicos de la sentencia de instancia se pronuncia de forma breve pero tajante: *«Because the dismissal would be proper on that basis, we conclude that all other issues ruled upon by the trial court were not properly reached and therefore, the court's rulings thereon are a nullity»*.

Con ello se zanjaba jurídicamente el asunto de la validez de la papeleta electoral utilizada en el condado de Palm Beach, cuya adecuación a derecho quedaba expresamente confirmada. Y esta vez, sin que el asunto saliese de la jurisdicción estatal; sería la única ocasión en la cual ni los juzgados federales ni el Tribunal Supremo se vieran obligados a intervenir.

4. El devenir jurídico del recuento de votos de Florida

Regresemos de nuevo al día 9 de noviembre de 2000. El equipo asesor del candidato demócrata ya ha comprobado que el recuento manual realizado al amparo de la legislación electoral de Florida ha reducido el margen de victoria de Bush. Por tanto, era imprescindible dado lo reducido de esa ventaja arañar el mayor número de votos a favor del candidato demócrata. La estrategia, pues, estaba clara: al amparo de la legislación electoral vigente, solicitar recuentos manuales. Ahora bien, la normativa estatal permitía tal solicitud, pero no contemplaba la posibilidad de realizarlo en todo el territorio del estado, sino que el requerimiento a presentar para dicho recuento manual de votos habría de hacerse condado por condado y siempre que se diesen las circunstancias tasadas establecidas en la ley, razón por la cual los demócratas circunscribieron su petición únicamente en los cuatro condados donde poseían una mayor fuerza electoral: Palm Beach, Broward, Miami Dade y Volusia.⁵⁶⁷ Mientras tanto, y desde el lado republicano, James Baker inicia una estrategia tendente a trasladar a la población que una vez finalizado el recuento automático, todo intento de practicar nuevas revisiones de los resultados no era más que un intento de eliminar la confianza en el sistema. Viendo el cariz que tomaban los acontecimientos, el gobernador del estado, Jeb Bush, alega que concurre en él causa de abstención y se aparta públicamente del contencioso electoral.

⁵⁶⁷ La legislación electoral de Florida no permite solicitar un recuento en todo el territorio estatal, sino que el recuento habría de solicitarse condado por condado. Las razones de que los demócratas limitasen el recuento a cuatro, precisamente en los que residía su mayor potencial de votos, da la razón a Richard Posner cuando indica que *«the fact that Gore did not request a recount in any counties besides Broward, Palm Beach, Miami-Dade, and Volusia is evidence that he didn't think a recount in any of those other counties would have yielded net gains»*, *Breaking deadlock*, o. cit., p. 55.

Echemos un vistazo a la normativa electoral en la cual depositaba sus esperanzas Al Gore. La primera de las fases impugnatorias es la que jurídicamente se denomina *protest*, y tiene por objeto solventar las impugnaciones presentadas por los candidatos que han concurrido a las elecciones frente a los resultados obtenidos en el condado; dicho procedimiento se insta ante y se resuelve por el mismo órgano administrativo electoral, es decir, el *County Canvassing Board*. La normativa en cuestión, el 102.166[4] establece lo siguiente:

- (1) *Any candidate for nomination or election, or any elector qualified to vote in the election related to such candidacy, shall have the right to protest the returns of the election as being erroneous by filing with the appropriate Canvassing Board a sworn, written protest.*
- (2) *Such protest shall be filed with the Canvassing Board prior to the time the Canvassing Board certifies the results for the office being protested or within 5 days after midnight of the date the election is held, whichever occurs later.*
- (3) *Before canvassing the returns of the election, the Canvassing Board shall:*
 - (a) *When paper ballots are used, examine the tabulation of the paper ballots cast.*
 - (b) *When voting machines are used, examine the counters on the machines of nonprinter machines or the printer-pac on printer machines. If there is a discrepancy between the returns and the counters of the machines or the printer-pac, the counters of such machines or the printer-pac shall be presumed correct.*
 - (c) *When electronic or electromechanical equipment is used, the Canvassing Board shall examine precinct records and election returns. If there is a clerical error, such error shall be corrected by the County Canvassing*

Board. If there is a discrepancy which could affect the outcome of an election, the Canvassing Board may recount the ballots on the automatic tabulating equipment.

- (4) (a) *Any candidate whose name appeared on the ballot, any political committee that supports or opposes an issue which appeared on the ballot, or any political party whose candidates' names appeared on the ballot may file a written request with the County Canvassing Board for a manual recount. The written request shall contain a statement of the reason the manual recount is being requested.*
- (b) *Such request must be filed with the Canvassing Board prior to the time the Canvassing Board certifies the results for the office being protested or within 72 hours after midnight of the date the election was held, whichever occurs later.*
- (c) *The County Canvassing Board may authorize a manual recount. If a manual recount is authorized, the County Canvassing Board shall make a reasonable effort to notify each candidate whose race is being recounted of the time and place of such recount.*
- (d) *The manual recount must include at least three precincts and at least 1 percent of the total votes cast for such candidate or issue. In the event there are less than three precincts involved in the election, all precincts shall be counted. The person who requested the recount shall choose three precincts to be recounted, and, if other precincts are recounted, the County Canvassing Board shall select the additional precincts.*
- (5) *If the manual recount indicates an error in the vote tabulation which could affect the outcome of the election, the County Canvassing Board shall:*

- (a) Correct the error and recount the remaining precincts with the vote tabulation system;*
 - (b) Request the Department of State to verify the tabulation software; or*
 - (c) Manually recount all ballots.*
- (6) Any manual recount shall be open to the public.*
- (7) Procedures for a manual recount are as follows:*
 - (a) The County Canvassing Board shall appoint as many counting teams of at least two electors as is necessary to manually recount the ballots. A counting team must have, when possible, members of at least two political parties. A candidate involved in the race shall not be a member of the counting team.*
 - (b) If a counting team is unable to determine a voter's intent in casting a ballot, the ballot shall be presented to the County Canvassing Board for it to determine the voter's intent.*
- (8) If the County Canvassing Board determines the need to verify the tabulation software, the County Canvassing Board shall request in writing that the Department of State verify the software.*
- (9) When the Department of State verifies such software, the department shall:*
 - (a) Compare the software used to tabulate the votes with the software filed with the Department of State pursuant to s. 101.5607; and*
 - (b) Check the election parameters.*
- (10) The Department of State shall respond to the County Canvassing Board within 3 working days.*

Resumiendo, que los demócratas tenían de plazo para utilizar este procedimiento setenta y dos horas siguientes a la finalización de las elecciones (teniendo en cuenta que el viernes

día 10 era festivo, el plazo se reducía a cuarenta y ocho horas, es decir, que la solicitud de recuentos manuales debía presentarse como máximo el jueves día 9 ante el *County Canvassing Board* del respectivo condado). La solicitud no implicaba que el organismo en cuestión estuviese obligado a estimarla, sino que, a la vista de las circunstancias, tenía la facultad absolutamente discrecional de ordenar o rechazar el recuento manual solicitado (la redacción del precepto legal es bien clara en este aspecto, pues al utilizar el término «*may*» y no el «*shall*», el rechazo de la forma imperativa determina la no obligatoriedad del recuento manual solicitado); pero, y esto es igualmente decisivo, la estimación de la solicitud de recuento manual no implica de manera automática e instantánea el recuento de todos los votos del condado, sino el recuento selectivo de una simple muestra (que habría de representar como mínimo el 1% de los votos del condado) extraída de tres distritos electorales que serían elegidos por quien solicitase el recuento, y si del mismo se comprobaba la existencia de un porcentaje de error que pudiese afectar al resultado de las elecciones, se abrían para el organismo administrativo tres posibilidades una de las cuales era, esta vez sí, el recuento de votos en todo el territorio del condado.⁵⁶⁸ Los republicanos intentaron oponerse a esta maniobra y bloquear el recuento manual de votos solicitado por los demócratas interponiendo el día 11 de noviembre una demanda ante un juzgado federal, en concreto, ante el juzgado de distrito correspondiente al distrito sur de Florida; dado que para justificar la intervención de un juzgado federal era menester invocar la

⁵⁶⁸ Richard A. Posner hace hincapié en una cuestión referente a los encargados del recuento manual de votos: y es la influencia del factor humano en el recuento debido a simpatías o a la falta de experiencia, error humano del cual no adolecen las máquinas: «*Human counters can be fatigued, biased or simply unable to infer the voter's intent with any approach to certainty from a ballot that the machine refused to count; so they can make many errors too –some deliberate, which is beyond a machine's capacity*», *Breaking deadlock*, o. cit., p. 53.

infracción de normas constitucionales o de derecho federal, se invoca en el presente asunto la vulneración de la *equal protection clause*. El juez Donald M. Middlebrooks resuelve el asunto *Siegel v. LePore*⁵⁶⁹ dos días más tarde, el 13 de noviembre de 2000 rechazando las pretensiones de los demandantes sobre la base de que no se apreciaba en la actuación impugnada vulneración de derecho federal alguno.

No obstante, existían varios problemas jurídicos a tener en cuenta que debían ser objeto de resolución. El primero de ellos, como muy bien ha puesto de relieve Richard Posner, se refiere al ámbito material de la norma o, en otras palabras, a los supuestos bajo los cuales es posible instar, del organismo público en cuestión, un recuento manual de votos; y es que, al amparo de la normativa, podía solicitarse tal medida únicamente en el caso de errores del Canvassing Board a la hora de computar los votos emitidos, y no para remediar otro tipo de errores (como los derivados de errores del votante o de papeletas defectuosas).⁵⁷⁰ La segunda cuestión a tener en cuenta era el plazo legislativamente establecido para certificar los resultados y remitirlos a la Secretaría de Estado de Florida: antes de las cinco de la tarde del día 14 de noviembre. El equipo de Gore solicita del personal encargados del recuento que ignore sin más la fecha límite establecida para remitir la certificación de los resultados electorales y se abstengan de enviar la misma en tanto no se finalicen los recuentos manuales. La situación, ya de por sí candente, se torna aún más explosiva a medida que tienen lugar los recuentos en cada uno de los condados en liza.

⁵⁶⁹ La sentencia en cuestión puede encontrarse en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/midopinion.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

⁵⁷⁰ «We must bear in mind that under the Florida election code only errors in the *tabulation* of the vote authorize the Canvassing Board to order a complete hand recount of the county's votes. If voter error, not being an error in tabulation, is not a valid ground for a complete hand recount» (el subrayado es original), Richard POSNER, *Breaking deadlock*, o. cit., p. 95.

A) Condado de Palm Beach

Una vez instada la solicitud del recuento manual de votos en dicho condado, el *County Canvassing Board*, integrado por Theresa LePore, Carol Roberts y el juez Charles Burton, inició el recuento del muestreo inicial a las nueve de la mañana del sábado día 11 de noviembre. Y se comienza con un arduo y complejo debate, pues con carácter previo al inicio del recuento surgió la cuestión del criterio a adoptar para establecer la validez del voto.⁵⁷¹ Se optó por adoptar la «*sunshine rule*», pero a lo largo de la tramitación del procedimiento, interrumpido por continuas protestas e impugnaciones de las partes, el organismo mudó el criterio de validez de los votos adoptando unas reglas más flexibles (lo que trajo como consecuencia volver a comprobar de nuevo las papeletas anteriormente examinadas bajo criterios de validez más estrictos). Sin embargo, a petición de uno de los miembros del organismo, en concreto del juez Burton, se mudan nuevamente los criterios de validez retornando a unos cánones más severos.

Finalizado el recuento del muestreo, Gore obtiene 33 nuevos votos frente a los 14 de Bush, lo que ofrecía una diferencia a favor del candidato demócrata de 19 votos. Extrapolar dicho margen de 19 votos en un muestreo del 1% a los resul-

⁵⁷¹ Existían varias posibilidades: 1) considerar correctamente emitido un voto simplemente si la cartulina tuviese una hendidura que revelase la intención del votante de optar por la candidatura en cuestión; 2) reconocer un voto como válido si existiese una perforación que, aún no reconocida por el lector óptico, permitiese el paso aunque mínimo de la luz a su través (la *sunshine rule*); 3) dar por correcto un voto si, permitiese o no el paso de la luz, la parte del papel que debía ser perforada estuviese separada de la cartulina por tres de las cuatro partes (la *three corner rule*). De este último criterio existía a su vez una variante, la *two corner rule*, que concedía la validez a los votos en los cuales la parte perforada estuviese desprendida de la papeleta electoral por dos de sus cuatro partes (Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 37). Richard Posner desgrana hasta siete posibilidades de otorgar validez a un voto en función de lo amplio o restrictivo del criterio adoptado (*Breaking deadlock*, o. cit., pp. 56-57).

tados de todo el condado implicaba una diferencia de 1900 votos en relación con el casi medio millar de sufragios que se habían emitido en todo Palm Beach. ¿Justificaba dicha diferencia un recuento manual de votos de todo el condado? Tras arduas deliberaciones, el *County Canvassing Board* opta el día 12 de noviembre por acceder a los requerimientos demócratas y practicar un recuento manual de los 470000 votos emitidos en todo Palm Beach. El recuento traería como consecuencia inevitable que fuese casi imposible certificar el recuento de votos y enviar la correspondiente certificación a la Secretaría de Estado de Florida antes del plazo legal establecido (14 de noviembre de 2000), como en efecto así sucedió.

B) Condado de Miami-Dade

Uno de los condados con más población y feudo tradicional de los demócratas fue, sin embargo, el que más retraso tuvo a la hora de iniciar el recuento manual del muestreo del 1%, dado que se da comienzo al mismo precisamente el 14 de noviembre. Tras seis horas de trabajo, Gore logra obtener únicamente seis nuevos votos, por lo que el *Canvassing Board* (integrado por David Leahy, la juez Miriam Lehr y el juez Lawrence D. King) estima que dicho margen es irrelevante y, en consecuencia, es innecesaria la práctica de un recuento total de los votos del condado.

C) Condado de Volusia

En este condado la labor de recuento venía facilitada por dos circunstancias muy a tener en cuenta: en primer lugar, por tener una población ostensiblemente menor y, en consecuencia, muchos menos sufragios que en el resto de condados en disputa, dado que en este caso existían tan solo 184000 votos

emitidos; en segundo lugar, porque a diferencia de otras partes del estado en esta ocasión el condado había utilizado una papeleta diferente (la *scantron ballot*) que facilitaba mucho más las tareas de recuento.⁵⁷² Por ello, el *Canvassing Board* (integrado por Michael McDermott, Ann McFall y Patricia Northey) optó directamente por practicar el recuento manual de todos los votos del condado, si bien por cuestiones estrictamente técnicas hubo de demorar la tarea hasta el día 13 de noviembre.

D) Condado de Broward

Solicitado el recuento manual de votos, el *Canvassing Board* (integrado por Suzanne Gunzburger, Jane Carroll y el juez Robert Lee) se reúne el día 13 de noviembre para el examen de la muestra del 1% de papeletas, acordando adoptar como criterio de validez la «*two-corner rule*», criterio que mantiene a lo largo de todo el procedimiento. Finalizado el mismo, Gore únicamente obtuvo cuatro votos adicionales, que el organismo consideró insuficientes como para extender el recuento manual a todo el territorio. No obstante, y ante las manifestaciones demócratas en el sentido de que de no realizarlo impugnarían judicialmente tal decisión, el *Canvassing Board* se reúne, modifica su toma de postura inicial y acuerda la práctica del recuento manual de todos los votos emitidos.

Tal era la situación existente el día 14 de noviembre de 2000 en los cuatro condados cuyos votos habían sido objeto de una solicitud de recuento manual por los demócratas. Existía, no obstante, el problema al que nos hemos referido anteriormente y relativo a los plazos legalmente establecidos para el recuento, pues la normativa estatal no solo establecía la fecha límite para la remisión de los certificados electorales (las cinco

⁵⁷² Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., p. 43.

de la tarde del día 14 de noviembre de 2000 [102.111]),⁵⁷³ sino que el texto legal contemplaba la consecuencia que acarrearía la no remisión en plazo de la certificación de los comicios: los resultados extemporáneos *podrían* no ser tenidos en cuenta. Vencido el plazo legal, a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre, únicamente el condado de Volusia había completado y remitido los certificados electorales tras el cómputo manual de votos, que fueron incluidos sin ningún problema por Katherine Harris; pero en Broward, Miami-Dade y Palm Beach era materialmente imposible finalizar y remitir los certificados del recuento manual en el plazo establecido por la ley.

Curiosamente, fue el organismo administrativo del condado de Volusia (quizá pensando que, aun acelerando el recuento pudieran finalizar y enviar los resultados antes de las cinco de la tarde del catorce de noviembre) quien a las diez horas y diecisiete minutos del día 13 de noviembre del 2000 dio un nuevo giro judicial al asunto al depositar en manos de un juez la interpretación jurídica que había de darse al incumplimiento de la remisión del recuento de votos en los plazos legales: los tres miembros del *Volusia County Canvassing Board* interponen ante el Juzgado de Circuito del Segundo Circuito judicial de Florida (Leon County) una demanda judicial frente a Katherine Harris y la *Elections Canvassing Commission*. Los demandantes exponen que el día 9 de noviembre el Partido Demócrata de Florida solicitó del *Volusia Canvassing Board* el recuento manual de votos en dicho condado, petición que fue estimada por el organismo en cuestión; no obstante, la legislación de Florida, en concreto la norma 102.111, establece que los resultados electorales han de ser remitidos antes de las cinco de la tarde del día 14, siendo la consecuencia del incumpli-

⁵⁷³ Quedaban excluidos los *oversee ballots* o votos por correo, cuya fecha límite para el recuento y certificación se extendía hasta el 18 de noviembre.

miento de dicho plazo que los resultados remitidos con posterioridad pueden ser no tenidos en cuenta.⁵⁷⁴ Es por ello que el organismo demandante termina suplicando del juzgado no solo que se declare la posibilidad que tiene el actor de remitir la certificación de los resultados electorales con posterioridad a las 5 de la tarde del día 14 de noviembre de 2000, sino que prohiba a los demandados ignorar los remitidos con posterioridad al plazo establecido por la legislación estatal.⁵⁷⁵ El juez Terry P. Lewis resuelve este caso (*McDermott v. Harris*) por sentencia hecha pública el día siguiente, 14 de noviembre de 2000⁵⁷⁶ y en la que estima parcialmente la demanda. El juez logra centrar jurídicamente la cuestión de forma impecable: se trata de dilucidar la naturaleza, imperativa o no, de la fecha límite esta-

⁵⁷⁴ El texto de la demanda puede encontrarse en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/00-2700a.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011). Es importante el matiz que hacen los demandantes a la hora de establecer la consecuencia del incumplimiento, puesto que en el punto siete de su demanda indican que «*Section 102.112 (1), Florida Statutes, provides that if the returns are not received by the Department of State by 5:00 PM November 14, 2000, the returns may be ignored*» (subrayado original). Jurídicamente existe una considerable diferencia entre el «shall» y el «may»: en el primer caso los resultados extemporáneos no se tendrán en cuenta en ningún caso, mientras que en el segundo sí pueden serlo.

⁵⁷⁵ «*Wherefore, Canvassing Board prays this Honorable Court: 1. Declare that the Florida Elections Code permits the Canvassing Board to certify the results of the Presidential Election after completion of the manual recount provided in Section 102.166(2), Florida Statutes, without regard to the deadline of 5:00 PM; 2. That this Honorable Court temporarily and permanently enjoin Defendant Harris and Defendant Elections Canvassing Commission from ignoring results certified by the Canvassing Board after 5 PM November 14, 2000, from the ballots cast and counted November 7, 2000, and the overseas absentee ballots counted after November 7, 2000.*»

⁵⁷⁶ El texto de la sentencia puede encontrarse en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/00-2700h.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011). La sentencia especifica que, por acuerdo de las partes, se permitió la intervención posterior de Al Gore y el Palm Beach Canvassing Board como codemandantes, así como de George Bush y el compromisario Matt Butler como codemandados. Contrástese ello con la práctica forense en nuestro país, donde en materia contencioso-administrativa (no olvidemos que nos encontramos ante un procedimiento que en nuestro país sería un proceso contencioso-administrativo electoral) nunca ha existido ni existe la posibilidad de incorporación de terceros interesados como codemandantes.

blecida en la legislación estatal,⁵⁷⁷ resolviendo el asunto de una manera que en el fondo da la razón a ambas partes: la Secretaria de Estado *puede*, en efecto, ignorar los resultados electorales que sean remitidos con posterioridad a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre de 2000, *pero esa exclusión no ha de realizarse de forma automática ni arbitraria*, sino que la negativa a incluir resultados extemporáneamente remitidos debe ser jurídicamente motivada tras ponderar las circunstancias concretas del caso, circunstancias para cuya valoración la Secretaria de Estado ostenta una potestad discrecional.⁵⁷⁸

El día 15 de noviembre de 2000, y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia resolutoria del caso *McDermott v. Harris*, la secretaria de Estado (que había intentado cubrirse las espaldas solicitando de la *Florida Division of Elections* un informe jurídico acerca de si concurrían o no en este caso circunstancias excepcionales que permitan incluir resultados electorales remitidos con posterioridad a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre de 2000) había indicado, tras recibir y analizar el informe en cuestión, que no tendría en cuenta los resultados remitidos de forma extemporánea. Los demandantes en el caso *McDermott v. Harris* presentan una solicitud de ejecución de sentencia ante el juez Terry P. Lewis, argumentando que con su acti-

⁵⁷⁷ Es bastante significativo cómo el juez constata las tesis esgrimidas por la secretaria de Estado Katherine Harris: «*The Secretary of State insists that, absent an Act of God such as a hurricane, any returns not received by the statutory deadline will not be counted in the statewide tabulations and certification of the elections result*» (subrayado original).

⁵⁷⁸ «*The Secretary of State may ignore such late filed returns, but may not do so arbitrarily, rather, only by the proper exercise of discretion after consideration of all appropriate facts and circumstances*». Posteriormente, el magistrado reconoce que, dado el plazo que la legislación otorga al candidato para solicitar los recuentos manuales «...*the Canvassing Board might be in a position of having to address a protest of its returns the day before, or hours before it was to certify the results pursuant to the deadline in Section 102.112 Florida Statutes, making it impossible to correct any error before the deadline. It is unlikely that the Legislature would give the right to protest returns, but make it meaningless because it could not be acted upon in time*». Téngase en cuenta, no obstante, que Gore solicitó el recuento manual el día 9 de noviembre, es decir, tan solo dos días después de las elecciones.

tud Katherine Harris ha actuado de forma arbitraria vulnerando lo dispuesto en el fallo judicial y solicitando que, en ejecución del mismo, por el juzgado se requiera a la secretaria de Estado para que ejecute correctamente lo dispuesto en la resolución judicial; el magistrado rechaza tales pretensiones al entender que la legislación electoral otorga a la Secretaria de Estado un amplio margen de discrecionalidad, y que el propósito de la sentencia era simplemente impedir que se denegara de forma automática la inclusión de recuentos extemporáneos.⁵⁷⁹ Esta decisión de Katherine Harris será impugnada por los demócratas, iniciando el periplo judicial que acabará en el Tribunal Supremo de Florida y en el Tribunal Supremo en el asunto *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*, y que describiremos con detalle en el apartado IV del presente capítulo. Baste indicar, por el momento, que el Tribunal Supremo de Florida dicta el 17 de noviembre de 2000 una medida cautelar de suspensión, en virtud de la cual prohíbe a Katherine Harris certificar los resultados de las elecciones en tanto el Tribunal no resuelva el asunto, lo que hace por sentencia de 21 de noviembre de 2000 en función de la cual fija el día 26 de noviembre de 2000 como plazo máximo para la remisión de los certificados electorales a la Secretaría de Estado de Florida.

En esta última fecha, 26 de noviembre de 2000, sorprendentemente de los tres condados únicamente Broward remitió los certificados en el plazo establecido por el Tribunal Supremo de Florida (dado que Palm Beach finalizó el recuento pocas horas

⁵⁷⁹ <http://jurist.law.pitt.edu/election/CV-00-2700af.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011). En concreto, el magistrado indica que «*as noted in my previous Order, Florida law grants to the Secretary, as the Chief Elections Officer, broad discretionary authority to accept or reject late filed returns. The purpose and intent of my Order was to insure that she in fact properly exercised her discretion, rather than automatically reject returns that came in after the statutory deadline. On the limited evidence presented, it appears that the Secretary has exercised her reasoned judgment to determine what relevant factors and criteria should be considered, applied them to de factors and circumstances pertinent to the individual counties involved and made her decision. My order requires nothing more.*».

después de transcurrido el plazo y Miami Dade había renunciado a completarlo ante la más que evidente imposibilidad de concluir el recuento para la fecha estipulada). Katherine Harris incluye por tanto los votos de los condados de Volusia y Broward, excluye los de Miami-Dade y Palm Beach, y certifica los resultados electorales proclamando la victoria en Florida del candidato republicano George W. Bush. Dicho acto administrativo es impugnado nuevamente por los demócratas, siendo esta impugnación la que finalizará en el Tribunal Supremo en el caso *Bush v. Gore*, cuyos avatares jurídicos describiremos con detalle en el apartado V del presente capítulo. Basta decir que el Tribunal Supremo de Florida dicta el día 9 de noviembre de 2000 una sentencia que estima, en parte, las pretensiones de Gore y ordena un recuento manual de los votos no computados en todo el territorio de Florida. Dicha resolución fue objeto a su vez de una impugnación judicial por parte de los republicanos, que el Tribunal Supremo aceptó conocer vía *writ of certiorari* dando lugar a la causa *Bush v. Gore*, que puso definitivamente fin al conflicto al establecer que se había producido una vulneración de la *equal protection clause* y ordenar el cese de todo recuento manual, despejando con ello toda sombra de duda sobre la victoria de Bush.

5. De las urnas a los estrados (I): *Bush v. Palm beach county canvassing board*

El primero de los asuntos que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativo al cómputo de los votos en diversos condados del Estado de Florida es el caso *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*. Veamos cómo se desarrolló este procedimiento desde sus primeras instancias hasta su resolución final por el Tribunal Supremo. Para ello nos apoyaremos directa y exclusivamente en la propia documentación judicial.

5.1. *La fase en los tribunales estatales de Florida*

Como hemos visto, la secretaria de Estado Katherine Harris había rechazado incluir los resultados electorales que le fueron remitidos con posterioridad a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre de 2000. El día 16 de noviembre de 2000 el Partido Demócrata de Florida y Al Gore impugnan judicialmente dicha actuación de la secretaria de Estado, pero el Juzgado de Circuito del Segundo Circuito del condado de Leon, tras una vista oral sumaria, rechaza las pretensiones de los demandantes en virtud de la sentencia hecha pública el viernes día 17 de noviembre. Ese mismo día los demandantes recurren la sentencia en apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Florida, mas este órgano judicial decide remitir este asunto, junto con otros dos pendientes que poseían una identidad objetiva,⁵⁸⁰ al Tribunal Supremo del Estado en aplicación de lo que se denomina «*pass-through jurisdiction*». Ese mismo viernes 17 de noviembre de 2000, el Tribunal Supremo de Florida dicta una resolución que afecta a los tres procesos ahora acumulados, y en virtud de la cual se ordena a Katherine Harris y a la *Elections Canvassing Commission* que, hasta nueva orden del tribunal, se abstengan de certificar los resultados definitivos de las elecciones presidenciales celebradas el día 7 de noviembre,⁵⁸¹ aunque establece de forma expresa que tal resolución no impide la recepción

⁵⁸⁰ En concreto, los tres procesos que serían objeto de acumulación eran el *Palm Beach County Canvassing Board v. Harris*, *Volusia County Canvassing Board v. McDermott et al.* y el *Florida Democratic Party v. McDermott et al.*, a los que se asignan los recursos número SC00-2346, SC00-2348 y SC00-2349.

⁵⁸¹ El texto de la que se emite jurídicamente como *stay order* es el siguiente: «*In order to maintain the status quo, the Court, on its own motion, enjoins the Respondent, Secretary of State and Respondent, the Elections Canvassing Commission from certifying the results of the November 7, 2000, presidential election, until further order of this Court. It is NOT the intent of this Order to stop the counting and conveying to the Secretary of State the results of absentee ballots or any other ballots*». A grandes rasgos y, aún a riesgo de simplificar un tanto la calificación, dicha orden acuerda una medida cautelar de suspensión de un acto administrativo (el certificado del

y cómputo del voto por correo o de cualquier otro tipo de votos. Dado lo perentorio de los plazos y la naturaleza de las cuestiones jurídicas a debatir, se fijan para el día 19 de noviembre los *oral argument* del caso.⁵⁸²

La sentencia *Palm Beach County Canvassing Board v. Harris* se hace pública el día 21 de noviembre de 2000⁵⁸³ y resuelve los tres recursos acumulados a los que anteriormente hemos hecho referencia. No consta en la sentencia quién ha sido el magistrado ponente, sino que la misma aparece dictada *per curiam*.⁵⁸⁴ Tras un brevísimo párrafo dedicado a fundamentar en derecho la jurisdicción del Tribunal Supremo de Florida para conocer el asunto,⁵⁸⁵ la resolución judicial va desgranando el asunto diseccionando el mismo en varios puntos que a continuación pasamos a exponer:

1. *Hechos*. A diferencia de las resoluciones judiciales españolas (donde, salvo en raras y contadísimas ex-

resultado electoral). Puede accederse a dicha resolución judicial en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/00-2348stay.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

⁵⁸² Los *oral argument* o exposiciones del caso por los letrados de las partes, en el caso del Tribunal Supremo del Estado de Florida, no solo son registrados en soporte audio, sino incluso en formato de vídeo, al que se puede acceder en el enlace: <http://wfsu.org/rafiles/archives/electionvram> (enlace con imagen y sonido, consultado el día 2 de noviembre de 2011).

⁵⁸³ El texto de la resolución judicial puede encontrarse en la página web del Tribunal Supremo de Florida, en concreto en el enlace: <http://www.floridasupremecourt.org/decisions/pre2004/ops/sc00-2346cor.pdf> (consultado el día 7 de noviembre de 2011), aunque aparece bajo la denominación *Albert Gore Jr. v. Katherine Harris*. La sentencia se presenta como corregida, dado que el 28 de noviembre, el tribunal en cuestión emitió una resolución corrigiendo ciertos errores materiales (la orden de corrección puede encontrarse en la misma página web, en el enlace: <http://www.floridasupremecourt.org/decisions/pre2004/ops/sc00-2346not.pdf>).

⁵⁸⁴ Dicha expresión es utilizada normalmente para las resoluciones judiciales dictadas en asuntos de escasa complejidad jurídica, aunque también se emplea en casos de gran trascendencia, como veremos que ocurrió en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los dos asuntos que le llegan con ocasión del recuento de voto de Florida.

⁵⁸⁵ «*We have for review two related trial court orders appealed to the First District Court of Appeal, which certified the orders to be of great public importance requiring immediate resolution by this Court (Case Numbers SC00-2348 and SC00- 2349). We have jurisdiction under article V, section 3(b)(5) of the Florida Constitution.*»

cepciones, se relatan los antecedentes fácticos del caso en el primero de los fundamentos jurídicos, pese a que la normativa vigente en nuestro país exige de forma expresa separar las cuestiones de hecho y de derecho), las sentencias de los juzgados y tribunales norteamericanos suelen tener bastante clara la distinción entre cuestiones fácticas y jurídicas, siendo ambas objeto de tratamiento distinto y separado, pues, por lo general, el primer punto o epígrafe de cualquier documento judicial contiene los hechos declarados probados. En este caso, el Tribunal aborda los acontecimientos que tienen lugar desde la noche del día 7 de noviembre de 2000 (y que no exponemos aquí al haber sido objeto de tratamiento detallado y específico en otro apartado del presente capítulo): los resultados iniciales, el recuento automático, la solicitud de los demócratas de practicar recuentos manuales en varios condados, el informe solicitado a la *Division of Elections* y la decisión de Katherine Harris de no tener en cuenta los resultados que le sean remitidos con posterioridad a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre.

2. *Principios informadores*. En este apartado, el tribunal se limita a consagrar, con cita expresa del caso *Boardman v. Esteva*, que en los procesos electorales el principio que debe guiar la interpretación judicial ha de ser *la voluntad del pueblo*, y que esta debe prevalecer sobre las previsiones legislativas.⁵⁸⁶ En otras

⁵⁸⁶ «Twenty-five years ago, this Court commented that the will of the people, not a hyper-technical reliance upon statutory provisions, should be our guiding principle in election cases [...] We consistently have adhered to the principle that the will of the people is the paramount consideration. Our goal today remains the same as it was a quarter of a century ago, i.e., to reach

palabras, que frente a la interpretación literal de la normativa que realizaba la secretaria de Estado (que prima los elementos formales sobre los materiales), el Tribunal Supremo deja claro que ha de prevalecer la voluntad del votante sobre cualquier otro tipo de formalidad (es decir, prima el elemento material sobre el formal).

3. *Cuestiones a resolver.* Bajo el término *questions presented*, las resoluciones judiciales contienen (en ocasiones en forma de pregunta) las cuestiones jurídicas sobre las que se solicita el pronunciamiento del tribunal. En este proceso son dos los asuntos que se plantean: *a)* bajo qué circunstancias puede un organismo autorizar un recuento manual de votos en todo el territorio del condado; *b)* si a secretaria de Estado y la Comisión pueden aceptar tales resultados cuando los mismos son remitidos una vez superado el plazo establecido al efecto en la legislación de Florida.⁵⁸⁷
4. *Informe jurídico de la Division of Elections.* Este apartado se limita a rebatir en derecho el informe jurídico emitido por dicho organismo a solicitud del Palm Beach County Canvassing Board, y que había servido de base para que Katherine Harris proclamara que no tendría en cuenta los resultados que le fueran entregados con posterioridad a las cinco de la tarde del día 14 de noviembre de 2000. El Tribunal comienza enunciando el principio general de que los órganos judiciales tienen

the result that reflects the will of the voters, whatever that might be. This fundamental principle, and our traditional rules of statutory construction, guide our decision today.»

⁵⁸⁷ «*The questions before this Court include the following: Under what circumstances may a Board authorize a countywide manual recount pursuant to section 102.166(5); must the Secretary and Commission accept such recounts when the returns are certified and submitted by the Board after the seven day deadline set forth in sections 102.111 and 102.112?»*

por costumbre dar por válidas las interpretaciones de los órganos administrativos cuando, en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, se limitan a ejecutar la legislación en las materias que tienen encomendadas, pero que esa «deferencia» no se aplica cuando la interpretación realizada es contraria a la ley. Eso es precisamente lo que entiende el Tribunal Supremo de Florida, es decir, que el criterio jurídico de la *Division of Elections* es erróneo.⁵⁸⁸

5. *Legislación aplicable*. Partiendo de los principios generales enunciados en el texto constitucional (son citados de manera expresa la primera sección del artículo primero y la sección primera del artículo sexto), se desgana la normativa electoral de Florida, constituida por el *Florida Election Code*, integrado a su vez por los artículos 97 a 106 de los *Florida Statutes*, de los que la resolución judicial hace un apretado resumen. Es de destacar, a los efectos que importan, que si bien reconoce expresamente que los *County Canvassing Boards* tienen la obligación legal de enviar el resultado de las elecciones antes de las cinco de la tarde del séptimo día subsiguiente a la jornada electoral, *la legislación no establece plazo alguno para enviar resultados corregidos o complementarios*.⁵⁸⁹ Este

⁵⁸⁸ «Florida courts generally will defer to an agency's interpretation of statutes and rules the agency is charged with implementing and enforcing. Florida courts, however, will not defer to an agency's opinion that is contrary to law». Esto no supone más que recoger la tradicional doctrina de la «deferencia judicial», consagrada en el asunto *Chevron*. Sobre los orígenes de esta doctrina y su evolución, puede verse mi reciente trabajo «¿El caso de *Chevron*? Auge y fracaso de la deferencia judicial hacia el ejecutivo», publicado en el número 184 (enero-abril 2011) de la *Revista de Administración Pública*, pp. 325-348.

⁵⁸⁹ «The County Canvassing Board ("Canvassing Board" or "Board"), which is composed of the Supervisor, a county court judge, and the chair of the board of county commissioners, then canvasses the returns countywide, reviews the certificates, and transmits the returns for state and federal officers to the Florida Department of State ("Department") by 5:00

apartado finaliza con la distinción entre las dos vías de impugnación: la administrativa (*protest*) ante el *County Canvassing Board* y la judicial (*contest*) ante el tribunal de circuito.

6. *Ambigüedad en el texto legal.* Entiende el tribunal que existe una ambigüedad en dos aspectos concretos de la normativa estatal: por un lado, el plazo establecido para el recuento manual choca con el plazo establecido para enviar los resultados; por otro, el 102.111 utiliza un lenguaje imperativo que choca con el lenguaje meramente dispositivo del artículo siguiente.⁵⁹⁰

A) Falta de conexión entre los plazos establecidos para el recuento y la certificación de los resultados. En efecto, como ya hemos visto la normativa estatal de Florida permite impugnar, previamente a la certificación de los votos, los resultados en fase administrativa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de las elecciones; de igual manera, faculta a cualquier candidato o partido que se presente a las elecciones solicitar, también con carácter previo a la emisión del certificado, recuentos manuales en todo el territorio del condado, siempre que tal solicitud se realice dentro de las setenta y dos horas siguientes a las elecciones. Ahora bien, razona el Tribunal, aunque no se establece plazo alguno para practicar el recuento y certificar los resultados, es evidente que un recuento manual puede

p. m. of the seventh day following the election. No deadline is set for filing corrected, amended, or supplemental returns.»

⁵⁹⁰ «*The provisions of the Code are ambiguous in two significant areas. First, the time frame for conducting a manual recount under section 102.166(4) is in conflict with the time frame for submitting county returns under sections 102.111 and 102.112. Second, the mandatory language in section 102.111 conflicts with the permissive language in 102.112.»*

llevar varios días en territorios de gran población, lo que implica que tales previsiones entren en conflicto con el plazo establecido en el 102.111 y 102.222, que establecen la obligación de remitir la certificación de los resultados antes de las cinco de la tarde del séptimo día siguiente a las elecciones. La consecuencia es lógica, y en determinados supuestos sería imposible coordinar ambos plazos:

For instance, if a party files a pre-certification protest on the sixth day following the election and requests a manual recount and the initial manual recount indicates that a full countywide recount is necessary, the recount procedure in most cases could not be completed by the deadline in sections 102.111 and 102.112, i. e., by 5:00 p. m. of the seventh day following the election.

- B) Conflicto entre el lenguaje imperativo y facultativo. En este apartado, el Tribunal analiza la dicotomía entre la contenida en 102.111 (en caso de no ser remitidos los certificados de voto antes de las cinco de la tarde del séptimo día de las elecciones, los mismos «no serán» tenidos en cuenta («*all missing counties shall be ignore*»), y la más generosa redacción del 102.112, donde establece que los certificados que no lleguen en plazo «podrán» no ser tenidos en cuenta («*such returns may be ignored*»).
7. *Voluntad del legislador.* Cuando un texto legal es oscuro o ambiguo, los Tribunales han de guiarse como principio interpretativo por la voluntad del legislador, sin que los órganos judiciales puedan sustituir tal cri-

terio por el suyo propio.⁵⁹¹ Así pues, el Tribunal Supremo de Florida aplica conjuntamente varias reglas para solventar tal dicotomía entre ambos preceptos legales: el texto legal específico (102.112) prevalece sobre el general (102.111); el texto más reciente (102.112, cuya última modificación databa de 1989) prevalece sobre el más antiguo (el 102.111 se aprobó en 1951); no puede interpretarse un texto legal de forma que dicha interpretación conduzca a resultados absurdos, como ocurriría de entenderse que el plazo para remitir los resultados es imperativo;⁵⁹² los textos legales han de interpretarse en su conjunto, no de forma aislada, por ello

if a protest is filed on the sixth day following an election and a full manual recount is required, the Board, through no fault of its own, will be unable to submit its returns to the Department by 5:00 p. m. on the seventh day following the election. In such a case, if the mandatory provision in section 102.111 were given effect, the votes of the county would be ignored for the simple reason that the Board was following the dictates of a different section of the Code,

resultado que, evidentemente, no puede ser el deseado por el legislador. Así pues, si un organismo no logra

⁵⁹¹ «Legislative intent—as always—is the polestar that guides a court’s inquiry into the provisions of the Florida Election Code. Where the language of the Code is clear and amenable to a reasonable and logical interpretation, courts are without power to diverge from the intent of the Legislature as expressed in the plain language of the Code.»

⁵⁹² «For example, if a Board simply completed its count late and if the returns were going to be ignored in any event, what would be the point in submitting the returns? The Board would simply file no returns and avoid the fines. But, on the other hand, if the returns submitted after the statutory date would not be ignored, the Board would have good reason to submit the returns and accept the fines. The fines thus serve as an alternative penalty and are applicable only if the Department may count the returns.»

remitir la certificación de los resultados electorales en la fecha establecida, la Secretaría de Estado no está facultada para ignorarlos sin más, aunque sí puede, valoradas las circunstancias, no tenerlos en cuenta.⁵⁹³

8. *Derecho al voto.* Tras un excurso sobre el carácter fundamental del derecho al sufragio activo, la sentencia reitera el principio fundamental que inspira toda la resolución: el derecho al voto no puede ser suplantado dando prioridad a meros formulismos legales.

Courts must not lose sight of the fundamental purpose of election laws: The laws are intended to facilitate and safeguard the right of each voter to express his or her will in the context of our representative democracy. Technical statutory requirements must not be exalted over the substance of this right.

Por ello, la Secretaría de Estado puede, efectivamente, no tener en cuenta los resultados que sean remitidos con posterioridad a la fecha establecida en la legislación electoral, pero (y en realidad este es el núcleo central de la sentencia, a la que se llega después de treinta y tres páginas) esa medida es tan extrema que solo puede hacerse en supuestos excepcionales que el propio Tribunal indica:

Ignoring the county's returns is a drastic measure and is appropriate only if the returns are submitted to the Department so late that their inclusion will compromise the integrity of the electoral process in either of two ways: (1) by precluding a candidate, elector, or taxpayer from contesting the certifica-

⁵⁹³ Como puede verse, este es el criterio que el día anterior había mantenido el juez Jorge Labarga.

tion of an election pursuant to section 102.168; or (2) by precluding Florida voters from participating fully in the federal electoral process. In either case, the Secretary must explain to the Board her reason for ignoring the returns and her action must be adequately supported by the law. To disenfranchise electors in an effort to deter Board members, as the Secretary in the present case proposes, is unreasonable, unnecessary and violates longstanding law.

9. *Aplicación de la doctrina general al caso concreto.* Tras rechazar la interpretación realizada por Katherine Harris, el Tribunal Supremo de Florida entiende que la misma no ha justificado que concurran, en el supuesto enjuiciado, ninguna de las condiciones que le permitan no tener en cuenta los certificados remitidos con posterioridad a dicho plazo.

We conclude that, consistent with the Florida election scheme, the Secretary may reject a Board's amended returns only if the returns are submitted so late that their inclusion will preclude a candidate from contesting the certification or preclude Florida's voters from participating fully in the federal electoral process. The Secretary in the present case has made no claim that either of these conditions apply at this point in time.

10. *Conclusión.* El Tribunal Supremo de Florida reconoce que ha realizado una interpretación de la normativa estatal con arreglo a los instrumentos tradicionales que el ordenamiento jurídico ofrece para la solución de conflictos, no pudiendo ir más allá porque, en caso contrario, estaría invadiendo competencias legislativas.

In the present case, we have used traditional rules of statutory construction to resolve these ambiguities to the extent necessary to address the issues presented here. We decline to rule more expansively, for to do so would result in this Court substantially rewriting the Code. We leave that matter to the sound discretion of the body best equipped to address it — the Legislature.

Ahora bien, en el último folio de la sentencia se establece como plazo máximo para la remisión de los resultados electorales las cinco de la tarde del domingo día 26 de noviembre de 2000 (o, en el supuesto de que por ser domingo las dependencias de la Secretaría de Estado estuviesen cerradas al público, las cinco de la tarde del lunes 27 de noviembre).⁵⁹⁴

⁵⁹⁴ Este último pronunciamiento es, quizá, el punto más controvertido y jurídicamente más endeble de la sentencia. El Tribunal Supremo de Florida establece para la remisión de certificación de votos un plazo (el 26 de noviembre) que ni viene expresamente establecido en la ley, ni la normativa autorizaba al Tribunal para establecerlo y, lo que es más grave, ni tan siquiera se detiene a motivar las razones que le inclinan a optar por tal fecha y no otra. Pero tal decisión conllevaba otra consecuencia jurídica que quizá no tuvo en cuenta el alto Tribunal del Estado: condenar al fracaso la segunda fase impugnatoria (el *contest*), condenada virtualmente al fracaso por el plazo límite que la legislación federal establecía para que se hubiesen resuelto todos los procedimientos impugnatorios. Como bien indica el juez Richard Posner: «*By postponing the certification to November 26, the court postponed the commencement of the contest proceeding until then, and this so shortened the time for such a proceeding as to make completion of it by any realistic deadline—and in particular a deadline that would avoid throwing the presidential election into Congress— infeasible. By moving the boundary between the protest and contest phases, the court squeezed the contest phase virtually to death*», *Deadlocked election*, o. cit., p. 96. Incluso desde posturas doctrinales contrarias al pronunciamiento final del Tribunal Supremo en el asunto se ha criticado al supremo órgano judicial de Florida a la hora de resolver el asunto de la fecha límite para la remisión de certificados: «*Certainly, as with the decision of the Supreme Court, the opinion of the Florida Supreme Court in Gore v. Harris was not a model of clarity or judicial craftsmanship. It may be soundly criticized on numerous points including, most tellingly, for its creation of a new deadline for which the counties must certify their results to the Secretary of State*», William P. MARSHALL, «The Supreme Court, Bush v. Gore, and rough justice», *Florida State University Law Review*, vol. 29, p. 806.

Al día siguiente de dictarse tal sentencia, se interpone un *writ of certiorari* ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.⁵⁹⁵ Dado que para que el asunto pudiera acceder a la máxima institución judicial estadounidense es menester la invocación de derechos de naturaleza federal, el escrito de interposición plantea tres cuestiones a resolver por el Tribunal Supremo:

1. *Whether post-election judicial limitations on the discretion granted by the legislature to state executive officials to certify election results, and/or post-election judicially created standards for the determination of controversies concerning the appointment of presidential electors, violate the Due Process Clause or 3 U. S. C. § 5, which requires that a State resolve controversies relating to the appointment of electors under «laws enacted prior to» election day.*
2. *Whether the state court's decision, which cannot be reconciled with state statutes enacted before the election was held, is inconsistent with Article II, Section 1, clause 2 of the Constitution, which provides that electors shall be appointed by each State "in such Manner as the Legislature thereof may direct".*
3. *Whether the use of arbitrary, standardless, and selective manual recounts that threaten to overturn the results of the election for President of the United States violates the Equal Protection or Due Process Clauses, or the First Amendment.*

En otras palabras, que son dos los asuntos que el equipo jurídico del candidato republicano somete a la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: el primero afecta a la propia sentencia impugnada, al entender que la misma,

⁵⁹⁵ Puede accederse al texto del recurso en: <http://jurist.law.pitt.edu/election/00836-1a.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

al limitar la discrecionalidad administrativa de los empleados públicos encargados de la supervisión del proceso electoral y al establecer una fecha límite no contemplada en los textos legislativos del estado, puede vulnerar preceptos de derecho federal (en concreto, y como hemos visto, se citan de manera expresa la *due process clause*, el artículo II sección I de la Constitución federal y el 3 Usc 5), mientras que la segunda afecta de lleno al núcleo central de la cuestión, a saber, si a la hora de practicar los recuentos manuales, bien en ausencia de criterios uniformes que rijan el proceso o el uso de criterios arbitrarios, es susceptible de vulnerar lo dispuesto en la Constitución federal.

La pelota estaba ahora en el tejado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que tenía una absoluta libertad para decidir si entraba a conocer o no el asunto. Salto, pues, de la esfera jurisdiccional del estado a la jurisdicción federal.

5.2. *El Tribunal Supremo: funcionamiento y composición en el año 2000*

Hemos de comenzar abordando, aunque sea de forma somera y esquemática, los aspectos orgánicos y procesales relativos al Tribunal Supremo; en otras palabras, la composición de dicho órgano judicial y el *iter* procedimental que ha de seguir un asunto desde que llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos hasta que recae sentencia en el mismo.

El Tribunal Supremo lo integran nueve magistrados:⁵⁹⁶ un presidente (el *chief justice of the United States*) que es a su

⁵⁹⁶ Inicialmente, cuando se creó el Tribunal Supremo mediante la *Judiciary Act* de 1789, el mismo lo integraban seis personas: un *chief justice* y cinco *associate justices*. El número de magistrados se fue incrementando e incluso durante el periodo de la guerra de Secesión y durante un brevísimo lapso de tiempo llegó a establecerse en diez, aunque finalmente se estabilizó en nueve. El lector interesado puede consultar la magnífica síntesis de Bernard SCHWARTZ, *History of the Supreme Court*, New York, Oxford University Press, 1993; Charles WARREN, *The Supreme Court in United States history*, 2 vols., Boston, Little

vez el responsable máximo de toda la judicatura federal, y ocho jueces (*associate justices*). Tanto el presidente como los jueces son nombrados por el presidente con el visto bueno (la famosa cláusula constitucional del *advise and consent*) del Senado, que este suele otorgar o no tras un riguroso y extenso examen público (*hearing*) del candidato en el seno del comité senatorial. No es habitual, pero sí es posible, que el Senado rechace un candidato a juez del Supremo (así sucedió, por ejemplo, en 1987, cuando el Senado decidió no dar su aprobación a Robert Bork —uno de los principales ideólogos del originalismo—). No obstante, cuando el designado obtiene la aprobación de la Cámara alta, es formalmente nombrado para el cargo, que ostentará ya de manera vitalicia. Pasemos revista a los nueve magistrados que en noviembre del año 2000 integraban el supremo órgano judicial estadounidense:⁵⁹⁷

- William Rehnquist, quien ostentaba la condición de *chief justice*. Accede al Tribunal Supremo en 1972 propuesto por el republicano Richard Nixon y fue elevado al puesto de *chief justice* en 1986 a instancias

Brown, 1922; William H. REHNQUIST, *The Supreme Court*, Alfred & Knopf, 2001; o la monumental obra en varios volúmenes que constituye la *History of the Supreme Court of the United States*, elaborada por la Oliver Wendell Holmes Devise. De las tres primeras citadas, la de Rehnquist es quizá la más didáctica y accesible al profano; la de Schwartz, la más jurídicamente accesible; y la de Warren, con la evidente rémora que supone ser una obra de 1922, es sin embargo la que mejor integra la historia del Tribunal Supremo con la historia de los Estados Unidos en general, objetivo que el propio autor se había marcado y que expresamente constata en la introducción.

⁵⁹⁷ Véase, fundamentalmente, Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., pássim. Para un análisis de la composición y jurisprudencia del Tribunal Supremo durante el mandato de Rehnquist, véase Mark TUSHNET, *A court divided: the Rehnquist Court and the future of Constitutional law*, New York, W. W. Norton Company, 2005. Es igualmente interesante Bernard SCHWARTZ, *The unpublished opinions of the Rehnquist Court*, New York, Oxford University Press, 1996 (especialmente las páginas introductorias 3-26) y David L. HUDSON, *The Rehnquist Court: understanding his impact and legacy*, Westport, Praeger Publishers, 2006. Las breves semblanzas de los magistrados las tomo fundamentalmente de la obra de HUDSON, pp. 35-53.

del igualmente republicano Ronald Reagan. Persona de ideología y talante profundamente conservador, desde su acceso a la presidencia del Tribunal Supremo orilló en parte su intento de rectificar la jurisprudencia de la época Warren para centrarse más hacia la gestión interna del mismo, aspecto en el que tuvo un notable éxito y que fue reconocido por sus colegas de profesión. Su capacidad de trabajo y su inagotable sentido del humor, que no le abandonó incluso ya muy avanzada la enfermedad que finalmente acabaría con su vida, contribuyeron a crear un excelente ambiente de trabajo entre los magistrados.

- John Paul Stevens llega al Tribunal Supremo en el año 1975 de la mano del republicano Gerald Ford. Tras su nombramiento, un sector de la prensa le acusó de ser un genuino conservador, aunque Stevens siempre manifestó una notable independencia, como lo acreditan los numerosos votos particulares tanto concurrentes como discrepantes. En el año 2000 Stevens se había convertido en el líder indiscutible del ala liberal del Tribunal Supremo, junto con Souter, Ginsburg y Breyer. Ante las acusaciones de los conservadores, Stevens alegaba que él no había mudado su criterio, sino que era el tribunal el que se había escorado hacia la derecha, excusa ya bastante agotada que había sido esgrimida, en su día, por el magistrado Byron White, propuesto por John F. Kennedy.⁵⁹⁸

⁵⁹⁸ Pese a haber sido propuesto por un presidente demócrata y votar siempre en sentido liberal en asuntos que afectan a cuestiones raciales, en aspectos penales y en determinados aspectos de derechos civiles, White se alineó siempre con los conservadores, hasta el punto de que en el famoso asunto *Roe v. Wade* formuló un voto particular muy crítico con la resolución. White manifestaba que él no había cambiado, sino que era el Partido Demócrata quien lo había hecho. Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., p. 61.

- Sandra Day O'Connor se incorpora como magistrada del Tribunal Supremo en el año 1981 a propuesta del republicano Ronald Reagan, quien cumplió así su promesa electoral de nombrar la primera mujer juez del alto tribunal. Vinculada a William Rehnquist por una sólida amistad nacida de sus años universitarios, nunca disimuló su adhesión a los principios del Partido Republicano, si bien barnizados con una especie de sexto sentido o instinto genuino que le hacía conectar bastante con los intereses y demandas de la sociedad en temas tan candentes como, por ejemplo, el aborto. O'Connor era en el año 2000 la magistrada clave para la obtención de una mayoría de jueces, habiendo heredado la posición que en su día ostentó en el Tribunal Supremo Lewis F. Powell.
- Antonin Scalia. Fue el magistrado elegido por Reagan cuando Rehnquist fue promovido al cargo de *chief justice* en sustitución de Warren Burger⁵⁹⁹ y su candidatura prácticamente no tuvo oposición en la fase senatorial para confirmarlo como magistrado, dado que al tener que debatir conjuntamente su candidatura junto con la de Rehnquist, la oposición demócrata se centró exclusivamente en el futuro *chief justice*. Sin embargo, Scalia demostró ser mucho más conservador que Rehnquist. Brillante polemista (son célebres sus votos particulares en polémica no solo con los magistrados del ala liberal, sino incluso en ocasiones con sus colegas doctrinalmente afines) es uno de los principales ideólogos del originalismo,⁶⁰⁰

⁵⁹⁹ Curiosamente, y al igual que ocurriera en 1971, donde a Lewis Powell apenas se le prestó atención dado que todos los esfuerzos se concentraron en Rehnquist.

⁶⁰⁰ El originalismo es una corriente de pensamiento jurídico que, a grandes rasgos, entiende en su primera formulación que la interpretación de las normas constitucionales

tesis que ha defendido no solo en el estrado, sino en publicaciones como, por ejemplo, su libro *A matter of interpretation: Federal Courts and the law*.

- Anthony Kennedy. Procedente de Sacramento, Kennedy accedió al cargo propuesto por Ronald Reagan tras el fracaso senatorial del primer candidato, Robert Bork (considerado excesivamente conservador, aspecto este que además tuvo la ingenuidad de no ocultar ante el comité del Senado). Persona sumamente conservadora y católico practicante, Kennedy percibe el derecho como un sistema global o conjunto de principios estables, y estaba convencido de que podía diferenciar perfectamente su posición como juez de sus creencias y convicciones personales (de hecho, su voto fue decisivo en 1992 para que el Tribunal Supremo no dejara sin efecto el caso *Roe v. Wade*).
- David Souter. Primero de los candidatos propuesto por el presidente George H. W. Bush, es nombrado juez del supremo en 1991. Prácticamente desconocido por toda la comunidad jurídica, Souter se mostró ya desde el inicio como un magistrado que no dudaría en alinearse con el sector liberal del Tribunal Supremo, formulando o adhiriéndose a votos particulares en aquellos casos donde el alto tribunal anuló por inconstitucionales leyes federales por invasión de competencias estatales. Pronto Souter constituyó una decepción para los conservadores.
- Clarence Thomas. Thomas no solo fue el segundo magistrado de color que sirvió en la más alta institu-

ha de hacerse siguiendo estrictamente el texto constitucional y el pensamiento de los constituyentes. Sobre este tema es interesante la consulta del volumen 31-1 (invierno 2010) de la *Harvard Journal of Law and Public Policy*, dedicado monográficamente al originalismo y su evolución.

ción judicial estadounidense (el primero fue Thurgood Marshall), sino que si por algo será recordado fue por la brutalidad de los *hearings* senatoriales, donde surgieron acusaciones de comportamientos deshonestos hacia una ayudante suya, Anita Hill. Una vez en el estrado, Thomas se constituyó, junto con Scalia, en el puntal del originalismo. Único magistrado que en las vistas orales se caracteriza, a diferencia de sus colegas, por no formular ningún tipo de pregunta o plantear cuestión alguna a los letrados de las partes. No es frecuente, sin embargo, que a Thomas se le asigne la redacción de sentencias que afecten a asuntos controvertidos o tengan que afrontar principios generales.

- Ruth Bader Ginsburg. Bill Clinton tuvo la oportunidad, casi recién inaugurado su mandato, de nombrar un magistrado del alto tribunal, siendo la elegida esta jurista de un liberalismo templado, cuya lucha por los derechos de las mujeres no le impidió criticar abiertamente el caso *Roe v. Wade* y mostrarse muy cercana a las tesis de sus colegas conservadores en lo referente a las garantías penales.
- Stephen Breyer. Nombrado a instancias de Bill Clinton en 1994, este profesor de derecho administrativo demostró ser un excelente teórico a la hora de contrarrestar las tesis originalistas de Antonin Scalia tanto dentro como fuera del tribunal. De hecho, su breve ensayo *Active liberty: interpreting our democratic constitution*, es una réplica oficiosa a las tesis sostenidas por Scalia en su *A matter of interpretation*. Las diferencias ideológicas entre ambos magistrados no impide que ambos tengan un cordialísimo trato, hasta el punto de comparecer públicamente juntos en varias ocasiones para contrarrestar sus respectivas tesis.

Desde 1994, y hasta el fallecimiento de William Rehnquist en septiembre de 2005, no se produjo vacante alguna en la institución. En el año 2000 había, por tanto, siete magistrados que debían su cargo a mandatarios republicanos y únicamente dos que fueron propuestos a instancia de presidentes demócratas. No obstante, y pese a ello, el Tribunal Supremo se hallaba dividido en dos bloques homogéneos, dada la evolución liberal de varios de los magistrados republicanos: el ala conservadora estaba representada por Rehnquist, Scalia, Kennedy (con matices) y Thomas; el bloque liberal, bajo el liderazgo intelectual de Stevens, lo integraban Souter, Ginsburg y Breyer. Sandra Day O'Connor se convertía así en el elemento clave, siendo de destacar que, pese a su procedencia y sus simpatías republicanas, no tenía reparos en alinearse ocasionalmente –al igual que Kennedy– con el sector liberal.

En cuanto al funcionamiento del tribunal, ya a mediados de los años ochenta manifestaba Bernard Schwartz que el secretismo que había caracterizado a la institución durante su casi bicentennial existencia se había disipado en gran parte gracias a varias obras meritorias que habían puesto de manifiesto al gran público las interioridades del Tribunal Supremo.⁶⁰¹ En lo que se refiere a la tramitación de asuntos, la mayoría de los casos que resuelve el máximo órgano judicial estadounidense se plantean a través de lo que jurídicamente se conoce como *writ of certiorari* o *certiorari* a secas.⁶⁰² A grandes rasgos, y aun a riesgo de simplificar en exceso, hemos de indicar que las sentencias de los distintos tribunales de apelación y las de los tribunales supre-

⁶⁰¹ Bernard SCHWARTZ, *Decision: How Supreme Court decide cases*, Oxford University Press, 1997.

⁶⁰² Sobre esta institución jurídica, véase el excelente artículo de María Ángeles AHUMADA RUIZ, «El certiorari, ejercicio discrecional de la jurisdicción de apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos», publicado en el número 14 de la *Revista Española de Derecho Constitucional*, pp. 89-136.

mos de los diferentes estados (en este último supuesto siempre que se invoque una vulneración de preceptos constitucionales o infracción de normas federales) pueden ser recurridas al Tribunal Supremo a través del *writ of certiorari*, cuya admisión a trámite es discrecional, siendo el criterio de admisión a trámite que voten a favor de la misma cuatro de los nueve magistrados. Una vez admitido a trámite, las partes fijan por escrito sus posiciones y una vez presentados los mismos el tribunal señala día y hora para los *oral arguments* del caso, donde los abogados de las partes gozan cada uno de un tiempo de treinta minutos para exponer sus posiciones jurídicas y defenderlas ante los nueve magistrados, quienes suelen someter a los letrados a una batería ingente de preguntas y cuestiones relacionadas con el caso y con los problemas jurídicos que este plantea. Una vez finalizados los *oral argument*, los nueve magistrados se reúnen para debatir el asunto y someter a votación el mismo. Si el *chief justice* se encuentra en la mayoría, decidirá cuál de los magistrados se encargará de la redacción de la sentencia; si, por el contrario, está en la minoría, será el magistrado más antiguo, de los que integran la mayoría, quien se encargue de asignar el caso. No es infrecuente que a lo largo del proceso de elaboración de la sentencia (donde los borradores de la misma son entregados a los magistrados para que puedan realizar observaciones, apuntes o añadidos) una mayoría inicial se convierta en una minoría debido a la mutación de criterios de algún magistrado.⁶⁰³

A la hora de abordar la manera en que los magistrados se enfrentaron al caso *Bush v. Gore*, la fuente esencial es el li-

⁶⁰³ Remito al lector a tres interesantísimas obras que desvelan el funcionamiento interno del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de una manera bastante didáctica: el clásico *best seller* de Scott WOODWARD y Robert ARMSTRONG, *The brethren, inside the Supreme court* (publicado en 1979, la edición más reciente es la de Simon and Schuster, 2005); el ya citado de Bernard SCHWARTZ, *Decision: How the Supreme Court decide cases*; y el de Jeffrey TOOBIN, *The nine: inside the secret world of the Supreme Court* (que viene a ser una especie de continuación del de Woodward y Armstrong).

bro *The nine*, de Jeffrey Toobin. Según manifiesta dicho autor, todos los magistrados salvo Stevens y Souter siguieron con bastante interés el desarrollo de los comicios (algo lógico por otra parte, dado que la imparcialidad de un juez no está reñida con el lógico interés en el devenir de unos comicios destinados a elegir al Jefe del Estado) y nadie ocultaba sus preferencias y simpatías. De hecho, O'Connor, que la noche electoral se encontraba junto con su marido en una fiesta privada, manifestó cuando los informativos daban la victoria al candidato demócrata «*This is terrible. That means it's over*». ⁶⁰⁴ Anthony Kennedy, magistrado que tenía a su cargo la supervisión del Undécimo Circuito (que englobaba el estado de Florida), iba elaborando, al compás de los acontecimientos, notas internas para sus ocho colegas. William Rehnquist, gran aficionado a realizar simbólicas apuestas de todo tipo con amigos y conocidos, había cruzado varias con uno de sus más cercanos amigos, Herman Obermeyer, en relación al candidato que obtendría la victoria en cada estado; sin embargo el 21 de noviembre de 2000, al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Florida, Rehnquist envió por fax una nota a su amigo indicando ante la posible circunstancia de que el asunto finalizase ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, debía abstenerse de seguir realizando cualquier tipo de apuestas sobre el resultado de las elecciones. ⁶⁰⁵

⁶⁰⁴ Sandra Day O'Connor intentaría posteriormente explicar sus palabras en el sentido de que lo pretendido era manifestar su disgusto por el hecho de que los noticiarios dieran por segura la victoria de Gore sin haber finalizado el recuento; mas John O'Connor, marido de la juez, manifestó a sus allegados que sus palabras brotaron espontáneamente porque tenía previsto renunciar a su puesto en el tribunal y no deseaba que fuese un mandatario demócrata el encargado de cubrir su vacante (véase Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., pp. 143-144).

⁶⁰⁵ En concreto, el texto de la carta de Rehnquist es el siguiente: «*Dear Obie and Betty Nan: It now appears remotely possible that the Florida election case might come to our court. I therefore feel obliged to cancel all my election bets in any way depending on the Florida vote. I hope you will agree to let me do this. Sincerely, Bill Rehnquist*», Herman OBERMEYER,

Una vez recibido en la Secretaría del tribunal el *writ of certiorari*, era necesario el voto de cuatro de los nueve magistrados, algo que se obtuvo sin problemas, dado que Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy y Thomas abogaron porque el Tribunal aceptase el caso, si bien limitando las cuestiones jurídicas a resolver a los dos primeros puntos. No obstante, en el momento en que tuvieron lugar los *oral argument* (es decir, el día 1 de noviembre de 2000), el asunto pareció haber perdido interés, puesto que se habían producido ya acontecimientos que podrían traer como consecuencia la pérdida sobrevenida del objeto procesal. En efecto, el proceso ante el Tribunal Supremo derivaba de un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Florida dictado a consecuencia de la impugnación que Gore había realizado y cuyo objeto procesal concernía a su solicitud de recuentos manuales de votos (es decir, del *protest*) y a la interpretación que debía otorgarse a la falta de presentación en plazo de los mismos; sin embargo, ya se había sobrepasado con creces el día 26 de noviembre de 2000, fecha tope establecida por el Tribunal Supremo de Florida para que los distintos condados enviasen sus certificados a Katherine Harris y donde tan solo uno de los condados (Broward) había evacuado el trámite en tiempo y forma, por lo que la secretaria de Estado certificó la victoria electoral del Partido Republicano, acto que fue impugnado por Gore en el procedimiento judicial (*contest*) que daría lugar al caso *Bush v. Gore* y que detallaremos en el siguiente punto. Mas, pese a ello, el caso *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board* pendía ante el Tribunal Supremo.

En la conferencia de jueces que siguió a los *oral argument* trató de alcanzarse una resolución que gozase del apoyo unánime de todos los magistrados. Y, en efecto, pese a la división

«The William Rehnquist you didn't know», http://www.abajournal.com/magazine/article/the_William_rehnquist_you_didnt_know/ (consultado el día 8 de noviembre de 2011).

existente en el tribunal entre los magistrados de ideología conservadora y liberal se llegó a un acuerdo de mínimos, y dado que a esas alturas se había superado la fase de *protest*, poco o nada podía hacer el Tribunal; ello con independencia de que alguno de los magistrados deseara enviar una advertencia al máximo órgano judicial de Florida ante lo que consideraban un exceso interpretativo en el máximo órgano estatal, cuando no una usurpación de funciones que correspondían al legislativo del estado y que podían incluso vulnerar abiertamente el derecho federal.⁶⁰⁶ La sentencia, que gozó en efecto de unanimidad, se haría pública sin reflejar quién había sido el ponente de la misma, apareciendo formalmente como elaborada *per curiam*, expresión utilizada para casos menores o incontrovertidos.

5.3. *La sentencia* Bush v. Palm Beach County Canvassing Board (531 US 70 [2000])

La sentencia del caso se hace pública el día 4 de diciembre de 2000,⁶⁰⁷ y consistió en una breve resolución de apenas siete páginas que, como ya indicamos anteriormente, fue adoptada de forma unánime. El texto de la misma comienza haciendo referencia a la sentencia objeto de recurso y a las dos cuestiones

⁶⁰⁶ «*They knew that in such a politically polarizing moment, the Court would send a comforting signal by uniting around a single result. Anyway, the stakes were fairly low. Because the protest was already over, there wasn't a great deal that the Court could do. The conservatives, specially Scalia, were outraged that the Florida Supreme Court seemed to be rewriting the state election code. He wanted to slap that court down, at least rhetorically. O'Connor, too, didn't like the way the Florida justices appeared to be freelancing –and helping– Gore. The more liberal justices, specially Stevens, thought that Florida was merely doing what state courts always did, interpreting state law [...] When the conference reached an ambiguous result, Rehnquist often drafted his own opinion and then tried to bring everyone around. Even with a case of this magnitude, the phlegmatic chief didn't actually write this one himself, but instead assigned a law clerk, Luke Sabota, to compose the first draft*», Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., pp. 153-154.

⁶⁰⁷ Puede accederse al texto de la misma en: <http://supreme.justia.com/us/531/70/case.html>

que el Tribunal Supremo acepta conocer (la tercera de las que había sido planteada por la representación procesal de Bush no se tomó en consideración). Tras un resumen fáctico que abarca las cuatro primeras páginas de la sentencia, el tribunal entra de lleno en la cuestión jurídica enunciando un principio general, cual es que el Tribunal Supremo suele dejar en manos de los órganos de cada estado la interpretación de la legislación estatal, si bien en el caso concreto sometido a enjuiciamiento las normas aprobadas afectan no solo a comicios estatales, sino también al nombramiento de compromisarios para una elección presidencial, lo que evidentemente se encuentra afecto por normas constitucionales de carácter federal.

*As a general rule, this Court defers to a state court's interpretation of a state statute. But in the case of a law enacted by a state legislature applicable not only to elections to state offices, but also to the selection of Presidential electors, the legislature is not acting solely under the authority given it by the people of the State, but by virtue of a direct grant of authority made under Art. II S 1 of the United States Constitution.*⁶⁰⁸

⁶⁰⁸ Richard Posner, al comentar este razonamiento, avala el criterio del Tribunal Supremo a la hora de entender que estamos ante una cuestión de carácter eminentemente federal al indicar que la potestad de designar compromisarios para las elecciones presidenciales no es un poder de los estados preexistente a la federación y que, por tanto, haya sobrevivido tras la aprobación de la Constitución de 1787 y que esta le ha reservado: «*The power to appoint Presidential electors is not a 'reserved' power of the states, that is, a power they had before the Constitution was adopted and that survived that adoption. There was no Electoral College before then. The power to appoint the electors is a federal power that the states exercise as agents of the federal government. By assigning to state legislatures the task of determining the manner by which federal electors would be picked, Article II may be supposed to have federalized disputes over whether the authority thus granted to those legislatures had been usurped by another branch of government, including a court that invokes a vague provision of the state's constitution to displace the legislature's authority and in effect write its own election code*», *Breaking deadlock*, o. cit., p. 111. Por tanto, para este autor, cuando el Tribunal Supremo de Florida se amparó en el «poder del pueblo» para establecer una nueva fecha límite en lo referente a la remisión de certificados electorales, «*it was imposing its own populist values; it was not drawing the meaning out of the code itself*».

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos entiende que la sentencia de su homólogo de Florida contiene párrafos que puede entenderse que interpretan la legislación de dicho estado de una forma contraria a la normativa federal («*There are expressions in the opinion of the Supreme Court of Florida that may be read to indicate that it construed the Florida Election Code without regard to the extent to which the Florida Constitution could, consistent with Art. II S 1*»). Se transcribe íntegro el texto del 3 USC 5,⁶⁰⁹ recordando que se trata de un precepto federal que el Tribunal Supremo de Florida únicamente cita en una nota al pie mas sin entrar a analizar dicho precepto en sus fundamentos:

The Florida Supreme Court cited 3 USC 1-10 in a footnote of its opinion, 772 So. 2nd, at 1238, n.55, but did not discuss 5. Since 5 contains a principle of federal law that would assure finality of the State's determination if made pursuant to a state law in effect before the election, a legislative wish to take advantage of the «safe harbor» would counsel against any construction of the Electoral Code that Congress might deem to be a change in the law.

El núcleo de la sentencia se contiene, sin embargo, en el párrafo final, en tan solo unas breves líneas donde los nueve magistrados reflejan, sin fisuras, el parecer de la institución:

Specifically, we are unclear as to the extent to which the Florida Supreme Court saw the Florida Constitution as circumscribing the legislature's authority under Art. II 1. We are also

⁶⁰⁹ Recordemos que dicho precepto establece que si el estado regula procedimientos de carácter administrativo o judicial tendentes a resolver los conflictos electorales, los mismos han de estar resueltos con carácter definitivo al menos seis días antes de la fecha establecida para que los compromisarios electos se reúnan a los efectos de emitir su voto.

unclear as to the consideration the Supreme Court of Florida accorded to 3 USC 5. The judgment of the Supreme Court of Florida is therefore vacated and the case is remanded for further proceedings not inconsistent with this opinion. It is so ordered.

En resumen, el Tribunal Supremo no estaba indicando que su homólogo de Florida hubiese actuado incorrectamente (pese a insinuar que su resolución podía chocar abiertamente con la normativa federal), sino que anulaba su sentencia por falta de motivación, devolviendo el asunto al máximo órgano judicial del estado en cuestión para que este resolviera, de nuevo, cumpliendo las exigencias de fundamentación jurídica que el alto órgano judicial estadounidense demandaba. Hasta ese momento, pues, el daño que había sufrido el Tribunal Supremo de Estados Unidos había sido mínimo –por no decir nulo–, y, como bien indica Jeffrey Toobin, si la única intervención en relación con el contencioso presidencial de 2000 hubiese sido el caso *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*, el mismo no hubiera supuesto más que una nota al pie en la ya dilatada y bicentenaria historia de la institución judicial.⁶¹⁰ Desgraciadamente, no fue así.

6. De las urnas a los estrados (II): *Bush v. Gore*

6.1. *El proceso en las instancias estatales*

El caso *Bush v. Gore* inicia su periplo judicial el día 27 de noviembre de 2000. Recapitulemos brevemente y recordemos el estado de cosas existente en dicha fecha: el día 21 de noviembre de 2000, el Tribunal Supremo de Florida había hecho

⁶¹⁰ Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., p. 154.

pública su sentencia *Palm Beach Canvassing Board v. Harris*, que había sido impugnada ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos merced a la interposición de un *writ of certiorari* que, como vimos, había sido admitido a trámite señalando el 1 de diciembre como fecha para los *oral argument* del caso. El día 26 de noviembre, fecha que la sentencia anteriormente citada había establecido como límite para la remisión de los recuentos electorales, únicamente los condados de Volusia (que ya había enviado sus resultados antes de las 5 horas del 14 de noviembre) y Broward (que a duras penas logró cumplir con el nuevo plazo de gracia establecido por el Tribunal Supremo de Florida) habían enviado los correspondientes certificados electorales, que fueron debidamente incluidos en los resultados finales del estado, en virtud de los cuales la secretaria de Estado Katherine Harris proclama la victoria de Bush por un margen de 537 votos, tras lo cual el gobernador del estado, Jeb Bush, declara electos a los veinticinco compromisarios republicanos. El panorama estaba, pues, claro, el día 27 de noviembre de 2000: no se está ya ante una mera discrepancia en el recuento de votos, sino ante un acto administrativo que proclama la candidatura vencedora en los comicios presidenciales.

Así pues, Al Gore interpone ante el Juzgado de Circuito del Segundo Circuito judicial de Florida una demanda al amparo de las previsiones del 102.168, sobre la base de que el acto administrativo en cuestión se basa en un cómputo erróneo de los resultados al no incluir los sufragios emitidos en los condados de Palm Beach, Miami Dade y Nassau. Veamos lo que establece el correspondiente precepto de la legislación electoral de Florida referente a la impugnación judicial (*contest*)

- (1) *Except as provided in s. 102.171, the certification of election or nomination of any person to office, or of the result on any question submitted by referendum, may be contested in the*

Circuit Court by any unsuccessful candidate for such office or nomination thereto or by any elector qualified to vote in the election related to such candidacy, or by any taxpayer, respectively.

- (2) *Such contestant shall file a complaint, together with the fees prescribed in chapter 28, with the clerk of the Circuit Court within 10 days after midnight of the date the last County Canvassing Board empowered to canvass the returns certifies the results of the election being contested or within 5 days after midnight of the date the last County Canvassing Board empowered to canvass the returns certifies the results of that particular election following a protest pursuant to s. 102.166(1), whichever occurs later.*
- (3) *The complaint shall set forth the grounds on which the contestant intends to establish his or her right to such office or set aside the result of the election on a submitted referendum. The grounds for contesting an election under this section are:*
 - (a) *Misconduct, fraud, or corruption on the part of any election official or any member of the Canvassing Board sufficient to change or place in doubt the result of the election.*
 - (b) *Ineligibility of the successful candidate for the nomination or office in dispute.*
 - (c) *Receipt of a number of illegal votes or rejection of a number of legal votes sufficient to change or place in doubt the result of the election.*
 - (d) *Proof that any elector, election official, or Canvassing Board member was given or offered a bribe or reward in money, property, or any other thing of value for the purpose of procuring the successful candidate's nomination or election or determining the result on any question submitted by referendum.*

- (e) *Any other cause or allegation which, if sustained, would show that a person other than the successful candidate was the person duly nominated or elected to the office in question or that the outcome of the election on a question submitted by referendum was contrary to the result declared by the Canvassing Board or election board.*
- (4) *The Canvassing Board or election board shall be the proper party defendant, and the successful candidate shall be an indispensable party to any action brought to contest the election or nomination of a candidate.*
- (5) *A statement of the grounds of contest may not be rejected, nor the proceedings dismissed, by the court for any want of form if the grounds of contest provided in the statement are sufficient to clearly inform the defendant of the particular proceeding or cause for which the nomination or election is contested.*
- (6) *A copy of the complaint shall be served upon the defendant and any other person named therein in the same manner as in other civil cases under the laws of this state. Within 10 days after the complaint has been served, the defendant must file an answer admitting or denying the allegations on which the contestant relies or stating that the defendant has no knowledge or information concerning the allegations, which shall be deemed a denial of the allegations, and must state any other defenses, in law or fact, on which the defendant relies. If an answer is not filed within the time prescribed, the defendant may not be granted a hearing in court to assert any claim or objection that is required by this subsection to be stated in an answer.*
- (7) *Any candidate, qualified elector, or taxpayer presenting such a contest to a circuit judge is entitled to an immediate hearing. However, the court in its discretion may limit the time to be consumed in taking testimony, with a view therein*

to the circumstances of the matter and to the proximity of any succeeding primary or other election.

- (8) *The circuit judge to whom the contest is presented may fashion such orders as he or she deems necessary to ensure that each allegation in the complaint is investigated, examined, or checked, to prevent or correct any alleged wrong, and to provide any relief appropriate under such circumstances.*

El día 28 de noviembre de 2000, y tras algún que otro agitado avatar relacionado con el turno de reparto,⁶¹¹ el asunto recae en el juez N. Sanders Saul,⁶¹² lo cual supuso un varapalo para las pretensiones de los demócratas, quienes no veían con muy buenos ojos a dicho magistrado. Sauls admite a trámite el recurso y dicta una resolución ordenando que 10750 papeletas del condado de Miami Dade y 3300 del condado de Palm Beach sean remitidas al juzgado con anterioridad a las cinco de la tarde del día 1 de diciembre.⁶¹³ El asunto *Gore v. Harris* sería finalmente resuelto mediante sentencia de 3 de diciembre de 2000 que desestima las pretensiones del de-

⁶¹¹ Los asuntos se asignaban en función de un turno de reparto por ordenador, pero el juez decano del circuito, George S. Reynolds III, pretendió, dada la trascendencia del caso, no aplicar dicho sistema y designar directamente a un juez, si bien dicha idea no logró prosperar. Vv. AA., *Deadlock*, o. cit., pp. 165-166.

⁶¹² El juez Sauls es descrito con tintes bastante negros por Jeffrey Toobin: «*On the bench, Sauls earned a reputation for a knee-kerk conservatism, an imperious demeanor and, above all, a consuming laziness. He was petty [...] He was inept [...] And he was vindictive*», *Too close to call*, o. cit., p. 203. El equipo del *Washington Post* es algo más generoso en su descripción del magistrado: «*He was a lifelong Democrat, the well-connected son of Democratic activists, but native North Florida Democrats are not always of the liberal variety [...] Sauls was a conservative soul with a linear mind; he was unlikely to warm to legalist leaps of faith in the cause of Al Gore*», *Deadlock*, o. cit., p. 165.

⁶¹³ <http://jurist.law.pitt.edu/election/CV-00-2808s.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011). Se puede comprobar que la hora a la que como máximo debían depositarse las papeletas en el juzgado está corregida a mano: inicialmente se había fijado las 12 del mediodía, sin embargo la fecha aparece tachada y sobre la misma escrita a mano las 5 PM.

mandante.⁶¹⁴ Analicemos punto por punto dicha resolución judicial:

1. En primer lugar, la sentencia comienza identificando las pretensiones de las partes en conflicto. El demandante solicita se anule la certificación estatal de las elecciones presidenciales del año 2000 sobre la base de que la misma es errónea, al haberse incluido votos ilegales y rechazar indebidamente la inclusión de votos que, por el contrario, entiende eran legales; la consecuencia inmediata de la impugnación del resultado electoral es que la misma se extendía a la certificación de compromisarios republicanos. A continuación, la sentencia desgrana punto por punto las pretensiones del actor en cuanto a cada uno de los condados cuyos resultados electorales son objeto del recurso judicial.
2. Una vez expuesto lo que se pide, el juez desestima las pretensiones de Gore con base en varios argumentos:
 - A) Tanto a nivel legal, como jurisprudencial, se exige en los procesos impugnatorios instados al amparo de lo dispuesto en el 102.168, que el demandante aporte un principio de prueba acreditativo de que las irregulares denunciadas alcanzan tal magnitud que serían determinantes para alterar el resultado de las elecciones, incidiendo en el hecho de que no es suficiente la mera sospecha o la probabilidad:

Further, it is well established and reflected in the opinion of Judge Joanos and Smith v. Tine, that in order to contest election results under Section 102.168 of the Florida Statutes, the Plaintiff

⁶¹⁴ http://jurist.law.pitt.edu/election/00-2431_transcript.pdf (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

must show that, but for the irregularity, or inaccuracy claimed, the result of the election would have been different, and he or she would have been the winner. It is not enough to show a reasonable possibility that election results could have been altered by such irregularities, or inaccuracies, rather, a reasonable probability that the results of the election would have been changed must be shown.

En el caso concreto el juez no es ya que no encuentre indicio alguno que permita tener por cierta la mera posibilidad de que las irregularidades denunciadas por el actor arrojaran un resultado diferente al oficialmente publicado.

In this case, there is no credible statistical evidence, and no other competent substantial evidence to establish by a preponderance of a reasonable probability that the results of the statewide election in the State of Florida would be different from the result which had been certified by the State Elections Canvassing Commission,

sino que ni tan siquiera encuentra prueba de que a lo largo del desarrollo del proceso electoral se hubieran producido ilegalidades, negligencias o coacciones tanto en la emisión como ulteriormente en el recuento de votos («*The Court further finds and concludes the evidence does not establish any illegality, dishonesty, gross negligence, improper influence, coercion, or fraud in the balloting and counting processes*»).

- B) No existe base jurídica alguna para la inclusión en el certificado de resultados enviados con posterioridad a la fecha establecida por el Tribunal Supremo de Florida en su sentencia *Palm Beach County Canvassing Board v. Harris*.⁶¹⁵
- C) La argumentación jurídica más importante de la sentencia es quizá la que descansa en la autoridad que la legislación deposita en los organismos públicos encargados del recuento. En efecto, según el juez Sauls, los *Canvassing Board* han sido apoderados legislativamente con una amplia discrecionalidad que únicamente puede ser objeto de anulación en vía judicial cuando se acredite que dichos organismos han actuado con un manifiesto abuso en el ejercicio de tal discrecionalidad, algo que no ha sucedido en el presente asunto («*The local boards have been given broad discretion which no Court may overrule, absent a clear abuse of discretion. The Palm Beach County board did not abuse its discretion in its review and recounting process*»). Es más, el juez entiende que los criterios utilizados a la hora de practicar los recuentos manuales se ajustan plenamente a la normativa legal, no siendo posible autorizar un recuento con base en criterios diferentes, toda vez que se crearía una distorsión o diferencia de trato entre varios condados («*with respect to the standards utilized by the Board in its review and counting processes, the Court finds that the standard utilized was in full compliance with the law and reviewed under*

⁶¹⁵ «*There is no authority under Florida law or certification of an incomplete manual recount of a portion of, or less than all ballots from any county by the state elections canvassing commission, nor authority to include any returns submitted past the deadline established by the Florida Supreme Court in this election.*»

another standard would not be authorized, thus creating a two-tier situation within one county, as well as with respect to other counties»).

En definitiva, que se desestima la demanda sobre la base no solo de una insuficiencia probatoria, sino lo que es más importante, argumentando que los *Canvassing Board* habían actuado correctamente en el ejercicio de la discrecionalidad que les era legislativamente atribuida en este tipo de asuntos. Tras dicha sentencia, Gore contemplaba ya muy lejana una posibilidad de victoria. Es cierto que la sentencia en cuestión podía ser recurrida e incluso cabía la posibilidad de que la misma fuera revocada; pero el tiempo corría en contra del candidato demócrata. La sentencia del juez Sauls se hace pública el 4 de diciembre, y según la normativa federal 3 Usc 5 todos los procesos impugnatorios estatales debían estar definitivamente finalizados antes del día 12 de diciembre. Por tanto, si superada dicha fecha no se había logrado una solución, los republicanos podrían impugnar una eventual lista de compromisarios de Gore y sería el Congreso de los Estados Unidos (dominado por los republicanos) el que tendría la última palabra. Pese a todo, Al Gore opta por recurrir la sentencia e interpone un recurso de apelación, que es derivado al Tribunal Supremo de Florida. Los *oral argument* del caso se celebran el día 7 de noviembre de 2000 y el día siguiente, 8 de diciembre, un Tribunal Supremo muy dividido (cuatro magistrados frente a tres y dos votos particulares discrepantes –uno de ellos muy duro–, razones por las cuales la sentencia aparece como elaborada *per curiam*) estima las pretensiones de Gore y, en su sentencia *Gore v. Harris*, anula la resolución de instancia⁶¹⁶ acordando no solo el recuento ma-

⁶¹⁶ <http://www.floridasupremecourt.org/decisions/pre2004/ops/sc00-2431.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

nual de votos no computados en los condados en disputa, sino que ordena un escrutinio manual en todo el territorio estatal de todas aquellas papeletas que no fueron computadas.

La sentencia comienza con un resumen fáctico de los hechos (la certificación de los resultados electorales del estado de Florida realizada por Katherine Harris el día 26 de noviembre de 2000, la impugnación judicial de dicho acto y la sentencia de instancia denegando las pretensiones de Al Gore) así como de los principales argumentos de Gore en la apelación. El Tribunal Supremo identifica la legislación aplicable (la normativa electoral de Florida contenida en el 102.168, citando no obstante la previsión clave del 3.USC 5 en cuanto al plazo máximo de resolución de los conflictos), manifestando que, pese a que los Tribunales no deben inmiscuirse en asuntos de naturaleza esencialmente política, es clara la intención del legislativo de que la impugnación de certificados electorales ha de ser resuelta en sede judicial (*«Although courts are, and should be, reluctant to interject themselves in essentially political controversies, the Legislature has directed in section 102.168 that an election contest shall be resolved in a judicial forum»*), tras lo cual la sentencia realiza un excursus sobre la naturaleza y evolución de este tipo de procedimiento judicial. Tras ello, la resolución judicial desgrana los argumentos jurídicos en los que se apoya, que podemos sistematizar de la siguiente manera:

1. *Diferencias y relaciones entre el procedimiento contest y el protest.* Al entrar en el análisis jurídico de las pretensiones de Gore, el Tribunal Supremo deja claro que las dos fases impugnatorias (el *protest* y el *contest*) son distintas e independientes, de tal manera que la segunda no es una especie de apelación de la primera ni aquella un requisito indispensable para el ejercicio de la segunda (*«No appellate relation ship exist between a protest and a contest; a protest is not a prerequisite for*

a contest [...] Moreover, the trial court in the contest action does not sit as an appellate court over the decisions of the Canvassing Board») y, en consecuencia, rechaza las tesis de la sentencia de instancia donde otorgaba deferencia a las actuaciones realizadas por los Canvassing Board (... The Board's decisions are not to be accorded the highly deferential abuse of discretion standard of review during a contest proceeding. In the present case, the trial court erroneously applied an appellate abuse of discretion standard to the Board's decisions»).

2. *Sobre la necesidad de practicar un recuento de los votos no computados no solo en los condados en disputa, sino en todo el territorio estatal.* Aclarado, pues, este aspecto, la sentencia da un paso más: no solo ha de practicarse el recuento de los votos de los condados en disputa, sino todos los votos no computados de todo el territorio estatal, para asegurar que el resultado de las elecciones lo determina la voluntad de los votantes y no aspectos ajenos técnicos o procedimentales.

We do agree, however, that it is absolutely essential in this proceeding and to any final decision, that a manual recount be conducted for all legal votes in this State, not only in Miami-Dade County, but in all Florida counties where there was an undervote and, hence, a concern that not every citizen's vote was counted. This election should be determined by a careful examination of the votes of Florida's citizens and not by strategies extraneous to the voting process. This essential principle, that the outcome of elections be determined by the will of the voters, forms the foundation of the election code enacted by the Florida Legislature and

has been consistently applied by this Court in resolving elections disputes.

El Tribunal Supremo de Florida vuelve a apoyarse, fundamentalmente, en los principios generales inherentes al funcionamiento de una sociedad democrática en la que, en cualquier tipo de elecciones, todo ciudadano tiene derecho a que, siempre que sea posible, su voto sea efectivamente computado en los resultados finales («*The clear message from this legislative policy is that every citizen's vote be counted whenever possible, whether in an election for a local commissioner or an election for President of the United States*»).

3. Suficiencia probatoria de Gore. En este sentido, el Tribunal Supremo de Florida desautoriza nuevamente al juez Sauls al indicar que no ha tenido en cuenta las modificaciones legislativas en materia electoral que se habían aprobado en 1999 y, en consecuencia, había aplicado unos criterios erróneos a la hora de valorar los elementos probatorios. En efecto, razona el Tribunal Supremo, el demandante en este tipo de procesos ha de acreditar que se han contabilizado un número de votos ilegales o rechazado un número de votos legales suficiente, no solo para alterar el resultado de las elecciones, sino para cuestionar o poner en duda el resultado de las mismas.⁶¹⁷ En consecuencia, al variar el criterio tendente a verificar si el demandante ha cumplido los requisitos legales exigidos, el tribunal entiende que Gore había cumplido con creces las

⁶¹⁷ «*Those grounds, as contained in the 1999 statute, now explicitly include, in subsection (c), the "[r]eceipt of a number of illegal votes or rejection of a number of legal votes sufficient to change or place in doubt the result of the election"*» (Emphasis supplied).

prescripciones legales, puesto que se había acreditado la existencia de más de nueve mil votos sin contabilizar en unos comicios donde la diferencia entre ambos candidatos apenas superaba el medio centenar.

Here, there has been an undisputed showing of the existence of some 9000 «undervotes» in an election contest decided by a margin measured in the hundreds. Thus, a threshold contest showing that the result of an election has been placed in doubt, warranting a manual count of all undervotes or «no vote registered» ballots, has been made,

algo que era más que suficiente para cuestionar el resultado electoral.

4. Continúa el órgano jurisdiccional abordando, en esta ocasión, el espinoso asunto de qué debe entenderse por un voto legalmente emitido, es decir, cuándo debe contabilizarse el mismo a pesar de que los medios mecánicos de cómputo no hayan registrado dicha papeleta como voto. Con apoyo en los textos legislativos y en la jurisprudencia, se entiende que es un voto válidamente emitido aquel en el cual se manifieste claramente la intención del votante («*This Court has repeatedly held, in accordance with the statutory law of this State, that so long as the voter's intent may be discerned from the ballot, the vote constitutes a "legal vote" that should be counted [...] Accordingly, we conclude that a legal vote is one in which there is a "clear indication of the intent of the voter"»*). La conclusión a la que termina llegando el tribunal es que, en el caso que se somete a su enjuiciamiento, se han rechazado un número suficiente de votos legales como para cues-

tionar el resultado electoral (*«Here, then, it is apparent that there have been sufficient allegations made which, if analyzed pursuant to the proper standard, compel the conclusion that legal votes sufficient to place in doubt the election results have been rejected in this case»*).

5. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal Supremo de Florida únicamente da la razón al juez Sauls cuando este avaló la exclusión de tres mil trescientos votos emitidos en el condado de Palm Beach amparándose en que el *Canvassing Board* no había podido determinar con un total grado de certeza cuál era la verdadera intención del votante. Aquí razona el tribunal que el demandante, en efecto, no había aportado prueba alguna que desautorizase el parecer del organismo encargado del recuento electoral. Sin embargo, en cuanto al rechazo a la inclusión de votos emitidos con posterioridad al 26 de noviembre de 2000, que el juez Sauls había rechazado sobre la base de que tal era la fecha límite establecida por el Tribunal Supremo de Florida para la remisión de los certificados a la Secretaría de Estado, el magistrado de instancia recibe un nuevo varapalo:

This conclusion was erroneous as a matter of law. The deadline of November 26, 2000, at 5 p. m. was established in order to allow maximum time for contests pursuant to section 102.168. The deadline was never intended to prohibit legal votes identified after that date through ongoing manual recounts to be excluded from the statewide official results in the Elections Canvassing Commission's certification of the results of a recount of less than all of a county's ballots. In the same decision we held that all returns must be considered unless their filing would effectively prevent an election contest from

being conducted or endanger the counting of Florida's electors in the presidential election.

6. Conclusión. Es evidente, y así lo entiende el supremo órgano judicial de Florida, que debe hacerse todo lo posible por garantizar el recuento de votos no computados, aún siendo conscientes de la necesidad de hacerlo con agilidad y rapidez dado lo sumario de los plazos, premura que se acentúa en unas elecciones presidenciales.

Although in all elections the Legislature and the courts have recognized that the voter's intent is paramount, in close elections the necessity for counting all legal votes becomes critical. However, the need for accuracy must be weighed against the need for finality. The need for prompt resolution and finality is especially critical in presidential elections where there is an outside deadline established by federal law. Notwithstanding, consistent with the legislative mandate and our precedent, although the time constraints are limited, we must do everything required by law to ensure that legal votes that have not been counted are included in the final election results.

Ahora bien, el tribunal no limita el recuento de votos manuales no computados en los cuatro condados tal y como exigía Gore, sino que en un evidente ejemplo de incongruencia procesal, amplia *extra petitem* el fallo extendiendo y ampliando el recuento a los votos no computados de todo el territorio estatal de Florida, aun siendo plenamente consciente de lo limitado del tiempo.⁶¹⁸ Por ello, los recuentos deben comenzar sin

⁶¹⁸ En este sentido lleva toda la razón Ronald L. Rotunda: «*Vice President Gore had limited his recount request to three overwhelmingly democratic counties and one other*

demora, ofreciendo únicamente como guía que sirviese de criterio a los juzgados de instancia para considerar un voto como válido «*la intención del votante*».⁶¹⁹

Esta resolución judicial cuenta con dos votos particulares muy críticos con el parecer mayoritario. El juez Wells muestra, en un extenso voto particular, su enérgica oposición con la sentencia al revocar el pronunciamiento de instancia y prolongar

small county that actually had equipment and software failures. These four Florida justices now ordered a manual recount of all the other counties (something no party ever requested) and then announced that the recount as to these other counties would be limited to the undervote ballots while the other counties were not so limited», Yet another article on Bush v. Gore. Ello nos lleva a plantearnos dos cuestiones: si cuatro condados fueron incapaces de realizar en tiempo y forma el recuento manual de votos no computados (y eso que ya estaban preparados para ello al haberse realizado una impugnación previa –*protest*– ante los propios organismos públicos que, lógicamente, tendrían previsto tal eventualidad), ¿puede pensarse seriamente que los restantes sesenta y tres condados iban a realizar en nueve días lo que cuatro no pudieron en diez? Además, existe otra consideración adicional, la cual es que, como indica Rotunda y ningún autor ha puesto en duda, Gore solicitó el recuento manual de votos no computados en cuatro condados que constituían el principal caladero de votos demócratas, por lo que de iniciar un recuento en todo el territorio estatal, es previsible que la ventaja de Bush, como mínimo, se mantuviera al obtener en otros condados más votos adicionales.

⁶¹⁹ La sentencia es duramente criticada en términos jurídicos por Richard Posner, para quien la misma da una nueva lectura a la normativa contencioso-electoral y extiende injustificadamente las potestades del órgano judicial sin base alguna para ello: «*This ruling made the protest a meaningless preliminary to the contest and expanded, without any basis in the statute, the power of the courts relative to that of the officials –the members of the Canvassing Boards and the secretary of state– to whom the legislature had assigned the responsibility for the conduct of elections, including election recounts. And while the statute limits the Canvassing Boards to correcting errors in the vote tabulation, the opinion authorizes judges in contest cases to conduct recounts intended to rectify voter errors as well [...]* On November 21 Florida supreme court had extinguished the secretary of state's discretion. On December 8 it extinguished the Canvassing Boards' discretion. The court said in effect: if the election is close and we think there were a lot of voter errors, we have carte blanche to order any mode of recount that strikes us as likely to recover a substantial number of the rejected votes», Richard POSNER, *Breaking deadlock*, o. cit., pp. 119-121. En este sentido, es igualmente crítica la opinión de Ronald L. Rotunda, y ello por varias razones: «*The Florida court had never before ruled that a manual recount should be conducted on the grounds that the voters may not have followed directions in punching the voting card [...]* Palm Beach had not completed its recounts by the deadline that the Florida Supreme Court had earlier given it, but these four justices ruled that the earlier deadline did not really matter. Nor was it important that Palm Beach, during the course of the recount, had several times changed its standards for counting ballots and used different standards than other counties», *Yet another article on Bush v. Gore*, o. cit.

el recuento («*I could not more strongly disagree with their decision to reverse the trial court and prolong this judicial process*»). En su párrafo inicial, el juez resume en pocas líneas toda su discrepancia con los razonamientos jurídicos de sus colegas: su decisión no solo no encuentra acomodo en la legislación estatal, sino que se basa en criterios desconocidos que, además, son susceptibles de crear aún mayores dificultades.

My succinct conclusion is that the majority's decision to return this case to the Circuit Court for a count of the undervotes from either Miami-Dade County or all counties has no foundation in the law of Florida as it existed on November 7, 2000, or at any time until the issuance of this opinion. The majority returns the case to the Circuit Court for this partial recount of undervotes on the basis of unknown or, at best, ambiguous standards with authority to obtain help from others, the credentials, qualifications, and objectivity of whom are totally unknown. That is but a first glance at the imponderable problems the majority creates,

entre las cuales se encuentra el situar a la nación al borde de una crisis constitucional innecesaria y sin precedentes («*Importantly to me, I have a deep and abiding concern that the prolonging of judicial process in this counting contest propels this country and this state into an unprecedented and unnecessary constitutional crisis*»). Su consideración es que la sentencia de instancia debía ser confirmada en todos sus extremos, entre otras cosas, por lo peligroso que supone para la propia imagen del poder judicial involucrarse en este tipo de contenciosos que deben ser resueltos por los otros poderes del estado

Otherwise, we run a great risk that every election will result in judicial testing. Judicial restraint in respect to elections is absolutely necessary because the health of our democracy depends

on elections being decided by voters—not by judges. We must have the self-discipline not to become embroiled in political contests whenever a judicial majority subjectively concludes to do so because the majority perceives it is «the right thing to do.» Elections involve the other branches of government. A lack of self-discipline in being involved in elections, especially by a court of last resort, always has the potential of leading to a crisis with the other branches of government and raises serious separation-of-powers concerns.

A mayor abundamiento, entiende el juez Wells que la sentencia, al ordenar el recuento manual, vulnera la sección primera del artículo segundo de la Constitución de los Estados Unidos («*Directing the trial court to conduct a manual recount of the ballots violates article II, section 1, clause 2 of the United States Constitution, in that neither this Court nor the Circuit Court has the authority to create the standards by which it will count the undervoted ballots*»).⁶²⁰

Existe otro voto particular del juez Harding,⁶²¹ quien manifiesta su desacuerdo con el parecer mayoritario de sus colegas y se mostraba partidario de confirmar íntegramente la sentencia de instancia, si bien por motivos diferentes a los esgrimidos por el juez Sauls. Es más, Harding hace un reconocimiento explícito de la meritoria labor de Sauls bajo la enorme presión (tanto mediática como temporal) en la que se vio obligado a trabajar y, pese a manifestar la incorrecta aplicación de los criterios adoptados por el juez a la hora de determinar el grado

⁶²⁰ Este sería uno de los argumentos que desarrollaría en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la defensa procesal de Bush y que constituiría el núcleo del voto particular concurrente que a la sentencia *Bush v. Gore* formularían Rehnquist, Scalia y Thomas.

⁶²¹ El juez Wells se adhiere parcialmente al voto particular de Harding, salvo en lo referente a los erróneos criterios que según este aplicó el juez Sauls, que Wells considera correctos.

de discrecionalidad que gozan los organismos encargados del recuento electoral, la misma no es determinante pues aún aplicando los estándares correctos el resultado debería ser igualmente desestimatorio para las pretensiones de Gore.

While I disagree with Judge Sauls on the standards applicable to this election contest, I commend him for the way that he conducted the proceedings below under extreme time constraints and pressure. Further, I believe that Judge Sauls properly concluded that there was no authority to include the Palm Beach County returns filed after the explicit deadline established by this Court. I conclude that the application of the erroneous standards is not determinative in this case. I agree with Judge Sauls that the appellants have not carried their burden of showing that the number of legal votes rejected by the Canvassing Boards is sufficient to change or place in doubt the result of this statewide election. That failure of proof controls the outcome here. Moreover, as explained below, I do not believe that an adequate remedy exists under the circumstances of this case.

El tiempo continuaba transcurriendo de forma irremediable y se estaba a tan solo cuatro días del fatídico 12 de diciembre fecha en la cual, recordemos, habían de encontrarse definitivamente resueltos todos los procesos impugnatorios establecidos en la legislación electoral del estado. De manera inmediata, ese mismo día 8 de diciembre de 2000 (y con la fecha límite del día 12 de diciembre prácticamente encima), Bush interpone, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un *writ of certiorari*,⁶²² solicitando a su vez del Tribunal Supremo de Florida se suspenda la ejecución de la sentencia de

⁶²² <http://jurist.law.pitt.edu/election/emappforstaybushvvore.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

8 de diciembre en tanto en cuanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no se pronuncie sobre el asunto. El Tribunal Supremo de Florida, en una breve resolución fechada el día 9 de diciembre⁶²³ rechaza suspender la ejecución de su sentencia, pero para entonces el asunto ya estaba en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien iba a dar un giro copernicano al asunto.

6.2. *El proceso en el Tribunal Supremo*

Aunque, como indicábamos en el párrafo anterior, el máximo órgano judicial del estado de Florida había rechazado adoptar como medida cautelar dejar temporalmente sin efecto la sentencia de 8 de diciembre del 2000, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicta resolución ese mismo día 9 de diciembre estimando la petición de Bush de suspender cautelarmente los recuentos, a la vez que admite el *writ of certiorari*⁶²⁴ interpuesto frente a la sentencia.

Desde el momento en el que el asunto llegó al Tribunal Supremo, los magistrados tenían ya bien clara su postura al respecto. Rehnquist, Scalia y Thomas deseaban poner fin de forma inmediata a la situación de incertidumbre revocando la sentencia del Tribunal Supremo de Florida y deteniendo los recuentos manuales, mientras que Stevens y Ginsburg entendían que el Tribunal Supremo debía abstenerse y dar por buena la interpretación que, de la normativa estatal, había realizado la suprema instancia judicial de Florida. Stephen Breyer, uno de los miembros del ala liberal del Tribunal Supremo, aún discrepando de las tesis con-

⁶²³ <http://jurist.law.pitt.edu/election/OrderDenyingStay.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011).

⁶²⁴ <http://jurist.law.pitt.edu/election/00-949x.pdf> (consultado el día 2 de noviembre de 2011). La resolución cuenta con sendos votos particulares, uno concurrente (de Antonin Scalia) y otro discrepante (John Paul Stevens).

servadoras no veía tampoco con buenos ojos la actuación del Tribunal Supremo de Florida al entender que el mismo no había actuado de forma correcta; Breyer, pues, abogaba por una solución intermedia, consistente en estimar el recurso, pero devolviendo el asunto a Florida para que el Tribunal Supremo de dicho estado fijase unos criterios uniformes para todo el territorio estatal que sirviesen como directrices a la hora de practicar los recuentos manuales y evitar discordancias a la hora de verificar dicho recuento;⁶²⁵ el propio Breyer confirmó esta postura suya y su coincidencia con el parecer mayoritario en su recentísimo libro *Making our democracy work*, donde tras hacer constar expresamente su discrepancia con la tesis mayoritaria, sí que manifiesta de forma expresa e indubitada «*I agreed with the majority, however, that there should be a uniform standard for all counties*».⁶²⁶ Esta postura de Breyer obedecía no solo a un convencimiento personal, sino a una voluntad de compromiso que inclinase hacia su postura a los dos magistrados clave, Sandra Day O'Connor y Anthony Kennedy. Pero en esta ocasión, Breyer no logró su objetivo, puesto que Anthony Kennedy tenía bastante claro que, en este caso, se había producido una evidente vulneración de la *equal protection clause* y debía detenerse de forma inmediata el recuento de votos para no prolongar tan agónica situación. En cambio, O'Connor tenía bien clara su posición: debía estimarse el recurso y detener el recuento de votos, dado que si un puñado de votantes no había sabido cubrir las papeletas electorales ni las

⁶²⁵ «*And Breyer the pol didn't like what the Florida Supreme Court had done. To him, the justices in Tallahassee looked like they were trying too hard to help Gore. Worse, Breyer thought their failure to set a standard for the recount made their motives even more suspect. He didn't particularly care if one described the problem as one of due process or equal protection or any other legal category. He thought what the Florida justices had done didn't pass the smell test, and that was what mattered to him. But Breyer had a simple solution: remand the case back to the Florida Supreme Court, order those justices to set a clear standard for the whole state, and then recount de votes*», Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., pp. 165-166.

⁶²⁶ Stephen BREYER, *Making our democracy work*, Alfred A. Knopf, 2010, p. 243, nota 6 del capítulo sexto.

personas encargadas del desarrollo del proceso electoral ni los jueces debían suplir tales carencias.⁶²⁷ David Souter, cuya postura era idéntica a la de Breyer, intentó de manera infructuosa atraer hacia sus tesis a O'Connor y a Kennedy. Los *oral argument* tienen lugar el día 11 de diciembre de 2000, con un William Rehnquist indicando a las partes que «*Before we begin the arguments, the Court wishes to commend all the parties to this case on their exemplary briefing under very trying circumstances.*» El día 12 de diciembre de 2000 se hace pública la sentencia del caso. La misma aparece elaborada como *per curiam* y estima el recurso de Bush sobre la base de que existe en el caso enjuiciado una infracción de la *equal protection clause*.⁶²⁸ En concreto, los fundamentos jurídicos de la sentencia en cuestión ocupan ocho folios y de ellos conviene resaltar los siguientes pronunciamientos:

1. El propio Tribunal Supremo reconoce que este asunto ha puesto de manifiesto determinadas deficiencias del sistema electoral, dado que existe un determinado número de votos no registrados, motivo por el cual hace una llamada al legislativo para que establezca las mejoras necesarias en el sistema de votación.

The closeness of this election, and the multitude of legal challenge which have followed in its wake, have brought into Sharp focus a common, if heretofore unnoticed phenomenon.

⁶²⁷ «O'Connor had made up her mind about Bush v. Gore firmly. She thought Bush should win, the case as well as the election [...] She had convinced herself that the root of the issue in Florida was simply that some voters hadn't figured out how to cast their ballots the right way. In her view, it wasn't the job of election officials—or the courts—to puzzle over the true meaning of ambiguously marked ballots. If the voters didn't bother to learn how to vote correctly, the state shouldn't try to figure out what these hapless souls meant to do. As for the Florida Supreme Court, those justices just looked like a bunch of Democratic hacks», Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., p. 166.

⁶²⁸ Un comentario analítico muy extenso y detallado tanto de la sentencia como de los votos particulares puede encontrarse en el capítulo octavo de Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. 177-200.

Nationwide statistics reveal that an estimated 2% of ballots cast do not register a vote for President for whatever reason, including deliberately choosing no candidate at all or some vote error [...] This case has shown that punchcard balloting machines can produce an unfortunate number of ballots which are not punched in a clean, complete way by the voter. After the current counting, it is likely legislative bodies nationwide will examine ways to improve the mechanism and machinery for voting.

2. Tras recordar que el ciudadano no goza de un derecho federal a elegir los compromisarios hasta tanto la legislatura estatal se lo conceda, una vez garantizado el sufragio activo este goza de la condición de derecho fundamental («*When the state legislature vests the right to vote for President in its people, the right to vote as the legislature has prescribed is fundamental; and one source of its fundamental nature lies in the equal weight accorded to each vote and the equal dignity owed to each vote*»). Ese derecho al sufragio no solo se protege en cuanto a la titularidad, sino en cuanto a su ejercicio de tal manera que no puede otorgar primacía a un voto sobre otro («*The right to vote is protected more than the initial allocation of the franchise. Equal protection applies as well to the manner of its exercise. Having once granted the right to vote on equal terms, the State may not, by later arbitrary and disparate treatment, value one person's vote over that of another*»).
3. El problema jurídico del presente asunto radica en dilucidar si los procedimientos establecidos por el Tribunal Supremo de Florida son suficientes para entender cumplido el requisito fundamental de la igualdad en el voto. La conclusión del tribunal es

que no («*The recount mechanisms implemented in response to the decisions of the Florida Supreme Court do not satisfy the minimum requirement for nonarbitrary treatment of voters necessary to secure the fundamental rights*»). A ello se añade una dificultad, la cual es que, según el máximo órgano judicial de Florida, ha de inducirse la intención del votante a través de la perforación de una papeleta, donde en unos casos está semiperforada y en otros únicamente aparece una pequeña hendidura («*In some cases a piece of the card –a Chad– is hanging, say, by two corners. In other cases there is no separation at all, just an indentation*»). Ello enfrenta al tribunal no al examen de testigos, sino a la interpretación de meros objetos físicos que aparecen marcados o agujereados, por lo que es posible, a la hora de intentar inducir la intención del votante, establecer o fijar normas específicas para asegurar un tratamiento uniforme.

In this instance, however, the question is not whether to believe a witness but how to interpret the marks or holes or scratches on an inanimate object, a piece of cardboard or paper which, it is said, might not have registered as a vote during the machine count. The factfinder confronts a thing, not a person. The search for intent can be confined by specific rules designed to ensure uniform treatment.

4. El tribunal indica que los autos contienen ejemplos de condados donde no solo se utilizaron diferentes criterios a la hora de establecer un voto como válido (caso de Miami-Dade), sino que incluso en ocasiones se mudó de criterio a lo largo del recuento (caso de Palm Beach).

5. El recuento manual no solo se limita a los *undervotes*,⁶²⁹ sino a todas las papeletas, lo que conlleva nuevos problemas a la hora del recuento que afectan a los *overvotes*, pues estos en unos casos no serán tenidos en cuenta pese a que un recuento manual pueda manifestar claramente la intención del votante, y en otros casos pueden ser tenidos en cuenta por el lector óptico y en consecuencia registrados como válidos cuando en puridad debieran ser nulos.

In addition, the recounts in these three counties were not limited to so-called undervotes but extended to all of the ballots. The distinction has real consequences. A manual recount of all ballots identifies not only those ballots which show no vote but also those which contain more than one, the so-called overvotes. Neither category will be counted by the machine. This is not a trivial concern [...] As a result, the citizen whose ballot was not read by a machine because he failed to vote for a candidate in a way readable by a machine may still have his vote counted in a manual recount; on the other hand, the citizen who marks two candidates in a way discernible by the machine will not have the same opportunity to have his vote count, even if a manual examination of the ballot would reveal the requisite indicia of intent. Furthermore, the citizen who marks two candidates, only one of which is discernible by the machine, will have his vote counted even though it should have been invalid.

⁶²⁹ Se trata de aquellas papeletas que, por no haber sido perforadas o haberlo sido insuficientemente, no computan ningún voto. Por su parte, los *overvotes* son aquellas papeletas que marcan más de una candidatura.

6. A todo lo anteriormente expuesto, se añade el hecho de que no se establece quién será el encargado de efectuar el recuento («*That order did not specify who would recount the ballots. The County Canvassing Boards were forced to pull together ad hoc teams of judges from various Circuits who had no previous training in handing and interpreting ballots*»).
7. A continuación, se desliza en la sentencia una frase que, sin duda alguna, es el aspecto más polémico de la resolución judicial y que tiene como objetivo no convertir el caso en precedente judicial.⁶³⁰ En efecto, la sentencia indica que los razonamientos jurídicos de la resolución judicial se limitan al caso concreto enjuiciado dado lo complejo de los problemas que presentan los procedimientos electorales («*Our consideration is limited to the present circumstances, for the problem of equal protection in election processes generally presents many complexities*»).
8. El tribunal ordena detener el recuento manual de votos, argumentando que según la legislación federal

⁶³⁰ En un breve artículo escrito el día 6 de diciembre de 2010 en *The New Yorker*, Jeffrey Toobin indicaba que transcurridos diez años desde el caso *Bush v. Gore*, el Tribunal Supremo no había citado ni una sola vez dicha sentencia como precedente («*Over that decade, the Justices have provided a verdict of shorts on Bush v. Gore by the number of times they have cited it: zero*»). Coincide en este aspecto Richard L. Hasen: «*Now, a little over six years later, Bush v. Gore is dead. The death did not come in the usual way that Supreme Court cases die, through outright or sub silentio overruling in a later case. Indeed, no Court opinion—majority, concurrence, or dissent—has cited the opinion since it was decided*», «The untimely death of *Bush v. Gore*», *Stanford Law Review*, vol. 60, n.º 1 (2007).

⁶³¹ Según narra Jeffrey Toobin, esta frase fue añadida por el redactor material de la sentencia (pese a que la misma aparece dictada *per curiam*, está claro que el ponente de la misma fue Anthony Kennedy) a instancias de Sandra Day O'Connor, quien deseaba dejar bien claro que el asunto no podría ser invocado ulteriormente. De esta manera, y con dicho aditamento, se dio la impresión general de que la resolución judicial tenía como único objeto beneficiar a un único individuo, George Bush, y ello pese a que «*that's not what Kennedy meant, but that's what he wrote*», Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., p. 173.

cualquier tipo de controversia electoral relativa a las elecciones a compromisarios forzosamente ha de estar concluida el día 12 de diciembre, y como esa es la fecha en que se dicta la sentencia, es materialmente imposible que se practique un recuento con las mínimas garantías procedimentales; como todo recuento posterior a la fecha indicada sería inconstitucional, todas las razones indicadas llevan al tribunal a revocar la sentencia del Tribunal Supremo de Florida, anulando, por tanto, la práctica de recuentos manuales.

That statute [3. USC 5], in turn, requires that any controversy or contest that is designed to lead to a conclusive selection of electors be completed by December 12. That date is upon us, and there is no recount procedure in place under the State Supreme Court's order that comports with minimal constitutional standards. Because is evident that any recount seeking to meet the December 12 date will be unconstitutional for the reasons we have discussed, we reverse the judgment of the Supreme Court of Florida ordering a recount to proceed.

9. En la coda o párrafo final de la sentencia el Tribunal Supremo entona una especie de *excusatio non petita*, por su intervención en el asunto, algo que justifican en el hecho de que cuando las partes solicitan el amparo de los tribunales, estos han de ofrecer una respuesta fundada en derecho resolviendo los asuntos constitucionales y federales que les han sido planteados.

None are more conscious of the vital limits of judicial authority than are the Members of this Court, and none stand more in admiration of the Constitution's

design to leave the selection of the President to the people, through their legislatures and to the political sphere. When contending parties invoke the process of the courts, however, it becomes our unsought responsibility to resolve the federal and constitutional issues the judicial system has been forced to confront.

La sentencia, sin embargo, cuenta nada menos que con cinco votos particulares, uno concurrente y cuatro discrepantes:⁶³²

A) El elaborado por William Rehnquist (al que se adhieren Antonin Scalia y Clarence Thomas), que concurre en el resultado pero entiende que existen motivos adicionales que justificaban revocar la sentencia del Tribunal Supremo de Florida. Rehnquist entiende que se está, no ante una elección ordinaria, sino ante la elección del presidente de los Estados Unidos, y que, si en la mayoría de los casos ha de respetarse la doctrina de los tribunales estatales en asuntos que afecten al derecho de sus estados, existen excepciones a esa regla general, siendo este asunto uno de ellos.⁶³³ En síntesis, la tesis de este voto particular es que, más que en la *equal protection clause*

⁶³² Como podrá observarse, únicamente Anthony Kennedy (redactor material de la sentencia) y Sandra Day O'Connor no formularon ni se adhieron a ninguno de los votos particulares.

⁶³³ «*We deal here not with an ordinary election, but with an election for the President of the United States [...] In most cases comity and respect for federalism compel us to defer to the decisions of state courts on issues of state law [...] But there are a few exceptional cases in which the Constitution imposes a duty or confers a power on a particular branch of a State's government. This is one of them.*»

el recurso debería estimarse por vulnerar el artículo II de la Constitución federal, que impone que las controversias o contenciosos electorales han de regirse por normativa aprobada previamente a la celebración de los comicios.⁶³⁴ Y la conclusión de los tres magistrados firmantes de este voto particular es que, con su actuación, el Tribunal Supremo de Florida ha interpretado la legislación electoral de dicho estado de una manera que supone una infracción del artículo II del texto constitucional.⁶³⁵ En definitiva, que con su sentencia en el caso *Gore v. Harris* de 8 de diciembre del 2000 el Tribunal Supremo de Florida altera el marco legislativo vigente el día 7 de noviembre (jornada electoral), abriendo un periodo de recuentos manuales que sería materialmente imposible concluir el día 12 de diciembre.

- B) El voto discrepante de John Paul Stevens (al que se adhieren Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer). Stevens no considera que en el presente asunto existan derechos federales de una sustantividad tal que justifiquen

⁶³⁴ «*With respect to a presidential election, the court must be both mindful of the legislature's role under Article II in choosing the manner of appointing electors and deferential to those bodies expressly empowered by the legislature to carry out its constitutional mandate. In order to determine whether a state court has infringed upon the legislature's authority, we necessarily must examine the law of the State as it existed prior to the action of the court.*»

⁶³⁵ «*[We] hold that the Florida Supreme Court's interpretation of the Florida election laws impermissibly distorted them beyond what a fair reading required in violation of Article II. This inquiry does not imply a disrespect for state courts, but rather a respect for the constitutionally prescribed role of state legislatures.*»

la intervención del Tribunal Supremo, y aun admitiendo que hubieran existido diferentes criterios para el cómputo de voto en diferentes territorios, el remedio jurídico para ello sería depositar la resolución en un juez imparcial.⁶³⁶ Stevens no cree que el Tribunal Supremo de Florida haya realizado, ni en el caso *Palm Beach County Canvassing Board* ni en el caso *Gore v. Harris*, una interpretación que altere sustancialmente la legislación electoral de Florida. No obstante, quizá lo más demoledor del voto particular de Stevens sea su párrafo final: «Una cosa es cierta: aunque quizá no se sepa con total certeza la identidad del ganador de las presentes elecciones presidenciales, la identidad del perdedor está perfectamente clara: la confianza de la nación en el juez imparcial como guardián del *rule of law*».⁶³⁷

- C) El voto discrepante de Ruth Bader Ginsburg (al que se adhieren totalmente John Paul Stevens y parcialmente David Souter y Stephen Breyer). En realidad, el grueso de este voto particular es una refutación de las tesis esgrimidas por Rehnquist, Scalia y Thomas. Entiende Ginsburg que el Tribunal

⁶³⁶ «Admittedly, the use of differing substandards for determining voter intent in different counties employing similar voting systems may raise serious concerns. Those concerns are alleviated –if not eliminated– by the fact that a single impartial magistrate will ultimately adjudicate all objections arising from the recount process.»

⁶³⁷ «One thing, however, is certain. Although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year's Presidential election, the identity of the loser is perfectly clear. It is the Nation's confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law.»

Supremo siempre ha respetado los pronunciamientos de sus homólogos estatales a la hora de interpretar el derecho estatal, y en el caso enjuiciado eso y no otra cosa es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Florida; es más, Gisburn indica que ocasiones hubo en que el Tribunal Supremo avaló interpretaciones legales y constitucionales con las que no estaba de acuerdo; por ello, lo excepcional del caso ha ocasionado que el tribunal se apartase de su tradicional respeto a la interpretación del derecho estatal realizada por los órganos judiciales estatales.⁶³⁸ Rechaza, igualmente de forma tajante, la existencia de una vulneración de la *equal protection clause* (apartándose en este punto de sus colegas Souter y Breyer), y se apoya en dos criterios fundamentales: en primer lugar, no cree que los criterios adoptados por los Tribunales de Florida puedan ocasionar un resultado menos justo o preciso que el certificado que le precede; y, en segundo lugar, en las equivocadas consecuencias jurídicas que sus colegas de la mayoría otorgan al incumplimiento de los plazos establecidos en el Usc, dado que, aun superándose tal fecha, el estado

⁶³⁸ «*There is no cause here to believe that the members of Florida's high court have done less than their mortal best to discharge their oath of office [...] and no cause to upset their reasoned interpretation of Florida law. This Court more than occasionally affirms statutory, and even constitutional, interpretations with which it disagrees [...] Rarely this Court rejected outright an interpretation of state law by a state court [...] The extraordinary setting of this case has obscured the ordinary principle that dictates its proper resolution: Federal courts defer to a state high court's interpretations of the State's own law.*»

podría remitir los certificados, quedando en manos del legislativo determinar la validez o no de los mismos.⁶³⁹

- D) El voto discrepante de David Souter (al que se adhiere totalmente Stephen Breyer y parcialmente tanto John Paul Stevens como Ruth Bader Ginsburg). David Souter distingue claramente los tres aspectos jurídicos fundamentales invocados en el asunto: la infracción del 3 USC 5, la posible vulneración de la sección I del artículo II de la Constitución federal y, por último, la vulneración de la *equal protection clause*. Respecto a las dos primeras, Souter entiende que las mismas no han sido vulneradas por el Tribunal Supremo de Florida, toda vez que la infracción del 3 USC 5 no implica necesariamente una exclusión de los votos remitidos con posterioridad, sino que el efecto jurídico de la superación del plazo sería la posibilidad de cualquiera de las partes de cuestionar jurídicamente tales

⁶³⁹ «Ideally, perfection would be the appropriate standard for judging the thousands of votes have not been counted. But unfortunately we live in an imperfect world, one in which thousands of votes have not been counted. I cannot agree that the recount adopted by the Florida court, flawed as it may be, would yield a result any less fair or precise than the certification that preceded that recount [...] the December 12 date for bringing Florida's electoral votes into 3 USC 5's safe harbor lacks the significance the Court assigns it. Were that date to pass, Florida would still be entitled to deliver electoral votes Congress must count unless both Houses find that the votes had not been... regularly given». La tesis de Souter es cuestionada por Ronald L. Rotunda, para quien el recuento manual hubiera conllevado meses de trabajo: «Justice Souter had speculated that the recount could have been completed by December 18, 2000. Had the recount been ordered by a court, that official recount would have taken even many months longer than the unofficial news media account, because, with an official manual recount, the losing party would have had a right to appeal to the intermediate appellate court and whoever lost that appeal would seek a further appeal to the Florida Supreme Court, and the losing party would then have a right to seek US Supreme Court review», *Yet another article on Bush v. Gore*, o. cit.

votos extemporáneos, si bien quien tiene la última palabra y, por tanto, es competente para la revisión sería el Congreso;⁶⁴⁰ en el segundo punto, Souter entiende que el Tribunal Supremo de Florida no ha vulnerado ningún precepto de la constitución federal, toda vez que lo que se ha limitado a realizar es una interpretación de la legislación electoral de Florida.⁶⁴¹ Sin embargo, David Souter sí que entiende que existen en el caso aspectos que pueden suponer una vulneración de la *equal protection clause*.⁶⁴² en efecto, Souter reconoce la existencia de tratamiento dispar a la hora del recuento manual de votos, diferencias que parecen totalmente arbitrarias.

But evidence in the record here suggest that a different order of disparity obtains under rules for determining a voter's intent that have been applied [and could continue to be applied] to identical types of ballots used in identical brands of machines and exhibiting identical characteristics [...] The differences appear wholly arbitrary;

⁶⁴⁰ «No State is required to conform to 5 if it cannot do that (for whatever reason); the sanction for failing to satisfy the conditions of 5 is simply loss of what has been called its 'safe harbor'. And even that determination is to be made, if made anywhere, in the Congress.»

⁶⁴¹ «In sum, the interpretations by the Florida court raise no substantial question under Article II. That court engaged in permissible construction in determining that Gore had instituted a contest authorized by the state statute, and it proceeded to direct the trial judge to deal with that contest in the exercise on the discretionary powers generously conferred by Fla. Stat. Ann.»

⁶⁴² En este aspecto, Stephen Breyer concuerda con Souter, mas no así Ruth Bader Ginsburg y John Paul Stevens, quienes no comparten el parecer de Souter en esta parte de su voto discrepante. Como puede verse, Stevens y Ginsburg llevan su discrepancia al límite, mientras que Souter y Breyer entienden que el caso presentaba claroscuros, pero que era posible una solución diferente a la adoptada por la mayoría del tribunal.

sin embargo, el remedio a aplicar según este magistrado sería remitir nuevamente el asunto al Tribunal Supremo de Florida para que este fijase unos criterios unánimes aplicables a todo el estado, manifestando que no ve razones que impidan tener por fijados los criterios y practicado el recuento de votos conforme a los mismos antes del 18 de diciembre, fecha en que los compromisarios deberían reunirse para emitir su voto.⁶⁴³

- E) El voto discrepante de Stephen Breyer (al que se adhieren parcialmente John Paul Stevens, Ruth Bader Ginsburg y David Souter).⁶⁴⁴ Breyer comienza indicando algo que es evidente y que volverá a desarrollar con posterioridad: que las implicaciones políticas del caso son evidentes, pero las cuestiones jurídicas que presentan, salvo la *equal protection clause*, no lo son tanto.⁶⁴⁵ Entiende Breyer que, en

⁶⁴³ «We should take account of the fact that electoral votes are due to be cast in six days. I would therefore remand the case to the courts of Florida with instructions to establish uniform standards for evaluating the several types of ballots that have prompted differing treatments, to be applied within and among counties when passing on such identical ballots in any further recounting (or successive recounting) that the courts might order. Unlike the majority, I see no warrant for this Court to assume that Florida Could not possible comply with this requirement before the meeting of electors, December 18.»

⁶⁴⁴ La opción defendida por Breyer y Souter es refutada por Richard Posner, para quien devolver nuevamente el asunto al supremo órgano judicial de Florida hubiese mermado su crédito aún más que si hubiera actuado como lo hizo, pues «it might instead have been accused of playing cat and mouse with the Florida supreme court remanding, a second time, for a process that it knew to be futile», *Breaking deadlock*, o. cit., p. 146. Posner tiene toda la razón, siendo lo trágico de esta cuestión que, al admitir a trámite el asunto, el Tribunal Supremo estaba cebando la munición para que, tomase la decisión que tomase, fuese objeto de críticas.

⁶⁴⁵ «The political implications of this case for the country are momentous. But the federal legal questions presents, with one exception, are insubstantial [...] Of course, the selection

efecto, en cuanto al recuento manual de votos, la ausencia de un criterio uniforme en todo el estado afecta a principios de justicia material (*«does implicate principles of fundamental fairness»*), que, en efecto, justificarían la intervención del Tribunal Supremo en el sentido de reconocer la exigencia de unas bases o criterios uniformes para el recuento manual de votos en todo el territorio del estado (*«I agree that, in these very special circumstances, basic principles of fairness should have counseled the adoption of a uniform standard to adress the problem»*); por tanto, la solución por la que aboga Breyer consistiría en devolver el asunto al Tribunal Supremo de Florida con orden de establecer un criterio uniforme que gobernaría el ulterior recuento (*«An appropriate remedy would be, instead, to remand this case with instructions that, even at this late date, would permit the Florida Supreme Court to require recounting all undercounted votes in Florida»*). Entiende que la fecha límite del 12 de diciembre no implica la prohibición al estado de remitir los certificados electorales con posterioridad, sino que el incumplimiento de dicho plazo lo único que acarrea es privar a tales resultados de toda protección jurídica y presunción de validez, de tal manera que

of the President is of fundamental national importance. But that importance is political, not legal. And this Court should resist the temptation unnecessarily to resolve tangential legal disputes, where doing so threatens to determine the outcome of the election.»

queda en manos del Congreso el incluirlos o excluirlos mediante el acuerdo de ambas Cámaras legislativas (para lo cual el magistrado realiza un análisis histórico de las circunstancias que rodearon la aprobación de la *Electoral Count Act* de 1887, aprobada tras las polémicas elecciones de 1876, a las que Breyer se refiere de forma explícita). Para finalizar, este voto particular coincide con John Paul Stevens en que, con su intervención, el Tribunal Supremo corre el riesgo minar la confianza que el público había otorgado a dicha institución en su ya bicentenaria historia («...*in this highly political matter, the appearance of a split decision runs the risk of undermining the public's confidence in the Court itself. That confidence is a public treasure. It has been built slowly over many years, some of which were marked by a Civil War and the tragedy of a segregation*»).

7. Consecuencias del caso *Bush v. Gore*

Complete unforeseen was the possibility that a deadlock in the presidential election might arise not from a skullduggery (as in 1876), not from a failure of any candidate to obtain a majority of the electoral votes, not from a runaway electors and not from an actual tie in the popular vote in a key state, but from innocent defects in electoral mechanics, whether defects in the design of a ballot, the staffing of the polling places or the design, maintenance or operation of voting and vote-tabulating machines, or gaps and

*ambiguities in the state statutes regulating the administration of elections and the resolution of election disputes.*⁶⁴⁶

*The one thing that is clear from this scenario is that the voters of 2000 unknowingly created the definitive blueprint for stalemate. Unless any of the political players were to rise above their own partisan interest, any decision resulting from this chaos would necessarily reek of partisanship and self-dealing. And it was clear that none of the players were prepared to abandon their partisan battle stations. Accordingly, any result achieved by either side would necessarily be clouded by claims of illegitimacy.*⁶⁴⁷

*The most striking aspect of Bush v. Gore is how politically polarizing it is. Many Supreme Court decisions are controversial, but Bush v. Gore has a unique ability to unbalance the judgment and inflame the partisanship of everyone who confronts it. During the case and afterward, justices and commentators didn't merely disagree; they impugned each others's motives accusing each other of allowing their legal judgment to be distorted by their partisan allegiances.*⁶⁴⁸

Una vez finalizado jurídicamente el asunto y declarado presidente electo el candidato republicano George W. Bush, la ira de cierto sector de la población no solo se extendió contra los cinco jueces del Tribunal Supremo que integraron la mayoría que dio la razón al candidato republicano (algunos demócratas llegaron incluso a solicitar el inicio de un *impeachment* frente a dichos magistrados) sino que en determinados casos muy

⁶⁴⁶ Richard A. POSNER, *Breaking deadlock*, o. cit., p. 47.

⁶⁴⁷ William P. MARSHALL, «The Supreme Court, Bush v. Gore, and rough justice», o. cit., p. 798. Acerca de los problemas de legitimidad que el asunto plantea, es interesante la breve reflexión que realiza Bruce Ackerman en la introducción al conjunto de trabajos por él coordinados y recogidos en *Bush v. Gore: The question of legitimacy*, Yale University Press, 2002.

⁶⁴⁸ Jeffrey ROSEN, «Political questions and the hazards of pragmatism», en Bruce ACKERMAN (ed.), *Bush v. Gore*, o. cit., p. 145.

concretos la ira mutó en abierto odio y trascendió incluso a terceros: sirva como ejemplo que, cuando tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, la periodista Ann Coulter se hizo eco en un artículo del fallecimiento de Barbara Olson (hermana de Ted Olson, el abogado defensor de George Bush en los dos pleitos ante el Tribunal Supremo) al ser una de las pasajeras del avión secuestrado por los terroristas suicidas y que finalmente colisionó en el Pentágono, recibió un correo electrónico de una airada ciudadana estadounidense en el que manifestaba textualmente que lo único que lamentaba era que Ted Olson (por aquel entonces *Solicitor General*) no estuviese también en el avión.⁶⁴⁹ Sin embargo, y como bien señala en este aspecto uno de los magistrados del Tribunal Supremo discrepantes del parecer mayoritario, lo auténticamente relevante del asunto es que la población, con independencia de sus opiniones sobre el particular y de las valoraciones finales sobre el acierto o equivocación de la sentencia, aceptó pacíficamente el resultado.⁶⁵⁰

Es evidente que, como toda decisión controvertida, la misma tiene sus defensores y sus detractores. William P. Marshall, en un equilibrado artículo sobre el tema, es muy crítico con la sentencia *Bush v. Gore*, pero mientras considera que el fallo en cuestión es erróneo, dedica gran parte de su trabajo a

⁶⁴⁹ «I usually consider myself a good person, one who would never be happy at the demise of another human being, but I have to say that the first thing that came to mind when I heard about Barbara Olson being on that plane, was I hope Ted was with her. Do you realize... he is responsible for us having a dictator in the White House?», citado en Ronald L. ROTUNDA, *Yet another article on Bush v. Gore*, o. cit.

⁶⁵⁰ «There has been no shortage of comment about the decision. Yet one of the most interesting comments was one made by Senator Harry Reid, who later became the Democratic majority leader. I heard him say that the most remarkable feature of the decision is one rarely remarked. It is this: despite the strong opposition to the decision, and despite the fact that it might well have been wrong, Americans did not riot in the streets, they did not resort to violence, they reacted peacefully and then followed the Court. Indeed, the losing candidate, Vice President Gore, when he told his staff, "Don't trash the Court", in effect told the American people to do just that», Stephen BREYER, «Making our democracy works: The Yale lectures», *Yale Law Journal*, vol. 120, n.º 8 (2011), p. 2011.

justificar que la intervención del Tribunal Supremo era necesaria. En un ambiente de lucha partidista tan feroz y con una opinión pública que no solo consideraba a Bush el auténtico vencedor en Florida, sino que la actuación del candidato demócrata lo único que demostraba era su reticencia a hacer pública su derrota, Marshall entiende que únicamente la intervención del Tribunal Supremo podría otorgar un aura de legitimidad al todavía vicepresidente de los Estados Unidos.⁶⁵¹ Por su parte, Charles Zelden se lamentaba, al inicio de su magnífico ensayo sobre el caso *Bush v. Gore*, de que el problema subyacente a esta crisis presidencial (las deficiencias de la legislación electoral) pasó casi desapercibido a la luz de los acontecimientos político-jurídicos, siendo precisamente esas carencias legislativas las que provocaron la intervención del Tribunal Supremo, institución que, si la legislación hubiese funcionado correctamente, jamás hubiera tenido que verse involucrada en un asunto como el que hemos analizado.⁶⁵² Por ello, un correcto análisis

⁶⁵¹ «I conclude that although the Court's intervention was indeed appropriate, it ultimately reached the wrong result in its decision [...] Polls indicated that most Americans believed Bush had prevailed in Florida and that Gore's reluctance to concede was evidence that he was a sore loser. Against this background, the moral authority of the United States Supreme Court may have been the only weapon available to the Gore forces to combat this campaign. A recount based only upon a constantly attacked decision of the Florida Supreme Court might not have been able to give the Gore forces the legitimacy they would need to assume the Presidency», William P. MARSHALL, «The Supreme Court, Bush v. Gore, and rough justice», o. cit., pp. 789 y 800. Curiosamente de la misma opinión es Lloyd Robinson, quien, en su breve nota introductoria a la nueva edición realizada en el año 2001, a la luz de los acontecimientos del año 2000, de su clásica obra *The stolen election: Hayes versus Tilden – 1876*, manifiesta: «The Court feared, I think rightly, that if the election were permitted to move onto Congress for a decision, the country might strumble on and on into confusion and division until, ultimately, the whole affair would return once again to the Supreme Court, but only after intolerable damage had been done. The Court's decision was a damage-control intervention». Tanto Marshall como Robinson consideran esto inevitable para solventar una crisis política de primera magnitud. La diferencia entre ambos radica en su valoración de la respuesta dada por el alto órgano judicial estadounidense, ya que, según Marshall «the constitutional crisis argument at this point, however, speaks only in favor of Supreme Court intervention; it does not automatically support intervention favoring Bush».

⁶⁵² «By contrast, the central message of the crisis of 2000 and the case of *Bush v. Gore* –lost in the furor over the judicial picking of a president– should be that the United States

de todos los acontecimientos acaecidos durante esos treinta y seis días del año 2000 debiera conllevar un análisis detenido que dejase clara la necesidad de focalizar la atención en los auténticos problemas planteados o, en otras palabras, centrar los esfuerzos en el intento de evitar que se repita la situación tratando de poner remedio a las causas del problema, pues así se evitarán los efectos. Sin embargo, tales circunstancias pasaron a un segundo plano y la cuestión se centró en la legitimidad de George Bush.

Debemos tener en cuenta varias circunstancias fácticas a la hora de analizar todo el periplo judicial, circunstancias que a continuación exponemos:

1. No son una, sino dos las ocasiones en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos conoció de actos o actuaciones relativas al contencioso presidencial. Una afectó a la fase previa a la certificación de resultados (es decir, a la fase *protest*), y se resolvió en la sentencia *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*. La segunda, que afecta a la propia certificación del resultado (es decir, a la fase *contest*) la constituyó el caso *Bush v. Gore*.
2. En el primero de los casos, a la hora de resolver el *protest*, el Tribunal Supremo de Florida amplía el plazo máximo de remisión de resultados electorales, apartándose abiertamente de la legislación estatal y sin ofrecer justificación alguna que avalase su actuar. En esta ocasión, el Tribunal Supremo de los Estados

has a broken electoral system [...] Had the electoral system worked effectively in 2000, the justices never would had the chance –or the need– to pick anyone», Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. VIII y XI. El autor enumera hasta ocho problemas o disfunciones de la legislación electoral, entre las que destacan la inadecuación de los sistemas mecánicos de votación, la escasa o nula experiencia de los encargados del desarrollo electoral y una legislación anticuada que varía de estado a estado y que, incluso dentro de un mismo territorio, los jueces aplican de forma diferente.

Unidos, en su sentencia *Bush v. Palm Beach County Canvassing Board*, por unanimidad de sus nueve magistrados, estima el recurso interpuesto al entender que el Tribunal Supremo de Florida no ha ofrecido razonamientos suficientes que avalen su actuación, la cual, en principio, podría vulnerar la normativa federal, razón por la que devuelve el asunto para que aclare los motivos que le han llevado a fallar como lo hizo. Cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelve el asunto, se habría producido ya la pérdida sobrevenida del objeto, puesto que de la fase inicial o administrativa del *protest* se había pasado ya a la fase judicial o *contest*.

3. A la hora de impugnar la certificación del resultado, el juez de instancia rechazó la pretensión de Gore. El Tribunal Supremo de Florida, internamente dividido decidió por la mínima (cuatro votos contra tres) aceptar las pretensiones de recuento manual de Gore, si bien no solo en los condados en los que el candidato demócrata lo había solicitado, sino también en todos los condados de Florida. Dicha sentencia contó con dos votos particulares discrepantes.
4. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos estima el recurso sobre la base de la vulneración de la *equal protection clause* al considerar probado que a lo largo de diversos condados se habían utilizado criterios diferentes a la hora de entender válido o no un sufragio. Siete magistrados coinciden en dicho particular, aunque a la hora de ofrecer el remedio cinco de ellos abogan por detener el recuento manual de votos sobre la base de que la fecha del 12 de diciembre establecida por la legislación para la resolución de conflictos ya había llegado. En cambio otros dos magistrados (Breyer y

Souter) entendían que la fecha a tener en cuenta era el 18 de diciembre (fecha de reunión de los compromisarios para emitir el voto) y abogaban por estimar el recurso y devolver el asunto al Tribunal Supremo de Florida para que este elaborara unos criterios uniformes que guiaran el recuento, confiando en que este finalizase antes de la reunión de los compromisarios.

Sobre esa base, y centrándonos exclusivamente en aspectos jurídicos, la crítica ha cuestionado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tratase un asunto que, por entrañar aplicación de normas estatales (en concreto, la legislación estatal de Florida) correspondía la interpretación y decisión última al Tribunal Supremo de Florida, amén de cuestionar el hecho de que se interpretó la fecha del 12 de diciembre (fecha, recordemos, establecida en una norma de carácter federal) como fecha o tope máximo para resolver los procedimientos impugnatorios cuando en realidad lo que la misma supone es una mera garantía procedimental que hace virtualmente inatacable toda decisión estatal adoptada antes de dicha fecha, pero que nada impedía una resolución ulterior, si bien con la particularidad de que entonces otras instancias podrían no solo cuestionar el resultado, sino revocarlo. Por el contrario, los defensores de la sentencia entienden que el Tribunal Supremo tuvo que actuar para remediar la inconstitucional actuación del Tribunal Supremo de Florida, que con su actuar habría creado de facto, con su interpretación jurisprudencial, una nueva legislación electoral posterior a los comicios, lo que iría en contra de lo dispuesto en el artículo segundo de la Constitución; quizá por ello los defensores de la sentencia se apoyen o encuentren más defendible el voto particular concurrente de Rehnquist que el propio fallo judicial, mientras que, por el contrario, los críticos tengan más difícil cuestionar la existencia de una vulneración de la *equal*

protection clause cuando incluso los magistrados discrepantes consideraron que, en efecto, en cuanto al fondo del asunto existían problemas de justicia material. En líneas generales, y resumiendo mucho la bibliografía sobre la materia, se mueven los argumentos que esgrimen los defensores y los críticos de la sentencia.⁶⁵³ Una de las polémicas más interesantes es la que tuvo lugar entre el profesor Lawrence Tribe⁶⁵⁴ en su crítica a la sentencia y la réplica que al mismo, y en defensa de los razonamientos jurídicos, ofrecen los profesores Peter Berckowitz y Benjamin Wittes.⁶⁵⁵

No obstante, sí que existe un aspecto en el cual debo tomar abiertamente partido, y es en la crítica al Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se acusó literalmente a dicha institución de robar la presidencia al demócrata Al Gore, el vencedor real de los comicios, para entregársela a George Bush. Tal imputación, en mi humilde criterio, amén de incierta, es injusta. En primer lugar, es realmente difícil saber con total certeza quién fue el auténtico ganador de las elecciones en Florida, aspecto este en el que, por ejemplo coinciden personas tan dispares como Ronald L. Rotunda,⁶⁵⁶ Charles Zelden, Jeffrey Toobin⁶⁵⁷ y el juez

⁶⁵³ Remitimos al lector al interesantísimo trabajo de Richard L. HASEN, «A critical guide to Bush v. Gore scholarship».

⁶⁵⁴ Laurence H. TRIBE, «Erog v. Hsub and its Disguises: Freeing Bush v. Gore from its Hall of Mirrors», *Harvard Law Review*, vol. 115 (2001), p. 170.

⁶⁵⁵ Peter BERCKOWITZ y Benjamin WITTES, «The lawfulness of the election decision: a reply to professor Tribe», *Villanova Law Review*, vol. 49, n.º 3 (2004).

⁶⁵⁶ «*The claim by some academics and lay people that the Supreme Court really chose the next president by stopping this asymmetrical recount is, in a sense moot, because various newspapers later collected the ballots did their own manual recounts of the Florida undervote ballots (which is that the Florida court ordered) and concluded that President Bush still won a majority of Florida vote; Bush also won using various other standards*», Ronald L. ROTUNDA, *Yet another article on Bush v. Gore*, o. cit.

⁶⁵⁷ «*In a number of states, but specially in Florida, the contest between George W. Bush and Al Gore was too close to call without including every single vote. This closeness caused all the problems. Statistically the election was a tie; and given unavoidable margins of error and technical mistakes, determining exactly whom the people of Florida (and hence the nation) had chosen for president was a nearly impossible task*», Charles L. ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit.,

Richard Posner⁶⁵⁸ (para quien, dado el número de sufragios totales emitidos, la escueta diferencia de votos y los porcentajes de margen de error, nos encontramos estadísticamente ante un empate que ni un recuento detenido hubiera sido capaz de deshacer). En segundo lugar, y respecto a las acusaciones vertidas contra el Tribunal Supremo acusándolo de robo presidencial, las mismas tienen una difícil justificación. El tribunal pudo, en efecto, haber cometido un error tanto a la hora de aceptar conocer el caso como en la forma de actuar en el caso concreto,⁶⁵⁹ pero con su intervención lo que hizo fue despejar toda duda jurídica al respecto. Mas en ningún caso es ni lícito ni justo acusarle de robo alguno, y en este sentido una persona como Jeffrey Toobin, tan crítica con la manera en que el Tribunal Supremo se condujo a lo largo de la crisis electoral del 2000, rechaza de manera tajante dichas imputaciones de robo presidencial:

In one respect, though, the Court received unfair criticism for Bush v. Gore – from those who said the justices in the majority «stole the election» for Bush–. Rather, what the Court did was remove any uncertainty about the outcome. It is possible that if the Court had ruled fairly –or, better yet, not taken the case at all– Gore would have won the election. A recount might have led to a Gore victory in Florida. It is also entire as possible that, had the Court acted properly and left the resolution of the election to

p. 14. Se repetía, pues, la coyuntura acaecida en 1876, donde, recordemos, la situación era tan ajustada que ambos candidatos se adjudicaban la victoria sin que el margen de votos superase el centenar de sufragios.

⁶⁵⁸ «*Bush's original margin of 930 votes out of six million made Florida Presidential election a statistical tie. Because the counting of millions of ballots by any method is liable to error, a razor-thin margin of victory such as Bush received establishes merely a probability –and not necessarily or in this case a very high one– that the victor actually received more votes than the vanquished. That is what I mean in calling the vote in Florida a statistical tie. The central question is whether a fair recount would have broken the tie. I think not*», Richard A. POSNER, *Breaking deadlock*, o. cit., p. 49.

⁶⁵⁹ Véase a este respecto Charles ZELDEN, *Bush v. Gore*, o. cit., pp. 201 y ss.

*the Florida Courts, Bush would have won anyway. The recount of the 60000 undervotes might have resulted in Bush preserving or expanding his lead. The Florida legislature, which was controlled by Republicans, might have stepped in and awarded the state's electoral votes to Bush. And if the dispute had wound up in the House of Representatives, which has the constitutional duty to resolve controversies in the Electoral College, Bush might have won there too. The tragedy of the Court's performance in the election of 2000 was not that it led to Bush victory but the inept and unsavory manner with which the justices exercised their power.*⁶⁶⁰

En términos parecidos se pronuncian dos personas tan dispares en cuanto a la valoración de la sentencia como Richard Posner y William P. Marshall, e incluso Jeb Rubinfeld, al inicio de su furibundo ataque contra la sentencia, indica expresamente que «*To be sure, the wrongness of Bush v. Gore may be much less consequential, given the very real possibility that Bush would have become president in any event.*»⁶⁶¹ Si el Tribunal Supremo no hubiese actuado y una vez superada la fecha límite del 12 de diciembre, todas las posibilidades tanto jurídicas como políticas apuntaban a la elección de George W. Bush. En efecto, la legislatura de Florida (en manos republicanas) estaba legalmente facultada para dictar un acto declarando electos a los compromisarios republicanos, de tal manera que, aun cuando dicho acto legislativo fuese ulteriormente anulado por el Tribunal Supremo de Florida, correspondería al Congreso (también en manos republicanas) pronunciarse

⁶⁶⁰ Jeffrey TOOBIN, *The nine*, o. cit., p. 17. En la nota que dicho autor publica en la página 347 concluye que «*in short, it is fair to say that there is no way of knowing with certainty whether Bush or Gore would have won if the Court had allowed the recount to proceed.*»

⁶⁶¹ Jeb RUBENFELD, *Not as bad as Plessy. Worse*, en Bruce ACKERMAN (ed.), *Bush v. Gore*, o. cit., p. 20.

sobre tal cuestión. Otra opción posible sería que el Congreso decidiese no computar voto alguno proveniente de Florida, en cuyo caso se abrían a su vez dos posibilidades: si se entiende que es necesario obtener la mayoría absoluta de votos compromisarios, la elección recaería finalmente en la Cámara de Representantes, donde Bush habría logrado una victoria, dado que los republicanos controlaban la mayoría de las representaciones estatales; si, por el contrario, se entiende que basta con obtener una mayoría simple de compromisarios, Gore hubiera sido declarado presidente electo⁶⁶². No obstante, en caso de que el Tribunal Supremo no se hubiese involucrado en el asunto, las posibilidades de elección de Gore como presidente eran prácticamente nulas, dado que en modo alguno se hubiese podido concluir el recuento manual de votos el día 12 de diciembre y ello hubiera facultado a los republicanos para aprobar en la legislatura estatal la propia lista de compromisarios electos, abocando necesariamente el asunto a una solución en la Cámara de Representantes, donde los republicanos gozaban de la mayoría de las representaciones estatales.

⁶⁶² «One possibility, if Florida missed the safe harbor, is we have just seen, that the Florida legislature would select its own slate of Presidential electors. The state supreme court might invalidate the selection, however, on the ground that electors had been appointed on November 7 – only no one yet knew which electors. Congress might therefore be faced with rival slates of electors in January, one selected by the legislature and another deemed authentic by the state supreme court. The choice between them would be up to Congress because Florida would have missed the safe harbor», Richard POSNER, *Breaking deadlock*, o. cit., p. 134. «The Florida Supreme Court, which had authorized a recount to occur, was controlled by Democrats. The Florida Legislature, which was empowered to submit its own slate of delegates, was controlled by Republicans. The Constitution requires that if there are two or more slates of electors presented from a given state, the decision of which slate will be recognized will be made by the Congress. The Republicans controlled the House of Representatives. The Senate was divided 50-50, but the Democrats would control it for purposes of ruling on an election challenge because the extant Vice President, who is empowered to cast the tie-breaking vote, was a Democrat. That Vice President was Gore. Federal law provides that if the Congress cannot agree on a slate of electors that decision will devolve to the Governor of the state with the contested slate. The Governor of Florida was Bush's brother», William P. MARSHALL, «The Supreme Court, Bush v. Gore, and rough justice», o. cit., pp. 797-798.

No obstante, y de forma paradójica, si el caso *Bush v. Gore* llevó a un presidente republicano a la Casa Blanca, tuvo una consecuencia adicional inesperada: dio un giro rotundo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en numerosas ocasiones se mostró bastante crítica con el ejecutivo norteamericano. En palabras de David Cole:

My claim is that since the decision, the Court has apparently been on a campaign to rehabilitate itself—to repair its image as an institution guided by law and constitutional principle rather than partisan politics—. One sign of this campaign is that the Justices have been increasingly willing to cross traditional voting lines in cases that capture the public’s attention. Moreover, it appears that, at least in the most controversial cases, conservatives (those held responsible for the result in Bush v. Gore) have more often sided with liberal Justices to reach liberal results than vice versa. In addition, at least some post-Bush v. Gore decisions seem to reflect a renewed emphasis on the rule of law—namely, on that which distinguishes the realm of law from the realm of politics⁶⁶³

En efecto, una serie de resoluciones judiciales (debidas, en gran parte, a los votos decisivos de Sandra Day O’Connor y de Anthony Kennedy), orientaron el Tribunal Supremo hacia posturas más liberales. Así, por ejemplo, en el caso *Lawrence v.*

⁶⁶³ David COLE, «The liberal legacy of Bush v. Gore», *The Georgetown law journal*, vol. 94. Jeffrey Toobin comparte esta tesis, si bien limitándola a dos magistrados: Anthony Kennedy y Sandra Day O’Connor; el primero, porque sus viajes por diversos países europeos le hicieron modificar sus tesis en un sentido más liberal sin renegar de su profundo conservadurismo; y la segunda por la decepción que le produjo el primer mandato presidencial de Bush y, sobre todo, la profunda aversión que tenía hacia John Ashcroft, primer *attorney general* de Bush.

*Texas*⁶⁶⁴ (declarando inconstitucional la criminalización de las relaciones homosexuales) o en la mucho más significativa *Rasul v. Bush*,⁶⁶⁵ primera de una serie de decisiones que supondrían un serio revés a la política antiterrorista emprendida por el presidente republicano.

⁶⁶⁴ 539 U. S. 558 (2003).

⁶⁶⁵ 542 U. S. 466 (2004).

CONCLUSIÓN

A lo largo de las páginas anteriores, hemos estudiado tres comicios presidenciales estadounidenses donde la elección del jefe del ejecutivo norteamericano fue especialmente disputada. Thomas Jefferson, Rutherford Bitchard Hayes y George W. Bush lograron finalmente alzarse con el triunfo y se convirtieron en inquilinos de la Casa Blanca, mas a costa de un proceso que se demoró en el tiempo más de lo habitual. Sin embargo, un análisis más detallado de los tres comicios revela que por encima de ese rasgo común (lo disputado o reñido de la batalla electoral) existieron notorias diferencias de fondo en las tres contiendas electorales que impiden un tratamiento común de las mismas. Veámoslo.

- A. *El factor cronológico o fecha de planteamiento del conflicto.* En este caso basta un simple vistazo a la fecha de las elecciones para ver que cada una de ellas se localiza en una fase o estadio muy diferente de la historia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson es proclamado vencedor de los comicios de 1800, un año en el que hacía apenas una década que los EE. UU. habían culminado su proceso constituyente, y se encuentra, por tanto, en una fase muy inicial de su historia como

nación. Rutherford Bitchard Hayes es proclamado vencedor de las elecciones de 1876 en un momento en que los Estados Unidos han alcanzado la madurez como estado tras un siglo de existencia y donde aún no habían cicatrizado del todo las heridas de la guerra de Secesión, finalizada tan solo once años antes (en 1865). George W. Bush alcanza la presidencia en el año 2000, con unos Estados Unidos ya plenamente consolidados como nación y donde incluso ostentan el rango de primera potencia mundial, puesto en el que había sucedido a la antigua metrópoli británica tras finalizar la Gran Guerra.

- B. *El factor político*. Evidentemente, las circunstancias políticas de cada caso concreto son muy diferentes, aunque en este sentido es menester diferenciar por evidentes motivos las elecciones de 1800 de las otras dos:
1. En las elecciones de 1800 todavía no se había implantado el sistema de partidos característico de la moderna política norteamericana (aún habría de esperarse un cuarto de siglo para hablar propiamente de partidos políticos en el sentido moderno del término), sin perjuicio de que pueda hablarse de «tendencias», «corrientes», «facciones» o incluso «protopartidos». Por el contrario, la existencia de un sistema de partidos políticos y un bipartidismo centrado en la dicotomía Partido Republicano-Partido Demócrata ya estaba instaurado en 1876, y profundamente consolidado en el año 2000.
 2. En las elecciones del año 1800 la presidencia se disputaba entre dos personas pertenecientes a una misma corriente o facción política: Thomas

Jefferson y Aaron Burr concurren a las elecciones en un *electoral ticket* republicano opuesto al federalismo clásico. Por el contrario, en los comicios de 1876 y 2000 la disputa tuvo lugar entre los candidatos de dos partidos políticos rivales: el Partido Republicano (Rutherford B. Hayes en 1876 y George W. Bush en 2000) y Demócrata (Samuel Tilden en 1876 y Albert Gore en 2000).

3. En las elecciones de 1800 uno de los candidatos en disputa era el propio presidente de los Estados Unidos, John Adams, quien optaba a la reelección (de hecho, las elecciones de 1800 supusieron un auténtico *turning point* en la historia política norteamericana no solo por el hecho de ser la primera ocasión en que un presidente que aspiraba a renovar su mandato no lograba conservar el cargo, sino porque se trataba de la primera ocasión en que el ejecutivo pasaba a manos de personas de una ideología diferente). Por el contrario, tanto en 1876 como en 2000 el presidente en funciones (Ulysses Grant y Bill Clinton respectivamente) no optaba a la reelección al haber agotado sus dos mandatos, pese a que en 1876 Grant había sondeado la posibilidad de optar por tercera vez a la presidencia, algo que finalmente descartó.

C *El factor jurídico como desencadenante del conflicto.* En las tres ocasiones el conflicto tenía su origen en la insuficiencia, oscuridad e incluso en lagunas de un texto normativo. No obstante el alcance de la insuficiencia normativa tenía distinta intensidad en los tres casos

1. En los comicios presidenciales de 1800 la crisis fue provocada directamente por la redacción del

artículo II del texto constitucional, entre otras cosas por la propia evolución de la política norteamericana en unas líneas no solo diferentes, sino diametralmente opuestas a la filosofía que permeaba el pensamiento de los constituyentes. Así pues, dado que los padres fundadores no fueron capaces de prever un sistema de partidos (del que expresamente abominaron) y dado el sistema de elección presidencial consagrado en la redacción inicial de la Constitución (donde cada compromisario depositaría un par de votos sin especificar para qué cargo se emitían, siendo la persona más votada la finalmente elegida como presidente), es claro que la concurrencia de dos personas de una misma filiación política en una misma candidatura conllevaría necesariamente un empate a voto compromisario, lo que en previsión de los preceptos constitucionales depositaría en la Cámara de Representantes la elección final del presidente. Si a ello añadimos que, en 1800, la Cámara saliente era de una facción rival a los dos candidatos que se disputaban la presidencia, parece claro que es el propio texto constitucional, ideado para una realidad político-social diferente a la que existía tan solo diez años más tarde de su aprobación, el que provocó la crisis.

2. En las elecciones presidenciales de 1876 la crisis fue originada igualmente por el texto constitucional, aunque en esta ocasión no por su texto normativo, sino por inexistencia de precepto alguno que diese solución al problema surgido a consecuencia de los comicios. En efecto, la Constitución depositaba la elección presidencial en la Cámara de Repre-

sentantes únicamente para supuestos de empate a voto compromisario en el Electoral College, pero no ofrecía solución o remedio alguno cuando lo que se ponía en cuestión era la lista de compromisarios que había obtenido la victoria en un estado concreto y, mucho menos, el procedimiento que debía seguirse cuando uno de los estados remitía más de una lista de compromisarios.

3. En el año 2000 pese a que el origen del conflicto tuvo lugar con motivo del uso de unos sistemas mecánicos de votación imperfectos, el mismo fue amplificado, en gran medida, por una legislación electoral (la del estado de Florida) deficiente en muchos aspectos al no estar ideada para la impugnación de unos resultados en unas elecciones de tanta envergadura, sino para unos sufragios de ámbito mucho más reducido.

D. *La actuación de los candidatos en disputa.* Difiere igualmente la actuación de los candidatos que se disputaban el cargo presidencial en los tres casos analizados:

1. En el año 1800 los candidatos eran de una misma facción, la republicana. Sin embargo, ambos se comportaron de manera diametralmente opuesta: Thomas Jefferson luchó abiertamente, en público y en privado, por hacerse con un puesto que consideraba literalmente suyo a la vez que entendía que la mera posibilidad de una presidencia que no estuviese en sus manos sería un fraude a la ley y una traición a la voluntad del pueblo; por el contrario, Aaron Burr mostró, en privado, un total apoyo a la candidatura de Jefferson y, en público, un silencio total, a la vez que con sus actos dejaba bien claro

que, en modo alguno, entraba entre sus planes el iniciar una lucha por el cargo presidencial.

2. En 1876 ambos candidatos fueron prácticamente orillados por las maquinarias de los partidos. Al principio, Hayes consideraba, en privado, que sus opciones eran muy reducidas, aunque, según avanzaron los acontecimientos, su optimismo fue en aumento, todo lo contrario que su rival demócrata Samuel Tilden, quien anímicamente se consideró derrotado desde el primer momento. No obstante, tanto Hayes como Tilden dejaron hacer a sus partidarios manteniéndose a la expectativa y adoptando una postura de cierto distanciamiento.
3. El caso del año 2000 fue ciertamente peculiar, dado que como hemos visto, por primera vez en la historia política norteamericana un candidato (Al Gore) que había felicitado a su rival (George Bush) por la victoria se retracta de la misma en apenas una hora. Y, aunque la poderosa maquinaria de ambos partidos fue la encargada de hacerse cargo de la situación y de movilizar masas, recursos, equipos y de iniciar la batalla mediática, ni Al Gore ni George Bush tuvieron un rol tan pasivo ni se distanciaron tanto de los acontecimientos como sus homólogos en las elecciones presidenciales de 1876.

E. *Los medios adoptados para solucionar el conflicto.* En las tres ocasiones la disputa se solventó por medios diferentes:

1. La elección de Thomas Jefferson, tras los comicios presidenciales del año 1800, se realizó siguiendo escrupulosamente las previsiones de la Constitu-

ción federal. En efecto, como hemos visto en el capítulo primero, ante el empate a voto compromisario la decisión final fue tomada por la Cámara de Representantes que, tras sucesivas e infructuosas votaciones, en la trigésimo séptima ocasión optó por Jefferson. La elección, pues, recayó en una de las Cámaras del poder legislativo en ejecución de lo dispuesto en la propia norma constitucional.

2. En el año 1876, ante la insuficiencia del texto constitucional, ambos partidos acordaron una especie de arbitraje institucionalizado en la Electoral Commission Act (aprobada en enero de 1877). La decisión final de las impugnaciones a las listas de compromisarios recaería en una Comisión mixta, de naturaleza legislativa-judicial, integrada por cinco miembros de la Cámara de Representantes, cinco miembros del Senado, y cinco magistrados del Tribunal Supremo. Aunque teóricamente la ley reguladora del organismo encargado de resolver la disputa establecía que la resolución del mismo podía dejarse sin efecto mediante resolución adoptada de común acuerdo por ambas Cámaras legislativas, teniendo en cuenta la situación política real existente en aquel momento (Cámara de Representantes de mayoría demócrata y Senado de mayoría republicana) tal circunstancia parecía de todo punto imposible y, por ello, en la práctica la resolución final del conflicto quedaba en manos de la Electoral Commission. El republicano Rutherford Bitchard Hayes fue elegido presidente en ejecución de una normativa legal aprobada ad

hoc por acuerdo entre ambas fuerzas en disputa para dar solución a un conflicto no previsto en la Constitución.

3. En el año 2000 la disputa se solventó por vía estrictamente judicial. Fue el poder judicial como institución quien, hasta cierto punto, decidió en la práctica las elecciones. Aunque intervinieron juzgados y tribunales de todo tipo, la última palabra la tuvo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, dado el fallo de su sentencia *Bush v. Gore*, solventó todo tipo de dudas inclinando finalmente la balanza a favor del candidato republicano George W. Bush. Ambas partes optaron por judicializar todo el conflicto e involucrar al poder judicial en una contienda partidista

F. *Reacciones ante la solución dada al conflicto.* Las reacciones que se produjeron ante el resultado final de las elecciones presidenciales no fueron las mismas en los tres casos:

1. En el año 1800 hubo, ciertamente, un riesgo de que estallase un conflicto bélico, mas no derivado de la discrepancia con el resultado electoral, sino que la amenaza de conflicto se produjo *antes* de la elección de Jefferson y como oposición a las maniobras del partido rival tendentes a despojarle. En efecto, frases subidas de tono y amenazas serias de algo más que algaradas callejeras tuvieron lugar cuando simpatizantes de Thomas Jefferson mostraron su intención de acudir a las armas si su candidato no era finalmente elegido, algo que incluso hicieron público cuando surgieron rumores de un apoyo federalista a Aaron

Burr e incluso cuando se planteó la posibilidad de evitar la investidura de un presidente republicano alzando a un federalista al cargo. La sangre no llegó al río y la toma de posesión de Thomas Jefferson tuvo lugar en un ambiente de tranquilidad.

2. En el año 1876 se corrió seriamente el riesgo de un nuevo estallido bélico. Los demócratas lanzaron consignas de «Tilden o sangre», y un sector minoritario del Partido Demócrata parecía inclinarse claramente por llevar el país a un nuevo conflicto. Sin embargo, las secuelas de la guerra de Secesión que aún podían contemplarse en carne viva sirvieron como catalizador a una solución pacífica. Ante la promesa del candidato republicano de no inmiscuirse en asuntos internos de los estados y la retirada efectiva de tropas federales de los estados al sur de la línea Maxon-Dixon, el grueso del Partido Demócrata acogió, con disgusto pero con resignación, la elección de Hayes. Tilden, por su parte, aun considerándose el legítimo vencedor, acató pacíficamente los hechos.
3. En el año 2000 no existió el menor riesgo de conflicto bélico, aunque la sombra de una grave crisis política sobrevoló el territorio estadounidense. Tras el fallo del Tribunal Supremo el día 12 de diciembre de 2000, Al Gore reconoció finalmente su derrota y felicitó públicamente a Bush, mientras que el grueso de la población, con independencia de la valoración que tuviese relativas al modo de resolverse el conflicto, acató pacíficamente el estado de cosas, como expresamente reconoció Stephen Breyer.

G. *Consecuencias jurídicas del conflicto*. Las tres elecciones presidenciales conllevaron modificaciones de la normativa para intentar evitar, de cara al futuro, una repetición del conflicto:

1. Los comicios presidenciales de 1800 tuvieron como consecuencia jurídica la aprobación en 1804 de la decimosegunda enmienda constitucional, para evitar una repetición del empate a voto compromisario de miembros de un mismo partido. Así, a partir de entonces, los compromisarios elaborarían una votación separada para elegir al presidente y al vicepresidente.
2. Las elecciones presidenciales de 1876 determinaron la aprobación de una normativa federal tendiente a evitar futuros conflictos derivados de la remisión por parte de los estados de más de una lista de compromisarios. De este modo, en 1887 se aprueba la *Electoral Recount Act*, cuyos preceptos conservan plena vigencia.
3. Las elecciones de 2000 y la insuficiencia de la legislación estatal (en gran parte causante del conflicto por su redacción poco clara) llevó a la legislatura de Florida a reformar en profundidad su propia normativa electoral.

Como puede observarse, pese a ciertas similitudes entre los tres comicios (acentuadas en el caso de los celebrados en 1876 y 2000) cada una de las elecciones presidenciales analizadas fue única en su planteamiento, en su desarrollo y en su solución. El único rasgo en común fue el carácter conflictivo de la contienda y la polémica que rodeó la elección del mandatario estadounidense.

THOMAS JEFFERSON, RUTHERFORD B. HAYES y GEORGE W. BUSH alcanzaron la presidencia de los Estados Unidos de América en unos comicios (los de 1800, 1876 y 2000 respectivamente) caracterizados por la polémica, tanto jurídica como política. En el primer caso, porque la aún recién nacida república contemplaba cómo dos candidatos de una misma tendencia política empataban a voto compromisario en una situación inédita, ciertamente prevista por la letra de la Constitución, no tanto por su espíritu. En los dos últimos, por la imposibilidad fáctica de determinar con total rotundidad el candidato vencedor en determinados estados de la Unión, debido a los ajustadísimos resultados de las votaciones populares.

El presente estudio tiene por objeto situar al lector no solo en el contexto político, jurídico y social subyacente en cada una de las elecciones analizadas, sino también adentrarse en el propio desarrollo del proceso electoral y, sobre todo, en el interesantísimo debate jurídico que se produjo en las dos últimas tanto en el organismo creado al efecto en enero de 1877 para solventar la situación, como en la complejísima trama judicial que desembocó en la algo más popular pero no tan conocida sentencia *Bush v. Gore*.



Seminario de
Historia Constitucional
Martínez Marina

ediuno



Ediciones de
la Universidad
de Oviedo